

INTRODUCCIÓN

SAM MOYO
PARIS YEROS

EN EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO, profundos cambios socio-económicos y políticos se han puesto en marcha en las zonas rurales de la periferia. Bajo el peso de estos programas de ajuste estructural, campesinos y trabajadores han visto sus condiciones de reproducción social deterioradas, lo que dio lugar a una búsqueda desesperada de alternativas políticas y económicas. En la medida en que el más reciente período de globalización llega a su fin, marcado por la crisis del neoliberalismo tanto en el centro como en la periferia, intentamos aquí reconsiderar el estado de la cuestión agraria y reflexionar sobre su futuro.

Este proyecto ha sido aceptado en varios círculos académicos y políticos. Ciertamente, el incremento de movimientos rurales nuevos y militantes, desde en Brasil y México hasta Zimbabwe y Filipinas, ha reforzado tal revaloración. Pero también, de una manera más indirecta, numerosas catástrofes humanas que en gran parte han sido temas rurales –desde la desnutrición crónica y la hambruna (más graves en África, donde la mitad del continente está en emergencia alimenticia), interminables guerras (Colombia, Indonesia, África Central), y aun genocidios (Ruanda)– han demandado respuestas. Basta recordar que, en sus inicios, el ajuste estructural afirmó estar actuando en interés de los “pobres rurales”.

RECUPERANDO LA TIERRA

Así, en el curso del último cuarto de siglo, diversos intereses y propuestas se han referido a cuestiones agrarias. Una tangente de esta problemática, especialmente entre los teóricos del desarrollo, se ha apartado de los términos clásicos de la cuestión agraria para orientarse hacia el estudio de la “resolución de conflictos” y “Estados fallidos”. Aparte de unas pocas excepciones concernientes a la economía política de este tipo de conflictos, el propósito de estas investigaciones ha girado, en gran parte, en torno de cuestiones de dirigencia. Una segunda tangente ha permanecido cerca de la convención, focalizándose en temas como la reforma agraria, la seguridad alimenticia, la gestión medioambiental y la tecnología indígena. Pero, derivado mayormente de impulsos populistas y de gestión, este tratamiento ha esquivado, a su vez, cuestiones político-económicas.

Una tercera tangente ha explorado los cambios de largo plazo en el sistema agro-alimentario en un nivel global. Generalmente informada por los intereses y métodos de la economía política, esta tangente ha suministrado trabajo empírico e importantes herramientas de comprensión acerca de los procesos de concentración de capital y estratificación del sistema agro-alimentario, además de incluir el curso específico de temas como la biotecnología y las cadenas de mercancías. Sin embargo, la renovada búsqueda de una teoría global de cambio agrario no ha tendido a un análisis holístico del capitalismo global (imperialismo). Las pocas excepciones que han llamado la atención con preguntas históricas más amplias se han mostrado propensas a sobrestimar la “globalización” y a socavar la cuestión nacional. En consecuencia, la teoría global contemporánea no se ha ocupado, como es debido, de los desafíos que los movimientos rurales enfrentan bajo el imperialismo, a saber, la concentración de capital agrario y el poder político a niveles nacionales, su alianza con el capital financiero e industrial, el hecho de que el capital nacional permanezca subsumido como un todo bajo el capital internacional y el patrón perverso del desarrollo nacional que estas situaciones continúan generando.

Una cuarta tangente de investigación, dentro de los términos de la cuestión agraria, se ha interesado en las dinámicas del cambio socio-económico en las zonas rurales mediante el abordaje de la proletarianización, semiproletarianización y recampesinización [*re-peasantization*], los vínculos rurales-urbanos y las relaciones de género. Mientras estos estudios no han buscado articular la teoría global como tal –centrándose más, en cambio, en dinámicas “locales”– han provisto también una investigación empírica rigurosa e implantado un fuerte debate. Como pronto veremos, esta discusión se ha focalizado últimamente en un aspecto en particular: ¿podemos aún hablar de “un campesinado” luego de un cuarto de siglo de ajustes estructurales? Una cuestión política relacionada, que hasta

ahora ha sido menos prominente, ha sido también esbozada: ¿cómo podemos reconciliar el planteo sobre la “desaparición” del campesinado con el hecho de que los movimientos más progresistas y militantes en el mundo de hoy están basados en las zonas rurales?

El propósito del presente volumen es contribuir al análisis de los cambios socio-económicos en las zonas rurales, pero sobre todo tiene como objetivo traer a la vanguardia las políticas de los movimientos rurales. Juntos, estos intereses constituyen dos de los tres componentes de la clásica cuestión agraria. El tercero es el tema de la acumulación en el proceso del desarrollo nacional (Byres, 1991). Si bien no buscamos debatir este último aquí, los colaboradores de este libro se muestran generalmente de acuerdo en que la reforma agraria es una condición necesaria, pero no suficiente, para un patrón alternativo de acumulación y desarrollo en la periferia, en virtud de su potencial para ampliar el mercado doméstico y quebrar el control del capital externo respecto de los intereses de la tierra.

Los colaboradores de este volumen son investigadores y activistas asentados, en gran parte pero no exclusivamente, en el Sur, y han sido voceros de la reforma agraria en sus propios países y regiones. En este sentido intentamos, de manera conjunta, realizar una comparación del cambio rural político y económico a lo largo de África, Asia y América Latina, con un interés específico en la base social, las estrategias políticas y las ideologías de los movimientos rurales, y un interés adicional en sus tácticas operacionales, la más común de las cuales es la ocupación de la tierra.

Los estímulos más significativos para nuestro libro han sido los cambios radicales producidos en los derechos de propiedad agraria en Zimbabwe, que fueron la inmediata continuación de un movimiento militante de ocupación de tierras. Ello ha constituido el primer cambio radical en los derechos de la propiedad agraria en el mundo posterior a la Guerra Fría. Si bien fue un evento controvertido por sus propias razones intrínsecas, ha catalizado e internacionalizado el debate de la reforma agraria de una manera singular y llevado, incluso, a agudas confrontaciones en foros internacionales. Este evento ha marcado la culminación de la crisis del neoliberalismo en África, y tiene numerosos paralelos en América Latina y Asia.

Es verdad que el neoliberalismo persiste con toda su fuerza. No quedan dudas, sin embargo, de que ha sufrido una derrota ideológica. Su perseverancia, de hecho, se debe a la debilidad y a la falta de unidad de las fuerzas sociales en oposición. Como ha observado el sociólogo brasileño Francisco de Oliveira (2003), en un país que persiste en el sendero del neoliberalismo a pesar de su rechazo en las consultas populares, tales crisis de hegemonía en el presente han sido afianzadas

históricamente por alzamientos revolucionarios; el neoliberalismo severa, hoy, por omisión. Con esto en mente, pretendemos entender mejor la naturaleza y el potencial de los movimientos rurales y contribuir, de manera constructiva, a su consolidación ideológica.

El tema principal que ha guiado nuestra reflexión como editores ha sido la relación entre la cuestión agraria clásica y la cuestión nacional. Desde las décadas finales del siglo XIX hasta la crisis de la década del setenta, sus conexiones ocuparon un marco central de referencia analítica para la comprensión del imperialismo, el desarrollo y el subdesarrollo. Pero con el comienzo de la “globalización”, las zonas de contacto entre estas dos cuestiones han sufrido un sostenido asalto ideológico, al punto de ser barridos por afirmaciones tales como que la globalización o las ha resuelto en la práctica y/o las ha desplazado como puntos de referencia analítica. Específicamente, la demanda de la “globalización” ha asumido dos variedades discernibles: la primera es que la periferia ha entrado en una nueva trayectoria de transición industrial y, por consiguiente, de realización de un Estado soberano basado en inversiones extranjeras directas y en la orientación a la exportación; la segunda es que la transición industrial en la periferia es innecesaria, que abrazarse a la “ventaja comparativa” en un mercado global es suficiente para el desarrollo nacional. Para ambas, pedir más reivindicaciones sobre la soberanía nacional sería “ideológico”.

Acompañando estas reivindicaciones hubo una serie de valoraciones relacionadas concernientes al Estado-nación y a las políticas mundiales. Los liberales de diverso matiz han concluido que, a causa del surgimiento de una civilización de mercado global, el Estado ha “retrocedido” (Strange, 1996) y el mundo se ha convertido en un espacio “sin fronteras” (Ohmae, 1990). Otros observadores, algunos liberales y otros más “críticos”, han concluido que el mercado global opera sobre la base de reglas internacionales y procedimientos discretos o “regímenes”, desde el dinero y el comercio al “alimento”, por encima y más allá del Estado (Keohane, 1984; McMichael, 1997). El marxismo, por su parte, ha absorbido y reproducido muchas de esas valoraciones, afirmando que la periferia se ha embarcado, efectivamente, en una trayectoria de transición industrial bajo el imperialismo (Warren, 1980), o bien que, con la profundización de la comunicación y la protesta global, el principio de la autodeterminación nacional ha seguido su curso. Esto es, que el imperialismo ha sido sustituido por un “imperio” sin fronteras (Hardt y Negri, 2000). En gran medida, esta última evaluación ha procurado reivindicar un impulso “internacionalista” perenne dentro del marxismo occidental, en un intento por superar la “maldición” nacionalista no mediante la afirmación del principio de la autodeterminación nacional sino degradándolo, al ocultar tanto el desarrollo desigual y el sistema de

Estados como al negar las fuentes materiales del nacionalismo bajo el imperialismo, en el centro y en la periferia.

Sin duda, ni la cuestión agraria ni la nacional son temas de fácil análisis o resolución. Pero abandonarlas como puntos de referencia político y analítico es sucumbir a la fuerza ideológica del imperialismo. Cualquier reconstitución de oposición anticapitalista en el siglo XXI, no menos en las zonas rurales que en los barrios miserables de la periferia, donde el imperialismo es experimentado más brutalmente, debe recuperar y reflejar claramente el significado y el futuro de ambos problemas.

En el primer trabajo de este volumen se ofrece una visión editorial general más extensa, cuyo propósito es valorar la situación contemporánea de la cuestión agraria en la economía política internacional. Se realiza una exposición teórica de la relación entre la cuestión agraria y la nacional, con particular detenimiento en el período neoliberal, antes de proceder a un análisis comparativo, en primera instancia, del cambio rural socio-económico en África, Asia y América Latina y, en una segunda, de las políticas de los movimientos rurales contemporáneos. Entre los temas tratados están aquellos concernientes a la “desaparición del campesinado” y al surgimiento de “nuevos movimientos rurales”. Los cambios y continuidades se identifican en relación con ambos. Respecto del primero, se argumenta que el subdesarrollo ha persistido y se ha expandido bajo el neoliberalismo a través de las fuerzas contradictorias de la proletarianización, la urbanización y la recampesinización, lo cual produce una “semiproletarización” que, a su vez, constituye el núcleo de la base social de los movimientos rurales. Acerca del segundo, se ofrece una valoración crítico-constructiva de sus estrategias, tácticas e ideologías, que no excluye sus relaciones con el más amplio movimiento “antiglobalización”.

El libro está dividido en tres partes: África, Asia y América Latina, cada una de las cuales comienza con un trabajo destinado a ofrecer una perspectiva general del continente y cuyos autores son Henry Bernstein, Filomeno V. Aguilar y Henry Veltmeyer, respectivamente. En cada artículo se desarrolla un análisis comparativo de las transformaciones rurales, socio-económicas y políticas ocurridas en el interior de cada continente, y todos ellos son de utilidad, también, para situar los estudios de casos nacionales que se presentan seguidamente dentro de cada sección. La sección de África incluye los estudios de casos nacionales de Ghana (a cargo de Kojo Sebastian Amanor); Malawi (Fidelis Edge Kanyongolo); Sudáfrica (Mfaniseni Fana Sihlongoyane) y Zimbabwe (Sam Moyo y Paris Yeros). La sección de Asia desarrolla los casos de India (Nimar Pimple y Manpreet Sethi) y las Filipinas (Salvador H. Feranil). Por último, en la sección de América Latina hay dos trabajos sobre diferentes aspectos del caso brasileño: uno acerca de la experiencia de la reforma agraria en la década del noventa (Lauro Mattel) y otro (Bernardo Mançano

RECUPERANDO LA TIERRA

Fernandes) sobre las tácticas de movilización del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). También se presentan los casos de Colombia (Igor Ampuero y James J. Brittain) y México (Armando Bartra y Gerardo Otero).

En conjunto, los estudios de casos se ocupan de una variedad de movimientos rurales que reúne desde los más organizados, como el MST en Brasil, los zapatistas en México, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia y la Coordinación Nacional de Organizaciones Rurales Autónomas (UNORCA) en las Filipinas; los más recientes movimientos en África, con variados modos de movilización, como el Movimiento del Pueblo Sin Tierra (LPM, por su sigla en inglés) en Sudáfrica y el movimiento de ocupación de tierras de Zimbabue, liderado por la Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional, hasta los más embrionarios, difusos y espontáneos movimientos de ocupación de tierras en Ghana, Malawi e India. Las estrategias y tácticas de cada uno de estos movimientos son también diversas, aunque ostentan la común característica de buscar la redistribución de la tierra por medio de su ocupación y también de optar por la lucha armada, ya sea por medio de la reforma constitucional y la autonomía regional (por ejemplo, los zapatistas) o, a mayor escala, por la transformación democrática nacional a nivel de Estado (por ejemplo, las FARC). En relación con el tema, los movimientos muestran una diversidad ideológica significativa, que tiene en cuenta desde los derechos humanos y los discursos desarrollistas hasta los derechos de los indígenas y la liberación nacional. A ello se suma el acompañamiento de un creciente énfasis en los derechos de las mujeres, con la articulación más débil de un proyecto para la transformación socialista, a menudo, pero no siempre, ubicado dentro de un encuadre estratégico “antiestatal” y “antipolítico”. Finalmente, se examinan las relaciones con otros sectores de la sociedad como partidos políticos, asociaciones sindicales, sindicatos de granjeros, ONG, agencias donantes, organizaciones regionales y foros internacionales, como el Foro Social Mundial. Concluimos que, a pesar de los problemas en curso de la movilización y la articulación política, y bajo las circunstancias más opresivas, los movimientos rurales constituyen, hoy en día, el núcleo fundamental de oposición al neoliberalismo y la fuente más importante de la transformación democrática en la política nacional e internacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Byres, T.J. 1991 “The Agrarian Question and Differing Forms of Capitalist Agrarian Transition: An Essay with Reference to Asia” en Breman, Jan y Mundle, Sudipto (eds.) *Rural Transformation in Asia* (Oxford, Delhi y New York: Oxford University Press).

INTRODUCCIÓN

- De Oliveira, Francisco 2003 “O Enigma de Lula: Ruptura ou Continuidade?” en *Margem Esquerda*, I, pp. 37-41.
- Hardt, Michael y Negri, Antonio 2000 *Empire* (Cambridge, MA: Harvard University Press).
- Keohane, Robert O. 1984 *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton, NJ: Princeton University Press).
- McMichael, Philip 1997 “Rethinking Globalization: The Agrarian Question Revisited” en *Review of International Political Economy*, 4(4), pp. 630-62.
- Ohmae, Kenichi 1990 *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy* (London: Collins).
- Strange, Susan 1996 *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Warren, Bill 1980 *Imperialism: Pioneer of Capitalism* (London: Verso, ed. John Sender).

SAM MOYO*
PARIS YEROS**

EL RESURGIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS RURALES BAJO EL NEOLIBERALISMO

UNA CARACTERÍSTICA CENTRAL del desarrollo del capitalismo en el siglo XX ha sido la rápida expansión de la fuerza laboral mundial¹. Habiendo comenzado con los proyectos de desarrollo nacional del período de posguerra, más notablemente con la revolución verde, y continuado con los programas de ajuste estructural del período neoliberal, esta expansión ha sido secundada por la creación de un ejército internacional de reserva laboral a una escala sin precedentes. En términos generales, esta fuerza de trabajo está localizada en la periferia del sistema e, incluso,

* Sam Moyo es director ejecutivo del Instituto Africano de Estudios Agrarios, Harare, Zimbabwe. Ha publicado extensamente sobre tierra, temas agrarios y ambientales en Zimbabwe, y sur de África. Fue profesor asociado de Estudios Agrarios en la Universidad de Zimbabwe hasta 2000, y también director de varias redes de investigación e institutos en África.

** Paris Yeros ha sido profesor visitante en el Departamento de Economía, Universidad Federal de Paraná, Brazil. Escribió su tesis doctoral sobre la cuestión agraria en Zimbabwe en la London School of Economics. Ha sido editor de las revistas londinenses *Millennium* e *Historical Materialism*.

¹ Agradecemos a Henry Bernstein, Claus Gemen, Gerardo Otero y Nilson Maciel de Paula por sus comentarios y críticas perspicaces. Los errores de hecho y de interpretación nos pertenecen.

RECUPERANDO LA TIERRA

continúa en un estado de semiproletarización, tanto en la ciudad como en el campo. Así se reproduce, en parte, fuera del circuito del capital y en el proceso conocido como subdesarrollo.

Mientras el proceso de proletarización ha sido la consecuencia natural de la transición hacia el capitalismo mundial, su naturaleza truncada fue resultado de un tipo específico histórico de transición hacia el capitalismo, caracterizado por la ausencia o la imposibilidad de completarse de la transformación industrial en la periferia, es decir, de la resolución de la cuestión agraria. Una consecuencia ulterior ha sido el fracaso de los estados periféricos para conseguir su soberanía nacional, el principio establecido como un derecho universal desde la abolición de la raza como principio de orden mundial (imperialismo formal).

El saber prevaleciente en el último cuarto de siglo demandó algo diferente. En términos conceptuales, se ha argumentado que las cuestiones agrarias y nacionales han sido resueltas y/o se convirtieron en irrelevantes; en términos concretos, se ha alegado que el desarrollo y la diversificación de las fuerzas productivas nacionales procedieron a buen ritmo, de hecho, en forma satisfactoria, por medio de inversiones extranjeras directas, o que no necesitarán proceder de esa manera, pues encontrar las “ventajas comparativas” en la agricultura sería suficiente para el desarrollo. Tales reclamos son, en realidad, altamente ideológicos y efectivamente esenciales para la conducta del imperialismo en el período neoliberal. Y, lo que es peor, la estructura conceptual de estas demandas ha infiltrado las fuerzas de la “oposición” al neoliberalismo, sin dejar de lado al sindicalismo internacional y al movimiento antiglobalización.

El último evento es, en sí mismo, una continuación de las contradicciones históricas dentro del “internacionalismo laboral” que, al derivar de la relación centro-periferia del sistema de los estados, están marcadas por una falla persistente de la clase trabajadora como un todo para llevar a cabo el cumplimiento de la soberanía nacional en la periferia. En efecto, la clase trabajadora soportó el peso de la reestructuración neoliberal, tanto en el centro como en la periferia, y ha llegado incluso a erosionar los derechos democráticos históricamente obtenidos en el centro. Pero los “derechos humanos” y los “discursos posnacionales” resultantes del internacionalismo contemporáneo han sumergido, convenientemente, las cuestiones nacionales y agrarias. No es una casualidad que el grueso de la crisis de la década del setenta se haya desplazado, mediante programas de ajuste estructural, más allá de las fronteras de los Estados centrales. Como consecuencia, la reproducción social de la clase trabajadora sigue dependiendo del desarrollo del subdesarrollo en la periferia.

En este libro indagamos la dinámica política y socio-económica del subdesarrollo en el curso de la reestructuración neoliberal. Desde una perspectiva socio-económica, encontramos que el campesinado no ha

“desaparecido” íntegramente, sino que los costos de la reproducción social, tal como han estado sistemáticamente “expulsados” por el capital, han sido absorbidos por la semiproletarización. En términos políticos, encontramos una diversidad de movimientos rurales que van desde el más organizado hasta el más espontáneo, con diferentes modos de movilización y notables divergencias ideológicas, estratégicas y tácticas. Sin embargo, todos ellos comparten la misma base social en el campesinado semiproletarizado, el proletariado sin tierra y los desempleados urbanos. Ellos son militantes de la tierra y de la reforma agraria y, frecuentemente, emplean la táctica de la ocupación de tierras. En el más organizado de los casos, se han convertido en las fuerzas líderes de oposición al neoliberalismo y al estado neocolonial, al tiempo que el sindicalismo ha sufrido una desorganización y una cooptación. La conclusión a la cual arribamos es que el núcleo de las políticas antiimperialistas actuales –y por consiguiente del internacionalismo laboral genuino– se encuentra en los campos de la periferia.

LA CUESTIÓN NACIONAL Y AGRARIA BAJO EL NEOLIBERALISMO

El período que sigue a la crisis de la década del setenta se conoció como el de la “globalización”. Originado en la restricción de ganancias de finales de la década del sesenta, ha sido definido por la reestructuración del capital industrial y su financiación, la desregulación de los sistemas globales financiero y monetario y, en última instancia, por el colapso del compromiso del Estado de bienestar en el centro y el proyecto de desarrollo nacional en la periferia. La globalización, ciertamente, supuso una “ruptura” con el pasado. Pero, en rigor, ¿de qué tipo de ruptura se trata? La respuesta continúa siendo materia de disputa.

LA CUESTIÓN NACIONAL BAJO EL NEOLIBERALISMO

De un lado del debate están aquellos que insistieron en que, en virtud de la reestructuración y el traslado del capital, tuvo lugar una “convergencia” entre el Norte y el Sur. Algunos, concluyeron que el levantamiento de las barreras al capital o, de otra manera, la profundización de las redes transnacionales políticas y sociales, ha conducido a la redundancia del Estado. Las implicaciones generales han sido que el capitalismo se abocó a cumplir su destino histórico, que la herencia centro-periferia ha sido invalidada, y que la cuestión nacional es en sí misma redundante². Tales posturas no han sido las predilecciones exclusivas

² El argumento ha tendido a oscurecer dos nociones diferentes de Estado, como una entidad jurídico-normativa y como un aparato burocrático coercitivo.

RECUPERANDO LA TIERRA

de los liberales utópicos (Ohmae, 1990), pero sí fueron difundidas por liberales heterodoxos (Strange, 1996), así como por marxistas influyentes (Warren, 1980; Hardt y Negri, 2000). Alineados del otro lado de la discusión, están aquellos que han calificado la reestructuración global con alcance y fundamento e indicado sus tendencias a la polarización y la desigualdad. Incluso, han fundamentado que el Estado, lejos de “retirarse”, ha sido “reestructurado” bajo los requerimientos del capital internacional. El Estado ha sido empleado sistemáticamente para levantar barreras, profundizar la mercantilización de la vida social e imponer un nuevo orden a través de medios coercitivos (Amin, 1997; Petras y Veltmeyer, 2000; Borón, 2002). La consecuencia general ha sido que la estructura centro-periferia no pudo ser desmantelada, que el Estado como aparato coercitivo se mantiene firmemente en su sitio y que la autodeterminación nacional no se ha hecho redundante, pero sí que fue violada en un grado cada vez mayor. Ésta es nuestra posición fundamental.

Deteniéndonos en el período anterior a la “globalización”, observamos que los dos proyectos hegemónicos a través del centro y la periferia –estatismo benefactor y construcción nacional– compartían una cosa: su visión del Estado como agente principal del progreso social. A pesar de ello, los dos estaban lejos de ser complementarios, ya que las relaciones sociales que apuntalaron al Estado difirieron en cada caso, así como se diferenció el patrón de acumulación, “articulado” en el centro y “desarticulado” en la periferia. Éstas han sido las herencias de la construcción nacional imperialista en el Norte y de la colonización en el Sur, respectivamente. Más que esto: las dos estaban en contradicción (Amin, 1976; De Janvry, 1981). Para la dialéctica inmanente a la posguerra, una relación de capital trabajo no entendida en abstracto –concretamente, la supervivencia del compromiso del Estado benefactor en el centro– demandó la productividad y seguridad de un capital de Estado central en la periferia y, de ahí, la persistencia de acumulación desarticulada en esta última. Así, la periferia buscó emular al centro (como un medio para completar su nacionalidad) por medio de una política de industrialización, haciéndolo contra el objetivo lógico de la relación centro-periferia y la dominación estructural en que ésta consistía. Como Alain de Janvry observó, se trata de una dominación estructural que “moldea las necesidades externas de la periferia en posibilidades del centro para superar sus barreras de acumulación y crecimiento” (De Janvry, 1981: 26).

La Guerra Fría galvanizó totalmente este proceso, de modo tal que la estabilidad socio-política para la operación y acumulación del capital internacional se transformó para el centro en un tema de “seguridad nacional” que le era por completo inherente. A pesar de la multiplicación

de las luchas sociales, las alianzas de las clases desarrollistas, el control de las reformas agrarias y de muchas experiencias de crecimiento impresionantes pero altamente sesgadas y en última instancia insostenibles, en la periferia (incluyendo los pocos Estados que obtuvieron un estatus “semiperiférico” al tener éxito, bajo la sustitución de importaciones, en la apropiación del sector de bienes de capital), el orden multilateral que nació de la Segunda Guerra Mundial y de la descolonización no redimió el principio de la autodeterminación nacional. Es más, el caso particular en el que el crecimiento periférico se sostuvo consistentemente bajo el capitalismo fue en Asia oriental, donde las restricciones internas y externas a la acumulación periférica fueron levantadas bajo la protección de los Estados Unidos, por razones geoestratégicas, en un contexto de Guerra Fría (So y Chiu, 1995; Arrighi, 2003). Pero incluso en este caso de patrocinio imperial, el intercambio fáustico de soberanía por desarrollo iba a encontrar su destino. El final de la Guerra Fría trajo consigo la reimposición de la disciplina imperial en aliados de Asia oriental dependientes de las exportaciones –incluyendo a aquellos que, en la región más amplia, experimentaron el crecimiento dinámico en la década del noventa (las Filipinas, Tailandia, Indonesia, Malasia)–, más vívidamente en el curso de la crisis financiera de 1997-1998 (Bello, 1998; Wade y Veneroso, 1998; Gowan, 1999). Las experiencias del crecimiento sostenido en la periferia deben ser vistas como casos en los que las restricciones de la acumulación periférica han sido relajadas “desde el afuera” o superadas “desde el interior” por las agencias de fuerzas sociales progresistas. No obstante, en ningún caso deben ser vistas como evidencia de que las restricciones no existen (Yeros, 2002b).

Lo que ocurre como “globalización” consiste, de hecho, en la desarticulación parcial de las economías de los Estados centrales y en la integración de las mismas junto con un puñado de satélites industriales, en lo que Paul Hirst y Graham Thompson (1999) han llamado una “estructura de bloque triádica regionalizada”³. Esto ha dado lugar a sólo un proyecto notable y en curso de la sustitución de la soberanía nacional (llena de baches y poco democrática, para estar seguros), a saber, la Unión Europea que, en sí misma, es incompleta y antidemocrática. Más allá de eso, ha surgido el G6/7/8, un foro coordinador entre los Estados

3 La medida más insistente de la globalización es la de la Inversión Externa Directa (IED). Casi un 50% de las “IED globales” incluye fusiones y adquisiciones, y se asocia con la ola de privatizaciones que no alteran las estructuras activas de las empresas adquiridas. Incluso, más del 90% se origina en la tríada Estados Unidos-Unión Europea-Japón. A ella le destina un 75%; el resto es para el este de Asia, contando a China. Un 70% de la población mundial está “virtualmente fuera del mapa” (Hirst y Thompson, 1999: 72-74).

RECUPERANDO LA TIERRA

Unidos y sus socios menores, cuya tarea ha sido deliberar acerca del monetarismo global y otros asuntos relacionados con el multilateralismo. Ello ha sido complementado por una profundización de la red de instituciones globales –el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento (BIDR), la Organización Mundial de Comercio (OMC)–, que demanda multilateralismo pero se mantiene, de hecho, bajo el control del centro con el propósito de administrar sus asuntos con la periferia. En este sentido, el capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial se dio cuenta de la alianza ultraimperialista prevista prematuramente por Karl Kautsky (1970) en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Precisamente en qué medida se extiende esta alianza durante el inicio de la invasión a Irak y, más generalmente, de la Guerra Fría, es demasiado pronto para saberlo.

Lo que es cierto, sin embargo, es que la periferia ha permanecido en un patrón de acumulación desarticulado y perverso, y esto se aplica a los pocos Estados semiperiféricos que obtuvieron una rápida integración doméstica agro-industrial a expensas de la articulación financiera y social. Incluso, la acumulación desarticulada ha procedido a convertirse en el principio prevaleciente del “desarrollo”. Si previamente la idea proclamada del desarrollo fue invocada para la integración del mercado nacional en sus propios términos, la reacción neoliberal ha demandado la integración de lo nacional en lo global y prescripto a lo global como una panacea para cada padecimiento nacional. Bajo el pretexto de una “crisis del desarrollo”, sobrevino una operación quirúrgica estándar: la desregulación de las monedas y precios nacionales; la comercialización y privatización de industrias y servicios públicos previamente controlados por el Estado; el corte de servicios sociales; el retraimiento unilateral del apoyo para la agricultura; la mercantilización y titularización de las tierras agro-campesinas y la flexibilización de las relaciones laborales. Los resultados han sido la intensificación de la degradación socio-económica, el refuerzo de la tendencia de la periferia a la crisis y un grado de dependencia sin precedentes desde el final del imperialismo formal.

Aun así, pese a lo reaccionario de este proceso, no ha de ser equiparado con la sustitución de la soberanía nacional. Vale recordar que el principio de soberanía nacional ha sido invocado por las finanzas internacionales en términos certeros, desde fines de la década del setenta hasta el presente, para decidir la cuestión del ajuste de los desequilibrios de los pagos globales y para justificar los mismos ejercicios de ajuste estructural. En el nuevo orden monetario y financiero de intercambios flexibles y de capital desregulado, la responsabilidad del ajuste es estrictamente *nacional*. Este fenómeno no puede compararse con la sustitución de la soberanía nacional sino, más precisamente, con

su *instrumentalización*. La implicación adicional es que el ajuste nacional se hace sujeto de la fuerza completa de la política de poder entre los Estados, a través del centro y la periferia y entre los mismos Estados centrales. Mientras tanto, las únicas instancias para compartir la responsabilidad de ajuste han sido *ad hoc* y entre los socios ultraimperiales (Arrighi, 2003)⁴. No es sorprendente, entonces, que las instituciones financieras internacionales nunca hayan proclamado el “gobierno global” pero sí la *gobernancia* [*governance*], un término tan vago que es enteramente compatible con la soberanía nacional formal y con la dominación estructural (Yeros, 2002b). De hecho, la primera instancia desde la descolonización en la cual el principio de la soberanía nacional ha sido formalmente suspendido con la aprobación unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha estado en relación con Irak, durante los comienzos de la invasión liderada por los Estados Unidos.

El principio de la autodeterminación nacional está, ciertamente, en crisis. Pero no ha sido reemplazado, y no debería serlo, sea en la teoría o en la práctica, siempre que su razón de ser (el imperialismo) exista. Semejante reafirmación del nacionalismo no es una amenaza al internacionalismo –o al regionalismo o a la globalización democrática– pero sí su condición previa. Con estas observaciones en mente, retomamos la cuestión agraria, cuyas resoluciones siguen siendo clave para cualquier transformación democrática.

LA GLOBALIZACIÓN DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTICIO

Una preocupación central de la cuestión agraria clásica era el problema de la transición de la sociedad feudal/agraria a la industrial/capitalista, suponiendo el estatismo soberano moderno como preludio del socialismo. Entre los teóricos clásicos, esta transformación histórica fue generalmente vista como reducible (con varias advertencias) a la transición de la agricultura hacia el capitalismo (Engels, 1953; Kautsky, 1988; Lenin, 1964). Lo que hemos visto en el siglo XX, sin embargo, es que los varios procesos han sido divergentes: el capitalismo ha subordinado mundialmente a la agricultura a su propia lógica pero sin crear, por necesidad, mercados domésticos capaces de sostener la industrialización o sin completar la soberanía de los Estados descolonizados. En este sentido, la cuestión agraria sigue irresuelta y continúa íntimamente relacionada con la cuestión nacional.

4 Sin duda, el sistema de Breton Woods no fue sustancialmente diferente. Mientras implicó un compromiso para la estabilidad de la tasa de intercambio y reclamó por movimientos de capital regulados, nunca suscribió un mecanismo de ajuste libre de políticas poderosas, como había propuesto J.M. Keynes. El “sistema” de ajuste Breton Woods fue la Guerra Fría (Strange, 1982; Walter, 1991).

RECUPERANDO LA TIERRA

Asimismo, podemos observar que el corolario de la industrialización retrasada y la soberanía incompleta en la periferia es la globalización del sistema agro-alimenticio. Efectivamente, la agricultura es el único mercado en el mundo de hoy que está “globalizado”, si por ello entendemos que cada país en el mundo está produciendo para eso. Los orígenes de la globalización en la agricultura han de ser encontrados en las siguientes variables (ver Friedman y McMichael, 1989; Friedmann, 1993; McMichael, 1997; Bernstein, 2000): (a) el crecimiento en el siglo XIX de las agro-exportaciones tropicales desde las colonias a las metrópolis para consumo masivo (azúcar, café, té, aceites vegetales) y la expansión industrial (algodón, madera de construcción, caucho); (b) el crecimiento simultáneo de Estados colonos ex coloniales, los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, para constituir el núcleo de la agricultura de la economía mundial exportando grano barato, incentivando la industrialización y desarrollando vínculos agro-industriales; y (c) el colapso del régimen de libre comercio, más resueltamente en el período entreguerras, con el consecuente crecimiento del proteccionismo de la agricultura y la industria en el centro, la gestión coordinada de los vínculos nacionales agro-industriales y la confianza en las preferencias del comercio imperial con las colonias.

Luego de la Segunda Guerra Mundial y con la descolonización, la mencionada dispensa histórica creó el marco para una nueva contradicción: el intento de los Estados periféricos por emular el modelo nacional de la integración agro-industrial, al tiempo que esto venía deshaciéndose en el centro por la creciente integración del complejo agro-industrial en una escala global bajo el liderazgo de las empresas estadounidenses. En términos generales, esta contradicción ha sido resuelta en favor del capital transnacional, que procedió a construir un sistema agro-alimenticio global, caracterizado por una alta concentración corporativa y una división internacional altamente estratificada del trabajo en agricultura.

Solamente esbozaremos los principales contornos de esta historia, tal como han sido analizados en detalle por otros (Friedman y McMichael, 1989; Friedmann, 1993; McMichael, 1997; Bernstein, 2000). El orden de posguerra, de gestión capitalista a lo largo del Atlántico, reservó un papel especial para la agricultura. En los Estados Unidos, el modelo preguerra del New Deal se mantuvo con el implemento de un sistema de apoyo de precios basado en compras estatales, la generación de excedentes crónicos con necesidad de mercados externos y el fomento en el tiempo de la profundización del complejo agro-industrial, especialmente por medio de la tecnología de semillas “híbridas” bajo la tutela de grandes corporaciones. Mientras tanto, el modelo estaba siendo exportado a Europa junto con el Plan Marshall, con el propósito de apoyar

una rápida reconstrucción de la Guerra Fría. El objetivo era reconstruir las economías dinámicas con agriculturas e industrias integradas, a la vez que todas ellas se integraban y compatibilizaban del otro lado del Atlántico. Por lo tanto, Europa protegió el trigo y los productos lácteos con apoyo de los Estados Unidos, mientras que eximía el maíz y la soja estadounidense de los controles de importación de su CAP, comprándolos, de hecho, con los fondos del Plan Marshall. Como demostró Harriet Friedman: “Bajo la administración Marshall, el *dumping* sería secundario después de la recuperación” (1993: 35). El proyecto fue exitoso durante un tiempo; integraba al Atlántico en un único complejo agro-industrial, permitía a los Estados Unidos disponer de sus excedentes y a Europa recuperar su propio equilibrio, aun en contra de los Estados Unidos. Eventualmente, se obtuvieron las mismas características en ambos lados del Atlántico: la agricultura industrializada, la concentración corporativa y la sobreproducción, a pesar de que no presagiaban de buena manera la asociación transatlántica o el desarrollo balanceado en la periferia. Notablemente, a los únicos Estados periféricos en esta época a los que se les permitió ser parte del complejo agro-alimenticio atlántico y de la integración agro-industrial independiente fueron los de Asia oriental.

El resto de la periferia iba a convertirse en un vertedero de los excedentes europeos y estadounidenses, empezando con los de Estados Unidos, que hacia la década del cincuenta estaban perdiendo su mercado europeo debido a la propia maduración de este último. A partir de entonces, los Estados Unidos buscaron colocar sus productos en Japón y, sobre todo, en el Tercer Mundo, para los que el plan imperial no era el “control a través de la reconstrucción” sino un fomento de la dependencia y el subdesarrollo. De los muchos instrumentos del modo de gobernar imperial, “la ayuda alimenticia” era uno importante⁵. Así, fue habilitada por las constricciones de la acumulación periférica en un contexto de construcción nacional; tomó ventaja tanto del proyecto de la industrialización como de la brecha de intercambio exterior y proveyó trigo a países que implementaban políticas de alimentos baratos orientadas industrialmente, sin demandar sus recursos limitados de intercambio exterior. Mientras que algunos se resistieron más que otros, el efecto fue certero: “Las políticas de importación crearon dependencia alimenticia durante dos décadas en países que habían sido mayormente autosuficientes en materia alimenticia al final de la Segunda Guerra Mundial” (Friedmann, 1993: 38).

⁵ Algunos, más obvios, incluyen el control monopólico de la moneda internacional, granos, créditos, tecnología y ayuda militar; la intervención directa y las operaciones cubiertas; la cooptación de la unidad de mercado internacional.

RECUPERANDO LA TIERRA

El proceso de integración al complejo atlántico agro-industrial fue profundizado por la revolución verde. Ésta, por un lado, buscó copiar el modelo nacional idealizado y, por el otro, sirvió para una mayor subordinación de la periferia a las firmas estadounidenses en semillas de alta tecnología, productos químicos y equipos de agricultura (Friedmann, 1993; Petras, 2000). De forma destacada, la revolución verde se insertó a través de mecanismos de la estructura del centro-periferia, prometiendo una mayor productividad agraria, autosuficiencia alimenticia nacional y suspensión del intercambio exterior, en contra de las restricciones de la acumulación periférica. Fue, incluso, propagada en una época en la que la construcción nacional estaba fracasando en el cumplimiento de sus promesas y la movilización social radical se estaba extendiendo a lo largo de América Latina, Asia y África. Con el paso del tiempo, un puñado de “nuevos países agrícolas” (NAC, por su sigla en inglés) en la semiperiferia desarrolló una capacidad agro-industrial competitiva propia (por ejemplo, India y Brasil), aun desafiando los mercados estadounidenses y europeos, aunque sin obtener seguridad alimenticia o la solución total de las cuestiones nacionales y agrarias⁶. Finalmente, mientras estos cambios estaban en curso, la construcción nacional periférica era socavada por la sustitución técnica de los productos de exportación tropicales (por ejemplo, caña de azúcar y aceites vegetales), que habían sido, hasta el momento, la fuente principal de industrialización apuntalada en el intercambio externo. “A principios de la década del setenta –concluye Friedman–, el régimen alimentario ha atrapado al tercer mundo con una tijera. Una cuchilla fue la dependencia de la importación de alimentos. La otra fue la baja de los ingresos de las exportaciones tradicionales de cultivos tropicales” (1993: 38).

La década del setenta constituyó un tiempo de crisis generalizada, determinada por la sobre acumulación y la crisis de la hegemonía, aspectos que se han reforzado mutuamente (Cox, 1987; Arrighi, 2003). En la industria, esto conllevó a la reubicación del capital y a su financiación, en tanto en el mercado monetario y financiero global condujo a tasas de intercambio flexibles y a un capital desregulado. A su vez, en las relaciones laborales, se produjo una mutación en la estructura fordista de acumulación en el centro, marcada por la desconcentración y la flexibilización de la producción, con tendencias similares y la persistencia de

6 Estos NAC ganaron “autosuficiencia” alimenticia en el sentido de no confiar más en las importaciones, pero no en el sentido de la seguridad alimenticia, puesto que la autosuficiencia se ha basado en la baja demanda nacional efectiva, esto es, pobreza masiva y malnutrición crónica (Patnaik, 1990). Incluso, los costos sociales de la transformación de la agricultura doméstica en la agro-industria competitiva global han sido inmensos: rápida alienación de la tierra y desempleo, conflicto rural, emigración masiva y criminalidad urbana.

la condición dominante de la semiproletarización en la periferia en vías de industrialización. De forma paralela, a nivel institucional-global, el modelo “tripartito” de las relaciones industriales entró también en crisis (Cox, 1977, 1987; Fröebel et al., 1980). El resultado neto fue doble: primero, el aplazamiento de una espiral deflacionaria difundida dentro de la alianza, que supuso el desplazamiento parcial de la crisis hacia los trabajadores más vulnerables del centro y hacia el grueso de las masas semiproletarizadas de la periferia; segundo, el reestablecimiento de la hegemonía global de los Estados Unidos y sus socios menores, fundada en una nueva relación Estado-sociedad bajo las pautas del capital financiero y ejercitada, en primera instancia, por medio del “régimen Wall Street-dólar” (Gowan, 1999).

En la agricultura, el mismo proceso de exceso de acumulación de posguerra estaba en progreso, en la medida en que los miembros de la alianza transatlántica maduraban bajo los subsidios y la protección y eran desafiados por un pequeño número de nuevos competidores agrícolas en el sur. Así, el escenario también estaba listo para la crisis de la agricultura global. Como lo detallan los documentos de Friedman, la combinación de la distensión entre el Este y el Oeste y la sacudida del petróleo transformaron la economía política alimenticia: la Unión Soviética entró en el mercado; Japón diversificó sus fuentes de importación para incluir los NAC, y los Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron los subsidios y la sobreproducción, al tiempo que luchaban por porciones de mercados. La nueva situación agro-alimenticia ya no fue fácilmente digerible para el gobierno imperial, puesto que las empresas transnacionales tenían ahora poder y agendas propias. La dirección del cambio fue liderada por las transnacionales, culminando en la Ronda Uruguay de negociaciones del GATT, que llevó a una nueva alineación de los Estados imperiales detrás de las agendas corporativas, a saber, la liberalización y expansión de derechos de propiedad intelectual y de servicios. Al mismo tiempo, permanecía sujeta a las demandas de la posguerra por la agricultura dirigida, esto es, la protección. Sin embargo, tales demandas han estado a la defensiva, especialmente después del fin de la Guerra Fría (Friedmann, 1993).

Por lejos, la carga del ajuste estructural cayó en la periferia, reforzando las tendencias de posguerra a la mercantilización e integración en el complejo corporativo agro-industrial de base centralizada. Además, la periferia era atrapada por una segunda tijera: por un lado, el imperativo de la exportación derivado del servicio de la deuda; por la otra, la protección del Norte. El resultado fue una nueva división del trabajo en la agricultura (ver McMichael y Myhre, 1991; Moyo, 2000; Raikes y Gibbon, 2000; Petras 2000): mientras el centro se especializaba en la producción de capital intensivo de granos vendidos a bajo costo a la periferia, los

RECUPERANDO LA TIERRA

Estados periféricos luchaban por mercados saturados para exportaciones tradicionales⁷, o descubrían la “ventaja corporativa” en bienes “no tradicionales” y en el uso de la tierra, produciendo frutas “exóticas”, flores y vegetales cortados, cría de avestruz y la gestión de la “vida silvestre” (ecoturismo). A su vez, estos grupos fueron impulsados hacia la posesión de la tierra a gran escala, controlada por el capital corporativo y destinada al consumo de lujo periférico y metropolitano. Un resultado menos notorio ha sido la intensificación de la competencia para el control de bienes y minerales de alto valor, desde madera y aceite hasta coca y diamantes, que aumentan los niveles de criminalidad y de guerra.

La reivindicación más cínica de todas fue que el propósito de ajuste estructural había sido el “desarrollo”. En otras palabras, que el abandono de la industrialización como un proyecto y su reemplazo por la agricultura de exportación en mercados saturados y de lujo desarrollarían a los africanos, asiáticos y latinoamericanos y los sacarían del subdesarrollo. El ajuste estructural ha reforzado y profundizado la tendencia de posguerra a la incorporación del campesinado a la esfera de producción de bienes, al mismo tiempo que los ha marginalizado. La construcción nacional de posguerra siempre fue dependiente de la agricultura y de los mercados de exportación, y esto, en paralelo, estuvo permanentemente inclinado en favor de la tecnología y de otros privilegios en el reino de la infraestructura, los créditos, los subsidios y la tierra. Podemos decir que fue la construcción nacional de posguerra la que “encerró” a la pequeña producción de bienes, primero mediante la agencias estatales y el Banco Mundial, luego junto con los agro-negocios, que especializaron la producción campesina, estandarizaron el proceso productivo y la integraron con mercados nacionales e internacionales (De Janvry, 1981; Harriss, 1987; Bernstein, 1990). Sin embargo, la liberalización agresiva del último cuarto de siglo debería ser vista como un hito: ha ido lejos al quitar el soporte estatal a los campesinos en la esfera tanto de la producción como de la reproducción; ha desencadenado fuerzas de mercado sofocantes, especialmente al devaluar monedas y aumentar los costos de producción; ha transferido la totalidad de la organización de la producción al agro-negocio, que en los nuevos dominios de la exportación desplazó totalmente hacia el margen a los campesinos; y ha establecido derechos de propiedad privada de la tierra, aspecto que frenó los intentos por alienarla. Combinados con las experiencias de deterioro de los ingresos reales en empleos

7 Raikes y Gibbon (2000) indican que entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa los términos de mercado para los principales cultivos tradicionales (algodón, café, cacao, té, tabaco, bananas, naranjas) habían caído dramáticamente (más del 35% para la mayoría de los alimentos) debido a la saturación del mercado; notablemente, África había perdido acciones en Asia.

no agrícolas, las tendencias a la desindustrialización y el deterioro generalizado de los estándares de vida, los ajustes estructurales han profundizado, exitosamente, la dependencia y el subdesarrollo.

Acerca de si aún se puede hablar o no de un “campesinado” es algo a lo que volveremos más adelante. Baste aquí, para redondear la discusión, hacer notar que la globalización de la agricultura no puede ser compartimentada en una teoría del “régimen” que tendría su contrapartida en un régimen de la moneda, el comercio, el trabajo, la seguridad o el petróleo (por ejemplo, Keohane, 1984)⁸. El poder imperial no opera en dominios separables, y la evolución de la agricultura nunca ha operado a través de un discreto conjunto de reglas, principios y procedimientos. El “sistema” siempre ha sido la estructura centro-periferia, a través del prisma de la Guerra Fría y su desarrollo posterior. Por consiguiente, separar la cuestión agraria de la cuestión nacional –sugiriendo que el Estado ha perdido relevancia en el curso de la “globalización” (McMichael, 1997)– significaría no sólo malinterpretar el rol de Estado, sino también perder la orientación respecto de las relaciones internacionales.

LA GEOPOLÍTICA DE LA REFORMA AGRARIA

Los teóricos de la cuestión agraria de fines del siglo XIX, Kautsky (1988) y Lenin (1964), observaron un fenómeno particular en Europa, que no se ajustó a las formulaciones deterministas de Marx acerca de la transición hacia el capitalismo en agricultura. Así, la acumulación primitiva no produjo una insignificante producción obsoleta de bienes, sino que esas pequeñas parcelas campesinas continuaron coexistiendo junto con la gran agricultura capitalista. Esto, de hecho, sirvió a los intereses del capital al subsidiar la preproducción social del trabajo y hacer bajar, como consecuencia, los salarios. De esta manera, Kautsky llamó a las parcelas campesinas “sitios de producción para la nueva fuerza de trabajo”. La condición de semiproletarización no fue vista, sin embargo, como permanente; estaba en realidad destinada a desaparecer con el desarrollo ulterior del mercado doméstico.

Un siglo más tarde, esta condición persiste como dominante en las zonas rurales de la periferia. En el período de posguerra, las fuentes de esta situación fueron comprendidas por la escuela del subdesarrollo, en particular por Samir Amin (1976) y Alain de Janvry (1981), quienes vieron la semiproletarización como inherente al patrón desarticulado de acumulación, dos aspectos que inhibieron el desarrollo del mercado doméstico y continuaron subsidiando al capital en su capacidad

⁸ Las falacias (imperiales) de la teoría del régimen en las Relaciones Internacionales han sido ampliamente señaladas, aun por los teóricos conservadores, (Strange, 1982).

RECUPERANDO LA TIERRA

de exportación. Este problema fundamental sigue vigente en nuestros días. Mientras el capital no necesite hacer uso de sus ganancias a nivel nacional, la “semiproletarización” y la pobreza son “funcionales” a su reproducción. Es notable que este “dualismo funcional” entre los sectores capitalistas y los (aparentemente) no capitalistas no es necesariamente un asunto rural; también funciona en las áreas urbanas –bien por autoempleo en actividades de baja capitalización y/o por el alojamiento voluntario en barrios marginales.

Es en este contexto que la reforma agraria, con su componente de reforma de la tierra, ha ganado históricamente su significación política y económica. Haya sido propuesta por los nacionalistas o por socialistas radicalizados, ha constituido un desafío directo al patrón prevaleciente de acumulación periférica y al imperialismo mismo. En el período de posguerra, por consiguiente, su destino iba a ser determinado en gran medida por la geopolítica de la Guerra Fría. En tanto las demandas para la reforma agraria se mantuvieron en un nivel local, nacidas de tensiones y conflictos clasistas, y un modelo “redistributivo” de reforma guió el pensamiento hasta la década del setenta, la reforma no se redujo a ninguno de estos factores y, en cambio, fue típicamente suprimida y reducida por el capital nacional volcado hacia el exterior y a los aliados imperiales. Contrariamente a las interpretaciones recientes (Kay, 1998; Bernstein, 2002), la reforma agraria, en el curso de la construcción nacional, no derivó en primera instancia de un modelo redistributivo, sino del balance de las fuerzas de clase en la Guerra Fría. De ello se sigue que no alcanzó su “histórico final” con el comienzo del nuevo modelo de reforma “basado en el mercado”, sino que permanece sujeta a las luchas clasistas en un contexto caracterizado por el comienzo de la reorganización en curso de las fuerzas progresistas luego de la Guerra Fría.

Se puede decir que dos eventos en particular han influido el curso de la reforma agraria a nivel mundial: las revoluciones china y cubana (ambas instancias en las que el control imperial perdió ante las fuerzas radicalizadas). El primer conjunto de transformaciones luego de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar bajo los auspicios de los Estados Unidos en Asia oriental. De hecho, eran radicales desde cualquier perspectiva y sirvieron como laboratorio para una subsiguiente política estadounidense sobre reforma agraria (Olson, 1974). Bajo la amenaza de la proliferación de las revoluciones en la región, lideradas por los comunistas chinos, los funcionarios estadounidenses llegaron rápidamente a la conclusión de que a menos que las relaciones feudales fueran abolidas, la influencia en la región sería cedida a la Unión Soviética. De este modo, en los cinco años posteriores a la guerra, Japón, Corea del Sur y Taiwán llevaron a cabo un proceso de redistribución de tierras a gran escala, combinado con la represión armada de fuerzas radicalizadas, hasta que las reformas

(algunas de las cuales ya estaban teniendo lugar en las zonas liberadas) estuvieran bajo control. En todos los casos, se instituyó la reforma *sin* marginar políticamente a las oligarquías terratenientes; éstas fueron compensadas e inducidas al desarrollo industrial, y se las transformó en una clase política aliada con los Estados Unidos.

El mismo tipo de activismo no fue necesario en la cercana Filipinas o, poco después, en Guatemala, donde las fuerzas radicalizadas fueron derrotadas en cada caso por medios militares, y donde se dio marcha atrás en las reformas agrarias en progreso (Olson, 1974). El caso de Bolivia en el mismo período es por demás interesante, en la medida en que una revuelta popular llevó al poder a un gobierno nacionalista radicalizado, que puso en acción una extensa agenda redistributiva. Pero, en este caso, la oligarquía política no se desplazó efectivamente y la dirección del cambio interno, en el mediano plazo, fue exitosamente dividida no por medios militares, sino a través de instrumentos provistos por la ayuda externa. En Egipto, las reformas también fueron conducidas por un gobierno nacionalista, en última instancia, por efectos neocoloniales. En Irán se produjeron bajo el Sha, para contrarrestar el malestar social. En esferas de influencia fuera del alcance de los Estados Unidos, como en los territorios coloniales de Gran Bretaña y Francia, las experiencias de reforma se correspondieron con el patrón general: en Kenia y Argelia, los ejércitos imperiales fueron movilizados para aplastar las revueltas anticoloniales basadas en lo rural y, eventualmente, para negociar las transiciones neocoloniales. De este modo, en general, las reformas agrarias, bajo los auspicios imperiales desde 1946 hasta 1959, se controlaron y limitaron (e, incluso, se invirtieron) en todos los casos, excepto en el este asiático. Allí se combinaron con la represión y pretendían asegurar y estabilizar la reproducción del capitalismo periférico en el contexto de la Guerra Fría. Querer adaptarlas a una categoría “redistributiva” sería defectuoso o tangencial respecto de la realidad.

El siguiente ímpetu llegó con la Revolución Cubana. Esto alimentó una nueva ola de militancia en América Latina, obligando al gobierno estadounidense a actuar también en contra de los remanentes feudales del continente. Bajo la bandera de la Alianza para el Progreso, lanzada en 1961, se ejecutó una serie de reformas agrarias redistributivas, generalmente en contra de los deseos de las clases dominantes locales. Una vez más, sin embargo, el objetivo era poner en marcha una estrategia de reforma de cooptación controlada, creando una pequeña burguesía agraria conservadora y reprimiendo a los excluidos (de Janvry, 1981; Petras y Veltmeyer, 2000). No obstante, a mediados de la década del sesenta, el nuevo reformismo estaba estancado, en contra de la militancia que proliferaba en las zonas rurales y debido al realineamiento de los modernistas y los burgueses reaccionarios. Bajo estas circunstancias,

RECUPERANDO LA TIERRA

los Estados Unidos cambiaron la política agraria y se alejaron de la redistribución de la tierra, manteniéndose a favor de la modernización social y tecnológica de los latifundios. Todo ello, si lo hubiesen considerado necesario, combinado con el apoyo a las dictaduras militares. De esta manera, una serie de golpes de estado, desde en Brasil en 1964 hasta en Chile en 1973, proveyó un marco político para la reorganización de las agriculturas de América Latina, a fin de modernizarlas con una redistribución limitada y sin el desplazamiento de las clases dirigentes nacionales, de integrarlas al complejo agro-industrial estadounidense y de mantener la acumulación volcada hacia el exterior. En el sur de Asia se estaba lanzando, a la par, la misma reorganización “pasiva” de la agricultura a través de la revolución verde, especialmente en el norte de la India. Mientras tanto, más al este, en Vietnam, los Estados Unidos intensificaban su agresión contra un potente movimiento de liberación nacional, en tanto en África, movimientos similares generaban por sí mismos luchas armadas contra el dominio colonial y la supremacía blanca en Guinea Bissau, Angola, Mozambique, Namibia, Zimbabwe y Sudáfrica (todos, excepto el último, eran de base rural).

Para reiterar, el período anterior a la liberalización fue tanto de “redistribución” como de “construcción nacional”. Mientras éstos eran los modelos de desarrollo prevaletentes, el determinante del cambio era la lucha de clases en la estructura centro-periferia bajo las condiciones de la Guerra Fría. En este punto, es posible hacer algunos comentarios adicionales. Primero, las luchas sociales de base rural han instigado la transición de la agricultura hacia el capitalismo en todo el mundo, un movimiento caracterizado mayormente por la transformación de las grandes haciendas en cultivos capitalistas, junto con otras tendencias (que especificaremos en la sección siguiente). Segundo, toda la experiencia del reformismo de posguerra acabó en los setenta con los programas de “desarrollo rural integrado” que, administrados por las agencias globales, sirvieron como un subsidio mínimo para la reproducción social del proletariado y del semiproletariado rural a escala global. Tales políticas, así como otras alternativas más radicales, frenaron la rápida proletarianización (De Janvry, 1981; Harriss, 1987). Tercero, las medidas reformistas que salvaguardaron el estatus político y económico de las clases dominantes y les permitieron tomar la dirección de la reforma nuevamente al tipo de acumulación volcada hacia el exterior han fallado por completo. Como lo ha expuesto Atilio Borón: “La historia enseña que, en América Latina, para hacer reformas, se necesitan revoluciones” (2003: 205), y esto puede, ciertamente, ser generalizado. Mientras las revoluciones pueden no estar previstas en estas circunstancias, el punto para resaltar es que los acercamientos economicistas a la reforma agraria (Berstein, 2003) continuarán siendo limitados a menos que las di-

mensionaciones políticas de reforma sean tomadas seriamente y quebrado el poder político del gran capital⁹.

El siguiente período de desarrollo, basado en el mercado, desde la década del setenta al presente, alejó el modelo de la reforma agraria de la redistribución. Este tramo comenzó con el golpe de estado en Chile y alcanzó su altura simbólica en América Latina en 1992 con la enmienda del artículo 27 de la Constitución mexicana, que había protegido la reformada tierra comunal desde 1917 (consecuente con la Revolución de 1910-1920). El comienzo del pensamiento reaccionario se expresó por medio de la doctrina económica neoclásica, y llamó tanto a la restitución de la tierra en los sectores reformados a los anteriores dueños de las tierras como al establecimiento de títulos individuales en los sectores que eran comunales/indígenas, colectivizados o de propiedad estatal. Este marco político se expandió a lo largo de América Latina, Asia y África con el ajuste estructural y, más tarde, a Europa del Este, luego del colapso del bloque Soviético (Szelényi; 1998). Aunque la implementación actual ha sido desigual –más significativa en los sistemas de tenencia en América Latina y Europa del Este que en los de África– el impacto ha sido trascendental. Este marco político fue modificado en los noventa, cuando la reforma agraria regresó a la agenda, junto con la “pobreza”, bajo los auspicios del Banco Mundial (Binswanger et al., 1993), combinando la doctrina económica neoclásica con un populismo minifundista renovado (ver la crítica que ofrece Bernstein, 2002). Como analizaremos en detalle más adelante, la nueva agenda ha buscado redistribuir la tierra por medios mercantiles o, de otra manera, proveer el “acceso a la tierra” (por ejemplo, mediante los mercados de alquiler). Este último cambio de los acontecimientos ha sido erróneamente dignificado como la “tercera fase” de la reforma agraria en América Latina (De Janvry, Sadoulet, Wolford, 2001), puesto que no constituyó un quiebre respecto del período que comenzó con Pinochet.

Una vez más, sin embargo, no ha sido el modelo de la reforma agraria el que ha manejado el curso de los eventos, sino la lucha de clases en

9 El debate acerca de la redistribución de la tierra se expandió a lo largo de un siglo. En sus inicios, puso a pelear a la ortodoxia de la Segunda Internacional contra los elementos “populistas” y de la pequeña burguesía, pero también contra otros disidentes de la izquierda revolucionaria, cuya figura más notable fue Lenin. Después de la fallida revolución de 1905 en Rusia, Lenin reconoció la importancia política y democrática de la nueva división de la tierra, especialmente del imperativo de prevenir que la oligarquía terrateniente dirigiera el curso del cambio político. Hasta hoy, el argumento contra el economicismo no ha de ser desestimado como “populista” ni como un incentivo para las cuestiones económicas. Esto último sigue siendo importante –e incluye asuntos de tipo de tenencia, organización de producción y relaciones intersectoriales– pero la economía no puede tener precedencia sobre la política.

RECUPERANDO LA TIERRA

los albores de la Guerra Fría y sus últimos años. Así, al mismo tiempo en que América Latina se estaba por abordar el ajuste estructural, los sandinistas nicaragüenses lanzaron la última revolución de la Guerra Fría en América Latina con una agenda agraria radical. Las fuerzas contrarrevolucionarias organizadas por la CIA pelearon contra ella encarnizadamente y, finalmente, la socavaron. Una década después, luego del fin de la Guerra Fría, los zapatistas iniciaron una lucha armada en el sur de México, que coincidía con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés) y que exigía tierras, la autonomía indígena y la democracia nacional. Como contrapartida, recibieron una combinación de represión militar y de promesas incumplidas por el Estado mexicano. Luego, en África, Zimbabwe cerró el siglo con un movimiento de ocupación de tierras militante, liderado por veteranos de guerra por la liberación nacional, que también buscaba una redistribución radical de la tierra. Ciertamente, la relativa insignificancia geopolítica de Zimbabwe en el contexto posterior a la Guerra Fría permitió un espacio de maniobra¹⁰. Pero, el punto *no* es que el sur de África, o Zimbabwe en particular, sea “excepcional” (Bernstein, 2002; pág. 79 de este volumen), sino que la base social para la reforma agraria existe en todos lados y es explosiva. Por consiguiente, las demandas que consideran “el fin de la reforma agraria” son extrañas; ha ocurrido una derrota generalizada de fuerzas progresistas, pero de allí no se siguen conclusiones históricas mayores. Es más, como veremos, las fuerzas progresistas están llevando a cabo una reorganización significativa, cuya base social se localiza, primordialmente, en las zonas rurales.

Es necesario un comentario final que tenga en cuenta las conexiones conceptuales entre la tierra y la cuestión agraria. Allí donde la resolución de la cuestión agraria esté atada a la transformación industrial, la cuestión de la tierra se dirigirá más inmediatamente hacia el tema de la redistribución del suelo y a los asuntos relacionados con su tenencia y utilización (Moyo, de próxima aparición, a). En las regiones con un pasado de cultivo y un sistema de terrateniente a gran escala, a saber, América Latina, Asia y el sur de África, las problemáticas de la tierra y agrarias son usualmente tratadas como sinónimas y, a menudo, se combinan con asuntos de derechos indígenas (por ejemplo en Zimbabwe y México). Mientras las diferencias entre estas dos cuestiones deberían mantenerse, es verdad que la reforma agraria, sin la reforma de tierras y debido a las razones políticas y económicas relacionadas con la transformación

¹⁰ En efecto, el contraste con la década del setenta es impresionante. En esa época, Henry Kissinger se ocupó, muy claramente, de la lucha armada de base rural en el sur de África, mediante un encubierto apoyo militar y económico clandestino a los supremacistas blancos, a fin de asegurar las transiciones neocoloniales.

estructural y el desarrollo de amplia base del mercado interno, no es realista. En el caso específico de África tropical, muchas veces se dice que no hay una cuestión de la tierra, sólo una cuestión agraria (Mafeje, 1997)¹¹. A pesar de que el África tropical pueda no compartir la historia del capitalismo colonizador del África del sur, ha llevado a cabo una integración colonial y poscolonial de la producción generalizada de bienes básicos, y ha experimentado las presiones y tendencias típicas de la alienación de la tierra y de la concentración del capital, ambas dentro y fuera de las áreas comunales, donde prevalece la tenencia estatal y libre (Moyo, de próxima aparición, a). Estas tendencias se han profundizado con la liberalización, la privatización y la presión demográfica que ha dado lugar a una situación en la que el problema de la tierra puede ser muy explosivo (como ofrece el testimonio de Ruanda). En tanto en las áreas comunales, las cuestiones de raza y de sistema de terratenientes pueden no ser pertinentes, los asuntos que sí se relacionan son potentes: la inseguridad de la tenencia, la subdivisión de la tierra y los mercados informales; la alienación y concentración, combinadas con los cambios en su utilización determinados externamente; y los sistemas patriarcales no democráticos del gobierno local para adjudicar y administrar las disputas por la tierra.

CAMBIOS SOCIO-ECONÓMICOS EN LAS ZONAS RURALES

¿CAMPESINADOS EN EXTINCIÓN?

Este debate contemporáneo sobre el destino del campesinado ha revivido cuestiones históricamente familiares acerca del carácter socio-económico y la significación política del campesinado bajo el capitalismo. Las posiciones se dividen, a grandes rasgos, entre aquellos que ven el campesinado en retirada económica y/o políticamente y quienes argumentan lo contrario¹². El debate cobró ímpetu por una colección reciente de ensayos titulado *Disappearing Peasantries? [¿Campesinados en extinción?]* (Bryceson, et al., 2000). Centrándose principalmente en el aspecto socio-económico del cambio agrario, allí se concluye que generalmente, “la ejecución de las políticas de ajuste estructural y de la liberalización del mercado alrededor del mundo han tenido el efecto de disolver las

11 Ha habido hasta una variante de esto en el sur de África en el contexto *postapartheid* (Mamdani, 1996; Neocosmos, 1993), por medio de la que las relaciones político-económicas entre los terratenientes blancos y los productores de pequeñas mercancías han sido oscurecidas y la cuestión de la tierra, en sí misma, socavada (ver crítica en Yeros, 2002b).

12 Para una perspectiva del debate en América Latina, ver Petras y Veltmeyer (2001), y para el del sur de África, con particular referencia a Zimbabwe, ver Yeros (2002a).

formas de sustento de los campesinos” (Bryceson, 2000a: 29). La conclusión es aceptada de varias maneras por los contribuyentes, así como también, en algunos casos, combatida. Esto es atribuible, en parte, al uso de definiciones diversas del concepto “campesinado”.

Nuestro punto de partida es que el campesinado –los agricultores domésticos o a pequeña escala que funcionan en el sistema generalizado de producción de mercancías– no constituye una clase en sí misma, aunque le son inherentes las tendencias antagónicas del proletario y el propietario (Kautsky, 1988; Lenin, 1964; De Janvry, 1981; Gibbon y Neocosmos, 1985; Bernstein, 1988, 2000). En otras palabras, el tipo ideal de “campesinado doméstico” se reproduce a sí mismo simultáneamente como capital y como trabajo, con contradicciones internas. En realidad, la combinación del capital y el trabajo no se reparte proporcionalmente en el campesinado, y ello por dos razones. En primer lugar, el campesinado se diferencia entre productores de pequeñas mercancías ricos, medianos y pobres, un espectro que se extiende desde el capitalista que emplea fuerza de trabajo, más allá de la familia, al semiproletario que la vende; como tal, en rigor sólo el campesinado medio expresa el tipo ideal de la producción pequeño burguesa, arreglándose para no contratar ni vender fuerza de trabajo, lo cual a su vez es raro. En segundo lugar, la combinación de capital y trabajo no se extiende proporcionalmente tampoco a un solo tipo de unidad doméstica: teniendo en cuenta el género y la generación, los patriarcas controlarán los medios de producción, y las mujeres y los niños proveerán trabajo no asalariado. Mientras esto pueda parecer en la superficie un modo “diferente” de producción, se ha argumentado convincentemente que la producción de pequeñas mercancías está firmemente incrustada en el sistema capitalista y que, de hecho, es una figura normal de la sociedad capitalista, aun si es subordinada e inestable (De Janvry, 1981; Gibbon y Neocosmos, 1985).

El capitalismo mantiene al campesinado en un estado de cambio continuo; su destino histórico en el lugar de nacimiento del capitalismo en el Atlántico Norte ha sido el de la proletarización. Sin embargo, más generalmente, la dirección del cambio no ha admitido el determinismo histórico, bien del tipo absoluto (Marx), bien del más cauteloso (Kautsky, Lenin), ya que dentro de la estructura centro-periferia engendrada por el colonialismo, la proletarización ha coexistido con la persistente semiproletarización y con la recampesinización. Para nuestro propósito, desentrañar la realidad presente –esto es, determinar si el campesinado aún existe– constituye un problema tanto de interpretación como empírico. En términos empíricos, hay dos indicadores que son útiles: la descomposición de los ingresos domésticos, para incluirla también en el análisis de la fuente no intercambiable de sustento, y el análisis de los patrones de residencias domésticas, pueblerinas y campestres.

ENTRE CAMPESINOS Y TRABAJADORES

A comienzos de la década del noventa, en Zimbabwe, una encuesta conducida por el centro sindicalista nacional estimó que el 75% de las familias mantenía hogares dobles en el pueblo y en el campo (Peta et. al., 1991). Esta información sugiere que el fenómeno dominante no era ni el tipo ideal del campesino medio ni la completa proletarización, sino una *semiproletarización* caracterizada por la producción de pequeñas mercancías y el trabajo asalariado mediante los que sustentaban conjuntamente la unidad doméstica. A esto podemos sumar las fuentes de sustentos no intercambiables, los valores de uso derivados de la tierra y de sus recursos naturales, como alimentos, agua y madera para combustión y la seguridad que la residencia rural brinda contra las fluctuaciones económicas, la enfermedad y la vejez (Moyo, 1995; de próxima aparición, a). La condición de la semiproletarización es dinámica, como también lo es la lucha por la vida de los campesinos semiproletarizados en contra de campesinos más ricos, de granjeros comerciales a gran escala y de otros empleadores que contratan a semiproletarios por salarios menores respecto del costo de la reproducción social.

En *¿Campesinados en extinción?* se ha argumentado que, bajo el ajuste estructural, los campesinos se volvieron “problemáticos” puesto que son “multiocupacionales, se movilizan entre sus residencias urbanas y rurales e inundan los mercados laborales” (Bryceson, 2000a: 30). Pero, con algunas concesiones, el campesinado ha sido problemático durante la mayor parte del siglo XX; la semiproletarización tiene una historia más larga que no es bien reconocida, y es de hecho generalizable a África (First, 1983, Cohen, 1991; Mamdani, 1996) y al resto de la periferia, como veremos. El caso de Zimbabwe, desarrollado más arriba, demostró un alto grado de semiproletarización justo en el comienzo del ajuste estructural, y eso que era el segundo país más industrializado del África subsahariana. Es más apropiado, por lo tanto, buscar cambios *dentro* de ese fenómeno diacrónico de semiproletarización. Volveremos a algunos de ellos, pero por ahora es suficiente prologar nuestra idea de que el ajuste estructural, más que cumplir con un proceso secular de “acumulación primitiva”, como Bryceson (2000b: 55) parece sugerir *vis-à-vis* de África en particular, ha intensificado, por un lado, el proceso de alienación de tierras pero, por el otro, ha *aumentado* la demanda de la tierra y sus recursos naturales como una consecuencia del declive generalizado de las fuentes de ingreso (agrícolas, no agrícolas y externas). Así, dentro de un contexto caracterizado por “la extensión forzada de las estrategias de supervivencia de los campesinos bajo la presión del empobrecimiento” (Raikes, 2000: 68) –para actividades como el pequeño intercambio, las artesanías y la búsqueda de oro al zarandeo– ha habido una lucha intensificada para acceder a la tierra ilegalmente

(“usurpación”) en áreas rurales y urbanas, tanto como una intensa lucha política para reclamarla. El caso más importante de recampesinización bajo el neoliberalismo en África ha sido el de Zimbabwe con el cambio de milenio (Moyo y Yeros, pág. 181 de este volumen).

El ajuste estructural estuvo acompañado por una intensa migración. África ha registrado, ahora, la tasa más rápida de urbanización en el mundo (3,5% anual) por lo que cerca del 40% de la población se encuentra urbanizada. Este hecho es, con frecuencia, usado como prueba de que la cuestión de la tierra, y su correlativa cuestión agraria, están perdiendo relevancia. Pero los hechos están ahí para ser interpretados. No se debería entender que la migración significa la completa proletarianización o urbanización, sino la propagación del riesgo en circunstancias altamente adversas. Si esta urbanización se hubiera acompañado con industrialización y creación de trabajo, la conclusión podría haber sido otra. Pero la realidad es diferente: la urbanización se produce junto con la desindustrialización y las limitaciones. La urbanización toma la forma predominante del establecimiento ilegal y no planeado, por lo cual la mitad de la población urbana de Kenia y Sudáfrica vive en barrios bajos (Moyo de próxima aparición, a). Es notable, en relación con esto, que la migración no sea meramente unidireccional, ya que los trabajadores reducidos de las minas y las estancias son también conocidos por buscar la campesinización, como registró un estudio de caso de la “usurpación” rural en Zimbabwe (Yeros, 2002b), o como ciudadanos que entran en procesos de reforma agraria (Moyo y Yeros, pág. 181 de este volumen).

La situación de América Latina parece, para algunos observadores, sustancialmente diferente, dado que la población está casi doblemente urbanizada, pues llega a un 60% y hasta a un 80%. Sin embargo, por las mismas razones brindadas más arriba, estas cifras no cuentan la totalidad de la historia. A fines de los ochenta, De Janvry y Sadoulet (1989) estimaron, sobre la base de los once estudios de caso, que las unidades domésticas en “cultivos subfamiliares” no obtienen, en promedio, más que el 40% del ingreso de sus propias granjas, mientras que el resto obtiene ingresos, en primer lugar, de salarios en zonas rurales y urbanas. Esta categoría de productores agrícolas era grande en números absolutos, y daba cuenta del 50% del número total de granjas que ocupan menos del 2% del total del área cultivada.

El caso específico de Brasil, el país más industrializado del continente, provee algunas perspectivas valiosas. Para empezar, están aquellos (De Oliveira, 2003) que afirman que la “acumulación primitiva” ha tenido su curso en Brasil en virtud de la expansión del sector de servicio y de la absorción del ejército de reserva laboral por el empleo flexibilizado. Pero un análisis riguroso de la información nos sugiere otras cosas. Por ejemplo, un cuidadoso estudio del censo de 1985 mostró que

mientras la semiproletarización estaba de hecho bajo presión, el 57% de las granjas aún consistía en familias semiproletarizadas de áreas rurales que vivían en el 3,6% del total del área cultivada. En números absolutos, esto era casi igual a aquellos declarados como completamente proletariados en las áreas rurales. Información más reciente de los noventa ha mostrado (Graziano da Silva, 1999) que, de hecho, la producción para el consumo propio y la autoprovisión de vivienda se han expandido y que, como en África, los productores campesinos han buscado un refugio precario en la proliferación del empleo rural no agrario, en gran medida, de baja calificación (servicio doméstico, industria de tiempo libre, construcción, etc.) satisfaciendo las necesidades de consumo de la élite. Las diferencias principales con las realidades pasadas de subdesarrollo se basan en que los agricultores subfamiliares complementan sus ingresos, ahora, con empleo rural *no* agrícola (lo que se denomina “multiocupacionalismo” y da origen a la “urbanización” de áreas rurales), mientras compiten más agresivamente por el empleo rural y el lugar de residencia rural con trabajadores urbanos desempleados (“ruralización” de las áreas urbanas). Podemos agregar aquí que este proceso incluye la “recampesinización”, tanto de manera independiente como por medio de los programas actuales de reforma agraria. Lauro Mattei (pág. 359 de este volumen), por ejemplo, demuestra que en los noventa desaparecieron 450 mil propiedades campesinas, mientras se asentaba a 270 mil familias a través de la reforma agraria (en otras palabras, por cada tres familias campesinas desposeídas de tierra, dos lograron poseerla a través de la reforma). Finalmente, podemos esperar que el subdesarrollo de los países menos industrializados en América Latina persista a una escala incluso mayor. Cristóbal Kay ha afirmado esto más recientemente, al sostener que la “mayoría del campesinado de América Latina parece estar arrinconado en un estado permanente de semiproletarización” (2000: 131-132).

En el continente asiático es más difícil hacer generalizaciones, dado que incluye a los países altamente industrializados (Japón, los “tigres” del este asiático), los subdesarrollados y China, que se está industrializando muy rápidamente. Sin embargo, entre los subdesarrollados, el mismo patrón general de semiproletarización continúa prevaleciendo. Asia, en su totalidad, tiene un nivel relativamente bajo de urbanización (casi tres cuartos de la población habita en las áreas rurales). Incluso, casi dos tercios de la población (con variaciones entre los países) están empleados en la agricultura (Mooij, 2000: 213). La diferenciación rural en Asia tiene una historia precapitalista, como muestra Breman (2000), pero ha ido aumentando debido a la inserción en el mercado capitalista y se ha acelerado a causa de la revolución verde (Mooij, 2000: 219). El efecto ha sido el aumento de la

RECUPERANDO LA TIERRA

clase más rica de campesinos en detrimento de las restantes, que se semiproletarizaron o fueron desposeídas. A pesar de ello, se ha argumentado que la proletarización total fue impedida, en alguna medida, por la acción del Estado, y que las unidades domésticas rurales, en general, se han aferrado a una parcela y mantenido la estrategia dual de ingresos de la producción de pequeñas mercancías y del trabajo asalariado (Harriss, 1992; Breman, 2000). También ha ocurrido que las actividades rurales *no* agrarias y los mercados proliferaron, de modo que entre el 30% y el 40% de los ingresos domésticos de las unidades domésticas proviene ahora de fuentes no agrícolas (ver la reseña en Mooij, 2000: 222). Es posible decir, también, que la tendencia dual de ruralización de la ciudad y la urbanización del campo es observable, con características similares, en Asia: “El sector informal [en la economía urbana] no es un hito hacia una vida urbana mejor y más asentada, sino un refugio temporario a la espera de un trabajo que puede luego devolverlo a su lugar de origen cuando ya no lo necesite” (Breman, 2000: 241). Mientras tanto, se nota que “no hay un Nuevo Mundo en el cual establecerse, como lo ha habido para las masas proletarizadas de Europa un siglo antes” (Breman, 2000: 240), concepto que sirve para reubicar el cambio agrario contemporáneo en su propio contexto centro-periferia.

DINÁMICAS DEL CAMBIO RURAL EN LA PERIFERIA

La transición hacia el capitalismo en la periferia ha tenido lugar bajo la acumulación desarticulada, subordinada no sólo a los necesidades de acumulación de la burguesía doméstica, sino también a (y en alianza con) las necesidades de acumulación del capital del Estado central. En consecuencia, *no* se la ha caracterizado como un “camino americano”, como la identificó Lenin –esto es, una acumulación de base amplia por parte de los productores de pequeñas mercancías “desde abajo”– sino por las siguientes cinco vías, que se han combinado de diferentes formas (ver *inter alia*, De Janvry, 1981; Byres, 1991; Moyo de próxima aparición, a):

- Una *vía junker* dominante de terratenientes convertidos en capitalistas en América Latina y en Asia (fuera del este asiático), con sus variantes en las sociedades blancas colonizadoras de África del sur. Este camino maduró a lo largo del siglo XX y culminó con la revolución verde. En términos políticos y económicos, esta vía de agricultura comercial a gran escala funciona ahora en línea con el capitalismo transnacional (no necesariamente de terratenientes). Más recientemente, el gran capital agrario también se desplazó hacia la tierra, alejándose de la agricultura y hacia el manejo de la vida silvestre o de las aventuras del “ecoturismo”.

- Una *vía mercantil* de capital no rural, que incluye el capital mercantil, elementos pequeño-burgueses, burócratas, personal militar y profesionales que ganaron el acceso a la tierra por medio de arrendamientos o por propiedades vía el Estado, el mercado o la reforma agraria. Cultivan a una escala más pequeña que la anterior, pero se integran apropiadamente a los mercados de exportación y a la agro-industria global. Esta vía se encuentra a lo largo de toda la periferia.
- Una *vía estatal* que implica tierras apropiadas por los Estados en el curso de la construcción nacional, presente en toda la periferia. Esta vía retrocede ahora por las privatizaciones, las concesiones al capital nacional e internacional o la conversión al ecoturismo, y alimenta directamente a las dos vías anteriores.
- Una *vía limitada del campesinado mediano a rico* de producción de pequeñas mercancías creadas por una combinación de las tendencias genéricas a la diferenciación rural y a políticas estatales activas en el período de posguerra. Durante la construcción nacional, estos estratos estaban sujetos a políticas públicas contradictorias de bajos precios de producción, subsidios y a la reforma agraria. Si bien el neoliberalismo ha propiciado su aumento debido a la parcialización y la descolectivización, también reforzó su hundimiento o el hecho de que se mantuvieran a flote por sus propios medios. Este campesinado opera en una gran variedad de acuerdos de tenencia, como el dominio absoluto y el comunal; bajo la liberalización, también diversificó sus inversiones en actividades no agrícolas como el transporte, el comercio y los servicios de hospitalidad a pequeña escala. Puede incluir los “cultivos contratados”, en los que los capitales transnacionales contratan directamente a productores de pequeñas mercancías, controlando sus condiciones de producción y proveyendo insumos, estándares y mercados de salida, pero sin tomar título de la tierra o parte en asuntos laborales.
- Finalmente, una *vía rural pobre*, que incluye a las masas completamente proletarizadas y a los campesinos semiproletarizados. Esta trayectoria está caracterizada por las tendencias contradictorias de la proletarización total y la retención o adquisición de un terreno familiar para la pequeña producción de mercancías y para la seguridad social (consistente con el dualismo funcional). El proletariado y semiproletariado rural migran dentro de las áreas rurales, de áreas rurales a centros urbanos y a lo largo de fronteras internacionales; entran en el sector económico informal, tanto rural como urbano, a través de actividades como el

RECUPERANDO LA TIERRA

comercio al por menor, las artesanías y el empleo flexibilizado. A veces luchan, exitosamente, por la recampesinización. Bajo la liberalización, a esta vía se han unido trabajadores despedidos de minas, granjas e industrias urbanas. Es notable que esta gran subclase de desempleados, empleados inestables y desplazados, también sea conocida por proveer soldados para las guerras económicas no emancipatorias y por el control de la producción y del comercio de recursos altamente valorados como el petróleo, la madera, los diamantes y la coca.

Ya hemos notado que la liberalización levantó algunos de los impedimentos para la completa proletarización que estaba operando en las décadas de posguerra. La última y más notable de tales medidas ha sido la “agenda de la pobreza” liderada por el Banco Mundial en los años setenta y encapsulada en el “programa de desarrollo rural integrado”. Este último buscó reforzar el dualismo funcional en sus momentos de crisis. Con la llegada del neoliberalismo de los ochenta y el abandono de la “agenda de la pobreza”, se aceleró la tendencia a la proletarización. No obstante, la acción política directa e indirecta y una serie de catástrofes sociales obligaron a su retorno –como lo anunció el *Informe sobre el desarrollo mundial 1990* (Banco Mundial, 1990)– e, incluso, trajeron de vuelta la reforma agraria en su modelo de mercado. La nueva agenda ha sido menos ambiciosa que su predecesora y virtualmente inefectiva en el reforzamiento del dualismo funcional. En uno de los ejercicios más publicitados de desarrollo social, el de Cardoso en Brasil, la alienación de la tierra ha sido rápida y sólo parcialmente detenida por la reforma agraria, y esto, a cuenta del activismo político rural y no de una política de reforma agraria concertada (Fernandes, pág. 335 de este volumen). Mientras tanto, en otro caso en el que la agenda social neoliberal falló espectacularmente, en Zimbabwe, la recampesinización a gran escala tuvo lugar fuera del control del Banco Mundial. Allí, grandes y pesadas penas fueron impuestas y no ha emergido aún un nuevo patrón de “acumulación desde abajo” (Moyo y Yeros, pág. 181 de este volumen). Estos dos, como muchos otros, deben ser vistos como casos “normales” de cambio agrario en la periferia bajo el neoliberalismo, donde las poblaciones rurales han estado sujetas a las ilimitadas fuerzas del mercado, han luchado para la recampesinización entre otros fines económicos y políticos y, en efecto, han luchado para reproducir el dualismo funcional *por sus propios medios*, con éxito variable e involucrando niveles diferentes y contingentes de apoyo de agencias estatales y no estatales.

Junto con la semiproletarización se produce un florecimiento de las jerarquías sociales que derivan del género, la generación, la raza, la casta

y la etnia, incluso en un grado tan intenso como para producir formas de “dependencia personal” que, propiamente bajo el capitalismo, puede ser llamada “servidumbre humana”. Dicho fenómeno “no capitalista” no pasó inadvertido a los teóricos clásicos: Marx (1976: capítulo 13), por ejemplo, vio el tráfico de niños en Inglaterra como una función de la industrialización; y Lenin (1964: 204-206) observó la persistencia de un servicio laboral casi feudal en Rusia como algo compatible con las necesidades de acumulación de capital. Ambos, sin embargo, subestimaron la propensión del capitalismo a recrear tales fenómenos en el largo plazo. En el mundo contemporáneo, la acumulación desarticulada y su corolario de semiproletarización proveen la base económica estructural para la reproducción de estos fenómenos. Así, en ausencia de una relación objetiva entre la remuneración del trabajo y el desarrollo de las fuerzas productivas, la “monótona obligación” de las fuerzas del mercado es capaz de llevar a los trabajadores asalariados a relaciones de “dependencia personal”, comúnmente mediadas a través de las poderosas jerarquías sociales que, o se fusionan con la clase (por ejemplo, raza, casta) o la atraviesan (género). Pueden aparecer como “no capitalistas” en la superficie, pero están completamente subordinadas al funcionamiento del mercado. Incluso, continúan produciendo formas de “grandes propietarios”, a pesar de la culminación histórica de la “*vía junker*”.

En este volumen, la sinergia entre clase y raza se puede señalar en referencia a México y Zimbabwe (Bartra y Otero, pág. 401; Moyo y Yeros, pág. 181 de este volumen), y entre la clase y la casta en referencia a la India (Pimple y Sethi, pág. 251 de este volumen). En estos casos, tanto la dominación histórica como el proceso de resistencia han fusionado los lenguajes de la clase y los de raza o casta. Consecuentemente, las demandas para la reforma agraria tocaron el corazón de las identidades nacionales y culturales dominantes, a través de las cuales se reproducen las condiciones de la superexplotación. El caso de África es similar, con la diferencia de que allí los temas de clase y raza se han politizado fuertemente por un período más largo (Fanon, 2001; Cabral, 1979)¹³. Las luchas armadas por la liberación nacional contra el colonialismo se iniciaron en una fecha tan temprana como los años cincuenta (comenzando con Argelia y Kenya) y se expandieron al oeste de África (Guinea-Bissau) y al sur de África. El resultado ha sido la obtención de gobiernos de la mayoría a lo largo

13 Es notable que la politización de la clase/raza en América Latina continúa siendo erosionada por la cultura europea dominante. Así, es todavía perfectamente aceptable, aun para los intelectuales líderes, escribir una historia del pensamiento político radical en América Latina, sin un compromiso con el panafricanismo de Frantz Fanon, nacido en el Caribe (por ejemplo en Löwy, 1999).

RECUPERANDO LA TIERRA

del continente, pero dentro de un marco neocolonial caracterizado por el crecimiento de las pequeñas burguesías nativas volcadas hacia el exterior, que defendían nacionalmente el patrón desarticulado de acumulación. Específicamente en el sur de África, el neocolonialismo ha coincidido en gran parte con el ajuste estructural. En estos casos, la política nacional se galvanizó con las luchas clasistas urbanas y rurales, pero también con la creciente diferenciación clasista entre los negros. Esto último ha dado ímpetu a un nuevo período de conflicto intercapitalista entre las emergentes burguesías negras y el capital blanco establecido, ambos orientados hacia el exterior y pujando por la cuestión de la tierra. El resultado fue una bifurcación rígida de la cuestión nacional: por un lado, el capital negro se confrontó con el capital blanco, transformando el significado de la “liberación nacional” en sus propios términos y tomando como rehén a la reforma agraria; por el otro lado, las realidades históricas de las clases y razas persisten, caracterizadas por el dualismo funcional dentro de un marco de supremacía blanca, que incluye los sistemas de tenencia racializados de grandes propietarios, a los que se les dio lugar (Moyo, 2001; Rutherford, 2001; Yeros, 2002b).

La jerarquía del género ha sido tan intrínseca al dualismo funcional como la de la raza. En el último período colonial de África, por ejemplo, el proceso de asegurar el trabajo masculino en minas y estancias se basaba en la política de confinar a las mujeres a las áreas comunales, a través de medios institucionalizados y bajo jefaturas despóticas (Channok, 1985; Schmidt, 1990; Mamdani, 1996). Así, el dualismo funcional tuvo dos pilares discretos, uno femenino y otro masculino. En tanto la jefatura se transformaba de varias maneras y las mujeres entraban masivamente en el mercado del trabajo, continuaban siendo el pilar del dualismo funcional en ambas áreas. Esta situación es extensible a la periferia. De hecho, bajo el ajuste estructural, la jerarquía del género fue completamente instrumentalizada en la medida en que el Programa de Ajuste Estructural (SAP, por su sigla en inglés) disminuyó los servicios sociales y se apoyó en el trabajo reproductivo de las mujeres que, a su vez, se intensificó. Al mismo tiempo, las mujeres se han visto forzadas a diversificar las fuentes de ingresos domésticos. No obstante, los impedimentos tradicionales para acceder a la tierra han persistido y permanecieron sujetos a las relaciones de parentesco patriarcales, mientras que el uso ilegal de la tierra ha proliferado en muchos casos (Moyo, 1995b; Agarwal, 1994, Deere y León, 2001). En el mercado laboral, ellas han entrado en el escalón más bajo, donde permanentemente se les ha negado el estatus de “trabajadoras” (Sylvester, 2000), aun al punto de que su trabajo ha sido considerado como medio de pago de la deuda de los familiares del hombre (Kapadia, 2000). Las

mujeres han recurrido al menudeo, a lo largo de áreas rurales, urbanas y en los límites internacionales, con varias implicancias para la organización familiar (Gwaunza, 1998).

Finalmente, el trabajo infantil se ha intensificado bajo la crisis y ha obligado a los niños a trabajar bajo condiciones altamente precarias y explotadoras. Los niños se han convertido en el pilar básico del dualismo funcional. El fenómeno es demasiado común: se retira a los chicos de la escuela y se los pone a trabajar o al cuidado de otros chicos, mientras los padres cumplen sus tareas laborales o sucumben por el SIDA. Se ha estimado que 180 millones de niños están ocupados en las peores formas de trabajo infantil, principalmente en agricultura, pero también en la manufactura, el servicio doméstico y el “turismo sexual” (ILO, 2002a). Muchos están sujetos al tráfico y a trabajos esclavos, así como al reclutamiento para los conflictos armados (ILO, 2002b). También se estima que hay 13 millones de huérfanos a causa del SIDA, muchos de los cuales se volvieron cabeza de familia. La incidencia más alta de este factor se da en África, donde la pandemia ha reducido el conjunto de la expectativa de vida a los 48 años. Paralelamente, en la totalidad de los países “en desarrollo”, la tasa promedio anual de reducción de la mortalidad de niños menores a cinco años, en comparación con la del período 1960-1990 (UNICEF, 2002), se ha reducido a la *mitad* en el período 1990-2001. No es una exageración decir que desde la “década perdida” a la “década perdida”, los pobres rurales y urbanos se enfrentan al genocidio sistemático.

LA POLÍTICA EN LAS ZONAS RURALES

Si los campesinos no han “desaparecido”, en el sentido de que la pobreza rural continúa parcialmente campesinizada o espera para recampesinizarse, entonces, ¿cuál es su importancia y potencial políticos? Los principales analistas del cambio agrario, incluidos Cristóbal Kay, Henry Bernstein y Alan de Janvry, han minimizado el potencial político de las zonas rurales bien por medio del descuento progresivo de la agencia rural (Kay), peculiarizándola luego del “fin de la reforma agraria” (Bernstein), bien ubicándola en el “acceso a la tierra” bienestarista y en el marco de “alivio de la pobreza” del Banco Mundial (De Janvry). Otros autores, entre los que nos incluimos, tenemos grandes diferencias (Petras, 1997; Petras y Veltmeyer, 2001; Moyo, 2001; Yeros, 2002a). Nuestro argumento se basa en que, a pesar de las inmensas fuerzas económicas y políticas dispuestas contra ella, la pobreza rural ha devuelto el golpe de una forma progresiva, en un número significativo de casos y a lo largo y ancho de los tres continentes. Señalamos que los movimientos rurales actuales se apoyan, por lo general, aunque no exclusivamente, en la táctica de la ocupación masiva de tierras para asegurar su sustento inmediato;

RECUPERANDO LA TIERRA

pero, más todavía, confrontan el poder político sustentado en la tierra y desafían abiertamente al neoliberalismo. De hecho, reivindicamos que las zonas rurales de la periferia se hayan convertido hoy en el lugar más significativo de las políticas antiimperialistas en todo el mundo.

Ésta es una postura que requiere ser caracterizada de diferentes maneras y, lo que es más importante, exige un compromiso *crítico* con los movimientos rurales a la manera en que lo han hecho Petras (1997) y Borón (2003). En lo que sigue, y antes de adentrarnos en un análisis crítico y comparativo, comenzaremos con algunos temas conceptuales pertenecientes a las políticas rurales.

LOS CAMPESINOS Y LA POLIS

La cuestión de la significación política del campesinado tiene sus orígenes en la Europa de finales del siglo XIX. Aquéllos fueron tiempos turbulentos: económicamente, la industrialización se estaba desarrollando muy deprisa, y las transiciones agrarias entre los que la iniciaron tardíamente (Alemania y Francia) sufrían la competencia encarnizada de los Estados ex coloniales; políticamente, el sufragio masculino universal se estaba expandiendo. Así, el asunto viró hacia la reflexión de cómo manejar las zonas rurales en el curso de la transición o, de otra manera, de cómo ganar su apoyo para la transformación socialista (Engels, 1953a). Para los socialistas, la cuestión se impuso de la forma más conmovedora durante el aislamiento y la derrota de la Comuna de París. Mientras tanto, el conflicto intercapitalista estaba alimentando la competencia entre los Estados y colocando al imperialismo en un nuevo camino, marcado por la división de África. De este modo, la preocupación por las zonas rurales se transplantó también a las colonias, donde tomó la forma de la “cuestión nativa” (esto es, cómo organizar el proceso laboral y al mismo mantener el control geográfico, político y moral sobre los “nativos”). Desde entonces, los campesinos han jugado roles importantes en las progresivas transformaciones sociales, desde en las revoluciones socialistas del siglo –notablemente, Rusia, Cuba, China y Vietnam– hasta en las luchas por la liberación nacional y republicana (desde en México en la década de 1910 hasta en la India en los cuarenta y, en África, durante los tardíos los noventa). En este sentido, las condiciones subjetivas del campesinado están hoy mucho más avanzadas que el desarrollo de las fuerzas productivas. Consecuentemente, la teoría política del campesinado ha sufrido, también, transformaciones en ambos tipos de teóricos, los burgueses y los marxistas.

Como hemos visto, en el período neoliberal, las zonas rurales han tenido un papel clave en la absorción del proceso de ajuste global. Mientras la teoría económica del ajuste estructural fue conducida en los términos

del “prejuicio urbano” –por el cual los “trabajadores urbanos” se separaron de los “campesinos rurales” y se culpó a los primeros por la pobreza de los últimos (Bates, 1981; Banco Mundial, 1981)– la teoría política se desarrolló, más o menos, como un espectáculo secundario. Ésta se nutrió, en los ochenta, de los “neoinstitucionalistas” y otros (North, 1981, 1990; Bates 1989a, 1989b; Diamond, 1987), pero sus pretensiones democráticas fueron puestas al descubierto por las llamadas abiertas a la represión de las fuerzas populares (Bates, 1981: 131; Lal, 1997: 33). Mas luego, la tregua dio lugar a una tormenta de teorías políticas. La proliferación de la protesta social a nivel mundial se combinó con el colapso del bloque soviético y el desafío desarrollista en Asia para “traer de vuelta al Estado” y, eventualmente, cambiar el énfasis de las SAP, “obtener los precios justos” y hasta “obtener la *política* justa” (Yeros, 2002b).

El nuevo debate político se comprometió con la protesta social, desenterrando la noción de “sociedad civil” y ensalzando sus virtudes, pero también despojándola de su potencial transformador. La “sociedad civil” –el dominio designado como la forma y el contenido “apropiado” de la política bajo el capitalismo– vino a oponerse conceptualmente al “Estado”, de una forma tal que, en la práctica, la oposición política al Estado y particularmente a su entremetimiento en el mercado se convirtieron en el *sine qua non* de la expresión política civilizada. Luego, la política “correcta” sería “amigable con el mercado”. La primera y obvia consecuencia fue la despolitización de la base clasista de la sociedad civil –en palabras de Marx, la ecuación del “ser humano real” con el “ser humano privado” (1975: 148)– y la relegación de los asuntos clasistas fundamentales al terreno “incivilizado”. Una segunda consecuencia de esta coyuntura fue la *urbanización* de la teoría democrática (es decir, el hecho de centrar la investigación en el área geográfica donde prevaleció el activismo político formal, organizado y civilizado, como en la mayoría de los sindicatos y de las ONG que crecían de la noche a la mañana). Una tercera consecuencia, que se deduce de las anteriores, fue la reafirmación del *eurocentrismo*: (a) la despolitización de las relaciones centro-periferia por medio del posicionamiento de un Estado genérico, no diversificado, desprovisto de un contexto, de una historia o de relaciones internacionales; (b) la negación de la especificidad “semiproletarizada” de la periferia, al asumir una concepción industrializada del “trabajador”, de aquel que está urbanizado, asentado, sindicalizado y, últimamente, insertado en los canales formales (o “tripartitos”) de expresión política a la vez que, agregamos nosotros, esto mismo se estaba transformando en las sociedades industrializadas. Profundizamos este tema más abajo.

Estas problemáticas han intensificado una vez más la controversia histórica sobre la relación entre la democracia y el capitalismo. Con el cambio del siglo XIX en Europa, generalmente se creyó que la

revolución democrático-nacional era una plataforma importante tanto para la expansión del capitalismo industrial como para el fortalecimiento de la clase trabajadora. Engels (1953b), por ejemplo, elogió célebramente el sufragio universal por las grandes ganancias políticas que éste le ha provisto a las clases trabajadoras, especialmente en Alemania. Más recientemente, ha sido argumentado por Ellen Meiksins Wood (1995) y Borón (2001) que existe una “contradicción” o una “incompatibilidad” inherente entre el capitalismo y la democracia, que los logros políticos y sociales del último siglo derivaron de las mismas luchas populares y no de la lógica capitalista de funcionamiento que está constantemente tratando de desmontar y limitar los logros sociales. En respuesta, Petras y Veltmeyer (2000) han suavizado esta postura, teorizando la relación en términos “instrumentales”, esto es que el capitalismo sólo puede tolerar la democracia cuando es compatible con la reproducción del sistema de lucro. De nuestra parte surgen dos puntos. El primero es que no podemos teorizar apropiadamente acerca de la democracia nacional a un nivel que no permita identificar claramente la relación centro-periferia, dado que entre el sistema de Estados jerárquicamente estructurados, las economías políticas periféricas se relacionan subordinadamente con las del centro. Mientras el capitalismo exhibe globalmente una tendencia orgánica a la crisis económica, la crisis en la periferia es más frecuente –aun cuando el centro esté en bonanza, como en los años cincuenta y sesenta– y se acompaña con lapsos frecuentes de autoritarismo y represión. Los Estados centrales no necesitan recurrir a medidas drásticas similares en tanto que, y en la medida en la cual, puedan desplazar la crisis fuera de sus fronteras. En este sentido, la democracia es más “estable” en el centro y más “inestable” en la periferia.

Segundo, en la periferia, donde la expansión industrial ha estado esforzándose por mantenerse y mejorar, y donde la autodeterminación nacional ha sido negada, no podemos hablar apropiadamente de revoluciones democrático-nacionales totales como si efectivamente hubiesen tenido lugar. Han sido parciales y tentativas, aun en los Estados en los que se han experimentado significativas transformaciones industriales. En tanto todos los Estados periféricos pueden haber logrado la independencia jurídica, y muchos de ellos el sufragio universal, todos han continuado operando dentro de un patrón de acumulación fundamentalmente desarticulado, que diacrónicamente ha estrechado las posibilidades electorales y fracasado, incluso, en el cumplimiento del mínimo de las demandas sociales modernas, a saber, las garantías de los costos de la reproducción social. Así, la violencia estatal contra las fuerzas populares es endémica, la suspensión de los procedimientos democráticos recurrente, y las relaciones sociales “no capitalistas” de producción se

encuentran libres para germinar. No es accidental que la rama de la ciencia política de la teoría del desarrollo haya tenido semejante interés perenne en la “democratización” –desde los primeros teóricos de la modernización hasta el presente– para la que el problema ha consistido en resolver, precisamente, cómo obtener esa condición faltante, la burguesía estable del centro, sin recurrir a la contradicción centro-periferia.

Bajo esa luz, argumentamos que representa una mayor recompensa investigar no sólo las relaciones sociales domésticas de la ciudadanía (contra las nociones meramente procedimentales de la democracia), sino también sus relaciones internacionales, de modo que el significado de la soberanía externa se encuentre teorizado adecuadamente. El principio moderno de la soberanía popular es una moneda de dos caras, con un lado interno y otro externo, por lo que la negación de la soberanía externa es, al mismo tiempo, la negación de la soberanía interna. Ello también significa que mientras la *polis* en su unidad más elemental permanece siendo el Estado-nación, éste sólo es entendido dentro de la comunidad de Estados-naciones (la *polis* de las *poleis*). El hecho de que el sistema político internacional no asuma las características burocráticas obtenidas en el Estado-nación no es un argumento para su relegación al estatus de “no comunidad”¹⁴. Tampoco lo es el hecho de que sea jerárquicamente estructurado, negando su sustancia ética, pues ésta es la demanda para la igualdad entre los Estado-nación.

El marco planteado más arriba nos permite identificar los determinantes globales de la “civilización” en la que reside la ciudadanía. También nos habilita para especificar la falsedad de las “transiciones democráticas” en el período neoliberal y para enfatizar la significación continua de la revolución democrático-nacional. Y en esta permanencia hay una continuidad fundamental en la estructura ideológica y económico-política del orden mundial, que ha sobrevivido al período del imperialismo formal: aunque la raza, como un principio del orden político, haya sido abolida, su eurocentrismo persiste en la práctica en una forma desbiologizada y culturalizada (Amin, 1989). El imperialismo de posguerra hace exclusivas demandas a valores universales (“civilización”) como una cuestión de rutina; se arroga repetidamente el derecho de determinar los asuntos de la comunidad internacional y reproduce el proceso de desarrollo y subdesarrollo en términos de “imitación” exitosa

14 En la disciplina de las Relaciones Internacionales, la tradición “realista” dominante, como el portavoz académico del imperialismo de los Estados Unidos, ha sostenido sin cesar tal argumento (Waltz, 1979), en tanto versiones burguesas más “normativas” del orden mundial han sido ofrecidas por los realistas, liberales y posmodernistas “ingleses” (Bull, 1995; Linklater, 1998; Walker, 1988), así como también por neogramscianos (Cox, 1987).

RECUPERANDO LA TIERRA

o de un testarudo “error de imitación” (lo último típicamente atribuido a “rasgos” nacionales, sociales y políticos). Bajo el imperialismo, el significado de “desarrollo” puede sufrir cambios en el tiempo, pero no su eurocentrismo, que continúa “asociado con su alma maldita: el racismo que no se erradica” (Amin, 1989: 77).

Si nos detenemos en la era de posguerra, a través de los períodos neoliberales y de construcción nacional, observamos que el “desarrollo” ha conformado, consistentemente, los requerimientos de la acumulación extrovertida. Sin embargo, también vemos que de un período al siguiente ha habido una reducción del espacio político “civilizado”: al tiempo que los enemigos de la civilización acostumbran a ser las fuerzas “inamistosas de la propiedad”, y los nacionalistas y socialistas radicales buscan mantener en la economía en la endogamia, los enemigos de hoy son “inamistosos con el mercado”, una banda de bárbaros mucho más amplia. En ambos casos, los bárbaros han sido rutinariamente sujetos a tácticas de cooptación y represión por las agencias de los Estados imperiales y neocoloniales, con la ayuda del sindicalismo internacional (Yeros, 2002b). Donde surgieron desarrolladas dictaduras militares –para suspender los procedimientos democráticos formales– ello ha sido la culminación de una incontrolable lucha de clases.

Finalmente, observamos que con el comienzo del siglo XXI la civilización ha ganado algunas nuevas características. Con la Guerra Fría ya dejada de lado y una profundización de la crisis global como futuro, las políticas progresistas se han encontrado a sí mismas pisando las coordenadas militarizadas de una “guerra contra el terror”. Esto se sostiene ahora tanto en el centro como en la periferia. En este sentido, también observamos que la erosión de los derechos democráticos en el centro y la militarización de sus políticas extranjeras son simultáneas a una nueva fase de inestabilidad en la periferia. A su vez, es notable el surgimiento de un movimiento “antiglobalización” de envergadura mundial con un nuevo *modus operandi*, aunque aún sin una clara dirección política, sin un entendimiento clasista o sin una resolución acerca del eurocentrismo.

¿Dónde deja esto a los movimientos rurales? En primera instancia debemos reconocer que, si bien la valoración clásica en el siglo XIX del campesinado como aislado, conservador y reaccionario es justificable, no es exacta en este momento. El campo ha sido totalmente transformado en el siglo XX y se ha integrado completamente, no sólo a la economía capitalista, sino también a la dialéctica humanista de la conciencia, desde las movilizaciones socialistas y nacionalistas del pasado hasta los movimientos feministas y del medio ambiente presentes. Contrariamente a los enfoques “localistas” de la política rural (Scott, 1985), ya sean populistas o relativistas, los lenguajes morales modernos actuales

son de envergadura global, infunden nociones globales de “dignidad” y “razón” y son la base moral de la protesta social mundial. En segundo lugar debemos admitir que, en oposición a las vastas teorías de posguerra acerca del “comportamiento” político de los campesinos, el campo no exhibe tendencias de comportamiento “esenciales” de ningún tipo (como, por ejemplo, las que implican la preocupación con las “formas de resistencia cotidianas”). Los pobres rurales se involucran en una variedad de políticas. Votan en elecciones locales y nacionales, se comprometen en actos de desafío desorganizados y encubiertos (ocupación sin permiso, usurpación, caza o pesca en zonas vedadas, robo), participan en movimientos, públicos y organizados, de ocupación de tierras y también entran en los sindicatos. Pelean en rebeliones, revoluciones y en guerras de emancipación. Sus políticas pueden ser progresivas o regresivas, ellos pueden bien conformar a las demandas de la sociedad civil, bien confrontarlas completamente.

El tercer punto es que debemos asumir las ambigüedades de la conciencia de los trabajadores campesinos y los problemas de la organización política que les pertenecen. Comentarios recientes de importantes analistas de “movimientos sociales globales”, “nuevos internacionalismos”, o la “multitud” (Munck y Waterman, 1999; Cox, 1999; O’ Brien et. al., 2000; Hardt y Negri, 2000) dejan mucho que desear. La semiproletarización produce una fuerza de trabajo en movimiento, dentro de las áreas rurales, a lo largo de la división urbano-rural y de los límites internacionales. Esta fuerza de trabajo es, asimismo, pobre y abundante, relativamente insalubre, analfabeta y desprovista de poder de mercado. Ni los campesinos, ni los proletarios, ni los semiproletarios tienen motivos de queja que surjan de ambos, del cultivo familiar (escasez de la tierra, inseguridad de la tenencia) y del lugar de trabajo (salarios y condiciones de empleo). Sus lenguajes políticos son frecuentemente “étnicos” o “nacionales” y, mientras pueden ser poderosas fuentes de movilización, ellos no son adecuados en sí mismos para la tarea de articular los intereses de clase más amplia y defenderlos sobre una base sustentable.

Mientras tanto, una plétora de organizaciones busca “hablar” a los pobres rurales, enlistarlos en sus filas o asegurarse su apoyo: desde las ONG y las organizaciones eclesiásticas hasta partidos políticos, sindicatos, uniones de agricultores y movimientos de gente sin tierra. Si la teoría neoliberal de la “sociedad civil” gravitó naturalmente en las áreas urbanas en los tempranos años noventa, en la práctica, las agencias de desarrollo global y las ONG penetraron en las áreas rurales con “proyectos” y donaciones. Esta actividad se expandió bajo el ajuste estructural, en la medida en que las responsabilidades sociales de los Estados se achicaron y las agencias de desarrollo global encontraron nuevos y voluntariosos socios en las ONG, que se apropiaron de esos Estados.

RECUPERANDO LA TIERRA

Como ha sido bien demostrado, (Petras et al., 1997; Moyo y Romadhone, 2002), las ONG han servido para despolitizar y cooptar los agravios rurales y convertirlos en proyectos de bienestar; se mantienen a sí mismas en actividad por medio de fondos externos y sirven, además, como los nuevos vehículos del “gobierno indirecto” (Moyo, 2001).

A los sindicatos no les ha ido mejor. Durante todo el período de la Guerra Fría los sindicatos periféricos lucharon para mantener la independencia, pero la fría realidad de la insolvencia económica crónica (derivada de la pobreza de sus miembros) y la represión política les impusieron dos alternativas: aceptar el patronazgo de los Estados (usualmente por medio de partidos políticos y movimientos nacionalistas), o de centros sindicales internacionales, mayoritariamente del International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) de base occidental, así como también, en menor grado, del World Federation of Trade Unions (WFTU) respaldado por la Unión Soviética. Una importante consecuencia fue el fracaso de los sindicatos para entrar en las alianzas clasistas independientes con los movimientos rurales o para enlistar la totalidad del semiproletariado y articular sus agravios duales, rurales-urbanos. Con el comienzo del ajuste estructural y el deterioro económico, los sindicatos perdieron sus miembros, con lo cual sus bases financieras, crónicamente débiles, se debilitaron aun más, y las fuentes de su dependencia de los patrones se intensificaron. Con el colapso del bloque Soviético y con la disolución del WFTU, los sindicatos o han sucumbido a la liberación de los Estados o se han apiñado en torno de la agenda “amigable con el mercado” del ICFTU. Consecuentemente, han sido sistemáticamente “civilizados”, se han retirado todavía más del proyecto campesino-trabajador y, de este modo, han aumentado el vacío político en las zonas rurales.

Los sindicatos de granjeros (en particular los de pequeños granjeros, de los que nos ocupamos aquí) no han escatimado la “civilización”, excepto que ellos han sido civilizados por los Estados y no por los movimientos internacionales. Dos características han sido prevalecientes. La primera es que, de forma rutinaria, los Estados han incorporado a los sindicatos de granjeros a sus estructuras, usándolos como ramificaciones del Estado en la prosecución de la política agraria o industrial. De manera notable, esta práctica se ha caracterizado por las tácticas de división y dominación respecto de los trabajadores-campesinos. A través de ellas, los “intereses del campesinado” fueron tratados separadamente de los “intereses del trabajador” y los sindicatos de granjeros separadamente del conjunto de los sindicatos. La segunda característica es que los sindicatos de pequeños granjeros han caído, con frecuencia, como rehenes de elementos burgueses, renunciando a la defensa de las cuestiones de la tierra y a las políticas de desarrollo que apuntaban a la acu-

mulación de los pequeños propietarios. Esto ha sido otra vez evidente en términos generales (ver los trabajos de México y Zimbabwe de este volumen), aunque particularmente notorio en la India contemporánea (Banaji, 1995; Brass, 1995), donde a pesar de los enormes problemas agrarios, los sindicatos de granjeros no adoptan la causa agraria y los movimientos de ocupación de tierras son relegados al margen de la vida política (Pimple y Sethi, pág. 251 de este volumen). Nuevamente, el resultado arroja una profundización del vacío político en las zonas rurales en una época de deterioro económico.

Los partidos políticos de izquierda han tenido relaciones ambiguas con el campo, aunque, en general, han sucumbido a la lógica del capital, sea para obtener el poder del Estado o después de obtenerlo. Abundan ejemplos en el siglo XX, e incluso casos que nos conciernen aquí de forma inmediata, como el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, el partido Unión Nacional Africana-Frente Patriótico (ZANU-PF) en Zimbabwe, y el Congreso Nacional Africano (ANC) en Sudáfrica. El fenómeno estatista ha sido lo suficientemente común como para haberle dado un aumento en los noventa a una estrategia “antipolítica” y “antiestatista”; esto ha sido proclamado más formalmente por los zapatistas y continuado recibiendo la justificación teórica de John Holloway en su libro *Cambiar el mundo sin tomar el poder* (2002). Pero esta estrategia ha tenido orígenes problemáticos, en tanto la disolución sumaria del partido político y del poder del Estado ha fallado en la resolución de los enigmas históricos de la izquierda. Abordaremos este punto más adelante, aunque aquí es suficiente hacer notar que mientras la estrategia identifica correctamente las poderosas dinámicas condicionantes de la *raison d'état*, se queda corta con una identificación similar de la *raison* de la sociedad civil y con los obstáculos para su transformación (Borón, 2003). De hecho, la alternativa propuesta de “demandar un cambio sin tomar poder”, si es entendida en sentido estricto como una forma de praxis, aparece como una mera receta para el reformismo. Argumentamos nosotros que la lección a ser aprendida no es que el partido político y el poder del Estado deben abstenerse doctrinariamente, sino que, como siempre, la tarea es construir movimientos de trabajadores-campesinos autosuficientes, que puedan resistir el imperialismo en los niveles tanto de la sociedad civil como del Estado.

La presente conjetura, que sostiene que la sociedad civil ha sido transformada en una herramienta del neoliberalismo –ya sea por medio de la red de “ayuda para el desarrollo” o por medio del sindicalismo internacional– es una de las más desfavorables. La sociedad civil, tanto como los sindicatos conformistas, los sindicatos de granjeros y las ONG han sido visiblemente incapaces de expresar los agravios duales, rurales-urbanos, del semiproletariado. En este contexto, el campo

RECUPERANDO LA TIERRA

ha sido librado a sus propios recursos, en gran medida por la política (“cotidiana”) de bajo perfil y, con frecuencia, explosiva; los casos de la India, Ghana y Zimbabwe anteriores a 1998 y analizados en este volumen demuestran este punto. Junto con muchos otros, estos casos han contenido un potencial tanto progresivo como regresivo. En la sección siguiente se argumentará que el potencial progresivo es cultivado, en la actualidad, por los movimientos rurales, cuyo énfasis se ubica en la acción directa más que en las políticas electorales. Sin embargo, se mostrará que en un caso importante, en Zimbabwe, un movimiento rural “libremente organizado” obtuvo la reforma agraria radical directamente a través del partido gobernante y del Estado, lo que apareció como única alternativa viable para las limitaciones sofocantes de la sociedad civil. En otro caso, el de las Filipinas, la acción directa sobre la tierra, combinada con el posicionamiento de los elementos reformistas dentro del Estado –la “estrategia *bibingka*” dual– se realizó para ejercer una presión a través de un círculo significativo de reformas agrarias en los noventa (Borras, 1998, Feranil, pág. 273 de este volumen). Se argumentará, en líneas más generales, que el objetivo del poder estatal debe permanecer a la vista, pero no llevado a cabo a expensas del trabajo organizacional de base, ya que la falta contemporánea de un plan claramente articulado para la toma del poder es una debilidad de los movimientos rurales y no una fortaleza.

Antes de aproximarnos al análisis de los movimientos rurales contemporáneos notamos que, a mediados de los noventa, el prejuicio urbano de la teoría democrática liberal estaba siendo superado. El Banco Mundial había relanzado en esa época su agenda de reforma agraria, y lo central fue el intento de cooptar los agravios rurales en la adquisición de la tierra y el programa de redistribución (al cual volveremos) del “iniciado-por-la-comunidad y asistido-por-el-mercado” (CIMA). Observamos también que, desde los noventa, un extenso cuerpo de investigación y análisis ha sido producido por teóricos marxistas, quienes procuraron dar coherencia a las dimensiones políticas de la agenda de investigación, incluyendo a Banaji (1995), Brass (1995), Mamdami (1996), Petras (1997), Borras (1998), Bernstein (2000), Petras y Veltmeyer (2001), Deere (2003), Moyo (de próxima aparición), Yeros (2002b) y Borón (2003).

¿NUEVOS MOVIMIENTOS RURALES?

Surge entonces la pregunta de cómo etiquetar a los movimientos rurales contemporáneos. Aquí nos interesaremos por los movimientos que están *organizados* en diferentes grados –incluyendo a aquellos que están en proceso de organización– y tienen una agenda de reforma agraria *progresista*. Tales movimientos han proliferado en las últimas dos décadas y

constituyen importantes fuentes –en muchos casos, el núcleo– de políticas de oposición dentro de sus respectivos Estados.

En un artículo de gran importancia, James Petras (1997) argumentó que hay una “tercera” ola de políticas de izquierda en América Latina, que comprende movimientos que han llenado el vacío político neoliberal de los noventa y cuya fortaleza ha sido el campo y las zonas rurales (ver también Petras y Veltmeyer, 2001). Petras lo caracteriza como un “nuevo campesinado”, cuyas características resumimos a continuación:

- Su *base social* es una mezcla rural-urbana de pequeños cultivadores y proletarios, incluso de semicupados y desempleados urbanos;
- Su *dirección* está conformada por “intelectuales campesinos”, en oposición a los intelectuales universitarios; evitan los cultos a la personalidad y operan bajo el principio de que “cada miembro es un organizador” más que bajo las fórmulas jerarquizadas del pasado;
- Sus *tácticas* se caracterizan por la acción directa, mayormente, en la tierra, pero también en otros espacios públicos y privados;
- Su *estrategia* es “antipolítica” y se define por la autonomía de los partidos políticos y del Estado, pero también por la prosecución de alianzas estratégicas con partidos políticos, sindicatos y otros movimientos sociales;
- Sus *ideologías* tienden a fusionar el lenguaje marxiano con los lenguajes político étnico/raciales, y se vinculan cada vez más con el género y con la sensibilidad ecológica;
- Son *cosmopolitas*, cultivan una visión internacionalista y se comprometen en los debates y las alianzas internacionales por cuenta propia.

Esto implicaría, por cierto, una substantivamente “nueva” política rural. No obstante, es justo decir que la mayoría de los movimientos rurales latinoamericanos, más que encarnarlo, suscribirían este modelo como un *ideal*, mientras que algunos no aprobarían gran parte del mismo y otros adoptarían algunos aspectos en contra de su voluntad. Agregamos aquí que el modelo no es específico de América Latina: tiene contrapartidas en Asia y África. Procederemos, pues, a analizar cada característica separadamente.

Base social. Este concepto es similar en toda la periferia y comprende a semiproletarios, desempleados rurales y proletarios urbanos, tanto hombres como mujeres. Supone permanecer entre dos aguas

en la división urbano-rural. Los movimientos rurales contemporáneos mundiales se están convirtiendo en un centro de organización para las masas de la pobreza rural, descartadas por el neoliberalismo.

Liderazgo. Observamos el fenómeno de los “intelectuales campesinos”, particularmente en movimientos que han proclamado su autonomía de los partidos políticos y sus intelectuales asociados. Éstos han procedido a cultivar, por sus propios medios, estructuras nacionales y locales durables y más amplias, para poner en movimiento procesos independientes de toma de conciencia. Ello es más evidente en América Latina, pero también en las Filipinas, donde los movimientos rurales de los noventa se han separado del Partido Comunista. Asimismo, en Sudáfrica se formó, en 2001, el Movimiento Popular de los Sin Tierra. Por contraste, en Zimbabwe, donde la movilización se produjo mayormente dentro del partido gobernante, la dirección ha sido provista por la Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional, sus sucursales locales y sus cuadros dentro del Estado; allí, muchos veteranos de guerra han estado entre los pobres rurales y, por lo tanto, entre los “intelectuales campesinos”, pero no ha sido la idea establecer una generalización para crear estructuras democráticas durables con educación política sistemática. Deberíamos notar, sin embargo, que aun entre los movimientos “antiestatales”, los “campesinos intelectuales” no son un fenómeno exclusivo. El mantenimiento de un compromiso con el espíritu del “campesinado intelectual” debe ser visto como un desafío continuo.

Tácticas. La predominancia de la acción directa sobre la tierra es un desarrollo muy significativo y extendido. Está parcialmente asociada con la desavenencia con los partidos políticos, aunque no enteramente –como se muestra en el caso de Zimbabwe y, de hecho, en la historia más larga de las ocupaciones de la tierra alrededor del mundo–, incluyendo las acciones deficientemente organizadas y poco destacadas, así como las mejor organizadas y más trascendentes. La novedad es que, bajo el neoliberalismo, muchos movimientos rurales organizados han ubicado, a conciencia, la ocupación de la tierra en el centro de su arsenal de tácticas políticas y, más específicamente, por medio de las ocupaciones han enfrentado las reformas agrarias basadas en el mercado, bien obligándolas a trabajar más efectivamente o desplazándolas enteramente. Hemos visto el uso organizado de las ocupaciones de la tierra, entre otros países, en Brasil, Filipinas, Indonesia, Tailandia, India, Sudáfrica y Zimbabwe. (Abordaremos las tácticas de ocupación de la tierra en la sección siguiente). Hay importantes excepciones, como las que se encuentran entre los movimientos rurales que optaron por las luchas armadas, a saber, los zapatistas en México (ver Bartra y Otero, pág. 401 de este volumen) y la FARC en Colombia (Ampuero y Brittain, pág. 377 de este volumen).

Estrategia. El fenómeno “antipolítico” es también un desarrollo muy significativo y tiene un impacto en las dos características precedentes. La autonomía de los partidos políticos y del Estado es mayormente observada en América Latina, pero también en Asia y África. Sin embargo, el asunto de la “autonomía” en su sentido holístico, que incluiría los sitios “no estatales” del poder imperial como las “políticas de oposición”, no está conceptualizado adecuadamente. Así, en la medida en que la nueva estrategia ha estado preocupada por la “autonomía” ganada, el récord ha sido más problemático. Romper con el Estado ha significado que los movimientos rurales hayan tenido que entrar en las esferas de las ONG, sindicatos e iglesias, donde operan fuerzas sistemáticas de cooptación no menos intensas. Entre los que han perseguido una estrategia de autonomía de los partidos políticos y del Estado están los movimientos rurales de las Filipinas, India, el recientemente fundado movimiento en Sudáfrica, los zapatistas en México y el MST en Brasil. Por contraste, el movimiento que ha evitado a la sociedad civil y que ha perseguido la acción directa por medio del partido gobernante y el Estado es el de Zimbabwe. Una mirada más profunda de los casos particulares de México, Zimbabwe, Brasil y las Filipinas puede ser instructiva respecto del problema de la autonomía en su sentido holístico.

Los zapatistas lanzaron una lucha armada contra el Estado en 1994, y en ese tiempo se proclamó una visión para la transformación socialista (Petras, 1997; Otero, 1999; Bartra y Otero, pág. 377 de este volumen). A pesar de ello, una rápida confrontación y un rodeo militar tuvieron sus víctimas, y el movimiento fue obligado, progresivamente, a limitar su visión política. Comenzó a trasladar el énfasis desde el lenguaje clasista al de los derechos indígenas se focalizó en la reforma democrática, cortejó a la sociedad civil e incluso ofreció una renuncia a la lucha armada. Los resultados de la sublevación combinada y la transición civil se han mezclado: por un lado, los zapatistas han inspirado y vigorizado las políticas de oposición en México –de hecho, en toda América Latina–; por otro lado, la dura realidad de no haber “tomado el poder” se ha traducido en meras promesas de reforma, que aún no han sido deliberadas y no parece que lo serán en breve. En este caso, es evidente que los zapatistas han tenido que reconciliarse consigo mismos en una estrategia “antiestatista”, más que a la inversa.

El caso de las Filipinas es bastante semejante (ver Feranil, pág. 273 de este volumen). Los movimientos rurales radicales de los ochenta, que tenían vínculos cercanos con el Partido Comunista y su ala armada, fueron vencidos y dispersados por la campaña de “guerra total” del gobierno de Aquino. El exitoso período de los noventa vio la reconfiguración de los movimientos rurales, la renuncia a la lucha armada y la prosecución de la construcción de alianzas dentro del marco

RECUPERANDO LA TIERRA

constitucional, aunque cerca de los “límites”. La diferencia aquí ha sido el éxito calificado de la “estrategia *bibingka*”, un acercamiento dual para implantar elementos reformistas dentro del Estado, mientras se persiste con las ocupaciones de tierras y campañas. La estrategia *bibingka* obtuvo una ronda significativa de reformas agrarias en los noventa. De todos modos, la correlación de fuerzas, nuevamente, se ha ido modificando: los reformadores fueron desplazados y a la estrategia de los noventa se la calificó como obsoleta. En cambio, los movimientos rurales buscaron una nueva táctica y se inclinaron, cada vez más, hacia el lenguaje de los “derechos humanos” más que al de la transformación social.

Zimbabwe ofrece un contraste. Se trata del caso de un movimiento militante que rompió con la sociedad civil, que actuó directamente por medio del Estado y alcanzó una reforma agraria radical, aunque fracasó en sostenerse y en defender sistemáticamente sus intereses (ver Moyo y Yeros, pág. 181 de este volumen). El período poscolonial de Zimbabwe se ha caracterizado por la clausura de las demandas reales, tanto en los niveles del Estado como en la política de oposición. También por ocupaciones de tierra desestructuradas y de bajo perfil, que se expandieron bajo el ajuste estructural. El movimiento sindicalista (ZCTU) fue la única fuente de esperanza durante un corto período, en los tardíos años ochenta y principios de los noventa, en la medida en que tomó una postura militante contra el neoliberalismo y proclamó la unificación de los trabajadores-campesinos como una cuestión organizacional. Sin embargo, a mediados de esa década, el ZCTU fue cooptado dentro del dominio civil por una combinación de deterioro económico neoliberal, la represión estatal y el patronazgo del sindicalismo internacional. Ya hacia finales de la década, los sindicatos estaban operando dentro de un marco internacionalmente respetado de “buena gobernabilidad”, que a su vez fue impermeable a las cada vez más numerosas demandas militantes rurales. Fue durante este tiempo que la Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional comenzó a agitarse dentro del marco del partido gobernante, a los efectos de la re-radicalización nacional y de la reforma agraria. Sin embargo, el movimiento ha sido significativamente modernizado por el partido gobernante, a la burguesía nativa se le ha permitido ganar una importante posición sobre la tierra, y los pobres rurales enfrentan, ahora, un nuevo desafío dentro de una tangible estructura organizacional propia.

Brasil, finalmente, es un caso en el cual la cuestión de la autonomía se posiciona en una coyuntura crítica. En el período de “redemocratización” luego del gobierno militar, el MST cultivó cerrados vínculos con el PT, al tiempo que mantenía su independencia y entraba en una alianza estratégica con la central sindical (CUT). No obstante, a lo largo de los noventa, tanto el CUT como el PT sufrieron la cooptación y la acomodación,

al punto de aceptar los dictados del neoliberalismo después de obtener el poder estatal. Paralelamente, desde la victoria electoral del PT, el MST ha estado en un proceso de incorporación en las estructuras estatales, en tanto el gobierno de Lula ha fracasado en la formulación de una agenda de reforma agraria diferente de la de su predecesor. Así, la relación del MST tanto con el Estado como con sus alianzas tradicionales se halla cuestionada, como también lo está la misma identidad del MST. El proceso, sin embargo, abunda en contradicciones que están lejos de ser resueltas, ya que el MST ha intensificado su campaña de ocupación de tierras durante el gobierno de Lula, introduciéndose en un nuevo período de confrontación rural. La cuestión de quién le dará qué órdenes a la policía y de qué se hará con las milicias contratadas por los terratenientes –ambas cuestiones fundamentalmente “estatales”– impactará, indudablemente, en la dirección del cambio.

Podemos concluir, entonces, que la mayoría de los movimientos rurales ha adoptado, de una u otra manera, la estrategia “antipolítica”, aunque de ninguna forma ha concretado su codiciada “autonomía” de la acción política. Los objetivos se mantienen hasta obtener esa rara libertad, la autonomía genuina del imperialismo, en niveles tanto estatales como de políticas de oposición, con la finalidad de cultivar una base social fuerte y políticamente consciente y de articular una clara estrategia para la toma del poder. Ésta tendrá, por necesidad, especificidades nacionales y, contra Holloway, no debería ni someterse ni proclamar una aplicación “universal”.

Ideología. Ésta sigue siendo una dimensión débil de los movimientos rurales debido, parcialmente, a un giro hacia la derecha de los partidos políticos y sus intelectuales asociados y a los desacuerdos resultantes entre movimientos y partidos rurales. Pero un desarrollo positivo ha sido, precisamente, la emergencia de un “intelectual campesino”, observable en la fusión del lenguaje marxiano con el lenguaje étnico/racial (en efecto, la incipiente indigenización del marxismo). Esto ha sido evidente en Bolivia y en México, así como también en otros países. A pesar de ello, la indigenización del marxismo ha sido inestable, como demuestra el caso de los zapatistas, que aún no se ha consolidado a sí mismo. En África, donde el marxismo indigenizado ha tenido una historia más larga, los movimientos rurales contemporáneos han quedado atrás. El LPM en Sudáfrica ha roto con el partido nacionalista (ANC), que sucumbió a las fuerzas burguesas sólo para terminar luchando contra el “multirracialismo” superficial de la sociedad civil, donde los intelectuales blancos de clase media continúan ejerciendo una fuerte influencia. Al mismo tiempo, el movimiento liderado por los veteranos de guerra en Zimbabwe rompió con la sociedad civil y operó dentro de los parámetros vacilantes de la burguesía y pequeña burguesía del movimiento

nacionalista. Aunque el nacionalismo siempre ha tenido un fuerte potencial para movilizar y emancipar y nutrió la posibilidad de una revolución democrática nacional, en sí mismo no ha sido suficiente para los intereses de la clase trabajadora a largo plazo.

Otros signos positivos en América Latina son la nueva sensibilidad ecológica y el reconocimiento del patriarcado como un problema fundamental (Stephen, 1996; Petras, 1997; Deere y León, 2001; Deere, 2003). Estas perspectivas son quizá más evidentes en Brasil y en México. En relación con el género, los movimientos rurales han adoptado, a fines de los años noventa, una política consciente de equidad. Ello dio sus frutos en términos de movilización y democratización interna, tanto como en la presión ejercida contra el Estado para la inclusión de una legislación específica de género en el proceso de reforma agraria. En Zimbabwe, por contraste, el movimiento de ocupación de tierras se ha alejado de una política género-sensible, a pesar del hecho de que la mujer ha participado, en gran número, de las ocupaciones. En este caso, las fuertes corrientes patriarcales del movimiento nacionalista siguen siendo dominantes.

Cosmopolitismo. El problema del internacionalismo es central para la cuestión de la ideología. El avance en la interacción internacional entre los movimientos rurales es el último de varios desarrollos políticos rurales. Esto toma formas regionales, como en el Congreso Latinoamericano de Organizaciones del Campo (CLOC); la Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas para la Cooperación y el Desarrollo (ASOCODE); y la Red Sudafricana de la Tierra (SANL). También ha asumido contornos globalizados, como la Vía Campesina, una asociación global de granjeros, y el Foro Social Mundial (FSM), en el que las organizaciones mencionadas participan activamente.

El contexto histórico de estos desarrollos es la década del noventa, especialmente durante sus últimos años, cuando la izquierda comenzó a reagruparse y reconstituirse a sí misma sin la presencia de la Unión Soviética y la Guerra Fría. Éste es el marco en el que el movimiento de “antiglobalización”, encarnado en el FSM, emergió como una conferencia de políticas de oposición global. La cuestión del internacionalismo y la ideología se ha reimpuesto en esta coyuntura y, junto con ella, una multitud de nuevos y viejos debates y divergencias. A pesar de la heterogeneidad y el pluralismo del FSM, existen corrientes ideológicas dominantes, y esto impacta en la manera en que los participantes resuelven la cuestión del internacionalismo por ellos mismos. Así, observamos que la estrategia “antiestatal” y “antipolítica” es una corriente dominante a la que, más recientemente, le ha dado rigor conceptual el escrito de Michael Hardt y Antonio Negri (2000) en los Estados Unidos y Europa, y el de John Holloway (2002) en México. Otros intelectuales también se

han destacado en diferentes ámbitos geográficos, como Walden Bello (1998) en las Filipinas y Patrick Bond (2002a; 2002b; 2002c) en Sudáfrica, sin adherir, al menos en sentido estricto, a la “antipolítica”. Al mismo tiempo que reconocemos la diversidad del FSM y su actual y necesaria función de lograr la toma de conciencia y articulación global (Monal, 2003), nos focalizamos en tres fuertes tendencias que no se llevan muy bien con el internacionalismo.

Primero está la idea de que vivimos en un mundo “posnacional”. La invasión de Irak y la reacción del mundo –de ninguna manera a través de los canales FSM– han mostrado cuán importante sigue siendo la idea de la soberanía nacional y cuán riesgoso es hablar de un mundo “no estatal”. Vivimos en un mundo imperialista, en el que la promesa poscolonial de autodeterminación nacional ha sido negada, sin que sea posible, por ello, hacerla desaparecer. La idea de un posnacionalismo, sin embargo, continúa infiltrando formas de pensamiento, oscureciendo al imperialismo y al eurocentrismo, degradando el principio de la autodeterminación nacional y proclamando el internacionalismo (o “multirracismo”) barato. El reconocimiento de la diferencia nacional y la igualdad en *sustancia* es la precondition del internacionalismo; esto demanda compromiso para la resolución de la cuestión agraria en su sentido clásico y, por lo tanto, de la cuestión de la lógica y la ideología del desarrollo desigual.

Argumentamos, en conexión con esto, que pese a todas las diferencias de sus tácticas, estrategias y resultados, el levantamiento zapatista y los movimientos de veteranos de guerra de Zimbabwe han permanecido entre las corrientes que plantearon reclamos a lo más demandante del internacionalismo. Que el movimiento de veteranos de guerra de Zimbabwe no captara la “imaginación” de la izquierda mundial tiene menos que ver con la violencia a la que se la asociaba (que es comparable a, y de hecho mucho menos que, otras convulsiones políticas en África, Asia y América Latina) y más con las normas civilizadas “antiestatales” y “posnacionales” del movimiento antiglobalización; sólo el LPM en Sudáfrica defendió las ocupaciones de tierras.

En segundo lugar, falta un análisis clasista riguroso, cuestión que se aplica tanto a los eurocentristas que propagan términos vacuos como “la multitud” (Hardt y Negri, 2000), como a aquellos que pueden no suscribirlos pero también fracasan en identificar precisamente la estructura clasista de la sociedad civil. Es éste el caso actual de África, y particularmente el de la sociedad civil de Zimbabwe (Bond, 2002a; 2002c), donde las proclamas de “las clases trabajadoras” de los sindicatos y las organizaciones civiles son tomadas al valor nominal y la base material de los movimientos (para incluir las fuentes de financiamiento, alianzas, etc.) no es investigada.

RECUPERANDO LA TIERRA

El tercer punto es la falta del reconocimiento de la especificidad semiproletarizada del capitalismo periférico. Hay dos tendencias notables: o a “urbanizar” la protesta social en la forma acostumbrada y a hacer desaparecer la cuestión agraria (Bond, 2002c), o a “ruralizar” la protesta, juntando a los semiproletarios en la categoría de “granjero” [*farmer*] que se aplica universalmente en Francia y los Estados Unidos, Zimbabwe y Brasil. Es el ejemplo de Vía Campesina (Desmarais, 2002). En el trabajo de defensa en el que Vía Campesina ha estado comprometida a nivel mundial, la idea de unir las organizaciones del centro y la periferia en un “Granjero Internacional” en vistas a defender “la forma de vida campesina” tiene sus límites obvios. Las realidades políticas y económicas demandan que la prioridad organizacional se asiente en la unificación de los trabajadores-campesinos mediante la división rural-urbana, con el objetivo de defender una acumulación articulada¹⁵.

OCUPACIONES DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA

Llegamos, finalmente, a la relación entre las ocupaciones de tierras y la reforma agraria. Notamos que no todos los movimientos rurales dependen de las ocupaciones de tierras, mientras que algunos, entre aquellos que las hacen, también cultivan una agenda política más amplia. Sin embargo, la ocupación de tierras es la táctica de política básica de muchos movimientos y requiere particular atención, especialmente en su interacción con las reformas basadas en el mercado. La reforma agraria volvió a la agenda del desarrollo a mediados de los noventa bajo los auspicios del Banco Mundial. En ese tiempo, el “acceso a la tierra” fue reconocido como un tema importante para el “alivio de la pobreza”. Es indudablemente cierto que el acceso a la tierra para el pobre rural, y especialmente para las mujeres, es un medio crucial de mejoramiento de la reproducción social de las familias. Pero el significado del nuevo “acceso a la tierra” no descansa en el “alivio de la pobreza” como tal, sino más fundamentalmente en su objetivo económico y político más amplio, el refuerzo del dualismo funcional y la más segura reproducción de capital en un período de crisis política, social y económica. Sin coincidencia alguna, esta última iniciativa de reforma agraria del Banco Mundial ha buscado obtener la redistribución de la tierra *dentro* de las estructuras político-nacionales dadas, las mismas estructuras que no son sólo hostiles a la reforma sino también, naturalmente, que están comprometidas con la “acumulación desde arriba”, tanto antes como después de la reforma. Reiteramos que la importancia de la reforma

15 Podemos agregar que Samir Amin (1981) nos brinda valiosas perspectivas sobre los principios, aplicaciones y problemas de la acumulación articulada en la periferia, así como también las lecciones que ofrecen para el futuro.

agraria, más allá del alivio a corto plazo que ofrece a los pobres rurales, constituye su potencial para quebrar las estructuras políticas que fomentan el subdesarrollo.

Varios observadores han notado que existen tres modelos diferentes de reforma agraria y que, de hecho, interactúan de una manera muy dinámica (De Janvry, Sadoulet y Walford, 2001; Moyo, 2003; Veltmeyer, pág. 301 de este volumen). Los modelos pueden ser *grosso modo* identificados como “de estado”, “de mercado” y “popular”. Para especificar este proceso puntualizamos cuatro elementos de la reforma agraria: (a) la selección de la tierra; (b) el método de la adquisición de la tierra; (c) la selección de los beneficiarios; (d) el método de la transferencia de la tierra a los beneficiarios. Estos aspectos pueden combinarse de diferentes maneras en circunstancias históricas, de modo que no es posible distinguir fácilmente cada modelo. Argumentamos anteriormente que la agenda de los sin tierra y de los que tienen poca tierra ha sido históricamente la fuente básica de la reforma agraria durante la Guerra Fría y en el presente. Como tales, las reformas agrarias siempre han sido “populares”. Lo que es nuevo en el contexto actual es la tentativa más consciente de los pobres rurales para influir en el Estado y en el mercado a través de las ocupaciones de la tierra y liderar el camino mediante varios pasos: se autoseleccionan como beneficiarios, seleccionan la tierra, la adquieren de hecho, y luego esperan que el Estado las formalice legalmente. Esto puede continuar, o no. En términos más generales, se sabe que la táctica del perfil bajo (“usurpación” ilegal) también ejerce influencia sobre el proceso político, pero de una manera mucho más difusa y contingente.

El modelo “estatal” es aquel en que el Estado juega un rol prominente en el proceso de reforma, como lo hizo durante todo el período “desarrollista” y lo hace en la actualidad. El Estado puede realizarlo de una o dos maneras: inclinándose hacia lo “popular” o hacia el “mercado”. Puede adquirir la tierra compulsivamente, constituyendo el escenario radical: el Estado selecciona la tierra, la confisca sin compensación (o con una compensación simbólica), selecciona los beneficiarios (si ya no se han autoseleccionado) y les transfiere la tierra directamente por medio del título individual o colectivo. El Estado también puede adquirir la tierra a través del mercado, constituyendo el escenario reformista “vendedor dispuesto, comprador dispuesto”: aquí el mercado (esto es, los propietarios) selecciona la tierra (si y cuando los propietarios lo dispongan), el Estado compra tierra y compensa a los propietarios (a menudo con ayuda externa), el Estado selecciona los beneficiarios (a menos que, nuevamente, hayan actuado en forma preventiva) y el Estado les transfiere los títulos. Existen otros híbridos, como cuando el Estado espera estimular las transferencias de la tierra a través de los

RECUPERANDO LA TIERRA

impuestos, estipula un mínimo requerimiento de producción o valora su precio administrativamente teniendo en cuenta el mercado. Las variaciones “estatales” pueden coexistir en la constitución de un país y, de hecho, compiten por la importancia en el desarrollo político y social. Éste fue el caso de Zimbabwe en los noventa, un proceso que se resolvió en favor de la adquisición compulsiva. También es el ejemplo presente de Brasil, donde se efectúan continuos “experimentos de mercado”, aunque el principal método sigue siendo el siguiente: el Estado evalúa si la tierra es utilizada productivamente o no, lo cual justifica constitucionalmente la adquisición; luego, si el Estado procede, compensa a los propietarios por medio de la emisión de bonos; el Estado elige las familias a ser instaladas, aunque en general las familias se han autoseleccionado; el Estado transfiere el título. Variaciones del modelo estatal se dan en muchos otros lugares tales como Nicaragua, El Salvador, Namibia, Sudáfrica y las Filipinas.

El modelo de “mercado”, a pesar de que se presenta dentro del modelo reformista estatal a lo largo del período de posguerra, ha buscado consolidarse durante los años noventa. El modelo de mercado ha buscado desplazar al Estado de los varios pasos del proceso de reforma agraria, pero aún no ha predominado (en su forma pura). El modelo se ha hecho conocido como “iniciado-comunitariamente, pero asistido-por-el-mercado” (CIMA, por su sigla en inglés), y ha operado de la siguiente manera: las “comunidades” (los pobres rurales) se seleccionan a sí mismas; entran en negociaciones con los propietarios acerca de la locación y el precio de la tierra; compran la tierra y reciben el título de los propietarios. Este proceso es monitoreado muy de cerca por el Estado, que busca aceptarlo por medio de impuestos o incentivos necesarios para que los propietarios puedan disponer de la tierra. Mientras tanto, las siempre dispuestas ONG proveen asistencia técnica a las comunidades con el propósito de identificar la tierra y navegar los circuitos legales, y las agencias estatales y de desarrollo, en “empresas conjuntas”, proveen una mezcla variable de préstamos y subsidios para que los pobres rurales compren, construyan infraestructura y establezcan una agricultura viable. Como la investigación sobre estos temas recién está surgiendo, sus contradicciones se vuelven bastante claras, precisamente porque las “negociaciones” sobre la tierra y el precio entre dueños y sirvientes hacen un mercado de venta: el proceso de reforma agraria infla los precios y no reparte tierra productiva. Incluso, los fondos provistos a los pobres rurales son generalmente insuficientes para establecer una agricultura viable. El modelo ha sido “probado” en Brasil, Colombia, Guatemala, Tailandia y Zimbabwe (Barros et al., 2003).

En realidad, donde se sabe que el mercado ha “funcionado” es porque ha estado sobre los talones de la acción militante. En la temprana

experiencia de la reforma agraria en Zimbabwe dentro del marco “comprador dispuesto, vendedor dispuesto”, en los únicos casos en los que la tierra con alto valor agro-ecológico fue redistribuida a los pobres se trataba de la tierra de los colonos blancos que habían sido desalojados de las zonas liberadas por la guerra. La experiencia de Brasil corrobora la significación del agente militante. Fernandes (pág. 335 de este volumen) muestra que desde 1995 a 1999, el 85% de todos los nuevos asentamientos conducidos por el gobierno tuvo su origen inmediato en ocupaciones directas de la tierra; 2.800 asentamientos de la reforma agraria fueron creados con cerca de 30 mil familias, y a éstos les siguieron 1.800 ocupaciones con 256 mil familias. Aun así, la calidad de la tierra adquirida ha sido inferior y la política de desarrollo rural posdistribucionista, notoriamente débil.

Los estudios de caso realizados en este volumen ofrecen variadas perspectivas del proceso de las ocupaciones de la tierra y de la reforma agraria. Entre los temas considerados se encuentran la composición social de las ocupaciones; los problemas de equidad de género en la reforma agraria; los métodos de movilización y especialización de las ocupaciones de tierras; las relaciones con otros movimientos sociales y partidos políticos y las estrategias de los propietarios y el Estado para socavar, desviar u obstruir las ocupaciones de tierras.

CONCLUSIÓN

En este trabajo nos propusimos brindar una interpretación holística de la cuestión agraria en la economía política internacional, con especial énfasis en el período neoliberal. Hemos argumentado que la cuestión agraria, a pesar de su globalización, se mantiene íntimamente ligada con la cuestión nacional. También sostuvimos que los desafíos ante la resolución de la cuestión agraria y de la cuestión nacional se han incrementado bajo el neoliberalismo.

Sin embargo, el neoliberalismo se encuentra ahora claramente en una postura más débil que hace un cuarto de siglo, habiendo fracasado en la distribución del “desarrollo” y, últimamente, sufrido una derrota ideológica. Así, la nueva coyuntura histórica provee una singular oportunidad para que los movimientos progresistas propongan un orden posliberal; al mismo tiempo, presenta un enorme reto para la construcción de un orden mundial que sostenga la acumulación periférica. Resulta quizás irónico que los movimientos rurales se hayan convertido en los líderes “naturales” del cambio progresista, no en virtud de su explotación por el capital, sino de su expulsión de él. Pero bajo las circunstancias de severa cooptación política de los explotados y de la crisis de reproducción social entre los expulsados, no es sorprendente que los movimientos rurales estén creciendo y tomando posturas militantes.

Deseamos que este volumen contribuya positivamente al debate, la reflexión y el refuerzo tanto de los movimientos rurales como de sus contrapartes urbanas. Deseamos, asimismo, que el movimiento más amplio de antiglobalización se convierta en el lugar donde prospere la genuina solidaridad internacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Agarwal, Bina 1994 *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Amin, Samir 1976 *Unequal Development*, traducción de Brian Pearce (Brighton: Harvester).
- Amin, Samir 1981 *The Future of Maoism*, traducción de Norman Finkelstein (New York: Monthly Review Press).
- Amin, Samir 1989 *Eurocentrism*, traducción de R. Moore (London: Zed Books).
- Amin, Samir 1997 *Capitalism in the Age of Globalization* (London: Zed Books).
- Arrighi, Giovanni 2003 "The Social and Political Economy of Turbulence" en *New Left Review*, II (20), marzo/abril, pp 5-71.
- Banaji, Jairus 1995 "The Farmers Movements: A Critique of Conservative Rural Coalitions" en Tom Brass New (ed.) *Farmers Movements in India* (London: Frank Cass).
- Banco Mundial 1981 *Accelerated Development in Sub-Saharan Africa* (Washington DC: World Bank).
- Banco Mundial 1990 *World Development Report 1990* (Oxford: Oxford University Press for the World Bank).
- Barros, Flávia, Sergio Sauer y Stephan Schwartzman (eds.) 2003 *The Negative Impacts of World Bank Market Based Land Reform* (Brasília: Rede Brasil).
- Bates, Robert 1981 *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies* (Berkeley and Los Angeles, CA, y London: University of California Press).
- Bates, Robert 1989a *Beyond the Miracle of the Market: The Political Economy of Agrarian Development in Kenya* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Bates, Robert (ed.) 1989b *Toward a Political Economy of Development: A Rational Choice Perspective* (Berkeley, CA: University of California Press).
- Bello, Walden 1998 "East Asia: On the Eve of the Great Transformation?" en *Review of International Political Economy*, 5(3), pp 424-444.

- Bernstein, Henry 1988 "Capitalism and Petty-Bourgeois Production: Class Relations and Divisions of Labour" en *Journal of Peasant Studies*, 15(2).
- Bernstein, Henry 1990 "Agricultural "Modernisation" and the Era of Structural Adjustment: Observations on Sub-Saharan Africa" en *Journal of Peasant Studies*, 18(1), pp 3-25.
- Bernstein, Henry 2000 "'The Peasantry' in Global Capitalism: Who, Where, and Why?" en Panitch, Leo y Leys, Colin (eds.) *Socialist Register 2001: Working Classes, Global Realities* (London: Merlin).
- Bernstein, Henry 2002 "Land Reform: Taking a Long(er) View" en *Journal of Agrarian Change*, 2(1), pp 433-463.
- Bernstein, Henry 2003 "Land Reform in Southern Africa in World-Historical Perspective" en *Review of African Political Economy*, 96, pp 21-46.
- Binswanger, Hans P., Deininger, Klaus y Feder, Gershon 1993 *Power, Distortions, Revolt, and Reform in Agricultural Land Relations*, Policy Research Working Paper Series (Washington, DC: World Bank).
- Bond, Patrick 2002a *Zimbabwe's Plunge* (London: Merlin).
- Bond, Patrick 2002b *Against Global Apartheid* (Cape Town: University of Cape Town Press).
- Bond, Patrick 2002c *Cultivating African Anti-Capitalism*, mimeo.
- Borón, Atilio A. 2001 *A Coruja de Minerva* (Buenos Aires y Petrópolis: CLACSO y Editora Vozes).
- Borón, Atilio A. 2002 *Imperio e Imperialismo* (Buenos Aires: CLACSO).
- Borón, Atilio A. 2003 "A Selva e a Polis: Interrogações em Torno da Teoria Política do Zapatismo" en Atilio A. Borón *Filosofia Política Marxista* (Buenos Aires y São Paulo: CLACSO y Cortez).
- Borras, Saturnino M. 1998 *The Biringka Strategy to Land Reform and Implementation: Autonomous Peasant Mobilizations and State Reformists in the Philippines*, Working Paper Series, N° 274 (The Hague: Institute of Social Studies).
- Brass, Tom 1995 "Introduction" en Brass, Tom (ed.) *New Farmers' Movements in India* (London: Frank Cass).
- Breman, Jan 2000 "Labour and Landlessness in South and South-east Asia" en Bryceson, D. et al. (eds.) *Disappearing Peasantries?* (London: ITDG Publishing).
- Bryceson, Deborah 2000a "Peasant Theories and Smallholder Policies: Past and Present" en Bryceson D. et al. (eds.) *Disappearing Peasantries?* (London: ITDG Publishing).
- Bryceson, Deborah 2000b "African Peasants Centrality and Marginality: Rural Labour Transformations" en Bryceson D. et al. (eds.) *Disappearing Peasantries?* (London: ITDG Publishing).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Bryceson, Deborah, Kay, Cristóbal y Mooij, Jos (eds.) 2000 *Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia, and Latin America* (London: ITDG Publishing).
- Bull, Hedley 1995 *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* (London: Macmillan).
- Byres, T.J. 1991 "The Agrarian Question and Differing Forms of Capitalist Agrarian Transition: An Essay with Reference to Asia" en Breman, Jan y Mundle, Sudipto (eds.) *Rural Transformation in Asia* (Oxford, Delhi y New York: Oxford University Press).
- Cabral, Amílcar 1979 *Unity and Struggle* (New York: Monthly Review Press).
- Channock, Martin 1985 *Law, Custom and Social Order: The Colonial Experience in Malawi and Zambia* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Cohen, Robin 1991 "Peasants to Workers and Peasant-Workers in Africa" en *Contested Domains: Debates in International Labour Studies* (London: Zed Books).
- Cox, Robert 1977 "Labor and Hegemony" en *International Organization*, 31(3), pp 385-424.
- Cox, Robert 1987 *Production, Power and World Order* (New York: Columbia University Press).
- Cox, Robert 1999 "Civil Society at the Turn of the Millennium: Prospects for an Alternative World Order" en *Review of International Studies*, 25(1).
- Deere, Carmen Diana 2003 "Women's Land Rights and Rural Social Movements in the Brazilian Agrarian Reform" en *Journal of Agrarian Change*, 3(42), pp 257-288.
- Deere, Carmen Diana y León, Magdalena 2001 "Who Owns the Land? Gender and Land Titling Programmes in Latin America" en *Journal of Agrarian Change*, 1(3), pp 440-467.
- De Janvry, Alain 1981 *The Agrarian Question and Reformism in Latin America* (Baltimore, MD y London: Johns Hopkins University Press).
- De Janvry, Alain y Elisabeth Sadoulet 1989 "A Study in Resistance to Institutional Change: The Lost Game of Latin American Land Reform" en *World Development*, N° 17(9), pp 397-407.
- De Janvry, Alain, Sadoulet, Elisabeth y Wolford, Wendy 2001 "The Changing Role of the State in Latin American Land Reforms" en A. de Janvry et al. (eds.) *Access to Land, Rural Poverty, and Public Action* (Oxford: Oxford University Press).
- De Janvry, Alain, Gordillo, Gustavo, Plateau, Jean-Philippe y Sadoulet, Elisabeth (eds.) 2001 *Access to Land, Rural Poverty, and Public Action* (Oxford: Oxford University Press).

- De Oliveira, Francisco 2003 "O Ornitorrinco" en *Crítica à Razão Dualista e Ornitorrinco* (São Paulo: Boitempo).
- Desmarais, Annette-Aurélié 2002 "The Vía Campesina: Consolidating an Inter-national Peasant and Farm Movement" en *Journal of Peasant Studies*, 29 (2), pp 91-124.
- Diamond, Larry 1987 "Class Formation in the Swollen African State" en *Journal of Modern African Studies*, 25(4), pp 567-596.
- Engels, Friedrich 1953a (1894) "O Problema Camponês na França e na Alemanha" en Marx, Karl y Engels, Friedrich *Obras Escolhidas*, Vol. III (São Paulo: Editora Alfa-Omega).
- Engels, Friedrich 1953b (1895) "Introduction to Karl Marx 'As Lutas de Classe na França de 1848 a 1950'" en Marx, Karl y Engels, Friedrich *Obras Escolhidas*, Vol. I (São Paulo: Editora Alfa-Omega).
- Fanon, Frantz 2001 (1961) *The Wretched of the Earth* (London: Penguin Books).
- First, Ruth 1983 *Black Gold: The Mozambican Miner, Proletarian and Peasant* (Brighton: Harvester).
- Friedmann, Harriet 1993 "The Political Economy of Food: A Global Crisis" en *New Left Review*, 197, enero/febrero, pp 29-57.
- Friedmann, Harriet y McMichael, Philip 1989 "Agriculture and the State System: The Rise and Decline of National Agricultures" en *Sociologia Ruralis*, 29(2), pp 93-117.
- Fröbel, Folker, Heinrichs, Jürgen y Kreye, Otto 1980 *The New International Division of Labour*, traducción de P. Burgess (Cambridge: Cambridge University Press).
- Germer, Claus 1994 "Perspectivas das Lutas Sociais Agrárias nos Anos 90" en Stédile João Pedro (ed.) *A Questão Agrária Hoje* (Porto Alegre: UFRGS y ANCA).
- Gibbon, Peter y Neocosmos, Michael 1985 "Some Problems in the Political Economy of 'African Socialism'" en Bernstein, Henry y Campbell, Bonnie (eds.) *Contradictions of Accumulation in Africa* (Beverly Hills, London y New Delhi: Sage).
- Gowan, Peter 1999 *The Global Gamble* (London y New York: Verso).
- Graziano da Silva, José 1999 *O Novo Rural Brasileiro* (Campinas: UNICAMP).
- Gwaunza, Elizabeth 1998 "The Impact of Labour Migration on Family Organisation in Zimbabwe" en Sachikonye, Lloyd (ed.) *Labour Markets and Migration Policy in Southern Africa* (Harare: SAPES Trust).
- Hardt, Michael y Negri, Antonio 2000 *Empire* (Cambridge, MA: Harvard University Press).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Harriss, John 1987 "Capitalism and Peasant Production: The Green Revolution in India" en Shanin, Teodor (ed.) *Peasants and Peasant Societies* (Oxford y New York: Basil Blackwell).
- Harriss, John 1992 "Does the "Depressor" Still Work? Agrarian Structure and Development in India: A Review of Evidence and Argument" en *Journal of Peasant Studies*, 19(2), pp 189-227.
- Hirst, Paul, y Thompson, Grahame 1999 *Globalization in Question*, 2º edición, (Cambridge: Polity Press).
- Holloway, John 2002 *Change the World without Taking Power* (London y Sterling, VA: Pluto Press).
- ILO 2002a *A Future Without Child Labour* (Geneva: ILO).
- ILO 2002b *Unbearable to the Human Heart: Child Trafficking and Action to Eliminate It* (Geneva: ILO).
- Kapadia, Karin 2000 "Responsibility without Rights: Women Workers in Bonded Labour in Rural Industry in South India" en Bryceson, D. et al. (ed.) *Disappearing Peasantries?* (London: ITDG Publishing).
- Kautsky, Karl 1970 "Ultra-Imperialism" en *New Left Review*, 59, enero/febrero, pp 41-6.
- Kautsky, Karl 1988 (1989) *The Agrarian Question*, traducción de P. Burgess (London y Winchester, MA: Zwan).
- Kay, Cristóbal 1998 *The Complex Legacy of Latin America's Agrarian Reform*, Working Paper Series, N° 268 (The Hague: Institute of Social Studies).
- Kay, Cristóbal 2000 "Latin America's Agrarian Transformation: Peasantization and Proletarianization" en Bryceson, et al. (eds.) *Disappearing Peasantries?* (London: ITDG Publishing).
- Keohane, Robert 1984 *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton, NJ: Princeton University Press).
- Lal, Deepak 1997 *The Poverty of "Development Economics*, 2º edición (London: Institute of Economic Affairs).
- Lenin, V.I. 1964 (1899) *The Development of Capitalism in Russia*, 2º edición (Moscow: Progress Publishers).
- Linklater, Andrew 1998 *The Transformation of Political Community: Ethical Foundations of a Post-Westphalian Era* (Cambridge: Polity Press).
- Löwy, Michael (ed.) 1999 *O Marxismo na América Latina* (São Paulo: Fundação Perseu Abramo).
- Mafeje, Archie 1997 "The Agrarian Question in Southern Africa and Accumulation from Below" en *SAPEM*, 10(5), pp 33-9.

- Mamdani, Mahmood 1996 *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism* (Princeton, NJ: Princeton University Press).
- Marx, Karl 1975 "Critique of Hegel's Doctrine of the State" en *Early Writings*, introducido por Lucio Colletti (Harmondsworth: Penguin Books).
- Marx, Karl 1976 *Capital* (London: Penguin Books) Vol. I.
- McMichael, Philip 1997 "Rethinking Globalization: The Agrarian Question Revisited" en *Review of International Political Economy*, 4(4), pp 630-662.
- McMichael, Philip y Myhre, David 1991 "Global Regulation vs. the Nation-State: Agro-Food Systems and the New Politics of Capital" en *Capital and Class*, N° 43, pp 83-105.
- Monal, Isabel 2003 "Porto Alegre en Lucha" en *Crítica Marxista*, N° 16, pp 122-126.
- Mooij, Jos 2000 "Changing Peasantries in Asia" en Bryceson, D. et al. (eds.) *Disappearing Peasantries?* (London: ITDG Publishing).
- Moyo, Sam 1995a *The Land Question in Zimbabwe* (Harare: SAPES Books).
- Moyo, Sam 1995b "A Gendered Perspective on the Land Question" en *SAFERE*, 1(1): 13-31.
- Moyo, Sam 2000 *Land Reform under Structural Adjustment in Zimbabwe: Land Use Change in the Mashonaland Provinces* (Uppsala: Norkiska Afrika Institutet).
- Moyo, Sam 2001 "The Land Occupation Movement and Democratisation in Zimbabwe: Contradictions of Neoliberalism" en *Millennium: Journal of International Studies*, 30(2), pp 311-330.
- Moyo, Sam 2002 "Peasant Organisations and Rural Civil Society in Africa: An Introduction" en Moyo, Sam y Romadhane, Ben (eds.) *Peasant Organisations and Democratisation in Africa* (Dakar: CODESRIA Book Series).
- Moyo, Sam 2003 "The Interaction of Market and Compulsory Land Acquisition Processes with Social Action in Zimbabwe's Land Reform" en Mandaza, Ibbo y Nabudere, Dani (eds.) *Pan Africanism and Integration in Africa* (Harare: SAPES Books).
- Moyo, Sam (de próxima aparición, a) *The Land Question in Africa: Research Perspectives and Questions* (Dakar: CODESRIA Green Book).
- Moyo, Sam (de próxima aparición, b) *Land Redistribution in Zimbabwe: Allocations and Beneficiaries*.
- Moyo, Sam y Romadhane, Ben (eds.) 2002 *Peasant Organisations and Democratisation in Africa* (Dakar: CODESRIA).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Munck, Ronaldo y Waterman, Peter 1999 *Labour Worldwide in the Era of Globalization: Alternative Union Models in the New World Order* (London: Macmillan).
- Neocosmos, Michael 1993 *The Agrarian Question in Southern Africa and "Accumulation from Below"* (Uppsala: Nordiksa Afrikainstitutet).
- North, Douglass C. 1981 *Structure and Change in Economic History* (New York: Norton).
- North, Douglass C. 1990 *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press).
- O' Brien, Robert, Goetz, Anne Marie, Scholte, Jan Aart y Williams, Marc 2000 *Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Ohmae, Kenichi 1990 *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy* (London: Collins).
- Olson, Gary 1974 *US Foreign Policy and the Third World Peasant: Land Reform in Asia and Latin America* (London y New York: Praeger).
- Otero, Gerardo 1999 *Farewell to the Peasantry?* (Boulder, CO: Westview Press).
- Patnaik, Utsa 1990 "Some Economic and Political Consequences of the Green Revolution in India" en Bernstein, Henry et al. (eds.) *The Food Question: Profits Versus People?* (London: Earthscan).
- Peta, Gregory, Chibatwa, Gift, Whanya, Etwell, Ngirandi, Trust y Phiri, Douglas 1991 *An Organisational Survey of Five Trade Unions in Zimbabwe*, Yash Tandon (ed.) (Harare: Zimbabwe Congress of Trade Unions).
- Petras, James 1997 "Latin America: The Resurgence of the Left" en *New Left Review*, 223, mayo/junio, pp 17-47.
- Petras, James 2000 "Política Agrícola Estadunidense para a América Latina" en Petras, James y Veltmeyer, Henry *Hegemonía dos Estados Unidos no Novo Milênio* (Petrópolis: Editora Vozes).
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2000 *Hegemonía dos Estados Unidos no Novo Milênio* (Petrópolis: Editora Vozes).
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2001 "Are Latin American Peasant Movements Still a Force for Change? Some New Paradigms Revisited" en *Journal of Peasant Studies*, 28(2), pp 83-118.
- Petras, James, Veltmeyer, Henry y Vieux, Steve 1997 *Neoliberalism and Class Conflict in Latin America* (London: Macmillan).
- Raikes, Philip 2000 "Modernization and Adjustment in African Peasant Agriculture", en Bryceson D. et al. *Disappearing Peasantries?* (London: ITDG Publishing).

- Raikes, Philip y Gibbon, Peter 2000 "Globalisation and African Export Crop Agriculture" en *Journal of Peasant Studies*, 27(2), pp 50-93.
- Rutherford, Blair 2001 *Working on the Margins: Black Workers, White Farmers in Post-colonial Zimbabwe* (Harare, London y New York: Weaver Press and Zed Books).
- Schmidt, Elizabeth 1990 "Negotiated Spaces and Contested Terrain: Men, Women, and the Law in Colonial Zimbabwe, 1890-1939" en *Journal of Southern African Studies*, 16(4), pp 622-48.
- Scott, James C. 1985 *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven, CT, y London: Yale University Press).
- So, Alvin Y. y Chiu, Stephen W.K. 1995 *East Asia and the World Economy* (Thousand Oaks, CA, London y New Delhi: Sage).
- Stephen, Lynn 1996 "Democracy for Whom? Women's Grassroots Political Activism in the 1990's, Mexico City and Chiapas" en Otero, Gerardo (ed.) *Neoliberalism Revisited: Economic Restructuring and Mexico's Political Future* (Boulder, CO y Oxford: Westview Press).
- Strange, Susan 1982 "Cave! Hic Dragones: A Critique of Regime Analysis" en *International Organization*, 36(2), pp 337-54.
- Strange, Susan 1988 *States and Markets* 2ª edición (London: Pinter).
- Strange, Susan 1996 *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Sylvester, Christine 2000 *Producing Women and Progress in Zimbabwe: Narratives of Identity and Work from the 1980s* (Portsmouth, NH: Heinemann).
- Szelényi, Iván 1998 "Introduction" en Iván Szelényi (ed.) *Privatising the Land: Rural Political Economy in Post-Communist Societies* (London y New York: Routledge).
- UNICEF 2002 *The State of the World's Children 2003* (New York: UNICEF).
- Wade, Robert y Frank Veneroso 1998 "The Asian Crisis: The High Debt Model versus the Wall Street-Treasury-IMF Complex" en *New Left Review*, 228, pp 3-22.
- Walker, R.B.J. 1988 *One World, Many Worlds: Struggles for a Just World Peace* (Boulder, CO, y London: Lynne Rienner y Zed Books).
- Walter, Andrew 1991 *World Power and World Money: The Role of Hegemony and International Monetary Order* (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf).
- Waltz, Kenneth N. 1979 *Theory of International Politics* (Reading, MA: Addison-Wesley).
- Warren, Bill 1980 *Imperialism: Pioneer of Capitalism* (London: Verso, ed. John Sender).

RECUPERANDO LA TIERRA

Wood, Ellen Meiksins 1995 *Democracy against Capitalism* (Cambridge: Cambridge University Press).

Yeros, Paris 2002a "Zimbabwe and the Dilemmas of the Left" en *Historical Materialism*, 10 (2), pp. 3-15.

Yeros, Paris 2002b, *The Political Economy of Civilisation: Peasant-workers in Zimbabwe and the Neo-colonial World*, tesis de doctorado (London: University of London).

HENRY BERNSTEIN*

**TIERRA RURAL Y CONFLICTOS AGRARIOS
EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA**

EN ESTE TRABAJO se esboza el lugar de la tierra en las cuestiones agrarias del África subsahariana moderna. Se procede mediante una periodización de su historia, a partir de la generalización de la colonización sistemática a través de los procesos que subsecuentemente integraron a los granjeros de África dentro de las estructuras y circuitos de la economía mercantil, tanto local como internacional. Aunque los procesos de mercantilización no han generado ni la propiedad de la tierra a gran escala ni la privación generalizada en la mayor parte de África –en total contraste con la formación y los legados del capitalismo colonial en África del sur– ellos detentan necesariamente dinámicas clasistas intrínsecas, que yacen bajo las cada vez mayores tensiones y conflictos sobre la tierra. Esto quiere decir que, en condiciones de extensa y extrema pobreza, asociadas con los préstamos de ajuste estructural y la globalización de las décadas recientes, las presiones sobre la reproducción del trabajo, junto con la intensificación de la inequidad social, aumentan tanto la significación como la predominancia

* Henry Bernstein es profesor de Estudios de Desarrollo en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en la Universidad de Londres, donde desarrolla su profundo interés en la teoría social y en la economía política agraria. Durante quince años editó el *Journal of Peasant Studies* [*Revista de Estudios Campesinos*]. Es editor fundador del *Journal of Agrarian Change* [*Revista del Cambio Agrario*], junto con T.J. Byres.

de las luchas por la tierra. El hecho de que las fuentes sociales y las formas políticas de esas luchas sean generalmente muy diferentes de las luchas equivalentes en América Latina y Asia es un efecto de las especificidades del África subsahariana que este trabajo intenta ilustrar y explicar.

ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN COLONIAL, 1880-1930¹

Una característica definitoria de la experiencia histórica moderna de África, y que marca una de sus especificidades “histórico-mundiales”, es que el extenso dominio colonial fue establecido en la mayor parte del continente relativamente tarde en la larga historia de la expansión internacional europea². Como Julios Nyerere remarcó en un discurso para la Universidad de Dar Salaam en la década del setenta: “Para Lenin, el imperialismo fue la última etapa del capitalismo, pero para nosotros, en África, fue la primera”. La “pelea por África”, junto con la colonización europea de otras fronteras imperiales remanentes en el sudeste y oeste de Asia, se produjo dentro del período formativo del imperialismo moderno (capitalista), tal como analizó Lenin, y también dentro de lo que en la actualidad se considera, comúnmente, como la primera “edad dorada” de globalización, desde 1870 a 1914. Además, a fines del siglo XIX, las principales potencias europeas que establecieron vastos territorios coloniales en África (Gran Bretaña y Francia) no sólo eran países industrializados, sino que su “segunda revolución industrial”, desde la década de 1870 (Hobsbawn, 1987) generó un crecimiento masivo de las demandas de materias primas minerales y agrarias, que incluían una cantidad de productos tropicales que habían de ser suministrados, precisamente, por las economías coloniales en una expansiva (y cambiante) división del trabajo internacional. Este cronometraje de la colonización sistemática, así como de sus modalidades y efectos, indica alguna de las especificidades de las trayectorias de la historia moderna en África dentro de las relaciones centro-periferia, esquematizadas más generalmente por Sam Moyo y Paris Yeros en el primer trabajo de este volumen.

Una segunda fuente o tipo de especificidad es el inmenso rango de formaciones sociales, hábitats y modos de vida que el dominio colonial encontró y sobre los que intentó imponer sus propias estructuras y nociones de

1 La siguiente descripción utiliza, y en parte depende de, la periodización propuesta y esquematizada por Bernstein y Woodhouse (2001). Aquí se dedica relativamente más espacio a la primera fase del colonialismo, cuando muchos de los procesos de cambio, que continúan siendo significativos en el presente, fueron establecidos.

2 Esto no es para ignorar la historia más larga de la participación de muchas sociedades y economías africanas con patrones de intercambio y de poder internacionales, en especial los tráfico de esclavos del Océano Atlántico y del Índico. En este trabajo, y por un motivo de conveniencia, “África” y “africano/a” refiere sólo al África subsahariana.

orden y progreso, primero a través de la “pacificación” y luego por medio de sus variadas –y contradictorias– formas de ingeniería social. Samir Amin (1976: 317-333) distinguió tres “macro-regiones” del África subsahariana mediante una amplia tipología de sus formaciones coloniales. La *économie de traite* de África occidental se caracterizó por la producción agrícola de exportación por los granjeros campesinos y, en algunos casos, por los productores locales de mayor escala, típicamente organizada por las empresas de intercambio metropolitanas a través de varias capas intermedias de capital mercantil³. La *économie de traite*, por lo tanto, no supuso un extendido desposeimiento. Sus patrones de mercantilización de la economía rural procedieron sin la institución de los derechos de propiedad privada y de mercado en tierra y, en muchos casos, se realizó con la instrumentalización de movimientos y limpieza de áreas nuevas para cultivar cacao y aceite de palmera (en los cinturones forestales), y algodón y maníes (en la sabana), los cuatro cultivos clásicos de África occidental.

La segunda “macro-región”, igualmente extensiva, es la de las colonias de “reserva de trabajo”, que se expande desde el este y centro hacia el sur de África, y en la que había una vasta alienación de la tierra a favor de los colonos blancos. La racionalidad del desposeimiento de los africanos, concentrados en “reservas nativas”, era doble: proveer tierra a los establecimientos blancos y su cultivo capitalista y reforzar los abastecedores regulares de trabajo para los grandes cultivos y plantaciones, tanto como para los complejos mineros de las Rhodesias Norte y Sur (después, Zambia y Zimbabwe) y de Sudáfrica. Esto último atrajo un gran número de mineros migrantes del sur de Mozambique, Nyasalandia (más tarde Malawi) y Basutolandia (luego Lesotho).

La tercera categoría de Amin es “el África de las compañías concesionarias”, en la región de la cuenca del río Congo, de la cual el Congo/Zaire es emblema, hasta hoy, de una historia extremadamente brutal en cuanto al recurso de extracción/pillaje⁴. A las compañías concesionarias les fueron concedidas grandes territorios para la explotación, con serias consecuencias tanto para sus habitantes como para sus recursos naturales. Sin embargo, generalmente fueron incapaces de establecer las condiciones de la agricultura capitalista sostenida y sistemática (tanto

3 Como explicó Amin: “El concepto de la *économie de traite* ha sido frecuentemente usado como una mera descripción del intercambio de productos agrícolas por bienes manufacturados importados: de hecho, describe analíticamente el intercambio de mercaderías agrarias provistas por la sociedad periférica por los productos de una industria capitalista central, sean éstos importados o producidos en el lugar por empresas europeas” (1976: 329).

4 Cuando sus agentes incluyen a los militares de los países vecinos (Rwanda, Uganda, Zimbabwe).

RECUPERANDO LA TIERRA

el colono como la plantación), que fue la que prevaleció en el este (Kenya) y en el sur (el sur de Rhodesia/Zimbabwe y Sudáfrica).

El amplio esquema de Amin y las coordenadas geográficas de sus “macro-regiones” son una primera aproximación útil, pero las trayectorias de la historia moderna en África son, inevitablemente, menos inequívocas. En las colonias de la *économie de traite*, por ejemplo, la tierra fue a menudo expropiada para actividades de extracción (minera y maderera), caso de la Costa de Oro/Ghana, o con el propósito de realizar asentamientos blancos. Algunos países combinaron elementos de los tres tipos de la economía colonial, en particular Mozambique (y en menor grado, Angola). En la frontera norte de su “macro-región”, Kenya dio el ejemplo más claro –y de forma atípica– de una economía de “reserva de trabajo” centrada en las necesidades de la agricultura colonial, sin explotación mayor u otra industria de extracción (aunque la economía política de la agricultura colonial durante el período tuvo muchos paralelos con sus socios más lejanos del sur). Al mismo tiempo, la producción campesina de mercancías (y su diferenciación clasista asociada) nunca se extinguió completamente en la “reserva de trabajo”/colonias como en los casos de Kenya y el sur de Rhodesia, aun dentro de las severas constricciones impuestas por sus “reservas nativas”. Asimismo (y sorpresivamente), el esquema de Amin del “África de las compañías de concesión” no menciona la industria crucial de la minería –y sus necesidades laborales– de Kinshasa, en el sur del Congo/Zaire (con la que el adyacente Cinturón de Cobre del norte de Zambia comparte la misma geología rica en minerales). Más importante, quizás, es que las características y combinaciones de estos tipos o elementos de la economía colonial se fueron desplazando con el tiempo, y no sin frecuencia, hacia el otorgamiento de una mayor importancia a la producción de mercancías por parte del campesino, lo que fue activamente promocionado en el tardío período colonial (ver más abajo)⁵.

El punto clave es que en la mayor parte del África subsahariana, con excepción de los territorios de los establecimientos (blancos) más extensos (Kenya, el sur de Rhodesia, Sudáfrica), los granjeros “campesinos” (incluso los pastores) no fueron desposeídos, aunque sí “estimulados” por varios medios para entrar en la economía monetaria (de mercancías) como productores de bienes agrícolas y/o de fuerza de trabajo. En efecto, no se establecieron las condiciones para una completa proletarización de la gran mayoría de los productores, como Samir Amin y muchos otros han enfatizado. Mientras los diferentes medios de “estimulación”

5 Por ejemplo, Sukumaland en Tanganyika (ahora Tanzania) colonial dejó de ser una importante fuente de migración laboral para las plantaciones de sisales del país, una vez que el algodón fue establecido allí como un cultivo campesino viable.

–impuestos, obligaciones para producir ciertos cultivos, proveer servicio laboral o entrar en contratos laborales (migrantes)– al principio involucraron la “comercialización forzada”, para usar un término empleado con referencia a la India colonial (Bharadwaj, 1985), algunos granjeros africanos comenzaron con la producción de mercancías para exportación por medio de la movilización de la tierra y el trabajo, a través de medios consuetudinarios y sin, o a pesar de, las acciones de los Estados coloniales –por ejemplo, el caso “clásico” de la producción de cacao en Ghana, presentado por Hill en su influyente estudio (1963).

Al mismo tiempo que las economías coloniales africanas se organizaron para producir productos agrarios tropicales (y minerales) para exportar a los mercados mundiales, se esperaba también que esta actividad sirviera para producir ingresos destinados a pagar la administración colonial. La formación y funcionamiento de los Estados coloniales fue marcada por lo que Berry (1993) llama “hegemonía pendiente de un hilo”. Éste también es un tema relevante en el análisis de Mamdani (1996) de la formación del Estado colonial y su legado, donde enfatiza el “despotismo descentralizado” del dominio indirecto en África. Bajo el gobierno indirecto, las escalas más bajas de la administración del Estado en el campo fueron asignadas a la autoridad de los jefes y los líderes que gobernaban por medio de la ostensible “ley consuetudinaria” de “tribus particulares” a las cuales las poblaciones rurales estaban sujetas sobre la base de su identidad “tribal”, tal como era percibida y legislada por los gobernantes coloniales. En tanto el poder de los jefes estaba profundamente subordinado a la autoridad estatal colonial –por ejemplo, en relación con los deberes de recaudación de impuestos, el reclutamiento de trabajo para los militares y las obras públicas y, en última instancia, en términos de la destitución y reemplazo de los jefes– la proporción de ellos fue, a menudo, aumentada en relación a sus súbditos. Mamdani sugiere que la remodelación del caciquismo [*chieftancy*] –con la participación activa de muchos caciques y sus aliados– fusionó, en efecto, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la autoridad “consuetudinaria”, como el ejercicio del dominio indirecto en las áreas rurales. Uno de los muchos méritos del análisis de Mamdani es que conecta la política de la “cuestión nativa” en Sudáfrica con la de las colonias en el norte, sugiriendo cuán similares fueron las reacciones del gobierno indirecto (en las colonias británicas), la “asociación” (en las colonias francesas) y la segregación (luego *apartheid*) en Sudáfrica ante los temas comunes de establecimiento y mantenimiento del sometimiento “nativo”⁶.

6 La aspiración de Mamdani (1996) para una descripción no reduccionista de dominación política en el África colonial dio como resultado una aguda distinción entre la “cuestión laboral” (explotación por el capitalismo colonial) y la “cuestión

RECUPERANDO LA TIERRA

Esto tuvo efectos potentes y particulares para la tenencia y uso de la tierra (y para otras áreas), que se conectan con los asuntos de formas emergentes de mercantilización agraria, asociada ésta, a su vez, con la integración en los mercados mundiales y las divisiones del trabajo. Hay un reconocimiento general de que, a través de la institución del gobierno indirecto, lo “consuetudinario” en África –en relación con la tierra y en conexión con el estatus político– fue remodelado (o aun “inventado”) por las intervenciones coloniales (Colson, 1971; Peters, 1994, 2002; Berry, 1993; Mamdani, 1996), y de que la mercantilización de la tierra, incluyendo el desarrollo de los mercados de la tierra, fue suprimida. Las formas en las que la tierra “comunal” o “consuetudinaria”, por un lado, y la tierra estatal (en las colonias británicas de tierra de la Corona) por el otro –y sus tenencias, jurisdicciones y demandas por ellos– fueron definidas (y respondidas) conservan una poderosa resonancia en muchas partes de África de hoy, y una resonancia intensificada por el extenso crecimiento de la pobreza y la inequidad (a lo cual volveré más adelante).

Los procesos bosquejados fueron acompañados por varias percepciones y preocupaciones acerca de la “naturaleza” en África. Entre ellas se cuentan desde concepciones idealizadas de un “Edén” pre (o no) industrial (Anderson y Grove, 1987), el agrupamiento de una “cultura y naturaleza” peligrosa y salvaje (Vaughan, 1991), hasta cuestiones más pragmáticas que detectan el aparente (des) uso “derrochador” y destructivo de los nativos de la dotación de recursos frágiles. Por ejemplo, en el “cultivo cambiante”, que lleva a la deforestación, y el pastoreo, que lleva al abarrotamiento y la degradación de las tierras, desde la perspectiva de los funcionarios coloniales (Leach y Mearns, 1996; McCann; 1999; Anderson, 2002). Estas corrientes tempranas, los vínculos entre la investigación científica del medio ambiente físico de África y la conservación como un elemento de “política nativa” se volvieron centrales para la agenda colonial, con ímpetus de intervención estatal más concentrados durante la década del treinta. En algunos aspectos, ello reflejó el impacto de la respuesta política y científica al problema de la “sequía” [*dust-bowls*] en los Estados Unidos, un momento clave en la formación de la ciencia aplicada del medio ambiente como la conocemos actualmente, y que tuvo muchas repercusiones internacionales, incluso en el África colonial, como nosotros sabemos hoy (Anderson, 1984). En otros aspectos, esta preocupación más intensa por la conservación fue una de las características, entre otras, de una coyuntura en la que la dominancia colonial se consolidaba y la Gran

nativa” (opresión por el estado colonial). Algunas críticas consideran que tal distinción se plasmó en una agudeza extrema: una cosa es evitar una narración reduccionista (economicista) de la política: otra es dejar separadas para siempre a la economía y la política (ver O’Laughlin, 2000).

Depresión de los años treinta se producía, con sus múltiples –y característicamente perturbadores– efectos para un amplio rango de ideas y prácticas sociales, políticas y económicas del capitalismo, no menores que las de las consecuencias del proyecto colonial en África y el modo en que sus contradicciones inherentes fueron percibidas e interpretadas tanto por los soberanos como los súbditos coloniales⁷.

La contradicción central de ese proyecto para sus arquitectos e ingenieros –como identificaron Phillips (1989), Cowen y Shenton (1991a, 1991b, 1996: capítulo 6) y Grischow (1998), entre otros– fue cómo desarrollar la producción de bienes en las colonias africanas sin generar divisiones sociales (especialmente clasistas) y tensiones del capitalismo (industrial) en Europa, e incluso, cómo hacerlo dentro de las obligaciones políticas de la “hegemonía pendiente de un hilo”. El gobierno indirecto, junto con sus formaciones discursivas comprehensivas, que naturalizaron/esencializaron la “tribu”, la “comunidad” y la “cultura” africana dentro de las demandas y responsabilidades de “administración” y “respeto” por la “costumbre” y “tradición” nativas, ejemplifica muy claramente esta contradicción. Fue, en cuestiones vitales, no sólo un intento por ejercitar la dominación política a bajo costo para las haciendas imperiales, sino también un esfuerzo para *prevenir, limitar o de otra manera, dirigir las dinámicas de formación clasista*, por ejemplo, por medio del retorno de los trabajadores migrantes a sus (ostensiblemente solidarias) “comunidades” tribales y de la devolución de la autoridad patriarcal benigna a sus jefes u otros (mercaderes, empresarios, aquellos que adquirirían educación occidental) para evitar que emergieran como una clase diferente de acumuladores. La “destrribalización” fue una expresión muy potente de esta contradicción del proyecto colonial, porque de manera sobresaliente (y no exclusiva) fue una contraseña para la formación de una clase trabajadora y, sobre todo, de una clase trabajadora urbana.

Cowen y Shenton (1991a) inventaron el sugestivo término “colonialismo fabiano” para esa colección de ideas y prácticas consolidadas en la década del treinta, en las que el motivo central del proyecto colonial era “proteger” a los nativos de los costos del capitalismo mientras, gradualmente, se les permitía compartir sus beneficios. Lo primero requirió una prevención (o al menos un aplazamiento *sine die*) de tales bendiciones mezcladas de la civilización burguesa, como los derechos de la propiedad

7 Hacia la década del treinta, la economía mundial capitalista estaba en una fase de “desglobalización”, como Desai la define; es decir, con barreras (políticas) a la movilidad internacional de bienes, dinero y gente, que no habían existido en la “edad de oro” que finalizó en 1914. Resulta innecesario decir que los efectos de la Depresión intensificaron los esfuerzos de las potencias europeas para conseguir, de sus colonias africanas, niveles más altos de extracción de beneficios fiscales y económicos.

RECUPERANDO LA TIERRA

privada de la tierra y la facilidad de acceso al crédito comercial para los empresarios africanos (Cowen y Shenton, 1991b). Así como impuso las responsabilidades y demandas de la regulación profiláctica, el impulso fabiano también sancionó más intervenciones proactivas para “adelantar” a los africanos y protegerlos. En la década del treinta, esto fue expresado en una cantidad de áreas de política social y económica, que incluían el planeamiento del uso de la tierra y la conservación del medio ambiente y que se trasladarían a la escena central en el momento de posguerra del “desarrollo y el bienestar colonial”. De forma semejante, en este segundo período, las muchas expresiones de las contradicciones entre el proyecto colonial y sus temas fueron desarrolladas. Se pusieron de manifiesto en la década del treinta con el creciente activismo de los trabajadores africanos, las “huelgas” campesinas y otras acciones contra la caída de los precios de los cultivos de la década de la Depresión, pero también en un rango de procesos y controversias menos abiertos y dramáticos, a través de los cuales los africanos –y diferentes grupos de africanos, desde trabajadores migrantes a otros acumuladores emergentes– buscaron evadir, desviar o de otra manera poner al servicio de sus propias ventajas a las instituciones, formas y prácticas del dominio colonial con sus muchas tensiones y ambigüedades.

COLONIALISMO TARDÍO, 1940-1950

Las ideas y las prácticas del desarrollo económico y del rol del gobierno en su promoción fueron cambiadas profundamente por los efectos de la Depresión, seguidos por los de la Segunda Guerra Mundial y los de la reconstrucción de posguerra (no sólo de Europa y Japón y sus anteriores colonias en el este de Asia, sino también por las nuevas instituciones “Bretton Woods” establecidas para crear y mantener la estabilidad en las relaciones internacionales de comercio y monetarias). El rol económico central del gobierno durante la guerra y la reconstrucción de posguerra, el auge de los mercados de bienes primarios en la década del cincuenta y la adopción de las políticas macroeconómicas keynesianas dieron como resultado inversiones, auspiciadas o provistas por el Estado, en la infraestructura física y social, y el aumento de la producción. Esto fue cierto en los países metropolitanos, así como también en las colonias, bajo la rúbrica del “desarrollo y bienestar colonial” que, aunque en una escala más convenientemente modesta (en términos del gasto y la preocupación imperial), de considerable significación para las economías coloniales. Las juntas de distribución y venta de cultivos de los años de la Depresión tomaron funciones más “desarrollistas” y se establecieron otras formas paraestatales –varios tipos de corporaciones y esquemas de desarrollo.

Durante la década del cincuenta, al menos algunas colonias europeas de África estaban siendo “preparadas” para la independencia a

través de medidas para implementar reformas en su gobierno. En muchas colonias británicas el gobierno indirecto, a través de la autoridad consuetudinaria, fue parcialmente reemplazado por esfuerzos tardíos para instituir gobiernos locales representativos bajo la forma de consejos municipales y rurales, con poderes legislativos para descargar funciones específicas, incrementar parte o mucho de su ingreso, y reclutar y gerenciar su propio personal (Kasfir, 1993). El carácter parcial y desigual, y por lo tanto ambiguo, de tales reformas –sumado a los activistas que atrajeron a la política local y nacional hombres más jóvenes, mejor educados y/o empresarios– agregaron, con frecuencia, capas adicionales de complejidad y tensión para los integrantes del gobierno indirecto y para las demandas y contrademandas de la autoridad del cacique (que fue desafiada, más que necesariamente extinguida).

Las combinaciones de las nuevas iniciativas políticas y económicas con los discursos del período de posguerra estuvieron particularmente delimitadas en relación con las políticas agrarias y de conservación, en formas que calificaron, pero que también reprodujeron, aspectos de versiones anteriores del proyecto colonial y sus antinomias. Un importante ejemplo de esta dinámica fue el nuevo deseo de establecer una clase de pequeños granjeros africanos “progresistas” o pequeños terratenientes. Esta “familia” de granjeros pequeño-capitalistas, en general especializados en la producción de cultivos de exportación de valores más altos, que usaban “modernos” materiales de producción y técnicas sobre esquemas de gerenciamiento gubernamental, serviría como una vanguardia de modernización técnica y de crecimiento de la producción agraria, como ejemplo de la modernidad cultural y como una fuerza para la responsabilidad cívica y la estabilidad social luego de la independencia. Así, el objetivo de la Corporación Agrícola de Tanganyika, establecida en 1953, fue promover “una clase próspera y saludable de pequeños granjeros terratenientes, firmemente establecida en la tierra, agradecida por sus frutos, celosa de su propia riqueza y dedicada a mantener la unidad familiar sobre ella” (citado en Cliffe y Cunningham, 1973: 134).

Esta visión y los medios para realizarla aumentaron las dificultades sobre la tenencia de la tierra “comunal” o “consuetudinaria” [*customary*]: en tanto uno de los cimientos del gobierno indirecto y de la autoridad de los caciques (y la “estabilidad” rural), la tenencia consuetudinaria iba a ser vista ahora como un obstáculo para la modernización agraria que requería una base de derecho e incentivo de propiedad privada, aunque bajo la supervisión del Estado. Significativamente, el intento quizás más importante de “reforma agraria” –el reparto de la tierra combinada con el título individual– en el último período colonial fue el Plan Swynnerton en la Provincia Central de Kenya, durante el despertar de la rebelión armada de los Mau Mau (Kitching, 1980; Leo, 1984).

RECUPERANDO LA TIERRA

El otro lado de la moneda de tal modernización agraria, sumado a la inversión en alza y a la atención de las investigaciones agrícola y ambiental, fue la preocupación creciente por la conservación del suelo y la planificación del uso de la tierra. Mientras se hacían esfuerzos para promover la producción moderna y especializada de cultivos de valores más altos, el uso de fertilizantes y la mecanización de los esquemas “progresistas” de los granjeros, fue el momento en que las nociones de “capacidad de sobrellevar” de los medios ambientes particulares para humanos y ganado fueron “operacionalizados” (el término militar “operaciones” es una característica y un rasgo novedoso de los discursos de este tiempo) en los planes de asentamiento y reasentamiento. En el implemento de tales proyectos para establecer un “modelo” de unidades de granja mixtas de agricultura y ganadería a pequeña escala se involucra una menor o mayor coerción, por ejemplo, en la “mejora” en Sudáfrica (De Wet, 1995), en el Plan Swynnerton en Kenya (Sorrenson, 1967), en el reasentamiento en el norte de Rhodesia/Zambia (Allan, 1965) y en el *encadrement* por parte del CFTD en los planes de cultivo de algodón en el África occidental francófona (Raynault et al., 1997). La coerción fue particularmente pronunciada en las colonias menos “desarrolladas”, donde los incentivos de mercado fueron menores y la compulsión política para cobrar los cultivos, el trabajo *corvéé* y la migración laboral continuaron hasta la década del cincuenta en el Congo Belga y hasta la década del sesenta en los territorios coloniales de Portugal.

Las corporaciones de desarrollo paraestatal y la promoción de cultivo (de exportación), el planeamiento del uso de la tierra y las regulaciones de conservación, el planeamiento macroeconómico rudimentario y el proyecto de inversión y manejo del Estado –los aparatos y las prácticas de las versiones contemporáneas de la “modernización”– formaban parte de los muchos legados del colonialismo tardío en el momento de la independencia. En ese entonces, la producción generalizada de bienes había sido establecida a lo largo del África subsahariana. Esto quiere decir que, desde las condiciones iniciales de la “comercialización forzada”, la gran mayoría de los africanos tuvo ahora que perseguir su reproducción bajo la “dura compulsión de las fuerzas económicas”, en términos de Marx. Las relaciones sociales básicas y las compulsiones del capitalismo fueron internalizadas en la producción “campesina”, en los circuitos familiares (rurales) y en la “comunidad”, así como también en los crecientes centros urbanos⁸. Incluso, muchas regiones ya habían

8 La racionalización teórica para esta observación nunca ha sido mejor explicada que en el importante trabajo de Gibbon y Neocosmos (1985). Ellos también clarificaron las malas interpretaciones de las investigaciones del capitalismo en la periferia imperial que fallaron o en encontrar o en etiquetar sus relaciones mercantiles como menos que

sido caracterizadas por múltiples conexiones entre la agricultura y otras prácticas económicas en las divisiones sociales de trabajo constituidas por las relaciones de mercado, como el empleo asalariado y el autoempleo en la producción de bienes no agrarios. La demarcación de ciertas áreas rurales como “reservas de trabajo” para fincas agrícolas, plantaciones y minas, abastecidas por las migraciones cíclicas de trabajadores, fue establecida a lo largo de regiones bastante diferentes del África subsahariana. Por ejemplo, con la emigración desde zonas sahelianas del oeste de África a la dinámica de la producción de cultivos para la exportación pequeño capitalista de sus cinturones boscosos, y la migración laboral a los grandes complejos mineros del sur de África. Por lo tanto, las combinaciones del “azadón y salario” (el título de Cordell et al., 1996)⁹ fueron centrales para la reproducción de muchos “campesinados” africanos en el momento de la independencia, en algunos casos, desde el temprano período colonial y, en muchos otros, más allá de las zonas más evidentes de “reservas de trabajo”, como el sur de Mozambique y los bantustanes en el sur de África.

INDEPENDENCIA Y DESARROLLISMO, 1960-1970¹⁰

El tardío modelo colonial del desarrollo económico liderado por el Estado fue en gran parte asimilado por los nuevos gobiernos africanos independientes, aunque reforzado y reconfigurado, en algunos casos, por aspiraciones a un planeamiento y acumulación de mayor extensión y por el compromiso con una “construcción nacional” como

“completamente” o “propriadamente” capitalistas porque no replican las de un capitalismo “avanzado” ideal-tipificado (o “estereotipado”, en términos de Lenin).

9 Esto proveyó el objeto principal de muchas de las teorizaciones de las “articulaciones de los modos de producción” en el contexto africano, y fue anticipado por un comunista sudafricano, D. I. Jones, en 1921: “Ésta, entonces, es la función de los territorios nativos, servir como baratos suelos de cría de trabajo negro –los repositorios del ejército reserva de trabajo nativo–, a los que succionan o dejan afuera de acuerdo con las demandas de la industria. Por medio de esos territorios, el capital está librado de la obligación del pago de salarios para cubrir el costo del trabajador para reproducirse”. También citado por Legassick y Wolpe (1976:87).

10 La mayor parte de los países de África subsahariana consiguió la independencia política en un corto tiempo, desde los tardíos cincuenta hasta mediados de los sesenta; es notable que las excepciones principales estuvieran en el sur y en el centro de África, en países con extensa propiedad de la tierra de origen colono (blanco): Angola y Mozambique en 1975; Zimbabwe en 1980; Namibia en 1990 y, finalmente, Sudáfrica misma en 1994, siguiendo la transición desde 1990. En todos estos casos (como en otra colonia importante de Portugal, Guinea Bissau, en el occidente de África), la lucha armada jugó un rol en la liberación, a diferencia de la ola anterior de descolonización en el África subsahariana, aparte de la insurrección de los Mau Mau (la Armada por la Libertad y la Tierra) en Kenya, durante los cincuenta.

RECUPERANDO LA TIERRA

un proyecto social y político¹¹. El resultado fue un gran aumento de la escala de inversión estatal, tanto en el sector económico como en el social, y en relación con el primero, con la finalidad de dirigir la mayoría de la industrialización por sustitución de importaciones, con grandes proyectos de infraestructura (en comunicaciones, generación de energía, agua), y con la producción primaria (agricultura, explotación minera, maderera), generalmente a través de la formación de campañas paraestatales (en las utilidades públicas de finanzas y manufacturas, ingresos agrarios y servicios). Muchas de estas inversiones fueron financiadas por la ayuda externa, cuyas agencias, y no menos el Banco Mundial, estuvieron involucradas en el diseño –e incluso en la dirección, mediante asistencia técnica– de gran parte de estas ambiciosas empresas de desarrollismo estatal, durante el período inicial y optimista de la independencia.

El advenimiento de la independencia política en la mayor parte del África subsahariana llegó en un momento propicio de la economía mundial, entonces en su período de mayor y sostenido crecimiento (la “edad de oro” del gran auge de posguerra)¹². La década del sesenta vio la tasa de crecimiento más grande de exportación agrícola desde los veinte, y para muchos países africanos esto significó su primera década de independencia, la experimentación del período de más alto crecimiento económico nacional desde el fin del gobierno colonial (Arrighi, 2002). Durante la década del setenta, sin embargo, la versión africana de una crisis fiscal del Estado fue exponiendo la vulnerabilidad extrema de sus economías y su gente dentro del imperialismo. Ello fue vivenciado con creciente intensidad a medida que la recesión mundial producía una serie de “golpes externos” a las economías africanas (con excepción, inicialmente, de los exportadores de petróleo y de un nuevo exportador de diamantes en el caso de Botswana).

11 Cooper (2002) argumenta, especialmente en el capítulo 5, que las continuidades del proyecto (estatista) de “desarrollo” fueron más significativas en ciertos aspectos que el momento político de ruptura con el gobierno colonial hasta la independencia.

12 Ello también fue la “edad de oro del capitalismo *nacional*” (Desai, 2002: capítulo 14), centrada en los Estados Unidos, Europa occidental y, de manera creciente, en Japón y Asia oriental, antes de que semejantes “capitalismos nacionales” diesen lugar a una acelerada (segunda) ola de globalización a partir de los ochenta, catalizada por la profunda recesión internacional de los setenta. En líneas paralelas, Friedmann (1993) provee un importante análisis del “régimen internacional de alimentos” bajo la hegemonía de una única “agricultura nacional”, la de los Estados Unidos, hasta los comienzos de los setenta: cómo esa hegemonía (en su relativa estabilidad) fue socavada por la formación de las “agriculturas nacionales” rivales que emularon el modelo estadounidense (de una alianza agro-empresaria con el Estado), y cómo las corporaciones agro-empresarias globalizaron cada vez más sus estrategias y prácticas de negocios.

Como es posible deducir de lo anterior, la independencia protagonizó un gran crecimiento del Estado en términos de sus ambiciones sociales y económicas, sus gastos y porción del PBI, el empleo y su centralización administrativa y política. Todas estas características fueron necesariamente consideradas para, o al menos justificadas por, las demandas del “desarrollo nacional” y la “construcción nacional” luego del subdesarrollo forzado y la explotación del gobierno colonial, como la supremacía de Estados unipartidarios, en formas *de jure* o *de facto*, y el incremento frecuente de los golpes y regímenes militares que de manera semejante buscaron su legitimidad en el fracaso de los gobiernos civiles para llevar a cabo la promesa de desarrollo. Por otra parte, las instituciones de gobiernos descentralizados que fueron promovidas, particularmente durante los últimos años del dominio colonial, fueron percibidas, luego de la independencia, como ineficientes y propensas a la generación de rivalidades subversivas, étnicas y regionales en contra del desarrollo y la construcción nacional. Fueron entonces progresivamente abolidas o convertidas en meros gestos al quitarles el control de los presupuestos y el nombramiento de personal, y localizando fuertemente las tareas del desarrollo en el gobierno central, con su necesaria concentración de recursos y pericia (Kasfir, 1993). Mamdani (1996) identifica dos herencias del Estado colonial tardío: lo que llama Estados “conservadores” (por ejemplo Kenya, Botswana y Nigeria) retuvieron un lugar clave para los caciques, y por lo tanto identidad “tribal” en las estructuras de la administración en las zonas rurales; por su parte, los Estados “radicales” (Tanzania, Mozambique luego de 1975, y en menor medida, los Estados francófonos de África occidental como Guinea, Malí y Senegal) abolieron las autoridades consuetudinarias, pero reprodujeron el “despotismo descentralizado” a través de las prácticas “mandatarias” de las camarillas locales, tanto políticas como administrativas, sobre los sujetos rurales. Entre estos casos, la implementación de la aldeanización de las “campanas” de Tanzania en la década del setenta –otra metáfora apropiadamente militar– puede ser vista como emblemática.

Las políticas de modernización de la agricultura dirigidas por el Estado continuaron luego de la independencia. En muchas instancias, la escala de las intervenciones aumentó, particularmente en forma de grandes proyectos de riego, granjas estatales y empresas conjuntas con capitales agro-empresarios extranjeros. Éstas y similares intervenciones para el desarrollo agrario implicaron un aumento de las apropiaciones de la tierra, comúnmente dentro de una afirmación constitucional más amplia de adquisición estatal de la tierra, que tomó posesión de, o extendió las provisiones del gobierno colonial (Francis, 1984; Shivji, 1994). Dicho de otra forma, la tenencia de la tierra se mantuvo, en gran medida, sin cambios desde el tardío período colonial. Donde el gobierno

RECUPERANDO LA TIERRA

militar inició la titularización de tierras para establecer la posesión vitalicia (por ejemplo en Kenya), esto tendió a continuar. En aquellos lugares donde la tenencia consuetudinaria fue reconocida bajo el gobierno colonial, explícitamente o por omisión, también se produjo la misma tendencia, aunque, como se indicó más arriba, frecuentemente como un terreno que fue impugnado debido a las presiones de la simple reproducción para la mayoría de la profundización de las relaciones de mercado (y con oportunidades para la acumulación de algunos) y del cambio demográfico asociado, incluyendo la migración a nuevas zonas fronterizas de agricultura.

Hubo, sin embargo, cambios significativos de los antecedentes coloniales, por ejemplo, en el énfasis más centralizado en la superación de la pobreza rural como meta de las políticas de desarrollo. Ello se puso de relieve en el aumento de los ingresos a través de esquemas agrarios y del bienestar familiar con el impulso al consumo de bienes públicos (agua potable, educación, cuidado de la salud). Las juntas de mercadeo y otras corporaciones paraestatales, tanto en cultivos de exportación como en alimentos básicos, fueron en general remodeladas como agencias proactivas de integración vertical junto con sus respectivas cadenas de bienes de mercado. A partir de sus ingresos, proveían servicios de extensión y crédito para la venta, el almacenaje y la distribución de alimentos básicos. Modeladas en la creciente integración de la agricultura en los países capitalistas avanzados, por medio del agro-negocio y el capital de la industria alimenticia de la agricultura (y ayudadas por las políticas externas de comercio y cultivo de los Estados Unidos y la Unión Europea), tales expansiones institucionales fueron parte de una estrategia más general de “modernización” del “campesinado” o del cultivo “familiar” que presuponía una intensificación de la mercantilización, especialmente en la producción de cultivos de exportación (Bernstein, 1981; Raikes, 1988). No obstante, en las condiciones políticas iniciales de la independencia, probablemente haya habido una reducción de las intervenciones de la tierra en nombre de la regulación y la conservación del medio ambiente (al menos en cultivos agrícolas y mixtos más que en áreas de pastura). Esto puede haberse debido a que estaban subordinados a los imperativos del crecimiento de la producción agrícola (y productividad), y a que la imposición y política de los Estados coloniales había generado una resistencia en las áreas rurales que hizo su propia contribución al anticolonialismo popular y a la legitimidad de los partidos nacionalistas que demandaban la independencia.

En la década del setenta, el optimismo y las aspiraciones de los primeros años del desarrollo poscolonial liderado por el Estado –y de hecho, algunos de los logros irregulares– se convirtieron en sujeto de crecientes tensiones, parcialmente a causa de sus contradicciones intrínsecas (los

intelectuales socialistas africanos fueron pioneros en el análisis de esto) y, ciertamente, por las tendencias adversas en los mercados mundiales, la reestructuración económica global y los realineamientos políticos que los sucedieron. Se generó así un torrente de discursos centrados en la patología de los Estados africanos y en el desarrollo dirigido por el Estado, en un momento en el que los temas medioambientales (degradación, conservación, sustentabilidad) se ubicaban en el centro de las preocupaciones, y en el que, especialmente los setenta, sumaban imágenes dramáticas de la sequía y del hambre como manifestaciones de la “crisis” africana.

LA ERA DEL AJUSTE ESTRUCTURAL, DESDE 1980 HASTA EL PRESENTE

Los ambiciosos planes de gasto y los compromisos de desarrollo liderados por el Estado después de la independencia, combinados con el aumento de los costos de las importaciones de petróleo (y otras importaciones estratégicas), luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentara los precios en los setenta, llevaron a la escalada los préstamos externos para los gobiernos africanos (alentados por los bancos americanos y europeos, con vastas cantidades de petrodólares para prestar). La deuda que resultó estaba agravada por la recesión en las economías industrializadas con la presión descendente sobre los precios de los productos básicos. Ello redujo las ganancias del intercambio extranjero de muchos países africanos y socavó su capacidad de servicio de créditos, sobre todo a medida que aumentaban las tasas de interés real. La incidencia de grandes sequías en muchas partes de África exacerbó el déficit de cambio externo al incrementar la necesidad de importación de alimentos (Raikes, 1988). En un creciente número de países (Etiopía, Somalia, Sudán, Angola, Mozambique, Ruanda, Zaire/Congo, Liberia y Sierra León), estas presiones se agravaron dramáticamente por la guerra. Por medio de la combinación de estos factores, virtualmente cada país del continente entró en negociaciones con instituciones financieras internacionales (el Fondo Monetario Internacional [FMI] y el Banco Mundial) para conseguir la reprogramación de la deuda y otras ayudas financieras, a cambio de adoptar e implementar políticas públicas de “ajuste estructural” y buscando su ventaja en los mercados globales financieros y comerciales¹³.

El precio de semejantes apoyos fue la introducción de reformas de “ajuste estructural” amplias (si eran implementadas desigualmente) en la política económica (micro y macro), en la política social y en las ins-

13 Desai, quien cree en los beneficios tanto como en lo inevitable de la globalización, comenta que “las pretensiones de omnisciencia del FMI habrían sido absurdas si sus consecuencias no hubieran sido tan trágicas”.

tituciones públicas. Las principales líneas de tales reformas son bien conocidas. La primera fase del préstamo de ajuste estructural (SAL, por su sigla en inglés) hizo hincapié en la “reducción del Estado” para “alcanzar los precios justos”, es decir, para permitir al “mercado” (o al mecanismo de mercado) lograr su eficiencia eliminando las innumerables fuentes de “distorsión” de precios resultante de la intervención del gobierno. En el nivel macroeconómico, esto se centró primero y ante todo en la devaluación (las tasas de intercambio sobrevaluadas se mantuvieron para favorecer las importaciones y a los importadores, en detrimento de los productores de bienes exportables y, en especial, del sector de la agricultura) y se combinó con la liberalización del mercado interno y externo, las reducciones intensas del gasto público (y del empleo), la privatización de industrias y servicios estatales, y así sucesivamente. Una segunda fase del SAL sumó a la primera la preocupación acerca de la “capacidad de construcción” de las instituciones públicas y gubernamentales, cuando se apreció que el crecimiento económico y el bienestar en África requería que los Estados fueran no sólo “magros” sino también más eficientes. Un discurso más generalizado del “buen gobierno” se incorpora a lo que puede o no ser una tercera fase del SAL, constituida por lo que es demandado (y respondido) como un consenso “posWashington”, y delimitada por la defunción (¿o la modificación?) de las ideas neoliberales anteriormente más virulentas y triunfalistas (Fine et al., 2001).

El presupuesto general del SAL respecto de la agricultura es, por supuesto, alentar las exportaciones agrícolas de acuerdo con las “ventajas comparativas” de las economías africanas (y sus dotaciones de recursos y de factores) en el comercio internacional, con el fin de revivir el motor del crecimiento económico y restaurar y mantener la estabilidad macroeconómica (Bernstein, 1990; Gibbon, 1992). Esto se alcanzaría, adecuadamente, con la rehabilitación de los cultivos históricos de exportación (cuya producción se había deteriorado durante los años setenta y ochenta) y/o con la promoción de las exportaciones “no tradicionales” de alto valor (relativo) apuntadas a los nichos de los mercados globales –productos hortícolas e, incluso, plantas ornamentales y flores usualmente cultivadas bajo contrato y que requieren una comercialización altamente organizada y eficiente (Little y Watts, 1994; Raikes y Gibbon, 2000; Daviron y Gibbon, 2002)¹⁴. Algunas de las condiciones (y de las constricciones) de este manejo de la agricultura (intensificada) para la exportación en la globalización actual, tanto como sus modalidades y efectos, son esquematizados en el primer trabajo de este volumen.

14 Las drogas pueden estar entre las exportaciones comúnmente “no tradicionales” más dinámicas e importantes de África (marihuana/cannabis) y entre re-exportaciones (heroína, cocaína) en el nuevo mundo feliz de “globalización” contemporánea (Bernstein, 1999).

Yuxtapuesta (más que integrada) a esta estrategia de “plataforma de exportación” (Friedman, 1993) del renacimiento de la agricultura, de la productividad y del crecimiento del ingreso, se encuentra la preocupación por la degradación y la conservación del medio ambiente. Ésta volvió a tener una centralidad a partir de los ochenta comparable a la de los treinta y los cincuenta y se enlaza, ahora, con los discursos de la seguridad alimenticia, la pobreza rural y el sustento. El comienzo de la sequía prolongada en el Sahel en los setenta y en otras partes (en el noroeste de África en los setenta y los ochenta, en Sudáfrica a principios de los ochenta y nuevamente en los comienzos de los noventa) revivió las percepciones coloniales de los usuarios de las tierras africanas como agentes de la destrucción medioambiental. Las interpretaciones alternativas que vinculaban la indigencia saheliana a patrones de mercantilización que llevaron a la expansión de las tierras cultivables a más áreas proclives a la sequía (por ejemplo en Franke y Chasin, 1980) quedaron mayormente a la sombra de la narrativa neomalthusiana de gran parte del pensamiento medioambiental europeo y norteamericano: la presión de la población sobre las ecologías frágiles generó pobreza en aumento y las frecuentes crisis de hambruna en el África rural vinculadas al declive de la productividad de la base biofísica de recursos (tierra, vegetación, agua), un proceso de “degradación” del que la “desertificación” es un emblema.

El punto de vista medioambiental sobre la crisis rural como consecuencia del exceso de cultivo y de la degradación de los “ecosistemas frágiles” por parte de las poblaciones rurales pauperizadas y en rápida expansión –desde las sequías sahelianas de los setenta a las subsecuentes cosechas malogradas en Etiopía y en el sur de África– se volvió un elemento potente y central de la sintomatología de las miserias africanas. Mientras que las variantes de esta narrativa también les echan la culpa a los gobiernos africanos incompetentes y predadores que exacerbaban la pobreza rural a través de la distorsión de los mercados agrícolas, el paradigma neomalthusiano esencial persiste en la retórica de las agencias de desarrollo internacional. De esta manera, el Banco Mundial (1996: 22-25) caracteriza a la agricultura de la región sudano-saheliana como de “cultivos cambiantes”, donde “una de las tasas anuales de crecimiento de la población más rápidas del continente [...] ha terminado siendo una espiral descendente en la degradación de los cultivos extensivos y en la escasez de leña [...] ha aumentado la escasez de agua y la pérdida de hábitat naturales”. De forma similar, el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (IFAD, 1994:10) se refiere a “un ciclo vicioso de sinergias negativas” en el que “incapaz de incrementar los rendimientos, el aumento del número de personas pobres pone presión al medio ambiente minando los suelos, destruyendo los bosques y agotando las reservas de vida silvestre [...] Y porque los pobres tienden a

RECUPERANDO LA TIERRA

tener altas tasas de fertilidad [...] la población crece a tasas elevadas y el ciclo destructivo vuelve a comenzar”¹⁵.

La “crisis” actual, duradera y compuesta, del África subsahariana –de “desarrollo”, de pobreza, seguridad social y gobernabilidad, marcada por guerras, los estragos del SIDA y los “desastres” ecológicos– la convierten virtualmente en una zona ideológica “libre” para un espectro de diagnosis y prognosis que convergen en explicar la crisis por los problemas internos de África, bien en relación con las prácticas medioambientales destructivas de sus pobres rurales (recién citadas), con la codicia de sus “Estados neopatrimoniales” (Van der Walle, 2001), o mediante el reciclado de lo que pueden llamarse las narrativas “primordiales” del “excepcionalismo” africano (de origen colonial). Es decir que la raíz del problema de África es su africanismo [*africanness*] (por ejemplo en Hyden, 1983; Chabal y Daloz, 1999). Habiendo esbozado estos aspectos del contexto más amplio, el siguiente paso es focalizar más de cerca (aun en términos generales) aspectos de la agricultura, de la reproducción y del sustento y del lugar que ocupa en ellos el acceso a la tierra en la coyuntura actual de ajuste estructural y globalización.

TRABAJO Y TIERRA, REPRODUCCIÓN Y CLASE

El difunto Phil Raikes (2000) observó que en un importante sentido no hay una “agricultura africana”, pero sí un rango de agriculturas, por lejos, mucho mayor que en Europa, definido no sólo por las condiciones y tecnologías medioambientales de cultivo, sino también por las relaciones sociales y las formas de su organización y sus contribuciones al sustento: la reproducción del trabajo. Los patrones y las contradicciones del cambio respecto del trabajo, la tierra y la reproducción en la historia africana moderna, con todas sus especificidades de tiempo y lugar, desafían cualquier generalización empírica simple. Reconocer esto no es resignarse al particularismo etnográfico favorecido por (algunos) antropólogos o histo-

15 Esto no implica negar la importancia del cambio demográfico. Por un lado, las visiones malthusianas son penetrantes, y en general reaccionarias en su propósito y/o en su efecto (Ross, 1998). Por otro lado, hay una fuerte contranarrativa malthusiana en los estudios de África, que contiene reflexiones mezcladas. Boserup (1965) es una fuente clásica del contraargumento malthusiano aplicado al desarrollo de la agricultura, en el que un África históricamente poblada de manera irregular es vista como el ejemplo de los sistemas agrarios “centrados en lo femenino”. Una inclinación ideológica bastante sesgada se encuentra en Tiffen et al. (1994), donde se fusiona una especie de natalidad con una creencia en las virtudes de los mercados. En relación con estos últimos puede verse el comentario crítico de Murton (1999). El punto principal es que los patrones de crecimiento de la población –y distribución, dada la marcada movilidad de los productores rurales africanos, antes y ahora– y sus efectos, en condiciones de relaciones y dinámicas sociales específicas (siendo ellas las claves del cambio demográfico), son centrales para cualquier análisis materialista apropiado.

riadores, sino evitar algunas nociones demasiado esquemáticas de un común –y uniforme– síndrome africano¹⁶. En cambio, el propósito debería ser identificar “temas generales”, de los que las historias específicas originan “variaciones complejas”, para adaptar un término formulado en otro contexto por Gilson (1982: 51). Los temas generales que nos conciernen aquí son los procesos de mercantilización, de deterioro de las condiciones macroeconómicas, incluyendo aquéllas de los mercados laborales y de las presiones que soporta la reproducción social en combinación con la creciente inequidad durante el período actual de globalización y ajuste estructural. Sus variaciones complejas abarcan las diferencias según el modo en que esto es experimentado y entre las formas de lucha social que las respuestas colectivas e individuales generan¹⁷.

Una generalización que puede hacerse con confianza, sin embargo, es que la pobreza y la inseguridad han crecido y que los estándares de bienestar han declinado, para la gran mayoría de los africanos, en las décadas recientes. Esto es un efecto de las deterioradas condiciones de reproducción concernientes tanto al trabajo asalariado como a la agricultura, y de las diferentes maneras en que se combinan; también es producto del retroceso de la provisión de bienes públicos, como la atención sanitaria y la educación (a pesar de lo inadecuados que ya eran), en especial en las áreas rurales¹⁸. A fines de la década del noventa, al menos la mitad de los países del África subsahariana registró volúmenes menores de exportación agrícola que en la de la década del setenta (Sender, 2002: 191). Las presiones en la producción de cultivos de exportación no excluyen, en medida variable, aspectos del cambio en las condiciones del mercado mundial (como la superproducción sistémica de muchos cultivos tropicales de exportación); la reorganización de las cadenas comerciales globales y un general, si no uniforme, giro de las cadenas

16 Sin omitir cualquiera de esas nociones con contenido y propósito ideológico diferente (positivo) ni el ejemplo (negativo) dado más arriba. Así, por caso, la noción de Samir Amin de “la unidad de la personalidad de África” (1976: 318).

17 Respecto de la “variación compleja”, A. Sivanandan (1990: 8) describe cómo su experiencia de los diferentes lugares donde creció, estudió y trabajó en Ceylon/Sri Lanka, lo ayudó más tarde a “ver cómo el colonialismo británico y otros habían impactado en nuestro país en períodos históricos diferentes, de distintas maneras, en diferentes lugares, y habían arrojado formaciones sociales muy diversas [...] dejándonos en un subdesarrollo de formas variadas, que apuntalaron las diferencias entre la gente de nuestro país y que más tarde se discutieron y definieron en términos étnicos o raciales”. Ambos puntos –la diversidad de las formaciones sociales y los procesos a través de los cuales la diferencia se define en términos étnicos– son de gran importancia tanto para la consideración de la cuestión agraria como de otras problemáticas sociales en el África contemporánea.

18 Para una útil reseña de los patrones del gasto público bajo la estructura del ajuste estructural, ver el capítulo 2 de Van der Walle (2001).

impulsadas por el “vendedor” hacia las conducidas por el “comprador” en los procesos de globalización (desde los mercados financieros desregulados hasta las nuevas tecnologías de procesamiento y transporte; desde la regulación estándar de alimento hasta las estrategias de poner marcas y procedencias en los productos de las crecientes corporaciones concentradas de la industria de alimentos); y los efectos del ajuste estructural, específicamente con la privatización y la liberalización en las condiciones de la producción agrícola (por ejemplo, en la importante caída del uso de fertilizantes por parte de los pequeños granjeros), en el comercio (deterioro de la infraestructura rural de transporte) y, como consecuencia, en la cantidad y calidad de los cultivos destinados a la exportación –que también están determinados, por supuesto, por los efectos negativos sobre el precio y el ingreso de las tendencias globalizantes apuntadas (mercado global)¹⁹.

Por otro lado, es razonable concluir que a la producción de alimentos (en conjunto) le ha ido mucho mejor. Aunque la información sobre la producción de alimentos del África subsahariana es poco confiable, es muy probable que esté subestimada antes que sobrestimada, y ello por razones tanto técnicas como políticas (Berry, 1984; Raikes, 1988; Wiggins, 2000; Sender, 2002), sin omitir, por lo demás, sus deformaciones de género (Guyer, 1983). Muchas áreas rurales cercanas a los centros de progresiva demanda urbana han virado de los cultivos para exportación –con sus típicos pagos anuales únicos luego de la cosecha y sus reembolsos en declive– a la producción de cultivos de alimentos, estimulada también por la atracción de lo que Ponte llama “cultivos rápidos”, que ayudan a “satisfacer la creciente necesidad de cantidades cada vez mayores y más regulares de efectivo” (2002: 122). El autor también muestra cómo el desplazamiento a los “cultivos rápidos” puede conducir a nuevas formas de contratos y acuerdos de trabajo (2002: capítulo 7).

Deborah Bryceson (1998: 185) da cuenta del “problema fundamental” (exacerbado, si no causado, únicamente por el ajuste estructural) de la incapacidad de “la agricultura de los campesinos africanos para competir en el mercado global actual”, como un componente de su tesis más amplia de la “desagrariarización” (Bryceson, 1996) o “descampesinización” (Bryceson, 1998), manifestada en la cada vez mayor proporción de los ingresos rurales “derivados de las fuentes no agrícolas”

19 Friis-Hansen (2000) presenta una reseña útil y una discusión de los efectos del ajuste estructural para la agricultura del África subsahariana; Raikes y Gibbon (2000) dan cuenta de los matices empíricos y analíticos de las cadenas globales de mercaderías y de la agricultura africana para la exportación, aspectos que son posteriormente desarrollados en Daviron y Gibbon (2002), quienes se focalizan particularmente en el modo en que el ajuste estructural ha afectado la colocación de las cosechas para exportación dentro de los países productores.

(Bryceson, 1998: 172)²⁰. Al mismo tiempo –y esto es una segunda generalización, o al menos un “tema general” con sus variaciones colaterales– hay una especie de efecto tijera en el trabajo para aquellos cuya reproducción en el África rural está asegurada por las combinaciones del autoempleo, del salario del propio cultivo y del salario conseguido fuera de él, incluyendo a muchos cuyos ingresos no provenientes del agro han sido esenciales, históricamente, para afrontar los costos de entrada y de reproducción de sus empresas agrícolas. Esto quiere decir que “la contracción del sector campesino”, como la denomina Bryceson, se produce junto al colapso de los salarios reales (y de las oportunidades de empleo) en el sector formal²¹. Lo anterior, entonces, ejerce una presión adicional en la reproducción de la agricultura (y a través de ella) y, como consecuencia, intensifica la búsqueda de medios de subsistencia en y fuera de la tierra. Bryceson sugiere que una manifestación de esta “revuelta por efectivo” generalizada (también señalada por Ponte) se localiza en los nuevos mercados de bienes y servicios. Incluso, estas nuevas ramas de la actividad económica rural provocan cambios generacionales, en el género y en otras relaciones familiares por medio de las que la agricultura familiar se organizaba (por ejemplo, hacia una individualización más profunda de la actividad económica, así como también hacia la diferenciación clasista).

Una tercera generalización empírica es que la crisis económica de África es tan abarcativa que incluye a muchos profesionales de la pe-

20 Para estas fuentes no agrícolas da un promedio crudo (a lo largo de las variaciones regionales y domésticas) de aproximadamente el 40%. Las encuestas aldeanas producidas por Ponte (2002: capítulo 8) en Tanzania, en 1994 y 1995, arrojaron los resultados de más del 52% y del 68% de ingresos no agrícolas en el total de los ingresos domésticos rurales en los distritos rurales de Songea y Morogoro, respectivamente. Mi presentimiento es que incluso el promedio crudo de Bryceson está subestimado. Como enfatizan correctamente Francis (2000) y Peters (2004), la “diversificación” de las fuentes del ingreso para los granjeros de África no es nueva, pero indudablemente ha crecido y tomado nuevas formas, que son ensayadas por muchos, en la actualidad, con creciente desesperación. En otra dirección, Cousins (1996), Ferguson (1999), Nyambara (2001) y O’Laughlin (1998), entre otros, ilustran algunos de los efectos de la búsqueda de la tierra en las economías rurales y de las oportunidades para el cultivo por parte de los trabajadores reducidos de la industria minera y manufacturera en Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe y Botswana, respectivamente

21 Bryceson también se refiere a “la falta de sentido de un sector informal sin el contraste de un sector formal” (1998: 186). Éste es ciertamente el caso, a tal punto que el sector informal tiene un rol que jugar en los procesos de crecimiento económico y acumulación, a través de sus vinculaciones simbióticas con el desarrollo de la industria a gran escala por medio del subcontrato de servicios y reparaciones que reducen el costo de los bienes salariales (y así sucesivamente), y ha caracterizado menos a la historia económica del África subsahariana, incluso antes de la crisis actual, que a la de América Latina o a la mayor parte de Asia (Meagher, 1995).

RECUPERANDO LA TIERRA

queña burguesía que proliferaron luego de la independencia y, especialmente, a aquellos con empleo estatal. Esto, entonces, se vincula con un tema general asociado (nuevamente con muchas variaciones complejas en la práctica): cuando la dinámica y las relaciones mercantiles son internalizadas en el funcionamiento social hasta en las zonas rurales más remotas, como en el África contemporánea, la crisis económica y social genera oportunidades de acumulación o reproducción expandida para algunos, tanto como nuevas presiones sobre la reproducción simple para otros. Ello evidencia la inequidad en el terreno de lo social (clasista o de otro tipo). En las condiciones del África actual, éste es un tema que exige prestar atención (como siempre) a la dinámica y a las tendencias de la diferenciación de clase (y otras) entre los “campesinos” (Bernstein, 2000, 2004), entre los “campesinos trabajadores” (semiproletariados; ver Bernstein, 2003, 2004) y en los segmentos de la pequeña burguesía, sin omitir el modo en que las variadas luchas de estos últimos, individuales y colectivas, tanto por la “supervivencia” como por la ventaja, se cruzan en instancias particulares y con cuáles efectos. Respecto de la agricultura, un economista de la corriente principal observa:

Si el acceso a los mercados fue toda o gran parte de la historia, entonces todos los granjeros en cualquier localidad deberían poder beneficiarse. ¿Pero, lo hacen? La diferenciación social dentro del campesinado ya no es un área de estudios de moda, por lo tanto, los estudios de caso publicados en la última década tienden a ser débiles en tales diferencias. Lo que se informa, de todas maneras, confirma nuestros peores temores: las diferencias son sustanciales. Cuándo y dónde florecen las economías agrícolas: parece que el mayor volumen del excedente proviene de una pequeña fracción de los granjeros (Wiggins, 2000: 638).

En resumen, la “crisis de la agricultura africana” –en términos de producción (y productividad), ingreso, contribuciones a la reproducción y de cualquier posibilidad de ganancia– no se distribuye equitativamente a través de los grupos sociales que cultivan o que tienen algún interés en la agricultura y en el acceso a la tierra. Algunos de los que detentan reclamos sobre la tierra reconocidos son demasiado pobres para cultivar: carecen de capital para asegurar los ingresos, comando sobre el trabajo a través de las relaciones sociales de parentesco (generalmente mediadas por relaciones patriarcales de género y generación) o del mercado y/o del acceso al crédito (por supuesto, accesible y oportuno). Esto demanda una evaluación más profunda de nociones persistentes como aquella que sostiene que “la mayor parte de la gente en áreas rurales tiene acceso a la tierra y, por lo tanto, es capaz de cultivarla por su cuenta” (Berry, 1993: 135). Por la razón dada, la segunda observación *no* se sigue necesariamente de la primera, y es probable que lleve a

una subestimación sistémica de aquellos que son incapaces de cultivar por su propia cuenta (o de hacerlo en una extensión significativa) en muchas áreas rurales²². Por otro lado, aquellos capaces de reproducir vigorosas empresas de pequeños productos agrícolas, y *a fortiori* de expandir la escala de sus cultivos, lo hacen casi siempre con fondos de reproducción/inversión derivados del empleo asalariado (y también del comercio y del transporte), como señala Wiggins (2000). Ciertamente, los análisis sofisticados de las trayectorias de los “trabajadores-campesinos” en África del sur –entre otros, First (1983) sobre Mozambique; Bush y Cliffe (1984) y Cousins et al. (1992) sobre Zimbabwe; y Levin y Neocosmos (1989) sobre Sudáfrica– sugieren que las condiciones diferenciales del mercado de trabajo y los ingresos del empleo asalariado a destiempo pueden alimentar la diferenciación del cultivo “campesino” (la producción capitalista pequeña y de pequeños productos básicos) en las zonas rurales a las que regresan los trabajadores emigrantes.

En efecto, incluso la primera parte de la generalización de Berry es problemática, ya que existen amplias evidencias de que hay escasez de tierras arables (y con frecuencia de tierras de pastoreo), especialmente en las áreas con mejores suelos y/o que tienen vínculos de transporte hacia los mercados urbanos, debido a una combinación de la presión demográfica (ver nota 15 de más arriba) y a los patrones de mercantilización. De manera perversa, la mercantilización –además de la necesidad de mayores y más continuas entradas de dinero señaladas por Bryceson y Ponte– se intensifica con el declive sostenido de las condiciones macroeconómicas (el efecto combinado de la globalización y de las políticas de ajuste estructural) y con el efecto tijera que produce la presión sobre el empleo y las oportunidades de ingreso, tanto de los cultivos como de los no cultivos, en resumen, sobre la reproducción. Pauline Peters (2004) presenta un gran número de recientes evidencias concernientes a la competencia por la tierra y a los conflictos que ésta genera, y concluye que dicha competencia y conflicto están impregnados por la creciente inequidad social y formación de clase:

La competencia por la tierra para diferentes propósitos se intensifica debido al crecimiento demográfico y a los movimientos de las personas que buscan más y mejores tierras o huir de los disturbios civiles; los grupos rurales procuran intensificar la producción de alimentos y de productos básicos, mientras que los miembros economizados a partir de un

22 Esto es análogo a la noción de Maasai de que “los pobres no somos nosotros”, es decir, que aquellos sin rebaños en una sociedad pastoril se vuelven por definición no pastoriles. Para ello remitirse a Anderson y Broch-Due (1999), donde hay estudios muy útiles que trazan los patrones de mercantilización y diferenciación que afectan a los grupos pastoriles en África del este.

RECUPERANDO LA TIERRA

salario recortado buscan la tierra para mejorar sus opciones de ingreso y alimentación; los Estados demarcan propiedades para la silvicultura y otras reservas, e identifican áreas dignas de conservación (a menudo bajo presión de los donantes y de los grupos internacionales que ejercen presión); los representantes del Estado y las elites políticas se apropian de la tierra a través de medios que van desde lo cuestionable hasta lo ilegal; y los recursos valiosos que están sobre y debajo del suelo (madera, petróleo, oro, otros minerales) atraen a la explotación intensiva tanto a agentes locales (la juventud desempleada u otrora granjeros buscando formas de conseguir efectivo) como a cadenas transnacionales (de corporaciones multinacionales, gobiernos extranjeros y representantes de estados africanos) [...] No sólo se intensifica la competencia sobre la tierra, sino que también se profundiza la diferenciación social y, aunque ésta toma diferentes formas –entre las que se incluyen los jóvenes contra los mayores, los hombres contra las mujeres, confrontaciones étnicas y religiosas– estas cuestiones dan cuenta de nuevas divisiones sociales que, en suma, pueden ser vistas como formación de clase [...] Las tensiones y luchas que proliferan entre los géneros y las generaciones o entre grupos marcados según la etnia, la religión o la región, están íntimamente sujetos a la dinámica de división y exclusión, alianza e inclusión que constituye la formación de clase (Peters 2004: 279, 291, 305).

LA POLÍTICA DE LA TIERRA

Las complejas variaciones de la política de la tierra abarcan las diferencias entre cómo se experimenta la crisis del desarrollo de África y las formas de lucha social que las respuestas colectivas y sociales generan, como se señala más arriba. El rango de la variación, así como también el de su complejidad, se extiende desde las disputas por la tierra en muchas áreas rurales alrededor de los reclamos altamente localizados y de los contra-reclamos de orígenes y derechos “comunitarios” (y “étnicos”), sus tensiones patriarcales y generacionales, hasta los “reasantamientos de vía rápida” altamente contradictorios de Zimbabwe desde principios de 2000, “único caso de redistribución de la tierra, en el mundo actual, completo y confiscatorio sancionado por el régimen” (Bernstein, 2003: 37). En el primer trabajo de este volumen, y desde una perspectiva zimbabwense, Moyo y Yeros escriben sobre las zonas africanas de cultivo campesino y sostienen:

Mientras las cuestiones de raza y el sistema terrateniente (relacionado con el sistema de arrendamiento de la propiedad) pueden no ser de incumbencia en las áreas comunales (como en Sudáfrica y Zimbabwe), los temas que sí son pertinentes son potentes: la inseguridad de la tenencia, la subdivisión y los mercados informales de tierra; la alienación y la concentración de la tierra. Ello, combinado con cambios en el uso de la tierra determinados externamente y con sistemas no democráticos de gobierno local para adjudicar y administrar las disputas territoriales.

Los temas que ellos resaltan se conectan con aquellos investigados por Peters (citado anteriormente). Al mismo tiempo, son reconocidos como los efectos de la “integración colonial y poscolonial sobre la producción mercantil generalizada”, que Moyo y Yeros indican, y que yo también señalé (al mismo tiempo se enfatizan sus variadas trayectorias y formas históricas específicas en el África subsahariana). Esto necesita, ahora, un poco más de elaboración. Primero, y para reiterar, la producción mercantil generalizada está *internalizada* en las relaciones y circuitos sociales del cultivo y del trabajo en África, así que necesariamente genera la dinámica de clases que Peters señala. La implicancia es que la crisis de África no puede ser atribuida exclusivamente a un agente “exterior” (maligno)²³.

Segundo, y sin embargo –como sugiere también Peters– esa dinámica de clases no adopta generalmente la forma extraordinaria de entidades y prácticas manifiestas de clase. Una razón para ello es la ausencia, en la mayor parte de África, de propiedad de tierras a una escala y a una profundidad histórica y social semejante a la de gran parte de la historia latinoamericana y asiática (y del sur de África), como Moyo y Yeros reconocen; por otro lado, la continua prevalencia (si no universalidad) de cierto grado de labranza de la tierra para la reproducción del trabajador, en ausencia de un despojamiento generalizado de la tierra (un punto también observado por Peters).

Otra causa es que la dinámica de la producción mercantil generalizada, además de su internalización en una amplia gama de formas de pequeña producción mercantil agrícola, genera tensiones y disputas en las zonas rurales africanas, que son experimentadas y peleadas no como divisiones de clase “puras” sino como “entre generaciones y géneros o entre grupos categorizados por la región, la religión o la etnia” (Peters, citado anteriormente.). Esto es parte del legado de la construcción colonial y de la conexión entre identidad “tribal”, la tenencia “consuetudinaria” de la tierra y la autoridad política (patriarcal), idiomas a través de los cuales las tensiones de clase se expresan, tanto en una suerte de “guerra civil dentro de la tribu” (Mamdani 1996) como en las luchas entre entidades corporativas (clase, cruzada), grupo étnico, clan, “comunidad” rural, por los recursos de tierra arable y de pastoreo, agua y

23 Aun cuando las economías y los productores africanos son especialmente vulnerables a los efectos de la globalización, se debería entender tal inversión ideológica a la luz de las imágenes extremadamente negativas de la crisis africana y de su atribución a las deficiencias intrínsecas de “África” –señaladas anteriormente–, pero que nos distraen de, en vez de contribuir a, las demandas de analizar las realidades de esa crisis. Un ejemplo de una “imagen espejo” similar (y conectada) del efecto de la inversión ideológica se dio en la nota número 16.

RECUPERANDO LA TIERRA

bosque. Semejantes luchas están, en general, articuladas por aquellos que demandan la legitimidad de la “tradicición” para representar los intereses de su clan o “comunidad”, y quienes pueden ser tomados de, o en alianza con, la pequeña burguesía (de base) urbana, cuyos intereses sobre la tierra rural han sido intensificados por su propias crisis de reproducción, como anteriormente observamos.

Tercero, hay poca experiencia en la historia africana moderna de *organización* político-rural popular a escala más amplia centrada en temas agrarios y de la tierra, nuevamente en contraste con América Latina y Asia, y relacionada con sus historias respectivas (sujetas a sus propias “variaciones complejas”) de movimientos sociales rurales y ligas campesinas, sindicatos u otras formas de organización, asociaciones y luchas de trabajadores agrarios, tanto (relativamente) autónomas como aliadas con, u organizados por, partidos comunistas y socialistas. Se ha indicado anteriormente, en la nota 10, que la lucha armada con base rural constituyó una característica importante de la política de liberación en los territorios de Portugal (con su “colonialismo” atrasado) durante los sesenta y setenta, así como en otras colonias, particularmente en Kenya en los cincuenta y en la última Rhodesia/Zimbabwe. Hoy, y más generalmente en el África “campesina” (aquella de la *économie de traite*), aparte de “guerras étnicas” totales, en las que frecuentemente la tierra es un tema significativo²⁴, las confrontaciones más abiertas y, ocasionalmente más violentas, sobre la tierra, manifiestan la resistencia del clan y la “comunidad” ante el desalojo a gran escala llevado a cabo casi siempre por el Estado y en nombre de grandes proyectos (básicamente financiados por donantes) de “desarrollo”: esquemas de irrigación, granjas estatales o empresas conjuntas con agro-negocios, minería y/o silvicultura. Se trata principalmente de acciones *defensivas* y, aunque es improbable que tengan alguna orientación y composición de clase clara, producen programas sociales e ideológicos más amplios como luchas democrático-populares, cuya importancia (o, en efecto, sus límites) no se puede negar.

24 Para ello contamos con el horrible ejemplo del genocidio en Ruanda. Sin embargo –y es un “sin embargo” enorme–, una comprensión adecuada de los acontecimientos en Ruanda implica entender tanto los orígenes de las tensiones respecto de la tierra en los procesos precoloniales de construcción del Estado y sus disputas (Pottier, 2002), como hacer un análisis político específico del Estado y de su formación (Mamdani, 2001). Las presiones masivas sobre la tierra y la reproducción, exacerbadas por la caída de los precios de los principales productos para la exportación en el mercado mundial (café, en el caso de Ruanda) y las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial –condiciones muy difundidas en África– no son suficientes para explicar lo que pasó en Ruanda. La “traducción” de tales “hechos sociales” en diferentes tipos de “hechos políticos” siempre requiere otro modo de análisis (Mamdani, 1996).

En suma, las tensiones y conflictos sobre la tierra dirigidos por los tipos de procesos generales bosquejados –que implican un rango de actores sociales y prácticas colectivas e individuales y, que a menudo están marcados por características fuertemente locales, variaciones complejas de tiempo y lugar– se extienden en las zonas rurales de África y parecen estar intensificándose, como convincentemente lo argumenta Peters. Al mismo tiempo, las dinámicas de clase subyacentes en estas tensiones y conflictos se manifiestan en formaciones evidentes de prácticas políticas, ideológicas y de organización clasista. Aquí, como en cualquier otro lado, esto provee un amplio espacio ideológico para la defensa populista de los derechos de la “comunidad” y de las luchas de esa categoría amorfa que es el “pobre rural”. Para llevar este punto contencioso más lejos, permítanme concluir sugiriendo –en forma de algunas observaciones resumidas– que muchos de los temas indicados son clave para el entendimiento de la dialéctica de la única *ofensiva* contra la propiedad de la tierra (capitalista) en Zimbabwe²⁵.

Primero, muchas de las dinámicas, contradicciones y tensiones de la emergencia y de la reproducción de la producción generalizada de mercancías en zonas africanas de agricultura “campesina”, además de sus tendencias de diferenciación de clase, también se encuentran en las “áreas comunitarias” históricas de Zimbabwe. Los discursos de la “usurpación” de la tierra sujeta a demanda que compiten entre sí, y las prácticas asociadas de desalojo no están confinados a la propiedad de la tierra –blanca– sino ampliamente esparcidos en áreas de tierras comunitarias –negras–, como se observa por ejemplo en Hammar (2001) y Nyambara (2001).

Segundo, las “invasiones” de granjas, en general de propiedad blanca, de fines de febrero de 2000 (subsecuentemente denominadas “asentamientos de vía rápida” en el lenguaje oficial), fueron inicialmente lideradas por la peculiar formación política de la Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional de Zimbabwe (ZNWLVA, por su sigla en inglés), asociada, en muchos casos, con funcionarios y activistas del partido político gobernante ZANU-PF y apoyada por elementos de la policía y la armada (Marongwe, 2003). Siguiendo una historia de políticas de ocupación y de luchas locales de gran propiedad de la tierra a partir de la independencia (en algunas instancias seguidas por la represión y el desalojo estatal) y en medio de una crisis económica y política acelerada, el régimen ZANU-PF finalmente sancionó, luego de dos décadas de vacilación e inconsistencia en la cuestión agraria, “asentamientos de vía rápida”. En una revisión temprana de las

25 Me apoyo aquí en la discusión más completa sobre Zimbabwe que se ofrece en Bernstein (2004).

RECUPERANDO LA TIERRA

variadas instancias, locaciones, tiempos y agentes de la ocupación de la tierra durante el levantamiento de 2000, Moyo (2001) reconoció sus “numerosas olas contradictorias y localizadas”, el gran rango de actores involucrados –con foco en el “liderazgo” de hecho o aspirantes a políticos partidarios, funcionarios estatales, veteranos de guerra y caciques, todos actuando en concierto con o independientemente de las directivas nacionales del ZNLWA y ZANU-PF– y una combinación social heterogénea que abarca desde “comunidades” rurales, miembros de la clase media urbana y, como muchos notaron, milicias de la juventud desempleada, rural y urbana, movilizadas también por el ZANU-PF.

Tercero, no hay ninguna razón para dudar de que las energías políticas populares –aquellas que he llamado en algún otro lugar la cuestión agraria del trabajo (Bernstein, 2004)– fueron movilizadas en las invasiones de la tierra de Zimbabwe, pero debería ser claro que constituyeron *sólo un elemento* de las fuerzas de clase en esta redistribución masiva de la tierra. Las “olas contradictorias” (Moyo) del “asentamiento de vía rápida” también incluyeron futuras tomas de la tierra por la clase estatal, por agentes (negros) burgueses –que ya poseían cerca del 20% de las grandes propiedades de tierra– y por otros integrantes de la pequeña burguesía, tanto urbana como rural. Exactamente quién obtuvo qué tierra, dónde y con qué tipo de posesión efectiva, es algo que ha de ser clarificado con mayor precisión. Trabajadores de granja (de los que se hablará más abajo) y otros miembros o partidarios del opositor Movimiento para el Cambio Democrático, o algunos que fueron acusados de serlo, perdieron poder sobre la tierra redistribuida (Sachikonye, 2003; Marongwe, 2003). De esta manera, uno sospecha que a esos grupos sociales rurales (y urbanos) a los que les falta influencia política y/o conexiones –por ejemplo, a través de relaciones locales más amplias de patronazgo– les fue relativamente mal fuera de la redistribución, como no mejor a las mujeres granjeras (más pobres).

En cuarto lugar, los efectos inmediatos de la redistribución de la tierra han sido bastante desastrosos para la producción y el empleo, aunque sujetos, como siempre, a considerables variaciones locales. A fines de los noventa hubo un número estimado entre 320 mil y 350 mil trabajadores asalariados en las grandes granjas capitalistas de Zimbabwe. Junto con 1,8 a 2 millones de familiares, constituyen casi un 20% de la población del país, proporcionalmente y por lejos, el proletariado agrario más grande en el África subsahariana, cuyas posiciones e intereses sobre la estructura clasista campesina han sido casi completamente ignoradas en estudios académicos críticos y análisis políticos²⁶. A comienzos de

26 La excepción, en trabajos académicos críticos, es la obra de Blair Rutherford (por ejemplo, 2001a y 2001b). Tandon (2001) es el único ejemplo que he encontrado que

2003, sólo cerca de 100 mil trabajadores agrarios aún estaban empleados (Sachikonye, 2003: 5) y la vasta mayoría de aquellos que perdieron sus trabajos tampoco obtuvieron tierras, como se notó arriba.

Quinto, la redistribución de la tierra, especialmente de la manera tan caótica en que se produjo en Zimbabwe, no es lo mismo que el (re)asentamiento inmediato de granjeros; tampoco es igual al reasentamiento con inicio inmediato del cultivo, y a un nivel que permita primero reemplazar y luego expandir la producción en la tierra redistribuida. Éste es el nudo de la redistribución de la tierra como estrategia de desarrollo. En este sentido, Zimbabwe es un ejemplo altamente distintivo. Por un lado, el impulso dominante de las reformas de tierra radicales en el mundo moderno ha sido abolir la propiedad precapitalista, predatoria, como un aspecto esencial de la transición hacia el capitalismo (Bernstein, 2002, 2004). En estos casos, la perspectiva –y en la actualidad, de acuerdo con varios informes– es la del desmantelamiento de la producción a gran escala, incluso de muchas granjas capitalistas exitosas y bien establecidas, con el efecto inmediato de las evidenciadas pérdidas de producción y empleo. Por otro lado, ejemplos significativos de confiscación de la propiedad agraria capitalista a gran escala en tiempos recientes han encarado su nacionalización o socialización de alguna forma u otra (por ejemplo, Cuba y Nicaragua), más que su reemplazo por la agricultura (“campesina”) en pequeña escala.

Yeros (2002: 12-13) ejemplifica el caso para la redistribución de la tierra *qua* estrategia de desarrollo en Zimbabwe como “una oportunidad histórica para quebrar la estructura heredada del mercado doméstico”. Sin embargo, reconoce que esto no es suficiente. La ampliación del mercado doméstico también necesita apoyo estatal para construir una infraestructura de “acumulación dinámica [...] en el sector de pequeños propietarios”. Tiene razón en esto, y por ello nos remite a la característica distintiva (¿única?) de la reforma agraria de Zimbabwe –el desmantelamiento de la agricultura capitalista de gran escala– para temas ya indicados en la discusión de más arriba acerca de las dinámicas y efectos de la producción generalizada de mercancías en las zonas rurales de África²⁷.

se refiere directamente a este error manifiesto de la visión y del análisis político en consideración a la cuestión agraria en Zimbabwe. Se trata de un error comparable en su seriedad al de Sudáfrica en los ochenta, concerniente a la exclusión de, y a la hostilidad hacia, los trabajadores migrantes, especialmente aquellos del entonces KwaZulu, cuyas posadas luego se convertirían en base de la violencia sistémica contra los poblados adyacentes organizados por el ANC y el Frente Democrático Unido (UDF). Para ello remitirse a Mamdani (1996: capítulo 7) y también Morris y Hindson (1992).

27 También nos remite a las preocupaciones sobre la cuestión agraria “clásica” y a su (re)interpretación en las condiciones de “acumulación desarticulada”, “el dualismo

RECUPERANDO LA TIERRA

La discusión sugiere que es difícil imaginar cómo la “acumulación dinámica”, incluso la de los “pequeños propietarios”, podrá ocurrir sin los mercados laborales rurales, que significa diferenciación de clase. Por lo demás, en ausencia de apoyo estatal adecuado para permitir a los granjeros establecerse en la tierra que les fuera asignada, y para establecer allí granjas viables –el caso, hasta cierto punto, de Zimbabwe– muchos permanecerán demasiado pobres para cultivar, y por eso se acentúan las tendencias a la diferenciación. Sólo los campesinos o las familias de “trabajadores-campesinos” más ricos (así como también algunos de la pequeña burguesía rural y urbana) pueden dominar los recursos y el capital para establecer la producción en nuevas, o adicionales y/o mejores, tierras obtenidas por medio de la redistribución.

CONCLUSIÓN

El propósito de las observaciones anteriores no es negar la significación de la redistribución agraria en Zimbabwe como un aspecto de su revolución democrática nacional, sino llamar la atención sobre algunos de sus aspectos profundamente contradictorios (incluso sobre aquellos que comparten con las luchas por la tierra localizadas en otra parte de África y de similar potencial democrático, aunque en condiciones sociales muy diferentes). Esas luchas más recientes permanecen comúnmente escamoteadas a la mirada de observadores y analistas externos y, cuando se reconocen, son en general mal interpretadas por las razones antedichas: en ausencia de la propiedad invadida de la tierra y del despojo generalizado de productores (más) pequeños, y carentes éstos de las formas de expresión de clase más evidentes en otros lados, sus dinámicas de clase subyacentes son desatendidas o negadas. Facilita dicha negligencia o negación el severo contraste entre zonas y países “campesinos” de África de origen colonial, sobre todo entre Sudáfrica y Zimbabwe, en cuyas historias el establecimiento y la formación de la propiedad de la tierra racializada ha sido definitiva. Este efecto también lo facilita la ausencia en el África “campesina” de movimientos políticos más amplios basados en los conflictos de la tierra, la ausencia de los tipos de linajes históricos, formas de organización e ideologías programáticas que sí se encuentran en América Latina y Asia.

No obstante, es cada vez más insostenible ignorar las tensiones y conflictos por la tierra proliferantes en el África subsahariana actual en el contexto de una crisis de reproducción generalizada, sin importar cuán variadas, complejas y contradictorias puedan ser las fuerzas sociales y las formas de lucha por la tierra. Extrapolando desde mis obser-

funcional”, etc., en las formaciones sociales periféricas, como se resume en el primer trabajo de este volumen.

vaciones sobre la redistribución de la tierra en Zimbabwe, diría que la cuestión agraria del trabajo es usualmente un elemento de esas fuerzas y luchas sociales. En la medida en que pueda convertirse –y estar articulada como– un elemento líder, entonces, la significación y los efectos de las luchas por la tierra harán sus propias contribuciones más fuertes y más claras a una política democrática más amplia²⁸.

BIBLIOGRAFÍA

- Allan, William 1965 *The African Husbandman* (London: Oliver & Boyd).
- Amin, Samir 1976 *Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism* (Hassocks: Harvester).
- Anderson, David M. 1984 “Depression, Dust Bowl, Demography and Drought: The Colonial State and Soil Conservation in East Africa during the 1930s” en *African Affairs*, 83, pp 321-343.
- Anderson, David M. 2002 *Eroding the Commons: The Politics of Ecology in Baringo, Kenya 1892–1963* (Oxford: James Currey).
- Anderson, David M. y Grove, Richard 1987 “The Scramble for Eden: Past, Present and Future in African Conservation” en Anderson, D.M. y Grove, R. (eds.) *Conservation in Africa: People, Policies and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Anderson, David M. y Broch-Due, Vigdis (eds.) 1999 *The Poor Are Not Us: Poverty and Pastoralism in Eastern Africa* (Oxford: James Currey).
- Arrighi, Giovanni 2002 “The African Crisis: World Systemic and Regional Aspects” en *New Left Review*, II(15), pp 5-36.
- Bernstein, Henry 1981 “Notes on State and Peasantry” en *Review of African Political Economy*, 21, pp 44-62.
- Bernstein, Henry 1990 “Agricultural ‘Modernisation’ and the Era of Structural Adjustment: Observations on Sub-Saharan Africa” en *Journal of Peasant Studies*, 18(1), pp 3-35.
- Bernstein, Henry 1999 “Ghana’s Drug Economy: Some Preliminary Data” en *Review of African Political Economy*, 79, pp 13-32.
- Bernstein, Henry 2000 “‘The Peasantry’ in Global Capitalism: Who, Where and Why?” en Panitch, Leo y Leys, Colin (eds.) *Socialist Register 2001* (London: Merlin Press).
- Bernstein, Henry 2002 “Land Reform: Taking a Long(er) View” en *Journal of Agrarian Change*, 2(4), pp 433-463.
- Bernstein, Henry 2003 “Land Reform in Southern Africa in World-Historical Perspective” en *Review of African Political Economy*, 96, pp 21-46.

28 Cousins (de próxima aparición) provee una discusión sistemática de la problemática agraria en relación con la democracia en la región sureña de África.

RECUPERANDO LA TIERRA

- Bernstein, Henry 2004 "Changing Before Our Very Eyes': Agrarian Questions and the Politics of Land in Capitalism Today" en *Journal of Agrarian Change*, 4(1-2), pp 190-225.
- Bernstein, Henry y Woodhouse, P. 2001 "Telling Environmental Change Like It Is? Reflections on a Study in Sub-Saharan Africa" en *Journal of Agrarian Change*, 1(2), pp 283-324.
- Berry, Sara 1984 "The Food Crisis and Agrarian Change in Africa: A Review Essay" en *African Studies Review*, 27(2), pp 59-111.
- Berry, Sara 1993 *No Condition is Permanent: Social Dynamics of Agrarian Change in Sub-Saharan Africa* (Madison: University of Wisconsin Press).
- Bharadwaj, Krishna 1985 "A View on Commercialisation in Indian Agriculture and the Development of Capitalism" en *Journal of Peasant Studies*, 12(4), pp 7-25.
- Boserup, Ester 1965 *The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure* (London: Allen & Unwin).
- Bryceson, Deborah Fahy 1996 "Deagrarianization and Rural Employment in Sub-Saharan Africa: A Sectoral Perspective" en *World Development*, 24(1), pp 97-111.
- Bryceson, Deborah Fahy 1998 "African Rural Labour, Income Diversification and Livelihood Approaches: A Long-term Development Perspective" en *Review of African Political Economy*, 80, pp 171-189.
- Bush, Ray y Cliffe, Lionel 1984 "Agrarian Policy in Labour Migrant Societies: Reform or Transformation in Zimbabwe?" en *Review of African Political Economy*, 29, pp 77-94.
- Chabal, Patrick y Daloz, Jean-Pascal 1999 *Africa Works: Disorder as Political Instrument* (Oxford: James Currey).
- Cliffe, Lionel y Cunningham, G.L. 1973 "Ideology, Organization and the Settlement Experience in Tanzania" en Cliffe, L. y Saul, J. (eds.) *Socialism in Tanzania* (Dar es Salaam: East African Publishing House) Volume II, Policies.
- Colson, Elizabeth 1971 "The Impact of the Colonial Period on the Definition of Land Rights" en Turner, Victor (ed.) *Colonialism in Africa*, (Cambridge: Cambridge University Press) Volume III, 1870-1960.
- Cooper, Frederick 2002 *Africa since 1940: The Past of the Present* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Cordell, Dennis D., Gregory, John W. y Piché, Victor 1996 *Hoe and Wage: A Social History of a Circular Migration System in West Africa* (Boulder, CO: Westview Press).

- Cousins, Ben 1996 "Livestock Production and Common Property Struggles in South Africa's Agrarian Reform" en Bernstein, Henry (ed.) *The Agrarian Question in South Africa*, (London: Frank Cass).
- Cousins, Ben (de próxima aparición) "The Zimbabwe Crisis in its Wider Context: The Politics of Land, Democracy and Development in Southern Africa" en Hammar, Amanda, Raftopoulos, Brian y Jensen, Stig (eds.) *Zimbabwe's Unfinished Business: Rethinking Land, State and Nation in the Context of Crisis* (Harare: Weaver Press).
- Cousins, Ben, Weiner, Dan y Amin, Nick 1992 "Social Differentiation in the Communal Lands of Zimbabwe" en *Review of African Political Economy*, 53, pp 5-24.
- Cowen, Michael P. y Shenton, Robert W. 1991a "The Origin and Course of Fabian Colonialism in Africa" en *Journal of Historical Sociology*, 4(2), pp 143-174.
- Cowen, Michael P. y Shenton, Robert W. 1991b "Bankers, Peasants and Land in British West Africa, 1905-1937" en *Journal of Peasant Studies*, 19(1), pp 26-58.
- Cowen, Michael P. y Shenton, Robert W. 1996 *Doctrines of Development* (London: Routledge).
- Daviron, Benoit y Gibbon, Peter (eds.) 2002 "Global Commodity Chains and African Export Agriculture" en *Special Issue of Journal of Agrarian Change*, 2(2).
- Desai, Meghnad 2002 *Marx's Revenge: The Resurgence of Capitalism and the Death of Statist Socialism* (London: Verso).
- De Wet, Christopher 1995 *Moving Together, Drifting Apart: Betterment Planning and Villagisation in a South African Homeland* (Johannesburg: Witwatersrand University Press).
- Ferguson, James 1999 *Expectations of Modernity: Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian Copperbelt* (Berkeley: University of California Press).
- Fine, Ben, Lapavistas, Costas y Pincus, Jonathan (eds.) 2001 *Development Policy in the Twenty-first Century: Beyond the Post-Washington Consensus* (London: Routledge).
- First, Ruth 1983 *Black Gold: The Mozambican Miner, Proletarian and Peasant* (Brighton: Harvester).
- Francis, Elizabeth 2000 *Making a Living: Changing Livelihoods in Rural Africa* (London: Routledge).
- Francis, Paul 1984 "For the Use and Common Benefit of All Nigerians: Consequences of the 1978 Land Nationalization" en *Africa*, 54, pp 5-28.

RECUPERANDO LA TIERRA

- Franke, Richard W. y Chasin, Barbara H. 1980 *Seeds of Famine: Ecological Destruction and the Development Dilemma in the West African Sahel* (Montclair and New York: Allanheld & Universe).
- Friedmann, Harriet 1993 "The Political Economy of Food: A Global Crisis" en *New Left Review*, 197, pp 29-57.
- Friis-Hansen, E. (ed.) 2000 *Agricultural Policy in Africa after Adjustment*, CDR Policy Paper (Copenhagen: Centre for Development Research).
- Gibbon, Peter 1992 "A Failed Agenda? African Agriculture under Structural Adjustment with Special Reference to Kenya and Ghana" en *Journal of Peasant Studies*, 20(1), pp 50-96.
- Gibbon, Peter y Neocosmos, Michael 1985 "Some Problems in the Political Economy of 'African Socialism'" en Bernstein, Henry y Campbell, Bonnie K. (eds.) *Contradictions of Accumulation in Africa* (Beverly Hills, CA: Sage).
- Gilsenan, Michael 1982 *Recognizing Islam* (Beckenham: Croom Helm).
- Grischow, Jeff 1998 "Corruptions of Development in the Countryside of the Northern Territories of the Gold Coast, 1927-57" en *Journal of Peasant Studies*, 26(1), pp 139-158.
- Guyer, Jane I. 1983 "Women's Work and Production Systems: A Review of Two Reports on the Agricultural Crisis" en *Review of African Political Economy*, 27, pp 186-191.
- Hammar, Amanda 2001 "'The Day of Burning': Eviction and Reinvention in the Margins of Zimbabwe" en Worby, Eric (ed.) *The New Agrarian Politics in Zimbabwe*, Special Issue of *Journal of Agrarian Change*, 1(4), pp 550-574.
- Hill, Polly 1963 *The Migrant Cocoa Farmers of Southern Ghana* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Hobsbawm, Eric J. 1987 *The Age of Empire 1875-1914* (London: Weidenfeld & Nicolson).
- Hyden, Goran 1983 *No Shortcuts to Progress: African Development Management in Perspective* (London: Heinemann).
- IFAD 1994 *A Dialogue on Capitol Hill: Workshop on Land Degradation and Poverty in Sub-Saharan Africa - Challenges and Opportunities* (Rome: International Fund for Agricultural Development).
- Kasfir, Nelson 1993 "Designs and Dilemmas of African Decentralization" en Mawhood, Philip (ed.) *Local Government in the Third World: Experiences of Decentralization in Tropical Africa* (Pretoria: Africa Institute of South Africa).
- Kitching, Gavin 1980 *Class and Economic Change in Kenya: The Making of an African Petite-Bourgeoisie, 1905-1970* (New Haven: Yale University Press).

- Leach, Melissa y Mearns, Robin (eds.) 1996 *The Lie of the Land: Challenging Received Wisdom on the African Environment* (Oxford: James Currey).
- Legassick, Martin y Wolpe, Harold 1976 "The Bantustans and Capital Accumulation in South Africa" en *Review of African Political Economy*, 7, pp 87-107.
- Leo, Christopher 1984 *Land and Class in Kenya* (Toronto: University of Toronto Press).
- Levin, Richard y Neocosmos Michael 1989 "The Agrarian Question and Class Contradictions in South Africa: Some Theoretical Considerations" en *Journal of Peasant Studies*, 16(2), pp 230-259.
- Little, Peter y Watts, Michael (eds.) 1994 *Living under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa* (Madison: University of Wisconsin Press).
- Mamdani, Mahmood 1987 "Extreme but not Exceptional: Towards an Analysis of the Agrarian Question in Uganda" en *Journal of Peasant Studies*, 14(2), pp 191-225.
- Mamdani, Mahmood 1996 *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism* (Cape Town: David Philip).
- Mamdani, Mahmood 2001 *When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda* (Princeton: Princeton University Press).
- Marongwe, Nelson 2003 "Farm Occupations and Occupiers in the New Politics of Land in Zimbabwe" en Hammar, Amanda, Raftopoulos, Brian y Jensen, Stig (eds.) *Zimbabwe's Unfinished Business: Rethinking Land, State and Nation in the Context of Crisis* (Harare: Weaver Press).
- McCann, James C. 1999 *Green Land, Brown Land, Black Land: An Environmental History of Africa, 1800-1990* (Oxford: James Currey).
- Meagher, Kate 1995 "Crisis, Informalization and the Urban Informal Sector in Sub-Saharan Africa" en *Development and Change*, 26, pp 259-284.
- Morris, Mike y Hindson, Doug 1992 "South Africa: Political Violence, Reform and Reconstruction" en *Review of African Political Economy*, 53, pp 43-59.
- Moyo, Sam 2001 "The Land Occupation Movement and Democratization in Zimbabwe: Contradictions of Neoliberalism" en *Millennium: Journal of International Studies*, 30(2), pp 311-330.
- Murton, Andrew 1999 "Population Growth and Poverty in Machakos District, Kenya" en *Geographical Journal*, 165(1), pp 37-46.

RECUPERANDO LA TIERRA

- Nyambara, Pius S. 2001 "The Closing Frontier: Agrarian Change, Immigrants and the 'Squatter Menace' in Gokwe, 1980s-1990s" en Worby, Eric (ed.) *The New Agrarian Politics in Zimbabwe*, Special Issue of *Journal of Agrarian Change*, 1(4), pp 534-549.
- O'Laughlin, Bridget 1998 "Missing Men? The Debate over Rural Poverty and Women-headed Households in Southern Africa" en *Journal of Peasant Studies*, 25(2), pp 1-48.
- O'Laughlin, Bridget 2000 "Class and the Customary: the Ambiguous Legacy of the *Indigenato* in Mozambique" en *African Affairs*, 99, pp 5-42.
- Peters, Pauline E. 1994 *Dividing the Commons: Politics, Policy and Culture in Botswana* (Charlottesville: University Press of Virginia).
- Peters, Pauline E. 2002 "The Limits of Negotiability: Security, Equity and Class Formation in Africa's Land Systems" en Juul, K. y Lund, C. (eds.) *Negotiating Property in Africa* (Portsmouth, NH: Heinemann).
- Peters, Pauline E. 2004, "Inequality and Social Conflict over Land in Africa" en *Journal of Agrarian Change*, 4(3), pp 269-314.
- Phillips, Anne 1989 *The Enigma of Colonialism* (Oxford: James Currey).
- Ponte, Stefano 2002 *Farmers and Markets in Tanzania: How Policy Reforms Affect Rural Livelihoods in Africa* (Oxford: James Currey).
- Pottier, Johann 2002 *Re-imagining Rwanda: Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Raikes, Philip 1988 *Modernising Hunger: Famine, Food Surplus and Farm Policy in the EEC and Africa* (Oxford: James Currey).
- Raikes, Philip 2000 "Modernization and Adjustment in African Peasant Agriculture" en Bryceson, Deborah, Kay, Cristóbal y Mooij, Jos (eds.) *Disappearing Peasantries: Rural Labour in Africa, Asia and Latin America* (London: IT Publications).
- Raikes, Philip y Gibbon, Peter 2000 "'Globalisation' and African Export Crop Agriculture" en *Journal of Peasant Studies*, 27(2), pp 50-93.
- Raynault, Claude, Emmanuel Gregoire, Pierre Janin, Koechlin, Jean y Delville Lavigne, Philippe 1997 *Societies and Nature in the Sahel* (London: Routledge).
- Ross, Eric B. 1998 *The Malthus Factor: Poverty, Politics and Population in Capitalist Development* (London: Zed Books).
- Rutherford, Blair 2001a *Working on the Margins: Black Workers, White Farmers in Postcolonial Zimbabwe* (Harare: Weaver Press).
- Rutherford, Blair 2001b "Commercial Farm Workers and the Politics of (Dis)placement in Zimbabwe: Colonialism, Liberation and Democracy" en *Journal of Agrarian Change*, 1(4), pp 626-651.

- Sachikonye, Lloyd M. 2003 *The Situation of Commercial Farm Workers after Land Reform in Zimbabwe: A Report Prepared for the Farm Community Trust of Zimbabwe* (London: CIIR).
- Sender, John 2002 "Reassessing the Role of the World Bank in Sub-Saharan Africa" en Pincus, J. y Winters, J. (eds.) *Reinventing the World Bank* (Ithaca, NY, y London: Cornell University Press).
- Shivji, Issa 1994 *Report of the Presidential Commission of Inquiry into Land Matters* (Uppsala: Government of the United Republic of Tanzania and the Scandinavian Institute of African Studies) Volume I, Land Policy and Land Tenure Structure.
- Sivanandan, A. 1990 *Communities of Resistance: Writings on Black Struggles for Socialism* (London: Verso).
- Sorrenson, M.P.K. 1967 *Land Reform in the Kikuyu Country* (Nairobi: Oxford University Press).
- Stiglitz, Joseph 2002 *Globalization and Its Discontents* (London: Penguin Books).
- Tandon, Yash 2001 "Trade Unions and Labour in the Agricultural Sector in Zimbabwe" en Raftopoulos, B. y Sachikonye, L. (eds.) *Striking Back: The Labour Movement and the Post-colonial State in Zimbabwe 1980-2000* (Harare: Weaver Press).
- Tiffen, Mary, Mortimore, Michael y Gichuki, Francis 1994 *More People, Less Erosion: Environmental Recovery in Kenya* (Chichester: John Wiley).
- Van der Walle, Nicolas 2001 *African Economies and the Politics of Permanent Crisis, 1979-1999* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Vaughan, Megan 1991 *Curing Their Ills: Colonial Power and African Illness* (Cambridge: Polity Press).
- Wiggins, Steve 2000 "Interpreting Changes from the 1970s to the 1990s in African Agriculture through Village Studies" en *World Development*, 28(4), pp 631-662.
- World Bank 1996 *Toward Environmentally Sustainable Development in Sub-Saharan Africa: A World Bank Agenda* (Washington, DC: World Bank).
- Yeros, Paris 2002 "Zimbabwe and the Dilemmas of the Left" en *Historical Materialism*, 10(2), pp 3-15.

KOJO SEBASTIAN AMANOR*

**COSECHADORES NOCTURNOS, MALEANTES
FORESTALES Y SABOTEADORES:
LUCHAS SOBRE LA EXPROPIACIÓN
DE TIERRAS EN GHANA**

LA TIERRA EN GHANA no es propiedad del Estado, pero sí de los jefes. A su vez, la expropiación de la tierra no es llevada a cabo por el Estado, sino por una alianza entre él y los jefes. Esta situación complica las luchas por la tierra. No sólo porque éstas tengan dimensiones duales, locales y nacionales, sino porque además poseen complejas ramificaciones ideológicas sobre los derechos y las identidades, dado que las propias expropiaciones están acompañadas por varias justificaciones culturales o nacionales. La última situación complica aun más la controversia por la tierra, así como limita los canales legales por medio de los que el campesinado puede desafiar los procesos de expropiación.

El proceso de expropiación y apropiación de la tierra ha involucrado tres movimientos importantes: (a) la emigración de granjeros de cultivos de exportación, desde finales del siglo XIX, quienes compraron tierras a sus jefes para plantaciones de cacao y aceite de palmera; (b) la expropiación de la tierra por parte del Estado para la creación de reservas forestales desde la década del veinte, al punto de que, en la actualidad, el 20% de las zonas altas forestales en Ghana yace bajo reservas forestales; y

* Kojo Sebastian Amanor es profesor asociado en el Instituto de Estudios Africanos, Universidad de Ghana. Ha publicado principalmente sobre temas de tierras, agricultura, medio ambiente y descentralización en Ghana y África occidental.

RECUPERANDO LA TIERRA

(c) la expropiación de la tierra para la modernización agraria, que comenzó en el período de posguerra con la creación de programas coloniales de asentamiento que fueron transformados en las décadas del setenta y el ochenta en proyectos de agro-negocios. Además de expropiar la tierra, el Estado también se apropia del uso de los recursos naturales para las concesiones de propiedad.

En este trabajo se examina el impacto de los procesos de alienación de la tierra para la creación de reservas forestales, concesiones y esquemas agrarios. También se analizan los procesos de resistencia por parte de los campesinos.

LA POLÍTICA AGRARIA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

El marco actual para la administración de la tierra en Ghana ha sido determinado, en gran medida, por el colonialismo. Con el establecimiento de la administración colonial, sus autoridades intentaron ganar control sobre la tierra. Esto ocurrió durante un período de rápida expansión de las ventas de tierra y de las concesiones subvencionadas, en respuesta a las demandas de los granjeros de cacao y de los especuladores durante la fiebre del oro, a fines del siglo XIX. Las ventas de tierras fueron importantes en el país, tanto que emergió una clase significativa de especuladores de propiedades y abogados dedicados al tema (Amanor, 1999; Kimble, 1963). A su vez, la autoridad colonial esperó ganar control sobre las ventas a través de la Ley de Tierras de 1910, en la que se intentó incluir la “tierra desperdiciada” en la Corona. Esta tentativa fue resistida por los jefes y por la naciente clase mercantil de la Costa de Oro, que organizaron la Sociedad Protectora de los Derechos de los Aborígenes y solicitaron la Oficina Colonial en Londres. La Ley de Tierras fue también contrariada por las compañías británicas, que presionaron para sostenerse en el gobierno británico a través de las Casas de Comercio de Londres y Manchester. Frente a la oposición pública, la Ley de Tierras fue rescindida.

Sin embargo, el resultado principal de esta disputa fue el desarrollo subsiguiente del marco colonial para el dominio indirecto, basado en la administración nativa. Bajo esta última, la autoridad colonial debía gobernar a través de una alianza con los gobernantes tradicionales, quienes estaban autorizados por las leyes a actuar. Esto, a su vez, supuso un nuevo marco de administración de la tierra. El fideicomiso sobre la misma fue concedido a los jefes supremos, mientras los granjeros sólo conservaron sus derechos de uso. De este modo, únicamente los jefes podían negociar la transacción y las concesiones de tierra, lo cual entorpeció el desarrollo de mercados internos de suelos. No obstante, varias formas de estos últimos aún continúan existiendo: los jefes alienaron las tierras de los granjeros emigrantes, y muchas otras transacciones asumieron la forma de arrendamientos a largo plazo para cultivos

compartidos, para los que se tomó posesión de la tierra desde el fondo común disponible para los ciudadanos locales. La administración nativa demostró ser altamente impopular entre el campesinado, y en muchas áreas, la juventud y los plebeyos se organizaron, frecuentemente a través de las asociaciones comuneras precoloniales (*asafos*), para oponerse a las reglas arbitrarias de los jefes e intentar destronarlos.

En un comentario acerca del movimiento *asafo* en Kwawu, Asiamah (2000: 73) escribe:

Notablemente, el Asafo criticó severamente las fianzas astronómicas que la corte impuso sobre los plebeyos acusados de quebrar el juramento, las leyes y los tabúes de los jefes. Otros cargos más serios fueron los sobornos y las malversaciones de los ingresos de la tierra. Por ejemplo, el dinero que se acumuló de las ventas de la tierra, peajes, los impuestos especiales, las concesiones de madera, las concesiones minerales, los ingresos del cacao, y otros, fueron libremente derrochados, ¡como si fueran las ganancias personales de los jefes, mientras los comuneros que se esforzaron por traer los ingresos al interior no se beneficiaron de su trabajo!

A fines de la década del cuarenta, el movimiento *asafo* se había convertido en una potente fuerza rural que apoyaba al Partido de la Convención de la Gente (CPP, por su sigla en inglés) de Kwame Nkrumah, y se oponía al dominio colonial y al de los jefes. Luego de los disturbios de 1948, se instaló una comisión de investigación bajo Aitken Watson. Numerosos representantes comunales de las áreas rurales se quejaron en la comisión de las imposiciones autocráticas de los jefes bajo el sistema de Autoridad Nativa. Como los jefes habían alienado áreas significativas para los emigrantes cultivadores de cacao desde comienzos del siglo XX, provocando problemas de escasez de tierra para algunos comuneros, el campesinado local los culpó directamente, en lugar de entrar en conflicto con los emigrantes. En algunas situaciones, los emigrantes y los comuneros locales se unieron en contra de los abusos de los jefes (Addo-Fenning, 1997). En el período de posguerra, la administración nativa ya no fue sostenible y la ordenanza del gobierno local de 1951 instaló una nueva estructura de gobierno local democráticamente elegida. Sin embargo, la administración de la tierra no fue puesta bajo el gobierno local, sino que se mantuvo bajo la autoridad de los jefes, creando efectivamente estructuras paralelas al gobierno local, y por lo tanto, la administración de la tierra siguió estando fuera de las estructuras de la democracia.

Con la llegada de la independencia, esta estructura se mantuvo. El CPP tenía un gran apoyo rural y, a diferencia del que tenía el control de los jefes sobre la tierra, estuvo a favor de la reforma agraria. Así y todo, el CPP hizo poco para desarrollar un programa adecuado para lograrla. En cambio, su adhesión al socialismo africano adoptó posiciones ideológicas

RECUPERANDO LA TIERRA

coloniales respecto de la propiedad comunal de la tierra africana, a pesar de la aplastante evidencia de la diferenciación y apropiación social de la tierra en Ghana durante el período colonial. Mientras el CPP se comprometía en un ataque retórico hacia los jefes que apoyaron el Movimiento de Liberación Nacional, el principal partido de oposición introducía una legislación sobre la tierra que fortalecía, principalmente, los reclamos de los jefes por la propiedad de la tierra y los recursos naturales. La Ordenanza de Concesiones, la Ordenanza de Tierras de Arrendamiento y la Ordenanza de Tierras Estatales generaron un esquema de administración de la tierra y de los recursos naturales que reconocía el derecho de los jefes, pero que le daba el poder al Estado para administrarlos en su nombre. Los jefes ya no podrían negociar las concesiones con el sector privado, ahora las negociarían las agencias gubernamentales. Pero los jefes continuaron gozando de las rentas y de los beneficios reales que les correspondían en este proceso. De esa manera, ellos mantuvieron un interés particular en el proceso de apropiación de la tierra comunal, cuyos habitantes ya no les pagarían dádivas o impuestos por la tierra, en cambio sí el sector corporativo que compraría las tierras y las pagaría a las tarifas correspondientes.

Esta alianza entre el Estado y los jefes, que continúa hasta el presente, habilita al Estado a expropiar a través de estos últimos, recurriendo al recurso ideológico de que el dueño de la tierra es el jefe y no la gente. La implicancia de esto es que la expropiación no representa una violación de los derechos de las personas y que la compensación por ella sólo debe pagarse a los jefes. Este reconocimiento hacia ellos como los guardianes consuetudinarios de la tierra también implica que se los reconozca como la institución que representa los derechos de la comunidad y del campesinado sobre la tierra. En efecto, ello municipaliza los asuntos de la tierra convirtiéndolos en derechos comunitarios individuales y evitando que se reconozcan las asociaciones de campesinos como representativas de sus intereses. Mientras que el campesinado es reconocido teóricamente a través de sus representantes elegidos en el proceso democrático, su impacto sobre la cuestión agraria es limitado, ya que lo que se considera importante es la preservación de los jefes y no la de los consejos locales electos.

La responsabilidad en la descentralización democrática es limitada, y el gobierno, consultando a los jefes, tiene el derecho de nombrar un tercio de los delegados de la autoridad local. El jefe ejecutivo del distrito, en lugar de ser electo, es nombrado por el gobierno. Esta democracia limitada lo habilita para imponer sus objetivos de desarrollo sobre las áreas rurales y para construir un núcleo unido de cuadros dentro de las estructuras del gobierno local que asegure el predominio de la elite política. A partir de la independencia, "cada régimen político ha intentado explotar, en mayor o menor medida, lo que queda de estas instituciones de base para consolidar

sus intereses” (Songsore y Denkabe, 1995: 90). Con la legitimación de la estructura que expropia tierras para el capital privado y con el cierre de los espacios políticos a través de los cuales representar sus intereses, el campesinado se encontró con que los intentos de defender sus derechos resultaron ser criminalizados por el Estado. Así, la mayor disputa por la tierra tiene lugar fuera del marco legal e involucra a organizaciones locales espontáneas que intentan volver a tomar posesión de la tierra.

TIERRAS FORESTALES: ALIENACIÓN, INTRUSIÓN Y RESISTENCIA

Es en el sector forestal donde se puede ver más claramente la alianza entre el Estado, los jefes y el capital privado. Durante la década del veinte, los jefes supremos eran los responsables de crear las reservas forestales en nombre de sus autoridades nativas a través de ordenanzas municipales. La justificación retórica más importante para esto era la protección del medio ambiente y la conservación de los bosques y de los límites acuáticos. Indefectiblemente, la creación de reservas comerciales requiere la expropiación de tierras dedicadas a la agricultura. Los jefes supremos tenían un interés en este proceso, puesto que la expropiación se llevaba a cabo en su nombre. El recuento oficial de la creación de reservas dio como resultado la entrega efectiva de títulos de propiedad a los jefes, la prevención contra la colonización de la tierra para propósitos agrícolas por parte de los comuneros y la garantía a los jefes del usufructo de cualquier explotación futura de la madera. Hacia la década del cuarenta, más del 20% de las zonas altas de bosque había sido demarcado como reservas forestales.

DETENIENDO LA OPERACIÓN ALTO

A principios del período colonial, la producción para la exportación de madera sólo se limitaba a las áreas forestales costeras en la región occidental y a las regiones interiores cercanas a los grandes ríos, a través de los que se transportaban los troncos haciéndolos flotar hasta la costa. Las exportaciones de madera crecieron rápidamente en el período colonial tardío y en el período de la independencia, gracias a las crecientes demandas originadas por la reconstrucción de Europa en la posguerra, la expansión de la red de caminos en el interior y la invención del camión maderero. Esto coincidió con un período de acelerado incremento de la producción de cacao para los países occidentales y la región Brong Ahafo, en virtud de los precios internacionales favorables. La transformación de grandes áreas forestales en plantaciones de cacao preocupó a la industria maderera, que la consideró una pérdida valiosa para su producción.

Para mantener su dominio sobre estos recursos forestales, la industria maderera apresuró al gobierno para que introdujera nuevas leyes que controlaran la expansión del sector del cacao. En 1959, el gobierno del CPP dictó el Acta de Protección de las Tierras Forestales, mediante

RECUPERANDO LA TIERRA

la que se buscaba regular la propagación de los cultivos en las áreas densamente forestadas. Se podía declarar a éstas áreas protegidas y se prohibía a los granjeros cultivar en ellas. Luego, se las liberó para el registro de los concesionarios de madera. Los granjeros podrían regresar a la tierra únicamente cuando las concesiones hubieran caducado; sin embargo, las concesiones podían durar veinte años o más. La zona más afectada por esta legislación fue la de la frontera de cacao en Sefwhi Wiawso, en la región occidental. La mayoría de los suelos del lugar había sido vendida por los jefes a los granjeros inmigrantes de cacao.

El Departamento de Silvicultura era el responsable de administrar estas áreas y de procesar a los invasores de terrenos. Los cultivadores de cacao habían gastado un capital considerable en comprar tierras allí y siguieron invadiendo las zonas protegidas, estableciendo plantaciones de cacao en lo que ellos consideraban que era de su propiedad. Durante los años de recesión económica en la década del setenta, un Departamento de Silvicultura cada vez peor equipado no lograba administrar las reservas efectivamente. Los cultivadores de cacao regresaron a sus tierras y establecieron cultivos en las áreas protegidas. De todas maneras, la actividad forestal fue una de las que más se beneficiaría del ajuste estructural en la década del ochenta, tanto como de los enormes fondos de préstamos que se usaron para rehabilitar el sector privado y apoyar el crecimiento de las exportaciones. El Departamento de Silvicultura fue alcanzado por estos fondos, que lo sustentaban para monitorear el sector maderero. En 1992, dicho Departamento lanzó la Operación Alto, una campaña para suprimir los cultivos ilegales de cacao en la región occidental y sembrarlos con árboles madereros. Los furiosos granjeros respondieron destruyendo las muestras de madera y volviendo a plantar cacao. Surgieron conflictos violentos entre éstos y el Departamento de Silvicultura, por lo que éste recurrió a la policía y a los militares para apoyar su campaña contra los granjeros. Al aumentar la violencia de la situación, el Departamento de Silvicultura se vio obligado a detener la Operación Alto (Kotey et al., 1998).

BOSQUES PROTEGIDOS Y PARQUES PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La reserva forestal Atewa es una Reserva Especial para la Protección de la Biodiversidad (SBPR, por su sigla en inglés), que se considera un tipo raro de bosque no percedero de tierras altas. En las márgenes de Atewa hay pueblos y aldeas densamente poblados, y en el período precolonial fue un importante centro agrícola que comprendía el corazón del imperio Akwamu en el siglo XVIII. La reserva Atewa también fue duramente desmontada en las décadas del sesenta y setenta, y gran parte de su área ya no consiste de un denso bosque cerrado. Muchos granjeros que cultivaban dentro del sector que se convertiría en la reserva perdieron sus tierras.

La reserva sufre ahora una seria escasez de tierras en sus asentamientos limítrofes, ya que la expropiación de la tierra no tuvo en cuenta las necesidades futuras de la población. La existencia de la reserva forestal en contigüidad con grandes asentamientos ha originado formas de sustento basadas en recursos forestales, que incluyen la madera y la cestería.

El área es también rica en minerales, y la búsqueda de oro y diamantes es una actividad a pequeña escala muy difundida. El oro es una vieja industria en la zona; constituyó una fuente importante de trabajo en los tiempos precoloniales. Durante el período colonial, fue desalentada por las autoridades, pero resurgió en el período poscolonial. Continuó siendo una actividad de sustento importante para los jóvenes de Atewa que tenían dificultades para acceder a una cantidad de tierra suficiente para la agricultura. De todas formas, con la expansión de las concesiones mineras en la década del noventa se ha reducido mucho el área en la cual los mineros pequeños pueden operar. Ello se debió tanto a la penetración de dichas concesiones en los lugares donde la minería en pequeña escala había predominado, como a la criminalización de las actividades de sustento de muchos jóvenes.

Durante los primeros años de la década del ochenta, las actividades relacionadas con la tala masiva de maderas se expandieron. Con las serias crisis económicas de fines de los setenta, la mayoría de las compañías madereras estaba estancada y carecía de capital para renovar los camiones madereros y el equipamiento obsoleto. Entonces, los aserradores ocuparon el vacío, proveyendo al mercado interno de madera. Al rehabilitarse el sector durante los ochenta, los grandes préstamos para inversiones en la actividad se hicieron posibles y, de ese modo, el sector privado creció rápidamente y desarrolló una capacidad que sobrepasaba los recursos forestales disponibles. Con la mala publicidad que recibió el manejo forestal por parte de las ONG ambientalistas, como *Amigos de la Tierra* [*Friends of the Earth*], que publicó una gran denuncia, *Robo en el bosque de Ghana para conseguir ganancias ilegales* (1992), donde se detallaba la corrupción en el sector forestal que siguió a la ejecución del programa de ajuste estructural, el Departamento de Silvicultura y los donantes se vieron obligados a introducir una política de cultivos sustentables para mantener su credibilidad y fue fijado un corte anual permitido para las reservas forestales. Los concesionarios de madera se trasladaron hacia la tierra de agricultura y, para fines de los ochenta y principios de los noventa, cerca del 80% de las exportaciones de madera provenía de tierras agrícolas. Esa expansión de los concesionarios los puso en conflicto con los granjeros, que no poseían derechos legales reconocidos sobre la madera explotada en sus suelos ni con los aserradores, que trabajaban mayormente en las áreas de agricultura y remuneraban a los granjeros por la madera que extraían. En la década del noventa, las luchas entre

RECUPERANDO LA TIERRA

granjeros, aserradores y concesionarios por conseguir derechos forestales en las tierras agrícolas se acentuaron.

Reconociendo que era necesario poner un poco de orden a la situación fuera de la reserva, el Departamento de Silvicultura instaló una política de manejo forestal colaborativa con la participación de las comunidades agrícolas en la administración forestal. Se inició una serie de “talleres consultivos de intereses” sobre la necesidad de reformar la legislación forestal y se crearon incentivos para los granjeros a fin de que participaran en el manejo forestal. Sin embargo, el proceso de reforma fue resistido por los intereses establecidos que consideraban que cualquier cambio en los derechos sobre la madera era inconstitucional. En cambio, se introdujeron vagas medidas interinas para el control de la tala ilegal fuera de las áreas de reserva. Esto daba el derecho a los granjeros de negociar individualmente con los contratistas madereros la compensación por el daño provocado a sus campos. De todas formas, luego llegó una legislación que prohibía la tala con máquinas y criminalizaba el procesamiento de la madera que hacían los granjeros de los árboles que habían crecido en sus terrenos.

La industria de la tala con máquinas sigue siendo importante y continúa siendo la principal fuente interna de aprovisionamiento de madera, puesto que los concesionarios producen para los mercados externos y, en general, destinan la madera de peor calidad al mercado interno. Aserrar y cargar planchas de madera a los parques de camiones ha sido, con frecuencia, una forma importante de ganarse la vida para los jóvenes rurales pobres que viven cerca de las reservas forestales, dado que son los más afectados por la escasez de tierras. La criminalización de las actividades madereras informales no las ha hecho desaparecer, pero los ha forzado a pasar a la clandestinidad. Incitados por aquélla, los jóvenes no sólo procesan madera sobre suelos agrícolas, sino que además se mudan a las reservas forestales. Incluso, tal criminalización ha provocado el aumento de los precios internos de la madera, por lo cual amplios intereses urbanos se han trasladado al sector del aserradero, encargándoles a los jóvenes la tarea de sacar el maderaje de los bosques y pagándoles a las fuerzas de seguridad de los caminos por su permiso. A menudo, se producen violentos conflictos alrededor de la madera ilegal entre la guardia forestal y los jóvenes. Como consecuencia, el Departamento de Silvicultura ha brindado apoyo militar para manejar las reservas forestales.

Mientras algunos jóvenes se ocupan de cosechar troncos en las reservas forestales, otros establecen cultivos. Ésta es una actividad riesgosa, ya que si sus granjas fueran descubiertas por los guardias forestales, serían destruidas. En cualquier caso, con tan poca tierra disponible en las comunidades contiguas a los bosques, los jóvenes no tienen muchas alternativas. En las laderas forestadas de los poblados que forman parte

de la reserva forestal se tala una gran cantidad de árboles, y en tanto las sierras chillan, algunos jóvenes se arriesgan a hacer reclamos de tierra. En todas las casas de los poblados que puntean el margen de Atewa, se pueden encontrar pilas de tablas de maderas que los pobladores utilizan para construir, como inversión o para vender a los mercantes de madera que vienen al pueblo con sus camiones. Muchos de los granjeros celebran la tala de la reserva forestal por parte de las pandillas de aserradores. Están convencidos de que cuando todos caigan, van a poder reclamar sus tierras, “Después de todo, cuando ya no haya mas árboles allí, ¿qué va a defender el Departamento de Silvicultura?”. Algunos granjeros también reconocen que la tala ilegal ha traído nueva riqueza al pueblo. En una investigación llevada a cabo en la aldea de Apapam (Amanor, 1999), un cultivador anciano comentaba:

Aunque los jóvenes estén cortando los árboles, para nosotros es mejor ahora. Antes había un montón de enfermedades aquí, pero ahora la mayoría de la gente puede ir al hospital y hay menos enfermos. Después de todo, si ellos no están cortando los árboles de mi parcela sino los de la parcela del gobierno y la gente está mas sana porque come mejor, ¿cuál es el problema?

Al complacer los intereses de la elite y del negocio de la exportación de madera, el Departamento de Silvicultura ha alienado a los pobladores rurales de la política forestal y ha perdido su autoridad moral para administrar los recursos forestales por el “interés nacional” y la posteridad. La tala de los árboles en los bosques se vuelve un acto de provocación en contra del negocio de la exportación de madera, que ha infestado la vida de las comunidades que viven en los bordes del bosque y es una afirmación simbólica de los derechos sobre la tierra.

LA TIERRA PARA LA AGRICULTURA: ALIENACIÓN Y RESISTENCIA

Durante la década del setenta, se empezó a llevar a cabo una expropiación mayor de tierras para la planificación agrícola, la agricultura privada estatal y los agro-negocios. La expropiación siguió un patrón familiar de arreglos entre el Estado y los jefes y de compensaciones a los jefes por sus tierras y a los granjeros por cualquier cultivo en las suyas. Estos últimos, en general se resistían a este proceso a través de diferentes canales, legales e ilegales, lo que traía como resultado expropiaciones forzosas y sus contra-respuestas.

SABOTAJE EN LAS PLANTACIONES ESTATALES

Konings (1986) provee estudios de caso muy interesantes sobre la gama de respuestas dada por los granjeros a la expropiación. En Mim, en el

RECUPERANDO LA TIERRA

área de Brong Ahafo, el Estado expropió tierras para establecer una plantación estatal de cacao. En septiembre de 1977, el Mimhene, el jefe de Mim, informó a los granjeros que había cedido 1.075 acres de tierra a la División de Producción de Cacao para la creación de una la plantación. Se les expropiarían las tierras a aproximadamente unas cien o doscientas familias. Se les dieron dos meses para que las abandonaran. Cuando una delegación de granjeros se acercó al jefe para que rescindiera su decisión, éste les dijo que estaba defendiendo el “interés nacional”. A la semana siguiente, los empleados de la División de Producción de Cacao ingresaron en el terreno y empezaron a trabajar. Los granjeros, enojados, se armaron y marcharon hacia allí. La policía intervino. Las acciones de resistencia detuvieron el trabajo y la División de Producción de Cacao no pudo retomarlo sino cuatro meses más tarde.

Los granjeros de la zona comenzaron a organizar la Asociación de Granjeros de Mim. Entre ellos había muchos funcionarios retirados y hombres jóvenes educados que habían adoptado la agricultura en medio de la recesión y de la falta de oportunidades laborales. Muchos de ellos habían invertido un capital considerable en la agricultura y habían conseguido préstamos bancarios. Estos granjeros educados fueron los articuladores de la organización y del desarrollo de un plan concertado de acción legal. Éste incluía peticiones a las autoridades políticas y a los jefes supremos. Sin embargo, esta táctica generó la respuesta de que los granjeros sólo tienen derecho al cultivo y no a la tierra, y de que su expropiación representaba un “interés nacional”. La asociación de granjeros contrató un abogado y tomó la acción legal de cuestionar la validez de la expropiación, puesto que no se habían seguido los procedimientos formales de la adquisición compulsiva por parte del gobierno. El caso legal fue lento y la División de Producción de Cacao continuó sus labores de instalación de la plantación.

Los granjeros empezaron, entonces, a sabotear el trabajo, y destruyeron la planta de semillas híbridas de cacao. Un portavoz de la asociación explicó que “la toma de las semillas de cacao por parte de personas desconocidas posiblemente refleja la reacción de un sector de los habitantes de Mim en contra de lo que ellos llaman la ‘incautación ilegal’ de sus tierras y granjas para el proyecto de la plantación” (Goody, 1980). Sin embargo, a los intentos iniciales de los granjeros de resistirse les sigue, muchas veces, una actitud de conformidad cuando se dan cuenta de que se están poniendo en contra del poder de los servicios de seguridad del Estado.

LOS COSECHADORES NOCTURNOS EN LAS PLANTACIONES DE PALMERAS

Una de las alienaciones más significantes de tierras en el sur de Ghana ha sido la de la instalación de plantaciones de aceite de palmeras. Ésta comprende a la Corporación de Desarrollo del Aceite de Palmera de Ghana (GOPDC, por su sigla en inglés), un proyecto conjunto entre el

gobierno de Ghana y el Banco Mundial que comenzó a principios de la década del setenta y que ha sido privatizado, y a las Plantaciones Benso de Aceite de Palmera y las Plantaciones Twifo de Aceite de Palmera, ambas propiedad de Lever Brothers.

El proyecto GOPDC se instaló en el área de Kwae de Akyem Abuakwa como un plan de desarrollo de agro-empresas, con una finca central, un molino de procesamiento y cultivadores bajo contrato. Se adquirió la tierra bajo el Acta de Evacuación de Tierras de 1962. El gobierno se acercó a Okyenehene, el jefe supremo de Akyem Abuakwa, para conseguir la tierra, y él identificó el área Kwae como una concesión apropiada. Ésta involucraba la expropiación de 9 mil hectáreas y de 7 mil granjeros. Sólo se pagó la compensación por la tierra a los jefes, a los que se reconoció como legítimos propietarios de la tierra. El Estado pagaría compensaciones a los granjeros que pudieran establecer alguna prueba de propiedad a través de títulos y/o escrituras. Puesto que no era muy común titular la tierra en esa área, ello significó que, en efecto, los granjeros sólo recibieran compensaciones por los cultivos. Los cultivadores de alimentos, incluyendo una gran proporción de mujeres, sólo recibieron compensación por sus cosechas (Gyasi, 1992). No se ayudó a los granjeros a proveerse de fuentes alternativas de suelos ni de otras formas de sustento. El proyecto establecía que parte de la tierra adquirida se redistribuyera a doscientos pequeños agricultores bajo contrato. A éstos se les suministrarían veinte acres (ocho hectáreas), de los cuales, ellos debían cultivar siete hectáreas con palmeras para producir aceite de acuerdo con las prescripciones de la GOPDC, de modo de vender sus frutos a la compañía al precio dictado. La falta de cumplimiento de estas prescripciones provocaría desalojos de las tierras.

El gobierno justificó la expropiación con el argumento de que era para el "interés nacional". Buscaba aplacar a los granjeros enojados prometiéndoles los frutos de la modernización, empleos e infraestructuras modernas, caminos, electricidad, agua y casas modernas. Sin embargo, no había en los planes del proyecto provisiones concretas para estos desarrollos. El GOPDC da trabajo a aproximadamente seiscientas personas (la mayoría proveniente de las afueras de la localidad) y redistribuyó tierras a doscientos granjeros bajo contrato, quienes están incorporados al proyecto. No ha habido desarrollo de caminos dentro del área ni suministros sociales en los asentamientos aledaños. Los jefes de los poblados apoyaron el proyecto y representaron sus propios intereses individuales: provisión de palacios nuevos para los cinco jefes aldeanos, la concesión de veinte acres (ocho hectáreas) de la tierra de los pequeños agricultores del GOPDC para ellos, la entrega anual de regalos (ovejas, botellas de aguardiente, donaciones en dinero y frutos de la palmera de aceite) para cada uno en los festivales anuales, pagos anuales de regalías

RECUPERANDO LA TIERRA

por las herramientas, la erección de un muro de dos metros en el cementerio real en Kwae y la creación de un puesto de salud para la familia real Minta (Amanor, 1999; Daddieh y Jonah, 1987).

A la mayoría de los granjeros le preocupaba la expropiación de su propia tierra sin la compensación adecuada o la provisión de suelos alternativos. Algunos de ellos solicitaron al Departamento de Tierras la compensación correspondiente e iniciaron acciones legales, que fueron aplazadas. Otras comunidades, además, se negaron a permitir a las autoridades Kwae ingresar en sus tierras, como los granjeros emigrantes de Atobriso y Okaikrom. Otros usurparon las partes sin explotar de la plantación, las que se niegan a abandonar, como en Kwae. Como resultado de estas acciones, el GOPDC no ha podido usar 4.400 hectáreas de su concesión (Daddieh y Jonah, 1987; Gyasi, 1992; Amanor, 1999).

La plantación GOPDC provocó una crisis enorme en las formas de sustento de mucha gente en el área y ahora existe una clase importante de granjeros sin tierra que tiene que conseguir la suya a través de una agricultura de base compartida o de trabajos alternativos. Los más afectados por esta expropiación han sido los campesinos jóvenes, que tienen pocas oportunidades más allá de trabajar como mano de obra ocasional en la agricultura. Muchos de ellos cosechan ilegalmente manojos de palmeras de aceite del Estado durante la noche. Estos manojos son llevados a lugares de escondite fuera de la plantación y luego transportados desde Kwae hasta los compradores. Las mujeres, que también han perdido sus tierras, procesan algunos de los frutos en los poblados aledaños a la plantación. Surgen, también, algunos pequeños molinos artesanales alrededor de las plantaciones. Parte de su aprovisionamiento proviene de los granjeros independientes que se han trasladado a la producción de aceite de palmera y de los cultivadores disconformes que sienten que el GOPDC les paga un precio demasiado bajo, y otra parte proviene de las cosechas nocturnas en la plantación. Los jóvenes de Kwae justifican sus actividades nocturnas diciendo “nosotros también tenemos que comer”. Argumentan que las tierras les pertenecen y que se las han arrebatado injustamente y que, por lo tanto, tienen derecho moral a cosechar sus frutos. El robo de palmeras se ha vuelto un gran problema en la plantación GOPDC, por lo que la compañía debe mantener una enorme fuerza de seguridad para custodiar en forma permanente la plantación.

LAS PEQUEÑAS PANDILLAS MINERAS

Algo semejante ha ocurrido en el sector de la minería a pequeña escala. La adopción de las políticas de ajuste y el énfasis puesto en el crecimiento liderado por las exportaciones llevó a una rápida expansión de la minería del oro y de los diamantes, practicada a pequeña escala por los jóvenes que sufren la escasez de tierras y de oportunidades viables

de empleo fuera del trabajo agrícola ocasional. Pero con el estallido del auge minero, muchas compañías extranjeras se trasladaron a Ghana y firmaron acuerdos de concesión con el gobierno. A su vez, los mineros en pequeña escala vieron menguadas sus oportunidades. Esto afectó particularmente a los jóvenes de los poblados Akyem, quienes buscaban oro en los arroyos aledaños a sus asentamientos y diamantes en las tierras de barbecho. Con la criminalización de estas actividades se forzó a los jóvenes a mudarse a otros sectores o a involucrarse en la minería clandestina. La criminalización de su trabajo y la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero alentó a algunos de estos grupos a organizarse, a armarse para conseguir mayores concesiones y a defender agresivamente su derecho al trabajo. El *Daily Graphic* del 30 de julio de 1994 describe vívidamente un incidente:

Veinte efectivos del personal de seguridad de la Compañía Consolidada de Diamantes de Ghana (GCD) recibieron heridas de bala el último miércoles al ser atacados por un grupo armado de presuntos mineros ilegales de diamantes en el área minera de Nsukosua, cerca de Kakoase, popularmente conocida como 'Anoma Kwadwo' [...] Un vocero de la seguridad de GCD le contó a la Agencia de Noticias de Ghana que, siguiendo un informe, el sábado 23 de julio, puesto que algunas personas estaban buscando diamantes en una concesión GCD en Nsukosua, cerca de Kakoase, se envió a un grupo de seguridad a la zona [...] El miércoles 27 de julio, cincuenta y dos miembros del personal de seguridad y policías armados fueron al lugar y encontraron a más de trescientos trabajadores buscando diamantes y se arrestó al señor Dartey [el líder de los mineros ilegales] y a su seguridad. Luego, algunos de los mineros ilegales que habían sido arrestados abrieron fuego sobre el personal de seguridad. Aunque un policía disparó una bala de advertencia, el ataque del grupo fue de tal magnitud que tanto la policía armada como la seguridad tuvieron que correr para proteger sus vidas.

PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN POLÍTICA

Estos acontecimientos en la minería a pequeña escala se reflejan también en el sector de la madera, donde violentos enfrentamientos entre los órganos militares estatales y la juventud rural se han vuelto regulares y las actividades del sector informal se trasladaron más allá de los pequeños grupos de jóvenes que procesan madera a las organizaciones turbias que organizan el transporte hacia las áreas urbanas y patrocinan a los jóvenes locales para que las trabajen. Este tipo de organizaciones, de jóvenes preparados para defender sus medios de vida con las armas, también carga con las ramificaciones de los trágicos conflictos en Sierra Leona y en Liberia, donde los grupos organizados alrededor del control del comercio del diamante pudieron transformarse en movimientos po-

RECUPERANDO LA TIERRA

líticos al jugar con la existencia de una juventud insatisfecha que no podía imaginarse ningún futuro dentro del sistema existente. Durante los años recientes, una ola sin precedentes de robos armados se originó en las áreas rurales y urbanas de Ghana, poniendo en duda la habilidad del Estado para brindar seguridad a sus ciudadanos. Esto señala también las fallas del Estado para proveer cualquier forma de seguridad económica y bienestar a la vasta mayoría, que está condenada a la pobreza y a la falta de futuro, mientras el Estado destina una cantidad de recursos importantes a los ricos y al comercio de exportación.

Durante los años del ajuste estructural, la juventud ha sido considerada cada vez más un problema por los dictadores de las políticas públicas y ha sido caricaturizada como haragana, codiciosa, irresponsable y proclive a los “vicios sociales”. Aquellos que hablan mal de los jóvenes dicen que éstos emigraron a la ciudad buscando emociones baratas en vez de quedarse en las áreas rurales ayudando a sus padres; que van detrás del dinero fácil y se involucran en actividades ilegales y malas para el medio ambiente, como la tala mecánica, la minería y la quema de carbón vegetal; que ya no respetan a sus ancianos, fuman marihuana y hay mucho embarazo adolescente. Esta difamación de la juventud busca dividir la población rural y desviar la atención de las causas más importantes de la crisis rural en los últimos años: la expropiación de la tierra y de los recursos rurales al servicio del capital y de los mercados mundiales. Sin embargo, ello no dejó de provocar una crisis tanto en la agricultura rural, que lucha por ser productiva en un ambiente de mercado hostil, como en los medios de vida alternativos, donde las personas del campo se encuentran con que muchos recursos naturales son apropiados por el Estado para sus patrones. Quizá, las luchas sean más agudas en los sectores de recursos naturales fuera de la agricultura, dado que en el clima actual de una agricultura deprimida y de riesgo en aumento en la producción agrícola, otros recursos se vuelven más valiosos. La agricultura a pequeña escala brinda ingresos magros, y la agricultura exitosa requiere un gran capital para invertir en mano de obra, insumos y expansión de los campos.

Las mayores batallas por la tierra han sido una resistencia a la adquisición compulsiva estatal, ya sea para el Estado mismo o para el sector privado. Las luchas han sido espontáneas y locales. El campesinado está débilmente organizado, y no es capaz de articular sus demandas. En parte, esto es producto de su historia y de su reclusión en asentamientos pueblerinos por las políticas de la administración nativa bajo el orden colonial y los conceptos del “desarrollo comunitario” que predominaron en el período de posguerra. Bajo las actuales estructuras de descentralización, el campesinado puede elegir a sus representantes para las asambleas del distrito; no obstante, los miembros

de la asamblea representan los intereses locales de un asentamiento que compite con otros por alcanzar el desarrollo de su infraestructura, no los intereses económicos y de clase de quienes la constituyen. Las organizaciones masivas de granjeros son entidades gubernamentales para la ejecución de la política agrícola. Los grandes granjeros, señalados por el gobierno como los líderes, son los que dominan esas organizaciones.

CONCLUSIÓN

Durante el período colonial, las principales luchas por las tierras tomaron la forma de un movimiento político para la eliminación del sistema de autoridad nativa basado en los jefes, y para acabar con el colonialismo que lo fundamentaba. Sin embargo, el sistema de gobierno local obtenido en la fase final del colonialismo no reformó la situación de la tierra. Su administración siguió estando bajo el poder de los jefes. Desde entonces, los gobiernos subsiguientes han fortalecido su alianza con ellos y los han utilizado para expropiar tierras. También han cooptado a los movimientos populares, transformándolos en apéndices del gobierno local que representa la política gubernamental. Dado que los jefes son reconocidos como los propietarios legítimos de la tierra y como representantes de la población rural, la capacidad del campesinado de representar sus propios intereses y de defender sus derechos está extremadamente limitada, ya que cualquier acto de autodefensa puede ser fácilmente interpretado como un acto criminal que va en contra del “interés nacional”. No obstante, a los ojos de la población rural esto quita legitimidad al Estado, y el movimiento espontáneo se ve obligado a tomar las armas, a sabotear las empresas estatales, a ocupar “tierras fiscales” y a involucrarse en actividades criminales para defender sus intereses y mantener algún vestigio de sustento.

BIBLIOGRAFÍA

- Addo-Fenning, Robert 1997 *Akyem Abuakwa 1700–1943: From Ofori Panin to Sir Ofori Atta* (Trondheim: Department of History, Norwegian University of Science and Technology).
- Amanor, Kojo S. 1999 *Global Restructuring and Land Rights in Ghana: Forest Food Chains, Timber and Rural Livelihoods*, Research Report N° 108 (Uppsala: Nordisk Afrikainstitutet).
- Asiamah, Alfred Effah A. 2000 *The Mass Factor in Rural Politics: The Case of the Asafo Revolution in Kwahu Political History* (Accra: Ghana University Press).
- Daddieh, D.K. y Kwesi, Jonah 1987 *Contract Farming in the Oil Palm Industry: A Ghana Case Study*, mimeo (Legon: University of Ghana).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Friends of the Earth 1992 *Plunder in Ghana's Rainforest for Illegal Profit: An Exposé of Corruption, Fraud and Other Malpractices in the International Timber Trade*, (London: Friends of the Earth).
- Goody, Jack 1980 "Rice-burning and the Green Revolution in Northern Ghana" en *Journal of Development Studies*, 16(2), pp 136-155.
- Gyasi, Edwin A. 1992 "State Expropriation of Land for a Plantation and its Impact on Peasants in Ghana" en Cant, C y Pawson E. (eds) *Indigenous Land Rights in Commonwealth Countries*, Proceedings of a Commonwealth Geographical Bureau Workshop (Christchurch: Commonwealth Geographical Bureau).
- Kimble, David 1963 *A Political History of Ghana, 1850-1928* (Oxford: Clarendon Press).
- Konings, Piet 1986 *The State and Rural Class Formation in Ghana: A Comparative Analysis* (London: Routledge & Kegan Paul).
- Kotey, E., N., Francois, Ashey, Owusu, J.G.K., Yeboah, R., Amanor, K.S. y Antwi, L. 1998 "Falling into Place: Ghana" en *Policy that Works for People and Forest Series*, N° 4 (London: IIED).
- Songsore, Jacob y Denkabe, Aloysius 1995 *Challenging Rural Poverty in Northern Ghana: The Case of the Upper-West Region* (Trondheim: University of Trondheim, Centre for Environment and Development).

FIDELIS EDGE KANYONGOLO*

**LAS OCUPACIONES DE TIERRA
EN MALAWI: DESAFIANDO EL ORDEN
LEGAL NEOLIBERAL**

LAS OCUPACIONES DE TIERRAS EN MALAWI han atraído muy poco la atención académica. En la vasta literatura sobre este tema y las cuestiones agrarias en Malawi, las ocupaciones de tierra generalmente son mencionadas de manera superficial y están ampliamente conceptualizadas como un fenómeno social patológico. Desde el punto de vista de la ley, estas ocupaciones son vistas como actividades ilegales y los ocupadores como criminales culpables de usurpación. Mientras tanto, los economistas neoliberales consideran que desaniman las inversiones porque socavan el “estado de derecho”. Se llega hasta el punto de que el Estado y otros críticos de las ocupaciones reconocen que las mismas son el resultado directo de la escasez y de la necesidad de tierras, argumentando que la solución yace en reformas agrarias graduales a través de modificaciones en las políticas y en la ley de los Estados.

A pesar de su invisibilidad en los debates políticos y académicos de Malawi, las ocupaciones de tierras son una de las estrategias que más han utilizado los pobres rurales y urbanos para comprometerse en la

* Fidelis Edge Kanyongolo es catedrático *senior* en la Facultad de Derecho, Colegio Chancellor, Universidad de Malawi. Su principal interés de investigación es la relevancia de la teoría legal crítica y marxista en la Jurisprudencia Constitucional Contemporánea y de Derechos Humanos en Malawi.

RECUPERANDO LA TIERRA

acción directa contra el Estado y los propietarios privados. Desde fines de la década del noventa del siglo XIX, cuando los pobladores europeos subordinaron a la población existente y el gobierno británico declaró al territorio bajo su protectorado, el Estado ha tenido un rol crítico en moldear la lucha de clases. Aun en términos de ocupaciones de tierras contemporáneas, el Estado tiene un rol decisivo, en particular al ser quien determina si las ocupaciones son reconocidas como una estrategia democrática legítima para revertir la injusticia o si, por el contrario, son consideradas una actividad que socava el orden democrático.

Es especialmente valioso estudiar las ocupaciones en el contexto de Malawi, por su potencial impacto en el desarrollo agrario, que es central en la política económica nacional. Se puede apreciar mejor este punto considerando algunas características básicas de la sociedad y de la economía de Malawi. En el último censo nacional en 1998, la población de Malawi se estimó en 11 millones de personas, con una tasa de crecimiento del 3,2% anual. La población se caracteriza por sus desigualdades. Se estima que el 65,3% es "pobre", y que el 28,2% de la población total vive en la "pobreza extrema". En términos de distribución del ingreso, el 20% más rico de la población consume el 46,3% de los recursos, mientras que el 20% más pobre consume sólo el 6,3%. Las tasas de alfabetización son bajas: 51% para las mujeres y 64% para los hombres. La pobreza en Malawi también tiene una dimensión espacial: la región del sur tiene la mayor proporción de pobres. Esto se debe, en parte, al pequeño tamaño *per cápita* de las tierras de cultivos, estimado en 0,178 hectáreas en el sur y 0,257 hectáreas y 0,256 hectáreas para la región central y la región del norte, respectivamente (Malawi Government, 1998; 2002b).

La actividad económica dominante es la agricultura, que emplea al 85% de la población económicamente activa (Malawi Government, 1987: 2-3). Casi el 80% de la población activa está compuesta por granjeros pequeños propietarios que periódicamente complementan sus actividades agrícolas con otras, como el trabajo asalariado, el comercio y la pesca (BDPA, 1998: 29). La agricultura minifundista representa cerca del 64% del ingreso de los pobres rurales de Malawi (Malawi Government, 2002b: XV). Por su parte, la agricultura comercial, fundamentalmente de algodón, tabaco y té, contribuye con el 90% de los ingresos por exportación del país (Reserve Bank de Malawi, 2002: 73).

La política económica nacional se ajusta al modelo neoliberal. El gobierno y las organizaciones no gubernamentales tienen sólo un rol facilitador y el énfasis para el crecimiento económico está puesto en el sector privado. Este método ha sido dominante desde 1981, debido a los programas de ajuste estructural (SAP, por su sigla en inglés) auspiciados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han hecho de la liberalización una condición clave para la ayuda. Tal

asistencia ha sido crítica para el sustento de la economía de Malawi, que experimentó una severa caída a fines de la década del setenta a causa de diferentes factores como las sequías en la temporada de 1980-1981, el aumento de las tasas de interés en el mercado financiero internacional y el cierre del corredor comercial Beira-Nacala, que había sido una salida al mar rentable para un Malawi sin salida al mar (Chinsinga, 2002: 29).

La arremetida económica neoliberal halló expresión normativa en una Constitución liberal de 1994, que garantizaba el derecho a la propiedad privada y limitaba los poderes del Estado. A pesar de la nueva Constitución y de la economía neoliberal, el crecimiento económico sigue siendo insostenible, lo cual, de acuerdo con el gobierno, se debe a impactos externos, la implementación inconsistente de las reformas, los pasos en falso de la política fiscal y la base estrecha de la capacidad productiva (Malawi Government, 2002b: 12). Además de la falta de crecimiento económico, las condiciones económicas de los habitantes de Malawi no han cambiado mucho; la pobreza y las desigualdades existentes persisten (Chinsinga, 2002; Chilowa et al., 2000; Chipeta, 1993).

En este trabajo se indaga la dinámica de las ocupaciones de tierras. En primer lugar se desarrollan los antecedentes históricos de la alienación de tierras y su reforma, y luego se analizan las bases sociales de las ocupaciones y las estrategias y alianzas del movimiento. Una discusión central es que, a pesar de que la demanda de tierra es fuerte y está muy difundida en la política económica de Malawi, el movimiento sin tierra sigue estando ampliamente desorganizado, en razón de la estructura de la sociedad civil. Se entiende aquí la sociedad civil como el dominio de la vida social que no es ni autónomo del Estado –tiene poca o ninguna independencia de él– ni intrínsecamente democrático (Sachikonye, 1995, 1998; Bangura, 1992). En la actualidad, la sociedad civil de Malawi lucha por definirse a sí misma, en el sentido mínimo de la existencia de asociaciones libres fuera del control del Estado; pero, además, continúa encarnando varias divisiones de clase y de género que la vuelven incapaz de ser una fuerza progresista en varias disputas sobre la tierra y los derechos de propiedad.

El esquema conceptual de este trabajo deriva de la teoría legal y, específicamente, de la teoría legal crítica. En contraste con la teoría legal liberal, que naturaliza y reifica las instituciones y las normas legales (Rhode, 1990), la teoría crítica busca historizar la ley y revelar sus tensiones normativas (Munzer, 1990, Kelman, 1984, 1987). En particular, la teoría crítica identifica las demandas por derechos en competencia con el propósito de desenmascarar las bases clasistas y de género de la ley (Unger, 1976; Tushnet, 1991; Cotterrell, 1992; McLellan, 1995; Olsen, 1995). Este enfoque es esencial a nuestra comprensión de las disputas de tierras y de los derechos de propiedad en Malawi (al igual que en otros países africanos), donde la estructura legal se caracteriza por el

RECUPERANDO LA TIERRA

pluralismo, es decir, por la coexistencia de la ley civil y de la ley consuetudinaria. En dicho contexto, las ocupaciones generan no sólo un caldo de cultivo para los conflictos sino también un conflicto normativo en torno de la estructura legal dual que, hasta el momento, la jurisprudencia liberal ha sido incapaz de resolver.

LA HISTORIA DE LA ALIENACIÓN DE LA TIERRA Y LA REFORMA AGRARIA

LA POLÍTICA COLONIAL DE TIERRAS

La fase más pronunciada de la lucha de clases en Malawi comenzó con la migración de los pobladores británicos y el establecimiento del Estado colonial a fines del siglo XIX. El Estado facilitaba y alentaba la adquisición de amplias porciones de terrenos para los colonos, particularmente en la zona sur del país. Allí comenzaron a cultivar té, café y algodón, casi exclusivamente para exportación. Desde el período colonial hasta el presente, el Estado de Malawi ha llevado a cabo varias políticas de adquisición de tierras y de reforma, que tenían como objetivo la creación y el mantenimiento de una economía capitalita basada en la agricultura a gran escala para exportación, a expensas del campesinado (Mhone, 1992). Las políticas coloniales y poscoloniales de tierras, emprendidas en 1920, 1946, 1967 y 2001, se pueden distinguir en cuanto a que las políticas coloniales definían la ocupación y la propiedad de la tierra sobre la base de la raza, y las políticas poscoloniales *desracializaron* [*deracialized*] la propiedad en el sector agrícola de dominio absoluto.

Las reformas contemporáneas llevadas a cabo por el Estado tienen su génesis en las políticas coloniales. Al igual que en el caso de otros territorios colonizados, el objetivo principal de la política agraria colonial era facilitar los emprendimientos económicos blancos (Krishnamurty, 1972: 385). A diferencia de los otros territorios en la región, Malawi era relativamente poco atractiva para los asentamientos coloniales, porque carecía de recursos minerales, buenas comunicaciones y un clima apropiado (Rotberg, 1965; Mcdonald, 1975). En 1921, Malawi tenía apenas unos 2 mil pobladores, muchos de los cuales se dedicaban a la agricultura. La mayoría adquirió tierras como resultado de acuerdos con los jefes locales, que pretendían transferir la propiedad en nombre de sus comunidades. En realidad, tales transferencias eran en gran parte fraudes de dudosa validez legal aunque, subsecuentemente, la administración colonial les otorgó a los pobladores títulos de propiedad. La adquisición de la tierra por parte de los pobladores coloniales generó nuevas formas de relaciones de propiedad que, a su vez, reconfiguraron las economías locales. El impacto más inmediato de este desarrollo, particularmente en la región del sur, donde se

alojó la mayoría de los pobladores, fue que los campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia, cuyas tierras se habían transferido a los propietarios privados, se convirtieron en arrendatarios laborales (pagando el alquiler con trabajo). Una consecuencia relacionada fue el incremento de la migración laboral, como cuando previamente los granjeros comunales recurrieron al trabajo asalariado, aunque con restricciones legales sobre su desplazamiento¹.

Sobre la base de las recomendaciones hechas por la Comisión de Tierras de 1920 nombrada por el gobierno, se ordenaron las políticas y la ley de modo tal que se reafirmara la seguridad de sus propiedades y se atrajeran, también, pobladores nuevos (Nyasaland Government, 1920: III). Las leyes de tierras de 1920 parecen haber alcanzado su objetivo de expandir el asentamiento blanco, puesto que el área total bajo propiedad blanca entre 1919 y 1921 se incrementó de 13.757 acres a 118.506 (Gray, 1960: 73). No hay necesidad de decir que el proceso de reforma de 1920 no comprendió ninguna intervención importante por parte del campesinado negro, dado que la comisión entrevistó a sólo ocho “nativos”, veinticinco blancos y cinco asiáticos. Además, la Comisión también recibió nueve memorandos de varios intereses colono-agrícolas (Nyasaland Government, 1920: V). En 1946, se estableció otra Comisión de Tierras con el propósito de dar a conocer las necesidades de los campesinos negros que residían en las tierras que habían sido alienadas en favor de los pobladores blancos. Claramente, la cuestión más crítica a investigar debería haber sido la relativa validez de los derechos de propiedad en competencia de los colonos y de los “residentes” negros. Después de todo, fue la propia Comisión la que había reconocido que el conflicto por la tenencia de la tierra entre nativos y colonizadores era un problema mayor (Nyasaland, Government 1946: 15). En los hechos, la Comisión prefirió no referirse a la cuestión, considerándola sólo de interés para “el estudiante de historia o de jurisprudencia comparativa” (Nyasaland Government, 1946: 7). Las reformas que siguieron a las recomendaciones de este informe se limitaron a asegurar algunos derechos de los arrendatarios laborales en contra de los desalojos. De esa manera, apoyaron el *statu quo* capitalista colonial.

1 El uso deliberado de la ley por parte de los colonos para asegurar la explotación de los trabajadores negros incluía: el pago de un impuesto de morada a fines del siglo XIX, que los obligaba a buscar trabajo asalariado en las plantaciones; el requerimiento de la Ordenanza de los Arrendatarios Nativos (Propiedades Privadas) de 1917 de que la renta en las plantaciones sólo podía pagarse en la forma de trabajo y no de dinero; y la prohibición de la Ordenanza de Trabajo Nativo, de 1928, del reclutamiento de negros sin permiso gubernamental, que buscaba principalmente prevenir el agotamiento de la mano de obra a partir de su reclutamiento por los agentes de la industria minera de Sudáfrica y Rhodesia.

LA POLÍTICA POSCOLONIAL DE TIERRAS

El reemplazo del régimen colonial por un gobierno popularmente electo a principios de la década del sesenta no transformó la economía política de Malawi, sino que mantuvo las leyes y las políticas agrarias. El gobierno veía la tierra como una mercancía que debía ser administrada por las fuerzas del mercado y, por lo tanto, alentaba a los emprendedores a adquirir porciones de tierra comunal y a convertirlas en propiedad privada. Como es de esperar, los beneficiarios de esta liberalización del mercado de tierras fueron en su mayoría granjeros capitalistas nativos, entre los que se contaban políticos mayores, servidores civiles, jubilados y otras personas de negocios nativos, anteriormente no dedicadas a la agricultura (Moyo, 2000: 8).

El gobierno poscolonial intentó llevar a cabo varias reformas agrarias a fines de la década del sesenta. Sin embargo, a diferencia de América Latina, donde las iniciativas del Estado para hacer reformas se instituyeron en el mismo período bajo condiciones de presión popular para el cambio revolucionario (Veltmeyer, pág. 301 de este volumen), en Malawi, la fuerza dominante era el imperativo de la empresa privada y el libre mercado. Además de *desracializar* formalmente el sistema de tenencia de la tierra, el objetivo principal de esta iniciativa era estimular el desarrollo agrícola e incrementar la cantidad de tierras en manos privadas. Se afirmaba que sólo la tierra privada tenía valor como mercancía en el mercado (Nothale, 1984). Se asumía que la razón por la cual las comunidades rurales no habían conseguido hasta la fecha acceder al crédito comercial para el progreso de su tierra era que aquella que ocupaban por la costumbre no era de propiedad individual. Las herramientas normativas con las que se buscó lograr la *desracialización* y la individualización de los títulos consistieron en varias promulgaciones aprobadas por el parlamento en 1967, incluyendo la Ley de Tierras, la Ley de Tierra Registrada y la Ley de Desarrollo de la Tierra Consuetudinaria. Estas leyes instituyeron el mecanismo por el cual se convertía a la tierra consuetudinaria en tierra privada. Tal situación produjo un dramático aumento del número de propiedades privadas, principalmente dedicadas a la producción de tabaco. Como era previsible, el incremento de la privatización de la tierra para fines comerciales en el período poscolonial redujo la cantidad de suelo disponible *per cápita* para los campesinos, los granjeros pequeño-propietarios y las comunidades en general.

El conflicto entre los diferentes intereses de clase por la tierra encontró en Malawi una articulación normativa en los regímenes legales que clasifican la propiedad de acuerdo con tres categorías: pública, consuetudinaria y privada. La ley define a la pública como aquella tierra que es ocupada, usada o adquirida por el gobierno. Esta categoría de tierra confiere derechos a perpetuidad al presidente. La tierra consue-

tudinaria es aquella que se posee por la ley consuetudinaria aunque, al mismo tiempo, la ley reglamentaria le confiere también su derecho al presidente y le concede el poder de su control y administración al ministro de tierras. Por su parte, la tierra privada es aquella poseída por arrendamiento, por dominio absoluto o por un título del Certificado de Derecho. En teoría, cualquier parcela de tierra puede convertirse de un tipo de propiedad a cualquiera de los otros dos. Históricamente, sin embargo, ha sido la tierra consuetudinaria la que registró mayores pérdidas de hectáreas en favor de las otras categorías, mientras que la tierra privada y la pública registraron ganancias netas totales. Entre 1967 y 1994, por ejemplo, más de un millón de hectáreas de tierras consuetudinarias se perdieron en favor de la tierra pública y privada (Malawi Government, 1999: 66). La tabla 1 ilustra analíticamente esta tendencia, haciendo referencia, específicamente, a la década del ochenta.

Tabla 1
Enajenación de tierras consuetudinarias (en hectáreas), 1983-1989

Año	Consuetudinarias	Públicas	Privadas	Arrendadas	Consuetudinarias perdidas
1983	7.459.278	1.640.594	52.058	296.811	13.057
1984	7.455.190	1.639.931	52.065	301.555	4.088
1985	7.446.705	1.641.607	52.016	308.413	8.484
1986	7.427.128	1.641.993	52.016	327.603	19.577
1987	7.398.284	1.654.953	53.903	341.601	28.843
1988	7.388.516	1.655.113	53.903	351.209	9.768
1989	7.384.484	1.655.961	53.903	355.492	4.032

Fuente: Gobierno de Malawi, 1999, Tomo III, Parte II: 9.

Ninguna de las reformas de 1967 hacía referencia al legado de falta y hambre de tierra que la política colonial había dejado. Habiendo *desracializado* la propiedad y la ocupación de tierras a nivel formal, las leyes de 1967 crearon un marco normativo que pretendía ser ciego al género y a la clase. Este enfoque oscureció el carácter clasista y de género de las relaciones de propiedad y, en consecuencia, defendió las desigualdades de clase y de género, impidiendo los reclamos que pudieran transformarlas sustancialmente. Así, en vez de facilitar la transformación de esas desigualdades en relaciones de propiedad vinculadas con la tierra, las reformas de 1967, de hecho, sólo las profundizaron aun más, porque, en sustancia, sólo beneficiaban a la gente que podía comprar títulos de arrendamiento o de dominio absoluto.

RECUPERANDO LA TIERRA

Durante las tres décadas siguientes, el Estado ahondó las desigualdades al implementar diversas políticas agrarias en relación con el acceso al consumo, el crédito, el mercadeo, los factores de producción y los servicios agrícolas, que favorecían a la agricultura en gran escala por sobre los minifundios (Mhone 1992; Pryor, 1988; World Bank, 1985). Incluso en los pocos casos en que las políticas de ayuda se centraron en los pequeños granjeros, la mayor parte del apoyo fue para el 20% más rico de la categoría (Malawi Government, 1995: 5). Esas iniciativas incluían el Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de 1967 y el Proyecto de Desarrollo Rural Nacional de 1977. Éstos tenían por objetivo mejorar el acceso al consumo, el crédito, los factores de producción, los mercados y los servicios de extensión de los pequeños granjeros, pero no tuvieron éxito debido a la falta de coordinación intersectorial, a los fondos insuficientes y al error de los planificadores por no tener en cuenta el contexto cultural en que vivían los beneficiarios de los proyectos (Chanthunya, 1999).

Además de privatizar las tierras comunales, el Estado también adquirió grandes extensiones para sus propósitos, que incluían el establecimiento de reservas forestales, reservas de fauna, parques nacionales y áreas de protección del medio ambiente. Se estima que el 21% del total de tierras de Malawi consiste en “áreas protegidas”: parques nacionales, reservas de fauna y bosques (Malawi Government, 1983, 2001a). En 2001, había ochenta y un reservas forestales y cinco reservas de vida salvaje y parques nacionales esparcidos por todo el país. Sin embargo, como observaba el gobierno a principios de la década del ochenta (Malawi Government, 1983):

Los parques y las reservas tienen poca relevancia para la mayoría de los malawienses. La mayor parte de la gente que visita los parques es extranjeros. Aunque se argumente que el dinero que pagan los visitantes puede ayudar a financiar otros servicios sociales, esto, en el mejor de los casos, debe parecerle a la mayoría de las personas un tenue beneficio de las áreas protegidas. La mayoría de los que disfrutaban beneficios directos, lo hacen ilegalmente.

La Comisión de Reforma de la Política Agraria de 1999 también concluyó que “la importancia económica y ambiental de los parques nacionales no era generalmente apreciada” (Malawi Government, 2000). En 2001, además de las áreas para la conservación y el ecoturismo protegidas por el Estado, 217.651 hectáreas de tierras fiscales se usaron para alojar diversos proyectos agrícolas, como instalaciones de irrigación, estaciones de investigación agrícolas, institutos agrícolas, instalaciones de cría y granjas estatales (Malawi Government, 2001a).

LA CUESTIÓN DE LA TIERRA HOY

La alienación de las tierras consuetudinarias de los campesinos y su conversión en propiedad privada o estatal ha dado lugar, progresivamente, a una gran masa de campesinos sin tierra o que padecen su escasez, y a los que se les presentan las siguientes opciones: continuar trabajando en las propiedades; migrar a los centros urbanos y ser parte de la clase baja en aumento que se gana la vida en la periferia del mercado formal; o involucrarse en acciones de oposición al sistema, como resistir la privatización de las tierras comunales y ocupar las privadas o estatales.

La Política Nacional Agraria de Malawi de 2001 reconocía las determinaciones estructurales, económicas y sociales subyacentes en la cuestión e identificó los siguientes como problemas clave: efectos residuales de la política colonial de tierras; altas tasas de densidad; la escasez de suelos que, paradójicamente, convive con muchas tierras ociosas; la presión sobre la tierra cada vez peor; usurpaciones “provocadoras”; inmigrantes que invaden la frontera; invasiones en áreas protegidas y de conservación; una descontrolada asignación de tierras costeras de lagos y un mal manejo del desarrollo de la tierra (Malawi Government, 2001b: 20). Lo que la política omitía era el acceso desigual a la tierra y, además, opacaba el marco del programa neoliberal que precisamente continúa justificando la mercantilización de la tierra y su apropiación por parte de los arrendatarios y de los propietarios de dominio absoluto.

Si las acciones de oposición al sistema movilizaron una “reforma agraria desde las bases”, la urbanización simplemente transfirió el problema de la falta de tierras a las áreas urbanas. Los indicadores de la Encuesta de Bienestar conducida por la Oficina Nacional de Estadísticas señalaron que hasta el 46% de la gente sin tierra vive en centros urbanos. Allí, las ocupaciones se hacen más evidentes en los “asentamientos usurpados” de áreas periurbanas, donde los inmigrantes generalmente viven en condiciones sanitarias y medio ambientales muy malas (United Nations, 2001: 8). Algunos ayuntamientos reconocieron ciertos asentamientos como “áreas tradicionales de viviendas” o “usurpaciones mejoradas”, y las autoridades gubernamentales locales les proveyeron servicios sociales (Malawi Housing Corporation, 1981; Chilowa, 1996).

El potencial de las ocupaciones de tierras para lograr un cambio radical del régimen de propiedad de Malawi se halla limitado por el carácter neoliberal del orden político y económico dominante. La Constitución defiende la autonomía individual a través de un aparato de normas de los derechos humanos que, como regla general, prioriza los intereses del individuo por sobre los de la comunidad. Este sistema de reivindicación de los derechos debilita las luchas de las masas al oscurecer, deliberadamente, su carácter clasista y reconstruirlas como conflictos entre individuos reducidos al estatus de “querellantes” y “acusados” (Gutto, 1993).

RECUPERANDO LA TIERRA

Además de la individualización constitucional de la cuestión de la tierra, otra figura relevante del orden neoliberal dominante es la presunción de neutralidad de las instituciones juzgadoras. Las ocupaciones de tierras son conflictivas por naturaleza. Su potencial de efectuar una reforma agraria sustantiva depende, por lo tanto, de las preferencias de las instituciones que juzgan los conflictos que las ocupaciones de tierras generan y representan. En Malawi, la Constitución da el poder a las cortes para ser la autoridad juzgadora final. La jurisprudencia liberal sugeriría que las cortes pueden, y de hecho lo hacen, liberarse de esa función sobre la base del principio objetivo (Wechsler, 1959; Motala, 1998). Esto es rechazado por los expertos legales críticos de diferentes matices, que argumentan que tal concepción de la magistratura se basa en la idealización de una institución que, en realidad, cuenta con una narrativa legal subjetiva, administrada por jueces que no pueden despojarse de los juicios subjetivos que reflejan sus identidades de clase, raza y género (Griffith, 1997). En el contexto de las ocupaciones en Malawi, la magistratura ha invariablemente hecho respetar el derecho de los propietarios individuales de tierras privadas por sobre el de los ocupadores a la redistribución o a la restitución.

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y LA COMPOSICIÓN SOCIAL DE LAS OCUPACIONES DE TIERRAS

El primer factor geográfico que determina las ocupaciones es la distribución de la densidad de la población, que guarda correlación con los patrones de asentamiento y alienación de las tierras coloniales. Esto sitúa las ocupaciones mayormente en los distritos cultivadores de té de Mulanje y Thyolo y en las zonas aledañas a la antigua capital colonial de Zomba. Éstos son adyacentes al distrito industrial más grande de Malawi, Blantyre, lo cual crea el potencial para una alianza entre los ocupadores de tierras y el proletariado urbano, capaz de originar un movimiento de bases populares para el cambio social radical.

El segundo factor geográfico se relaciona con las reformas de mercado de fines de la década del sesenta, que facilitaron la conversión de grandes extensiones de tierra de propiedad comunal a dominios de propiedad absoluta para el cultivo del tabaco. Estas propiedades se establecieron principalmente en distritos de la región central y del norte del país que abarcaban Mchinji, Kasungu, Rumphu y Mzimba. De acuerdo con el informe de la Comisión Presidencial sobre la Reforma de la Política Agraria de 1999, la escasez de tierras en Malawi es “particularmente grave” en las áreas de cultivo del té, en Mulanje y Thyolo; en las propiedades tabacaleras en Kasungu; y en los Parques Nacionales de Nyika, Kasungu, Lente y Liwonde (Malawi Government, 2000: 40).

El tercer factor geográfico que determina la locación de las ocupaciones de tierras en Malawi es la ubicación de las áreas de conservación de la naturaleza y del ecoturismo y de otras tierras estatales protegidas por diferentes leyes del Estado. Un ejemplo típico de ocupaciones en las áreas de conservación de la naturaleza son las de la Reserva Forestal Matandwe, en el extremo sur del país. Esta área fue ocupada en 1994 por pobladores locales que resistieron el desalojo durante ocho años consecutivos. En 2002, se procesaron y sentenciaron por ingreso ilegal a doscientos de sus ocupantes. Para ese entonces, 10 mil hectáreas de las 26.205 de la reserva estaban ocupadas por 5 mil campesinos locales, que indicaron que estaban preparados para resistir cualquier futuro intento de desalojo². Otra ocupación de este tipo involucró a doscientas cuarenta y dos personas que se alojaron en la Reserva Forestal Liwonde en el distrito de Machinga, en la región sur, en 2002. En julio de ese año, los funcionarios del Departamento Forestal, ayudados por la policía, respondieron a la ocupación quemando las casas, los refugios temporales de los ocupantes y destruyendo el producto de sus granjas. Además, arrestaron y procesaron a cuarenta ocupantes³.

También hubo ocupaciones de tierras estatales, que no son reservas de animales ni parques nacionales. Uno de estos casos fue el de los terrenos pertenecientes a la Estación de Investigación Agrícola Lunyangwa, en el distrito norte de Mzuzu, que fueron ocupados por ciento siete personas y un ministro del gabinete⁴. Otro caso fue la ocupación de las tierras que el gobierno había usado para instalar a cientos de jóvenes del partido oficial –conocidos como los Jóvenes Pioneros de Malawi–, antes de que su organización fuera desbandada como parte del proceso de democratización a principios de la década del noventa. Incluso, parte de la tierra donde yace el palacio presidencial ha sido víctima de ocupaciones intermitentes por parte de los habitantes del área local, quienes se quejan de que el gobierno la adquirió sin pagarles ninguna compensación.

Algunas ocupaciones se produjeron, asimismo, en tierras privadas. Un ejemplo es el de la ocupación de una porción de veinticinco hectáreas, propiedad de una compañía de té en el distrito sur de Thyolo. Los ocupantes eran, principalmente, campesinos de las aldeas locales, que reclamaban que las tierras les pertenecían porque habían sido de ellos antes de que se las “robaran” los pobladores coloniales⁵. Otros ejemplos fueron la ocupación de un cultivo de tabaco en el distrito sur de Zomba y de un

2 *The Nation*, 25 de julio de 2002.

3 *The Nation*, 29 de julio de 2002.

4 *Daily Times*, 20 de marzo de 1997.

5 *Daily Times*, 3 de enero de 1996 y 17 de octubre de 1995.

RECUPERANDO LA TIERRA

campo privado en el distrito de Rumphu de la región noroeste. En el último caso, ochocientas familias ocuparon el terreno durante siete años, desde la muerte de su propietario hasta la recuperación del mismo por un banco que obtuvo una orden judicial para desalojarlas⁶. En conjunto, las ocupaciones de tierras de propiedad privada han cubierto desde el 5% del área de los cultivos menores de veinte hectáreas hasta el 52% de los grandes campos de quinientas hectáreas o más (Malawi Government, 1999: 17).

Finalmente, hubo evidencia de que en algunos casos que atrajeron la atención de los medios, los ocupantes no siempre eran campesinos pobres. Se ha informado que, en muchos de ellos, los líderes locales tradicionales y otros políticos han estado entre quienes ocuparon tierras privadas y del gobierno. Así, en un incidente de julio de 2002, un grupo de personas locales, que incluía a dos de los jefes tradicionales más prominentes de Malawi y a otros jefes menores, ocupó parte de un área de 25 mil hectáreas perteneciente a un fideicomiso asignado por el gobierno. No se trataba en este caso, por lo tanto, de un movimiento de ocupación organizado por campesinos, sino de uno que comprendía a la elite de una estructura política, económica y social basada en leyes consuetudinarias patriarcales.

La dinámica de género es también un elemento crítico de las ocupaciones de tierras. Lamentablemente no hay estudios que indiquen de qué manera actúa esa dinámica en el contexto de Malawi. Sin embargo, existe suficiente evidencia como para sugerir que tanto los hombres como las mujeres se involucran en las ocupaciones de tierras asignadas y en la resistencia a los desalojos⁷. De todas maneras, también es cierto que las desigualdades de género que caracterizan a la economía política de Malawi, en general, se manifiestan en el proceso de ocupación, particularmente en términos de la participación limitada que tienen las mujeres en la pirámide que ordena el proceso de toma de decisiones de los ocupadores. Asimismo, es pertinente notar que es probable que la dinámica de género de las ocupaciones se vea afectada por el aparente incremento de la intervención de las estructuras de poder tradicionales y consuetudinarias en las ocupaciones. Aunque dichas estructuras han sido cooptadas formalmente por el Estado desde los tiempos coloniales, en el contexto actual, un gran número de jefes, dirigentes de aldeas y otros líderes tradicionales está a favor de los ocupantes. Esta dependencia en aumento de las estructuras de autoridad tradicionales para guiar al movimiento de ocupación es probable que reproduzca el patriarcado que caracteriza a las ocupaciones en general. Las perspectivas de un

6 *The Nation*, 18 de marzo de 2003.

7 Por ejemplo, en el caso de la ocupación de la Reserva Forestal Liwonde, discutido antes, en el que de los cuarenta ocupantes arrestados por resistirse al desalojo de los oficiales de policía y del Departamento Forestal, nueve eran mujeres.

aumento cuantitativo y cualitativo del rol de la mujer en las ocupaciones de tierras en Malawi continúan, por lo tanto, siendo dudosas.

Por otra parte, es factible que la influencia en aumento de las autoridades tradicionales repercuta en la disparidad de las edades de quienes ocupan las tierras. Debido a la escasez de literatura sobre el perfil de edad de los ocupantes de tierras en Malawi, es difícil comprender la importancia de este factor a la hora de determinar varios aspectos de la ocupación, como su ubicación geográfica, las tácticas a emplear, la respuesta de las autoridades y la sustentabilidad de la ocupación. Ésta es, en consecuencia, un área que requiere un urgente estudio sistemático.

ESTRATEGIAS Y ALIANZAS DEL MOVIMIENTO SIN TIERRA

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA CUESTIÓN DE LA TIERRA

El rol de la sociedad civil en las ocupaciones de tierra se puede apreciar mejor relacionándolo con la historia más general de la sociedad civil de Malawi. La imposición de las relaciones de producción capitalistas por parte de la administración colonial hacia fines del siglo XIX produjo cierta resistencia organizada de la población nativa. En algunos casos, los africanos utilizaron la violencia como un medio de protesta, como durante el “Levantamiento Chilembwe”, una serie de ataques armados dirigidos por un evangelista carismático educado en los Estados Unidos –John Chilembwe– en contra de varios colonos agrícolas (Shepperson y Price, 1958). Pero este tipo de radicalismo era, no obstante, una excepción. El método más común de los defensores de la reforma era constituir “asociaciones nativas” junto con otros grupos de presión y reclamar reformas moderadas dentro del orden legal colonial sin desafiar directamente su legitimidad, o pedir un gobierno autónomo (Van Velsen, 1966). Sólo después de la década del cincuenta, cuando las diversas organizaciones de la sociedad civil se unieron alrededor de la idea de la independencia nacional, las demandas se volvieron más radicalizadas.

Luego de la independencia, la relación orgánica entre la sociedad civil y el partido africano más importante, el Partido del Congreso de Malawi (MCP, por su sigla en inglés), evolucionó hacia una en la que el Estado cooptó a la sociedad civil, particularmente luego de restablecerse un régimen constitucional de partido único altamente centralizado. De esta manera, la sociedad civil quedó virtualmente desmovilizada, al convertirse en ilegal toda organización política fuera de la estructura del partido oficial (Chipeta, 1992). Los sin tierra y los poseedores de poca formaron en Malawi, históricamente, alianzas con los partidos políticos y los grupos de presión. De hecho, el MCP, que fue la punta de lanza de la independencia del país, se fundó originalmente como el Congreso Africano de Nyasaland en 1944, como resultado de una alianza de las

RECUPERANDO LA TIERRA

organizaciones de la sociedad civil que, entre otras cosas, proclamaban la reparación de la expropiación colonial de las tierras africanas (Van Velsen, 1966: 400). Sin embargo, cuando la independencia y la victoria para el MCP se volvieron inminentes en las primeras elecciones libres, el partido comenzó a minimizar la cuestión de la tierra. En su manifiesto de 1961, por ejemplo, no se hace mención a su distribución. En cambio, las referencias a los temas agrarios se limitaban al compromiso de modernizar la agricultura y a comercializarla “a una escala masiva”, alentando el cultivo de las cosechas que se venden inmediatamente (Partido del Congreso de Malawi, 1961).

A principios de la década del noventa, las campañas políticas en favor de la introducción de un sistema de gobierno multipartidario también utilizaron la tierra para ganar el apoyo de la gente, particularmente en los distritos ávidos de tierra en la región sur del país. En este lugar, los políticos del Frente Democrático Unido (UDF) y la Alianza por la Democracia (AFORD) prometieron que la política multipartidaria traería la redistribución⁸. Al igual que las vinculaciones con los políticos nacionalistas en las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta, los vínculos con los “demócratas multipartidarios” en la década del noventa también resultaron ser ilusorios en términos de entrega de tierras a los ávidos por ella y a los que no la tenían. Una vez en el poder, los “demócratas” se preocuparon más por preservar la ley burguesa y crear un clima propicio para los inversores sobre la base de la supremacía de las fuerzas del mercado, tal como queda ejemplificado con la política de tierras de 2002.

Las ocupaciones de tierra en Malawi nos instruyen acerca de las limitaciones de la capacidad de la sociedad civil para efectuar un cambio económico y social radical. Se ha dicho que en Malawi la sociedad civil lucha por definirse a sí misma, aun en el sentido mínimo de constituir asociaciones libres del control del Estado (Minnis, 1998). Otros, en cambio, afirman que liberarse del Estado no es una condición esencial para la existencia de la sociedad civil (Sachikonye, 1998) y que esa concepción de la sociedad civil es peculiarmente característica del pensamiento neoliberal (Neocosmos, 2001). Las ocupaciones de tierras en Malawi parecen reivindicar este punto de vista, ya que exponen la naturaleza ilusoria de la independencia de la sociedad civil del Estado.

En su relación con la cuestión de la tierra, la sociedad civil de Malawi puede ser categorizada de acuerdo a tres tipos. La primera categoría consiste en aquellas organizaciones de la sociedad civil que tienen base urbana, dirigencia de elite y profesan la filosofía de la democracia liberal. La segunda es la de aquellas de base popular, que intentan alcanzar sus

8 *The Nation*, 7 de febrero y 25 de julio de 2002.

objetivos dentro del marco legal y administrativo existente, el cual define y gobierna la propiedad y las ocupaciones de tierras. La tercera categoría es la de los grupos que se organizan para promover el bienestar de sus miembros desafiando las relaciones de propiedad actuales.

La primera categoría de grupos de la sociedad civil consiste, principalmente, en las omnipresentes “organizaciones no gubernamentales”. Estas ONG, con base en los centros urbanos de Blantyre, Lilongwe y Mzuzuz, son mantenidas con fondos de organizaciones europeas y estadounidenses. La ONG típica se focaliza en la defensa de los derechos civiles y políticos en el marco de una constitución democrática liberal y no articula ninguna postura respecto de la reforma agraria ni participa en las ocupaciones de tierras o en otras acciones que tengan por objetivo transformar substancialmente el régimen de propiedad actual. La ONG característica, más allá de su retórica, se opone ideológicamente a cualquier cambio importante de las relaciones de propiedad, y tiene fe en las reformas basadas en el mercado y en el “estado de derecho”.

La segunda categoría de grupos de la sociedad civil incluye a las colectividades que no exhiben los rasgos de la ONG típica. Aquí hay agrupaciones que son geográficamente más diversas y que tienen una presencia que va más allá de los confines de los centros urbanos. Los grupos de esta categoría se pueden diferenciar aun más sobre la base de su formalización relativa, desde aquellos que se estructuran como las ONG de la primera categoría, hasta aquellos que tienen organizaciones más laxas. El sector agrícola, en Malawi, posee grupos formalizados, con constituciones escritas y una estructura burocrática interna. Éstos son la Fundación Kaporo para el Desarrollo Rural (Karonga); la Iniciativas Voluntarias de Transformación de Mabulabo (Mzimba); la Organización para el Desarrollo de la Irrigación de la Gente Pobre de Mchirawengo (Luwelezi); las Mujeres en Desarrollo (Balaka); la Asociación de Empresas de la Zona de Aldeas (Dowa); la Asociación Zipatso de Malawi (Mwanza) y otros “clubs de granjeros” y cooperativas que funcionan en muchas de las áreas rurales de Malawi. En la otra punta del espectro están los grupos de la sociedad civil de base popular, que se organizan mucho más débilmente. Estos grupos son poco burocráticos y no tienen ninguna constitución escrita. Los ejemplos incluyen las muchas comunidades comprometidas en los planes “de manejo de los recursos naturales comunitarios”, bajo los que las comunidades locales ayudan al Estado a conseguir sus objetivos de conservación en beneficio ostensible de sí mismas. Aunque estos grupos funcionan de forma relativamente independiente del Estado y de los donantes lo hacen, sin embargo, dentro de los límites de la Constitución y el estado de derecho.

Aunque la segunda categoría de organizaciones puede parecer estructuralmente más independiente de los donantes y del Estado que

las ONG típicas de la primera categoría, las más formales entre ellas son, también, dependientes del financiamiento de los mismos donantes estadounidenses y europeos que dan fondos a las organizaciones de la primera categoría. Por esta razón, se organizan de acuerdo con las condiciones que ponen los donantes a la gobernabilidad interna y a las relaciones internacionales, y participan de los paradigmas neoliberales de desarrollo y de propiedad que ellos abrazan.

La tercera categoría de organizaciones de la sociedad civil es similar a la de los grupos más débilmente organizados de la segunda categoría. La diferencia crítica entre ellos es que los grupos de la categoría anterior no aceptan las limitaciones de la Constitución o de otras leyes del Estado. Por el contrario, estos grupos, entre los que se incluyen los colectivos de ocupaciones de tierras discutidos en este trabajo, desafían el orden legal neoliberal sobre la base de que no es nativo y de que busca preservar un *statu quo* injusto de las relaciones de propiedad.

Además, la aversión histórica del Estado hacia los movimientos de trabajadores ha tenido como resultado un movimiento sindical demasiado débil y dividido como para movilizar al sindicalismo dentro de las áreas rurales. Algunos de los principales obstáculos históricos y estructurales que sufrió la expansión del sindicalismo fueron el plan de sectorización adaptado luego de la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales (1996) –bajo la cual el Estado restringía el número de sectores en los que los gremios podían organizarse (en 1998 había sólo doce sindicatos en doce sectores)– y la designación, por parte del Estado, del Congreso de Sindicatos de Malawi (MCTU), una organización paraguas que no tenía su mandato conferido por todos los sindicatos (Meinhardt, 2003: 41-42). El resultado es que “el movimiento de trabajadores de Malawi es quizás el menos desarrollado y el más débil de la Comunidad de Desarrollo del sur de África (SADC, por su sigla en inglés) en términos de niveles de sindicalización y de recursos materiales” (Meinhardt, 2003: 41-42).

La capacidad de las organizaciones de la sociedad civil rural para crear vínculos efectivos entre ellas se vio negativamente afectada por las severas limitaciones en el flujo de información. Considérese, por ejemplo, que en 1998, alrededor de la mitad de la población de Malawi no tenía acceso a la radio (Malawi Government, 1998). En un país cuya población alfabetizada es sólo de un 57%, la escasez de radios limita mucho la comunicación masiva que, de otra manera, podría servir como un medio para que las comunidades rurales tengan conocimiento de cómo otras comunidades se organizan y reclaman la redistribución de la tierra. Vale la pena señalar que las organizaciones campesinas son intrínsecamente incapaces por su dispersión de provocar un impacto nacional (Scott, 1985). Unos medios de comunicación de masas democratizados podrían servir como herramienta para superar las dificultades de comunicación

de los campesinos a nivel nacional, aunque posiblemente su eficacia estuviera aún socavada por el analfabetismo, la falta de acceso a materiales de lectura, la falta de acceso a la radio y las burocracias sostenidas con bajos recursos (Seidman y Seidman, 1994: 269).

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, algunas comunidades han utilizado las ocupaciones de tierras para proclamarse en favor de un nuevo régimen de propiedad. De acuerdo con los casos informados, esta reforma agraria de base popular se fundamenta en la concepción de la reforma agraria como un medio de asegurar al menos cuatro objetivos: la restitución de la tierra que fue adquirida con los regímenes coloniales de tenencia; la conversión de la tierra actualmente destinada a parques y reservas nacionales en tierra de agricultura para la producción de alimentos; la distribución equitativa de las tierras fértiles; y la democratización del gobierno local, incluyendo el manejo y la administración de la tierra. Las siguientes declaraciones de ocupantes de tierras ejemplifican tal concepción:

La tierra [en el Parque Nacional Lengwe, propiedad del gobierno] es fértil, y es por ello que muchos de nosotros preferimos cultivar allí. Después de todo, esa tierra nos pertenece. El gobierno se la quitó a nuestros antepasados y lo que estamos haciendo es justo cultivar en nuestra propia tierra [*sic*]⁹.

Nosotros queremos que la gente controle la tierra con su propia organización y no un consorcio privado impuesto sobre ellos [...] Nosotros le advertimos [al consorcio nombrado por el gobierno] que para el primero de marzo le entregara la tierra a la gente. Ellos no quisieron escuchar, por eso las personas agraviadas y los jefes estuvieron de acuerdo en tomar las tierras que legalmente les pertenecen.¹⁰

LAS RESPUESTAS DEL ESTADO Y DE LOS GRANJEROS A LAS OCUPACIONES DE TIERRAS

La concepción radical de la reforma agraria por parte de la sociedad civil rural es fundamentalmente diferente de la adoptada por las distintas reformas dirigidas por el Estado y asistidas por el mercado que se han implementado hasta la fecha. La Política Agraria Nacional de 2002 tipifica el carácter neoliberal de esas reformas y no sugiere la inmediata restitución y redistribución de tierras. En realidad, hace que la redistribución sea contingente al dinero que el gobierno dispone para compensar a aquellos cuyas tierras han de ser restituidas o redistribuidas. De hecho, el único plan específico de reasentamiento a que se hace referencia es

9 Se trata de un hombre de 34 años desalojado de la tierra que ocupó en el Parque Nacional Lengwe, citado en *The Nation* del 7 de febrero de 2002.

10 Jefe Mayor Kaomba, citado en *The Nation*, 7 de mayo de 2002.

RECUPERANDO LA TIERRA

aquel en el que el gobierno se propone reubicar a aproximadamente a 20 mil personas en 14 mil hectáreas a un costo de por lo menos 25 millones de dólares estadounidenses (Malawi Government, 2001: 55). Explícitamente, esta política da a conocer su *ethos* neoliberal cuando manifiesta que las reformas se realizarán con el siguiente credo:

El respeto a la ley y la protección de la integridad de los derechos de propiedad acumulados son importantes para instalar un sistema de tenencia de la tierra estable. Se aplicarán la protección constitucional de los derechos privados y el debido proceso legal correspondiente para proteger las inversiones y los factores de producción ligados a la tierra (Malawi Government, 2001: 25).

El argumento económico en contra de las ocupaciones de tierras sugiere que es más probable que se cuide la tierra de propiedad privada que la que no tiene ningún dueño particular (Hardin, 1968; Leopold, 1934). De todas maneras, la tierra no es una mera mercancía que obtiene su valor en relación con el mercado, sino también un recurso que tiene valor sociocultural como parte integral de la formación, la locación y la preservación de la identidad social de las comunidades.

La respuesta de las autoridades a los reclamos de tierras ha sido tanto de complacencia como de censura. Ha sido complaciente en el sentido de que el gobierno ha reconocido la legitimidad de las demandas de aquellos que desean reclamar tierras y ha convertido algunas de ellas en varias leyes y políticas agrarias. Así, por ejemplo, con la Política Agraria Nacional de 2002 creada, entre otras cosas, para disminuir la creciente presión a través de la redistribución y del reasentamiento. Al darles cabida a los intereses de aquellos con reclamos de tierras se busca, además, cooptar a las comunidades locales en las estructuras responsables del manejo del medioambiente, los bosques y otros recursos naturales¹¹. Sin embargo, la estrategia complaciente del Estado sólo es evidente en el contexto de tales iniciativas a mediano y a largo plazo.

Por otro lado, cuando tuvo que enfrentarse a situaciones inmediatas de ocupaciones de tierras, el Estado respondió menos benignamente. Para la protección de los bosques en contra de la ocupación, el Estado se ha apoyado en la vigilancia de los guardias forestales y exploradores (Malawi Government, 2001: 14). La mayor parte del público percibe el enfoque de la protección estricta –es decir, de la vigilancia– negativamente, puesto que a pesar de aceptar los objetivos de la vigilancia, observan que “la necesidad de recursos y en algunos casos, incluso, de tierra [es] lo suficientemente grande como para justificar romper la ley”

11 Ver, por ejemplo, la Ley de Manejo Ambiental (1996) y la Ley Forestal (1997).

(Malawi Government, 2001: 14). Esto hace que nos preguntemos si un orden legal que se opone a las demandas populares de justicia económica, social y política puede tener una autoridad legítima tal que haga cumplir la ley. Los teóricos legales positivistas responderían afirmativamente, mientras que los teóricos legales críticos, sociológicos y del derecho natural tendrían el punto de vista opuesto (Riddall, 1991).

El poder judicial ha tenido un papel clave en la respuesta del Estado hacia las ocupaciones al suscribir, efectivamente, la estructura actual de las relaciones de propiedad e invocando concepciones idealizadas del derecho que, generalmente, ignoran la naturaleza histórica de los derechos humanos, incluso de los derechos de propiedad. En este enfoque se considera irrelevante, para determinar la titularidad presente, la cuestión de la validez de las transferencias intencionales de la propiedad consuetudinaria de la tierra por parte de los jefes locales a los pobladores coloniales¹². Ésta fue la postura asumida por la Corte Suprema durante el período colonial en el caso del *Supervisor de Asuntos Nativos versus Blantyre y East Africa Ltd.*, aunque intentó mejorar los aspectos más duros de la expropiación colonial de la tierra de las comunidades nativas. Es una perspectiva que la corte ha tenido en muchos casos desde entonces.

Contrasta, además, con la jurisprudencia históricamente más consciente que engendró el concepto de título de tierra aborigen, que surgió de los casos australianos de *Mabo versus Queensland* [N° 2]¹³ y *Wik versus Queensland*¹⁴. De acuerdo con el juez Brennan, en el primer caso “sólo la falacia de igualar la soberanía [colonial] a la titularidad de la tierra da lugar a la noción de que el título nativo se extingue con la adquisición de la soberanía” (477)¹⁵. Esta posición es similar a la adoptada por la Corte Constitucional Sudafricana en el caso del *Gremio Agrícola Transvaal versus el Ministro de Asuntos de la Tierra*¹⁶, donde la corte observó que ciertas personas y comunidades tienen un reclamo legítimo a la restitución de los derechos sobre la tierra que se perdieron como resultado de las leyes discriminadoras del pasado¹⁷.

Los dueños de la tierra, por su parte, respondieron a las ocupaciones pidiendo la ocupación estatal, que se manifestó bajo la aplicación

12 Por ejemplo, ver los siguientes casos decididos por la Corte Suprema: la hacienda de té *Nchima versus Todos los Interesados*, Causa Civil N° 338 de 1998; *Mwawa versus Jekemu*, Causa Civil N° 883 de 1993.

13 (1992) 175 Commonwealth Law Reports 1.

14 (1997) 187 Commonwealth Law Reports 1.

15 Ver también Ng'ong'ola, 1997.

16 1997 (2) SA 621.

17 Ver párrafo 33 de la sentencia de la corte.

RECUPERANDO LA TIERRA

de la ley criminal para arrestar, procesar y desalojar a los presuntos “invasores”. Los dueños de la tierra también recurrieron a la ley civil para conseguir órdenes de desalojo y, en un número limitado de casos, compensaciones. En algunos, los propios dueños tomaron la ley en sus manos y usaron la fuerza para desalojar a los ocupantes. En un caso particular, un dueño griego de un cultivo de tabaco en el distrito sureño de Zomba mató de un tiro a un hombre que estaba con un grupo de personas que había ocupado la granja¹⁸.

CONCLUSIÓN

Las ocupaciones de tierra en Malawi tienen sus raíces en la historia de las disputas entre, por un lado, los pequeños granjeros en tierras consuetudinarias y los trabajadores de los cultivos y, por el otro, entre los propietarios privados y el Estado. El orden legal neoliberal que formalmente garantiza los derechos humanos de todos, incluyendo el derecho a la propiedad privada y el derecho al progreso, ha sido intrínsecamente incapaz de darles el poder suficiente a los campesinos y a los trabajadores como para tener acceso a suficientes tierras para su sustento. Por el contrario, el Estado y los propietarios utilizan la ley para defender los derechos de la clase del propietario/empleador. La respuesta a esto ha sido el surgimiento de las ocupaciones como un importante medio a través del que los ocupantes desafían la legitimidad del orden económico neoliberal dominante y su superestructura legal. Sin embargo, debido a algunas razones políticas, sociales y económicas, el movimiento de ocupación en Malawi sigue estando ampliamente desorganizado, poco coordinado y carente de vínculos suficientes con otras fuerzas sociales progresistas. Aun así, es probable que sea el primer movimiento significativo en contra del sistema en desafiar la legitimidad del orden económico y político neoliberal, que ha sido la ideología dominante en Malawi. El número de los sin tierra y de los verdaderamente necesitados de ella está destinado a incrementarse en el futuro cercano. En consecuencia, las ocupaciones aumentarán en escala y en frecuencia, contribuyendo a la lucha por una transformación económica y social sustancial, no retórica basada en los principios de redistribución y restitución.

BIBLIOGRAFÍA

Bangura, Yusuf 1992 “Authoritarian Rule and Democracy in Africa: A Theoretical Discourse” en Gibbon, Peter, Bangura, Yusuf y Ofstad, Arve (eds.) *Authoritarianism, Democracy and Adjustment* (Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet).

18 *Yiannakis versus The Republic*, Corte Criminal de Apelaciones N° 37 de 1994.

- BDPA y AHT International 1998 *Tracer Study: A Component of the Customary Land Utilisation Survey* (Lilongwe: Government of Malawi) Vol. 3, Informe de la NSSA Tracer Survey.
- Chanock, Martin 1985 *Law, Custom and Social Order: The Colonial Experience in Malawi and Zambia* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Chanock, Martin 1991 "Paradigms, Policies and Property: A Review of the Customary Law of Land Tenure" en Mann, Kristin y Roberts, Richard (eds.) *Law in Colonial Africa* (Portsmouth: Heinemann).
- Chanthunya, Charles 1999 *Financial and Economic Returns to Land: Part I of the Final Report of the Presidential Commission of Inquiry on Land Policy Reform* (Zomba: Government Printer).
- Chilowa, Wycliffe 1996 *The Role and Management of Traditional Housing Areas*, mimeo (Center for Social Research, University of Malawi).
- Chilowa, Wycliffe, Milner, James, Chinsinga, Blessings y Mangani, Ronald 2000 *Social Policy in the Context of Economic Reforms: A Benchmark Survey Report* (Harare: SAPES).
- Chinsinga, Blessings 2002 "The Politics of Poverty Alleviation in Malawi: A Critical Review" en Englund, Harri (ed.) *A Democracy of Chameleons: Politics and Culture in the New Malawi* (Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet).
- Chipeta, Chinyamata 1993 "The Impact of Structural Adjustment on the People of Malawi" en Adepoju, Aderanti (ed.) *The Impact of Structural Adjustment on the Population of Africa* (Oxford: James Currey).
- Chipeta, Mapopa 1992 "Political Process, Civil Society and the State" en Mhone, Guy (ed.) *Malawi at Crossroads: The Postcolonial Political Economy* (Harare: SAPES).
- Cotterrell, Roger 1992 *The Sociology of Law: An Introduction*, 2^{da} edición (London: Butterworth).
- Freyfogle, Eric 2002 "The Tragedy of Fragmentation" en *Valparaiso University Law Review*, 36, pp 307-337.
- Gordon, Robert 1982 "Historicism in Legal Scholarship" en *Yale Law Review*, 90, pp 1017-1056.
- Gray, Richard 1960 *The Two Nations: Aspects of the Development of Race Relations in the Rhodesias and Nyasaland* (Oxford: Oxford University Press).
- Griffith, John 1997 *The Politics of the Judiciary*, 5^{ta} edición (London: Fontana).
- Gutto, Shadrack 1993 *Human and Peoples' Rights for the Oppressed: Critical Essays on Theory and Practice from Sociology of Law Perspectives* (Lund: Lund University Press).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Hardin, Garrett 1968 "The Tragedy of the Commons" en *Science*, 162, pp 1243-1248.
- Kanyongolo, Fidelis Edge 2000 "Human Rights Jurisprudence in Polarised Societies: A Comparative Analysis of Malawi and South Africa", tesis de doctorado (University of East Anglia).
- Kelman, Mark 1984 "Trashing" en *Stanford Law Review*, pp 36-321.
- Kelman, Mark 1987 *A Guide to Critical Legal Studies* (Cambridge, MA: Harvard University Press).
- Krishnamurty, B.S. 1972 "Economic Policy, Land and Labour in Nyasaland 1890-1914" en Pachai, Brigdal (ed.) *The Early History of Malawi* (London: Longman).
- Leopold, Aldo 1934 *Conservation Economics*, mimeo.
- Macdonald, Roderick (ed.) 1975 *From Nyasaland to Malawi* (Nairobi: East African Publishing House).
- MacKinnon, Catherine 1989 *Towards a Feminist Theory of the State* (Cambridge, MA: Harvard University Press).
- Malawi Congress Party 1961 *Manifesto* (Limbe: Malawi Congress Party).
- Malawi Government 1983 *Principal Master Plan for National Parks and Wildlife Management* (Lilongwe: Malawi Government).
- Malawi Government 1987 *Statement of Development Policies 1987-1996* (Zomba: Government Printer).
- Malawi Government 1993 *National Sample Survey of Agriculture* (Zomba: Government Printer).
- Malawi Government 1995 *Agricultural and Livestock Development Strategy and Action Plan* (Zomba: Government Printer).
- Malawi Government 1998 *Malawi Population and Housing Census* (Zomba: Government Printer).
- Malawi Government 1999 *Final Report of the Presidential Commission of Inquiry on Land Policy Reform* (Zomba: Government Printer) Vol. 1.
- Malawi Government 2000 *Final Report of the Presidential Commission of Inquiry on Land Policy Reform* (Zomba: Government Printer) Vol. 2.
- Malawi Government 2001a *Malawi National Land Policy* (Lilongwe: Malawi Government).
- Malawi Government 2001b *State of Environment Report for Malawi 2001* (Lilongwe: Malawi Government).
- Malawi Government 2002a *National Land Policy* (Zomba: Government Printer).
- Malawi Government 2002b *Malawi Poverty Reduction Strategy Paper* (Lilongwe: Malawi Government).

- Malawi Government 2003 *Core Welfare Indicators Questionnaire Survey* (Zomba: Government Printer).
- Malawi Housing Corporation 1981 *Malawi's Approach to the Problems of Human Settlement* (Blantyre: Malawi Housing Corporation).
- McLellan, David 1995 *Karl Marx* (London: Macmillan).
- Meinhardt, Heiko y Patel, Nandini 2003 *Malawi's Process of Democratic Transition: An Analysis of Political Developments between 1990 and 2003* (Lilongwe: Konrad Adaneur Stiftung).
- Mhone, Guy 1992 "The Political Economy of Malawi: An Overview" en Mhone, Guy (ed.) *Malawi at Crossroads: The Postcolonial Political Economy* (Harare: SAPEs).
- Minnis, John 1998 "Prospects and Problems of Civil Society in Malawi" en Kings, Phiri y Ross Kenneth (eds.) *Democratisation in Malawi: A Stocktaking* (Blantyre: Kachere).
- Motala, Ziyad 1998 "The Constitution is Not Anything that the Court Wants It To Be: The Mhlongu Decision and the Need for Disciplining Rules" en *South African Law Journal*, 115, pp 141-155.
- Moyo, Sam 2000 "The Political Economy of Land Acquisition and Redistribution in Zimbabwe" en *Journal of Southern African Studies*, 26(1), pp 5-28.
- Munzer, Stephen 1990 *A Theory of Property* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Neocosmos, Michael 2001 "The Post-Development State in Southern Africa: Towards Consensus as a New Mode of Legitimation", ponencia presentada en la conferencia *Interrogating the New Political Culture*, Harare, Zimbabwe.
- Ng'ong'ola, Clement 1997 "Land Rights for Marginalised Ethnic Groups in Botswana, with Special Reference to the Basarwa" en *Journal of African Law*, 41, pp 1-26.
- Nothale, Dailes 1984 "The Customary System of Land Tenure and Agricultural Development in Malawi" en *Journal of Social Science* (University of Malawi), 11(2), pp 64-76.
- Nyasaland Government 1920 *Land Commission Report* (Zomba: Government Printer).
- Nyasaland Government 1946 *Land Commission Report* (Zomba: Government Printer).
- Olsen, Frances 1995 *Feminist Legal Theory I: Foundations and Outlooks* (Aldershot: Dartmouth).
- Pryor, Frederic 1988 *Income Distribution and Economic Development in Malawi: Some Historical Statistics*, World Bank Discussion Papers (New York: Oxford University Press).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Reserve Bank of Malawi 2002 *Financial and Economic Review*, 34.
- Rhode, Deborah 1990 "Feminist Critical Theories" en *Stanford Law Review*, pp 42-617.
- Riddall, John 1991 *Jurisprudence* (London: Butterworth).
- Rotberg, Robert 1965 *The Rise of Nationalism in Central Africa: The Making of Malawi and Zambia, 1873-1964* (Cambridge, MA: Harvard University Press).
- Sachikonye, Lloyd 1995 "Democracy, Civil Society and Social Movements" en Sachikonye, Lloyd (ed.) *Democracy, Civil Society and the State: Social Movements in Southern Africa* (Harare: SAPES Books).
- Sachikonye, Lloyd 1998 "Civic Society Organisation in Southern Africa" en Mandaza, Ibbo (ed.) *Governance and Human Development in Southern Africa* (Harare: SAPES).
- Scott, James 1985 *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven, CT: Yale University Press).
- Seidman, Ann y Seidman, Robert 1994 *State and Law in the Development Process: Problem Solving and Institutional Change in the Third World* (London: St Martins Press).
- Shepperson, George y Price, Thomas 1958 *Independent African: John Chilembwe and the Origins, Setting and Significance of the Nyasaland Native Uprising of 1915* (Edinburgh: Edinburgh University Press).
- Tushnet, Mark 1991 "Critical Legal Studies: A Political History" en *Yale Law Journal*, 100, pp 1515-1544.
- Unger, Roberto 1976 *Law in Modern Society* (New York: Free Press).
- United Nations 2001 *Common Country Assessment of Malawi* (Lilongwe: United Nations).
- Van Velsen, Jaap 1966 "Some Early Pressure Groups in Malawi" en Stokes, Eric y Brown, Richard (ed.) *The Zambesian Past: Studies in Central African History* (Manchester: Manchester University Press).
- Wechsler, Herbert 1959 "Towards Neutral Principles of Constitutional Law" en *Harvard Law Review*, 73, pp 1-35.
- World Bank 1985 *Malawi Economic Recovery: Resource Needs and Policy Needs - An Economic Memorandum* (Washington DC: World Bank).

MFANISENI FANA SIHLONGONYANE*

LA OCUPACIÓN DE TIERRAS EN SUDÁFRICA

EL TEMA DE LA OCUPACIÓN DE TIERRAS ha permanecido fuera de consideración durante un largo tiempo, detrás de las cuestiones más candentes de la vivienda, el empleo y la infraestructura. Para traerlo al centro del debate fueron necesarios la altamente politizada reforma agraria en Zimbabwe entre 2000 y 2002, y el conflicto de tierras Bredell en Sudáfrica en 2001. Estos procesos fueron acompañados por titulares sensacionalistas en la prensa, que se referían a “apropiaciones de tierra”, “las invasiones de tierra al estilo *zimbabwense*”, “sin tierra y desesperación” y “hambre por la tierra”¹, y culminaron en los titulares de

* Mfaniseni Fana Sihlongonyane es catedrático en la Escuela de Arquitectura y Planeamiento, Universidad de Witwatersrand, Johannesburg. Ha sido investigador comunitario en el Instituto de Investigación de Desarrollo (DRI) y editor del *South African Town Planning Journal* (SAPJ), producido por la Institución de Planeamiento Municipal de Sudáfrica. Sus intereses de investigación se centran en la economía política de Estados africanos, globalización y desarrollo económico local en ciudades africanas, y en la influencia de temas sociales y culturales en el desarrollo. Es miembro del Tribunal de Desarrollo de Gauteng. También es consultor de varios gobiernos locales y provinciales en Sudáfrica.

¹ *Newsweek*, 16 julio de 2001; *Cape Argus*, 29 de agosto de 2001; *Cape Times*, 6 de julio de 2001; *Newsweek*, 16 de julio de 2001; *Natal Witness*, 17 de agosto de 2001; *Sometan*, 16 de julio de 2001.

RECUPERANDO LA TIERRA

la revista *New African* con la advertencia de que “el problema de tierras sudafricano es una bomba de tiempo” (Commey, 2002). Todo ello ha estimulado una nueva ola de investigaciones².

El debate alrededor de las ocupaciones de tierras se entrelaza con las políticas raciales de los países de África del sur, por lo que a su vez las percepciones son en mayor grado negativas. La ocupación de tierras se asocia en general al desorden, la contienda política, la crisis económica y los defectos administrativos, de los cuales los negros son culpables. En Zimbabwe, por ejemplo, las ocupaciones recientes han sido sinónimo de crisis económicas y fallas políticas. En Sudáfrica, las ocupaciones se refieren ampliamente a invasiones de tierras, un concepto racista nacido del *apartheid* que provocó el desprecio de los esfuerzos de los negros desposeídos por adquirir tierras. El gobierno *postapartheid* heredó el problema de la tierra, así como también su malestar conceptual. Además del de “invasión”, también se utiliza el concepto de “usurpación”, nacido del *apartheid*, y el de “embargo de tierras”, que se usa aun mucho más ampliamente, en especial en la prensa, para referirse a una diversidad de fenómenos que abarcan la conquista colonial, la recuperación a través de la lucha de liberación armada o, simplemente, las ocupaciones a gran escala.

Sam Moyo (2000) ha identificado varios tipos de ocupaciones de tierra en Zimbabwe, que tienen una mayor relevancia en la región. El primer tipo es la ocupación simbólica en forma de manifestaciones, lo que es frecuentemente facilitado por líderes civiles o tradicionales y también por veteranos de guerra en el caso de Zimbabwe. El segundo es la ocupación intimidatoria, que es violenta, e implica que los dueños de tierras se comprometan activamente en el proceso de reforma agraria, también observado en Sudáfrica. El tercero involucra movilizaciones políticas más amplias y se asocia generalmente a una campaña electoral. Al caso Bredell, como se reflejó en los medios, le dio cierto sostén político el Partido del Congreso Panafricanista (PAC). Un cuarto tipo es la adquisición compulsiva por parte del Estado, que busca formalizar ocupaciones después de que los sin tierra se han elegido a sí mismos como beneficiarios. En Sudáfrica, particularmente en las áreas urbanas donde la escasez de tierras es muy aguda, hay muchos acuerdos negociados bajo arreglos de arriendos formales e informales, ventas o rescisión de alquileres. También se reclaman, bajo tales convenios, las ocupaciones de tierras de granjas de blancos, chozas traseras y asentamientos informales, a menudo mediante acuerdos temerarios³. Este

2 Deborah James (2001: 94) ha localizado el estímulo de la investigación en la “ubicación regional” y su combinación con el “síndrome del vecino”.

3 Esto es relativamente legítimo entre los partidos involucrados, especialmente en los casos en que el gobierno formaliza ocupaciones que han sido vistas como asentamientos

tipo de ocupaciones debe distinguirse de las alienaciones de tierra y expropiaciones de los períodos coloniales y poscoloniales, que consistían en embargos de tierra por parte del Estado colono y la promulgación de leyes racistas. Entre estas últimas se incluyen: el Acta de Tierra Nativa, de 1913; el Acta de Administración Nativa, de 1927; el Acta de Tierra y Desarrollo, de 1936; el Acta de Tenencia de Tierra Asiática, de 1946; y el Acta de Áreas de Grupo, de 1950 y 1966.

En este trabajo se desarrolla un análisis de la cuestión de la tierra en Sudáfrica, con particular interés en las movilizaciones sociales contemporáneas, las tácticas y las alianzas alrededor de la reforma agraria. La sección que sigue comienza con un recorrido histórico de la alienación de la tierra bajo el *apartheid*, y las secciones subsiguientes se vuelcan hacia la política de la ocupación de tierras y la reforma agraria.

ALIENACIÓN DE TIERRAS: DEL APARTHEID AL NEOLIBERALISMO

Podemos identificar diversas corrientes de alienación de tierras llevadas adelante bajo la égida de las administraciones coloniales y de los Estados poscoloniales. Durante un período de varios siglos, los agentes imperiales europeos, mercaderes, misioneros y colonos, fueron anexionándose África y alienando la tierra de sus habitantes nativos. Varias instituciones, iglesias y empresas se establecieron en suelo nativo a través de numerosos e inescrupulosos acuerdos y tratados. El clímax del imperialismo se produjo a fines del siglo XIX, con las incursiones de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Portugal y España. Con la invasión, el establecimiento del control territorial y la subyugación de tribus y países, la alienación colonial de tierras estaba asegurada (ver Berstein, pág. 79 de este volumen; Davidson, 1968).

En Sudáfrica, que se independizó formalmente de Gran Bretaña en 1912, el gobierno supremacista blanco llevó más lejos la alienación de tierras, asegurando y salvaguardando muchas de ellas para la población blanca. Este proceso hizo que se transfirieran enormes porciones al control estatal y al capital de los blancos a tasas subsidiadas y que, con el tiempo, fuera acompañado por una legislación segregacionista. El Acta de Fideicomiso y de la Tierra Nativa de 1936, promovida para restringir a los negros la propiedad de la tierra, se sumó al aumento substancial de áreas de reserva que previamente se habían definido en el Acta de 1913 para eliminar varias formas de tenencia de tierra, fuera de las reservas, por parte de negros (Mabin, 1991). Hacia 1950, la restricción racial sobre el acceso a la tierra y a la vivienda no era negociable. El Partido Nacional

informales. Moyo (2000) lo visualiza como un proceso legitimador. Este problema es ampliamente reconocido en Lesotho (Shale, 1997) y Swazilandia (Sihlongonyane, 2001).

aprobó el Acta de Áreas de Grupo, que afectaba a negros, indios y mestizos. A todos se los forzó a vivir en áreas segregadas y no se les permitió ocupar tierras fuera del área designada (Festenstein, 1987). Esto se exacerbó a partir de la promulgación del Acta de Prevención de Usurpadores Ilegales en 1951, y del Acta de Reserva de Amenidades Separadas de 1953 que, respectivamente, otorgaban poder para trasladar a la gente y demoler sus hogares sin previo aviso, y aseguraban la reserva de comodidades públicas a las personas pertenecientes a una raza particular. Se ha estimado que para acomodarse a las leyes discriminatorias del gobierno se desplazaron 3,5 millones personas, se removieron 670 mil “manchas negras” y se desalojaron 834 mil por el Acta de Áreas de Grupo (Platzky y Walker, 1985; Kassier y Groenevald, 1992). En una provincia, KwaZulu-Natal, cerca del 13% de la tierra se asignó a 700 mil africanos y el 87% a los europeos. En 1950, la provincia tenía ciento sesenta y cinco manchas negras; entre 1960 y 1970 se desalojaron 97 mil personas de los bantustanes, y los números se incrementaron durante la década del ochenta.

Fue contra esta ola de alienación de tierras que la resistencia social contra el *apartheid* comenzó dramáticamente en la década del sesenta. El Partido Liberal, más tarde conocido como el Frente de Unión Democrática reaccionó junto con las iglesias dando iniciativas a movilizaciones sociales contra los traslados forzosos y trabajando estrechamente con las comunidades. Estos grupos sociales buscaban dar publicidad a lo que estaba pasando en ciertas comunidades donde la tierra se expropiaba. La resistencia llegó a su gran momento durante los ochenta, cuando la lucha contra los traslados empezó a ser objeto de debate legal y de derechos humanos y el Frente Democrático Unido (UDF) instó a que se detuvieran las demoliciones de chozas, con inmediato resultado.

El régimen del *apartheid* comenzó a estar bajo presión en la década del ochenta cuando el neoliberalismo empezó a imponer políticas en Sudáfrica y la región. Bajo la égida del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, las políticas neoliberales propugnaban un estado minimalista y la imposición del poder de las fuerzas del mercado en el manejo de la economía. En el corazón de estas instituciones estaba la noción de que “el gobierno reconoce cada vez más la necesidad de mayores límites y de considerar al “mercado amigablemente” para lidiar con los problemas” (World Bank, 1992: 6). Esto significaba que el régimen del *apartheid* ya no podría ejercer un comando vigoroso sobre la economía. Ahora se debía afrontar un ambiente económico cambiante y volátil, que ya no podía controlarse con los mecanismos reguladores e institucionales del *apartheid*.

Asociada a esta situación se materializaba una creciente política de oposición al *apartheid*, haciendo que la administración de las ciudades fuera, durante los ochenta, más difícil que nunca. Hubo un crecimiento

de la resistencia de base cívica contra la política y la administración del *apartheid*. Se desarrollaron estrategias como boicoteos a la educación, los alquileres y los servicios, además de invasiones a tierras y resistencia a los traslados, para derribar el régimen (Bremner, 1994: 39). Así, éste sufría una crisis muy profunda y la democratización era ya difícil de resistir.

Bajo estas circunstancias, comenzó a tener lugar una nueva ola más extraordinaria de ocupaciones urbanas de tierra, impulsada a nivel estructural por las condiciones económicas austeras. Hendler (1992) notó que aunque más del 150% de la tierra declarada para desarrollo residencial africano entre 1980 y 1989 fue dejada de lado durante 1987 en la región PWV (Gauteng), desde 1989 hasta junio de 1991 más de 20.200 hectáreas fueron destinadas al desarrollo de poblados africanos, con un balance de 23.500 hectáreas pendientes de asignación. De esa manera, desde mediados de la década del ochenta, las proporciones de suelos orientadas a establecer poblados se incrementaron tan rápidamente que, hacia fines de la década, se habían asignado más hectáreas para dicho desarrollo que las originalmente contempladas en la guía de planificación para el cambio de siglo (Hendler, 1992: 67). La demanda intensiva de una sociedad democrática significaba que el Estado-*apartheid* ya no podría imponer soluciones planificadas. La planificación espacial y reguladora y los traslados forzosos ya no eran una opción; en cambio, se hacía necesario un enfoque más progresista. Ello significaba que el *apartheid* ya no podría seguir perpetuando la “Gran Mentira”.

LOS ORÍGENES Y LA COMPOSICIÓN DE LAS OCUPACIONES DE TIERRA

LOS ORÍGENES DE LAS OCUPACIONES DE TIERRA

Mientras las ocupaciones de tierra se hicieron más agresivas hacia fines de la década del ochenta, la remoción de las leyes del *apartheid* por parte de F.W. De Klerk también encendieron un movimiento masivo de personas que se trasladaron desde los países vecinos a Sudáfrica, tanto a las áreas rurales como a las urbanas. En las áreas urbanas, la promesa del Programa de Reconstrucción y Desarrollo (RPD) de proveer acceso a la tierra alentó el movimiento (ANC, 1994: 20). En cierta medida, la postura flexible del gobierno hacia las colonizaciones de usurpadores –que incluía el mejoramiento de los asentamientos informales y el apoyo a los asentamientos recientes– motivó varios procesos de ocupación de tierras. Esto se combinó con un vacío político e institucional en el gobierno, asociado al período de transición de 1990-1994. Fue una época gobernada por las crisis, incierta y desfavorable para la planificación (Mabin y Harrison, 1997: 37). La efectividad de las estructuras

RECUPERANDO LA TIERRA

gubernamentales había disminuido precipitadamente y los conflictos amargos y a menudo violentos a nivel local descarrilaron varias iniciativas de planificación. Incluso, la imagen de la planificación había caído en el descrédito debido a que el público en general la asociaba con los traslados forzosos del *apartheid*.

Debajo del nivel institucional yace la pobreza masiva, la inequidad en el acceso a la tierra y la escasez de viviendas legadas por el *apartheid*. En 1994, Sudáfrica quedó en el puesto número 86 entre los países relevados en la medición del Indicador de Desarrollo Humano (HDI, por su sigla en inglés). Pero, mientras los sudafricanos blancos tenían un nivel similar al de Israel o Canadá, los sudafricanos negros obtuvieron valores menores al de países como Egipto y Swazilandia (May, 2000: 22). May et al. (1997) revelaron que el 22% de la población rural negra cayó en el valor más bajo de un indicador de cuatro escalas, mientras que el 75 % de estos hogares también cayó por debajo de la línea de pobreza.

En términos de acceso a la tierra, aproximadamente 55 mil granjeros comerciales son dueños de 102 millones de hectáreas, en contraste con 11,2 millones de hogares negros con acceso a 17 millones de hectáreas (Marcus et al., 1996: 97). Un sondeo rural dado a conocer públicamente en 1997 dio cuenta de que el 70% de la población rural tenía acceso a la tierra, aunque en el caso de más del 50% de este grupo su tamaño era menor a una hectárea (Statistics South Africa, 1999).

Mientras tanto, aproximadamente el 13,5% de todos los hogares (o un millón de hogares) vivía en caseríos usurpados “autoestables” en la periferia urbana y en la parte trasera de unidades domésticas formales (RSA, 1994). El creciente atraso en las viviendas se ha debido a las bajas tasas de provisión de casas, sumado a un número cada vez mayor de gente que tiene acceso informal a la tierra, en asentamientos informales, chozas traseras, en condiciones de hacinamiento en las viviendas formales existentes y, de manera contenciosa, a través de las invasiones de tierras (Royston, 1998). El tamaño del atraso en las viviendas del régimen del *apartheid* presentó uno de los desafíos más significativos para la reconstrucción y el desarrollo, al mismo tiempo que el proceso de democratización en sí mismo creaba altas expectativas. Muchos de aquellos que esperaban pacientemente la entrega de las promesas del RPD ya no pudieron esperar y, en cambio, hicieron las cosas por su propia cuenta y empezaron a ocupar tierras.

Al tener Sudáfrica pastos más “verdes” que sus países vecinos, el proceso de democratización provocó, asimismo, una dinámica de migración regional. Algunas personas regresaron de esos países, siguiendo un traslado forzado hacia su territorio en las áreas rurales. En algunos casos, regresaron con otros que no eran necesariamente parte de dicho desplazamiento, pero con los que estaban socialmente relacionados. Lo

que se percibía como una ventaja añadida era el acceso al dinero de pensión de los ancianos y los jubilados, lo que no era asequible en los países vecinos. Además, el número proporcionalmente cada vez mayor de viviendas rurales en Sudáfrica con acceso a un ingreso formal sirvió, luego, para atraer un mayor flujo de gente⁴.

Las políticas de austeridad de la década del ochenta intensificaron las fuentes de las ocupaciones de tierra. Redujeron el rol del Estado y destruyeron las relaciones patrón-cliente que habían subsidiado a los pequeños granjeros. Bryceson y Bank (2001: 13) notaron que el aumento del costo de los gastos en agricultura, que incluyen fertilizantes, semillas mejoradas e insecticidas, agobiaron a los campesinos africanos, al mismo tiempo que los ingresos de la cosecha en efectivo fluctuaban y, a menudo, caían. Observaron que si bien la liberalización del mercado tendía, desde la perspectiva del consumidor rural, a expandir las opciones, la verdad era que no estaban al alcance de la mano, ya que esas mercancías tentadoras llegaban a precios inaccesibles. El declive de las granjas familiares ha sido registrado por otros estudios (Bryceson, 1999; Meagher y Mustapha, 1994). Ello también se refleja en el descenso de la participación de la agricultura en el PBI: del 17% en la década del cincuenta a alrededor del 4% en la década del noventa (Department of Agriculture, 1995). El número de personas empleadas en este sector también disminuyó considerablemente, desde más de 1,5 millones en los setenta a menos de 1 millón en los noventa (Mather, 2000: 151).

La declinación del cultivo de pequeños granjeros se ha mezclado con la caída del empleo formal, los desalojos de las granjas y el asolamiento del SIDA, elementos que acrecentaron la migración a las ciudades. A la gente no le quedó otra alternativa que buscarse un trozo de suelo en las áreas periurbanas, cerca de los lugares de empleo (Lahiffa y Rugege, 2002). La mayoría opta por estas zonas debido a que las áreas urbanas tienen altas proporciones de densidad e implican lidiar con las formalidades adversas de la planificación urbana, la burocracia y las responsabilidades financieras relacionadas con el mercado (Holm, 1992: 245). Las estrategias de supervivencia incluían la ocupación de tierras y las actividades de mercado informales, como elaboración de cerveza, venta de golosinas preparadas, trenzar cabellos, venta al por menor, prostitución, confección de artesanías y ropa; ocupaciones que previamente no se habían mercantilizado (Bryceson y Bank, 2001: 14). Como era previsible, la asignación de viviendas fue pobre, los salarios del sector informal que no depende de la agricultura bajaron y la segu-

4 Según informes, el 94,9% del total de los hogares de Sudáfrica tenía acceso a un ingreso formal (May, 1996), mientras se trataba de un 20% en Namibia (Ashley y LaFranchi, 1997) y del 43% en Zimbabwe (Bradley y Dewees, 1993).

RECUPERANDO LA TIERRA

ridad alimenticia se comprometió (Bishop y Scoones, 1994; Shackleton et al., 1995; Lipton et al., 1996; Shackleton y Shackleton, 1997; Davies et al., 1999). Asimismo, las demandas de seguridad en las tenencias a menudo se expresaron como un deseo de poseer derechos de dominio absoluto, debido a la historia de relaciones adversas entre los arrendatarios y los propietarios privados de tierra, y entre los arrendatarios y los diferentes niveles del Estado (Marcus et al., 1996).

Los efectos negativos de las políticas de austeridad provocaron una división de opiniones entre el Congreso Africano Nacional (ANC, por su sigla en inglés) y el Partido Comunista Sudafricano (SACP, por su sigla en inglés). Mientras el ANC implementa políticas neoliberales sin mucha consulta, el SACP se ha mostrado hostil a su adopción, ya que parecen opuestas a la alteración de las relaciones agrarias de poder y a la redistribución de las riquezas. Consecuentemente, la reforma agraria se ha visto acechada por la tensión existente entre las cuestiones de producción y de equidad, de derechos y de compensación histórica. Al mismo tiempo que el ANC luchaba por encontrar un equilibrio entre ambas, gravitando sobre las primeras, el SACP defendía las últimas. El epítome de esta lucha fue la sustitución de la política del RDP por una reconciliable con el mercado, la de Crecimiento, Empleo y Reconstrucción (GEAR, por *Growth, Employment and Reconstruction* en inglés); el ANC se dirigió a la corte e involucró a los inversores locales y extranjeros en la reforma agraria y el SACP reivindicó un enfoque más socialista.

LA COMPOSICIÓN DE GÉNERO EN LAS OCUPACIONES DE TIERRAS

Las mujeres son las que más se benefician de las ocupaciones de tierras, especialmente en las áreas rurales (Cross, 1999). Su posición subordinada en la estructura tradicional de los jefes inhibe su acceso y control sobre el suelo y sus recursos naturales. May et al. (1995: 17) argumentan lo siguiente: “De todas las mujeres en Sudáfrica, la marginalización espacial y económica de las mujeres africanas rurales es la más severa”. Aunque a las mujeres se les da la tarea y la responsabilidad primaria de la reproducción doméstica en un ambiente económicamente deteriorado y con un sostén social reducido, ellas no tienen títulos directos ni control sobre la tierra. El acceso a sus derechos sobre ésta se da a través de sus esposos o familiares. Cross estableció que “las estructuras de poder defienden de cerca el acceso a la tierra y que éste es clave para los procesos institucionales que determinan lo que las mujeres pueden o no pueden hacer con los recursos con que mantienen sus unidades domésticas” (1999: 12). Para peor, los sistemas de tenencia consuetudinaria se están deteriorando en la medida en que, por un lado, los desarrollistas y administradores corruptos están ampliando las diferenciaciones dentro de las comunidades y, por el otro, fracasan en poner en vigencia los derechos

sobre la tierra (Cross, 1997; Cross et al., 1996). En este contexto, las ocupaciones no autorizadas dan a las mujeres la oportunidad de afrontar una variedad de necesidades domésticas, incluso las que socialmente se identifican como de su responsabilidad (Bryceson, 1995).

Muchas mujeres se ven también empujadas a ocupar tierras porque son más vulnerables al desempleo que los hombres (Lalthapersad-Pillay, 2002). Puesto que la mayoría de las mujeres rurales no posee altos niveles de alfabetización ni tiene habilidades especializadas, se ven desplazadas hacia los sectores laborales poco calificados. Aun en los casos en que consiguen empleo, se las suele ubicar en la escala más baja y en los peores sectores de la economía formal, como el servicio doméstico y la agricultura comercial. En la economía informal, la estratificación de género se refleja en las calles de Ciudad del Cabo, Durban, Johannesburgo y Pretoria, donde “al mismo tiempo que los comerciantes masculinos despliegan operaciones a mayor escala y negocian con productos no alimenticios, las comerciantes femeninas tienden a realizar operaciones menores y a negociar alimentos, siendo lo primero más lucrativo que lo último” (Skinner, 2000: 49). Muchas mujeres también recurren a trabajos informales arriesgados, como la prostitución y la venta ambulante nocturna.

Los hombres también son altamente vulnerables a los efectos económicos austeros y al alto índice de reducciones en el sector formal de la economía, calculado en medio millón entre 1990 y 2000 (Shackleton et al., 2000: 35). Así, acuden a la economía informal, a las actividades criminales y de apuestas y a la ocupación de tierras, generalmente adyacentes a los viejos poblados creados bajo el *apartheid*. El factor común entre esta gente es que son todos migrantes de zonas rurales, tanto de Sudáfrica como de la región.

LA POLÍTICA AGRARIA POSTAPARTHEID

El gobierno no se ha dormido respecto del tema de la tierra. La preocupación principal ha sido asegurar que no lleve a la huida del capital o a una licuefacción económica. Al mismo tiempo que pone cuidado en no asustar a los inversores, también siente los límites que le pone su conciencia para entregar la tierra a los que no la tienen. Desde 1990 se aprobó un número de leyes con el fin de dirigir el curso de la cuestión en favor de los dos intereses. Entre éstas se cuentan el Acta de Derecho a la Tenencia y Mejoramiento de la Tierra (1991)⁵; la Protección Provisional de los Derechos Informales sobre la Tierra (1996)⁶; el Acta de Asociación

5 Esto hace que el Acta se encuentre en la misma línea de la política del gobierno sobre la conversión de los derechos de la tierra.

6 Protege los intereses de las personas que tienen derechos informales sobre la tierra, mientras se lleva adelante una investigación

RECUPERANDO LA TIERRA

de la Propiedad Comunitaria (1996)⁷; y el Libro Blanco sobre Política Agraria (1997)⁸.

En 1994, el gobierno introdujo un programa de reforma agraria que buscaba redistribuir el 30% del territorio agrícola entre 1994 y 1999, a través de los programas de restitución, redistribución y reforma de la tenencia. De todas maneras, la reforma agraria resultó ser bastante decepcionante. Según la Encuesta Sudafricana (SAIRR, 1999/2000), para fines de diciembre de 1998, la fecha final para la presentación de los reclamos de tierras, se dispusieron más de 63 mil sobre la Comisión de Restitución de Derechos sobre la Tierra y se aceptaron sólo cuarenta y uno. La lentitud con la que se entregó la tierra queda demostrada con el hecho de que después de ocho años de gobierno *postapartheid*, sólo 55 mil granjeros son dueños de más del 80% de la tierra, parte de la cual no se usa productivamente. Aun así, más de la mitad de los sudafricanos no tiene tierra y la necesita (NLC, 2001/02).

Se brindaron varias explicaciones para una entrega tan lenta y escasa. Kock et al. (2002: 139) argumentan que el compromiso del gobierno con un programa macroeconómico neoliberal ha llevado a ralentizar la redistribución de la tierra, ya que esto último depende esencialmente del gasto del Estado. El programa sigue orientado hacia el mercado, se basa en el principio de “comprador dispuesto, vendedor dispuesto” y depende de la inyección extremadamente limitada de los recursos estatales en un mercado de tierras estancado. La relativa desmovilización de la sociedad civil señala que las demandas desde abajo no están efectivamente articuladas, y los incentivos estatales para entregar más recursos disminuyen, especialmente cuando se hacen llamados a la disciplina fiscal. Mientras tanto, las comunidades que ingresan en el proceso de reforma agraria y que desean mancomunar sus concesiones de adquisición se tornan vulnerables a los precios inflados de la tierra (Kock et al., 2002: 144). Los mecanismos del mercado, sumados al Estado débil, hacen que las relaciones no cambien, puesto que los terratenientes pueden dominar las negociaciones de transferencia para su beneficio. La concesión de adquisición de asentamiento/tierra de 15 mil *rands* (aproximadamente 1.650 dólares estadounidenses en 2002) es limitada, ya que cubre la adquisición y el mejoramiento de las tierras, pero el alto precio de éstas hace imposible lo último. Por consiguiente, después de adquirir la tierra, a la gente del campo le queda poco dinero para construir refugios y sembrar productivamente.

7 Provee un mecanismo legal para acomodarse a las necesidades de aquellos que deseen mantener colectivamente una propiedad.

8 Esto creó el marco para la reforma agraria y sus tres programas: reforma de la tenencia, redistribución y restitución.

Así, el programa de redistribución se convierte en un medio para reducir la escasez de viviendas/refugios, pero hace caso omiso del desempleo rural y de la seguridad alimenticia. El Centro de Política de Tierra Agrícola advirtió que “existe el peligro de que las nuevas comunidades establecidas a través de la reforma agraria no se conviertan más que en nuevos bantustanes, donde se arroja a las personas en lugares sin medios de sustento visibles” (LAPC 1997 en Kock et al., 2002: 144). Esto se combina con el hecho de que en algunos casos la tierra comercial ofertada en el programa de redistribución es de bajo valor agro-ecológico, además de haber tenido un pobre manejo ambiental por parte de los campesinos blancos ineficientes (Fakir, comunicación personal). Es notable, además, que el alcance de las mujeres para ejercer poder sobre el proceso de redistribución es limitado, ya que los hombres tradicionalmente dominan el mecanismo de mercado y el uso colectivo de las concesiones domésticas con las que los pobres rurales compran tierras.

Otro problema de la reforma agraria es que el Departamento de Asuntos de la Tierra (DLA) no tiene la capacidad y el apoyo de otras esferas del gobierno para llevar adelante su programa con vigor. De esta manera, el DLA y las organizaciones no gubernamentales no han encontrado formas efectivas de trabajar conjuntamente para acrecentar el poder de la sociedad rural. Con el tiempo, el nuevo gobierno ha dejado que la reforma agraria se deslizara de su agenda política (Kock et al., 2002: 142). Esto se condice con el argumento del Comité Nacional de Tierra (NLC, por su sigla en inglés), de que una sociedad civil generalmente débil y la falta de recursos para las organizaciones son el principal obstáculo para la realización de la reforma agraria desde abajo. Se ha alegado que “la sociedad rural ha sido ‘desmovilizada’ desde mediados hasta fines de la década del noventa, cuando los líderes de las ONG consiguieron posiciones en el gobierno y el movimiento sindical hizo pocos esfuerzos por organizar a los trabajadores rurales” (Pearce, 1997).

Los desalojos que continuaron sucediendo sin interrupciones exacerbaban la situación. Cada vez más, los granjeros llevan a cabo desalojos como acciones privadas con apoyo del Estado, y las compañías agrícolas se ponen en contra de los trabajadores que ya no desean que permanezcan en las granjas. Las instancias de desalojos de los trabajadores en los cultivos incluyen las siguientes: (a) con la venta de la granja, el nuevo dueño no siente obligación hacia los trabajadores que hereda con su adquisición; (b) en las granjas en las que aún existen ciertas formas de arrendamiento, el fracaso de las familias arrendatarias para reemplazar trabajadores viejos por otros más jóvenes tiene frecuentemente como resultado un aviso para dejar la tierra; (c) a los trabajadores que se quejan de las pobres condiciones laborales o que intentan unirse a un sindicato se los suele echar por ser “problemáticos”.

RECUPERANDO LA TIERRA

La posición de poder del granjero, como empleador y dueño de la tierra, lo habilita a tomar acciones punitivas contra los trabajadores, y dispone de la expulsión como última sanción. Mientras tanto, las dificultades que tienen los arrendatarios para mantenerse ligados a su tierra, más allá de las negociaciones que se establezcan en el proceso de redistribución, son enormes. Los arrendatarios deben afrontar órdenes de desalojo, infracciones, casos que llegan a la corte, multas, sobornos hechos por los terratenientes a las autoridades de la justicia e incluso sentencias; también enfrentan la demolición de sus casas, la falta de acceso a las fuentes de agua artificiales y naturales (por ejemplo, ríos), la persecución de los miembros de la familia fuera de ésta e, incluso, la demolición de tumbas⁹.

Sin embargo, los arrendatarios demuestran una tenaz determinación y resistencia en sus intentos por mantener sus hogares y modos de vida. Fue en este contexto que ocurrió el incidente de ocupación de tierras Bredell, que captó la atención de los medios sensacionalistas y causó un alto revuelo político.

ESTRATEGIAS Y ALIANZAS DEL MOVIMIENTO SIN TIERRA

LA EMERGENCIA DE LAS LUCHAS AGRARIAS ORGANIZADAS

Sólo unas pocas organizaciones no gubernamentales, basadas en la comunidad, centros de investigación e instituciones, existen para proseguir con la agenda agraria. La mayoría ha estado activa desde la década del ochenta. Entre ellas se incluyen: la Asociación de Mejoramiento Rural (AFRA)*, creada en 1979 para combatir los desalojos en la patria KwaZulu y Natal; El Proyecto para el Superávit Popular (SPP), creado un año más tarde, en 1980, después de la lucha crucial por los desalojos en el Cabo Occidental; el Comité de Acción Rural Transvaal (TRAC), que nació del comité Black Sash para luchar contra los traslados forzosos; y el Comité Rural Grahamstown (GRC), ahora conocido como el Comité de Límites Rurales (BRC). Estas organizaciones terminaron afiliándose unas a otras a través del Comité Nacional Contra los Traslados (NCAR). Su primer trabajo fue hacer campaña a favor del indulto a las comunidades bajo amenaza de traslado y del regreso de las comunidades que habían sido deportadas de su territorio. En 1990, el NCAR pasó a llamarse Comité Nacional de Tierras (NLC). Participó en el debate con los afiliados del ANC sobre la restitución y la redistribución e hizo propuestas de políticas públicas.

Desde entonces, el NLC ha promovido la creación de una red nacional nueva y unificada de movimientos sociales rurales, con la creencia

* Todas las siglas se presentan según su nombre en inglés [N. del E.].

⁹ Entrevista con el presidente del Movimiento Popular de los Sin Tierra, diciembre de 2002.

de que la presión desde abajo es el mecanismo más efectivo para galvanizar acciones estatales más adecuadas sobre la tierra. Otros participantes importantes de la red incluyen ahora al Grupo de Monitoreo Ambiental, el Centro de Políticas Agrarias y de la Tierra, el Centro de Estudios Rurales Legales, el Centro de Estudios Legales de la Universidad de Witwatersrand y el Programa para el Estudio de los Temas Agrarios y de la Tierra de la Universidad de Cabo Occidental (Kock, et al. 2002).

En 1993, cuando varias comunidades desplazadas rechazaron el cuerpo de reforma agraria del gobierno del *apartheid* –la Comisión Consultiva de Asignación de Tierras (ACLA)–, el NLC lanzó la “Campaña de Vuelta a la Tierra”, guiando a los representantes de ochenta comunidades rurales a través del país en protesta contra la cláusula de derechos de propiedad de la Constitución en ciernes. Esto llevó a una afiliación creciente a la organización. A continuación, en 1994, antes de las primeras elecciones no raciales en el país, el NLC organizó una cumbre a la que asistieron cuatrocientas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones agrarias. La cumbre produjo un estatuto de la tierra que circuló por todos los partidos políticos. El estatuto motivó que los movimientos sociales rurales consideraran la expropiación como una palanca para forzar el ritmo de la reforma (Pearce, 1997).

En 1999, el NLC unió fuerzas con ONG orientadas a lo rural y otras organizaciones comunitarias para lanzar la Iniciativa de Desarrollo Rural (RDI), bajo la forma de una Conferencia de Reforma Agraria y de la Tierra (LARC). El LARC fue una iniciativa única, llevada a cabo en Pretoria y coorganizada por el NLC y el Programa de Estudios Agrarios y de la Tierra (PLAAS), un instituto de políticas públicas y de investigación con base en la Universidad de Cabo Occidental. El LARC convocó a diferentes actores nacionales y provinciales, ONG y organizaciones comunitarias (CBO), y evaluó el progreso de la reforma agraria y de la tierra durante los cinco años de democracia (Hargreaves, 1999: 43).

La Iniciativa de Desarrollo Rural está dirigida por algunas ONG, a saber, el NLC, la Red de Servicios para el Desarrollo Rural (RDSN), el Consorcio para la Extensión Comunitaria y la Educación (TCOE), la Iniciativa para el Desarrollo Participativo (IDP) y la Coalición de ONG de Sudáfrica (Sangoco). Se organizan a través de agrupaciones a lo largo y ancho de provincias y regiones, y se han establecido comités directivos que coordinan las actividades en todos los niveles. El Comité Directivo Nacional del RDI desarrolló una estrategia de género en noviembre de 1998, y se formó un pequeño grupo de trabajo conocido como el Equipo de Tareas de Género (GTT).

El RDI también produjo un Estatuto de la Gente Rural, un Marco de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural y un Plan de Ejecución. El borrador del Estatuto se hizo en una convención en Bloemfontein, a

RECUPERANDO LA TIERRA

la que concurrieron representantes de más de seiscientas comunidades rurales de todo el país. En el proceso, el RDI buscó plantear las bases de trabajo de los movimientos sociales rurales. También convocó a equipos encargados de elaborar políticas públicas, sin excluir a las ONG con experiencia en el desarrollo rural, a fin de desplegar una política que permitiera una estrategia de desarrollo rural integrado (Greenberg, 1999). El NLC movilizó, además, a sus afiliados para que defendieran los derechos de los sin tierra a través del Departamento de Defensa de Derechos de la Tierra (LRAD), que tenía a su cargo el cabildeo, la defensoría y las políticas públicas. Luego de algunas conferencias, se formó el Movimiento de Acceso a la Tierra de Sudáfrica (Lamosa), con la preocupación de fortalecer las estructuras comunitarias.

En 2000, el NLC convocó a una cumbre de organizaciones de lucha por la tierra. La intención era conseguir actores por fuera del gobierno que reflexionaran sobre el nuevo Programa Integrado de Redistribución de la Tierra y de Desarrollo Agrícola (IPLRAD), y el resultado fue una respuesta conjunta. Las organizaciones involucradas eran el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (Cosatu), el Consejo de Iglesias Sudafricano (SACC), el Centro de Estudios Legales Aplicados, el Centro de Recursos Legales y el Programa de Estudios Agrarios y de la Tierra. También otras organizaciones comunitarias hicieron su contribución, como el Comité de Arrendatarios Laborales de Johannesburgo, constituido por arrendatarios del distrito Wakkerstroom en Mphumalanga (NLC, 2000/01: 13). Con el apoyo del NLC, las organizaciones consiguieron organizar un piquete en el Departamento de Asuntos de la Tierra en Pretoria.

El NLC organizó posteriormente un taller de entrenamiento nacional para sus afiliados. Se le pidió a Planact, una ONG aliada, que lo facilitara. El NLC y el Comité de Límites Rurales (BRC) dirigieron el entrenamiento sobre los Planes de Desarrollo Integrado (IDP) para AFRA. El BRC compartió su experiencia sobre el proceso IDP en el distrito de Willowvale del Cabo Oriental. Se realizó también otro taller de entrenamiento sobre el presupuesto del gobierno local, en agosto de 2000. Éste fue facilitado por IDASA (Institute for Democracy in South Africa) y al equipo de tareas NLC-IDP se le dio toda la información del IDP conseguida por Planact para que la distribuyera entre sus afiliados. Por otra parte, el NLC se sumó a una iniciativa de investigación en colaboración con Alimentos Primero/Instituto para el Desarrollo y la Alimentación en los Estados Unidos. Como parte de su esfuerzo por colaborar, el NLC, la Red de Servicios de Desarrollo Rural (RSDN) y el Centro de Estudios Legales Aplicados (CALs) se sometieron conjuntamente a los líderes tradicionales y a las instituciones.

La Red Sudafricana de Tierras (SANL) se estableció en 1998 para asegurar la coordinación y la cooperación de las tierras y del desarrollo

del sector rural en la región, cuyo responsable fue el NLC. El SANL está constituido por el Foro para la Agricultura Sustentable (Fonsag) para Botswana; el Foro de ONG de Namibia (Nangof); la Organización Ambiental Regional de Zimbabwe (ZERO); la Organización Rural de Ayuda Mutua (ORAM) para Mozambique; el Consejo de ONG de Lesotho (LCN), sobre Agricultura y Medio Ambiente; la Asamblea Coordinadora de ONG de Swazilandia (CANGO); y el Comité Nacional de Tierras de Sudáfrica. El SANL es visto como un vehículo para compartir experiencias y habilidades y para crear una plataforma común de defensoría. Por consiguiente, el NLC no es sólo el eje nacional, sino también el eje regional del sur de África. Como tal, ha facilitado la Red de Reforma Agraria (ARNET), un programa de la Coalición Popular para erradicar el hambre y la pobreza. También es parte de la Red de Derechos sobre la Tierra de Sudáfrica (LRNSA) y estableció, asimismo, lazos internacionales y asociaciones estratégicas con la Unidad de Derechos de la Tierra de Oxfam (Reino Unido), el Departamento Británico de Desarrollo Internacional, la Red de Pobreza Regional de África del sur y la red de ONG de Derechos Humanos de África del sur.

Paralelamente, se debería reconocer a Zimbabwe como una fuerza regional, puesto que ha conseguido un notable cambio en sus derechos de propiedad, por fuera de las redes antes mencionadas. Este viraje presenta profundos contrastes con Sudáfrica. Mientras que en ésta la reforma agraria se hace de forma planeada y ordenada, en Zimbabwe la reforma agraria planificada no pudo evadir un efecto de “chisporroteo” sobre ella. En tanto Zimbabwe dependía principalmente del flujo internacional de financiamiento, con algunos fondos estatales, para llevar a cabo su reforma agraria basada en el mercado, Sudáfrica utilizaba mayormente presupuestos internos con algunos fondos del Banco Mundial. La Constitución de Zimbabwe y el Acta de Adquisición de Tierras de 1992 permitían las adquisiciones compulsivas y ponían límites al tamaño de las granjas y distintos tipos de propiedad (múltiple, ausentista y extranjera); al mismo tiempo sucedía en Sudáfrica lo opuesto, donde los derechos de propiedad se protegían en la Constitución de 1996. Esto es lo que ha permitido a Zimbabwe transferir una gran cantidad de tierras a los negros a través de un proceso rápido y a pesar de los alzamientos políticos alrededor del tema.

El asunto se ha convertido en abono de las contradicciones y la confusión entre las alianzas creadas tanto a nivel nacional como internacional. Mientras algunas organizaciones son “antiMugabe”, otras están a favor de él, como quedó demostrado con los cánticos contrapuestos de la cumbre de Johannesburgo, donde algunos gritaban “¡Arriba Mugabe!” y otros “¡Abajo Mugabe!”. Misteriosamente, el Movimiento de los Sin Tierra (ver más abajo) condenó y se disoció de las ocupaciones de tierra

RECUPERANDO LA TIERRA

de Zimbabwe. Pero, a pesar de las divisiones, ello no ha disuadido la formación de lazos internacionales.

La tendencia a crear agrupaciones supranacionales ha incrementado la colaboración en temas comunes de desarrollo a niveles internacionales. Se adoptó una Carta de Pueblos sin Tierras en agosto de 2001, en Durban, en una Asamblea de Pueblos sin Tierras durante la Conferencia Mundial en Contra del Racismo de las Naciones Unidas (Unwcar). Más de 3 mil delegados sin tierra de comunidades de toda Sudáfrica y sus aliados sin tierra de todo el mundo tomaron parte en la adopción. La Carta declaraba: “Somos los pueblos que hemos nacido del impacto del colonialismo y el neocolonialismo, de la invasión de nuestra tierra por los países ricos del mundo, del saqueo de nuestros recursos naturales y la extracción forzosa de nuestro trabajo por parte de los colonialistas”. Esta iniciativa se relacionó con la campaña “sin tierra = racismo” del Unwcar, que llevaba adelante a las demandas de 1994 de la Carta de Tierras Comunitarias (NLC, 2001/02).

Inmediatamente antes de la conferencia de Durban, se formó el Movimiento Popular Sin Tierra (LPM), dentro del marco del NLC. El LPM convocó al “Día de los Sin Tierra” con el apoyo del NLC. Aquél se lanzó formalmente en agosto de 2002, durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (WSSD), en Johannesburgo. El LPM se ha convertido en el movimiento social rural más visible que lucha por organizar y unir a toda la gente sin tierra de Sudáfrica, bajo el lema “¡Tierra ahora! ¡Organizaos y uníos!”.

Las diferentes redes del NLC han servido para motivar empresas conjuntas con otras ONG nacionales e internacionales. El trabajo conjunto con la Red del Sector Urbano (USN, por su sigla en inglés) empezó siguiendo los traslados urbanos forzados en Gauteng como parte del “Programa de Renovación Urbana”. Una visita del MST brasileño a Sudáfrica fue coordinada por Nkuzi y el NLC. Esto generó varios compromisos para realizar discursos públicos, incluyendo la Asamblea Popular de los Sin Tierra durante el WCAR; el Taller sobre el Día Mundial de la Mujer Rural, en Kimberly; la reunión preliminar de la Sociedad Civil Indaba de WSSD; y el Encuentro General Anual del NLC. Desde entonces, hasta la Iglesia se ha visto motivada a prestar su apoyo a los sin tierra. Las iglesias se involucran de diversas maneras en la campaña de restauración de la tierra y muchos trabajadores rurales del Consejo de Iglesias e iglesias individuales han apoyado a las comunidades que regresan a su territorio.

El ascenso de estas redes se produce en un contexto de convergencia de la globalización, la crisis social y la democratización. Esta combinación inestable motivó la reacción de grupos que se describen mejor como constelaciones vagas de movimientos sociales comunitarios con tendencias de izquierda. Si bien varían en términos de tamaño, enfoque e

influencia, los unifica su objetivo en común de ayudar a los pobres y maltratados, y su resentimiento hacia las jerarquías, las burocracias, el poder corporativo y el interés por obtener ganancias en un mercado sin trabas.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Una serie de cuestiones está dando forma a la lucha por la tierra, especialmente dentro de los movimientos sociales emergentes.

En primer lugar, la lucha por la tierra es de una naturaleza ampliamente defensiva. No queda garantizada por un programa político coherente para el cambio social. Además, al haber perdido la fuerza de apoyo de las organizaciones cívicas, laborales y estudiantiles, como también el gusto que movilizaba la lucha anti*apartheid* en la década del ochenta, se convirtió en reactiva y ocasional. Estas organizaciones han sido atrapadas por las luchas antiglobalización, por lo que su apoyo a la cuestión agraria es más bien retórico. La mayoría de las ONG eligió focalizar su atención en temas más de moda y políticamente compensantes, como el SIDA, la pobreza y el medio ambiente, a expensas de cuestiones políticas más sensibles como las de la tierra.

En segundo lugar, la naturaleza de la lucha también ha cambiado. Ya no opera con la política electoral y los sindicatos tradicionales, sino que aparece ahora dirigida por las organizaciones comunitarias, que son las afectadas directamente por la problemática. Esto incluye gente que se opuso no sólo al *apartheid* sino también a las injusticias del sistema post*apartheid*. De esta forma, la nueva marea de luchas por la tierra que emergió parece ser hostil a los intereses del gobierno y de sus socios, tales como COSATU y otras entidades. Éstas se encuentran ahora en una nueva relación con el movimiento antiglobalización, del que toman apoyo técnico y financiero pero no ideológico. Se crea, así, un vacío ideológico, ya que tanto los miembros de los movimientos de base como los del LPM son, en su mayoría, analfabetos y están escasamente familiarizados con la dinámica económica de la globalización. A este respecto, Bond (2000) señala que la transición elitista manejada por la alianza ANC-COSATU-SACP ha creado desánimo en el espíritu de protesta, orquestando una contención en la lucha revolucionaria.

En tercer lugar, la lucha por la tierra está fragmentada. Le falta de coordinación y síntesis. A pesar de las aparentes instancias de colaboración y de los objetivos conjuntos, los programas y los reclamos reconocibles, no hay ningún enemigo claro en común. Mientras algunos atacan al gobierno a nivel nacional, otros lo hacen localmente, otros a nivel provincial y otros culpan a la privatización y a la globalización. Todo ello despierta la confusión y la incertidumbre acerca de la naturaleza de la lucha y los medios con que se propone alcanzar sus objetivos. La mayoría de las organizaciones parece consistir en meros grupos de

RECUPERANDO LA TIERRA

presión sin dirección ideológica y sin medios estructurales para alcanzar sus metas. Unos parecen tener una actitud independiente y casual, otros son ambiguos y cambiantes en su relación con el gobierno.

En relación con esto, hay también incertidumbre respecto de las relaciones entre los movimientos y las ONG y, en especial, entre ellos mismos. En algunos casos, no está claro si una organización es una ONG, una CBO, simplemente un grupo de poder o un medio para la movilización social. Más notable es el orden de las agendas. En tanto algunas tienen una inclinación hacia el apoyo técnico, otras se ven a sí mismas como movilizadores políticos. Con frecuencia, las tensiones se originan entre los objetivos iniciales y los desarrollos subsiguientes. Los complejos temas de la inclinación ideológica y los imperativos políticos exacerbaban la situación allí donde las ONG de blancos pretenden liderar las necesidades de las mayorías negras. El personal técnico blanco, de forma notoria, tiende a alinearse con el gobierno y busca operar dentro de su marco, mientras que las bases prefieren hacerlo desde afuera.

El LPM tiene promesas. Otorga una buena base para la creación de una lucha solidaria por la tierra entre diferentes personas involucradas en la defensa de la reforma agraria. Sin embargo, los desafíos que aún debe afrontar son grandes: la armonización de las diferentes perspectivas sobre la reforma agraria; la estructura organizativa tambaleante de algunos de los actores; la naturaleza superficial de las redes y las asociaciones; la falta de recursos; y la generación de una voluntad política para impulsar la cuestión de la tierra. Es crucial para poder triunfar tener un plan efectivo de comunicaciones, capaz de atravesar las barreras ideológicas, lingüísticas, de género y geográficas. Dicho plan se debe focalizar internamente en la movilización y el fortalecimiento de las estructuras populares de base y en alcanzar a los más marginados, especialmente a las mujeres. Pero aparte, la lucha también debe extenderse al plano internacional, puesto que se orienta en contra de un mismo sistema que ha saqueado a la gente negra en la región y a los sin tierra en todo el mundo. Existe la necesidad de desarrollar una lucha global más allá de la retórica del “espectáculo de peleas del WSSD”. Esta lucha debe estar garantizada por un plan práctico que se pueda implementar para cambiar la vida de las personas. De esta manera, las alianzas que el NLC hizo con organizaciones como el MST deberían evolucionar hacia un combate global contra la falta de tierras.

En cuanto al proceso actual de reforma agraria, el método que se aplica debería reformularse para considerar más las necesidades de la gente que las del mercado. El movimiento agrario debe desarrollar intervenciones tácticas que tengan en cuenta la diversidad de los problemas en las diferentes partes del país, en lugar de contar con una estrategia igual para todos. Esta dinámica histórica y político-económica

del contexto particular debe determinar el tipo de acciones a ejecutar. Mientras una situación puede justificar la toma de tierras, otra puede sólo requerir una mera negociación para adquirir una parcela. Por lo tanto, se debe desarrollar todo un abanico de estrategias. Además, la práctica de la reforma agraria exige la creación de una estructura de mediación. En la actualidad, los órganos de mediación sólo funcionan para los reclamos de tierra, en tanto los conflictos que ocurren a nivel local se solucionan con procedimientos legales e imposiciones normativas. Es así como se crea un ambiente tenso que sofoca cualquier intento de procurarse tierras dentro del programa de reforma agraria.

Finalmente, el movimiento carece de información adecuada sobre la cual basar sus reclamos. Existe una necesidad urgente de realizar una auditoría de las tierras que focalice las propiedades por provincia, patrones de uso, y capacidad de producción por provincia y por cultivo. Incluso, es necesaria una base de datos de información sobre las demandas de tierras, que discrimine las demandas del derecho a la tierra (relacionadas con los traslados forzados), las demandas económicas de diferente tipo y las demandas tradicionales y religiosas. Al mismo tiempo, la educación acerca de la reforma agraria debería abordarse de una manera más radical.

CONCLUSIÓN

La cuestión agraria es un problema de larga data en la política sudafricana y es fundamental para la prosperidad, el progreso y los derechos humanos de la gente. Es la base sobre la cual se determinan los cambios políticos y económicos, especialmente en los países en desarrollo. La tierra ha sido un factor dinámico para el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, y ha tenido repercusiones en la determinación del poder en los procesos de producción, distribución e intercambio. Sin embargo, la cuestión fue opacada por otros problemas políticos más vitales como la vivienda, la creación de empleos y la infraestructura.

Las ocupaciones de tierra de Zimbabwe y Bredell, antes de la conferencia del Movimiento no Alineado en Durban, trajeron el problema a la luz, junto con el discurso de “la resistencia al estilo Seattle” y de “Génova, la repetición”, y la ansiedad de políticas de resistencia. El gobierno, por su parte, se ha preocupado por generar una estabilidad que se atenga a su programa amigable con el mercado. Ello produjo fuertes tensiones entre el Estado y la sociedad, que se materializaron de diferentes maneras alrededor del tema de los fondos, las alianzas, el apoyo y la asistencia técnica. A muchos movimientos les cuesta redefinir su posición frente al gobierno, mientras otros experimentan alianzas tensas, dudas y una tendencia a la introspección.

Lo que es seguro es que se trata de un terreno fértil para las demandas de base de tierras. Pese a la variedad de los reclamos, hay puntos de con-

vergencia, en especial en contra de los efectos destructivos del neoliberalismo. También tienen diferencias entre ellos, en el enfoque, la fuerza y en la actitud hacia el gobierno. Esto sugiere que los movimientos sociales en Sudáfrica tienen aún un largo camino por recorrer antes de encontrar la unidad y resolverse a identificar y a pelear contra un enemigo común.

BIBLIOGRAFÍA

- African National Congress (ANC) 1994 *Reconstruction and Development Programme* (Cape Town: Umnyango Publishers).
- Ashley, Caroline y LaFranchi, Christopher 1997 *Livelihood Strategies for Rural Livelihood in Caprivi: Implications for Conservancies and Natural Resource Management* DEA Research Discussion Paper N° 20 (Winkhoek: Ministry of Environment and Tourism).
- Bishop, Joshua y Scoones, Ian 1994 *Beer and Baskets: The Economics of Women's Livelihoods in Ngamiland, Botswana* (London: International Institute for Environment and Development) IIED Research Series, Vol. 3.
- Bond, Patrick 2000 *Elite Transition: From Apartheid to Neo-liberalism in South Africa* (London: Pluto Press).
- Bradley, Philip N. y Dewees, Peter 1993 "Indigenous Woodlands, Agricultural Production and Household Economy in Communal Areas" en Bradley, P.N. y McNamara, K. (eds.) *Living with Trees: Policies for Forest Management in Zimbabwe*, World Bank Technical Paper N° 10 (Washington, DC: World Bank).
- Bremner, Landsay 1994 "Development and Resistance: The Lessons for the Planners of Phola Park" en *Urban Forum*, 5(1), pp 23-44.
- Bryceson, Deborah Fahy (ed.) 1995 *Women Wielding the Hoe: Lessons from Rural Africa for Feminist Theory and Development Practice* (Oxford: Berg).
- Bryceson, Deborah Fahy 1999 *Sub-Saharan Africa Betwixt and Between: Rural Livelihood Practices and Policies*, African Studies Centre, Working Paper N° 43 (Leden: African Studies Centre).
- Bryceson, Deborah Fahy y Bank, Leslie 2001 "End of Era: Africa's Development Policy Parallax" en *Journal of Contemporary African Studies*, 19(1), pp 5-23.
- Commey, Pusch 2002 "South Africa, Land: A Ticking Time Bomb" en *New African*, November, pp 12-16.
- Cross, Catherine 1997 "Rural Land Tenure Reform: Surrounded by Hungry Allocators" en *Indicator South Africa*, 14(2), pp 72-78.
- Cross, Catherine 1999 "Women and Land in the Rural Crisis" en *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, 42, pp 12-27.

- Cross, Catherine, Mngadi, Tobias, Sibanda, Siphon y Victoria, Jama 1996 "Making a Living under Land Reform: Weighing Up the Chances in KwaZulu-Natal" en Lipton, Michael, Ellis, Frank y Lipton, Merle (eds.) *Land, Labour and Livelihoods in Rural South Africa* (Durban: Indicator Press) Vol. II.
- Davidson, Basil 1968 *African History: Themes and Outlines* (London: Weidenfeld & Nicolson).
- Davies, J., M. Richards y Cavendish, W. 1999 *Beyond the Limits of PRA: A Comparison of Participatory and Conventional Economic Research Method in the Analysis of Ilala Palm Use in Southeastern Zimbabwe* (London: Overseas Development Institute).
- Department of Agriculture 1995 *Abstract of Agricultural Statistics* (Pretoria: Department of Agriculture).
- Department of Land Affairs 1995 *Land Policy Framework Document: Consultant Document* (Pretoria: DLA).
- Festenstein, Melville 1987 *Land and Race: South Africa's Group Area and Land Act* (Johannesburg: South Africa Institute of Race Relations).
- Fakir 1985 Personal Communication (una entrevista) en L. Platzky y Walker, C. *Surplus People's Project: Land Restitution in South Africa – Alternative Forms of Compensation* (Cape Town: SPP).
- Greenberg, Steve 1999 "Building a People Driven Rural Development Strategy: Lessons from the RDI", paper presentado en la conferencia *Land and Agrarian Reform*, Alpha Training Centre, Broederstroom, Pretoria, 26-28 julio.
- Hargreaves, Samantha 1999 "Land Reform: Putting Gender in the Centre" en *Agenda*, 42, pp 42-48.
- Hendler, Paul 1992 "Living in Apartheid's Shadow: Residential Planning for Africans in the PWV region, 1970-1990" en *Urban Forum*, 3(2), pp 39-80.
- Holm, Magens 1992 "Survival Strategies of Migrants to Makambako – An Inter-mediate Town in Tanzania" en Baker, Jonathan y Pedersen, Poul Ove (eds.) *The Rural-Urban Interface in Africa: Expansion and Adaptation*, Seminar Proceedings, N° 27 (Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies).
- James, Deborah Fahy 2001 "Land for the Landless: Conflicting Images or Rural and Urban South Africa's Land Reform Programme" en *Journal of Contemporary African Studies*, 19(1), pp 93-109.
- Kassier, Eckart y Groenewald, Jan 1992 "Agriculture: An Overview" en Shrineled, R. (ed.) *Wealth or Poverty: Critical Choices for South Africa* (Cape Town: Oxford University Press).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Kock, Eddie 1996 *Land Reform in South Africa: Buoyed by Restitution and Re-distribution a Phoenix Arises* (Ford Foundation Report, New York: Winter).
- Kock, Eddie, Massyn, Peter John y Van Niekerk, Andrea 2002 "The Fate of Land Reform in Southern Africa: The Role for the State, the Market and Civil Society" en Ghimire, K.B. y Moore, B:H: (eds.) *Whose Land? Civil Society Perspectives on Land Reform and Rural Poverty Reduction: Regional Experiences from Africa, Asia and Latin America* (Geneva: UNRISD).
- Lahiffa, Edward y Sam Rugege 2002 "A Critical Assessment of State Land Redistribution Policy in the Light of the Grootboom Judgment" en *New Agenda: South African Journal of Social Policy and Economic Policy*, 3(7), pp 48-67.
- Lalthapersad-Pillay, Pinky 2002 "The Effects of Poverty on Women" en *Africa Insight*, 32(1), pp 37-44.
- Land Agriculture Policy Centre (LAPC) 1997 "Review of Land Reform in South Africa" (Johannesburg) Inédito.
- Lipton, Michael, Frank Ellis y Merle Lipton (eds.) 1996 *Land, Labour and Livelihoods in Rural South Africa* (Durban: Indicator Press) Vol. II.
- Mabin, Alan 1991 "The Impact of Apartheid on Rural Areas of South Africa" en *Antipode* 23(I), pp 33-46.
- Mabin, Alan y Harrison, Philip 1997 "Ideas, Philosophy and Personality in the History of KwaZulu-Natal's Town and Regional Planning Commission" en *South African Planning Journal*, 42 (junio), pp 22-42.
- Marcus, Tessa, Eales, Kathy y Wildschut, Adele 1996, *Land Demand in the New South Africa* (Durban: Land and Agriculture Policy Centre, Indicator Press, University of Natal).
- Mather, Charles 2000 "South African Agriculture and Rural Livelihoods in the Era of Liberalisation" en Cousins, Bem (ed.) *At the Crossroads: Land and Agrarian Reform in South Africa into the 21st Century* (Braamfontein: PLAAS y NLC).
- May, Julian, Posel, Deborah y Carter, Michael 1995 *The Composition and Persistence of Poverty in Rural South Africa: An Entitlements Approach to Poverty*, Research Report N° 15, Land and Agriculture Policy Centre (Johannesburg: LAPC).
- May, Julian 1996 "Assets, Income and Livelihoods in Rural KwaZulu-Natal" en Lipton, Michael, Ellis, Frank y Lipton, Merle (eds.) *Land, Labour and Livelihoods in Rural South* (Durban: Indicator Press).
- May, Julian 2000 "The Structure and Composition of Rural Poverty and Livelihoods in South Africa" en Cousins, Ben (ed.) *At the*

- Crossroads: Land and Agrarian Reform in South Africa into the 21st Century* (Braamfontein: PLAAS y NLC).
- May, Julian, Atwood, Heido Ewang, Peter, Lund, Francie, Norton, Andy y Wentzel, Wilfred 1997 *Experience and Perceptions of Poverty in South Africa: An Entitlement Approach*, reporte inédito para World Bank, Government of Netherlands y ODA, Data Research Africa (Durban).
- Meagher, Kate y Mustapha, Abdul Raufu 1994 “De-agrarianisation in Rural Housaland: Flexibility or Fragility?” en Bryceson, D. y Van der Laan, C. (eds.) *De-Agrarianisation in Africa*, Working Paper N° 20 (Leiden: Africa Studies Centre).
- Moser, Caroline 1996 *Confronting Crisis: A Comparative Study of Household Responses to Poverty and Vulnerability in Four Poor Urban Communities* (Washington, DC: World Bank).
- Moyo, Sam 2000 “The Political Economy of Land Acquisition and Redistribution in Zimbabwe” en *Journal of Southern African Studies*, 26(1), pp 5-28.
- National Land Committee (NLC) 2000/01 *Annual Report Johannesburg: Media Unit of the National Land Committee*.
- National Land Committee (NLC) 2001/02, *Annual Report, Johannesburg: Media Unit of the National Land Committee*.
- Pearce, Brendan 1997 *Overview Paper on Land Reform in South Africa*, diciembre, mimeo.
- Platzky, Lanine y Cherryl, Walker 1985 *The Surplus People’s Project: Forced Removals in South Africa* (Johannesburg: Ravan Press).
- Royston, Lauren 1998 *Urban Land Issues in Contemporary South Africa: Land Tenure Regulation and Infrastructure and Services Provision*, Development Planning Unit, N° 87 (London: University College London).
- Republic of South Africa (RSA) 1994 *White Paper: A New Housing Policy and Strategy of the Government of National Unity* (Pretoria: Government Gazette).
- SAIRR 1999/2000 *South Africa Survey* (Johannesburg: South African Institute of Race Relations).
- Shackleton, Sheona Elizabeth, Stadler, J.J., Jeenes, K.A., Pollard, S.R. y Gear, J.S.S. 1995 *Adaptive Strategies for the Poor in Arid and Semi-arid Lands: In Search of Sustainable Livelihoods. A Case Study of Bushbuckridge District, Eastern Transvaal, South Africa*, reporte inédito producido para el IIED y Wits Rural Facility (Klaserie).
- Shackleton, Charles Michael y Shackleton, Sheona Elizabeth 1997 *The Use and Potential for Commercial of Veld Products in the*

RECUPERANDO LA TIERRA

- Bushbuckridge Area*, reporte inédito, DANCED Community Forest Project, Department of Water Affairs and Forestry, Nelspruit.
- Shale, Pheelo 1997 *Illegal Land Occupation in Maseru, Lesotho*, M.Sc. disertación, Facultad de Arquitectura, University of Witwatersrand.
- Sihlongonyane, Mfaniseni F. 2001 *Rural-Urban Encounters In Swaziland: The Case of Manzini City*, paper presentado en la Conferencia Internacional DPU "Rural-Urban Encounters: Managing the Environment of the Peri-Urban Interface", London, noviembre, 9-10.
- Skinner, Caroline 2000 "Getting Institutions Right: Local Government and Street Traders in Four South African Cities" en *Urban Forum*, 11(1), pp 49-71.
- Statistics South Africa 1999 *Rural Survey*. En <www.statssa.gov.za/releases/releases/p0360/p0360/htm>.
- Surplus People's Project 1985 *Forced Removals in South Africa* (Cape Town:Ravan).
- World Bank 1992 *Governance and Development* (Washington, DC: World Bank).

SAM MOYO*
PARIS YEROS**

**OCUPACIONES DE TIERRAS Y REFORMA
AGRARIA EN ZIMBABWE: HACIA LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL**

EL MOVIMIENTO DE OCUPACIÓN DE TIERRAS en Zimbabwe ha logrado realizar la primera gran reforma agraria desde el fin de la Guerra Fría¹. Ha sido también el desafío más importante del Estado neocolonial en África bajo el ajuste estructural y, a juzgar por su efectividad a la hora de adquirir tierras, también es el más notable de los movimientos rurales en el mundo actual.

Ha demostrado ser un desafío intelectual y un asunto de ambivalencia política. Por un lado, el proceso de reforma agraria trajo preguntas analíticas fundamentales respecto del capitalismo periférico, el

* Sam Moyo es director ejecutivo del Instituto Africano de Estudios Agrarios, Harare, Zimbabwe. Ha publicado extensamente sobre tierra, temas agrarios y ambientales en Zimbabwe y sur de África. Fue profesor asociado de Estudios Agrarios en la Universidad de Zimbabwe hasta 2000, y también director de varias redes de investigación e institutos en África.

** Paris Yeros ha sido profesor visitante en el Departamento de Economía, Universidad Federal de Paraná, Brazil. Escribió su tesis doctoral sobre la cuestión agraria en Zimbabwe en la London School of Economics. Ha sido editor de las revistas londinenses *Millennium e Historical Materialism*.

1 Agradecemos a Henry Bernstein por los comentarios hechos a un borrador anterior. Los errores de hecho y de interpretación son de nuestra responsabilidad.

Estado y el nacionalismo. Por el otro lado, ni la academia ni las fuerzas políticas “progresistas” se han puesto a la altura de la tarea. La mayor parte de ellas denunció que el proceso de reforma “destruía” al Estado y que su nacionalismo era “autoritario” o que estaba “agotado” (es decir, que pertenecía a una era anterior); pero otros, en cambio, hicieron lo contrario, la celebraron como si fuera la culminación de la “conquista de poder [empowerment] negro” o de la “nativización económica”.

La polarización del debate tiene menos que ver con las peculiaridades de Zimbabwe que con la situación de la academia en la década del noventa, que se ha caracterizado por una desviación con debates enrarecidos sobre la “política de identidad”, nacional e internacional, y el aburguesamiento generalizado de los intelectuales nacionalistas. Ciertamente, hace veinte años, la reforma agraria radical en Zimbabwe habría recibido una respuesta diferente. Mientras ese suceso hubiese presentado dificultades analíticas considerables aun entonces, los intelectuales progresistas habrían debatido los temas relevantes con rigor, y esto concerniría a la naturaleza del Estado neocolonial, el conflicto entre capitalistas, las relaciones campesino-obrero, las lucha de clases dentro del movimiento de ocupaciones de tierras y la dirección de la revolución democrática nacional.

¿Por qué tal cambio en sólo veinte años? ¿Es que el neocolonialismo ya no es relevante? ¿Es que el ajuste estructural dio a luz una democracia nacional? ¿O es que se sustituyó la forma misma de la soberanía nacional por la globalización neoliberal? Nada, por supuesto, podría estar más lejos de la verdad. La respuesta yace precisamente en la cooptación tanto de la academia como de la política de “oposición”, al punto de que el imperialismo quedó mistificado, la determinación nacional degradada, el Estado oscurecido y la cuestión agraria abandonada². Estos giros intelectuales han tenido efectos políticos concretos, que quizá se den más claramente en relación con Zimbabwe, cuyo nacionalismo y reforma agraria radicalizados han resultado ser desagradables para las fuerzas sociales domésticas e internacionales de los nacionalismos “cívicos” y “posnacionalismos”.

LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL NEOCOLONIALISMO

La economía política de Zimbabwe es comparable a la de aquellos otros Estados asiáticos, latinoamericanos y africanos que siguen teniendo un patrón desarticulado de acumulación y cuestiones agrarias sin resolver. Este subdesarrollo persistente es parte esencial de la situación neocolonial, es decir, del fracaso de los Estados jurídicamente independientes

2 Para dos de los ejemplos más rigurosos, ver Hammar, Raftopoulos y Jensen (2003) y Bond y Manyanya (2002).

para completar la revolución democrática nacional. Ésta es la situación, a pesar de las transiciones completas que se han hecho hacia el capitalismo en el siglo XX.

Los casos de Zimbabwe y el de África del sur en general consisten en un subtipo de neocolonialismo que deriva de la experiencia colonizadora blanca. Un aspecto crucial del capitalismo colonizador blanco fue que manifestó periódicamente fuertes contradicciones entre las estrategias introvertidas y extrovertidas de acumulación del capital. Precisamente, tal fue el caso de Zimbabwe, con la emergencia de una burguesía industrial durante el curso de las dos guerras mundiales. En este sentido, la experiencia histórica de Zimbabwe (junto a la de Sudáfrica) puede entenderse como semejante a la de los países latinoamericanos “semiperiféricos”. Un segundo aspecto del capitalismo colonizador blanco, sin embargo, fue que en la organización del proceso de trabajo, el capital blanco ejerció tanto un poder “directo” como uno “indirecto” sobre la población negra nativa. Esto contrasta con las recientes interpretaciones sobre la primacía de la administración “indirecta” en África (Mamdani, 1996) y también con las experiencias históricas de América Latina, donde el sistema *latifundio-minifundio* posterior a la esclavitud no institucionalizó la segregación racial. Estos dos aspectos del capitalismo colonialista blanco le han dado al neocolonialismo en Zimbabwe una forma especial, particularmente en sus dinámicas de clase, raza y nación.

EL ESTADO COLONIALISTA BLANCO

La economía política de Zimbabwe colonial comenzó a exhibir sus tendencias peculiares a principios del siglo XX, cuando la incursión especulativa inicial del capital minero dio lugar al establecimiento de una burguesía agraria blanca con un interés parcial en el mercado doméstico. Los años siguientes se caracterizaron por un creciente conflicto entre capitalistas agrarios blancos, por un lado, y el capital minero y el capital financiero con sede en Londres, por el otro (Arrighi, 1973). Esto culminó con el establecimiento de un “autogobierno” blanco en la colonia de “Rhodesia del Sur” en 1923, mediante el que la burguesía agraria blanca asentaba su liderazgo político y se comprometía con los capitales externos.

La institucionalización de la segregación racial se estableció también bajo el liderazgo del capital agrario blanco. Esto resultaba ser una contradicción en sí misma para cualesquiera fuesen los designios que pudiera haber tenido el capital agrario blanco para el desarrollo de los mercados domésticos. La visión sostenida por el capital agrario blanco del “mercado interno” estaría confinada al elemento colonizador blanco y sólo la desafiaría, parcialmente y a su debido momento, el surgimiento de una burguesía industrial. Tal esquema supremacista blanco

dejaría una marca indeleble en el desarrollo del capitalismo en el Estado colonizador. Desde un período temprano, el capital agrario blanco demostró que a pesar de que era “más que un *comprador* [en español en el original]”, era “menos que nacional” (Phimister, 1988: 180) y, con el tiempo, aunque el conflicto entre capitalistas desafiara las bases de la segregación racial, nunca lo haría hasta el punto de convertirse en propiamente “nacional” –es decir, de producir una alianza entre el capital industrial blanco y las fuerzas populares nacionalistas para el desarrollo concertado del mercado doméstico.

Ya desde los primeros días del Estado colonizador blanco estaban esparcidas las semillas del capitalismo negro. Durante los años de entreguerras, el Estado permitió que naciera una pequeña clase agraria capitalista negra fuera de las áreas comunales –en las “Áreas de Adquisición Nativa”– como una forma de cultivar una alianza burguesa por sobre la división racial. Pero este proyecto fue insignificante, ya que el Estado colonizador se negó a dar apoyo al capital negro para que se expandiera y para que compitiera con el capital agrario blanco. Más allá de los granjeros del Área de Adquisición, dentro de las áreas comunales también se creó una pequeña burguesía negra, en forma paralela a la expansión de la producción de productos básicos, a la que también se habría de excluir del desarrollo dinámico.

El proceso de trabajo en Zimbabwe colonial se caracterizó por una contradicción constante entre la proletarianización y un dualismo funcional gestionado políticamente, a través del cual la producción de pequeñas mercancías en las áreas comunales y, en especial, el trabajo femenino mal pago, subsidiaban la reproducción social de la posición de poder del trabajador masculino en las minas y en los cultivos. Esta contradicción no produciría ni un proletariado industrial estable ni un campesinado viable, sino una fuerza de trabajo en movimiento, de posicionamiento ambiguo y dispersa por las tierras comunales, las granjas blancas, las minas y los lugares de trabajo industrial. Se trataba de un “semiproletariado”, un agregado de trabajadores campesinos domésticos diferenciados por el género y fragmentados por las particularidades etnolingüísticas y un creciente sentido de nacionalidad (Yeros, 2002b). Bajo tales condiciones, la organización de los sindicatos resultaba una lucha onerosa. A los obstáculos inherentes a la semiproletarianización –migración, dualidad rural-urbana, pobreza, diferencias étnicas y de género– se sumaba la represión estatal y, en el período de posguerra, la puesta en marcha de tácticas divisivas por parte del sindicalismo internacional (Raftopoulos, 1996). Sin embargo, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el sindicalismo logró avances en el Estado colonizador blanco, al punto de movilizar con éxito huelgas a lo largo del país en 1945 y 1947.

El modo de gobernar en Zimbabwe colonial combinaba formas directas e indirectas, pero la forma indirecta estaba lejos de ser autónoma o suficiente para organizar el proceso de trabajo. El proyecto segregacionista del capital agrario blanco prosiguió activamente después de 1923, mediante la forma combinada de la segregación territorial con el Acta de Distribución de la Tierra (1930) y, más crucialmente, con la segregación *legal*. Mientras su sostén institucional consistía en el dualismo funcional de estilo africano, con la transferencia de autoridad judicial a los jefes de las áreas comunales bajo el Acta de Asuntos Nativos (1927) y el Acta de la Ley Nativa y Cortes (1937), su sostén social era la sujeción de las mujeres a la tierra por medio de las relaciones de parentesco, adjudicadas por los jefes. Más allá de esta “administración indirecta”, el capital agrario blanco siguió ejerciendo poder directo sobre los vastos trechos de tierra “europea” que se había apropiado. Allí reprodujeron relaciones de dependencia personal *vis-à-vis* con trabajadores y arrendatarios negros (Palmer, 1977). Por su lado, el capital minero perfeccionaría el “sistema compuesto”, mediante el que se sujetaba el trabajo a los compuestos mineros a través de una variedad de instrumentos económicos y extraeconómicos (Van Onselen, 1976). También se utilizó el poder del Estado central para socavar sistemáticamente la agricultura africana, aplicándole impuestos y manipulándola, especialmente a través de las Actas de Control del Maíz (1931, 1934), con el propósito de subsidiar al capital agrario blanco y de reforzar su hegemonía económica estructural. Entre tanto, el capital agrario y el minero y más tarde el industrial acudieron sistemáticamente al empleo de las fuerzas de seguridad del Estado para suprimir las organizaciones sindicales –especialmente con el Acta de Conciliación Industrial (1937, 1937) y el Acta de Sedición (1936)– como también, en su momento, a las movilizaciones nacionalistas.

La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias provocaron la reestructuración de la economía en dos sentidos muy importantes. En primer lugar, el capital industrial se embarcó en una senda de crecimiento espectacular, quintuplicando sus ganancias entre 1939 y 1948 –en industrias como la textil, de indumentaria y procesamiento de alimentos (Phimister, 2000: 32-33)– y madurando políticamente para presentar un nuevo reto al dualismo funcional. En segundo lugar, el capital agrario volcó su estrategia de acumulación al mercado externo, a través de la conversión de los campos de maíz en plantaciones de tabaco (Arrighi, 1973: 350-358). De allí en más, la competencia entre capitalistas produciría una alianza entre el capital agrario y el minero contra la burguesía industrial.

Entre fines de la década del cuarenta y fines de la década del cincuenta, los capitalistas blancos llegaron a un nuevo compromiso para expandir el mercado interno a través de dos elementos: primero, con el Acta de Labranza de la Tierra Nativa (1951), que tenía la intención de

RECUPERANDO LA TIERRA

reorganizar las áreas comunales a lo largo de las líneas capitalistas y crear un proletariado urbano estable; y segundo, ampliando la esfera de influencia del capital blanco más allá de Rhodesia del Sur hasta Malawi colonial y Zambia (Nyasaland y Rhodesia del Norte), por medio de la Federación de África Central. Este proceso se acompañó con reformas limitadas en las relaciones laborales y en el sistema electoral, haciendo esfuerzos por cooptar a los trabajadores negros y a la pequeña burguesía dentro del marco y la ideología de la “asociación” racial.

Las reformas y la asociación no tuvieron éxito ni sobrevivieron. Hacia fines de la década del cincuenta, las constricciones perennes de la acumulación desarticulada se impusieron a la Federación y llevaron a la crisis su balanza de pagos. Para 1958, el equilibrio de clases y las alianzas capitalistas ingresaban en un nuevo período de reconfiguración. Por un lado, la organización sindical negra seguía avanzando, ahora con las resonancias del nacionalismo popular anticolonial que se propagaba por todo el continente. Por otro lado, no llegó a emerger a tiempo una burguesía negra, al resguardo del capital blanco, que defendiera una solución neocolonial. En cambio, el Estado colonizador blanco se polarizó entre un nacionalismo africano que atravesaba las clases sociales y era dirigido por la pequeña burguesía negra, y una supremacía blanco clausista, dirigida por los capitalistas agrarios blancos (Arrighi, 1973). Durante los años siguientes, se suprimió la organización nacionalista y se la mantuvo en la clandestinidad, se abortó la descolonización, se declaró la independencia unilateral (UDI) en 1965 y, finalmente, se pospuso la transición hacia el neocolonialismo. Con el colapso de la Federación en 1963, Zambia y Malawi hicieron su transición neocolonial cada una por su cuenta.

Bajo la UDI, el Estado colonizador blanco pasó del auge al fracaso. Experimentó un rápido desarrollo industrial cuando todos los capitales, incluyendo el capital industrial, se alinearon bajo un Estado capitalista altamente intervencionista para ser conducidos a un proyecto cerrado de supervivencia y supremacía blanco. Ello sería facilitado por las sanciones internacionales patrocinadas por la ONU, que eran permeables en su diseño y permitían, de hecho, que los bancos occidentales financiaran a Rhodesia la importación de petróleo, la ayuda militar y la inversión directa del capital transnacional. Este último expandiendo su provisión de capitales en un 37% entre 1966 y 1976 (Clarke, 1980). Hasta 1974, las “sanciones” y la dirigencia estatal darían como saldo un promedio de crecimiento industrial anual del 9%. Sin embargo, hacia mediados de la década del setenta, la economía colonizadora blanca se recalentaba una vez más, en la medida en que sus constricciones internas y externas se volvían a imponer al proceso de acumulación. Ello se debió a que el Estado nunca hubo expandido el mercado interno

más allá del elemento colonizador –incluso en su introversión– y sí, en cambio, había reforzado el dualismo funcional en su forma segregacionista y continuado dependiendo de la superexplotación de la mano de obra negra para la rápida acumulación de capital. La crisis se agravó política y económicamente por la reorganización del movimiento nacionalista en dos partidos, ZANU (Zimbabwe African National Union) y ZAPU (Zimbabwe African People's Union), con el apoyo de China y de la Unión Soviética, respectivamente, y con la llegada de la lucha armada a las zonas rurales,

Los restantes años de ocupación colonial estuvieron marcados por la guerra de guerrillas en el contexto de la Guerra Fría. Hacia fines de la década del setenta, la política exterior británica y la estadounidense empezaron a estar muy preocupadas por la posibilidad de brotes radicales en el sur de África, razón por la cual centraron sus energías en lograr una transición negociada hacia el neocolonialismo. En 1979, después de años de guerras de guerrillas y con la coalición del Frente Patriótico (PF), el movimiento de liberación firmó la transición neocolonial en Lancaster House, en Londres.

DE LA LIBERACIÓN A LA LIBERALIZACIÓN

La independencia de Zimbabwe se celebró el 18 de abril de 1980. Por fin, el país se embarcaba en un proyecto propio de construcción nacional. Pero en el nuevo Estado, la revolución democrática nacional seguía siendo un asunto de lucha social. El “Estado poscolonial blanco” era una variedad particular del Estado neocolonial, ya que el poder formal no se había entregado solamente a una pequeña burguesía negra, sino que ésta debía compartir el poder con el capital blanco establecido (Mandaza, 1986a, 1986b). Ideológicamente, esta concesión política se lanzó bajo la forma de la “reconciliación”, un eco de la “asociación” de posguerra, y consistía efectivamente en una reconciliación pero *no* “entre las razas” sino “con el capital” (Sibanda, 1988). En el ámbito económico, los intereses industriales y mineros siguieron siendo totalmente propiedad del capital local blanco y del extranjero, bajo condiciones monopólicas. Por su parte, la burguesía agraria blanca, unos 6 mil granjeros en el momento de la independencia, tenían el 39% de la tierra, un monto de 15,5 millones de hectáreas de tierras agro-ecológicas de primera, mientras que 1 millón de familias negras estaba confinado al 41,4% de la tierra, o a 16,4 millones de hectáreas marginales (Moyo, 1995). En suma, mientras la minoría blanca, menos del 3% de la población, dominaba cerca de dos tercios del ingreso nacional, la mayoría negra, el 97%, tomaba el tercio restante. En términos constitucionales, el acuerdo de Lancaster House establecía el principio de “comprador dispuesto, vendedor dispuesto” como base de las transferencias de tierras, con fecha de expiración en el

RECUPERANDO LA TIERRA

año 1990, y reservaba el 20% de las bancas parlamentarias para el 3% de la comunidad blanca hasta el año 1987.

En ese momento Zimbabwe era, después de Sudáfrica, la segunda economía más industrializada del África subsahariana. Zimbabwe heredó el complejo agro-industrial del UDI, caracterizado por una articulación significativa entre los sectores (casi la mitad de la producción agrícola alimentaba a la industria doméstica) y diversificó la producción de 7 mil productos que comprendían ropa, alimentos, fertilizantes, químicos, productos de metal, maquinaria eléctrica, equipamiento e, incluso, automóviles montados localmente. Esta actividad manufacturera representaba en términos contables el 25% de su PBI y el 40% del intercambio con el extranjero (Mlambo, 2000: 80). A pesar de ello, la economía continuó teniendo un patrón desarticulado de acumulación y el mercado interno siguió siendo de lujo, efectivamente limitado a menos del 15% de las 7 millones de personas de Zimbabwe. La agricultura permaneció como el sector más importante, al emplear al 70% de la población y contabilizar el 40% del PBI (Stoneman y Cliffe, 1987: 43).

La construcción nacional se proyectó correctamente como una cuestión de generar una economía endogámica. Es decir, de profundizar la articulación social y sectorial. Sin embargo, bajo el nuevo reparto político, facilitado por la continua debilidad organizativa del semiproletariado (a la que pronto volveremos), el plan nacional invocó el lenguaje reformista de la década del setenta de la ONU, denominado, en el caso de Zimbabwe, "Crecimiento con Equidad", mediante el que la redistribución estaría subordinada al crecimiento/estancamiento de la industria. A su vez, esta última se vería como el sector de desarrollo líder y no como un auxiliar del desenvolvimiento técnico de la agricultura.

El conflicto intercapitalista en el Estado neocolonial comenzó a manifestar nuevas tendencias y alianzas. La contienda tradicional entre capitales internos y externos se componía ahora de nuevas fuentes de disputa, a saber, entre la ascendente burguesía negra y el capital blanco, pero también en el *interior* mismo de la pequeña burguesía negra. El conflicto racial produciría un escenario particular, marcado por el resentimiento profundo y la manipulación de la raza tanto por parte de los blancos como de los negros (éstos para conseguir concesiones y aquéllos para "disfrazar" el capitalismo monopólico con gerentes negros). Mientras tanto, los conflictos entre negros de la pequeña burguesía se intensificaron con rapidez y trágicamente. La pequeña burguesía negra, en efecto dejada fuera del sector privado blanco, redirigiría sus estrategias de acumulación a través del Estado y recurriría a la manipulación étnica. Esto derivó en violentas y enérgicas medidas del Estado en las provincias sureñas de Matabeleland, durante el período 1983-1987, al oponerse el partido gobernante ZANU-PF a las anteriores guerrillas

disidentes del PF-ZAPU. Como se observó astutamente en su momento, bajo el neocolonialismo “no se utiliza la diversidad étnica para enriquecer la herencia cultural de la nación, sino que se la emplea para avanzar en los intereses de clase de los grupos y de los segmentos. No se usan las divisiones raciales para establecer firmemente la unidad nacional, sino que se lo hace para consolidar la dominación de clases y la explotación” (Sibanda, 1988: 266-267).

No obstante, una preocupación más inmediata para la potencia imperial era el conflicto convencional entre las estrategias de acumulación introvertida y extrovertida. Esta preocupación estaba en sintonía con la generalizada falta de confianza hacia los gobiernos de las mayorías negras y, en particular, del partido gobernante, que continuaba profesando el marxismo-leninismo a pesar de su programa de “Crecimiento y Equidad”. En este sentido, las disposiciones constitucionales de Lancaster House no bastarían para sofocar los temores anglo-estadounidenses hacia el nacionalismo africano. La tarea imperiosa de allí en más sería que el capital exterior prevaleciera en la política nacional y esto significaba centrar las energías políticas y las finanzas en la cooptación del capital industrial, como quedó representado en el Congreso de la Industria de Zimbabwe (CZI). Los otros sectores, el minero, comercial y el agrícola, estaban inclinándose de nuevo hacia una alianza externa con el capital transnacional, dado que el Estado guardián de supremacía blanca había sido derrotado.

La campaña imperialista fue liderada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI): el primero poniendo el acento específicamente en la industria al establecer un “fondo giratorio de exportaciones” para el sector en 1985, y el último enfocándose en conseguir influencia sobre el gobierno a través de la deuda. Ya independiente, a Zimbabwe se la veía como “subdeudada”, con un porcentaje de servicio de deuda de sólo el 10 %, lo que pronto cambiaría. Zimbabwe volvió a tener una nueva crisis de la balanza de pagos en 1982, y esto fue rápidamente aprovechado (Chimombe, 1986, Stoneman, 1989; Bond, 1998). “Luego de un año de haberse unido [al FMI] desde una posición de ‘subdeudamiento’, Zimbabwe tenía un acuerdo de emergencia y estaba, por lo tanto, en posición de que se le dictaran sus políticas económicas” (Stoneman, 1989: 41). En poco tiempo, el porcentaje del servicio de deuda ascendió rápidamente al 32%. Pero este no era aún el momento de lanzar el ajuste estructural sino sólo de posponerlo, ya que el gobierno optó por una austeridad “autoimpuesta”, bajo la forma de recortes al desarrollo rural que abarcaba las adquisiciones de tierra y los reasentamientos.

En la década del ochenta se hizo una limitada reforma agraria bajo el mecanismo del mercado. En total, el gobierno restituyó 58 mil hectáreas de un total de 3 millones, reduciendo el sector de la agricultura

RECUPERANDO LA TIERRA

comercial blanca a unos 11 millones de hectáreas, el 29% de la tierra agrícola. Como veremos, esto fue mucho menor que el objetivo buscado, que era el reasentamiento de 162 mil familias cuando, además, la tierra adquirida era de muy bajo valor agro-ecológico (Moyo, 1995). Bajo el marco constitucional de Lancaster House se hizo más énfasis en el desarrollo rural del sector campesino –investigación, extensión de servicios, carreteras y almacenamiento para la comercialización– y hubo un aumento anual del presupuesto del 37% entre 1980 y 1985, además de un fuerte gasto en educación y en salud (Bratton, 1987). Esto se complementaría con los precios en alza, en el mismo período, de los principales productos básicos (maíz, trigo y carne de vaca), a tal punto que para 1985 los campesinos contaban con el 45% de la producción comercializada (8% en 1980), aunque se diferenciaban en términos de clase y de región agro-ecológica (Cliffe, 1988). Pero en la segunda mitad de la década, el gasto rural entraría en el proceso inverso, con austeridad económica y el estancamiento industrial. Al mismo tiempo, la división del trabajo en la agricultura se modificó, los campesinos se especializaron en el algodón y en el maíz y los granjeros a gran escala en el café y el en tabaco –los grandes ganadores de divisas en el intercambio con el extranjero– y también en el maíz y el algodón. Un resultado político importante fue que los granjeros a gran escala se volcaron una vez más hacia el exterior y se interesaron por dismantelar –liberalizar– los sistemas de control de precios que utilizaba el Estado para transferir ingresos al sector campesino a través del desarrollo de infraestructura (Skålnes, 1995).

La industria había superado los límites de su capacidad y para fines de los ochenta había sido cooptada por los mercados de exportación. Para 1988, todo los capitales de todos los sectores se habían realineado en una instancia de política común volcada hacia el exterior, específicamente en el programa de liberalización promovido por el Banco Mundial. Es importante señalar que este realineamiento coincidió con el aburguesamiento de la elite negra, cuyas estrategias de acumulación se desarrollaban todavía en los bordes del capitalismo monopólico –en el pequeño comercio, en bienes raíces y en la industria de la hospitalidad– y con la asistencia del Estado, en un proceso conocido como “corrupción”. Fue también en una etapa avanzada de la “compra sistemática” [*compradorization* en el original] que un pequeño pero poderoso grupo se consolidó dentro del mismo circuito financiero dominado por los blancos (Bond, 1998). Después de 1987, con el fin de la violencia en Matabeleland gracias al Acuerdo de Unidad y, consecuentemente, con la absorción del PF-ZAPU dentro de las líneas del ZANU-PF, las elites nacionalistas dejarían finalmente de lado sus diferencias étnicas y allanarían el camino para una estrategia de acumulación conjunta (Raftopoulos, 1992). Al año siguiente, la discusión empezó con la fundación del Centro de Negocios y de Desarrollo Nativo (IBDC), un

grupo de presión formado por negros que buscaba conseguir mejores tratos con el capital blanco (CZI), y que pronto trasladaría su capacidad de presionar a la “acción afirmativa” en el curso de la liberalización. Todo el proceso de aburguesamiento, de “compra sistemática” [*compradorization*] y de unificación nacional fue acompañado por un nuevo proyecto político para establecer, por una enmienda constitucional, un “Estado de partido único”. Es decir, una dictadura de la burguesía despojada de sus formalidades democráticas. Como veremos, ésta sería derrotada por las movilizaciones populares lideradas por el Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU).

Si en el resto de la periferia se imponía un ajuste estructural por medio de la crisis de la balanza de pagos (Gowan, 1998; Haggard y Maxfield, 1996), en Zimbabwe se produjo a partir de la cooptación de sus capitales domésticos. Aunque Zimbabwe estaba llevando a cabo políticas de austeridad y funcionaba con una sobrecapacidad industrial, aún no se hallaba en crisis de pagos (Bond, 1998). La transformación del panorama mundial ayudó a cambiar la dirección económica, específicamente con el colapso de la Unión Soviética, en cuyo interior se produjo una crisis de legitimidad de la política económica estatal. Los eventos se sucedieron con velocidad: en 1989 se implementó un Código de Inversión liberal; en 1990 el sistema de asignaciones de intercambio con el exterior fue reemplazado por una Licencia General Abierta de Importaciones y, finalmente, en 1990 se lanzó el Programa de Ajuste Estructural Económico. Esto implicaba una receta estandarizada de recortes en el gasto público, la devaluación de la moneda y la liberalización de los precios, de las tasas de interés y del comercio, seguido de la desregulación de las cuentas de capital y de las relaciones laborales.

Durante los años siguientes, el programa de liberalización se implementó de lleno y provocó los efectos estanflacionarios [*stagflationary*] estándares. Para 1992, el déficit comercial había aumentado rápidamente, la inflación se había triplicado al 42% y las autoridades monetarias instrumentaban el “sadomonetarismo” (Bond, 1998). Los resultados económicos fueron los siguientes. Entre 1991 y 1995 comenzó la desindustrialización, con una nueva ronda de bancarrotas y de reducciones, que supuso el cierre de la quinta parte del sector de indumentaria. Se redujo la utilización de la capacidad industrial al 65%, mientras que para 1998, la contribución de la industria manufacturera al PBI había caído un cuarto por debajo, al 17% (ZCTU 1996; UNDP/UNCTAD, 2000). Hacia 1993, los salarios reales habían caído unos dos tercios; hacia 1995, la pérdida de trabajos, tanto en los sectores privados como públicos, sumaba unos 45 mil; mientras tanto, el porcentaje de los salarios en los ingresos nacionales había caído del 64 al 40%, al revés del crecimiento de las ganancias, que ascendió del 37% al 60% (ZCTU, 1996; Kanyenze, 1996).

RECUPERANDO LA TIERRA

La política agrícola sufrió reveses similares. Las juntas de mercadeo se comercializaban o privatizaban y los servicios de extensión, subsidios y créditos fueron reducidos, todo lo cual produjo una sinergia negativa con devaluación de moneda, a los efectos de elevar los costos de producción de los productores de pequeñas mercancías y erosionar los ingresos del agro (ZCTU, 1996; UNDP/UNCTAD, 2000). El foco de la política agrícola de la ESAP estaba puesto en la promoción de las exportaciones tradicionales (tabaco, algodón, carne, etc.) y en las actividades de exportación no tradicionales (en particular en la crianza de avestruces, horticultura y gestión de la fauna salvaje), esto último vendido en términos de la “ventaja comparativa” de Zimbabwe y confeccionado a medida exclusiva de las granjas a gran escala que, rápidamente, expandieron sus operaciones a las nuevas actividades. Promediando la década, casi un tercio de las granjas comerciales había adoptado la horticultura y el ecoturismo y, en menor medida, la crianza de avestruces, mientras que sólo el 10% de los pequeños campesinos se había involucrado en estos usos no tradicionales de la tierra (Moyo, 2000).

Finalmente, la política agraria ingresó en un período de ambigüedad y de nuevas contradicciones. Por un lado, las salvaguardas constitucionales de Lancaster House para las transferencias de tierras basadas en el mercado expiraron en 1990; por el otro, el movimiento de liberación fue cooptado, por ese entonces, por el ajuste estructural, un esquema de política macroeconómica que desplazaría la agenda de reforma de la tierra. El resultado contradictorio fue una serie de enmiendas constitucionales (1990, 1993) y la elaboración de una nueva Acta de Adquisición de Tierras (1992) que, de allí en más, habilitarían al Estado para designar y adquirir tierras compulsivamente. Sin embargo, dicha legislación retenía los principios del recurso legal para los terratenientes y la compensación e, incluso, no renunciaba al método de “comprador dispuesto, vendedor dispuesto”. Durante los años siguientes, ambos métodos (Estado y mercado) coexistirían constitucionalmente y la estructura constitucional para la adquisición compulsiva permanecería, en efecto, inactiva. Entre 1992 y 1997 se adquirieron, aproximadamente, 800 mil hectáreas, la mayoría de las cuales se encuentra en las regiones menos fértiles (Moyo, 1995; GoZ, 1999).

El ajuste estructural tuvo un efecto económico y político devastador para Zimbabwe. El segundo país más industrializado de África entró en una desindustrialización acelerada y, al mismo tiempo, empezaban a retroceder los logros sociales alcanzados en el campo de la salud y de la educación durante el período postindependentista (UNDP/PRF/AIDS, 1998). El peso del ajuste lo cargaron la casa del campesino-trabajador y, especialmente, las mujeres, cuyo trabajo productivo y reproductivo se vio, por necesidad, intensificado. Para empeorar las cosas, al ESAP se

sumó la pandemia del SIDA. Así, al deterioro de la capacidad física se asociaron la depresión del empleo, la erosión del salario real y la disminución de los ingresos del campo (todo lo cual ejercería una presión sobre el campesinado semiproletarizado que lo lanzaba a actividades económicas marginales, a la ilegalidad y al conflicto social). Políticamente, el sentido de la liberación nacional y el de la cuestión agraria en particular se transformarían, con el capital negro en alza, en un proyecto de “nativización”, en efecto, una “fórmula de sustitución racial para el desarrollo de la agricultura capitalista” (Moyo, 1995: 7). En la década del noventa, el IBCD y otros grupos de presión pedirían que el gobierno “reservara” tierras para la “nativización”, pero obtuvieron muy pocos resultados, ya que la economía se encontraba en una espiral descendente. Por ese entonces, el capital agrario negro sumaba sólo trescientos cincuenta granjeros que habían comprado tierra y cuatrocientos granjeros que arrendaban 400 mil hectáreas de tierra (Moyo, 2001b). En lo sucesivo, el conflicto intercapitalista no sería una disputa del tipo introversión/extroversión, sino que sería mucho más claramente racial. Y aunque el nacionalismo estaría animado por contradicciones de clase más pronunciadas, también surgiría la posibilidad de una alianza de clases transversal nacionalista por la tierra.

CIVILIZANDO A LA SOCIEDAD

El conflicto entre capitalistas es una de las fuerzas naturales de empuje de la sociedad capitalista; la otra es la lucha de clases. Interpretar esta última es un desafío de otro orden, dadas sus diferentes manifestaciones, desde sus formas “encubiertas” hasta las más visibles y organizadas, sus divisiones de género, de edad y de etnia. El reto es más grande cuando se trata de sociedades semiproletarizadas, donde el proceso de trabajo contiene formas capitalistas y formas ostensiblemente no capitalistas de trabajo y donde la política se divide entre el campo y la ciudad. Y un desafío aun mayor es entender la clase dentro del contexto más amplio del imperialismo y de su antítesis nacional, es decir, asociar la lucha de clases al principio de autodeterminación nacional. En África, históricamente, los análisis de clase y de nación han sido de los más profundos (Fanon, 2001; Cabral, 1979), pero con los años han sido reemplazados por aquellos otros que o ven al nacionalismo sin criticarlo o no lo ven en absoluto. En la independencia de Zimbabwe, el estudio del nacionalismo tomó un nuevo rumbo de compromiso crítico, especialmente entre los intelectuales zimbabwenses. Esto produjo un fuerte debate, cuyo enfoque se centraba en las elites políticas (Mandaza, 1986b), la política de la clase obrera urbana organizada (Raftopoulos, 1992, 1999, Raftopoulos y Yoshikuni, 1999) y la política de la clase obrera rural de bajo perfil (Moyo, 1995, 1999, 2000, 2001a).

RECUPERANDO LA TIERRA

En la década del noventa, el estudio del nacionalismo se amoldó a la liberalización y a la nueva preocupación por la “sociedad civil”. Un hito en el debate africano fue la publicación de *Ciudadano y sujeto* (1996) de Mahmood Mamdani, que volvió a traer con éxito la cuestión agraria al debate de la sociedad civil. Aunque fue muy importante para abrir el camino, no contenía un análisis económico-político acabado: reducía la cuestión agraria (clásicamente entendida como una transición hacia el Estado moderno) a un mero asunto de gobierno local, y confinaba la cuestión nacional (la consecución de la autodeterminación frente al imperialismo) al dominio de las relaciones campesinado-Estado. Como consecuencia, una serie de temas importantes o se dejó de lado, incluyendo la organización del proceso de trabajo como un todo (la cuestión laboral) y el conflicto entre capitalistas (ya sea interno/externo o racial), o quedó oscurecida por el hecho de no ubicar el Estado y la sociedad civil en su contexto *neocolonial* específico. Nuestro análisis del caso de Zimbabwe sirve como contrapunto.

Es bien sabido que la lucha de liberación en Zimbabwe fue un levantamiento popular de masas con implicaciones internacionales de largo alcance. Sin embargo, también se sabe que nunca alcanzó un buen entendimiento clasista por sí mismo ni logró articular un proyecto socialista (Mandaza, 1986a). El liderazgo de su pequeña burguesía, que actuaba como el punto de apoyo entre el imperialismo y el semiproletariado, nunca se inclinó decisivamente a favor de este último, que siguió siendo dependiente en su ideología y en su organización: el sindicalismo en las áreas urbanas se fragmentó crónicamente y quedó subsumido, durante la guerra, bajo los partidos nacionalistas en competencia, en tanto que fueron los propios partidos los que asumieron directamente la movilización rural. A su vez, la base social primaria de la lucha de liberación, constituida básicamente por trabajadores-campesinos pero también por la pequeña burguesía rural, se alojó en las zonas rurales, donde se libraba la guerra. Su estructura ideológica era anticolonial y ponía un fuerte énfasis en la tierra y en su recuperación. Esta estructura ideológica y la base rural del nacionalismo zimbabwense continuarían ejerciendo poder de opinión sobre el destino de la liberación nacional, en especial, en el curso de su aburguesamiento.

Después de la independencia, una ola de huelgas sin autorización sindical en las zonas urbanas (doscientas huelgas en 1980 solamente) y de ocupaciones generalizadas de tierras en las zonas rurales asolaron Zimbabwe, en lo que fue descrito como una “crisis de expectativas” (Sachikonye, 1986; Wood, 1988). Éstas se agravaron, como vimos, por una división de la elite en Matabeleland. En el suceso, la civilización de la sociedad adaptada a los requerimientos del neocolonialismo fue rápida, ya que el partido gobernante se dispuso a “colocar un reino sobre

una base de masas” (Mandaza, 1986b). Las tácticas a emplear consistían, primero, en dividir al semiproletariado organizado entre el campo y la ciudad; segundo, en hacer corporativa la expresión política a través de los canales administrativos del partido; y tercero, en usar el aparato estatal de Rhodesia para suprimir la disidencia, de forma más violenta en Matabeleland. Sin embargo, el neocolonialismo también exhibía su “esquizofrenia” en la entrega de un número de bienes sociales, especialmente para el desarrollo rural, y en la inclusión de la reforma agraria. De hecho, el neocolonialismo nunca se quedaría tranquilo frente a las masas semiproletarias, cuyas tácticas de ocupación de tierras, fuera de la sociedad civil, obligarían al gobierno a implementar desde temprano un “programa acelerado de reasentamiento” que involucraba las tierras abandonadas por los granjeros blancos durante la guerra.

A menudo se afirma que la sociedad civil de Zimbabwe estaba subordinada al “Estado”. Pero esto es caer en la trampa liberal de dicotomizar al Estado y a la sociedad civil. En primer lugar, el Estado es la expresión institucional de la relación *capital-trabajo* (Marx, 1975): no sólo porque es inseparable de la sociedad sino porque, además, tiene el rol activo de “civilizarla” para cumplir con los requerimientos del capital. En segundo lugar, el Estado es la expresión institucional *local* de la sociedad capitalista, dentro de una sociedad capitalista más amplia que trasciende al Estado y que actúa a través de un sistema-de-estados (ver Moyo y Yeros, pág. 19 de este volumen). De aquí se siguen tres implicaciones: (a) mientras el orden mundial resultante es formalmente “anárquico”, “multilateral” y se funda en el principio de la soberanía nacional, en sustancia sigue siendo imperialista al violar la soberanía nacional; (b) los orígenes de la “civilización” del capital son el “Estado”, el “supraEstado” y el “transEstado”, para incluir finanzas *inter alia* internacionales, operaciones militares encubiertas y abiertas, agencias donantes y sindicalismo internacional; y (c), como punto crucial, romper con el Estado no es una condición suficiente para lograr una expresión autónoma propia, lo que se requiere es romper con la civilidad del *capital*, y ésta es una tarea mucho más demandante. En el caso de Zimbabwe, dicha “incivilidad” ha estado presente durante todo el período de postindependencia pero, en general, ha sido fragmentada, de bajo perfil, débilmente organizada y desarticulada. Cómo esta “sociedad incivil” consiguió una reforma agraria radical *a través del Estado y contra el imperialismo* es una cuestión que desafía la sabiduría predominante.

El Estado neocolonial dirigió la civilización de la sociedad en Zimbabwe, siempre con tensiones y contradicciones, asistido por agencias internacionales. Respecto de las relaciones laborales, el Estado procedió a corporizar al sindicalismo, al separar institucionalmente a los trabajadores del sector público y a los del privado bajo la PSA

RECUPERANDO LA TIERRA

(Asociación de Servicios Públicos) y el ZCTU, respectivamente, imponiendo un liderazgo clientelar e interviniendo en las determinaciones salariales. La inauguración en 1981 del ZCTU fue patrocinada por el International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) y la estadounidense AALC (el organismo regional del AFL-CIO), en un mensaje claramente destinado al capital internacional. El salario real permaneció virtualmente sin cambios durante los cinco años siguientes, mientras que los sectores domésticos y de la agricultura continuaban por debajo de la línea de pobreza (Wood, 1988). A lo largo de estos años, el ZCTU se mantuvo bajo el ala del Estado, a la vez que recibía fondos tanto del ICFTU como del World Federation of Trade Unions (WFTU), comandada por los soviéticos.

Pero a mediados de la década del ochenta, el centro nacional de los trabajadores comenzaría a independizarse del Estado y se embarcaría en un camino de coalición con el capital. Entre 1984 y 1988, el centro depuró la corrupción de sus filas, eligió una dirección independiente, implementó un reclutamiento interno, democratizó la campaña y entró en una nueva era de relaciones de trabajo con el adversario. Esto último incluía no sólo pedidos concertados para la negociación colectiva sino también la movilización nacional contra el Estado de “partido único” y, ulteriormente, contra el ajuste estructural. Pero los defectos del centro de trabajo también eran claros: todavía faltaba crear lazos fuertes con los obreros de planta, seguía siendo financieramente débil y dependiente y estaba reducido a los trabajadores formalmente empleados mayormente en áreas urbanas; el centro de trabajo no tenía relaciones organizacionales con las áreas rurales, excepto con las granjas comerciales, en las que los trabajadores estaban muy débilmente organizados y en condiciones de semiservidumbre.

Estos puntos débiles fueron su talón de Aquiles y provocaron su “recivilización”. Mientras durante la primera mitad de los noventa condujo una campaña provocadora contra la liberalización, promediando la década se empezó a ver que moderaba su postura, tecnificando su lenguaje de desarrollo y llamando a un “diálogo social”. Tal transformación se debió a la combinación de la represión estatal a la cual estaba sujeta, y a la adopción en masa por parte del ICFTU y de otras agencias donantes del centro de trabajo en los albores del colapso soviético. Hacia fines de la década del noventa, dos tercios del ZCTU dependían del ingreso de esas fuentes extranjeras. Por ese entonces, también había abandonado la tarea de establecer relaciones organizativas con los desempleados y con las áreas comunales y, en cambio, provocaba al partido gobernante con el fundamento de la “buena gobernabilidad”, el discurso imperialista de fines del siglo XX. Ésta se convertiría, asimismo, en la estructura ideológica del nuevo partido que crearía el ZCTU –el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC)–, para oponerse al ZANU-PF en las elecciones del nuevo milenio (Yeros, 2002a, 2002b).

En las áreas rurales, el proceso de civilización no fue menos tenso o contradictorio. Por un lado, el partido gobernante intentó realizar reformas agrarias “aceleradas”, presionado por las ocupaciones masivas, puesto que “la redistribución de la tierra era una demanda clave para el distrito electoral más populoso del gobierno y, al menos en principio, la gente tenía acceso a protectores poderosos y al espacio para actuar por fuera de las estructuras estatales” (Alexander, 1993: 185). El gobierno estableció estructuras políticas modernas para reemplazar a los jefes tribales, bajo la forma de comités de desarrollo –provinciales, regionales, barriales y aldeanos– y amalgamó las áreas africanas y europeas anteriormente segregadas en Consejos Regionales Rurales (RDC). Por otro lado, el gobierno pronto volvería a *resubordinar* al gobierno local bajo un gobierno central y los requerimientos del neocolonialismo. “En teoría, el gobierno había establecido canales seculares, no racistas y democráticos para la participación popular en la formulación de políticas y de planificación desde el nivel aldeano al nivel provincial”; en la práctica, estas estructuras eran marginales y estaban consideradas por el gobierno central “primordialmente como agencias de ejecución, no de formulación, de políticas”; hasta la jefatura tribal resucitó, para retomar el control de las cortes y así reforzar el orden patriarcal (Alexander, 1993: 168-173). Además de sobre el gobierno local, el partido gobernante tuvo éxito en corporativizar los intereses agrícolas, con excepción del Sindicato de Granjeros Comerciales blanco (CFU). Aquí, la estrategia sería fusionar a todos los granjeros en un gremio para diluir las divisiones raciales y de clase; el resultado fue que en 1991 sólo se agruparon los granjeros comerciales negros a pequeña escala y los granjeros de las áreas comunales en la Unión de Granjeros de Zimbabwe (ZFU), bajo el control de los intereses burgueses de la agricultura, mientras que el CFU siguió siendo independiente (Bratton, 1994).

Hacia la década del noventa, las organizaciones urbanas y rurales, estuvieran o no bajo la influencia del Estado, se habían civilizado ante los requerimientos del capitalismo neocolonial, lo cual también daría lugar a un vacío político compuesto por el declive económico inducido por la ESAP. Hacia fines de esa década, ninguna organización cívica tenía un proyecto de clases que unificara al semiproletariado, como tampoco lazos organizativos con el campo por fuera de la agricultura comercial, o independencia financiera (ni siquiera la formalmente democrática ZCTU). Cualquiera fuera el tipo de defensoría que existía entre las organizaciones cívicas para la cuestión de la tierra, era ambigua y retórica, y se sumergía en el discurso liberal de la “buena gobernabilidad” y de los “derechos humanos”. Cerca de 1999, el conjunto de las sociedades civiles de Zimbabwe –las organizaciones cívicas ampliamente urbanas y/o de la burguesía/pequeña burguesía, que integraban a trabajadores, iglesias y ONG– se unificaron

RECUPERANDO LA TIERRA

en una “Convención Nacional Popular de Trabajadores” para discutir y, finalmente, fundar un nuevo partido político, el MDC.

Sin embargo, el semiproletariado nunca abandonó la causa de la tierra. A lo largo del período de independencia, los sin tierra y los que tenían poca tierra continuaron con las ocupaciones (Moyo, 2000, Yeros, 2002b). A pesar de que generalmente eran difusas y pasaban inadvertidas representaban, en suma, una grave amenaza para la legitimidad del partido gobernante. Como señalaba un memorando interno del Ministerio de la Administración Local, en una fecha tan temprana como 1988:

No es necesario enfatizar que, teniendo en cuenta la secular Cuestión de la Tierra, se observa que la severidad y la centralidad del problema de las usurpaciones tienen su propia inercia. Es decir, las usurpaciones se convirtieron en una prioridad de fuerza en la agenda, antes de nuestro liderazgo nacional. En la actualidad, hay alrededor de cien núcleos de usurpaciones de proporciones suficientes como para llamar urgentemente la atención, y estos núcleos constan de miles de personas que ya han probado el sabor de la batalla con las autoridades.

Las ocupaciones de tierras se intensificarían en la década del ajuste estructural. Y cualquier acción sobre la tierra que se tomara de allí en más se haría por fuera de la red cívica.

OCUPACIONES DE TIERRA Y REFORMA AGRARIA

Las ocupaciones de tierras fueron la fuerza impulsora de la reforma agraria a lo largo del período de independencia, a pesar del modelo oficial de adquisición de tierras. Este último estaba comprometido con el principio del mercado, primero en concordancia con las disposiciones constitucionales de Lancaster House y luego con los términos del programa de ajuste estructural. Sin embargo, al expirar las primeras, el gobierno comenzó a redefinir el modelo oficial, promulgando leyes en 1992 que habilitarían la adquisición compulsiva, aunque sin implementar efectivamente dicha adquisición o reemplazar el método de mercado. Los tres modelos –popular, mercado y estado– interactuarían dinámicamente a lo largo de la década del ajuste estructural (Moyo, 2003).

El proceso de reforma agraria se podría dividir en tres períodos: 1980-1992, caracterizado por el predominio relativamente seguro del método de mercado; 1992-1999, caracterizado por el inicio de un desafío oficial a dicho método y que llevaría a una amenaza real de la adquisición compulsiva en 1997, en el contexto de la profundización de la crisis social y política; y 2000-2002, el período en el que el método de mercado se abandonó rotundamente y fue reemplazado por la adquisición radical, compulsiva.

LA INTERACCIÓN DE LOS MODELOS DE REFORMA AGRARIA

El primer período puede subdividirse en dos, 1980-1985 y 1985-1992. En el primero se puso énfasis político en un compromiso activo con el mercado y en la entrega de tierras al campesinado; en el segundo, la redistribución de tierras disminuyó junto con el deteriorado estatus fiscal del Estado y el aburguesamiento del movimiento de liberación. En tanto en el primer período el partido gobernante buscó apaciguar su distrito electoral más importante, en el segundo, la base social del partido gobernante se desplazó a la ascendente burguesía negra y se abrió una grieta entre éste y el campo.

La táctica de ocupación de tierras todavía no se abandonaría entre un período y el otro; sólo se modificaría en forma. Los primeros años de la independencia se caracterizaron por “ocupaciones de gran intensidad y de bajo perfil” (Moyo, 2001b), a las que los líderes políticos del nivel local del partido gobernante, principalmente en la provincia de Manicaland, les dieron apoyo simpatizante y hasta alentaron. En esos años, el ritmo de las adquisiciones y de la redistribución de la tierra a través del mercado fue relativamente rápido, sumando, en total, aproximadamente 2.200.000 hectáreas, a 430 mil hectáreas por año. Éstas incluían terrenos que habían sido abandonados por sus dueños blancos en las zonas liberadas durante la guerra y eran, por lo tanto, más fáciles de adquirir. En Matabeleland, las ocupaciones y el proceso de reforma agraria fueron víctimas de las peleas de poder entre ZANU-ZAPU y las enérgicas medidas de seguridad del Estado. Sólo después de los Acuerdos de Unidad de 1987, el clima político en Matabeleland empezó a tolerar los reclamos de tierra, pero nuevamente con pocos resultados, puesto que la postura del gobierno frente al tema estaba empezando a cambiar.

Entre 1985 y 1992, el ritmo de las adquisiciones a lo largo del país disminuyó dramáticamente a 75 mil hectáreas por año y a un total de aproximadamente 450 mil hectáreas. Esta desaceleración fue acompañada por una revocación de la respuesta política a las ocupaciones de tierras en el nivel local, que incluyó las provincias de Mashonaland, y por una transformación de esas ocupaciones en lo que podríamos denominar una “intensidad normal baja” (Moyo, 2003). Significativamente, desde 1985 en adelante, el Estado estableció un aparato de “control de usurpadores” a nivel local, a través de Comités de Control de Usurpaciones bajo la responsabilidad del Ministerio de la Administración Local, con el propósito de monitorear el autoaprovechamiento ilegal de tierras y de llevar adelante desalojos en masa (Alexander, 1993; Moyo, 2000; Yeros, 2002b). Lo que esto significaba, en realidad, era que, por un lado, el semiproletariado había perdido cualquier influencia informal que alguna vez hubiera tenido sobre la

RECUPERANDO LA TIERRA

política agraria nacional pero, por el otro, que el Estado no podría poner frenos al proceso de autoaprovechamiento de tierras, ni siquiera a través del control de los usurpadores. De esa manera, se llegó a un punto muerto en la batalla por la tierra y se constituyeron los aspectos de fondo del ajuste estructural.

En el período 1980-1992, la reforma agraria dirigida por el mercado demostró ser incapaz de hacer frente a la cuestión de la tierra en Zimbabwe. El proceso, además de ser lento y progresivo, también distribuyó suelos de bajo valor agro-ecológico e impuso onerosas demandas fiscales a un Estado ya financieramente limitado. Como se señaló en otro lado (Moyo, 2002), sólo una proporción muy pequeña de la tierra adquirida era de valor agro-ecológico de primera (19%), el resto estaba en las regiones menos fértiles. A mediados de la década de 1980, el Estado se dio cuenta de que estaba recibiendo ingresos cada vez más bajos a cambio de sus recursos consagrados a la adquisición de la tierra. Eso era lo que estaba sucediendo, a pesar de que el Reino Unido, como ex potencia colonial, otorgaba financiamiento para la reforma agraria. En total, Gran Bretaña contribuyó con 44 millones de dólares estadounidenses, un monto groseramente inadecuado para resolver la cuestión agraria en Zimbabwe. La naturaleza lenta y esquiva del proceso de reforma se convertiría, a partir de mediados de la década del ochenta, en una fuente de conflictos diplomáticos amargos entre los gobiernos de Zimbabwe y del Reino Unido (Matondi y Moyo, 2003). A esto se sumaba, además, la aparición gradual de granjeros comerciales negros a gran escala, que también se habían beneficiado del método de mercado.

Este conflicto se intensificó cuando expiraron las disposiciones constitucionales de Lancaster House del principio de “vendedor dispuesto, comprador dispuesto” para las transferencias de tierra, y la promulgación de disposiciones constitucionales para la adquisición compulsiva. En 1990, a pesar del lanzamiento del ajuste estructural, el gobierno dio señales de un cambio de dirección de la política agraria, y en 1992 dispuso una nueva Acta de Adquisición de Tierras que legalizaba la obtención compulsiva y otorgaba compensaciones y recursos legales sin desplazar el principio de mercado. En adelante, el método de mercado continuaría prevaleciendo en el proceso político –puesto que el ajuste estructural hundió la cuestión de la tierra decididamente– pero, de todas maneras, ambos métodos (estado y mercado) entrarían en un período de competencia abierta. La adquisición compulsiva era el método favorito, no sólo del semiproletariado, sino también y de forma más inmediata, de la ascendente clase burguesa negra. De hecho, el capital negro intensificaría, durante los noventa, su presencia en el sector de la agricultura comercial a gran escala, de modo que

hacia fines del período de reforma basado en el mercado, surgieron cerca de ochocientos granjeros comerciales negros a través de la compra o del arriendo de casi un 10% de la tierra destinada a la agricultura comercial a gran escala. En conjunto, el ritmo de la reforma agraria seguía siendo lento. Entre 1992 y 1997 se adquirieron alrededor de 790 mil hectáreas, a un ritmo de 158 mil hectáreas al año; esto incluía el reasentamiento de seiscientas familias campesinas desplazadas por la construcción de la represa Osborne.

La combinación del ajuste estructural con la “nativización” de la cuestión agraria ha tenido su corolario en la intensificación de las ocupaciones de bajo perfil. Las demandas de tierra y de sus recursos naturales se incrementaron entre las unidades domésticas semiproletarias, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, cuando se recortó el empleo público y el privado, se redujo el salario real y los ingresos de las granjas menguaron (Moyo, 2000). Por esta causa, surgieron nuevas tendencias de usurpaciones durante los noventa. Una de ellas consistió en la propagación de las usurpaciones de las áreas de agricultura comercial a gran escala hacia otros regímenes de tenencia de la tierra, a tal punto que el mayor volumen de las usurpaciones reconocidas oficialmente se hallaba ahora en las áreas comunales (33%), en las áreas de reasentamiento (12%), en las áreas urbanas (10%), en las tierras estatales (31%) y sólo una minoría (el 14%) se encontraba en las granjas comerciales (Moyo, 1998). Otra tendencia fue que las ventas de tierra y las rentas de mercado se profundizaron en *el interior* mismo de las áreas comunales y de reasentamiento. El derecho al título de esa tierra es legalmente conferido al Estado y administrado, en primera instancia, por las autoridades tradicionales de manera consuetudinaria. Pero durante los noventa, la mercantilización de la tierra comunal se incrementó mucho a partir del pago de honorarios o de obligaciones políticas a los miembros locales del parlamento, a los jefes, los dirigentes y los médium espirituales. A su vez, se intensificaron los conflictos por la tierra entre los “pobladores” y los “usurpadores”.

Estas nuevas tendencias en las usurpaciones hicieron que el “control de usurpaciones” fuera aun menos efectivo, aunque el aparato continuó aplicándose mediante vigilancia. En 1992, se reconstituyó la política de control de usurpaciones en el interior del Ministerio de la Administración Local para establecer una jerarquía de comités de control nacional, provincial y municipal de las usurpaciones, así como para garantizar a “la autoridad de la tierra o al propietario” el poder legal para desalojar. En efecto, esto significaba que el problema nacional de la tierra se “municipalizaría” a nivel de la tierra comunal y que se “privatizaría” a nivel de las granjas comerciales. Sobre estas bases, se llevaron a cabo sucesivos desalojos en masa bajo el programa de ajuste estructural, en

RECUPERANDO LA TIERRA

algunos casos involucrando a cientos de familias usurpadoras al mismo tiempo, y con un estilo que remitía a los métodos del Estado colonial blanco (Yeros, 2000b).

EL NACIONALISMO Y LA REFORMA AGRARIA RE-RADICALIZADA, 1997-2002

Al final del primer programa de ajuste estructural en 1996, la política nacional llegó a un punto de ebullición tal que desafió severamente la legitimidad del partido gobernante como “guardián” de la nación. Las huelgas se extendieron del sector privado al público y los sindicatos de esos trabajadores (la Asociación de Empleados Públicos) se afiliaron incluso al ZCTU, oponiéndose abiertamente a la táctica del gobierno de “divide y reinarás”. En 1997, las huelgas afectaron a varias industrias, como la construcción, el comercio, la hotelería y el abastecimiento de alimentos, la textil, la del cemento y la cal, la ferroviaria, las cámaras urbanas, el correo y las telecomunicaciones. En total, hubo en el año más de doscientas treinta huelgas en dieciséis sectores. Lo más notable fue que los trabajadores rurales realizaron por primera vez una huelga de brazos caídos en protesta por las malas condiciones salariales y de trabajo, cuyos haberes representaban menos de un sexto a lo considerado el umbral de la línea de pobreza.

Sin embargo, el partido gobernante no sólo era desafiado desde afuera. También se estaban creando problemas de polarización interna, marcados por el retorno de los veteranos de guerra a la política nacional a través de la Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional de Zimbabwe. Éstos demandaron que el Estado los compensara a través del presupuesto nacional, cuestión que estuvo precipitada por un escándalo financiero y el colapso del Fondo de Compensación de los Veteranos de Guerra subsidiado por el Estado. Si bien para el análisis académico y los medios de comunicación éste parecía ser un pedido en “beneficio propio” se trataba, además, de un indicador de la división de clases dentro del mismo partido gobernante entre, por un lado, las elites al frente de la “nativización” y, por otro, los escalones más bajos del escalafón, muchos de cuyos integrantes vivían en la pobreza y nunca habían logrado acomodarse con el Estado postindependiente. Es más, las demandas sonaban a nacionalismo re-radicalizado y a descontento con el curso de la liberación nacional. El gobierno sucumbió a estas demandas y desembolsó un gran paquete de compensaciones que no habían sido previstas en el presupuesto nacional. Incluso volvió a prestar atención a la cuestión de la tierra, designando la adquisición compulsiva de 1.470 granjas comerciales blancas y prometiendo el 20% a los veteranos de guerra. Estas medidas sumieron a la economía en una espiral descendente provocada, además, por la caída del 74% del dólar de Zimbabwe

en un día (14 de noviembre). Estas jugadas también parecían ser en “beneficio propio” –en este caso, para el presidente Mugabe–, pero de hecho, el desafío de los veteranos de guerra era de una magnitud diferente, ya que estaban firmemente alojados en el aparato estatal y además a cargo de la seguridad, la del presidente inclusive.

De allí en más, los acontecimientos tomarían en Zimbabwe una dirección diferente. Se abandonó el segundo programa de ajuste estructural (ZIMPREST), se suspendió la balanza de pagos apoyada por el FMI, y la economía sufrió un rápido declive. Pero aún no había llegado el momento de la reforma agraria y del cambio estructural radical, ya que las granjas blancas enlistadas por el gobierno no fueron adquiridas. En cambio, el peligro de las adquisiciones compulsivas galvanizaría a nivel nacional la cuestión de la tierra, incluso internacionalmente, dando lugar a una nueva ronda de negociaciones con los donantes extranjeros, entre los que se encontraba el Banco Mundial y el gobierno británico. En 1998, se llevó a cabo en Harare una Conferencia de Donantes, en la que se alcanzó un tenso acuerdo sobre las adquisiciones compulsivas y de mercado, así como sobre otros métodos complementarios. En la víspera de la conferencia, una ola de notorias ocupaciones de tierras arrasó el país por primera vez desde los remotos años de la independencia. Ésta había sido organizada de forma laxa a nivel local por disidentes políticos del partido gobernante, líderes tradicionales, trabajadores desplazados y la Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional, lo que demostraba las divisiones de clase en el interior del partido gobernante (Moyo, 2001a). El gobierno toleró intermitentemente esa ola de ocupaciones y las utilizó como instrumento contra los donantes, pero estaba claro que el gobierno no tenía el control. No mucho tiempo después, recurriría al uso de la fuerza para controlar a los ocupadores y prometió acelerar la reforma. Los campesinos, por su parte, aceptaron “esperar”.

Entre 1998 y 2000, a pesar de los acuerdos de la conferencia, no se efectivizó ningún progreso en relación con la cuestión agraria. En cambio, la política nacional siguió recalentándose, especialmente con el lanzamiento del MDC y la euforia que despertaba la perspectiva de poder derrotar al partido gobernante en las elecciones del nuevo milenio. A decir verdad, en el año 2000, el partido gobernante atravesaba la crisis de legitimidad más severa desde la independencia. Y fue en esa época cuando el equilibrio de las fuerzas de clase en el interior del partido gobernante se inclinó a favor de las soluciones nacionalistas radicales. En febrero de 2000, las ocupaciones masivas, lideradas por los veteranos de guerra, comenzaron en el sur de la provincia de Masvingo y se extendieron hacia todas las provincias, de forma tal que en su punto máximo, en junio, el gobierno implementó adquisiciones compulsivas y redistribuciones

RECUPERANDO LA TIERRA

en masa y se ocuparon cerca de ochocientas explotaciones. Hacia fines de 2002, la reforma agraria “vía rápida” había adquirido compulsivamente 10 millones de hectáreas –aproximadamente el 90% de la tierra de agricultura comercial blanca– y había redistribuido la mayor parte de ésta a 127 mil unidades domésticas campesinas y a 8 mil granjeros capitalistas medianos (aspecto que se analiza más abajo). En el curso de esta rebelión, se manipularon las elecciones nacionales y se sometió violentamente a la sociedad civil; el resultado fueron unas cien muertes relacionadas con la política, entre 2000 y 2002. La violencia también produjo muertes en las granjas (como la de seis granjeros blancos y once trabajadores rurales), e incluyó casos de violación y tortura.

A medida que la temperatura subía en la política nacional, la política internacional entraba en un período de renovado conflicto, con una guerra de propaganda internacional, un boicot financiero e inestabilidad regional. La prensa privada nacional y las cadenas internacionales, conducidas por la británica, denunciaron que las reformas agrarias eran “arrebatos de tierras” y que el partido gobernante era una “dictadura corrupta y brutal”; se llegó, por lo demás, a comparar al presidente Mugabe con “Milosevic”. El MDC y el ZCTU se sumaron al repertorio imperial pidiendo “elecciones libres y multipartidarias justas”, e hicieron alianza con los granjeros comerciales blancos en contra de la reforma agraria. Los fondos y las donaciones extranjeras abandonaron el país para comenzar un largo boicot internacional, con excepción de aquellos que tenían propósitos “humanitarios”. Y los propios Estados regionales y las sociedades civiles se vieron forzadas a elegir bando, los primeros defendiendo con precaución la reforma, y las últimas, generalmente, condenándola. Por su parte, el nuevo Movimiento Popular de los Sin Tierra (LPM, por su sigla en inglés) de Sudáfrica entró en el ámbito de la sociedad civil. De inmediato se vio enfrentado a la contradicción de formar alianzas civiles y de apoyar, al mismo tiempo, una estrategia nacionalista radical respecto de la tierra; en los hechos, el LPM defendió las ocupaciones.

Ciertamente hay mucho para criticar en el proceso de reforma agraria de Zimbabwe. Pero no sería posible hacerlo sin identificar su estructura y su dinámica de clases, sus debilidades y sus defectos, pero también sus logros y, en efecto, su naturaleza fundamentalmente progresista.

LA ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Las ocupaciones de tierras se desplegaron de una manera compleja, con particularidades locales y regionales, pero compartieron una base social común –la del semiproletariado rural–, por sobre las diferencias étnicas, regionales y de género. La fuerza del movimiento se debe buscar precisamente en esta base social y, más aun, en su compromiso militante

hacia la recuperación de tierras, un compromiso que ninguna otra organización cívica había deseado asumir. Con el tiempo, esta base social se expandió para incluir a los pobres urbanos y a la pequeña burguesía, quienes también habían sido cooptados por el programa de redistribución de vía rápida. Esto fortalecería el movimiento, especialmente al conectar a los pobres rurales con los pobres urbanos, en la medida en que la propuesta de la pequeña burguesía no amenazase, aún, el contenido general de clase del movimiento. Se fortaleció además, en su momento, por la aprobación que recibió del *lobby* capitalista negro y, en última instancia, por la articulación de una tensa pero resuelta alianza nacionalista sin distinción de clase sobre el tema de la tierra, por mediación de la Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional. En este caso, tampoco el *lobby* capitalista negro amenazaría el contenido de clase trabajadora del movimiento. En suma, esta alianza nacionalista transversal se opondría a la alianza de la sociedad civil “posnacional” entre clases (o “nacional cívica”), entre la que se contaban el MDC, los sindicatos, las ONG y los granjeros blancos.

El movimiento de ocupación fue organizado y dirigido por la asociación de veteranos de guerra. Ésta fue una gran fuente de fortaleza que combinaba la militancia en la cuestión agraria con una estructura organizativa que atravesaba al Estado y a la sociedad. Los veteranos de guerra activaron sus raíces de organización tanto en los distritos rurales, a través de las ramas locales de la asociación, como en todos los niveles del aparato del Estado: el gobierno local y central, la policía, los militares, la Organización Central de Inteligencia, los medios estatales de comunicación (prensa, televisión y radio) y el partido gobernante. Esta penetrante estructura en red contendría la única posibilidad de movilizar las áreas rurales y el aparato estatal por la causa de la tierra.

La elite burocrática, sin embargo, buscó sembrar su hegemonía en las ocupaciones de tierra e incluso apropiarse de la reforma agraria. Lo logró a través del control del contenido ideológico de las representaciones mediáticas del “Tercer Chimurenga” (Insurrección); de la insistencia en el uso de un derecho estatal, definido legislativamente (es decir, con enmiendas a la Constitución y al Acta de Adquisición de Tierras) para expropiar las tierras ocupadas y las mayores extensiones requeridas por el movimiento en expansión; de la custodia de la política de reforma tal como estaba definida en los documentos del programa de vía rápida; y de la supervisión de su aplicación en el nivel central y en el nivel provincial. De esta manera, el movimiento de ocupación de tierras se volvió gradualmente “programatizado”.

En este contexto, la asociación de veteranos de guerra también sería, por diversas razones, una fuente de debilidad para el movimiento. En primer lugar, esta asociación surgió como un movimiento de “tema úni-

RECUPERANDO LA TIERRA

co”, focalizándose exclusivamente en la cuestión inmediata de la recuperación de tierras y no en las cuestiones político-económicas a largo plazo, particularmente durante la fase posterior a la vía rápida. En consecuencia, la asociación de veteranos no buscaría establecer ni un automantenimiento ni estructuras organizacionales democráticas campesino-obreras, con vistas a prepararse para la educación política basada en la clase a largo plazo y para la lucha ideológica. En tercer lugar, mientras su nacionalismo era orgánico e indispensable, su contenido de clase no estaba claramente articulado. El movimiento defendía un nacionalismo militante anticolonial, que se centraba orgánica e ideológicamente en la recuperación de tierras. Y aunque esto fuera efectivo para dicha recuperación, la dirección de clase del movimiento se vio amenazada por el conflicto de clases en el interior de la propia Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional, del partido gobernante y de la burocracia.

La táctica principal del movimiento era la ocupación de tierras. Se basaba en las ocupaciones previas, esporádicas y dispersas, específicamente en aquellas que tuvieron lugar durante la Conferencia De Donantes en 1998. La nueva y mayor ola de ocupaciones comenzó en febrero de 2000, luego de un *referéndum* pre-electoral sobre la reforma constitucional, con el que la propuesta del partido gobernante fue derrotada y señalado el “final del juego” para el movimiento de liberación. Las ocupaciones comenzaron en Masvingo, pero se extendieron a las provincias de Matabeleland y de Mashonaland, lentamente en la primera y más velozmente en la última, que muy pronto se convertiría en su epicentro (Alexander y MacGregor, 2000; Moyo, 2001a). Las ocupaciones se centraron en las granjas blancas pero también, esporádicamente, en las de los capitalistas negros y de la elite política. Al principio, ocuparon tierras subutilizadas, pero ello se reformularía para incluir las tierras productivas, en particular aquellas que se ajustaban a otros criterios, como la propiedad múltiple, la propiedad extranjera y la contigüidad a las áreas comunales. Se expandieron a las áreas periurbanas, entrando a través de los elementos urbanos pobres y de la pequeña burguesía. En unos pocos casos, el liderazgo de las ocupaciones no fue ostentado por los veteranos de guerra sino por parlamentarios individuales y por líderes tradicionales, quienes buscaron “formalizar” sus ocupaciones apelando a los veteranos de guerra. Hubo también instancias de antagonismo entre las iniciativas locales y los estratos más altos de la estructura de mando de los veteranos de guerra, que provocaron fricciones dentro del movimiento. La violencia se impuso, aproximadamente, en unas trescientas granjas, según las reacciones de los granjeros y las relaciones con sus trabajadores.

En algunas ocasiones, estos trabajadores apoyaron y se unieron a las ocupaciones de tierras, en tanto en otras se resistieron mediante la violencia y los desalojos. Ésta demostraría ser otra debilidad del

movimiento: su rápida aparición. La ausencia de un proceso preexistente de educación política y de movilización en el campo enfrentaría a los trabajadores sin tierra con los trabajadores rurales en un clima de desconfianza en el que se percibía a estos últimos como movilizados por los terratenientes para votar en contra de las propuestas constitucionales del gobierno. Por un lado, los representantes gremiales nunca habían movilizado a los trabajadores rurales para recuperar tierras pero, en cambio, sí se habían centrado siempre en cuestiones reformistas laborales (salarios y condiciones de empleo). Por otro, los veteranos de guerra tenían una postura ambigua e incluso arrogante para con los trabajadores rurales, viéndolos incapaces de desarrollar una conciencia política nacionalista. En esta tensa coyuntura, los trabajadores rurales debían elegir entre defender su trabajo y a sus empleadores o unirse a las ocupaciones y esperar conseguir tierras, bien a través de los veteranos de guerra en forma directa, bien de los vínculos familiares en las áreas comunales. Una minoría de trabajadores rurales de origen no zimbabwense se encontraba en una situación particularmente precaria, al igual que las mujeres de los trabajadores rurales, la mayoría de las cuales se empleaba de forma casual en las granjas y tenía poco acceso por su propia cuenta al proceso de solicitud de tierras en las áreas rurales. Así, estos trabajadores se hallaban en un antagonismo confuso, por el cual sus antiguos empleadores y explotadores –los dueños de la tierra– los defendían y, al mismo tiempo, se oponían a la redistribución de la tierra. Esta contradicción no se resolvió por iniciativa de los veteranos de guerra, que no veían apropiado ganarse a los trabajadores rurales proporcionándoles un adecuado acceso a la tierra (esto es, a más del 5% de los 150 mil trabajadores desplazados, tema que se discute más abajo).

Finalmente, la estrategia de buscar la reforma agraria a través del Estado y del partido gobernante resultó ser tanto una debilidad como un punto fuerte del movimiento de ocupación de tierras. Por un lado, el partido gobernante procedió rápidamente haciendo reformas constitucionales para facilitar los procedimientos de adquisición compulsiva, modificando las provisiones existentes para la compensación al limitarla a las mejoras sobre la tierra y, explícitamente, relegando cualquier otra responsabilidad de compensación al gobierno británico. Éstas se complementaron con decretos presidenciales, bajo el Acta de Poderes Presidenciales, para enmendar el Acta de Adquisición de Tierras (2000) varias veces, de modo de posponer la compensación y quitar el recurso legal y otros impedimentos procesales que evitaban la adquisición de tierras. A partir de entonces, el partido gobernante aprobó el Acta (Protección contra los Desalojos) de Ocupadores de Tierras Rurales en 2001, con lo que los sin tierra tendrían protección legal ante los desalojos. Estos cambios legislativos fueron producidos a través del enfrentamiento sucesivo

RECUPERANDO LA TIERRA

con las Cortes Alta y Suprema, responsables de proteger la propiedad privada. En el campo, el aparato de seguridad del Estado (policía, militares y CIO) intervendría para dar apoyo logístico al movimiento y para protegerlo de la posible militarización de los dueños de la tierra y de otro tipo de violencia que escapara a su control. Finalmente, el Estado también difundió propaganda de guerra a través de sus medios de comunicación, al punto de amenazar la existencia de los medios privados (a fines de 2003 fue cerrado el periódico privado líder *Daily News*).

Por otro lado, la estructura fundamentalmente burguesa de la burocracia no se disolvería. Esto quiere decir que la dirección del movimiento de ocupación de tierras sería incapaz de, e incluso se mostraría renuente a, arrebatarle a la elite negra el poder del Estado y del partido gobernante. En cambio, esta elite sí empleó el aparato del Estado para conservar su poder y reafirmarse en la política nacional, utilizando la misma táctica que se empleaba durante los períodos colonial y neocolonial: la separación orgánica del semiproletariado entre el campo y la ciudad. Además de ayudar y proteger al movimiento de ocupación, la dirección del partido gobernante hizo uso del aparato de Estado para aislar a los obreros urbanos organizados de sus contrapartes rurales, reprimiendo las movilizaciones de los trabajadores urbanos, persiguiendo a los líderes sindicales y desorganizando sus estructuras. El objetivo inmediato de esta instrumentación de la violencia sería doble: salvaguardar el proceso de reforma agraria del sindicalismo reaccionario y asegurar las elecciones presidenciales (marzo de 2002) y legislativas (junio de 2000) en contra de la alianza "posnacional". No obstante, esta práctica sobreviviría tanto a la reforma por vía rápida como a las elecciones, al punto de que disolvió sistemáticamente cualquier núcleo de organización obrera por fuera del control de la elite del partido gobernante, tanto en el campo como en la ciudad.

Es en este proceso contradictorio que el equilibrio de clases en la alianza nacionalista comenzaría a estar en contra del semiproletariado. La elite negra ejerció su poder burocrático no sólo para hacerle lugar a la pequeña burguesía negra en las 7 mil doscientas sesenta granjas capitalistas pequeñas y medianas, sino también para su propio rédito, apropiándose de 150 mil hectáreas (0,5% de la tierra adquirida) y beneficiando a ciento setenta y ocho de sus integrantes. Esto llevó a que el proceso de reforma se mantuviera lejos de varias propiedades agroindustriales privadas (individuales y corporativas) y fiscales clave. En suma, se aseguró que la tierra redistribuida entre el semiproletariado tuviera un potencial agro-ecológico relativamente bajo y un acceso limitado a la infraestructura de irrigación. La clase trabajadora urbana fue fragmentada durante el inicio de la reforma agraria, con el propósito de construir viviendas para los sin techo y otros que también buscaban conseguir este nuevo título de propiedad a través de las ocupaciones

urbanas; se les ofreció, a más de 10 mil familias, pequeñas parcelas (de entre 3 y 20 hectáreas) en la zona periurbana. Incluso, al concluir la redistribución por vía rápida y marchitarse el movimiento de ocupaciones bajo la dirección –con un único objetivo– de la asociación de veteranos de guerra, sólo quedaron unas pocas estructuras políticas organizadas entre los campesinos para poder ejercer influencia sobre la fase posredistributiva de la reforma agraria.

Podríamos concluir que la estrategia de buscar la reforma agraria a través del Estado y del partido gobernante no llegó lo suficientemente lejos *dentro* del partido gobernante y del Estado como para salvaguardar el carácter campesino-trabajador del movimiento, o como para preparar orgánicamente al semiproletariado contra la embestida de la burguesía negra, especialmente en la fase posterior a la vía rápida. A pesar de ello, también debemos admitir que el movimiento de ocupación logró la expropiación forzada del 90% de la tierra de agricultura comercial, aumentando significativamente la estructura del mercado doméstico, deshaciendo la estructura racializada de la lucha de clases y sentando las bases fundamentales para la próxima fase de la revolución democrática nacional.

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL EN UNA ENCRUCIJADA

El debate académico sobre la reforma agraria fracasó en identificar la dinámica de clases del proceso, señalando, en cambio, dos campos que se enfrentaban, los “posnacionalistas/cívicos” y los “nativistas”, ambos integrados por liberales y marxistas autoconfesos, y todos reproduciendo las categorías de la ciencia social burguesa. Mientras el primer campo procedió a denunciar la reforma como un mero “asalto al Estado”, sin ningún tipo de análisis específico del Estado neocolonial, de la sociedad civil o del movimiento de ocupación de tierras y de su nacionalismo (Hammar, Rafttopoulos y Jensen, 2003; Bond y Manyanya, 2002), el segundo defendió la reforma pero opacando las luchas de clase en el movimiento de liberación y celebrando la vía rápida como si fuera la culminación del “fortalecimiento negro”, en línea con las prioridades de acumulación de los grupos de presión nativistas.

Ninguna de estas dos posiciones podía ser realmente útil a la fase siguiente de la revolución democrática nacional. Ésta permanece en una coyuntura crucial y requiere un análisis crítico continuo. El resultado inmediato de la reforma es claro y urgente, está marcado por la pobreza cada vez mayor y la incapacidad de restablecer el abastecimiento de alimentos a la población. Por un lado, el imperialismo sigue ejerciendo su poder financiero en forma deliberada para aislar a Zimbabwe y sofocar el proceso de la reforma agraria, de modo que la inflación de la moneda es del 500%, se impide severamente la recuperación de la

RECUPERANDO LA TIERRA

producción agrícola –sumado a dos años de sequía regional– y se relega a la población urbana y rural a un estado de “ayuda humanitaria”. Por su lado, el Estado todavía no consigue divisar un plan coherente de reconstrucción y desarrollo, dado que no puede persuadir a los capitales privados de ingresar en un plan nacional de acumulación interna. Esta situación se demora todavía más por la ausencia de unidad entre la clase trabajadora del campo y la ciudad (debilitada, por otra parte, por la caída de la producción de alimentos), y se compone de la continua represión a la sociedad civil y del dominio emergente de la burguesía negra en el proceso de dictado de políticas públicas contra los intereses de los campesinos y trabajadores. El peligro consiste en volver a caer en un proceso de compra sistemática [*re-compradorization* en el original] y de recolonización bajo la dictadura de la burguesía y en no conseguir, finalmente, desarrollar la potencialidad de la nueva estructura agraria.

LA NUEVA ESTRUCTURA AGRARIA

No es posible realizar aquí un análisis exhaustivo de la nueva estructura agraria (ver Moyo, más adelante). A continuación brindamos una visión global condensada de la misma. Nuestra información proviene del informe del Comité Presidencial de Revisión de la Tierra (PLRC) presentado en julio de 2003. El presidente designó este comité en respuesta a la presión constante que ejerció el partido gobernante para volver a debatir el tema e incluir, además, la cuestión del estatus de los trabajadores rurales y de la apropiación indebida de tierras por parte de las elites. La tabla 1 contiene las cifras de la redistribución y de la adquisición de tierras a través de la reforma de vía rápida, y está organizada según los regímenes de tenencia de la tierra en Zimbabwe. La tabla 2 combina esos números con cifras que hacen referencia a las haciendas preexistentes o restantes para dar una imagen holística de la estructura agraria hoy, y se reorganiza para captar, en cuanto sea posible, la estructura de *clases* emergente que no se alcanzaría a comprender *per se* con el tamaño y el tipo de tenencia de los cultivos (ver tabla 2 en página 212).

El fenómeno de la recampesinización ha sido dominante durante la reforma agraria de vía rápida: los nuevos establecimientos productores de pequeñas mercancías eran en total el 93,7% de los nuevos establecimientos agrícolas, es decir, mucho más del 40,7% de la tierra adquirida; casi todos (97%) tomaron sus lotes. La mayoría de los beneficiarios eran originarios de las áreas comunales. El proceso se combinó con un renovado “camino mercantil” de los profesionales urbanos, la pequeña burguesía y los burócratas, sumando unas 7 mil doscientas sesenta granjas pequeñas, medianas y grandes, sobre el 21% de la tierra adquirida, y con una tasa de continuidad menor (66%). Los habitantes de la ciudad, además, ingresaron en el modelo A1, de modo que estimamos que los beneficiarios

urbanos fueron aproximadamente el 20% del total. El proceso de reforma achicó el tamaño de los terrenos y retuvo (en vez de expropiar completamente) 1.332 granjas comerciales blancas a gran escala. Notamos, también, que para julio de 2003, una gran cantidad de suelos (26,9%) no se había asignado y permanece aún sujeta al proceso político.

Un análisis más profundo de las cifras (ver Moyo, más adelante) muestra que los veteranos de guerra recibieron menos tierras que las originalmente destinadas a ellos y que los más perjudicados fueron las mujeres y los trabajadores rurales. Los veteranos recibieron menos del 20% de lo dispuesto por el gobierno en un principio, luego del listado inicial de granjas en 1997. Estimamos que un máximo de 25 mil veteranos de guerra, ex detenidos y *mujibhas* (colaboradores jóvenes en la lucha de liberación) recibieron el 10% del total de las tierras, la mayoría con tenencia A1 y con un promedio nacional de menos de 50 hectáreas por veterano de guerra. A su vez, las mujeres recibieron sus propios títulos a un promedio nacional menor al 16%, bajo el equivocado presupuesto de que las cabezas de hogar son frecuentemente hombres y las mujeres con necesidades de tierra están casadas o tienen acceso a ella a través de distintos vínculos familiares.

Tabla 1
Reforma de vía rápida: patrón de localización de tierras, 2000-2003

Tenencia de tierra	Colonos (familias agrícolas)		Área destinada al cultivo		Porcentaje de tierras tomadas (%)
	(No.)	(% total)	(Ha)	(% total)	
A1 (campesino)	127.192	93,7	4.231.080	40,7	97
A2 (capitalista)	7.260	5,3	2.198.814	21,1	66
LSCF restante	1.332	1,0	1.175.607	11,3	
Total de tierras distribuidas (hasta julio de 2003)			7.605.501	73,1	
Tierras no distribuidas (hasta julio de 2003)			2.800.000	26,9	
Total	135.784	100,0	10.405.501	100,0	

Nota: el tipo de tenencia A1 consiste en el derecho de uso de una parcela familiar, más tierra común para pastoreo; las parcelas familiares son heredables pero no comercializables. El tipo de tenencia A2 consiste en un título de arrendamiento con opción a compra. La tenencia LSCF (*Agricultura Comercial de Gran Escala*, según su sigla en inglés) consiste en un título de dominio individual.

Fuente: Calculado por el Comité Presidencial de Revisión de la Tierra (del inglés PLRC), 2003.

RECUPERANDO LA TIERRA

Tabla 2
Estructura de la clase agraria emergente

Clase	Tenencia de tierra	Casa/granja		Zona de cultivo		
		(No.)	(% total)	(Ha)	(% total)	(Prom. ha)
Proletariado en transición (empleados, ocasionales, desempleados)	Residentes de granjas; reubicados en comunas; desamparados	(350.000)	s/d	s/d	s/d	s/d
Campesinado (semi-proletariado, pequeño capitalista)	Comunas y A1	1.300.000	98,3	20.631.080	66,6	13,0
Pequeños/medianos capitalistas	Antiguos SSCF	8.000	0,6	1.238.700	4,0	155,0
	Nuevos A2	5.760	0,4	1.798.814	5,8	312,0
	Subtotal	13.760	1,0	3.037.514	9,8	
Grandes capitalistas	Grandes A2	1.500	0,1	400.000	1,3	267,0
	Negros LSCF	1.440	0,1	938.723	3,0	651,9
	Blancos LSCF	1.332	0,1	1.175.607	3,8	882,6
	Subtotal	4.272	0,3	2.514.330	8,1	
Capitalistas corporativos	Corporaciones	743	0,06	1.365.173	4,4	1.837,4
	Paraestatales	153	0,01	572.786	1,8	3.743,7
	Eclesiásticas	64	0,005	41.902	0,1	654,7
Tierras en transición	No distribuidas			2.800.000	9,0	
	Total	1.318.992	100,0	30.962.785	100,0	

Nota: Campesinos: tamaño de las tierras comprendido entre 1 y 30 ha., dependiendo de la región natural, con un espacio de tierra arable de entre 0,2 y 5 ha. más tierra común para pastoreo. Las tierras "Comunal" y A1 son del mismo tipo de tenencia; la primera refiere a tierras preexistentes, la segunda a tierras reestablecidas. Pequeños y medianos capitalistas: comprende "antiguos" granjeros del período colonial y los "nuevos" agricultores negros, incluyendo a aquellos distribuidos en las "granjas comerciales de pequeñas escala" (SSCF por su sigla en inglés) luego de la independencia y los beneficiarios de la reforma de vía rápida. Las granjas de "pequeños capitalistas" oscilan entre las 30 y las 100 ha., también dependiendo de la región natural. Grandes capitalistas: granjas de entre 150 y 400 ha. en NR I/II a 1.500 ha. en NR IV. Granjas corporativas: comprenden entre 1.000 y 1.500 ha., pero pocas se encuentran cerca del número mínimo de hectáreas.

Fuente: Calculado por el Comité Presidencial de Revisión de la Tierra (del inglés PLRC), 2003.

El caso de los trabajadores rurales ha presentado dificultades analíticas y empíricas debido a su "identidad" dual como trabajadores migrantes (nacionales y extranjeros) y como granjeros en las áreas comunales. Antes de la vía rápida, el sector de la agricultura comercial a gran escala (LSCF, por su sigla en inglés) contrataba a 350 mil trabajadores, de los cuales el 75% era de origen comunal. Si sumáramos las cifras oficiales de la vía rápida de los "trabajadores rurales" declarados y las estimaciones de los trabajadores solicitando terrenos como "campesinos sin tierra" por vía de las áreas comunales, es probable que fueran

el 5% (o el 8,75%) del total de los beneficiarios. Esto también significa que, como lo demuestran estudios recientes (Magaramombe, 2003; Chambati y Moyo, 2003; Sachikonye, 2003), un gran número de trabajadores rurales fue dejado de lado. De los 350 mil originales, la mitad eran trabajadores ocasionales y de tiempo medio (en su mayoría mujeres), y la otra mitad trabajadores permanentes (principalmente hombres). De estos últimos, el 50% (85 mil) eran empleados mayormente en las propiedades agro-industriales (especializadas en café, azúcar, té y plantaciones forestales) que no habían sido expropiadas, mientras que la otra mitad generalmente perdía su empleo y algunos trabajaban para los nuevos granjeros. Aproximadamente 80 mil de los trabajadores de medio tiempo y ocasionales continuaron trabajando en las granjas restantes del LSCF. La estimación general es que se dejó completamente de lado a 90 mil trabajadores rurales, siendo las mujeres las más afectadas. Estos trabajadores permanecieron en sus lugares de residencia en los cultivos, fueron reubicados en las áreas comunales o formaron nuevos “asentamientos informales” bajo condiciones desesperantes. Como consecuencia, las condiciones de trabajo en las nuevas plantaciones se deterioraron, y el trabajo ocasional y a destajo se incrementó.

Los castigos financieros que se impusieron desde el exterior a la economía de Zimbabwe, sumados a la incoherencia de la política interna y a la represión, continuarían agravando las condiciones de vida y de trabajo del proletariado y del semiproletariado rural y urbano. La persistente falta de tierra, el desempleo, el empleo casual, las malas condiciones de trabajo, los salarios bajos, los paupérrimos ingresos de los campesinos y la escasez de alimentos seguirían ejerciendo presión sobre los temas políticos y económicos del futuro a corto plazo. Mientras tanto, el nuevo campesinado de los terrenos A1 mantenía su estrategia semiproletaria dual de ingresos a través de la pequeña producción de productos básicos y del trabajo asalariado, en especial a medida que se aceleraban los procesos de diferenciación.

En la tabla 2 intentamos estimar la estructura de clases agraria emergente. Ésta es por naturaleza una tarea imprecisa y más si se tiene en cuenta que no hay nuevos datos censales y encuestas de hogares. Pero la cuestión sigue siendo esencial y su objetivo es capturar las capacidades (y las vulnerabilidades) diferenciales de los capitalistas en el proceso de acumulación. El criterio básico es el tamaño de los terrenos, que después se ajusta al tipo de tenencia, al potencial agro-ecológico y a la capacidad técnica. Los tipos de tenencia son particularmente importantes a la hora de comprender las desventajas de la tenencia comunal y A1 en la movilización de recursos. La agroecología varía en Zimbabwe de acuerdo con cinco Regiones Naturales (NR I-V), que van

RECUPERANDO LA TIERRA

desde las tierras más fértiles de menos hectáreas por explotación y de cultivo intensivo, hasta las menos fértiles de las granjas más grandes, de cultivo extensivo de grano fino y con manejo de los animales de cría/fauna. El nivel y el tipo de tecnología difieren, asimismo, de acuerdo con cada región.

La categoría “campesino” hace referencia a la pequeña producción de productos básicos en los asentamientos comunales y A1, que suman ahora el 98,9% del total de los cultivos, el 66,6% del total de la tierra. Existe una diferenciación de clase dentro de esta categoría, no tenida en cuenta aquí, generada por la variación agroecológica *inter alia*, los ingresos ajenos a la granja y el poder político local. Más allá de las condiciones económicas positivas o negativas, no se espera que esta diferenciación vaya a desaparecer mientras las operaciones del mercado informal de tierras continúen funcionando bajo la égida de la autoridad tradicional. Es notable que la institución de la jefatura no se haya visto amenazada en el proceso de movilización por la reforma agraria.

Aunque los “pequeños capitalistas” constituyeron históricamente menos del 10% del campesinado en las áreas comunales y emplean mano de obra no familiar de otros campesinos y a los sin tierra que quedaron allí, no los hemos clasificado dentro de la categoría debido a falta de datos. Sólo podemos señalar que es probable que sean muy importantes políticamente, puesto que posiblemente vuelvan a dominar al Gremio de Granjeros de Zimbabwe, junto con los pequeños capitalistas de la tierra A2. Al haber mucha superposición entre las regiones naturales, hemos fusionado tentativamente la categoría de “pequeños capitalistas” con la de “capitalistas medianos”. Por lo general, el tamaño de los pequeños capitalistas es de entre 30 y 100 hectáreas, y el de los capitalistas medianos de entre 40 y 150 hectáreas, y emplean mucha más mano de obra que la que les puede brindar su familia. Es importante señalar que es posible que estas dos categorías se reconfiguren continuamente, puesto que las dos compiten. Los capitalistas medianos tienen más ventajas sobre las licitaciones de tierras y en el proceso de acumulación, en virtud de su mejor acceso a otros medios de producción (el crédito y la tecnología), a los contactos e información y al proceso de confección de políticas públicas.

Las granjas “capitalistas grandes” poseen entre 150 y 1.500 hectáreas, según la región natural, y disfrutan de un mejor acceso a los recursos económicos y políticos. En la actualidad, los capitalistas medianos y grandes tienen una alianza política bajo la bandera de la “nativización” para configurar un esquema de políticas agrícolas a su medida y apropiarse de la tierra restante. Su visión consiste en un sector agrícola diferenciado, en el que los capitalistas medianos y grandes se especialicen en la elaboración de productos básicos de alto valor para exportación

(tabaco y carne de ganado híbrido), y los campesinos produzcan granos para el consumo interno. De este modo, las contradicciones entre los granjeros pequeños y los medianos y grandes y entre las orientaciones externas e internas se acentuarían, al pugnar por recursos públicos y privados (infraestructura, agua, crédito) y por instrumentos de política económica (tasas de interés, tipos de cambio). Por último, es importante señalar que entre los sectores económicos se está gestando un importante proceso de reorganización del capital, por medio del que la emergente burguesía agraria agrupa fuerzas, económicas y políticas, junto a la naciente burguesía nativa, en el transporte y en las ventas al por menor, y lo que es más importante, en las finanzas, que han visto nacer una docena de nuevas instituciones nativas. En conjunto, reconocen el valor de la producción agrícola y de la distribución para su propia reproducción.

Resulta importante observar que todos los granjeros capitalistas pagan salarios (ya sea por debajo o por encima del mínimo regulado) que están muy por debajo del umbral de la línea de pobreza actual (ver también Kanyenze, 2004). Esa mano de obra proviene de los trabajadores cercenados de la antigua LSCF, de los parientes desempleados de las unidades domésticas del área comunal y del número cada vez más alto de obreros urbanos sin trabajo.

La imagen que surge es la de un mercado interno significativamente extendido, que incluye a un campesinado y a una clase capitalista negra ampliados. Se necesitaría profundizar la investigación para examinar estos tres procesos interrelacionados: la reorganización agro-industrial y la consolidación de la clase capitalista negra; la diferenciación en el interior del campesinado, con las trayectorias de los campesinos ricos (pequeños capitalistas) y la de los campesinos pobres (semiproletarios); y el proceso de trabajo que refuerza los dos anteriores y que continuará caracterizándose por el dualismo funcional. Éste se consolidará aun más, en la medida en que más capital negro, con su reducida contraparte blanca, logre afianzar un patrón desarticulado de acumulación.

LOS NUEVOS DESAFÍOS

La mejor estrategia sería que el desarrollo nacional tuviera como prioridad la reconstrucción de la agricultura enfatizando el crecimiento del mercado interno. Es decir, con el propósito de la articulación social y sectorial (Amin, 1981). La carga de la agricultura es la más pesada de todas, puesto que incluye la producción para el consumo interno de alimentos (autosuficiencia y alimentación asegurada), la producción para el consumo industrial interno, y la producción para obtener ganancias en el intercambio con el mercado externo. El desarrollo industrial debería ser considerado un auxiliar para la modernización tecnológica de la agricultura y para la producción de bienes de consumo de masas y el

RECUPERANDO LA TIERRA

sector financiero debería estar subordinado a los requerimientos de inversión a largo plazo del desarrollo agro-industrial interno. Tal estrategia requeriría el control cuidadoso de las importaciones y la asignación de valor a la divisa, el repudio de la deuda, la desconcentración de los derechos mineros y la protección contra la institución de los derechos de propiedad de la tierra (que pueden promover la reconcentración de la misma); también resguardarse del capital agrario, que puede ir en contra de las necesidades de acumulación y de reproducción social de los granjeros pequeños y de los trabajadores rurales.

El destino de semejante estrategia, de todas maneras, estaría sujeto a la correlación de las fuerzas políticas entre el capital, el proletariado y el semiproletariado y entre el imperialismo y la autodeterminación nacional. En este sentido, la revolución democrática nacional se encuentra en un punto crítico. La tarea organizativa por realizar es la reconstitución de la clase trabajadora más allá de la división rural-urbano, independientemente del capital, del Estado y de la “civilidad” del sindicalismo internacional. El objetivo político sigue siendo lograr que el Estado se comprometa a hacer crecer el mercado interno, dejando de lado las aspiraciones de *comprador* [en español en el original] de la nueva burguesía agraria y de la ascendente clase media, que pugnan por el retorno al neoliberalismo y por las estrechas reformas democráticas liberales.

La reinstalación de las libertades políticas y civiles es fundamental para este proceso, pero también presenta el desafío de vencer las fuerzas civilizadoras (reaccionarias) que dejaría libres. La burguesía *compradora* se consolida a través de líneas políticas partidarias, y seguramente buscará sumar al Estado a su propia estrategia de acumulación y emplear tácticas represivas y de cooptación para dividir el semiproletariado con la segmentación rural-urbano y la corporización de la expresión política. Para esto será esencial la expansión de la autoridad tradicional a las áreas repobladas. Resistir las tendencias represivas del gobierno central y del gobierno local y defender un esquema redistributivo de asignación de los recursos nacionales debería ser la prioridad para avanzar en la revolución democrática nacional.

El proceso de trabajo emergente, cimentado en los sectores formal e informal, rural y urbano, es muy poco auspicioso. Se requiere un compromiso sistemático a largo plazo por parte de los sindicatos para liberarse de las alianzas en curso con el capital y para echar nuevas raíces en las áreas rurales y en las nuevas granjas, con el objetivo de enfrentarse a los empleadores nuevos y a la autoridad tradicional. A este respecto, el nuevo proceso de trabajo presentará espacios ideológicos a conquistar, como por ejemplo la reafirmación de un nuevo nacionalismo basado en la clase en contra del nacionalismo burgués racializado del grupo de la

“nativización” y en contra de la política democrática neoliberal. Al caer la hegemonía de la burguesía agraria blanca, los reclamos anticoloniales de la burguesía negra se atenuarán y se volverán improbables, en la medida en que la clase tiene cada vez más importancia (aunque, al mismo tiempo, el espectro del etnonacionalismo continuará siendo una amenaza). El desafío que se suma a la nueva organización de la clase obrera será crear un espacio proporcionado para las mujeres campesinas y para los trabajadores, que haga relevantes sus propias demandas específicas y que ayude a ascender a las mujeres a las posiciones de liderazgo en sus líneas. A pesar de que esta lucha parezca muy distante en la actualidad, es un requisito esencial para enfrentar las estrategias de la autoridad tradicional, de la burguesía y de la burguesía agraria.

En el frente internacional, la organización de la clase obrera debe enfrentarse con el eurocentrismo del sindicalismo tradicional y del movimiento antiglobalización. La cuestión agraria está lejos de resolverse en Zimbabwe, a pesar de su radical reforma agraria. La acumulación interna exige la articulación de una nueva visión desarrollista que no sólo conde- ne el neoliberalismo, sino que además formule, de manera clara, un esquema económico para la acumulación sustentable en la periferia y una estrategia política para su realización. Sólo entonces, el principio de la autodeterminación nacional comenzará a liberarse de su yugo imperial.

BIBLIOGRAFÍA

- Alexander, Jocelyn 1993 *The State, Agrarian Policy and Rural Politics in Zimbabwe: Case Studies of Insiza and Chimanimani Districts, 1940–1990*, tesis de doctorado (Oxford University).
- Alexander, Jocelyn y McGregor, JoAnn 2000 *Elections, Land and the Politics of Opposition in Matabeleland, Zimbabwe*, mimeo.
- Amin, Samir 1981 *The Future of Maoism*, traducción Norman Finkelstein (New York: Monthly Review Press).
- Arrighi, Giovanni 1973 “The Political Economy of Rhodesia” en Arrighi, Giovanni y Saul John S.(eds.) *Essays in the Political Economy of Africa* (New York: Monthly Review Press).
- Bond, Patrick 1998 *Uneven Zimbabwe: A Study of Finance, Development, and Underdevelopment* (Trenton, NJ. y Asmara: Africa World Press).
- Bond, Patrick, y Manyanya, Masimba 2002 *Zimbabwe's Plunge: Exhausted Nationalism, Neoliberalism and the Search for Social Justice* (Scottsville, London, y Harare: University of Natal Press/ Merlin Press/Weaver Press).
- Bratton, Michael 1987 “The Comrades and the Countryside: The Politics of Agricultural Policy in Zimbabwe” en *World Politics*, 39(2), pp 174-202.

RECUPERANDO LA TIERRA

- Bratton, Michael 1994 "Micro-Democracy? The Merger of Farmer Unions in Zimbabwe" en *African Studies Review*, 37(1), pp 9-37.
- Cabral, Amilcar 1979 *Unity and Struggle* (New York: Monthly Review Press).
- Chambati, W. y Moyo, Sam 2003 "Land Reform and the Political Economy of Agricultural Labour", (Harare: African Institute for Agrarian Studies) mimeo.
- Chimombe, Theresa 1986 "Foreign Capital" en Mandaza, Ibbo (ed.) *Zimbabwe: The Political Economy of Transition, 1980-1986* (Dakar: CODESRIA).
- Clarke, D.G. 1980 *Foreign Companies and International Investment in Zimbabwe* (London and Gwelo: Catholic Institute for International Relations and Mambo Press).
- Cliffe, Lionel 1988 "Zimbabwe's Agricultural "Success" and Food Security" en *Review of African Political Economy*, 43, pp 4-25.
- Fanon, Frantz 2001 (1961) *The Wretched of the Earth* (Harmondsworth: Penguin Books).
- Gowan, Peter 1998 *The Global Gamble* (London and New York: Verso).
- Government of Zimbabwe, Ministry of Lands and Agriculture (GoZ) 1999) *National Land Policy Framework Paper*, noviembre.
- Haggard, Stephen y Maxfield, Sylvia 1996 "The Political Economy of Financial Liberalization in the Developing World" en Keohane, Robert O. y Milner Helen (eds.) *Internationalization and Domestic Politics* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Hammar, Amanda, Raftopoulos, Brian y Jensen, Stig (eds.) 2003 *Zimbabwe's Unfinished Business: Rethinking Land, State and Nation in the Context of Crisis* (Harare: Weaver Press).
- Kanyenze, Godfrey 1996 *Labour Markets and Employment During ESAP*, mimeo.
- Kanyenze, Godfrey 2004 "Giving Voice to the Unprotected Workers in the Informal Economy in Africa: The Case of Zimbabwe" en *Restart: Our Path to Social Justice - The MDC's Economic Programme for Reconstruction Stabilisation Recovery and Transformation* (Harare: MDC).
- Magaramombe, G. 2003 *Resource Base and Farm Production: Farm Labour Relations, Use and Needs*, African Institute for Agrarian Studies (AIAS), (Harare) mimeo.
- Mamdani, Mahmood 1996 *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism* (Princeton, NJ: Princeton University Press).

- Mandaza, Ibbo 1986a “The Political Economy of Transition” en Mandaza, Ibbo (ed.) *Zimbabwe: The Political Economy of Transition, 1980–1986* (Dakar: CODESRIA).
- Mandaza, Ibbo 1986b “The State and Politics in a Post-White Settler Colonial Situation” en Mandaza, Ibbo (ed.) *Zimbabwe: The Political Economy of Transition, 1980–1986* (Dakar: CODESRIA).
- Marx, Karl 1975 “Critique of Hegel’s Doctrine of the State” en *Early Writings*, introduced by Lucio Colletti (Harmondsworth: Penguin).
- Matondi, Prosper y Moyo Sam 2003 “Experiences with Market Based Land Reform in Zimbabwe” en Barros, Flávia, Sauer, Sérgio y Schwartzman, Stephen *The Negative Impacts of World Bank Market Based Land Reform* (Brasília: Rede Brasil).
- Ministry of Local Government, Rural and Urban Development 1998 *Discussion Paper on Squatter Policy*, Memorandum, 15 de agosto, Ref: C/54/10, Ministry Archives (Harare).
- Mlambo, A.S. 2000 “Manufacturing in Zimbabwe, 1980–90” en Mlambo, A.S., Pangeti E.S. y Phimister, I. (eds.) *Zimbabwe: A History of Manufacturing, 1890–1995* (Harare: University of Zimbabwe Publications).
- Moyo, Sam 1995 *The Land Question in Zimbabwe* (Harare: SAPES Books).
- Moyo, Sam 1998 *ESAP, Land Policy, and Land Markets*, mimeo.
- Moyo, Sam 1999 *Land and Democracy in Zimbabwe*, Monograph Series (Harare: SAPES Books).
- Moyo, Sam 2000 *Land Reform under Structural Adjustment in Zimbabwe: Land Use Change in the Mashonaland Provinces* (Uppsala: Nordiska Africainstitutet).
- Moyo, Sam 2001a “The Land Occupation Movement and Democratisation in Zimbabwe: Contradictions of Neoliberalism” en *Millennium: Journal of International Studies*, 30(2), pp 311-30.
- Moyo, Sam 2001b *The Interaction of Market and Compulsory Land Acquisition Processes with Social Action in Zimbabwe’s Land Reform*, clase pública, Millennium Lecture Series, London School of Economics, 2 de mayo.
- Moyo, Sam 2003 “The Interaction of Market and Compulsory Land Acquisition Processes with Social Action in Zimbabwe’s Land Reform” en Mandaza, Iboo y Nabudere, Dani (eds.) *Pan-Africanism and Integration in Africa* (Harare: SAPES Books).
- Moyo, Sam (de próxima aparición) *Fast-Track Land and Agrarian Reform in Zimbabwe*.
- Palmer, Robin 1977 *Land and Racial Domination in Rhodesia* (London, Ibadan, Nairobi and Lusaka: Heinemann).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Phimister, Ian 1988 *An Economic and Social History of Zimbabwe, 1890–1948* (London and New York: Longman).
- Phimister, Ian 2000 “From Preference Towards Protection: Manufacturing in Southern Rhodesia, 1940–1965” en Mlambo, A.S., Pangeti E.S. y Phimister, I. (eds.) *Zimbabwe: A History of Manufacturing, 1890–1995* (Harare: University of Zimbabwe Publications).
- Presidential Land Review Committee Report (PLRC) 2003 *Report of the Presidential Land Review Committee under the Chairmanship of Dr Charles M.B. Utete* Vol. I y II: Main Report to His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, agosto 2003.
- Raftopoulos, Brian 1992 “Beyond the House of Hunger: Democratic Struggle in Zimbabwe”, I y II en *Review of African Political Economy*: 54, pp 59-74; 55: pp 57-66.
- Raftopoulos, Brian 1996 “Labour Internationalism and Problems of Autonomy and Democratisation in the Trade Union Movement in Southern Rhodesia”, mimeo.
- Raftopoulos, Brian y Yoshikuni, Tsuneo (eds.) 1999 *Sites of Struggle: Essays in Zimbabwe's Urban History* (Harare: Weaver Press).
- Sachikonye, Lloyd 1986 “State, Capital and Trade Unions” en Mandaza, Ibbo (ed.) *Zimbabwe: The Political Economy of Transition, 1980–1986* (Dakar: CODESRIA).
- Sachikonye, Lloyd 2003 *The Situation of Commercial Farmers after Land Reform in Zimbabwe*, informe preparado para la Farm Community Trust of Zimbabwe.
- Schmidt, Elizabeth 1990 “Negotiated Spaces and Contested Terrain: Men, Women, and the Law in Colonial Zimbabwe, 1890–1939” en *Journal of Southern African Studies*, 16(4), pp 622-48.
- Sibanda, Arnold 1988 “The Political Situation” en Stoneman, Colin (ed.) *Zimbabwe's Prospects: Issues of Race, Class, State and Capital in Southern Africa* (London: Macmillan).
- Skålnes, Tor 1995 *The Politics of Economic Reform in Zimbabwe* (London: Macmillan).
- Stoneman, Colin 1989 “The World Bank and the IMF in Zimbabwe” en Campbell, Bonnie K. y Loxley, John (eds.) *Structural Adjustment in Africa* (London: Macmillan).
- Stoneman, Colin y Cliffe, Lionel 1989 *Zimbabwe: Politics, Economics and Society* (London and New York: Pinter).
- UNDP, Poverty Reduction Forum (PRF) y IDS 1998, *Zimbabwe Human Development Report 1998* (Harare: UNDP, PRF and IDS).

- UNDP/UNCTAD 2000 *Zimbabwe: Globalization, Liberalization and Sustainable Human Development*, Country Assessment Report, first draft, mimeo.
- Wood, Brian 1988 "Trade-Union Organisation and the Working Class" en Stoneman, Colin (ed.) *Zimbabwe's Prospects: Issues of Race, Class, State and Capital in Southern Africa* (London: Macmillan).
- Van Onselen, Charles 1976 *Chibaro: African Mine Labour in Southern Rhodesia, 1900–1933* (Johannesburg: Ravan Press).
- Yeros, Paris 2002a "Zimbabwe and the Dilemmas of the Left" en *Historical Materialism*, 10(2), pp 3-15.
- Yeros, Paris 2002b "The Political Economy of Civilisation: Peasant-workers in Zimbabwe and the Neo-colonial World", tesis de doctorado , University of London.
- ZCTU 1996 *Beyond ESAP: Framework for a Long-term Development Strategy in Zimbabwe Beyond the Economic Structural Adjustment Programme* (Harare: ZCTU).

FILOMENO V. AGUILAR, JR.*

**LUCHAS POR LAS TIERRAS EN ASIA:
PERSPECTIVA DE CONTEXTOS
SELECCIONADOS**

ALGUNOS DE LOS EPISODIOS MÁS DRAMÁTICOS de la redistribución de tierras en el siglo XX fueron presenciados en Asia. Sin embargo, grandes disparidades de acceso a la tierra continúan saturando su expansión. Las luchas por la propiedad, el control y la posesión de tierras agrarias o rurales continúan realizándose en muchos lugares, pero últimamente no han recibido atención regional, mucho menos a nivel global. El fin de la Guerra Fría, junto con la expansión del naciente industrialismo en muchos lugares, ha borrado el intenso contexto ideológico de movimientos anteriores para conseguir tierras para los desposeídos. A pesar de esta situación, en medio de la globalización y la influencia de las estrategias neoliberales, las luchas por las tierras persisten en variados trasfondos; algunos de ellos son específicos del tardío siglo XX, como el colapso de la agricultura colectivizada, mientras otros son extensiones lógicas por expandir y profundizar programas previos de reforma agraria, iniciados bajo la tutela del desarrollismo estatal (ver Bernstein, 2002).

* Filomeno Aguilar, Jr. es profesor en el Departamento de Historia y Director del Instituto de Cultura Filipina, Ateneo de la Universidad de Manila. Es el editor de *Philippine Studies*. Trabaja sobre las construcciones de nacionalidades, migraciones globales, cultura política y relaciones de clase sociales. Es el autor de *Clash of Spirits: The History of Power and Sugar Planter Hegemony on a Visayan Island* (1998) [*Choque de espíritus: la historia del poder y la hegemonía de un hacendado azucarero en una isla Visayan*].

RECUPERANDO LA TIERRA

Dada la diversidad y la extensión geográfica del área en discusión y mi limitada especialización, este trabajo no aspira a brindar una visión totalizadora. Sólo abarca ciertas clases de luchas contemporáneas por la tierra, y este enfoque intenta elaborar una cuadrícula clasificatoria básica. Para propósitos heurísticos, estas luchas pueden ser entendidas de acuerdo con los siguientes factores: como movimientos organizados con líderes y emprendedores políticos, o como acciones espontáneas; pueden ejecutarse tanto a través de mecanismos estatales, o fuera de ellos, como a través del mercado de tierras, formal o informal; poseer una orientación contra entidades hegemónicas o poco hegemónicas, como el Estado y las clases, actores o grupos sociales. Un caso de lucha por la tierra puede ser caracterizado por una combinación de cualquiera de estos factores. El enfoque es consecuente con lo que postula la introducción de este libro: que el compromiso político de los campesinos es sumamente variado en cualquier momento y a través del tiempo. En todos los casos, sin embargo, el énfasis reside en la acción directa sobre la tierra por medio de iniciativas que, a pesar de sus múltiples y diversos impulsos, así como de sus ramificaciones, provienen en su mayoría de la población rural. Se trata de luchas caracterizadas por el objetivo de adquirir una porción de tierra cultivable y, donde ésta ha sido denegada, del derecho a controlar la producción y su venta.

OCUPACIONES DE TIERRAS: DESPLAZÁNDOSE HACIA LAS TIERRAS ALTAS

En la misma línea que James Scott (1985) ha llamado la atención sobre formas de resistencia cotidianas, advirtiéndonos sobre la existencia de eventos que difieren de las acciones de protesta organizadas y de las revoluciones, el primer lugar para buscar luchas de campesinos por la tierra y su ocupación es en las acciones diarias, espontáneas, de los campesinos que buscan reclamar tierras en áreas que son consideradas legalmente como zonas boscosas o subsumidas por el Estado como de su dominio exclusivo. Los reclamos efectivos de zonas boscosas mayormente realizados por individuos o pequeños grupos son llevados a cabo y reafirmados probablemente todos los días, aunque tales acciones espontáneas son del tipo de las que evaden la vigilancia oficial. Los intereses capitalistas corporativos obtienen acceso a grandes extensiones de tierras públicas, pero tales operaciones son generalmente legitimadas con medidas legales, tanto a través de permisos mineros o concesiones madereras como de un discurso científico de conservación de dudosos resultados (Cooke, 1999). La masiva, calma e inesperada ocupación de terrenos en tierras altas por los pobres rurales marginalizados que, como agregado, ha producido un floreciente sector, se produce fuera del Estado y se torna, así, una forma de desafío al poder estatal. La expansión de una gran población, principalmente en tierras altas, ha sido culpada de haber

generado una profunda deforestación debido a las prácticas alternantes de cultivos, lo cual es una afirmación altamente discutible. Pero en razón de que los Estados son incapaces de sacar el creciente número de ocupantes de las tierras altas, se han visto obligados, desde 1980, a aceptar su presencia y a recurrir a la “regulación” de sus prácticas agrícolas. Debido al vínculo causal entre la tenencia segura y la conservación de los recursos naturales, los Estados han empezado, incluso, a crear varias formas de instrumentos legales que reconocen los derechos de permanencia de los cultivadores de tierras altas. De ahí la popularidad de la llamada gestión comunitaria de zonas boscosas (Poffenberger, 1999).

Aunque no existen estadísticas precisas, los números sugieren que la ocupación masiva de tierras ha tenido lugar en las tierras altas. Por ejemplo, en las Filipinas, el total de la población en zonas boscosas (definidas como tierras con declives mayores al 18%, sin tener en cuenta, en realidad, la extensión del bosque) fue estimada en alrededor de 14,4 millones de personas en 1980, cifra que aumentó a 17,8 millones en 1988; durante el mismo período, la población migrante en áreas de tierra alta fue estimada en un aumento de 1,9 millones en 1980 a 2,6 millones en 1988 (Cruz-Zosa-Feranil y Goce, 1988: 18-19). Estas estimaciones han sido actualizadas y el total de población de tierras altas ha sido ubicado, aproximadamente, en 24 millones en 2000, casi el 31% del total de la población del país (Beasca y Borrero, 2003). Como subrayan Beasca y Borrero (2003: 1), el rango de crecimiento anual de la población de las tierras altas en las Filipinas entre 1995 y 2000 fue de un 2,5%, lo que sobrepasó el rango nacional de incremento de población en un 2,3% durante el mismo período. En el norte de Tailandia, la población de las zonas montañosas fue establecida en 272.568 en 1972; para el período 1985-1987 el número había aumentado a 495.353, y para 1991 la cifra había saltado a 749.353 (Kanok, 1996). Mientras que el rango de crecimiento anual de la población de toda Tailandia fue de alrededor del 1,1%, la población de la zona montañosa en la región norte creció en un 6% anual desde 1986 hasta 1991 (Kanok, 1996). Para 1995, el total de la población de tierras altas de Tailandia fue establecido en 10 millones; el estimado para Vietnam era de 25 millones, y de 60 millones para Indonesia (Poffenberger, 1999: 36).

Evidentemente, el gran incremento de la población de las zonas altas del sudeste de Asia no puede considerarse sólo en relación con el aumento “natural” a causa de patrones existentes de fertilidad. En todo caso, los incrementos demográficos anuales, más altos que el promedio, se elevaron por la creciente cantidad de campesinos que se han desplazado hacia arriba en busca de tierra cultivable para la subsistencia básica y el comercio. En algunas áreas no es difícil imaginar una competencia intensificada entre quienes reclaman las tierras. Un ejemplo de esta cuestión son las regiones centrales y el oeste de las Filipinas, donde se han registrado las densidades

RECUPERANDO LA TIERRA

poblacionales más altas del país –dos o tres veces mayores que la densidad de población nacional de 1,9 personas por hectárea registrada para los bosques–, como sugiere un estudio del Banco Mundial (World Bank, 1989). En esas circunstancias, incluso la cantidad de tierras cultivables y “abiertas” a la ocupación ha ido disminuyendo, y los campesinos que reclaman tierras deben competir cada vez más entre ellos por cualquier terreno que puedan encontrar en un medio ambiente tan frágil.

Hay varias razones para la migración ascendente de campesinos sin tierra o casi sin tierra, cuyo número se agrega al de las comunidades nativas con una larga trayectoria de asentamientos en regiones altas. Para quienes se trasladan de las tierras bajas hacia las tierras altas, la ocupación y adquisición de un pedazo de tierra dentro de la propiedad estatal puede ser vista como una defensa contra la miseria, contra la pérdida de tierras de cultivo o ante el colapso del campesinado rural o del sistema de producción de pequeñas mercancías en las tierras bajas. Dada la creciente densidad de población y congestión en las tierras bajas, aquellos campesinos que no pueden subsistir a través del trabajo rural asalariado o migrar hacia los centros urbanos, donde el trabajo casual probablemente será su única opción, recurren a la estrategia de reclamar en la zona boscosa. La lucha por adquirir un trozo de terreno en las tierras altas y mantener un modo de existencia campesina de producción de pequeñas mercancías puede verse como una decisión para prevenir la semi o la completa proletarización. Y el éxito de los ocupantes de tierras se debe a la incapacidad, y quizá también a la falta de voluntad, del Estado para prevenir la intrusión o el cercamiento completo de los bosques y las zonas altas. A pesar de la ausencia de un estimado de población de las tierras altas en las zonas boscosas dentro de Asia, lo que es evidente es que, a través de la migración espontánea y la ocupación de tierras estatales, innumerables grupos familiares han resistido la desagrarización.

La estrategia de desplazarse hacia el interior está muy lejos de ser novedosa. La retirada hacia un área interior remota, fuera del alcance del Estado, se produjo repetidamente durante el período colonial, aunque las razones previas podrían diferir de la coyuntura actual. Con todo, aquellos movimientos pueden tener líneas en común con los patrones contemporáneos. En ese entonces, la migración hacia las áreas interiores remotas, alejadas del alcance del Estado colonial, constituyó una estrategia para evitar la sumisión a éste tanto como al capital imperial extranjero (Aguilar, 1998; Peluso, 1992).

Desde el punto de vista del actor campesino, estas ocupaciones de tierras pueden representar lo que James Scott (1976) llama la economía moral del campesino, junto con el hecho de que los reclamos del Estado pueden percibirse como ilegítimos, o con el concepto nativo del derecho al usufructo de un espacio abierto que no pertenece sino a la naturaleza. Utilizar las

tierras del Estado puede concebirse como defendible debido al imperativo moral de la ética de subsistencia. Sin embargo, estos actos ocurren fuera de la estructura formal de la legalidad y pueden ser interpretados como una oposición al orden establecido por las clases hegemónicas. Desde 1980, no obstante, fuerzas populistas y conservacionistas –que se entrecruzan con movimientos internacionales de pueblos nativos– han impulsado cambios en las leyes de las zonas boscosas, lo cual ha generado el espacio para alguna forma de reconocimiento legal y oficial de los derechos de los demandantes de tierras altas. En las Filipinas están disponibles certificados de tenencia de tierra comunal para las comunidades nativas que sean capaces de formular un uso de la tierra y un plan de desarrollo de recursos naturales (que sugieren el rol crítico de las ONG en su asistencia a estas comunidades para embarcarse en un ejercicio de planeamiento formal). También han sido otorgados certificados de mayordomía a largo plazo a ocupantes individuales. De hecho, el Estado “ha sido reintegrado” en las tierras altas, donde previamente su rol no consistía más que en una ausencia pronunciada. Las nuevas políticas de las tierras altas hacen del Estado un árbitro final de la tenencia y posesión e introducen, inadvertidamente, las bases para el surgimiento de un mercado de terrenos en el lugar.

DISPUTAS POR LA TIERRA Y EL COLAPSO DE LA AGRICULTURA COLECTIVA

Las estrategias diarias empleadas por los campesinos en la adquisición de tierras mediante la colonización espontánea de zonas boscosas han sido evidentes en las discretas disputas por la tierra; como resultado, produjeron la culminación oficial de la agricultura colectiva en China y en Vietnam. Aunque el colapso de la colectivización no es usualmente enmarcado como una disputa sobre la tierra, y a pesar de las especificidades de los casos chino y vietnamita, los análisis históricos de eventos que llevan al fracaso de la agricultura socialista sugieren que el control sobre la tierra, el trabajo y la distribución del producto fue una preocupación central de los productores campesinos. Las disputas para adquirir terrenos y para cultivar parcelas privadas –con rendimientos que exceden aquellos de la agricultura colectiva– acontecen fuera del marco estatal y, aunque ampliamente descoordinadas, las acciones constituyen, efectivamente, un desafío a la hegemonía del Estado. En el caso de China, el desenredo de la agricultura colectiva coincidió con el período de crecimiento y la predisposición de la máxima dirigencia; en el caso de Vietnam, la situación viró hacia el escenario opuesto.

A mediados de la década del cincuenta, el programa de colectivización chino redujo la autonomía de los aldeanos y aumentó el control estatal sobre los mercados y la producción excedente, aunque en este período inicial los grupos familiares fueron habilitados para trabajar en

RECUPERANDO LA TIERRA

parcelas pequeñas de tierra que destacaron, claramente, el esfuerzo individual y sus contribuciones (Kung y Putterman, 1997). El programa de colectivización fue llevado al extremo en el Gran Paso Adelante entre 1958 y 1960, y su resultado fue una hambruna masiva (Kerkvliet y Selden, 1998: 41). A aquellos años desastrosos les siguieron campañas estatales exitosas de desarrollo de infraestructura rural y el lanzamiento de la revolución verde. Hacia fines de la década del setenta, la producción china de granos *per cápita* se había elevado a un nivel que les permitía a los campesinos asegurar su subsistencia e, incluso, el excedente extraído del campo abasteció el programa de industrialización chino. Pero debido a la gran pobreza, los ingresos estancados y el desempleo crónico: “Sin jactarse, a fines de los setenta, y a veces apoyados por funcionarios locales y regionales, los aldeanos presionaron para expandir el alcance de lo doméstico y el mercado” (Kerkvliet y Selden, 1998: 48). La discreta presión desde abajo coincidió con la nueva filosofía que emergió con el surgimiento de Deng Xiaoping luego de la muerte de Mao, en 1976. Durante los próximos cuatro años, entre 1978 y 1982, los derechos de cultivación de la tierra fueron devueltos a los grupos familiares campesinos.

La propiedad privada de la tierra, sin embargo, no ha sido restablecida oficialmente en China. La propiedad está establecida en las aldeas, cuyos funcionarios asignan derechos para el uso de la tierra a grupos familiares específicos por períodos extendidos. Éstos están sujetos a ajustes periódicos, a fin de dar cuenta de los cambios de tamaño en el grupo familiar (Kerkvliet y Selden, 1998: 50-51). A pesar de todo ello, a partir de los noventa el mercado de tierras de campesinos, especialmente en áreas costeras y suburbanas, ha comenzado a exhibir tendencias similares a las que pueden ser encontradas en otros trasfondos periféricos capitalistas. Los aldeanos con ingresos fuera de la granja, y especialmente aquellos con trabajos industriales lucrativos, se han convertido en una especie de clase terrateniente ausente. Subarriendan sus derechos sobre la tierra o contratan obreros, usualmente trabajadores golondrina, para los cultivos. En algunos casos, los cultivadores empleados son contratados para hacerlo en representación de todo el pueblo. Se dice que aproximadamente un cuarto de los equipos de producción anteriores retuvo o restableció las actividades de cultivo colectivas. En muchos otros casos, sin embargo, la tierra es labrada en forma privada (Kerkvliet y Selden, 1998: 52). Simultáneamente, el Estado chino continúa imponiendo cuotas para cultivos esenciales que son comprados por debajo de los precios de mercado y controla el suministro y el precio de los insumos agrícolas críticos. La gran variedad de arreglos para el uso de la tierra genera una situación extremadamente compleja en la cual el propietario y el obrero pueden relacionarse de varias formas, aun contradictorias; el propio Estado, incluso, actúa como explotador económico y como protector de la población campesina.

En Vietnam, la colectivización fue introducida en el norte durante los tardíos años cincuenta, pero la cauta estrategia estatal no difundió la colectivización sino hasta fines de la década del sesenta. Luego de la guerra, la colectivización se aceleró, pero la agricultura no obtuvo ninguna ganancia significativa. La tenencia colectiva de la tierra no condujo hacia el aumento de la productividad, situación que frustró los objetivos estatales. Los campesinos concentraron sus energías en el cultivo de sus parcelas privadas, lo que inicialmente comprendió el 5% de la tierra cultivable, y cuyo producto podía ser enteramente conservado por los campesinos. Las parcelas privadas produjeron arroz y otros frutos que fueron, al menos, el doble que los de las tierras colectivizadas. Los campesinos priorizaron el trabajo en sus diminutas parcelas privadas frente al estancamiento o deterioro de sus condiciones de vida, frente a la parte inequitativa recibida por funcionarios y cuadros no cultivadores del partido comunista, la gran burocracia que pretendía regular y regir sus vidas y granjas, y la impersonalidad de los grandes sistemas cooperativos (Kerkvliet, 1995: 402-404). Los campesinos mostraban poco entusiasmo por trabajar en tierras colectivizadas, y recurrieron al incumplimiento de metas y, en ocasiones, al abandono de la tierra.

Aunque oficialmente fuera de la ley, el cultivo familiar comenzó a surgir en el norte y el centro de Vietnam a mediados de los sesenta y hacia fines de los setenta, en la forma llamada “contratos furtivos”, y se ocupaba ineficazmente de arreglos de producción sin llamar la atención de la experimentación más bien dramática que se llevaba a cabo en algunas comunas (Kerkvliet, 1995: 406-407). En uno de los más grandes experimentos en Hai Phong, en un área de alrededor de 90 mil hectáreas, varias etapas de la producción de arroz fueron entregadas a familias individuales a las que se les permitió conservar el excedente que superara la cuota requerida. A pesar de que funcionarios de alto rango detuvieron experimentos análogos en otros lugares, el experimento de Hai Phong produjo resultados muy impresionantes, y en 1980 se convirtió en el modelo oficial para la región. Además, durante los setenta, el Estado vietnamita comenzó a relajar su control monopólico sobre el mercado, con cuotas que fueron discutidas, antes que impuestas, en las cooperativas.

En medio de la escasez urbana y de una economía que empeoraba, el reconocimiento de la producción doméstica individual empezó a comienzos de los ochenta. Las cooperativas fueron autorizadas a ingresar en “contratos familiares”, que asignaban parcelas de tierra directamente a grupos familiares de campesinos individuales, y ellos podían conservar o vender todo más allá de los montos establecidos por el contrato. Finalmente, el debate en torno a la noción de una economía centralmente planificada condujo a errores, y culminó en 1986 con la adopción de la política de *doi moi*, la construcción de una economía mixta. Como en China, la propie-

dad privada continúa siendo ilegal, pero los campesinos tienen ahora derecho a “usar derechos” por veinte años, y estos derechos son renovables, transferibles a sus herederos, y pueden ser vendidos e hipotecados. Estos cambios se efectivizaron mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional de Vietnam en 1993. Aunque no existe un límite máximo sobre la posesión de los derechos de uso de la tierra, la cantidad de tierra que un grupo familiar puede cultivar directamente es de tres hectáreas para cultivos anuales y de diez para cultivos perennes (Otsuka, 2002). Una nueva forma de lucha dentro del campesinado ha surgido así por los derechos de uso de tierras en el mercado. El Estado puede continuar influenciando este mercado debido a su poder para determinar la clasificación de áreas terrestres específicas (como agrícola, residencial rural, urbana, de uso especial, o tierra sin uso), lo cual pone un tope al precio de los derechos de uso de tierras. No obstante, está cobrando forma una clase de campesinos sin tierras, cuyas deudas causadas por los desastres naturales y los precios bajos de los productos agrícolas los han compelido a vender estos derechos. En la provincia de Can Tho, los sin tierra comprenden más de un 10% de los grupos familiares rurales (Otsuka, 2002: 126); la consecuencia es la proletarianización en un régimen oficialmente comunista.

El fin de la colectivización fue forjado, entre otros factores, por las estrategias familiares de resistencia diaria que, finalmente, transformaron la política estatal. El éxito de actos, aparentemente descoordinados, de grupos familiares y campesinos individuales, sugiere alguna forma de movimiento masivo, aunque no del tipo que involucra a emprendedores políticos claramente identificados. A partir de los actos fuera de los parámetros del Estado, las acciones campesinas han invadido el escenario central, y lograron el triunfo individual de la pequeña producción y la celebración oficial del cultivo familiar en pequeña escala. ¿Es ésta la venganza del campesino? Inevitablemente, los puntos de vista de Chayanovian sobre la economía campesina han sido reavivados por este resultado histórico. Con todo, como sugiere el estudio de Kitching (1998) sobre el fracaso de la colectivización en Rusia, la respuesta de Chayanovian pudo haber estado implicada en la insistencia de los campesinos para labrar sus propias parcelas privadas, pero este comportamiento debe ser comprendido dentro de un contexto más amplio. En el caso ruso, la generación que estimó la propiedad de tierra individual y la familia labrando la tierra como condición esencial para la identidad campesina había desaparecido, y fue la que podría haber exigido la venganza. Por el contrario, en la defunción de la agricultura socialista, las pequeñas granjas privadas y las grandes tierras colectivizadas operaban simbióticamente más que compitiendo, y los campesinos mismos parecían preferir convertirse en trabajadores industriales, si tan sólo el control estatal de la infraestructura económica les hubiera permitido cumplir ese deseo.

Los experimentos en China y, ciertamente en Vietnam, no comparieron un período históricamente largo como el de la agricultura socialista de Rusia. Pero los datos sugieren que la lucha por la tierra privada en Vietnam y China no quiso decir que los campesinos no se preocuparon por la distribución equitativa de la tierra: lo hicieron. De aquí que la “venganza” campesina en estos dos países no significó un deseo por regresar a las enormes disparidades de tierras del pasado. Más bien, sólo podría querer decir que las condiciones históricas específicas no dejaron que prosperara el sueño de la distribución equitativa de tierras. Los dictados de la pura supervivencia y una valoración racional más amplia del contexto con sus contradicciones, inequidades y sistemas alienantes (Popkin, 1979), los trajeron de regreso a las parcelas privadas. Ahora que efectivamente existe un mercado de tierras en estos países, las inequidades están volviendo y se está formando una clase de campesinos sin tierra o una clase de proletarios rurales. Las relaciones mercantiles han sido autorizadas en una zona relativamente libre en estas ex economías planificadas centralmente, y la simple reproducción de ganancias produce sus predecibles víctimas (Bernstein, 1981).

OCUPACIONES DE TIERRAS DENTRO DE PROGRAMAS DE REFORMA AGRARIA

Las instancias de ocupación de tierras demandadas dentro de los parámetros estatales también han logrado algún éxito. Las políticas estatales reformistas, no importa cuán defectuosas hayan sido, proveyeron el armazón legal para que estas ocupaciones se produjeran. Los estudios de casos de India (Pimple y Sethi, pág. 251 de este volumen), acontecidos en el transcurso del siglo XX, testifican la importancia de las políticas estatales mediante las que los grupos étnicos minoritarios han encontrado un camino para reclamar la posesión de tierra. Más allá de que el programa de tierra-para-el-agricultor haya sido un producto de la fase desarrollista o de las recientes modificaciones de fines de los ochenta, como en las Filipinas luego de Marcos (debido al clamor por el cambio en el contexto del ensanchamiento del espacio democrático), la legislación sobre la reforma agraria parece proveer una base para las ocupaciones. La acción directa sobre la tierra, como las experiencias filipinas que el siguiente debate ilustra, se ha producido cuando grupos de campesinos organizados sacaron provecho de grietas y obstrucciones en la implementación de la reforma agraria para reclamar la posesión que ellos creen les pertenece legítimamente. Mientras el objetivo es claramente el control de la tierra, los grupos campesinos han tenido que batirse con un amplio rango de fuerzas contrarias, de intereses corporativos y terratenientes recalcitrantes, irreconciliables con las demandas de los pobres rurales. En cualquier caso, la intervención de actores estatales favorablemente dispuestos y de ONG ha

RECUPERANDO LA TIERRA

sido crucial en la organización de beneficiarios de la reforma agraria y su toma de la tierra. Sin embargo, a pesar de los puntos de intersección y el movimiento revolucionario del Partido Comunista de las Filipinas (CPP, por su sigla en inglés) y de la coordinación a escala nacional de las luchas por la tierra (discutido por Feranil, en la pág. 273 de este volumen), estas ocupaciones permanecen, esencialmente, localizadas y desarticuladas de las luchas por la tierra en general. De todas formas, poseen el potencial para ser parte de un movimiento social de gran escala.

Un intento exitoso de ocupación de tierras realizado dentro del marco de la reforma agraria de las Filipinas incluye a la Hacienda Pecuaría, de ochocientos diecisiete hectáreas, en Bula, provincia de Camarines Sur, en la isla principal de Luzon (Abelardo, 1997). En un principio, el dueño era un griego; después de la Segunda Guerra Mundial, la hacienda pasó a manos de dos terratenientes filipinos. Para 1972, funcionaba como una granja corporativa, con más de setenta empleados criando cerdos y ganado y plantando arroz, maíz y caña de azúcar. Su fuerza laboral, eventualmente, se expandió para incluir unos quinientos obreros rurales. En 1985, la compañía se declaró insolvente, y un año más tarde, los trabajadores de la hacienda fueron despedidos. Amenazados por el Nuevo Ejército Popular del CPP, que operó en el área, en 1988 los dueños decidieron poner la propiedad a disposición del programa de reforma agraria del gobierno, bajo el esquema “Oferta Voluntaria para Vender” (VOS, por su sigla en inglés). Con la amenaza de la fuerza como telón de fondo, la reforma agraria en esta hacienda no fue llevada a cabo ni por el mercado ni por el altruismo. El caos surgió, más bien, porque la oportunidad de adquirir un trozo de la gran hacienda generó competencias entre los varios grupos interesados y precipitó una lucha abierta e, incluso, violenta.

Un total de mil individuos solicitó tierras en la Hacienda Pecuaría, pero el filtrado inicial realizado por el Departamento de la Reforma Agraria (DAR) recortó a seiscientos veinte a los beneficiarios potenciales. Los anteriores trabajadores de la hacienda fortalecieron su grupo e hicieron una potente oferta con el apoyo de los dueños, cuyo rol se había modificado de empleadores a patrocinadores. Confiados en que les serían adjudicadas, cien de los anteriores trabajadores de la hacienda y ciento treinta y seis residentes de un pueblo cercano entraron en la propiedad y ocuparon las mejores porciones de la tierra en 1988. Pero los oficiales de la DAR les advirtieron que podían ser descalificados por no seguir los procedimientos correctos; los ocupantes se retiraron. Después de un gran tifón en 1989, treinta y seis individuos entraron en una hacienda aparentemente abandonada, pero ellos no eran ni anteriores trabajadores de la hacienda ni residentes de pueblos cercanos. Más ocupantes ilegales entraron en la hacienda; su número superó los doscientos. Hacia 1990, la situación estaba fuera de control. Una cierta cantidad de los solicitantes originales

comenzó a acordonar el área para disuadir a los nuevos candidatos, pero algunos maleantes que se encontraban en el último grupo continuaron con las incursiones. Con el objetivo de evitar el incremento de la violencia, una organización no gubernamental unió sus fuerzas con el DAR para iniciar un proceso de consulta a diversos partidos y ayudar a decidir en las conflictivas demandas. Los beneficiarios “legítimos” tuvieron que ser identificados mediante criterios del gobierno y procedimientos de filtraje. De los seiscientos veinte solicitantes originales, sólo cuatrocientos ochenta fueron estimados como calificados. Los ocupantes ilegales fueron ubicados en la prioridad más baja, lo que agravó la tensión entre los demandantes. En 1992, ambas partes comenzaron a organizar manifestaciones públicas para airear sus demandas. Más tarde ese año, el DAR se decidió a adjudicar una porción de cien hectáreas contiguas dentro de la hacienda a favor de los que fueron conocidos como los “participantes ilegales”.

Mientras tanto, hacia el año 1991, los irreconciliables grupos originales –aquella oposición entre anteriores trabajadores de la hacienda y demandantes “sin tierras” de tres pueblos cercanos– decidieron constituirse en una importante alianza en contra de los ocupantes “ilegales” que habían venido de otros sitios. En 1992, este grupo estaba registrado como la Cooperativa de Desarrollo Pecuaría SA (PDCI, Inc.). Debido a que una porción de la hacienda había sido asignada a los “ilegales”, los funcionarios del gobierno decidieron reacomodarlos y proveer áreas que pudieran ser usadas por miembros del PDCI. La reubicación, realizada en mayo de 1993, originó acaloradas discusiones y algunos ilegales se rehusaron a cooperar. A fines de ese año, sin embargo, doscientos dos miembros de PDCI poseían el 47% de la hacienda. Las tensiones no aflojaron. En abril de 1994, Pablito Dante, líder del PDCI, murió apuñalado en el transcurso de una discusión. Al hecho le siguió una concertada intervención de una ONG y se planificó una reubicación “festiva”, de precisión militar. No obstante, cincuenta de ciento catorce ocupantes ilegales rechazaron la asistencia monetaria y la reubicación en un sitio designado. Luego de otros diálogos, algunos ocupantes ilegales acordaron trasladarse, pero un considerable número se mostró reacio. Los datos disponibles a principios de 1996 indicaban, sin embargo, que cuatrocientos veintiséis miembros del PDCI habían sido capaces de reclamar parcelas de tierras que promediaban las dos hectáreas en cada caso, además de un lote residencial de 600 metros cuadrados.

El caso de la Hacienda Pecuaría demuestra una toma de posesión de tierras sancionada por el Estado que tuvo que enfrentar, no clases hegemónicas, pero sí luchas “internas” dentro del campesinado. La fuerza laboral –un proletariado agrario– de la hacienda trató de convertirse en un campesinado propietario; pero cuando se volvió evidente que su interés grupal no prevalecería ingresaron, como campesinos en espera, en una

RECUPERANDO LA TIERRA

alianza con otros campesinos que deseaban adquirir tierras. Dada la gran necesidad por la tierra, la competencia fue casi inevitable, especialmente porque la información respecto de la “disponibilidad” de la Hacienda Pecuaria no había sido ocultada a los medios de comunicación. La competencia por la tierra cobró forma bajo el lema de “el primero que coloca el poste”. Los campesinos que habían venido de otros lugares trataron atrevidamente de ocupar tierras, y representaron una amenaza para el campesinado local que parecía tener un “derecho diferencial” sobre la tierra. La intervención aparentemente conciliatoria de los funcionarios de la reforma agraria para asignar tierra a “los ocupantes ilegales” no fue capaz de resolver una situación altamente conflictiva. Las regulaciones estatales prevalecieron decisivamente en favor de los “legítimos” beneficiarios. Sin embargo, allí permanece el desafío planteado por el 20% de los asociados al PDCI, a quienes les habían concedido tierras pero no las habían ocupado. Durante la larga lucha, muchos de ellos se mudaron o emigraron hacia centros urbanos. La “ocupación ilegal” podría aumentar y nuevos conflictos similares podrían resurgir. Las luchas por la tierra de esta hacienda están lejos de haber terminado.

Otra instancia de ocupación de tierras dentro del marco de la reforma agraria del Estado es ilustrada por el caso de la Corporación Agro-Industrial Filipina PAICOR, hacienda en la provincia Baungon, Bukidnon, en la isla de Mindanao (Cabanes, 1997). Con sus cuatrocientas sesenta y cuatro hectáreas y media, la hacienda PAICOR había sido parte, en un principio, del dominio público que los campesinos reclamaron y cultivaron en forma individual para su usufructo, en un proceso no tan diferente respecto del descrito en la primera sección de este trabajo. Un comerciante local emprendedor comenzó a comprar la tierra cultivada, hasta que él y su familia acumularon una propiedad enorme. El PAICOR adquirió la propiedad y el almidón de yuca comenzó a procesarse en 1978. Pero el monocultivo de la yuca agotó los nutrientes del terreno, y en unos pocos años la compañía enfrentó pérdidas financieras enormes. En 1987, resolvió rotar la producción hacia el maíz y, al año siguiente, después de declararse en bancarrota, despidieron a todos, excepto a sesenta de sus obreros rurales. Como área que cultiva maíz, la hacienda quedó bajo el alcance del Programa de Reforma Agraria Comprehensiva, pero la corporación no quería vender la tierra voluntariamente. En abril de 1989, el DAR procedió a expropiarla y, forzosamente, a transformar la hacienda en un área de reforma agraria; los dueños corporativos presentaron una petición para retrasar la reforma por diez años, argumentando que el cambio de cultivo había sido una medida temporal. La petición fue denegada, pero la compañía hizo varias apelaciones.

A pesar de la apelación, el DAR reunió cerca de quientos nombres de potenciales beneficiarios y llevó adelante el proceso de selección con

representantes del gobierno y de las ONG. La lista fue rebajada a aproximadamente trescientos nombres, cuya mayoría eran empleados de la compañía que habían sido despedidos. Después de más de una audiencia pública, los inminentes beneficiarios comenzaron organizarse y a movilizarse con ayuda de las ONG. En septiembre de 1992, trece certificados de tierras que abarcaban 143 hectáreas –el 47% del área de reforma agraria dentro de la hacienda– estaban dispuestos para ser entregados a los beneficiarios organizados. El PAICOR protestó, y una orden legal fue expedida para suspender el proceso de reforma. El caso permanece pendiente.

Debido a que la transferencia de tierras estaba paralizada por el caso en tribunales, los beneficiarios decidieron que no podrían esperar los años que el sistema judicial demorara en resolver el asunto. Además, la eventual decisión podría no ser tomada en su favor. Con la asistencia de las ONG como socias, los beneficiarios de la reforma agraria concibieron un sistemático plan de invasión terrestre de tres días, lo cual llevó a cercar el área e, inmediatamente, a iniciar el trabajo de campo. La invasión estaba pensada para coincidir con un congreso campesino que iba a realizarse en un lugar adyacente al sitio en disputa. La ocupación fue programada para el 14 de marzo de 1994. Sin embargo, la compañía se enteró del plan y envió a sus guardias de seguridad a patrullar el área. La ocupación se pospuso un par de días. En presencia de algunas ONG, periodistas y oficiales de policía locales, la invasión tuvo lugar, y a pesar de algunas escaramuzas con guardias de la compañía se procedió, en líneas generales, de forma pacífica. Como era de esperar, la compañía objetó, pero los beneficiarios de la reforma agraria estaban acompañados por su propio asesor legal, por lo que no podían ser movidos del terreno. El caso fue llevado a la corte bajo la carátula de “ingreso por la fuerza”.

Resulta interesante destacar que los ocupantes de tierras, en su mayoría trabajadores despedidos de la compañía, tuvieron que ponerse en guardia para pelear con los trabajadores de la compañía, cuyo sindicato estaba afiliado a la Asociación, a nivel nacional, del Sindicato de Trabajadores-Congreso de Sindicatos de las Filipinas (ALU-TUCP). El sindicato de trabajadores insistió en que era el legítimo beneficiario de toda la hacienda. Después de un largo diálogo, el sindicato de trabajadores se conformó con ciento trece de las ciento cincuenta y nueve hectáreas restantes que no habían sido asignadas a los destinatarios individuales.

Mientras la resistencia del capital corporativo a la reforma agraria es comprensible, el caso de la hacienda PAICOR es instructivo acerca del conflicto entre diversos interesados que ocupan diferentes posiciones de clase ante la ocupación de tierras. En este caso, una fuerza laboral de la plantación, respaldada por una gran organización de la clase trabajadora industrial, fue puesta en contra de trabajadores recampeonizados despedidos y de otros campesinos demandantes de tierras.

RECUPERANDO LA TIERRA

El sindicato empresarial fue visto como el obstáculo principal para la ocupación, porque quiso aprovecharse de ambos: de la compañía como su proveedora de trabajo y de la ley de reforma agraria, si eventualmente se convirtiese en ley. En este caso, un proletariado de la plantación fue puesto en contra de un campesinado compuesto, principalmente, de productores de mercancías básicas. En contraste con la Hacienda Pecuaria, donde segmentos del campesinado, literalmente, batallaron por la limitada tierra disponible, en la hacienda PAICOR dos clases agrarias estaban en competencia. Estos conflictos entre las clases no hegemónicas personifican la fragmentación de la clase social en las zonas rurales como diversos grupos y clases que buscan asegurar una base material para la pequeña producción de bienes. Aunque diversas formas de compromiso han sido alcanzadas, éstas necesariamente excluyeron a otros campesinos que también necesitaban tierras.

Debe resaltarse que las ocupaciones y las respuestas ocurren todas dentro del marco del Estado, en primer lugar dentro de la legislación de la reforma agraria y su burocracia y, luego, dentro del complejo y más amplio aparato estatal, legal y judicial. Trabajar dentro de parámetros estatales puede ser un movimiento táctico o estratégico. No obstante, las ocupaciones de tierras dentro del espacio reformista del estado dependen, finalmente, del Estado y de las instituciones estatales para decidir asuntos y demandas de legalidad irreconciliables. Ciertamente, hay matices en las batallas, estrategias y resultados, pero el Estado se convierte en la institución crucial.

En Sumilao, también en la isla de Mindanao, los campesinos enfrentaron al gran capital corporativo cuando el arrendamiento de diez años de Del Monte Filipinas sobre 144 hectáreas de tierra agrícola de primera caducó en 1993. Los ciento treinta y siete miembros campesinos de la Cooperativa Mapalad compitieron con la Norberto Quisumbing, Corporación de Desarrollo y Dirección, que buscaba convertir el área en un sitio agro-industrial. Insistiendo en que el área había estado por mucho tiempo al amparo de un aviso de adquisición compulsiva, el DAR se puso del lado de los campesinos, y el certificado de propiedad de la tierra fue expedido para los campesinos de Mapalad, en septiembre de 1995. Pero la compañía Quisumbing había apelado la decisión de la DAR a la Oficina del presidente, cuyo secretario ejecutivo revocó la decisión de DAR y aprobó el plan de conversión de la compañía en marzo de 1996. A pesar de solicitar varias mociones para la reconsideración, en julio de 1997 setenta y ocho campesinos de Mapalad entraron en la propiedad y empezaron cultivarla. Sin embargo, enfrentados al hostigamiento sistemático y a la violencia, los campesinos se vieron forzados a dejar las tierras ocupadas. Con el apoyo de ONG y de la Iglesia Católica, doce campesinos de Mapalad, tres de los cuales eran mujeres, peregrinaron hacia la capital nacional en

octubre de ese año para escenificar una huelga de hambre delante de la oficina principal de la DAR. La huelga, que duró veintiocho días, atrajo la atención considerable de los medios masivos de comunicación. La intensa publicidad obligó luego al presidente Fidel Ramos a forjar a una comisión independiente y, eventualmente, a conceder cien hectáreas para la Cooperativa Mapalad (Mapalad Agrarian Reform Monitor, 1998).

Los primeros dos casos de reforma-con-ocupación de tierras mencionados en este trabajo ilustran la situación de campesinos que trataron con el capital corporativo agrario debilitado por las bancarrotas. En ese contexto, los diversos fragmentos de clases no hegemónicas lucharon entre ellas por una porción de la tierra. En el tercer caso, los campesinos enfrentaron un interés capitalista corporativo más poderoso y con muy buenas relaciones. Como podemos ver en el relato de Feranil (en la pág. 273 de este volumen), en las luchas contra las clases hegemónicas se arriesgan al hostigamiento, a represalias y a contrarreformas. En el último caso presentado aquí, pero también dentro de los dos anteriores, la causa campesina se benefició de la intervención en su favor de actores dentro de la burocracia de la reforma agraria, que brindaron tácita aprobación y legitimidad a las planeadas ocupaciones de tierras. El predominante espacio democrático, la determinación campesina y la intensa atención pública de los medios masivos de comunicación obligaron al Estado a ceder, eventualmente, a su brazo reformista. Debido al contencioso contexto legal y al deseo de los campesinos de concretar su demanda de tierras dentro de la ley, se orquestaron y planearon acciones campesinas masivas con la ayuda de ONG, profesionales legales y defensores de la reforma agraria estratégicamente ubicados dentro de la burocracia. Lejos de lo espontáneo, estas ocupaciones de tierras se beneficiaron del hecho de que el Estado no sea monolítico.

LA TORPE COMPULSIÓN DEL MERCADO

Cualquier debate sobre luchas de la propiedad agraria, su posesión y control, debe tener en cuenta el rango de las transacciones de tierras basadas en el mercado que realmente ocurren en las zonas rurales. El mercado raramente es visto como oferente de la posibilidad de proveer tierras para los desposeídos y capaz de lograr una redistribución justa y activos agrícolas. La prueba elocuente es la operación del mercado en los contextos agrícolas postsocialistas de China y Vietnam, mediante la que un sutil forcejeo por la tierra deja a unos sin tierra, mientras otros adquieren más de la que pueden cultivar personalmente. En otros contextos asiáticos, la legislación de la reforma agraria no ha detenido los mecanismos de mercado que permiten concentrar tierra en manos de los relativamente ricos. Este grupo incluye a los campesinos ricos que pueden aumentar sus tenencias debido a la pequeña acumulación capitalista dentro de la agricultura o

RECUPERANDO LA TIERRA

con la asistencia de fuentes externas, como los envíos de dinero de parientes involucrados en la migración laboral internacional; también incluye a los segmentos de la pequeña burguesía rural, como comerciantes y profesionales de bajo nivel, que deciden invertir sus ganancias y sus ahorros en tierras que probablemente luego subarrenden. La tierra, generalmente, es adquirida a campesinos del minifundio que disponen de lotes precarios, inducidos por deudas que son el producto de relaciones mercantiles que extienden y profundizan la explotación. Otros venden sus tierras antes de migrar hacia la ciudad. La torpe compulsión de las fuerzas económicas amplía la asimétrica distribución ya desigual de la tierra.

Así, los resultados de un estudio en West Bengal constituyen una sorpresa. Vikas Rawal (2001) examinó ventas de tierras en dos pueblos, desde 1977 hasta 1995, y se encontró con que los mercados de tierras contribuyeron a redistribuir pequeñas parcelas para los pobres campesinos que, de otra manera, no las habrían podido obtener. West Bengal y Kerala son excepcionales en India por la forma en que implementaron y dieron cuerpo a la reforma agraria. Después de las luchas políticas de los años sesenta y setenta, una coalición de partidos de izquierda, dominada por el Partido Comunista de India, subió al poder en 1977. El programa de reforma agraria que se implementó después de 1977 dio derechos permanentes de cultivo a aproximadamente 1,4 millones de aparceros; expropió 1,26 millones de acres de tierra, cuya mayor parte fue distribuida entre unos 2,5 millones de grupos familiares; impuso un tope a las propiedades y distribuyó la tierra estatal para los sin tierras. Las unidades locales de gobierno –los Panchayats– y masivas organizaciones rurales se convirtieron en participantes activos del proceso de reforma agraria. Estas reformas fomentaron la producción agrícola y las tasas de productividad de West Bengal; por ello, ganaron la reputación de una “historia de éxitos”. Este contexto es importante para entender la dinámica del mercado de tierras en los dos pueblos del distrito Bankura estudiados por Rawal, donde la intensidad del cultivo y el crecimiento de las tasas de producción fue aun superior al promedio estatal. En ellos, el volumen de ventas de tierras fue también notablemente más alto que en otras partes de la India. Pero más notorio fue el hecho de que la reforma agraria y el cambio agrario serios influenciaron el comportamiento de los mercados de tierras.

En los dos pueblos estudiados, el 40% de los grupos familiares compró tierras cultivables entre 1977 y 1995, mientras que el 24% permaneció sin tierras. Durante este período, el programa de reforma agraria proveyó tierras para el 15,3% de los grupos familiares, actualmente terratenientes, que estaban sin tierras en 1977. Las transacciones se convirtieron en la manera de adquirir tierras por parte del 17,2% de los grupos familiares, actualmente terratenientes, que estaban sin tierras en 1977. En total, el

32,5% de los grupos familiares terratenientes en 1995 había formado parte de la categoría de los sin tierra en 1977. Muchos de aquellos que habían comprado pequeñas parcelas a través de transacciones en efectivo formaban parte de una casta inventariada y de una comunidad tribal inventariada. Los vendedores de tierras fueron principalmente terratenientes no residentes y un gran terrateniente residente. De los sesenta y ocho grupos familiares que estaban sin tierras en 1995, sólo dos poseyeron tierra en 1997 y se vieron forzados a venderla en el ínterin. Rawal (2001) atribuye estos inesperados resultados a la mejora, si bien pequeña, en el poder adquisitivo de campesinos pobres y sin tierras, a causa de salarios reales superiores y del aumento de los días de trabajo, que fueron posibles debido a la mejora de la productividad agrícola después de la reforma agraria. El mismo proceso de implementación de la reforma agraria también convenció a los terratenientes con tierras en exceso de que sería más ventajoso venderlas antes que mantenerlas. La ley de la reforma agraria también tomó una posición fuerte contra el ausentismo. En este trasfondo, el dos veces marginado proletariado agrícola (dos veces, a causa de proscripciones culturales y de la estructura económica) utilizó sus pequeños ahorros para comprar diminutas parcelas sobre las que los dueños, básicamente, habían perdido el interés. El mercado estaba lejos de efectuar una redistribución radical de la tierra, pero el contexto histórico produjo, al menos en este lugar de la India, un resultado muy inesperado. La acción campesina de comprar pequeñas parcelas pudo haber sido espontánea –pues no puede clasificarse como un movimiento organizado– pero no pudo haber ocurrido sin el marco estatal apropiado y el papel solidario de masivas organizaciones rurales.

Los campesinos también están adquiriendo y perdiendo terrenos cultivables a través de transacciones informales de mercado, que toman la forma de contratos de tierra empeñada. El prestatario pierde la tierra cuando la deuda no es pagada dentro de un período planeado de antemano. Estos arreglos han sido reportados en varios países asiáticos, particularmente en Bangladesh, India, Indonesia, Tailandia y las Filipinas. Donde los valores de las tierras son bajos y el mercado de tierras, así como también el mercado financiero, está plagado de imperfecciones, los terrenos empeñados prevalecen. En países musulmanes, el empeño de los terrenos es una forma de evadir la prohibición del cobro de tasas de interés explícitas (Ghate, 1988). En cualquier caso, el arreglo es un mecanismo socialmente aceptado para proveer y asegurar préstamos. En las Filipinas, a pesar de la previsión de la ley de reforma agraria contra la venta o el empeño de tierras reformadas dentro de los primeros diez años de su adquisición, tales transacciones se han extendido en algunas áreas. Aun en períodos anteriores, cuando la tenencia compartida fue la norma aceptada, los campesinos compraron y vendieron derechos de tenencia.

RECUPERANDO LA TIERRA

Estos arreglos informales bien pueden conducir a una concentración de la tierra en manos de campesinos más ricos, de la misma manera que una deuda puede causar a los campesinos pobres la pérdida de la tierra usada como garantía colateral. El estudio de Fukui (1995) sugiere, sin embargo, que un agravamiento de la necesidad de distribución de la tierra no debe ser el resultado necesario. En un pueblo en la provincia de Nueva Ecija, en las Filipinas, donde una cuarta parte de los grupos familiares estaba comprometida con contratos de empeño, Fukui encontró que el tamaño de campo promedio del deudor prendario (2,53 hectáreas) era mayor que el tamaño de campo promedio del acreedor prendario (0,89 la hectárea). Además, los activos promedio del acreedor prendario eran cerca de seis veces los del deudor prendario. La mayor parte de estas transacciones fueron buenas a lo largo de un año y medio a tres años. Así, Fukui interpreta la situación en este pueblo como uno en el cual un grupo familiar campesino con un área chica de tierra para cultivar pero con recursos sobrantes (obtenidos por un sistema eficiente de producción o por ingresos de afuera del campo) entra en un contrato de tierra empeñada como una forma de adquirir derechos de cultivo sobre un área ampliada. Adquieren la tierra empeñada de campesinos con tenencias de tierras relativamente grandes pero de recursos inferiores, mientras éstos dejan una porción de su tierra para adquirir fondos para invertir. Ello parece ser un negocio comercial desvinculado de la agricultura, que produce una ganancia más alta que la labranza de la tierra. El empeñar así parece un arreglo mutuamente beneficioso. Es incierta la medida en la cual se pueda generalizar la investigación de Fukui. De todas maneras, en este caso al menos, un mercado defectuoso facultó a los campesinos para realizar acciones directas sobre la tierra, y el resultado es una reubicación temporal de este medio básico de producción, en contra de los dictámenes del Estado pero de acuerdo con los requisitos del pequeño capital agrario.

Los que apoyan el discurso neoliberal de desarrollo de mercados formales de tierras rurales (a través de instituciones financieras y de actividades derivadas como el titulado de tierras y la administración de registros de tierras racionalizadas) y aquellos que sostienen el uso de la reforma agraria para las transacciones formales de la tierra no pueden usar los casos esbozados aquí para respaldar su posición. Desde Nueva Ecija a West Bengal, los resultados son altamente contingentes y dependientes de factores históricamente específicos. Un mercado de tierras incontenible hará estragos en campesinos pobres, que tienen poca probabilidad de emerger triunfantes en esta lucha: carencia de tierras y proletarianización son el destino que más probablemente los espera. Por otra parte, no puede negarse que la mercantilización de la tierra campesina avanza rápidamente, tanto en su versión poscolectivizada como

nunca colectivizada. Existe una cierta irrevocabilidad en la mercantilización de la tierra, aun en casos iniciados con ocupaciones directas.

Al mismo tiempo, donde se encuentran ingresos lucrativos fuera de las granjas, como en las industrias rurales, los grupos familiares campesinos parecen haber mejorado su estado socio-económico, incluso sin cambios en la distribución de tierras agrícolas. Esta tendencia parece ocurrir en algunas partes del sudeste de Asia, aunque la tendencia global permanece poco clara debido a las condiciones sumamente dispares. En tales instancias, Rigg (2002) observa que la tierra “ya no es el recurso estratégico” que una vez fue. En localidades en las que los campesinos pueden obtener ingresos comparativamente altos de una combinación de fuentes de la granja y de afuera de ella, si esta última constituye la fuente más significativa de ingresos, la pobreza, sostiene Rigg, puede ser desvinculada de la distribución inequitativa de la tierra. Como el estudio de Fukui sugiere, los campesinos del minifundio pueden tener más ingresos disponibles que aquellos con mayores tenencias de tierras. Este patrón ha sido actualizado en algunas partes de la periferia capitalista en Asia, no sólo por una industrialización emergente sino también debido al fenómeno de migración laboral de ultramar y al empleo, lo cual se discute en la siguiente sección. Lo que es aparente es que las luchas por las tierras asumen una diversidad de formas (incluyendo la confianza en actividades no agrarias y, para otros, la eventual migración). Dadas sus condiciones históricas específicas, los campesinos adoptan un rango de estrategias para ganar seguridad y mejorar sus condiciones económicas, estrategias que, finalmente, los localizan, en simultáneo, dentro de relaciones y posiciones de clase contradictorias y progresivamente desbordadas.

LA MIGRACIÓN GLOBAL Y LA PROPIEDAD DE TIERRA RURAL

En otro estudio de tierras empeñadas en las Filipinas, Nagarajan et al. (1992) encontraron que los campesinos recurrieron a contratos de empeño como un instrumento de crédito informal. Los campesinos pobres tienden a empeñar sus tierras como recurso para financiar emergencias médicas y necesidades vitales de consumo. Pero el patrón predominante en el estudio de estos autores fue el uso de contratos de empeño como forma de aumentar el capital para invertir en actividades fuera del campo, de las que se esperaba que produjeran mayores ingresos que la agricultura. Estos campesinos eligieron invertir dinero en capital humano –mediante la educación de niños– y obtener empleos en ultramar.

La migración laboral, que en el sudeste y en el sur de Asia ha experimentado, durante estos últimos años, una tendencia hacia la feminización, con más mujeres migrantes que encuentran trabajo doméstico pago en ultramar (Aguilar, 2002; Battistella y Paganoni, 1996; Chin, 1998; Constable, 1997), ha inyectado una fuerza completamente nueva en las zonas rurales.

RECUPERANDO LA TIERRA

Los estudios de aldeas y pueblos han demostrado que los envíos de dinero de emigrantes laborales en ultramar empeoran la estratificación del ingreso, pero permiten a los grupos familiares campesinos que poseen recursos y activos insignificantes ser catapultados hasta alcanzar escalones superiores en la estructura social de sus aldeas y pueblos. De hecho, el grupo familiar puede adoptar la estrategia de deshacerse de una cierta cantidad o de todos sus activos de tierras precisamente para invertir dinero en empleos de ultramar –para los hombres, en su mayor parte como marineros y en la construcción– que usualmente, pero no siempre, producen ingresos significativamente superiores (Bautista, 1989). Otros pudieron haber generado los medios para obtener contratos de ultramar a través de la pequeña acumulación capitalista, posibilitada por el cambio agrario general (como las ganancias de la revolución verde) e ingresos de actividades económicas no agrarias. En esta situación, observamos el otro extremo del espectro de las luchas por la tierra, caracterizado por la fuga de la tierra, a medida que los campesinos deciden dejar atrás la agricultura para convertirse en proletarios en otro Estado nacional. Así, existen huecos considerables en las zonas rurales, donde la lucha no está orientada a adquirir y poseer tierras sino a salir definitivamente del campo agrario. En estas instancias, la propiedad de tierras ya no es la meta deseada. La falta de una ligazón emocional hacia la tierra puede ser una sorprendente observación cuando los campesinos parecen listos para explorar opciones fuera de la agricultura. Pero en el sudeste de Asia, al menos, los campesinos no poseían históricamente la “inclinación natural” hacia la tierra que las autoridades coloniales europeas esperaban que exhibieran. En la península malaya, por ejemplo, la legislación colonial a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX fue un registro de difíciles esfuerzos e intentos fallidos por generar la existencia de una clase de campesinos cultivadores terratenientes que permanecieran asentados más o menos permanentemente en un lugar atendiendo una parcela fija de tierra (Kratoska, 1985). Que los campesinos no estén por naturaleza apegados a ella –muchos la ven en términos instrumentales, en contraste con algunos defensores de la reforma agraria, que ven la tierra con una reverencia casi sagrada (Aguilar, 1992)– iluminará las estrategias adoptadas por los campesinos contemporáneos en su búsqueda de un avance económico más allá del campo agrario.

Los campesinos que comienzan con muy pocos recursos pero logran enviar un niño a ultramar han experimentado saltos importantes en las oportunidades de vida de los miembros de la familia. Fuwa (1996) describe el caso de una familia, cuyo jefe había heredado media hectárea de tierra que luego perdió en su totalidad probablemente para financiar necesidades de subsistencia. Sus ingresos provenían del “sector informal”, hasta que obtuvo derechos de cultivo como arrendatario parcial a principios de la década del ochenta. En 1986, una hija educada en la escuela secundaria

solicitó y obtuvo un empleo como “anfitriona” en Japón, con un salario básico de US\$350 por mes, que gradualmente se elevó hasta US\$1.050 en 1993. Sus envíos de dinero han contribuido desde entonces a la masa del ingreso de su grupo familiar en las Filipinas. El padre continúa siendo un arrendatario parcial, pero ha invertido en una bomba de irrigación y en un tractor; además de mejorar el lugar físico de residencia del grupo familiar. Subsiguientemente, con el dinero en efectivo disponible, un hijo pudo encontrar empleo como obrero industrial en Arabia Saudita y aumentar los envíos de dinero al grupo familiar en las Filipinas. Aunque los beneficios de las migraciones globales no son enteramente claros, el caso descrito aquí no es inusual. Ingresos provenientes de ultramar han permitido a grupos familiares campesinos adquirir tierras, algunas veces más de las que pueden cultivar; sin embargo, estas parcelas son luego subarrendadas en una base de aparcería a campesinos más pobres.

En el Egipto rural, Weyland (1993) ha encontrado que la migración laboral internacional es utilizada como una estrategia para la reproducción social en el sentido literal, por la que sin las ganancias provenientes de un empleo contratado en otro estado, al varón le sería difícil juntar el dinero que se necesita para pagar la dote, el matrimonio y el establecimiento de una familia. Las esposas también pueden impulsar a los maridos a convertirse en trabajadores migratorios para obtener recursos, establecer un grupo familiar autónomo y evitar las fricciones que usualmente se generan cuando se vive con los parientes políticos. La migración como estrategia no debería, por consiguiente, insinuar una homogeneidad de metas e intereses dentro de la unidad doméstica. Weyland (1993) señala, incluso, que la migración laboral internacional no conduce a la desintegración del grupo familiar campesino y del sistema de producción. Los mayores ingresos se usan para comprar tierras y animales que perpetúan el modo de vida campesino, aunque ahora inseparable de una cultura modernizante. Ciertamente, los trabajadores asalariados sin tierra se han convertido en terratenientes. Por sobre todo, entonces, las migraciones globales aumentan la pequeña producción campesina y contribuyen a elevar la posición social y de clase del grupo familiar en la localidad.

Mientras algunos campesinos quieren dejar la agricultura trabajando en ultramar, otros generan capital desde esos empleos para persistir en la agricultura e, incluso, invertir en ella. Así, los envíos de dinero de ultramar complican significativamente las formas híbridas de relaciones de clase y los imbricados circuitos de explotación que definen y hacen a las estructuras rurales de clase en el sudeste asiático (Aguilar, 1989; Turton, 1989). Estos envíos pueden transformar la subsistencia del grupo familiar campesino en una unidad agrícola familiar capitalizada. El campesino puede apoyarse primordial o completamente en brazos contratados para cultivar la tierra, adquiriendo la posición de clase de

RECUPERANDO LA TIERRA

un empleador pequeño capitalista en un proletariado rural. El dueño capitalizado de la granja puede luego decidirse a trabajar fuera de ella y obtener ingresos en efectivo de trabajos pagos emprendidos en otros sitios (una posición proletaria), o involucrarse en una pequeña empresa (una posición autónoma o pequeño-burguesa). Mediante inyecciones monetarias directas, los migrantes campesinos como miembros del proletariado global, o de la clase marginada, estimulan directamente el capitalismo campesino y la industria microcapitalista rural. La economía rural, durante el proceso, se enlaza directamente con las contradicciones de la acumulación de capital global (Aguilar, 2003). Las resultantes posiciones y relaciones de clase, múltiples y contradictorias, inevitablemente complican el campo político y afectan sutilmente las luchas por las tierras en las zonas rurales. Aunque el deseo de muchos sea poseer un trozo de terreno, ser arrancados a la fuerza por grandes terratenientes, el capital corporativo o el Estado hace que cada vez más personas busquen una escapatoria literal a través de la migración global. Los campos de fuerza de la globalización afectan así las luchas locales por la tierra y transversalizan las contradicciones entre los Estados nacionales.

CONCLUSIÓN

Las luchas por la tierra en Asia son tan diversas como su paisaje político, económico y cultural. Éstas toman variadas formas: la acción individual o en grupo; el uso de mecanismos estatales o de los mercados de tierras formales o informales; y en contra del Estado o de las clases hegemónicas, o en competencia con otros campesinos y otros miembros del proletariado rural. Las luchas por las tierras van desde ocupaciones de tierras individuales en áreas de tierras altas y maniobras individuales dentro y alrededor de la agricultura colectiva para priorizar las parcelas privadas, hasta ocupaciones de tierras bien organizadas que se aprovechan de las fisuras en la implementación de las reformas agrarias estatales. Un movimiento de gran escala como las fuerzas comunistas revolucionarias en las Filipinas también se ha involucrado en ocupaciones de tierras. Pero, evidentemente, predominan las formas cotidianas de resistencia.

Más allá del tipo de lucha por la tierra, la meta preponderante parece ser el establecimiento o la preservación de la producción de pequeñas mercancías, sujetos a las condiciones históricamente específicas que varían de acuerdo con la región, el país y la localidad. Y más allá del modo en que la tierra sea adquirida u ocupada, las relaciones mercantiles casi inexorablemente se esparcen y echan raíz. Al mismo tiempo, la pequeña producción de bienes implica una existencia muy inestable, con eventuales descensos a la clase de los sin tierra y de los proletarios desposeídos. Irónicamente, la mejor defensa de la pequeña producción de bienes es su combinación con ingresos de afuera del campo, bien de un empleo asalariado o de un

negocio propio. Con la migración laboral global, la pequeña producción de bienes toma dos rutas: el grupo familiar deja la agricultura definitivamente (desprendiéndose de la tierra, que será usada por otro agricultor campesino o capitalista), o evoluciona hacia un cultivo familiar capitalizado y se convierte en un pequeño capitalista y empleador de trabajo rural.

Consecuentemente, las luchas por la tierra y sus resultados son entendidos mejor en el contexto más amplio de las múltiples y contradictorias posiciones de clase ocupadas por diversos miembros del grupo familiar campesino, lo que da lugar a un proceso altamente complicado y estructurante de diferenciación de clase. La estabilidad y la aparente permanencia de formas híbridas de trabajo nacional y transnacional encapsulan la estructural “fragmentación del trabajo” que caracteriza al capitalismo contemporáneo (Bernstein, 2002: 453). Las relaciones directamente globalizadas convierten en redundante la clásica cuestión agraria definida en términos nacionales. No obstante, los contextos específicos requieren sus propias respuestas y soluciones. Algunos aspectos del neoliberalismo, como la integración global del trabajo, pueden ser beneficiosos para ciertos productores rurales, pero no para otros; alternan y expanden los ejes de lucha y, en todo caso, requieren alguna forma de transición fundamental como condición previa para la transformación agraria (Kay, 2002). En una situación de caos económico y complejidad no explicitada, el imperativo moral de compartir la tierra con los necesitados parece ser el único impulso unificador, y estimula a las ONG y a los burócratas a apoyar y a organizar ocupaciones de tierras. El sueño neopopulista de apoyar económicamente la producción en pequeña escala no está, en última instancia, dissociado de un populismo moralmente fundamentado. La política de la lucha por la tierra no puede distanciarse de esta necesidad; tampoco debemos olvidar que cada lucha es parcial. Necesitamos aprender de los campesinos que encuentran y sacan provecho de las grietas.

BIBLIOGRAFÍA

- Abelardo, Ma. Theresa 1997 “Land Tenure Improvement in the PECURIA Estate” en *Making Agrarian Reform Work: Securing the Gains of Land Tenure Improvement* (Quezon City: Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas [PhilDHRRA]).
- Aguilar, Filomeno, Jr. 1989 “The Philippine Peasant as Capitalist: Beyond the Categories of Ideal-Typical Capitalism” en *Journal of Peasant Studies*, 17(1), pp 41-67.
- Aguilar, Filomeno, Jr. 1992 “Pitfalls of Theory and Evidence of Practice: Notes on Land Reform as a Populist Ideal” en *Philippine Sociological Review*, 40, pp 1-23.

RECUPERANDO LA TIERRA

- Aguilar, Filomeno, Jr. 1998 *Clash of Spirits: The History of Power and Sugar Planter Hegemony on a Visayan Island* (Honolulu y Quezon City: University of Hawaii Press and Ateneo de Manila University Press).
- Aguilar, Filomeno, Jr. 2002 *Filipinos in Global Migrations: At Home in the World* (Quezon City: Philippine Migration Research Network y Philippine Social Science Council).
- Aguilar, Filomeno, Jr. 2003 "Global Migrations, Old Forms of Labor, and New Transborder Class Relations" en *Tonan Ajia Kenkyu (Southeast Asian Studies)*, 41(2), pp 137-161.
- Battistella, Graziano y Paganoni, Anthony (eds.) 1996 *Asian Women in Migration* (Quezon City: Scalabrini Migration Center).
- Bautista, Cynthia B. 1989 "The Saudi Connection: Agrarian Change in a Pampangan Village, 1977-1984" en Hart, Gillian, Turton, Andrew y White, Benjamin (eds.) *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia* (Berkeley, Los Angeles y Oxford: University of California Press).
- Beasca, Joel y Borrero, Ted 2003 *An Evaluation of the Upland Resource Management and People's Development Assistance Project of the Upland NGO Assistance Committee (UNAC)* (Quezon City: Optima Management and Development).
- Bernstein, Henry 1981 "Concepts for the Analysis of Contemporary Peasantries" en Galli, Rosemary (ed.) *The Political Economy of Rural Development: Peasants, International Capital, and the State*, (Albany, NY: State University of New York Press).
- Bernstein, Henry 2002 "Land Reform: Taking a Long(er) View" en *Journal of Agrarian Change*, 2(4), pp 433-463.
- Cabanes, Leonora 1997 "Land Tenure Improvement in the PAICOR Estate" en *Making Agrarian Reform Work: Securing the Gains of Land Tenure Improvement* (Quezon City: Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas [PhilDHRRA]).
- Chin, Christine B.N. 1998 *In Service and Servitude: Foreign Female Domestic Workers and the Malaysian "Modernity" Project* (New York: Columbia University Press).
- Constable, Nicole 1997 *Maid to Order in Hong Kong: Stories of Filipina Workers* (Ithaca, NY y London: Cornell University Press).
- Cooke, Fadzilah Majid 1999 *The Challenge of Sustainable Forests: Forest Resource Policy in Malaysia, 1970-1995* (St. Leonards, NSW y Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawaii Press).
- Cruz, Ma. Concepcion, Zosa-Feranil, Imelda y Goce, Cristeta 1988 "Population Pressure and Migration: Implications for Upland

- Development in the Philippines” en *Journal of Philippine Development*, 15(1), pp 15-46.
- Fukui, Seiichi 1995 “The Role of Land Pawning in Securing Loans: The Case of *Sangla* in the Philippines” en *Developing Economies*, 33(4), pp 397-409.
- Fuwa, Nobuhiko 1996 “Social Stratification and Mobility in a Pangasinan Barrio, 1962-1994” en *Pilipinas*, 26 (primavera), pp 33-66.
- Ghate, P.B. 1988 “Informal Credit Markets in Asian Developing Countries” en *Asian Development Review*, 6(1), pp 64-85.
- Kanok Rerkasem 1996 “Population Pressure and Agrobiodiversity in Marginal Areas of Northern Thailand” en Uitto, Juha I. y Oho, Akiko (eds.) *Population, Land Management, and Environmental Change: UNU Global Environmental Forum IV* (Tokyo: United Nations University Press).
- Kay, Cristóbal 2002 “Chile’s Neoliberal Agrarian Transformation and the Peasantry”, en *Journal of Agrarian Change*, 2(4), pp 464-501.
- Kerkvliet, Benedict 1995 “Village–State Relations in Vietnam: The Effect of Everyday Politics”, en *Journal of Asian Studies*, 54(2), pp 396-418.
- Kerkvliet, Benedict Tria y Selden, Mark 1998 “Agrarian Transformations in China and Vietnam” en *China Journal*, julio, 40, pp 37-58.
- Kitching, Gavin 1998 “The Revenge of the Peasant? The Collapse of Large-Scale Russian Agriculture and the Role of the Peasant ‘Private Plot’ in that Collapse, 1991–97” en *Journal of Peasant Studies* 26(1): 43–81.
- Kratoska, Paul 1985 “The Peripatetic Peasant and Land Tenure in British Malaya” en *Journal of Southeast Asian Studies*, 16(1), pp 16-43.
- Kung, James K.S. y Putterman, Louis 1997 “China’s Collectivisation Puzzle: A New Resolution” en *Journal of Development Studies*, 33(6), pp 741-63.
- Mapalad Agrarian Reform Monitor* 1998 “The Mapalad Hunger Strike and Agrarian Reform” en *Mapalad Agrarian Reform Monitor*, enero, pp 1-7.
- Nagarajan, Geetha, David, Cristina y Meyer, Richard 1992 “Informal Finance through Land Pawning Contracts: Evidence from the Philippines” en *Journal of Development Studies*, 29(1), pp 93-107.
- Otsuka, Naoki 2002 “Land-use Rights and Its Transfer in Changing Vietnam: A Case Study at Mekong Delta Region” en Umehara, Hiromitsu (ed.) *Agrarian Transformation and Areal Differentiation in Globalizing Southeast Asia* (Tokyo: Rikkyo University Centre for

RECUPERANDO LA TIERRA

- Asian Area Studies).
- Peluso, Nancy 1992 *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java* (Berkeley: University of California Press).
- Poffenberger, Mark (ed.) 1999 *Communities and Forest Management in Southeast Asia* (Berkeley, CA y Gland: Asia Forest Network and IUCN–World Conservation Union).
- Popkin, Samuel 1979 *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam* (Berkeley, Los Angeles y London: University of California Press).
- Rawal, Vikas 2001 “Agrarian Reform and Land Markets: A Study of Land Transactions in Two Villages of West Bengal, 1977–1995” en *Economic Development and Cultural Change*, 49(3), pp 611-630.
- Rigg, Jonathan 2002 “Land and Livelihoods in Southeast Asia: Breaking the Bond?” en Umehara, Hiromitsu (ed.) *Agrarian Transformation and Areal Differentiation in Globalizing Southeast Asia* (Tokyo: Rikkyo University Centre for Asian Area Studies).
- Scott, James 1976 *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven, CT y London: Yale University Press).
- Scott, James 1985 *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven, CT y London: Yale University Press).
- Turton, Andrew 1989 “Local Powers and Rural Differentiation” en Hart, Gillian Turton, Andrew y White, Benjamin (eds.) *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia* (Berkeley, Los Angeles y Oxford: University of California Press).
- Weyland, Petra 1993 *Inside the Third World Village* (New York: Routledge).
- World Bank 1989 *Environment and Natural Resources Management Study: A World Bank Country Study – Philippines* (Washington, DC: World Bank Group).

MINAR PIMPLE*
MANPREET SETHI**

OCUPACIÓN DE TIERRAS EN INDIA: EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS

LA TIERRA, en su interpretación más integral, que incluye el agua, bosques, montañas y minas, es la base de toda vida humana. Satisface las necesidades fundamentales de alimentación, ropa y refugio. Significativamente, para el 70% de los indios dependientes de la agricultura, la tierra no es simplemente una forma de subsistencia, es también una forma de vida. Y aun para aquellos que no la poseen, es una fuente de sustento y el medio de su supervivencia.

Dada esta importancia de la tierra, su propiedad y sus patrones de uso impactan fuertemente en el bienestar económico de una nación, así

* Minar Pimple fue asociado y coordinador *senior* de Foco sobre el Sur Global, Programa de la India. Es fundador de YUVA, una organización de Derechos Humanos que trabaja en India. Actualmente es director ejecutivo de PDHRE, Nueva York. Obtuvo su maestría en trabajo social de la Universidad de Bombay y ha escrito ampliamente sobre temas de justicia social. Ha estado involucrado con movimientos de tierras y antidesalojo/desplazamiento durante más de dos décadas.

** Manpreet Sethi ha sido asociado de Investigación y coordinador de Proyectos de Reformas Agrarias, Foco en el Sur Global, Programa de la India, Mumbai. Obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Jawaharlal Nehru, donde se especializó en estudios de América Latina. Ha escrito profusamente en revistas nacionales e internacionales y es autora de *Argentina's Nuclear Policy* (1999) [*Política nuclear argentina*] y co-autora de *Nuclear Deterrence and Diplomacy* (2004) [*Disuasión nuclear y diplomacia*].

RECUPERANDO LA TIERRA

como en el bienestar social de sus personas. Históricamente, la tierra en tanto recurso productivo crucial ha sido la base de la acumulación capitalista, un prerrequisito para la industrialización en todo el mundo. De hecho, el valor de la tierra yace no sólo en su potencial de producir alimentos, sino también en su capacidad de energizar la movilidad económica y social. Este potencial cobra mayor significado en una sociedad de castas como la de la India, que está social y económicamente estructurada de manera jerárquica.

El sistema de castas, que evolucionó como una manera de división del trabajo varios siglos atrás, predetermina el estatus de un individuo y su lugar en la sociedad desde el nacimiento. Ello decide posteriormente el acceso a los recursos naturales, materiales y aun espirituales¹. Las dos castas superiores –los *Kshatriyas*, la clase dirigente, y los *Brahmines*, la clase sacerdotal– disfrutaban del máximo acceso a la tierra y del conocimiento, dos factores determinantes de la posición social. Los *Vaishyas*, o la clase comercial, son los que venían luego; mientras los *Shudras*, las clases retrasadas, eran en su mayoría artesanos y productores; y los *Atishudras*, o intocables, estaban en el último escalón de la jerarquía social. A pesar de que el sostenimiento del sistema de castas ha perdido vitalidad en las áreas urbanas, permanece bastante aferrado en el campo. Aún hoy, mientras más alto se esté situado en esta pirámide social de castas, mayor es el poder y control sobre los de abajo y sobre el acceso a los recursos naturales y a otros. Además, en India como en muchas otras sociedades, la propiedad es sostenida y heredada mayormente por los hombres. Esto es así a pesar del papel significativo que juegan las mujeres haciendo productiva la tierra, nutriéndola y cosechando los diversos productos. Pero, para ellos, el acceso y el control sobre la tierra están determinados por su estatus de casta y por su género. Por eso, la propiedad delimita el acceso a recursos políticos y económicos y gobierna las relaciones sociales, productivas y reproductivas.

Estas relaciones encuentran expresión en las leyes estatutarias modernas y en las regulaciones de la propiedad, que identifican patrones estrictos de propiedad y de uso de la tierra. De hecho, bajo la doctrina del dominio eminente, el Estado ha asumido ahora un total derecho de propiedad del espacio geográfico del país y sólo él tiene el poder para otorgar los derechos de posesión de las tierras a sus ciudadanos, incluyendo los recursos por debajo y por encima de ella. El derecho exclusivo sobre un trozo de terreno, sin embargo, encarna para otros un desposeimiento

¹ La casta se desarrolló en una sofisticada filigrana de interconexiones y divisiones sociales, aun teniendo sanciones religiosas, por las cuales la responsabilidad de los malestares y opresiones sociales está separada de lo individual y difundida en un universo metafísico.

concomitante. Mientras que elaboradas reglas y regulaciones de la tierra gobiernan esta posesión y el estado de derecho es un signo estimado por la sociedad civilizada, el hecho es que aun en las democracias, las leyes son a menudo meras creaciones de una elite económica y social que intentan conservar el *statu quo* o, al menos, asegurar que las reformas y otras legislaciones progresistas no pongan en peligro el sistema.

POLÍTICAS Y REFORMAS AGRARIAS

LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Como base de toda actividad económica, la tierra puede servir como un activo esencial para que el país logre crecimiento económico y equidad social, o ser utilizada como una herramienta de la elite para secuestrar su independencia económica. Durante los dos siglos de subyugación colonial británica, la tradicional propiedad agraria y los patrones de utilización de tierras indias se modificaron para facilitar a los empresarios británicos su adquisición a bajos precios para la minería, plantaciones y otras actividades económicas. La introducción extendida de la propiedad privada deslegitimó los sistemas de la propiedad comunal tradicional de las comunidades indígenas. Con la introducción del impuesto territorial bajo Ley de Asentamiento Permanente de 1793, los británicos promovieron un sistema agrario semifeudal. La propiedad y el control de la tierra se concentraron en unos pocos dueños y agentes comerciales, cuya principal intención fue extraer de los inquilinos una renta máxima, ya sea en dinero efectivo o en especias. Bajo este arreglo, el aparcerero o el colono tenían poca motivación económica para desarrollar tierras de labrantío y para incrementar la producción. Naturalmente, un cultivador que no había tenido seguridad de tenencia y estaba obligado a pagar una alta proporción de su producción en rentas se mostraba menos interesado en invertir dinero en mejoramientos para las tierras o en usar una variedad de alta productividad u otros insumos caros que generaran ingresos más altos. Al mismo tiempo, tampoco al propietario ausente le preocupó particularmente mejorar la condición económica de los cultivadores. Como consecuencia, en la época de la independencia, la productividad agrícola era baja y la opresión de los inquilinos, alta. Esto también dio lugar a numerosas luchas de inquilinos por las tierras en diversas partes de la India, que contribuyeron significativamente al mayor movimiento de libertad contra el gobierno colonial británico.

En los años inmediatamente posteriores a la independencia de la India, un proceso consciente de construcción nacional comenzó a preocuparse por la cuestión de la tierra con urgencia apremiante. De hecho, el objetivo nacional de abolición de la pobreza fue vinculado al progreso simultáneo que dependió de dos frentes: realzar la productividad agrícola

RECUPERANDO LA TIERRA

y comprometerse a distribuir la tierra de forma equitativa. En este esquema, las reformas agrarias fueron visualizadas como un importante pilar para un país fuerte y próspero, comprometido con la justicia social. Los primeros cinco años consignaron cantidades presupuestarias sustanciales para la implementación de tales reformas. Incluso se registró cierto éxito en algunas regiones y estados, especialmente en las áreas de abolición de intermediarios, con protección de inquilinos, racionalización de sistemas diferentes de tenencia y la imposición de topes a la tenencia de tierras. Medio siglo más tarde, sin embargo, la cuestión agraria está lejos de ser resuelta. La mayor parte de la legislación para la reforma agraria siempre se ha quedado corta en el desmantelamiento completo de las posesiones de la elite terrateniente. La redistribución de la tierra adquirida por el gobierno a través de la imposición de reglas con tope, mediante el Bhoodan (donación de la tierra) voluntario o de otras maneras, nunca ha alcanzado un grado sustantivo². Más bien, la carencia de tierras ha estado en ascenso debido a múltiples factores, que dieron como resultado el aumento del desempleo, una disminución en la seguridad alimenticia y pobreza. Los intereses creados de la elite terrateniente y su poderoso nexo con la burocracia estatal han tendido a bloquear las reformas agrarias significativas y/o su implementación fervorosa. Los oprimidos han sido cooptados con algunos beneficios nominales o adicionalmente subyugados, en la medida en que el nuevo foco puesto en la liberalización, la privatización y la globalización ha alterado las prioridades del gobierno y las percepciones de la elite. Como consecuencia, estamos hoy en presencia de una crisis de la cuestión agraria, en la que la tierra se ha convertido progresivamente en un asunto de vivienda, inversión y construcción de infraestructura para la elite urbana educada, que está también entre los que toman las grandes decisiones. Así, se ha perdido, en gran medida, la noción de la tierra como base de la subsistencia, la supervivencia, la justicia social y la dignidad humana.

NEOLIBERALISMO Y TIERRA

La implementación del modelo neoliberal no ha dejado ni un solo factor de producción económico ileso. La tierra y otros temas relacionados

2 El movimiento Bhoodan fue iniciado por Acharya Vinoba Bhave, quien exhortó a la elite hacendada a entregar voluntariamente las tierras que excedían el tope, a fin de que pudiera ser redistribuida entre los pobres y sin tierras. Inició el movimiento en la región Telangana, en 1951. Viajó alrededor de 80 mil kilómetros a pie por toda la India con esta demanda, hasta 1969. Recibió donaciones de tierras de casi 17 millones de hectáreas de medio millón de donantes. Sin embargo, sólo cerca de la mitad de esta tierra pudo ser redistribuida, dado que el resto no era adecuado para la agricultura, había sido usurpada o sus documentos pertinentes no estaban disponibles. Ver Das (2000).

también se vieron afectados. El hecho de ponderar la tierra como un activo productivo crucial hace que se la tome como una mercancía para ser intercambiada para la maximización de la eficiencia y las ganancias. Como consecuencia, se ha producido una transformación en la tenencia de la tierra en favor de la privatización, y la mayor parte de las actividades relacionadas con la tierra se convirtieron en empresas comerciales. En el intento de maximizar el rendimiento por hectárea a través del uso cada vez mayor de recursos externos o de su empleo para otros propósitos comerciales, muchas tierras están siendo alienadas con poco cuidado a aquellos que tradicionalmente pudieron haber subsistido en ella, a menudo sin posesión legal.

Las consecuencias de estas tendencias, sin embargo, están extendidas y son profundas. Por un lado, el pequeño agricultor se convierte en víctima de las fuerzas económicas globales que fijan su supervivencia a la habilidad que posea para adaptarse a las demandas del mercado agrícola. Se ve impulsado a cambiarse hacia cultivos comerciales en función de lograr precios superiores y a buscar créditos agrícolas para pagar los caros recursos externos, como fertilizantes y pesticidas. Pero esta comercialización de la agricultura de gran escala, la introducción de corporaciones multinacionales en la agricultura y el uso extensivo de recursos externos (como el crédito, semillas, fertilizantes y pesticidas) erosionan la viabilidad del cultivo de subsistencia, llevan al abandono de la agricultura y a la depresión de la venta de tierras. Desde un punto de vista socio-económico, las repercusiones de estos hechos son visibles en las crecientes desigualdades de la concentración de la tierra. Los datos de 1999, provistos por el National Sample Survey, indican que cerca del 63% de la población dependiente de la agricultura posee minifundios de menos de una hectárea, mientras las grandes parcelas de diez hectáreas o más están en manos de menos del 2% de la población. El número absoluto de los sin tierra, o casi sin tierra (aquellos que poseen hasta 0,2 hectáreas), constituye el 43% de los grupos familiares campesinos totales (NIRD, 2000).

En otro nivel, con el destino de más tierras para vivienda, la industria, el desarrollo de la infraestructura, los complejos de entretenimiento y las reservas naturales, y sin la atención adecuada a la rehabilitación de los desplazados, el número de pobres y sin tierra está en ascenso (NCAS, 2001). Al perder el control sobre su subsistencia, los desposeídos o continúan buscando empleo y la supervivencia en áreas rurales/boscosas o migran hacia las áreas urbanas. Obviamente, esta migración involuntaria deriva en la superpoblación y agobia la –a menudo no planeada– infraestructura de la ciudad. Así, los barrios bajos proliferan y las ciudades se expanden, ocupando y rodeando la tierra con poco aprecio por su valor cultivable o ecológico.

RECUPERANDO LA TIERRA

En todo caso, bajo las modernas leyes de la Constitución india –que proclaman el compromiso por un orden socio-económico igualitario– los desposeídos y los sin tierra son tratados como intrusos, ya que se mudan a las ciudades y ocupan tierra urbana o se instalan sobre recursos de propiedad comunal de las aldeas, como tierras de pastoreo o para entierros, o sobre alguna otra parcela de bosque o páramo. La moderna ley estatal está también en conflicto con ley consuetudinaria. Bajo la aplicación de políticas agrarias neoliberales, como la regularización de los sistemas de registros de tierras y la implementación de escrutinios catastrales para establecer la propiedad de tierra no disputada, los ocupantes tradicionales de tierras bajo el derecho consuetudinario enfrentan la posibilidad y la realidad de convertirse en usurpadores ilegales en tierras que han cultivado y mantenido por generaciones. Son vulnerables y están sujetos a un desalojo sumario.

ALIENACIÓN DE TIERRAS LLEVADA A CABO POR EL ESTADO

La forzada alienación de la tierra por el Estado en nombre del desarrollo, “la utilidad pública”³ o por empresas públicas tiene severas repercusiones en la subsistencia de los pobres y los sin tierras. En India, tres tipos de tierra pública están especialmente bajo disputa: bosques bajo el control estatal, tierras comunales (como pastos y bosques locales), y los espacios públicos entre los asentamientos aldeanos.

El área de bosques y tierras comunales y la posibilidad de las personas de acceder a ellas han declinado continuamente, en particular desde que las políticas neoliberales fueron vigorosamente puestas en práctica. Debido a la alta dependencia de la población rural de estas tierras para obtener materias primas, combustible, alimentos suplementarios y otros artículos básicos, esta disminución ha debilitado sustancialmente los sistemas de seguridad de subsistencia de grupos familiares rurales pobres. Ello los ha conducido a ser los llamados intrusos en las tierras gubernamentales. Por otra parte, los intrusos en tierra estatal son a menudo también grandes capitalistas con planes de expansión, como ministros del gobierno o ricos dueños de plantaciones (Sharma, 2003).

BOSQUES Y TRIBUS

Hasta finales del siglo XIX, la tierra y los bosques casi a todo lo largo de la India pertenecieron a comunidades tribales. Las tierras eran administradas por los ancianos del pueblo, que otorgaban derechos de

3 Con el correr de los años, la “utilidad pública” ha adquirido inmunidad en los juzgados frente al desafío. Los tribunales, generalmente, han sostenido el punto de vista de que la percepción de un Estado sobre aquello que constituye la “utilidad pública” está por encima de la revisión judicial.

usufructo a familias separadas. No existía el concepto de “posesión” o “título exclusivo” dentro de la comunidad. La propiedad era entendida como “el respeto mutuo y el reconocimiento del acceso de un individuo o de una familia a una parcela separada de tierra para ser usada para los “requerimientos especiales de la familia” (Prabhu, 2002: 249).

La Ley Forestal India de 1878 facultó sin embargo al gobierno para declarar cualquier tierra cubierta de árboles o cualquier matorral como bosque de su propiedad y para crear las reglas de su administración. Los bosques fueron divididos en aldeas, reservas y tierras protegidas, con varias restricciones de uso a las dos últimas. Así, la ley alteró radicalmente la naturaleza de la propiedad comunal y, en varios casos, se apropió de tierras usadas por comunidades tribales. El énfasis, más bien, estaba en sacar provecho de los bosques para aumentar los ingresos estatales.

Bajo la Constitución india, ciertas áreas han sido especialmente designadas como Áreas Tribales en la región del nordeste y como Áreas Programadas en el resto de país. Estas disposiciones fueron originalmente incorporadas para el bienestar y el avance del Programa de Tribus y constituyeron un reconocimiento al hecho de que estas comunidades tenían algunos requerimientos especiales. Pero, con el paso del tiempo, las legislaturas estatales continuaron prolongando los derechos administrativos generales para estas áreas y, por consiguiente, negando a los tribales la necesidad de estructuras institucionales especiales. Esto ha generado un conflicto entre los sistemas tradicionales y las instituciones formales, especialmente respecto del derecho de los pueblos tribales sobre la tierra y los recursos con los que podrían haber subsistido durante siglos sin propiedad formal de la tierra. A partir de la política colonial sobre los bosques, continuada bajo el Estado poscolonial, la intrusión de la economía formal, que privilegia el “derecho individual” y el afán de lucro, ha socavado sistemáticamente el sistema informal de los tribales y su subsistencia.

El conflicto se agravó adicionalmente por el influjo de no tribales en áreas tribales y su asumido dominio sobre la tierra. Ciertas reglas del Quinto Plan⁴ no permiten la venta de tierra tribal a terceros, excepto a un órgano de gobierno o a una cooperativa tribal. Incluso, a falta de un marco más comprensivo, esto no ha sido suficiente. Más bien, un plan gubernamental falto de previsión, que tuvo como meta desarrollar la infraestructura para mejorar el acceso y el desarrollo de regiones tribales, ha resultado particularmente desastroso; a medida que

4 Un rasgo importante de las cláusulas constitucionales bajo el Fifth Schedule es que el marco legal e institucional para las áreas tribales sea diseñado en consonancia con las instituciones de la gente en estas áreas.

RECUPERANDO LA TIERRA

se multiplicaban las inversiones, lo mismo sucedía con los forasteros, mientras que los derechos de los tribales sobre sus recursos se fueron estrechando⁵.

La pérdida del control tribal sobre los recursos naturales tradicionales se ha materializado bajo cinco formas de alienación de tierras. La primera es la reserva forestal. Con la declaración de grandes trechos de bosques como áreas reservadas o protegidas, el gobierno ha expandido su control sobre varios sectores. Muchas tierras aldeanas también han sido incluidas en bosques de reserva, cuyos habitantes fueron desalojados⁶. Esta tendencia comenzó a funcionar, de hecho, a finales de 1800, bajo el gobierno británico, cuando las aldeas de los bosques fueron separadas en bloques, incluyendo páramos y tierras cultivables, y declaradas fuera de los límites de los tribales. Fuera de estos bloques yacen las áreas de bosque protegidas, en las que los derechos estaban regulados o reducidos. En algunos casos, el Departamento de Bosques les ha permitido quedarse a ciertas aldeas, pero en la mayoría de los casos, los tribales terminan sirviendo como trabajadores libres y baratos para los funcionarios forestales. La situación empeora por el hecho de que los administradores forestales también poseen, a menudo, facultades judiciales y policiales.

En un caso reciente, en 1998, mediante un proyecto de la Dirección Conjunta de Bosques apoyado por el Banco Mundial se hizo un intento por regularizar las usurpaciones en las aldeas del bosque. Pero incluso en este caso, el problema fundamental del control estatal sobre las vidas tribales no tuvo alivio. Al anunciar el proyecto, 476.596 personas presentaron sus solicitudes para la regularización, pero sólo 148 mil fueron identificadas como candidatas a obtener los títulos de propiedad de las tierras, aunque éstos también debían ser expresamente autorizados por el gobierno central bajo la Ley de Conservación de Bosques de 1980 (Ramanathan, 2002: 212).

La segunda forma de alienación de tierras es el arrendamiento de bosques a los industriales para el corte de madera, la regeneración, el negocio del agro o empresas de turismo. Un importante ejemplo del arrendamiento de tierras yermas y bosques degradados para la industria se produjo en Karnataka, donde en 1977 el Estado otorgó 30 mil hectáreas

5 En West Bengal, Karnataka, Kerala y Tamil Nadu, el proceso de planificación aún no ha comenzado, si bien los subplanes tribales han estado funcionando durante los últimos veinte años. Ver Sharma (1997).

6 Un claro ejemplo de esta inclusión ilegal de aldeas en bosques reservados es Bihar. El Departamento Forestal del Estado ha dibujado mapas nuevos que incluyen dos aldeas tribales de la región Porahat Pargana del distrito Singhbhum como bosques reservados, mientras los mapas de la aldea de 1932 los muestran claramente como tierras pertenecientes a los aldeanos.

de barbecho a dos compañías, Mysore Paper Mill y Karnataka Pulpwood. El propósito fue emprender la regeneración de la tierra forestal a fin de producir materias primas para la industria del papel. Como el gobierno comenzó a transferir tierras según este acuerdo, a los pueblos tribales que subsistían gracias a ellas les fue negado el acceso a los pastizales y bosques que abastecían sus requerimientos diarios de leña y pasto. Más de estos ejemplos salen a la luz bajo la tendencia económica global hacia la privatización que está tentando a los gobiernos estatales.

Una tercera forma de alienación es posibilitada por la adquisición de tierras mediante la Ley de Enmienda, que simplifica los procedimientos de adquisición a través del control estatal o de empresas estatales sobre la base de servir a una “utilidad pública”. Mientras el terrateniente y otras “personas interesadas”, definidos bajo la ley, reciben alguna compensación por la adquisición de tierras, los obreros sin tierras, los artesanos y los cultivadores de la tierra del bosque no son considerados “personas interesadas” y, por lo tanto, no tienen derecho a la compensación por la pérdida de sus ingresos.

La cuarta forma es la exclusión de áreas boscosas, un asunto que ha adquirido más estridencia en parques nacionales y santuarios de fauna silvestre. Bajo la Ley de (Protección) de la Vida Silvestre de 1972, los parques nacionales y los refugios se han convertido en la zona de enfrentamiento entre activistas ecológicos y tribales. El cercamiento de áreas demarcadas como parques nacionales y refugios invariablemente desplaza a las comunidades que por mucho tiempo pudieron haber vivido en o fuera de esas tierras. También degrada sus derechos tradicionales que, a su vez, se convierten en “licencias” que les permiten acceso limitado. Incluso esto último fue visto como inaceptable por los activistas ecológicos, que en diversos casos judiciales describieron a los tribales como una amenaza para la biodiversidad y la ecología del área. De hecho, la redefinición de lo tribal como “enemigo” de la ecología y del forastero como “protector” se ha convertido en una parte extendida en el pensamiento actual.

Una quinta y última experiencia de alienación se presenta en forma extraoficial, extorsiva. En el distrito Dang, de Gujarat, principalmente habitado por tribales, el Departamento Forestal cobra rentas a cambio de un permiso para quedarse en la tierra. Al mismo tiempo, el Departamento Forestal niega la existencia de “usurpaciones” en los bosques. No están disponibles los números oficiales para el grado de usurpación, dado que no es reconocida, pero según un escrutinio ejecutado en 1995 y 1996 se estimó que unos 726 tribales Bhil cultivaban 4.493 acres de tierra en dieciocho aldeas (Engineer, 2002: 312–314).

El resultado global de la alienación estatal de tierra es que los derechos tradicionalmente poseídos por las comunidades del bosque se

RECUPERANDO LA TIERRA

redujeron progresivamente. No es sorprendente, por consiguiente, que el desorden social haya emergido en las áreas afectadas, en forma de movimientos de base de la población rural en defensa de la forestación, tomando algunas de sus zonas para preservación y regeneración.

TIERRAS ALDEANAS COMUNALES Y *DALITS*

Los recursos de propiedad comunal –definidos como “recursos naturales comunitarios, donde cada miembro tiene facilidad de acceso y uso con deberes especificados, sin que nadie tenga derechos de propiedad exclusivo sobre ellos” (ver Ramanathan, 2002)– son un aspecto integral de los planes sociales e institucionales elaborados para hacer frente a los requerimientos diarios de las comunidades aldeanas. Son de relevancia particular para los sin tierras, trabajadores agrícolas y artesanos rurales. Los *dalits* (las comunidades antiguamente intocables) constituyen la categoría más grande de personas sin tierra en el sector agrario. Los estudios de los estados de Bihar y Uttar Pradesh señalan que los *dalits* están concentrados entre los trabajadores agrícolas, incluso desde que bajo el sistema tradicional de casta fueron excluidos de la propiedad territorial. Consecuentemente, sus estrategias de supervivencia han obtenido como resultado recursos de propiedad comunal. Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo en siete estados en las regiones semiáridas de India, las tierras comunales parecían dar cuenta del 9-26% del ingreso doméstico de los sin tierra y de los agricultores marginales, del 91-100% de sus necesidades de leña, y del 69-89% de sus necesidades de pastoreo (Jodha, 1986). Sin embargo, con la progresiva escasez de la tierra comunal y de los recursos de sustento debida a la posesión estatal o a la privatización, los *dalits* están enfrentando una situación cada vez más difícil, tal como denuncian los dos ejemplos detallados a continuación.

El primero es el caso del “las tierras de Maharvatan”, en la región oeste de Maharashtra. Durante los tiempos feudales del Nizam, a las comunidades Mahar, una de las castas anteriormente mencionada como intocable, les fueron provistas tierras en aldeas para el servicio de rescate de desechos en la basura que realizaban. Sin embargo, no hubo constancias escritas y, en años posteriores, a menudo los Mahars fueron desalojados o el control sobre sus tierras denegado. Se estima que los fuertes y poderosos han captado casi 24 mil acres de estas tierras. Las luchas para asegurar la posesión permanente de la comunidad Mahar –como las iniciativas del prominente miembro y legislador Dr. Ambedkar⁷– lograron la promulgación de la legislación de tierras de

7 El presidente del comité que redacta la Constitución india, primer ministro judicial de India, y miembro de la comunidad de castas Mahar. Se convirtió en el líder principal del movimiento de toda la India en contra de la opresión de castas.

Maharvatan por el gobierno de Maharashtra, pero ello no ha afectado el enorme número de acres ya ocupado por otros sectores de la sociedad. De hecho, el gobierno estatal publicó el informe preparado por la Comisión Patil en este asunto después de más de una década de lucha.

En otra instancia más reciente, el gobierno de Tamil Nadu inició un programa de desarrollo de páramos que abrirá el camino a la entrada de grandes intereses corporativos en el sector agrícola del Estado y es probable que despoje a miles de agricultores de su tierra y sustento (Vishwanathan, 2003). La Agencia de Desarrollo de la Cuenca Tamil Nadu (TAWDEV) se ha constituido para implementar el programa, que tiene dos componentes: un esquema de desarrollo participativo de la cuenca y un plan para desarrollar el páramo gubernamental junto con el sector corporativo, compañías pequeñas y cooperativas. En ninguna de las órdenes de gobierno (OG) expedidas se ha propuesto una definición cristalina de "páramo". La primera OG de septiembre de 2001 manifestó que el esquema sólo cubría baldíos y barbechos cultivables, omitiendo pastizales permanentes. La segunda OG, de mayo de 2002, declaró que el primer componente del programa cubriría "una cuenca con un área estimada de 2,15 hectáreas lakh". La tercera OG, de julio de 2002, declaró que el programa implicaba desarrollar "páramos cultivables" y se agregó que el "único" programa que involucraba al sector corporativo sería ocupado en bloques de tierra que permanecieran "baldías y en barbecho". En muchos lugares, incluso tierras de pastura han sido identificadas como páramos. Por ejemplo, de las casi 10 mil hectáreas de tierra identificadas como páramos por la gerencia del distrito Kancheepuram, aproximadamente 8 mil son tierras de pastura (Vishwanathan, 2003).

De hecho, con el transcurso de los años, grandes lotes de tierra declarados en registros del gobierno como "páramos" han sido arados por miles de pequeños y marginales agricultores sobre la base de la garantía de funcionarios gubernamentales de que los *pattas* (documentos de la propiedad de la tierra) serían expedidos para ellos a su debido momento. En el pueblo de Kilapaakkam-Vellappandal, por ejemplo, los *dalits* reclaman que la tierra Panchami de una superficie de aproximadamente 1,5 hectáreas *lakh* les había sido asignada hace décadas. Estos *dalits* son los descendientes de doscientas familias, cada una de las cuales recibió del gobierno una tierra que valía 44 centavos (0,2 la hectárea) a principios de 1960 en virtud de una resolución aprobada por el Panchayat local (los ancianos de la aldea con poder de adjudicación sobre los asuntos locales). Pero con los años, ningún documento legal se hizo disponible, y su tierra se tornó vulnerable a ser identificada como páramo y a la amenaza de la adquisición corporativa.

Más de doscientas corporaciones en todo el país, incluyendo algunos gigantes industriales, están entusiasmadas por participar en el

RECUPERANDO LA TIERRA

programa. Están entre los más de mil quinientos solicitantes de un paquete que ofrece no sólo tierras con arrendamiento a largo plazo con tasas baratas sino también la asistencia gubernamental en futuras vinculaciones con las facilidades que ofrece el mercado. La entrada de empresas en la agricultura presentará una amenaza al derecho del sustento de la gente y a su derecho al acceso a los recursos naturales. Al mismo tiempo están, probablemente, por hacer pozos de agua profundos, lo cual disminuirá el nivel de agua subterránea y causará intensa escasez, con efectos adversos para los pequeños agricultores. En síntesis, la incapacidad de los pequeños agricultores para competir con el gran capital tendrá como resultado una mayor alienación de tierras.

Otras amenazas derivan de la violación de la Ley de Tope de Tierras de Tamil Nadu y de otras leyes relacionadas con la tierra y la tenencia. Mientras que la Ley de Tope de Tierras ha fijado en quince acres estándar (seis hectáreas estándar) el máximo de posesión, el programa intenta entregar centenares de hectáreas de tierra a personas jurídicas. También tiene pensado el arrendamiento de terreno comunal de aldeas al gobierno, un paso que es en violación del Acta de Panchayat, bajo la cual las instituciones de *panchayati raj* tienen el derecho y control sobre el terreno comunal. Según críticos del programa, los *dalits*, que integran un porcentaje significativo del 86,55 de trabajadores *lakh* sin tierra en el Estado, sufrirán el mayor impacto y se verán empobrecidos por la pérdida de empleo.

LAS DINÁMICAS DE LAS OCUPACIONES DE TIERRAS

A diferencia de las experiencias en varios países latinoamericanos y africanos, las ocupaciones de tierras en la India han sido menos organizadas y más pequeñas en proporción. En tanto los ocupantes tradicionales de recursos propietarios comunales y de bosques y otros aldeanos comunales son expulsados en el transcurso de la alienación de tierras llevada a cabo por el Estado, la tendencia de los desalojados es a reacomodarse en otras áreas en busca de un sustento. Hubo pocas ocupaciones premeditadas de tierra. Puede haber muchas razones para esto.

Primero, en la cultura india, quizá más que en muchas otras, la tierra no es percibida de una manera separada, solamente como un medio de producción. Más bien provee un arraigo religioso, espiritual y cultural y una identidad para el individuo o la comunidad. Por eso, a las personas les resulta difícil no sólo abandonar la tierra de sus antepasados, hacia la cual tienen un sentimiento de pertenencia, sino también ocupar otra tierra en cualquier otra parte, donde no tengan tal unión.

En segundo lugar, a pesar del gran tamaño del país, pero probablemente por las enormes presiones de la población, no hay suficientes

tierras desocupadas disponibles para ocupación en la India. Esto representa un marcado contraste con la situación de países como Brasil, donde enormes lotes de terreno, estimados en más del 60% de las tierras de labrantío, permanecerían desocupados (Frank, 2002).

En tercer lugar, estrictas leyes y políticas de tierras han dificultado la ocupación. Bajo la doctrina de dominio eminente, el Estado reclama la propiedad de toda tierra que no sea propiedad privada y, por lo tanto, la posibilidad de ocupar tierras desocupadas está sumamente limitada.

En cuarto lugar, el fuerte nexo entre la elite terrateniente, los políticos, los legisladores y los burócratas hace sumamente riesgosa la ocupación de tierras. De hecho, dado el factor de casta en la política rural, el dueño y el político son a menudo la misma persona.

En quinto lugar, las instancias de regularización de tierra ocupada han sido pocas y a grandes intervalos y disuaden a otros de dar el paso. En algunos países existe un proceso por medio del cual la ocupación continuada de tierra, después de un período especificado, conduce a la adquisición de su titularidad. En la India, esto también es visualizado como un proceso legítimo para brindar seguridad a aquellos incapaces de probar la propiedad original y los actos de regularización de la tenencia se han basado en esta premisa. Sin embargo, en tiempos recientes, algunas veces aun a pesar de que el gobierno ordenara la regularización, ésta no ha sido implementada. Incluso donde los gobiernos estatales tienen acordadas fechas hasta las cuales las usurpaciones de tierras pueden ser regularizadas, las autoridades que las implementan se abstuvieron, por una razón u otra, de proveer la escritura de la propiedad a los ocupantes.

En sexto lugar, existe una falta de movilización política adecuada en todo el país entre los sin tierras. En lugar de estar unidos en función de su clase, permanecen profundamente fragmentados por la casta, las líneas étnicas y las religiosas. Además, las luchas por la tierra tienden a diferir significativamente: por ejemplo, los *dalits* luchan por la propiedad, mientras que las comunidades indígenas/tribales luchan por la protección de sus tierras y posesiones. Estas luchas también difieren de las de los pequeños y medianos agricultores, quienes se esfuerzan no sólo por retener su tierra, sino también por hacerla más productiva y adquirir o realzar su influencia política. Es interesante observar que en las áreas donde los partidos comunistas estaban activamente involucrados en la organización de los sin tierra y de los agricultores marginales durante los períodos de pre y postindependencia la conciencia de clase es más pronunciada, mientras en otras áreas son predominantes la casta o la connotación étnica de las luchas de tierras.

RECUPERANDO LA TIERRA

Si bien las razones anteriores, en medidas diversas, pueden explicar la relativa debilidad de las ocupaciones de tierras en la India, existen algunas aisladas, aunque militantes, instancias de ocupación de tierras. Donde sea que éstas hayan sido emprendidas, fueron un intento por empujar reformas desde abajo con el doble objetivo de reafirmar el derecho de la gente a poseer una tierra y para desafiar la autoridad estatal y sus mecanismos. Algunos de estos temas son discutidos brevemente en las siguientes secciones.

JABRAN JOT (EL CULTIVO POR LA FUERZA), VIDARBHA, MAHARASHTRA

Esta lucha data del período anterior a la independencia, cuando las personas sin tierra en la región de *Vidarbha* del presente estado indio de *Maharashtra* empezaron ocupando tierras para cultivar, primordialmente en áreas boscosas. Sin embargo, incluso después de años de cultivar el mismo terreno, algunas veces durante generaciones, ninguna propiedad legal pudo instituirse debido a la escasa disponibilidad de la documentación necesaria. Al poco tiempo de la independencia, en 1947 y en 1952, *pattas* (documentos de propiedad de la tierra) fueron distribuidos por el gobierno para algunas personas, pero el proceso nunca fue completado y la mayoría de la gente todavía no los tiene.

Durante la década del sesenta, otra ola de ocupaciones tuvo lugar en los distritos de Bhandara, Gadchiroli, Chandrapur, Gondia y Nagpur. En 1972, el gobierno decidió realizar relevamientos de tierras, incluso con ayuda de las ONG, para establecer los nombres de aquellas tierras ocupadas y cultivadas y proveer los *pattas*. En 1980, bajo la ley que obtuvo fama como “One Kayda” (una ley), fue decidido que no se respetarían más usurpaciones, pero que serían regularizadas aquellas que habían ocupado la tierra anteriormente. Sin embargo, en la mayoría de los casos los documentos han resultado elusivos, puesto que la responsabilidad de la prueba de cultivo continuo es delegada al ocupante de la tierra. El ocupante debe proveer la prueba a través de evidencia favorable provista por el funcionario del erario del pueblo, el agente de aduanas, el funcionario forestal, el jefe, la policía y los vecinos. Los intereses creados y la falta de disponibilidad de uno u otro de estos funcionarios han prolongado, innecesariamente, los casos. Es posible también que un ocupante substancie su reclamo por la tierra mostrando pruebas de cultivo continuo a través de un documento completado por él para el agente de aduanas durante cada cosecha. Pero en muchas aldeas, al poco tiempo de que la disposición *One Kayda* fuera aprobada, los personeros del estado habían dejado de aceptar estos documentos de los agricultores. Como consecuencia, los ocupantes son considerados usurpadores ilegales, están privados de documentación legal a pesar de la orden del gobierno de que regularicen la ocupación, y continúan viviendo bajo la amenaza de desalojo.

**PARDI GHASIA SATYAGRAHA⁸ (LA LUCHA DE LA TRIBU PARDI GHASIA),
EL DISTRITO VALSAD, SOUTH GUJARAT**

Lanzada a principios de la década del cincuenta, esta lucha continuó durante quince años en la región de Pardi, que tiene una abrumadora mayoría de población tribal. En 1952, aproximadamente cien terratenientes poseían las tres cuartas partes de la tierra total cultivable de Pardi (Desai, 2002: 320). Estos terratenientes, sin embargo, no estaban interesados en la agricultura sino en el comercio. En lugar de cultivar la tierra, prefirieron dejar una gran porción de terreno para que la hierba pudiera ser cosechada anualmente para el lucrativo comercio forrajero. Esto no redujo simplemente a los originales habitantes tribales a la categoría de trabajadores sin tierras; la mayoría de las veces, debido al crecimiento de la hierba, aun el empleo asalariado faltaba durante la mayor parte del año. Además, no sólo la tierra de los tribales fue fraudulentamente adquirida y convertida en tierra de pastoreo, sino que también le fue negado el acceso a la hierba a su ganado.

La lucha para redimir esta situación fue emprendida en 1953. El principal objetivo del movimiento fue producir cultivos comestibles en las tierras de pastoreo, dado que consideraban un pecado que creciera hierba en tierra cultivable cuando la humanidad padece hambre. El movimiento no buscó desafiar la estructura socio-económica existente, ya que no estaba en su agenda declarar categóricamente la cuestión de la desigual propiedad de la tierra y, por lo tanto, de su redistribución. En septiembre de 1953, habiendo notificado previamente al gobierno, se comenzó el *satyagraha* en el pueblo Dumlav, donde aproximadamente mil cincuenta miembros de la tribu, incluyendo noventa y cinco mujeres, entraron en una parcela privada de un terrateniente y empezaron a labrar la tierra. Como era de esperar, los *satyagrahis* fueron arrestados. Pero a lo largo de las semanas, el movimiento presenció una inmensa movilización política, incluyendo una exitosa llamada a boicotear todo el trabajo de corte de hierba. En 1955, el gobierno de Bombay, sucumbiendo a la presión social, hizo una asignación presupuestaria por un período de tres años que ambicionaba convertir las tierras de pastoreo en diversos cultivos comestibles. Más tarde, en 1967, se logró un acuerdo con los terratenientes por medio del cual se entregarían 14 mil acres de tierra al gobierno para la distribución entre los tribales sin tierra (Desai, 2002: 332–333).

⁸ La palabra *satyagraha* fue popularizada por Mahatma Gandhi durante la lucha de independencia, como una forma de desobediencia civil no violenta; literalmente, significa “lucha por la verdad”.

RECUPERANDO LA TIERRA

LA LUCHA EN BODHGAYA, BIHAR

La lucha por las tierras en Bodhgaya fue emprendida con el objetivo de establecer los derechos de los sin tierra sobre sus propias tierras en el distrito de Bodhgaya, una de las regiones más retrasadas de Bihar. Unos ciento veinticinco aldeanos de cuatro manzanas participaron de la lucha a fines de la década del setenta. La lucha fue emprendida para reafirmar sus derechos sobre la tierra capturada por una orden religiosa hindú para establecer una *math* (templo del monasterio), supuestamente para contrarrestar la influencia del budismo⁹. Usando la fuerza y la religión, la *math* tuvo éxito en alienar la mayor parte de la tierra de los pobres y agricultores marginales en ciento veinte aldeas. Sólo los campesinos más ricos y las personas de casta superior retuvieron su propiedad. Más tarde, la tierra alienada fue adjudicada a nombre de un número de grupos de empresas ficticias. Fue en contra de esta situación que los obreros Bodhgaya emprendieron su lucha.

La movilización de campesinos y trabajadores fue iniciada en 1978, y un año más tarde estaban completamente organizados para apresurar su demanda a través de la ocupación física de la tierra. Durante los ocho años siguientes, el programa de ocupación de tierras colectiva fue continuado en las cuatro manzanas. Al mismo tiempo, la gente también se dio cuenta de los beneficios del cultivo colectivo sobre la tierra colectivamente ocupada. La lucha dio a luz al eslogan *Jote-boye-kate dhan, khet ka malik vahi kisan* (la tierra pertenece al campesino que labra la tierra, siembra y cosecha el cultivo).

La lucha continuó durante diez largos años antes de que finalmente las personas lograran conseguir su tierra. Otra importante consecuencia de la lucha fue que las mujeres también adquirieron el derecho a poseer tierra. Esto produjo una subida en su estatus y en el nivel de prosperidad de la región.

CHATTISGARH TIERRAS SATYAGRAHA, EN CHATTISGARH

Esta tierra *satyagraha*, en unas setecientas aldeas del distrito Raipur de Chattisgarh, suscita varios problemas. El primero se asocia a los sin tierras que han obtenido documentos de propiedad (*pattas*) del gobierno, pero no han hecho ocupación física de esos trozos de terreno. En algunos casos, aún no saben dónde está ubicada la tierra, a pesar de que el gobierno los reclama como beneficiarios de su programa de distribución.

Una segunda lucha por las tierras involucra a aquellos que han ido ocupando y cultivando forzosamente pedazos de tierras del gobierno, pero no tienen *pattas*. En un estudio de aldeas tribales en el Bundelkhand,

⁹ En Bodhgaya se cree que el fundador de budismo, Gautama Buddha, logró la iluminación.

Baghelkhand, Chhattisgarh, Mahakaoushak, Malwa y las regiones de Chambal de Madhya Pradesh, se descubrió que este problema estaba ampliamente generalizado sobre 11 mil acres de tierra (Parishad, 2002). ¡Por contraste, también se descubrió que similares ocupaciones forzadas de espacios abiertos del gobierno por los ricos y poderosos ha sido regularizada!

Una tercera lucha involucra a aquellos que han estado subsistiendo en un pedazo de tierra rentada¹⁰ que el gobierno más tarde declaró como área forestal, pese a que no tenía árboles. Las personas que han estado cultivando estas tierras por años están sujetas al hostigamiento de los funcionarios forestales y sufren, a menudo, acciones de desalojo. A veces, los partidos gobernantes han desarrollado políticas electorales manipuladoras y han provisto *pattas* para los colonos, pero los sucesivos gobiernos no siempre los honraron y dejaron el asunto sin resolver. Por ejemplo, *pattas* otorgados durante el gobierno del Partido Janata entre 1977 y 1980 fueron cancelados cuando el Congreso (I) asumió el poder en 1980 (Singh, 2002; Sail, 2002).

La gente ha emprendido sus luchas en contra de estas injusticias. Sus casos han sido fortalecidos por un estudio científico de la tierra en la región. Registros de tierras paralelos han sido creados y puestos a disposición para que la gente pueda desafiar los falsos y fraudulentos registros de tierras mantenidos por los funcionarios de impuestos. Uno de los destacados eslóganes de esta tierra *satyagraha* es “Zamin Ka Faisla, Zamin par hoga” (Todos los asuntos de la tierra serán resueltos en la misma tierra). Esto fue acuñado para ocuparse de los particulares retrasos legales y para reducir el tiempo y los recursos perdidos por los pobres en viajar hacia los tribunales en lugares alejados de sus aldeas. Otro importante eslogan que ha surgido de luchas por las tierras en Madhya Pradesh, desafiando la legitimidad del Estado mismo, es “Zameen Hamari, Kagaz Tumhara” (La tierra es nuestra, el documento es tuyo). Este eslogan expone las fraudulentas prácticas en favor de los ricos y poderosos para manipular los registros de las tierras y afirma que la gente no honrará ningún documento que vaya en contra de sus legítimos reclamos.

En otro notable acto de rebeldía en julio de 1995, la gente prefirió arar los mismísimos campos que se les había prohibido cultivar. En todas las áreas, pobres sin tierra y pequeños agricultores fueron en grandes números con sus arados y novillos para registrar su reclamo sobre la tierra ancestral. Tales programas de cultivo colectivo fueron declarados con bastante anticipación, y los preocupados funcionarios notificados de sus

10 El Departamento de Rentas del gobierno de cada estado posee tierras de renta. Por el contrario, los bosques son poseídos por el Departamento Forestal, y estas tierras están generalmente ocupadas por los sin tierra, que tienen la esperanza de obtener *pattas* en el futuro.

RECUPERANDO LA TIERRA

intenciones. Esta acción directa produjo diversos resultados. En algunos lugares, las personas pudieron obtener y registrar su control sobre la tierra. En otros, los funcionarios recurrieron a la represión a través del fichaje de falsos casos criminales en contra de los activistas y de la misma gente. La lucha continúa. De hecho, la tierra *satyagraha* ha provocado un nuevo impulso entre las personas para asumir el control de sus recursos. La lucha por la tierra se acopla a una campaña para el uso de métodos naturales de agricultura, en contra del uso de semillas de variedad y de productos químicos. La gente ha abierto bancos indígenas de semillas para promocionar el uso de variedades locales. Por ello, una estrategia más integral en los asuntos de la tierra es ahora visible.

ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES

En la India hay una gran diversidad de movimientos actuando por una múltiple variedad de causas. Aquellos orientados a las áreas rurales, costeras y tribales luchan por el otorgamiento de poderes a sus constituyentes sociales. Comprenden grupos de pescadores, tribales, sin tierras, agricultores marginales, campesinado intermedio, *dalits*, organizaciones basadas en la casta, organizaciones de mujeres, organizaciones de estudiantes y jóvenes, y aquellos que luchan por la autonomía local/regional. Todos ellos lidian con múltiples asuntos, como la demanda de acceso a, el control de y la conservación de los recursos marinos en contra de la pesca de arrastre; de agua (potable, para la irrigación) y electricidad (de uso doméstico y para la granja) con tasas baratas; y del establecimiento de infraestructura social, como salud, educación, comunicación, transporte y carreteras. Se ocupan también los desplazamientos causados por diversos proyectos de desarrollo y exigen subsidios en forma de fertilizantes, semillas, crédito para la agricultura y el seguro de cosecha, así como precios mínimos que ayuden a la producción agrícola con garantías de compra de parte del Estado. Hay también movimientos que lidian con asuntos de corrupción, de discriminación de casta y de atrocidades, violencia contra las mujeres y hay campañas más amplias apoyadas por la movilización local que reclaman el derecho a trabajar, a la comida, a la información, a un gobierno democrático y a la participación democrática.

Estas luchas se plasman en movimientos de masas o asociaciones sindicales establecidas por, o afiliadas a los partidos comunista o socialdemócrata. Algunos son nuevos movimientos sociales, como “Narmada Bachao Andolan” (Campaña Salve a Narmada); “Chhatisgarh Mukti Morcha” (Frente de Liberación Chhatisgarh); Ekta Parishad, Nimaad-Malwa Sangharsh Samittee, Adivasi Gothra Sabha (Gran Consejo Tribal), entre muchos otros alrededor del país. Se coordinan a nivel nacional en diversas formaciones, como la Alianza Nacional de Movimiento

Populares; el Comité Nacional de Coordinación por los Derechos de los Trabajadores Rurales; Bharat Jan Andolan (Movimiento de Pueblos Indios); Minas, Minerales y Pueblos y el Comité por los Derechos a la Vivienda y a la Tierra de la Coalición Internacional del Habitat.

Muchos de estos movimientos y de estas organizaciones han tomado la delantera en organizar el Foro Social Asiático en 2003 y el Foro Social Mundial en 2004. Sus aspiraciones fueron apropiadamente capturadas por la declaración de los Movimientos de Pueblos y Organizaciones Sociales en Masa Asiáticos durante el Foro Social Asiático en Hyderabad (enero de 2003), que resolvió “afirmar el derecho de las personas al trabajo, la energía, la comida, el agua, la tierra, otros recursos naturales, la educación, la salud y el transporte público”. Esta resolución será consolidada a través de actividades de una coalición a gran escala entre las organizaciones de masa afiliadas a los partidos socialista y comunista, y de los nuevos movimientos sociales representados por coaliciones diversas, como la Alianza Nacional de Movimientos Populares y Bharat Jan Andolan.

El inicio del Foro Social Asiático en India, junto con el patrocinio al Foro Social Mundial en 2004, es la primera vez que reúne en forma importante a todas las organizaciones y a todos los movimientos sociales que se oponen a la globalización imperialista, a la privatización de recursos públicos, de activos y de servicios, a la liberalización del mercado, al fundamentalismo y a la violencia sectaria, a la jerarquía de castas y al patriarcado. Tienen la creencia de que “otro mundo es posible”. Estos movimientos son optimistas acerca de llevar adelante su proyecto “antiglobalización”.

CONCLUSIÓN

El acceso a la tierra para los pobres está constreñido en la India no sólo por restricciones físicas, sino también por mecanismos legales e institucionales que se diseñan para despojar a las mayorías. Como tal, la cuestión de la tierra permanece fundamentalmente como un asunto de economía política. Se deduce que la formulación de una política agraria es un proceso político y que esa redistribución desafía la estructura existente. También se deduce que un programa de distribución equitativa de la tierra y la justicia social deben contar con el apoyo de movimientos sociales organizados y comprometidos.

La mera ocupación física de la tierra será percibida como usurpación en el estado de derecho a menos que sea substanciada por titulaciones y escrituras legales. Por consiguiente, hay una necesidad urgente de fortalecer la legitimidad social del derecho a la tierra. Esto requiere la transformación de estructuras institucionales de subordinación, mediante cambios importantes en leyes, códigos civiles y derechos de

propiedad que, precisamente, garantizan los privilegios y el control de la elite. Como Amartya Sen (1999) ha sostenido, la mayoría de los casos de inanición y carestía en el mundo no son el resultado de personas despojadas de aquello a lo que tienen derecho, sino el resultado de personas que no están facultadas para ejercerlos dentro del sistema legal prevaleciente de derechos institucionales.

En un país agrario como la India, la tierra circunscribe la existencia del individuo y de la comunidad como una extensión de su conciencia colectiva, particularmente para la considerable población tribal. No sólo tiene un significado meramente económico como un recurso para la supervivencia y un significado político como la base material para el poder; también tiene una base social como el sentimiento de pertenencia a una comunidad cultural específica, y establece un enlace cultural con las tradiciones, la cultura y la forma de vida. Una distribución equitativa y justa de recursos terrestres, por consiguiente, es de importancia extrema. Mientras la redistribución por el gobierno permanece como el modo preferido, allí donde ésta no sea previsible a corto plazo, la ocupación física forzada puede ser la única manera. La alianza que está surgiendo entre los movimientos sin tierra en la India y el MST en Brasil, así como con Vía Campesina, es un nuevo signo de solidaridad global que depende de una nueva perspectiva de un mundo humanitario. Sí, otro mundo es posible.

BIBLIOGRAFÍA

- Agarwal, Bina 1994 *A Field of One's Own* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Das, Sukumar 2000 "A Critical Evaluation of Land Reforms in India, 1950-55" en Sinha, B.K. y Singh, Pushpendra (eds.) *Land Reforms in India: An Unfinished Agenda* (New Delhi: Sage Publications), Vol. V.
- Desai, Kiran 2002 "Land Reforms through People's Movements" en Jha, Praveen K. (ed.) *Land Reforms in India: Issues of Equity in Rural Madhya Pradesh* (New Delhi: Sage Publications) Vol. VII.
- Engineer, Irfan 2002 "Struggles of Dangi Adivasis for Livelihood and Land" en Jha, Praveen K. (ed.) *Land Reforms in India: Issues of Equity in Rural Madhya Pradesh* (New Delhi: Sage Publications) Vol. VII.
- Fernandes, Walter y Raj, S. Anthony 1992 *Development, Displacement and Rehabilitation in the Tribal Areas of Orissa* (New Delhi: Indian Social Institute).
- Frank, Jeffrey 2002 "To Models of Land Reform and Development" en *Activism Online*, 15(11). En <www.activismonline.org>.
- Government of Maharashtra, Directorate of Economics and Statistics 2002 *Economic Survey of Maharashtra, 2001-2002* (Mumbai:

- Directorate of Economics and Statistics, Planning Department, Government of Maharashtra).
- Hiremath, S.R. (ed.) 1997 *Forest Lands and Forest Produce: As If People Mattered* (Dharwad: NCPNR).
- Jha, Praveen K. (ed.) 2002 *Land Reforms in India: Issues of Equity in Rural Madhya Pradesh* (New Delhi: Sage Publications).
- Jogdand, P.G., ed. 2000 *New Economic Policy and Dalits* (Jaipur y New Delhi: Rawar Publications).
- Jodha, N.S. 1986 "Common Property Resources and Rural Poor" en *Economic and Political Weekly*, 21, pp 21-27.
- Kulkarni, Sharad 2000 "The Plight of the Tribal" en *Seminar*, 492 (agosto), pp 37-39.
- Lobo, Brian 2002 "Land Reforms: Turning the Clock Back" en *Economic and Political Weekly*, 37(5), pp 529-532.
- National Centre for Advocacy Studies (NCAS) 2001 *Fact Sheet on Land Reform and Land Alienation* (Pune: NCAS).
- National Institute for Rural Development (NIRD) 2000 *India Rural Development Report* (Hyderabad: NIRD).
- Parishad, Ekta 2002 "A Perspective on Lands and Forests in Madhya Pradesh" en Jha, Praveen K. (ed.) *Land Reforms in India: Issues of Equity in Rural Madhya Pradesh* (New Delhi: Sage Publications) Vol. VII.
- Prabhu, Pradip 2002 "Land Alienation, Land Reforms and Tribals in Maharashtra" en Jha, Praveen K. (ed.) *Land Reforms in India: Issues of Equity in Rural Madhya Pradesh* (New Delhi: Sage Publications) Vol. VII.
- Ramanathan, Usha 2002 "Common Land and Common Property Resources" en Jha, Praveen K. (ed.) *Land Reforms in India: Issues of Equity in Rural Madhya Pradesh* (New Delhi: Sage Publications) Vol. VII.
- Sail, Rajendra K. 2002 "People's Struggle for Land: A Case Study" en Jha, Praveen K. (ed.) *Land Reforms in India: Issues of Equity in Rural Madhya Pradesh* (New Delhi: Sage Publications) Vol. VII.
- Sen, Amartya 1999 "Entrevista", 15 de diciembre. En <www.theatlantic.com/unbound/interviews>.
- Shah, Ghanshyam, y Shah, D.C. (eds.) 2000 *Land Reforms in India: Performance and Challenges in Gujarat and Maharashtra* (New Delhi: Sage) Vol. VIII.
- Sharma, B.D. 1997 "The Scheduled and Tribal Areas: Omissions, Neglect and Illusive Strategies" en Hiremath, S.R. (ed.) *Forest Lands and Forest Produce: As If People Mattered* (Dharwad: NCPNR).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Sharma, Ravi 2003 "Eating Up Forest Lands" en *Frontline*, 20(6). En <www.hinduonline.com>.
- Singh, Anoop 2002 "The Land Question in Chattisgarh" en Jha, Praveen K. (ed.) *Land Reforms in India: Issues of Equity in Rural Madhya Pradesh* (New Delhi: Sage Publications) Vol. VII.
- Sinha, B.K. y Singh, Pushpendra (eds.) 2000 *Land Reforms in India: An Unfinished Agenda* (New Delhi: Sage Publications) Vol. V.
- Upadhyay, Sanjay y Raman, Bhavani 1998 *Land Acquisition and Public Purpose* (New Delhi: The Other Media).
- United Nations Center for Human Settlements 1985 *Land for Public Purposes: Guidelines* (Nairobi: United Nations).
- Vishwanathan, S. 2003 "Land Reforms in Reverse?" en *Frontline*, 20(5). En <www.hinduonline.com>.

SALVADOR H. FERANIL*

**ESTIRANDO LOS “LÍMITES” DE LA
REFORMA REDISTRIBUTIVA: LECCIONES
Y EVIDENCIAS DE LAS FILIPINAS
BAJO EL NEOLIBERALISMO**

EN LA ERA DE LAS REFORMAS NEOLIBERALES, la reforma agraria ha quedado retrasada. No sólo el discurso sobre la pobreza entre las instituciones multilaterales se ha desplazado hacia “el acrecentamiento” del pastel en vez de redistribuirlo (Herring, 2001), sino que los debates entre académicos y legisladores también han mostrado la gran dificultad para realizar reformas redistributivas en países acosados por conflictos agrarios. Sin embargo, la persistencia de estos problemas revela la necesidad permanente de ocuparse de la cuestión de la tierra (Kay, 2000) y de buscar soluciones que tomen conocimiento de las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales del mundo rural (El-Ghonemy, 1999). Las movilizaciones e insurrecciones campesinas en Asia, África y América Latina entre las décadas del ochenta y noventa, y las ocupaciones de tierras más recientes en Zimbabwe, demuestran que la reforma agraria permanece como un tema central en los países en desarrollo.

Los profundos cambios políticos, económicos y sociales que han tenido lugar en el mundo durante las últimas dos décadas han estado

* Salvador H. Feranil es investigador independiente y estudia temas agrarios y de tierras en las Filipinas. Actualmente es catedrático becado para el Foro Alternativo de Investigación en Mindanao y ha trabajado con movimientos rurales durante más de diez años. Obtuvo su título de maestría en Estudios de Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales Studies en La Haya, Holanda.

acompañados por un modelo de reforma agraria que enfatizó el retraimiento del Estado y el reemplazo de la reforma redistributiva por la reforma agraria guiada por el mercado (MLAR, por su sigla en inglés). A pesar de las críticas existentes del modelo, la MLAR habla de las ventajas relacionadas con la fijación de precios de la tierra, del proceso de reclamo y de la gerencia eficiente sobre la base de costos, lo que hace al modelo “impulsado por la demanda” más “viable” que las reformas agrarias “impulsadas por la oferta” llevadas a cabo por el Estado en el pasado.

El debate emergente entre la política agraria guiada por el Estado y la guiada por el mercado tiende a crear tendencias bipolares en miras de la actual implementación de la reforma agraria en los países. Pero la reforma agraria y sus resultados no son determinados simplemente por instituciones como el Estado o el mercado solamente. La política pública es un proceso dinámico que se instaura a través de las luchas de poder, mientras los cambios en la balanza de poder en la sociedad crean profundos efectos en los resultados de las reformas (Sobhan, 1993). El debate actual tiende a descuidar el hecho de que los resultados de las políticas se localizan dentro de arreglos que son invariablemente reexaminados, revisados e incluso revocados (Kerkvliet, 1993). Así, un análisis que examina la interacción de actores estatales y sociales dentro de un contexto socio-político y económico existente ofrecería explicaciones más incisivas de las actuales experiencias de reforma agraria.

El caso de las Filipinas brinda una comprensión interesante en esta interacción entre el Estado, el pobre rural y el sin tierra en la reforma agraria. A mediados de los años ochenta, organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones populares (PO, por su sigla en inglés) comprometieron a legisladores a favor de la reforma en un proceso que resultó en la formulación del Programa de Reforma Agrario Amplio (CARP, por su sigla en inglés), que cubriría todas las tierras agrícolas del país. Sin embargo, el CARP continuó siendo resistido por los grandes terratenientes, aun a pesar de la existencia de amistosos mecanismos y componentes de mercado en el programa, como incentivos en efectivo para vendedores dispuestos, valoración de tierras basada en su productividad y la prioridad para los terratenientes en los emprendimientos de agro-negocios. Así, la dinámica socio-política del proceso ha continuado configurando los resultados de la reforma. En particular, la interacción Estado-sociedad en la reforma agraria ha demostrado diversidad de tendencias, incluyendo éxitos y fracasos en la redistribución de tierras a lo largo del tiempo, según tipos de tierra y locaciones geográficas.

La reforma agraria redistributiva en las Filipinas ha sido hostigada por los problemas durante más de una década. Las limitaciones, dificultades y perspectivas aparentemente poco promisorias de la reforma agraria se atribuyeron inicialmente a desperfectos en el diseño de la

política (Hayami et al., 1990); a las existentes restricciones estructurales e institucionales que se derivaron de la influencia de las elites terratenientes en las políticas y decisiones estatales (Putzel, 1992); a la limitada voluntad política del gobierno para implementar reformas redistributivas (Kasuya, 1995); y a las limitaciones inherentes a los recursos del programa (Riedinger, 1995). Se entiende, en líneas generales, que la actual experiencia de reforma agraria en las Filipinas ha fracasado en saldar las demandas de justicia social y en alterar las estructuras que perpetúan la desigualdad rural.

Tales perspectivas iniciales sobre los “límites” de la reforma agraria fueron sin embargo superadas por los resultados de implementación del CARP, desde mediados de la década del noventa en adelante. Cifras oficiales del Departamento de Reforma Agraria (DAR) en 2001 han mostrado que más del 80% de cerca de 4 millones de hectáreas de tierras agrícolas del programa han sido redistribuidas para trabajadores agrarios y campesinos sin tierras. Aunque un escrutinio más cercano de números del gobierno posiblemente podría revelar menores resultados de la redistribución, la realización excede por lejos las predicciones pesimistas de los críticos del CARP (Borras, 2002). A pesar de las dudas erigidas en torno de los resultados de la política, las victorias iniciales y concretas logradas por organizaciones campesinas locales que comprometieron al Estado bajo el CARP demuestran que las restricciones estructurales e institucionales para la reforma agraria podrían ser vencidas desde abajo por movilizaciones campesinas autónomas, combinadas con iniciativas de reformistas dentro de las instituciones estatales, o lo que puede ser llamada la estrategia del *bibingka* (Borras, 1998).

No obstante, un examen más detallado de los resultados del CARP también demuestra que el programa tuvo debilidades en la redistribución significativa de disputadas tierras agrícolas en manos de terratenientes despóticos. Entre los sectores que continúan enfrentando una resistencia más fuerte de los terratenientes está el de las granjas comerciales, compuesto de tierras dedicadas a tanto las exportaciones agrícolas tradicionales como a las no tradicionales. Si bien los aplazamiento de provisiones por diez años de CARP¹ fueron levantados en 1998, las grandes tenencias de tierras privadas han permanecido en manos de terratenientes y compañías de negocios del agro, mientras una cierta cantidad de éstas, distribuidas tiempo atrás, han experimentado problemas de segunda generación, como los conflictos entre beneficiarios. Aunque las movilizaciones sociales a mediados de los años noventa abastecieron una

1 Esta disposición había postergado por diez años la distribución y la adquisición de tierras de granjas comerciales privadas para permitir a grandes terratenientes y corporaciones agro-comerciales recuperar sus inversiones de las plantaciones.

RECUPERANDO LA TIERRA

cierta cantidad de iniciativas de reforma relacionadas con la reforma agraria, las corrientes de antirreforma continúan planteando, tanto en el Estado como en la sociedad, serias amenazas al potencial de las movilizaciones campesinas y a la acción colectiva que busca estirar aun más los límites de reforma del CARP. En contra de este trasfondo, en este trabajo se intenta considerar los potenciales y las estrategias emergentes de la acción colectiva campesina local y de las ocupaciones de tierras que desafían los límites de la implementación de la reforma agraria en las Filipinas.

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS FILIPINAS

DEMOCRATIZACIÓN Y REFORMA AGRARIA

La pobreza y la carencia de tierras están muy extendidas en el campo filipino. Las cifras oficiales del gobierno en el año 2000, que no son enteramente confiables, indican que 4,3 millones de familias filipinas –el 34% de los filipinos (26,5 de los 77,9 millones del total de la población)– son “pobres”². Observadores independientes estiman que aproximadamente dos tercios de los pobres del país son rurales (Borras, 2001b)³. El coeficiente de Gini de 0,647, basado en información del gobierno proveniente de un censo pre-CARP de 1988, indica un alto grado de desigualdad de la propiedad de la tierra; en 1988, el 65% de los terratenientes (o 1 millón entre 1,5 millones) poseía sólo el 16,4% del total del área de granjas en tenencias de menos de tres hectáreas (Putzel, 1992). Estos datos, sin embargo, deben ser tomados con precaución, dadas las limitaciones del método de recolección que, en efecto, permitió a los terratenientes omitir en su informe la extensión total de sus fincas⁴.

La sesgada propiedad de la tierra ha tenido un impacto profundo en la composición política de la sociedad filipina. La política rural está dominada por las elites agrarias, que compiten por puestos utilizando complejas redes de patronazgo (Anderson, 1988), maquinarias electorales, “organizaciones socio-económicas oficiales”, iglesias conservadoras locales y ejércitos privados (Lara y Morales, 1990), y que pueden controlar los resultados y procesos políticos en sus propios feudos (Sidel, 1989). La oligarquía agraria continúa confiando en su

2 En <www.nscb.gov.ph/poverty/2000/00povin1.asp>.

3 Según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (United Nations Development Programme) en las Filipinas, las tres cuartas partes de los pobres viven en áreas rurales, donde el 68% de la población es pobre. Dato publicado en <www.undop.org.ph/emp_security.htm>.

4 Es más, sólo 90 mil terratenientes –o un escaso 5,8% del total– informaron posesiones de tierras de más de doce hectáreas.

tradicional potencia económica para el ejercicio del poder político, aunque su posición ha sido desafiada por modernizadores terratenientes empresarios en el poco tradicional sector de la exportación. La oligarquía agraria manifestó su influencia en las instituciones políticas y en el proceso de generación de nuevas políticas, cuando el Congreso aprobó el aplazamiento de las provisiones en el CARP exceptuando a las granjas comerciales de la redistribución de tierras durante un período de diez años. Comparados con oligarcas agrarios tradicionales, que rechazan la reforma agraria categóricamente, los modernos terratenientes, que buscan formas de maximizar la productividad de la tierra a través de la agricultura moderna, tienden a estar más dispuestos con las disposiciones de la reforma, ya que abren las posibilidades para la cooperación entre beneficiarios de la reforma y los terratenientes emprendedores.

Después de ciclos de insurrecciones campesinas y movilizaciones –como la revolución de campesinos iniciada a fines de la década del sesenta por el Partido Comunista de las Filipinas (CPP) y el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA)– se han conseguido sólo concesiones intermitentes del Estado. La respuesta de la elite agraria ha sido, tradicionalmente, una combinación de represión y de reforma agraria limitada (Borras, 1998: 270). Así, aunque los programas previos de reforma agraria, no menos bajo el autoritario gobierno de Marcos en la década del setenta, han tratado de poner fin a las insurrecciones y conflictos por temas relativos a la tierra, los resultados de la reforma generalmente fracasaron en lograrlo.

La transición de un régimen autoritario a uno electoral en 1986 no derivó en la completa democratización de las zonas rurales. A pesar de las aparentes iniciativas de democratización que atravesaron el país a nivel nacional desde 1986 en adelante, los enclaves autoritarios locales persisten y las arraigadas elites políticas continúan dominando la política rural (Franco, 2000). Si bien las aperturas de la reforma que animan una mayor participación cívica y política fueron iniciadas por algunos reformistas estatales después de la promulgación del CARP en 1988, tales oportunidades no se tradujeron en ganancias sustanciales para los marginados sectores rurales. Las movilizaciones campesinas y la acción colectiva que ejercen presión sobre el Estado para que permanezca firme en su compromiso por una reforma agraria redistributiva continúan siendo resistidas por los despóticos terratenientes en diferentes partes del país.

La promulgación de la Ley República 6657, conocida como Programa de Reforma Agraria Amplio (CARP), ha sido un hito en la historia de la reforma agraria del país. Primero, anunció el comienzo de un programa oficial de reforma agraria, que fue producto de la interacción entre secciones organizadas del campesinado, defensores de la reforma agraria, organizaciones no gubernamentales y elites estatales. En 1987, el campesinado organizado se juntó con diferentes defensores y grupos

RECUPERANDO LA TIERRA

de la reforma agraria para forjar el Congreso para la Reforma Agraria Popular (CPAR, por su sigla en inglés) y someter su propuesta al Código de la Reforma Agraria Popular del gobierno de Aquino. Aunque la propuesta del CARP fue mucho menos radical que la propuesta del CPAR, la interacción de la coalición con legisladores durante la formulación de la política tuvo una influencia en el Estado y, en particular, en la transición de una política de reforma agraria redistributiva designada para beneficiar a los millones de pobres rurales sin tierra del país.

En segundo lugar, el programa de reforma agraria se convirtió en el punto central de la estrategia de la administración de Aquino para encauzar el desarrollo y la democratización en el campo. Aunque la mayoría de los críticos del CARP afirma que la política ha contenido vacíos legales que comprometen los intereses del pobre rural sin tierra en relación con la clase terrateniente (aspecto discutido a continuación), el CARP ha provisto aperturas significativas para que los sin tierra comprometan al Estado y desafíen las políticas. La política existente sigue el principio de “tierra para el agricultor”. La selección de beneficiarios de la reforma da prioridad a los obreros rurales y a los campesinos sin tierra que realmente las ocupan y labran, y en plantaciones comerciales a aquellos que han trabajado la tierra dentro del período de 1988 a 1998. La política descalifica a solicitantes del beneficio cuya tenencia en plantaciones caducó antes de la promulgación del CARP. La política descalifica a los solicitantes beneficiarios cuyos trabajos en plantaciones expiraron antes de la promulgación de CARP. Otros solicitantes sin tierras que no son labradores propiamente dichos en tierras disponibles del CARP, son considerados únicamente cuando hay un exceso en el mínimo “una hectárea, un beneficiario”. La excluyente práctica dentro del CARP sugiere que otro pobre rural sin tierra interesado puede convertirse en beneficiario sólo cuando una tenencia de tierras es lo suficientemente grande como para acomodar a aquellos que no son ocupantes o efectivamente labradores.

En tercer lugar, mientras previas políticas de reforma agraria se referían a tierras limitadas, el CARP estableció un cambio significativo e incluyó a todas las tierras agrícolas públicas y privadas (a pesar de las relaciones de tenencia) en su cobertura. La cobertura expandida de 10,3 millones de hectáreas de tierras de labrantío ofrece oportunidades a millones de pobres rurales sin tierras. Finalmente, esta política ha ilustrado el papel y los deberes del Estado, no sólo en relación con la redistribución de tierras, sino también en la provisión, posterior a la distribución, de paquetes abastecedores de soporte que incluyen infraestructura y otros servicios necesarios para aumentar las aptitudes productivas de los beneficiarios de la reforma.

Por otra parte, la política oficial de reforma agraria ha incorporado provisiones compatibles con el mercado, que proveen espacios para que terratenientes e inversores se beneficien del programa. En primer

lugar, lejos de ser un programa de reforma agraria radical guiado por el Estado que expropia y libremente distribuye tierras para el pobre rural sin tierras, el CARP utiliza un “principio de compensación justa” que estipula pagos para los terratenientes. La valoración de la tierra se basa en la producción promedio por hectárea sobre las últimas tres temporadas de cosecha. Los pagos a los terratenientes se hacen tanto en dinero en efectivo como en bonos que maduran con el paso del tiempo. Como un incentivo para estos últimos, la porción en efectivo aumenta cuando las tierras son voluntariamente ofrecidas al gobierno para la venta. En segundo lugar, la política permite un mercado basado en la Transferencia Voluntaria de la Tierra, que directamente transfiere las parcelas a los beneficiarios bajo condiciones mutuamente convenidas entre dueños y campesinos. Bajo este mecanismo, el Estado simplemente facilita el proceso de transferencia, y los resultados de la negociación son dejados virtualmente a los dueños y a los beneficiarios.

En tercer lugar, los anteriores terratenientes e inversores podrían realizar un negocio conjunto después de que las tierras hayan sido redistribuidas a los beneficiarios. Aunque tales planes podrían concretarse sólo después de la redistribución agraria, la implementación de la política tiende a revelar que los terratenientes, en confabulación con funcionarios corruptos del Estado, vinculan la redistribución agraria a planes de negocio del agro posdistribución que tienden a poner en desventaja a los beneficiarios de la reforma. En casos extremos, estos planes carecen de la transferencia efectiva del control de la tierra a sus beneficiarios. En cuarto lugar, la política necesita ser complementada por una ley pendiente que sugiere el uso de tierras de labrantío como garantía colateral para ganar acceso a los préstamos de bancos y otras instituciones financieras privadas. Mientras tal propuesta supuestamente provee el efecto palanca para que los beneficiarios accedan al capital necesario para aumentar su productividad, se torna posible que los terratenientes recobren la propiedad cuando los beneficiarios no pudieran pagar sus deudas.

Como se argumentó anteriormente, la política sola no determina los resultados. La política y su implementación son moldeadas por la dinámica política en los niveles nacionales y locales, y se derivan del balance de las fuerzas sociales. Antes de analizar este proceso más detalladamente en la siguiente sección, volvemos al marco nacional de desarrollo de la política y su transformación en la década del noventa.

AGRICULTURA Y LIBERALIZACIÓN

La importancia del sector agrícola en la economía nacional ha tenido una pesada influencia en el curso de la reforma agraria, a pesar del decreciente tamaño del sector en relación con el resto de la economía. A fines de los años ochenta, la contribución de la agricultura para el

RECUPERANDO LA TIERRA

PBI representó el 27%, mientras la agroindustria el 41% (Putzel, 1992). Además, aproximadamente un tercio de trabajadores empleados en el sector de servicios estaba en la agroindustria, haciendo de las actividades basadas en la agricultura la fuente principal de empleo, aproximadamente el 60% del total (Borras, 1998). Y si consideramos que una buena proporción del sector de servicios –sea en el comercio mayorista y por menor, transporte y almacenamiento o bien en el gobierno y servicios privados– está relacionada directamente con la actividad del negocio del agro, la contribución total de la agricultura es aun más alta (Putzel, 1992: 17).

Desde 1992 hasta 1998, la administración de Ramos implementó activamente reformas neoliberales, en una estrategia que pretendió incitar el crecimiento económico y en particular aumentar la actuación del sector industrial. Estas reformas fueron continuadas por la administración de Estrada después de 1998. Tal orientación de la política económica hacia el exterior ha conllevado un cambio de énfasis hacia cultivos de mayor valor, a través del Plan de Desarrollo Agrario de Medio Término (MTADP), junto con los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera directa y los envíos de dinero desde el extranjero de trabajadores filipinos en ultramar. El apoyo estatal para los cultivos de poco valor y de volumen alto fue progresivamente retirado.

Esta estrategia de desarrollo produjo ganancias económicas modestas: las inversiones extranjeras directas comenzaron a fluir y, junto con las ganancias en el cambio por los envíos de dólares de los trabajadores filipinos de ultramar, aportaron aproximadamente un 10% del total del PBI (Borras, 2001b: 249). El promedio de la tasa de crecimiento del PBI fue de un 3,5% entre 1990 y 1999, más del triple del promedio de la tasa de crecimiento del 1,0% entre 1980 y 1990. Sin embargo, la actuación del sector agrícola creció un 1,5% entre 1990 y 1999, sólo ligeramente arriba de la tasa de crecimiento de 1980-1990, y muy por debajo del sector de servicios, lo que manifiesta un constante período de recuperación a lo largo de los años ochenta y noventa. Aunque la contribución de la agricultura del 19% del PBI en 1997 (NSCB, 2000) no está distante de su contribución del 15% en 1998, el lento crecimiento del sector es reflejo de la discriminación de la agricultura en la nueva estrategia de desarrollo.

La tendencia política ha estado a favor de las exportaciones de mercancías que son consideradas más capaces de generar acumulación de capital. En el período de reformas neoliberales, el importe total de exportaciones de mercancías en el país ascendió de US\$ 8,07 mil millones en 1990 a US\$ 29,44 mil millones en 1998 (World Bank, 2001). El sector manufacturero, que previamente sólo contaba con el 38% de las exportaciones en 1990, comprendió el 90% del total de las exportaciones en 1998. Mientras tanto, las exportaciones de productos agrícolas crecieron

de US\$ 5,44 mil millones (1991-1994) a US\$ 7,15 mil millones (1995-1998). Pero aunque éstas parecen estar creciendo, una visión general de la agricultura demuestra que las importaciones de productos agrícolas casi duplicados de US\$ 5,70 mil millones (1991-1994) a US\$ 10,50 mil millones (1995-1998) anuncian un déficit comercial en el sector de US\$ 257,47 millones y de US\$ 3,35 mil millones para los respectivos períodos. No es sorprendente, entonces, que a pesar del tremendo incremento en el volumen de comercio internacional dentro de la economía filipina, el país haya continuado experimentando un déficit comercial a través de los años, conforme a que las importaciones han excedido por lejos a las exportaciones en la hoja del balance nacional.

Las exportaciones agrícolas del país, que incluyen cultivos tradicionales de exportación como la caña de azúcar y el coco y las exportaciones poco tradicionales como la banana y la piña, tienen una influencia significativa en la implementación de la reforma agraria. Las exportaciones tradicionales como la caña de azúcar habían declinado dramáticamente de US\$ 1,82 mil millones entre 1979 y 1982 hacia un promedio debajo de los US\$ 400 millones entre 1987 y 1998. El coco exportó, por otra parte de manera estable, un promedio de US\$ 2 mil millones entre 1983 y 1994 y alcanzó un pico de US\$ 3,1 mil millones entre 1995 y 1998. En ese momento, los ganadores de la exportación como la banana, la piña y el mango constituyeron la masa de exportaciones agrícolas poco tradicionales. Para el período de veinte años de 1979-1998, las exportaciones bananeras fueron las grandes ganadoras de dólares del sector poco tradicional, al generar más de US\$ 3 mil millones. En el período 1995-1998, las ganancias de exportaciones bananeras sobrepasaron en más del 30% las ganancias de exportaciones del coco. Comparado con el coco, que cubre aproximadamente 3 millones de hectáreas, el banano cubre sólo 50 mil a lo largo del país. A su vez, las tenencias de tierras privadas más disputadas en el programa de reforma agraria han sido halladas en los bananales, pero también en aquellas que cultivan las cosechas tradicionales de exportación, como caña de azúcar y coco.

LAS POLÍTICAS AGRARIAS ANTES Y DESPUÉS DEL CARP

COMPROMETIENDO AL ESTADO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

El rápido ascenso de movilizaciones campesinas radicales y la acción colectiva en diversas partes del país durante los años ochenta, apoyado por todo el movimiento Democrático Nacional (ND, por su sigla en inglés), abrió el camino para reanimar la cuestión agraria en la política filipina. Cuando el gobierno de Aquino llegó al poder, la reforma agraria se había convertido en uno de los asuntos más apremiantes que exigía

legislación estatal inmediata. La administración recién instalada se vio forzada a perseguir la reforma agraria rápidamente, como una manera de restaurar y mantener la estabilidad política en el campo después del alzamiento EDSA⁵. Con el movimiento democrático nacional ganando espacio en las ciudades y el campo, la reforma agraria fue percibida no sólo como un instrumento que podría desencadenar las aptitudes productivas del campo (Hayami et al., 1990), sino también como una medida socio-política que podría fortalecer la legitimidad de la administración de Aquino entre los pobres rurales sin tierras. Con la excepción del hecho de que la reforma agraria constituyó un aspecto importante de la campaña presidencial de Aquino en 1986, fue percibida como una medida sumamente importante de reforma para cualquier gobierno que intentara sofocar la insurgencia rural.

Dadas las oportunidades para acrecentar el espacio político y para las pujantes reformas redistributivas dentro de un gobierno en transición, los Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP, Movimiento Campesino Filipino) resultaron ser cruciales para tratar de influenciar al gobierno de Aquino y obtener una política de reforma agraria progresista que acabara con la dominación de los terratenientes. Durante el período 1986-1988 de transición democrática, el KMP podría ser considerado como la organización campesina más importante, ya que tuvo éxito en movilizar marchas de gran notoriedad y en someter a consideración una propuesta de reforma agraria integral y detallada en junio de 1986, antes de que el gobierno pudiese redactar su propio plan.

La indecisión del gobierno de Aquino en delinear y promulgar inmediatamente una política de reforma agraria compelió al KMP a intensificar sus movilizaciones. El 22 enero de 1987, decenas de miles de miembros del KMP y sus aliados urbanos marcharon al puente Mendiola cerca del Palacio del Presidente para presionar por la reforma agraria. Sin embargo, en lugar de prestar atención a las demandas legítimas del KMP, falanges de unidades militares desplegadas en el puente comenzaron a disparar a los demandantes, mataron a trece civiles e hirieron a varios más. Mientras los procesos legislativos de la reforma agraria fueron acelerados, hubo claros indicios, después de este sangriento incidente y en los debates en la legislatura filipina, de que el gobierno de Aquino no redactaría una política de reforma agraria que desafiara categóricamente a la oligarquía terrateniente.

Con iniciativas legislativas subsiguientemente en marcha, las organizaciones campesinas de diversos bloques políticos convergieron para

⁵ EDSA es el Epifanio De los Santos Avenue, donde se produjo la famosa insurrección "Poder del Pueblo" que derrocó al dictador presidente Ferdinando Marcos en 1986.

formar el Congreso para una Reforma Agraria Popular, con el objetivo de luchar por su propia versión de la reforma agraria. Compuesta por trece organizaciones rurales nacionales de diferentes convicciones políticas, en representación de campesinos sin tierras, mujeres campesinas, pequeños granjeros, obreros rurales y pescadores, el CPAR proveyó un vehículo a los defensores de la reforma agraria pertenecientes a grupos de la sociedad civil para trabajar con legisladores estatales a favor de la reforma e influenciar los procesos y los resultados de la política de reforma agraria de Aquino. Aunque estas iniciativas fueron encabezadas por socialdemócratas (SD), las organizaciones del movimiento Democrático Nacional (ND) de gente rural se unieron a la coalición. El KMP, como centro de campaña nacional más grande y extenso de organizaciones campesinas locales y regionales de todo el país y con una membresía de unos 800 mil miembros (Weekley, 2001), estaba en la vanguardia de los debates legislativos sobre la reforma agraria. En contraste con los grupos liberales y socialdemócratas que adoptaron una reforma agraria compensatoria, el KMP avanzó hacia una posición más radical, demandando una reforma agraria “genuina” que involucrara la “libre distribución de tierras” entre los pobres rurales. Sin embargo, las fuerzas de oposición a la reforma de la administración de Aquino, especialmente en el Congreso, lograron superar las intervenciones radicales, y el gobierno tuvo éxito en aprobar y promulgar por el Congreso la propuesta del CARP, en junio de 1998. El CARP estaba muy distante de su modelo ideal de reforma agraria, y la mayoría de las organizaciones de todo el espectro político la rechazó. Por su lado, el KMP pronunció al CARP como anticampesino y a favor de los terratenientes, particularmente en las cláusulas de “compensación justa”, en el límite de retención de cinco hectáreas, y en el aplazamiento de la redistribución agraria en plantaciones comerciales.

LAS OCUPACIONES DE TIERRAS Y LA POLÍTICA DE GUERRA TOTAL

Las ocupaciones de tierras son un síntoma del profundo malestar en la sociedad filipina (Putzel y Cunningham, 1989). Si el gobierno estuviera comprometido con una reforma agraria genuina y redistributiva, los campesinos no tendrían que recurrir a las ocupaciones de tierras. El gobierno de Aquino continuó dominado por la clase terrateniente (Borras, 1998) y, claramente, los intereses de los terratenientes prevalecerían en cualquier programa de reforma agraria legislado por el Estado. Por lo tanto, mientras la transición política en 1987 pudo haber sido un momento oportuno para ocuparse de la cuestión agraria y para reestructurar la sociedad filipina, el presidente permaneció cautivo de los intereses de la clase terrateniente y relegó todo el asunto a una legislatura dominada por la elite. En ese contexto, las ocupaciones de tierras se convirtieron en una táctica política necesaria y manifestaron la determinación de los

RECUPERANDO LA TIERRA

campesinos sin tierra de implementar la reforma agraria con o sin la intervención del Estado.

Simultáneamente con campañas por una reforma agraria genuina, las iniciativas populares y las masivas tomas de tierras fueron emprendidas por sucursales locales del KMP (algunas veces apoyadas por la NPA) en diferentes partes del país (Kerkvliet, 1993). Los miembros del KMP ocuparon tierras públicas sin uso y asumieron el control de aquellas que fueron abandonadas por los amigos de Marcos o ejecutadas sus hipotecas por los bancos en diversas zonas del país. En Negros Occidental, en la parte occidental de la isla de Visayas, los esfuerzos del KMP por intensificar las ocupaciones de tierras alcanzaron aproximadamente las 75 mil hectáreas de tierras agrícolas y beneficiaron a unos 50 mil grupos familiares⁶ sin tierras. La extensión y la escala de estas ocupaciones sobrepasaron las ocupaciones previas hechas por la Federación Nacional de Trabajadores de Azúcar, que había tratado de asumir el control de tierras sobrantes y abandonadas por los sembradores de azúcar en el apogeo de la crisis de la industria del azúcar a mediados de la década del ochenta.

Las ocupaciones de tierras, sin embargo, fueron de breve duración, conforme el gobierno de Aquino comenzó a implementar la política de Guerra Total en contra del CPP-NPA y su permanente lucha armada. Con el resurgimiento de las tendencias autoritarias en el gobierno de Aquino, los terratenientes pudieron recobrar tierras paradas y abandonadas ocupadas por los campesinos sin tierra de KMP. Borrás (1998: 56) señala que mientras las tomas de tierras de la segunda mitad de la década del ochenta contribuyeron a mantener la reforma agraria en la agenda nacional, fracasaron como programa alternativo implementado fuera del Estado:

Primero, la mayor parte de las áreas fue fuertemente militarizada y, así, los campesinos no pudieron reanudar sus actividades normales de agricultura; en segundo lugar, casi ningún gobierno o institución privada quiso concederles créditos a los campesinos ocupantes de las tierras; en tercer lugar, la agrupación de cuadros, campesinos u otros, asignados en sus comunidades, estaban entrenados como activistas políticos y no como empresarios comerciales o activistas de desarrollo que podrían ayudar a estas comunidades a organizar empresas agrícolas lucrativas [...] cuarto, la mayor parte de las tierras ocupadas era marginal; en quinto lugar, y quizá como síntesis de los factores anteriores, cuando las comunidades empezaron a ser militarizadas, los campesinos no hicieron un gran esfuerzo para quedarse, quizá porque sintieron que allí no había mucho en juego en la tierra: sin títulos legales y sin actividades productivas.

6 Números basados en las entrevistas realizadas a cuadros campesinos que habían pertenecido a las secretarías campesinas nacionales y regionales del Partido Comunista de las Filipinas.

La política de la Guerra Total infligió un daño serio en el campesinado organizado a medida que los operativos militares en las zonas rurales invadieron completamente las comunidades campesinas. El cambio en la postura política de Aquino en contra de la izquierda abrió el camino para la consolidación y el refortalecimiento de la clase terrateniente dentro del Estado. Así, lejos de las demandas y de las creencias de que los esfuerzos de democratización habían limpiado el país después de la caída de Marcos, los enclaves autoritarios locales continuaron persistiendo a pesar de las reformas políticas iniciadas por el gobierno de Aquino.

La intensificación de la política de Guerra Total de Aquino restringió las actividades del movimiento democrático. Por un lado, los grupos militares desplegados en las zonas rurales no harían distinción entre operadores clandestinos y personalidades legales, pues representaban a organizaciones legales manifiestas. Durante las ofensivas militares, las comunidades (sospechadas de ser bases revolucionarias) fueron atacadas, sin importar si sus integrantes eran revolucionarios duros, partidarios del CPP-NPA, o civiles que habían residido o cultivado en el área durante mucho tiempo. En la cima de la implementación de la estrategia para contrarrestar la insurgencia, las organizaciones de masas legales, y especialmente sus líderes, fueron sometidos al hostigamiento de equipos militares desplegados en las zonas rurales. Por otro lado, la política de Guerra Total generó el apoyo de grupos familiares rurales que se convirtieron en víctimas de los excesos del CPP-NPA durante el período de purga del partido. Así, exceptuando los debates internos que obsesionaron a todo el movimiento revolucionario a comienzos de la década del noventa, el incremento de la militarización de las zonas rurales y los esfuerzos de reconsolidación de la clase terrateniente contribuyeron a la declinación y a la fragmentación del movimiento campesino progresista.

DIVISIONES EN EL MOVIMIENTO CAMPESINO

Los debates en la reforma agraria produjeron divisiones dentro de la amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil que instigaba al Estado en su compromiso con la política de reforma agraria. Por lo tanto, mientras el radical KMP decidió emprender masivas iniciativas para contrarrestar al CARP y demandar una reforma agraria genuina, ciertas secciones que previamente habían conducido el movimiento campesino CPP comenzaron a trabajar el sistema para comprometer al gobierno de Aquino en la implementación del CARP. Esto manifestó una clara desviación de la estrategia previa de la izquierda liderada por el CPP, cuya táctica de organización funcionó dentro del marco de la revolución democrática nacional. El cambio en la orientación y la estrategia hacia un manifiesto movimiento campesino masivo enardeció los debates

RECUPERANDO LA TIERRA

dentro del CPP y condujo a la formación de diversas organizaciones campesinas legales que se fueron independizando de los dictámenes del Partido y se mostraron más dispuestas a trabajar con organizaciones no alineadas en su compromiso con el Estado.

Mientras el KMP decidió continuar presionando por una reforma agraria genuina y trabajó, mayormente, fuera del sistema, algunos de los que vieron oportunidades de reformas en el CARP comprometieron al Estado en su “estrategia tripartita” de implementación del CARP. Dentro de tal estrategia, las iniciativas de reforma del gobierno, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones populares (PO) convergieron hacia un resultado y dirección comunes. Las iniciativas de convergencia entre diferentes grupos orientados hacia la reforma resultaron mayormente de los esfuerzos del Departamento de Reforma Agraria (DAR), bajo la administración de Ernesto Garilao, para implementar una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil en la ejecución del CARP. Más tarde, tales iniciativas se tradujeron en una política por medio de la que fueron implementados proyectos de la Asociación Tripartita para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural (TriPARRD) en selectas partes del país⁷. Aunque el verdadero impacto creado por TriPARRD, especialmente en desplazar tenencias de tierras privadas en disputa y en propulsar movilizaciones autónomas desde abajo, generó dudas entre las organizaciones de la sociedad civil, la estrategia podía ser percibida como útil para su propósito de incrementar la participación de la sociedad civil en los programas de reforma del Estado y acrecentar el espacio político disponible para los grupos subalternos en las zonas rurales filipinas⁸.

Desde principios de la década del noventa, las organizaciones campesinas autónomas, previamente asociadas con la izquierda liderada por el CPP, usaron una variedad de tácticas para mantener la presión en la implementación del CARP, incluyendo marchas masivas, piquetes y ocupaciones de tierras. Si bien estas acciones son similares a formas

7 TriPARRD fue la idea original de un grupo de defensores de la reforma agraria guiado por la Asociación Filipina para el Desarrollo de Recursos Humanos en las Áreas Rurales (Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas) [PHILDHRAA, sigla original]). La idea principal era explorar las áreas de colaboración o coordinación entre las ONG, PO, agencias donantes y el gobierno en la implementación de la reforma agraria.

8 Una revisión de la estrategia TriPARRD revela que sólo 5 mil hectáreas de tierras fueron redistribuidas al adoptar la estrategia. Un 50% de estas tierras fueron adquiridas a través de un esquema de oferta de venta voluntaria (Voluntary Offer for Sale [VOS, sigla original]) de parte de los terratenientes, que virtualmente lograron mejores compensaciones que las previstas por la Adquisición Obligatoria (Compulsory Acquisition [CA]) adoptada en algunas tenencias de tierras contenciosas.

previas usadas por organizaciones de izquierda, la novedad recae sobre el nuevo contexto político caracterizado por la existencia de individuos a favor de la reforma ubicados estratégicamente dentro de la burocracia estatal, que ejercerían su presión desde allí. De este modo, presiones paralelas de los reformistas estatales complementaron a las presiones que montaron los campesinos desde abajo. La correlación de fuerzas fue más tarde llamada la estrategia del *bibingka*, mediante la que la interacción de iniciativas de reforma agraria “desde debajo” y “desde arriba” inclinó el balance de fuerzas en favor de la reforma agraria (Borras 1998, 2001a)⁹.

Los impulsos de reforma desde arriba fueron percibidos como un factor crucial en el proceso de implementación del CARP. Fueron estas aperturas de reforma detectadas por el DAR las que cambiaron el aspecto estratégico de las ONG y el PO y abrieron el camino para el compromiso con el Estado en el tema de la reforma agraria. Durante el proceso, las alianzas formales e informales entre organizaciones de la sociedad civil y reformistas en el DAR crearon un impulso nacional que, a su vez, ejerció presión sobre funcionarios locales del DAR para responder más favorablemente hacia la reforma agraria en contra de los obstáculos a nivel local.

A pesar de la presión reformista desde arriba, las organizaciones campesinas autónomas locales continúan afrontando la resistencia de los terratenientes durante la implementación del CARP. Por esta razón, han tratado de ir más allá de los confines locales en sus movilizaciones y de construir federaciones a nivel nacional y organizaciones que construyan las alianzas más amplias posibles entre actores pro-reforma en la sociedad civil y en el Estado. El Pambansang Ugnayan ng mga Nagsasariling Organisasyon Sa Kanayunan (UNORKA, la Coordinación Nacional de Organizaciones Rurales Autónomas), como veremos, es una entre otras iniciativas actuales de los sin tierra para construir organizaciones nacionales.

Tales organizaciones están enfrentando ahora un ambiente político cambiante también a nivel nacional. Mientras la estrategia *bibingka* tuvo como resultado las ganancias concretas de la redistribución de tenencias de tierras privadas en disputa durante las administraciones del DAR de Garilao y Morales (Borras, 1998), el fin de la década del noventa presencié una alineación alternante de fuerzas dentro del Estado y la sociedad, que ha revertido las aperturas de la reforma dentro de la burocracia y, por lo tanto, ha desafiado la misma racionalidad

⁹ El principal marco teórico de la estrategia del *bibingka* hizo uso del trabajo de Jonathan Fox (1992) sobre México y, en particular, del desarrollo de su “estrategia del emparedado” para impulsar las reformas distributivas (por ejemplo, consejos de alimentos aldeanos) a comienzos de la década del ochenta.

RECUPERANDO LA TIERRA

de la estrategia *bibingka*. La restricción de aperturas de reforma en la administración Braganza del DAR, como lo manifiesta el movimiento mínimo de tierras en el CARP en los años 2001 a 2002, junto con las iniciativas de contrarreforma emergentes del Congreso (por ejemplo, el recorte del presupuesto disponible para la distribución y adquisición de tierras, el inminente proyecto de ley “Tierras de Cultivo como Garantía”), han compelido a los sin tierra a repensar sus estrategias políticas. El despliegue de acontecimientos recientes en la situación política nacional sugiere que la estrategia *bibingka* necesita ser revisada y reestructurada para enfrentar la nueva situación en la que el reformismo “desde arriba” está en retirada y el poder de los terratenientes reafirmandose en varios niveles de la sociedad filipina.

EXPLORANDO UN ACERCAMIENTO A LA REFORMA

BASADO EN DERECHOS

Una estrategia que está emergiendo de las recientes experiencias de las organizaciones campesinas autónomas en el “estiramiento” del potencial de la reforma puede denominarse el enfoque *basado en derechos*. Esta perspectiva invoca los derechos de los campesinos sin tierra como miembros legítimos de la organización política, haciendo énfasis en el derecho a la alimentación y, por extensión, en el derecho a la tierra como un recurso básico. El enfoque emana de las iniciativas de la sociedad civil para proveer igual peso a los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo como parte de todo el conjunto de derechos humanos a ser disfrutado por cada ciudadano. Dentro de esta línea, las movilizaciones y la acción colectiva están dirigidas no sólo a comprometer al Estado en su programa de reforma, sino a presionarlo para que reconozca, cumpla y proteja los derechos constitucionales de los sin tierras. La estrategia trata de expandir el espacio político disponible haciendo valer colectivamente los derechos de individuos y grupos subordinados como miembros legítimos de la comunidad política (Harvey, 1998).

El emergente enfoque basado en derechos se ha desarrollado en lo que sectores del campesinado organizado llaman *resistencia legítima* [*rightful*] para referirse al uso innovador de leyes, políticas y otros valores oficialmente promovidos para defender sus intereses y derechos legales. Como término desarrollado por el académico estadounidense Kevin O’Brien en su estudio de la política rural en China, la *resistencia legítima* se refiere a “una forma de argumentación popular que opera cerca del límite de un canal autorizado, utiliza la retórica y los compromisos de los poderosos para reprimir al poder político o económico y depende de localizar y explotar las divisiones entre los poderosos” (1996: 33).

LA RESISTENCIA LEGÍTIMA: LA EXPERIENCIA UNORKA¹⁰

LA MOVILIZACIÓN AUTÓNOMA Y LA ACCIÓN COLECTIVA

Entre las diversas organizaciones de campesinos que comprometieron al Estado en la implementación del CARP en la década del noventa han estado las organizaciones de campesinos locales y las federaciones pertenecientes a UNORKA, algo semejante al Kilusang Magbubukid ng Bondoc Peninsula (KBMP, el Movimiento Campesino en la Península de Bondoc); el Ugyunan ng Mangunguma kag Mamumugon sa in Negros (UMMA, la Federación de Campesinos y Trabajadores de Granjas en Negros); y la Asociación de Empleados de Floreindo Unidos Beneficiarios de la Reforma Agraria (UFEARBAI) en Davao. Las federaciones locales funcionan dentro de sus trasfondos políticos específicos y la mayoría, si no todas, desafían el poder de los terratenientes en enclaves autoritarios locales. Por ejemplo, en 1997, la federación intermunicipal de KBMP comenzó a desafiar los poderes políticos y económicos del clan chino- filipino *Reyes-Uy*, que cree poseer y controlar un total estimado de entre 18 mil y 20 mil hectáreas de tierras agrícolas combinadas a través de diferentes municipalidades en el Sur de Quezon (o la Península de Bondoc)¹¹. En Negros Occidental, los miembros de UMMA están actualmente involucrados en la tenencia de tierras de más de 5 mil hectáreas poseídas y controladas por ex compinches de Marcos: Roberto Benedicto y Eduardo Cojuangco. En Mindanao, UFEARBAI sigue en una lucha contra el Estado para redistribuir más de 5 mil hectáreas de bananales poseídos por el hacedor de reyes y compinche de Marcos, Antonio Floreindo. Estos terratenientes han fortalecido de diversas maneras su influencia política y económica en el país a través de sus relaciones con el ex dictador filipino Ferdinando Marcos. En cualquier otro sitio del país, las organizaciones afiliadas a UNORKA continúan luchando por la distribución de tierras en posesiones contenciosas (privadas y públicas), en enclaves dominados por terratenientes. Estos compromisos forman parte de las iniciativas de UNORKA para presionar al Estado a redistribuir cerca de 200 mil hectáreas de posesiones de tierras agrícolas privadas de todo el país.

La dominación de los terratenientes provee tanto el contexto como el objetivo de las movilizaciones campesinas autónomas. Las movilizaciones de UNORKA son una reacción al tratamiento duro e injusto de los terratenientes y están dirigidas hacia sus tierras. Aunque la autonomía es una

10 Los datos usados aquí habían sido recogidos por Jennifer Franco, Rómulo De La Rosa y Salvador Feranil para el proyecto de investigación sobre los Movimientos Sociales Contemporáneos filipinos (a ser publicado por el Instituto para la Democracia Popular, Ciudad de Quezón).

11 Los datos se basan en el trabajo de campo de Franco desde 1998 hasta 2002.

RECUPERANDO LA TIERRA

cuestión de grado y las demandas por la autonomía absoluta podrían ser problemáticas, las movilizaciones de UNORKA han estado hasta ahora libres de los dictados, plazos y apoyo del CPP-NPA o de las maniobras políticas de los funcionarios y de los partidos que buscan construir y fortalecer su base electoral. Las acciones políticas contenciosas de UNORKA provienen mayormente del ardiente deseo del pobre rural sin tierra de acabar con el gobierno de los terratenientes en el país. Así, sus integrantes, en la creencia de que la reforma es posible, movilizan y hacen valer sus derechos trabajando dentro del sistema para efectuar cambios tanto en la propiedad como en las relaciones de poder en las zonas rurales filipinas.

A pesar de las restricciones estructurales e institucionales percibidas, UNORKA continúa desafiando el poder de los terratenientes mediante la política estatal oficial. Mientras mantiene una postura crítica ante las provisiones antipobres del CARP y ante la influencia de los terratenientes en la implementación de las políticas, las organizaciones locales afiliadas a UNORKA participan de actividades iniciadas por el Estado en la reforma agraria. Las interacciones con funcionarios DAR orientados a la reforma y con las organizaciones no gubernamentales, como las pertenecientes a la red de Acción Ecuémica Filipina para el Fortalecimiento de la Comunidad (PEACE), fomentan el robustecimiento de la determinación de las organizaciones campesinas locales a tomar participación activa en los procesos moldeadores del CARP y sus resultados y, subsiguientemente, a fortalecer la apuesta del pobre rural sin tierra en el desarrollo y la democratización rural.

Las iniciativas de reforma, sin embargo, se enfrentan también a los impulsos antirreformistas –entre los que se cuentan acciones de desalojo de la tierra, el uso de la violencia y el terror contra líderes y miembros de la organización y la cooptación de organizaciones paralelas con promesas de mejoras en la posesión de tierras y en las relaciones laborales– que, a su vez, pueden amenazar con la fragmentación de las organizaciones que buscan la reforma. En tales casos, la base de apoyo de una organización dada debe ser lo suficientemente fuerte como para resistir desafíos y resquebrajamientos organizativos que podrían llevar a una completa disolución de las iniciativas campesinas autónomas. UNORKA ha resistido hasta ahora los métodos de contrarreforma de los terratenientes (y aquellos del DAR). De este modo, a pesar de todas las bajas organizativas sufridas por UMMA (varias lesiones y la muerte de un miembro) en los enfrentamientos con los Benedictos y otros terratenientes desde 1998, los campesinos sin tierra continúan haciendo valer sus derechos a la tierra mediante acciones políticas contenciosas directas. En Davao, la enérgica acción de desalojo de cuarenta grupos familiares de trabajadores rurales de la plantación de Floirendo en mayo de 2000, y el tiroteo contra trabajadores rurales militantes de UNORKA

en las puertas de la oficina de DAR en junio de 2001, no desalentaron a las organizaciones locales de UNORKA en sus presiones al DAR para perseverar en la redistribución de plantaciones poseídas por Floirendo. En la Península de Bondoc, donde los clanes *Reyes-Uy* sembraron el terror entre los campesinos sin tierra a través del brutal asesinato del candidato a alcalde pro-reforma Felicito Mendenilla y del líder campesino de KBMP Edwin Vender en 1998, las organizaciones afiliadas a UNORKA continúan emprendiendo acciones radicales masivas contra de los terratenientes. En lugar de estar acobardados y desmoralizados por las acciones de contrarreforma de los terratenientes, la militancia de UNORKA ha aumentado a través de los años.

La acción política directa contra el Estado y los terratenientes caracteriza las tácticas políticas de UNORKA. Además de las ocupaciones de tierras, UNORKA ha organizado, repetidamente, mítines políticos, marchas e, incluso, encerrado a funcionarios locales y nacionales de DAR en las oficinas del gobierno, presionándolos a ceder sobre sus demandas. Por ejemplo, en junio de 2001, un miembro de las organizaciones de UMMA en Negros Occidental cerró con candado la oficina DAR en la ciudad de La Carlota y en la ciudad de Bacolod para reclamar la inmediata redistribución de tierras pertenecientes a los Benedictos, a Cojuangcos¹² y a otros prominentes terratenientes en la provincia. En agosto del mismo año, miembros de UMMA comenzaron un cerrojo humano a la oficina provincial de DAR, otra vez para presionar a que DAR fomentara la expansión de la redistribución de tierras en otras haciendas en la provincia. Trabajadores y campesinos bloquearon las puertas de DAR formando cadenas humanas que impedían el ingreso. En el mismo mes, alrededor de quinientos líderes campesinos de UNORKA de la Península de Bondoc y otras provincias del centro y sur de Luzon asaltaron la Oficina del Secretario del DAR en la ciudad de Quezón para llevar al secretario Hernani Braganza al diálogo y resolver las quinientas diecinueve disputas agrarias que involucraban a casi 100 mil grupos familiares de campesinos sin tierras. A pesar de la violenta amenaza de dispersión del contingente de la policía de elite del Grupo de Acción y Armas Especial (SWAT), los miembros de UNORKA se rehusaron a desocupar el establecimiento del DAR y continuaron solicitando una audiencia con Braganza, quien a su vez se rehusó a encontrarse con ellos. Durante dos noches y tres días, la UNORKA mantuvo su posición, y levantaron sus barricadas sólo después de obtener una promesa escrita

12 Roberto Benedicto y Eduardo Cojuangco habían sido previamente nombrados por el presidente Marcos para operar las industrias nacionales de azúcar y coco, respectivamente. Ambos compinches utilizaron sus conexiones directas y poderosas con el presidente para acumular tierras en Negros Occidental.

RECUPERANDO LA TIERRA

del líder de DAR respecto del mecanismo de resolución de la demanda. En Davao, las organizaciones afiliadas a UNORKA echaron un camión lleno de bananas delante de la oficina de DAR, en 1996, y cerraron con candado sus puertas en junio de 2001 para obligar a la agencia a actuar sobre su demanda de redistribución de tierras en diversas plantaciones comerciales en el sudeste de la región de Mindanao. Entre febrero y mayo de 2002, militantes de UFEARBAI provenientes de Davao fueron a Manila y realizaron sus protestas contra de DAR –con piquetes, huelgas de hambre y encadenándose a las puertas del Departamento de Justicia– por su inacción desde la década del sesenta en distribuir plantaciones de los Floirendos contratadas por la Colonia Penal de Davao.

Si bien las movilizaciones masivas pueden obtener la atención de las elites estatales, que subsiguientemente toman acciones para solucionar problemas, hay instancias en las que las acciones políticas fracasan al acumular la clase de presión que mueve al Estado a prestar atención a las demandas del pobre rural sin tierras. Durante compromisos más intensos, las acciones colectivas de UNORKA cambiaron hacia formas más radicales de movilización, como las ocupaciones de tierras. Por ejemplo, UMMA y KBMP continuaron con las tomas en sus respectivas provincias hacia finales de la década del noventa, a fin de fomentar la afirmación de sus derechos sobre las tenencias de tierras disponibles de CARP. Las ocupaciones de tierras de UMMA en los pueblos de Pontevedra, ciudad de Bago y ciudad de La Carlota a fines de los noventa instaron al DAR a redistribuir más de trescientas hectáreas de tierras agrícolas para los trabajadores rurales y campesinos. Aunque de limitado alcance, cuando se observaban las cerca de 300 mil hectáreas de tierras de CARP disponibles en Negros Occidental, las ocupaciones de tierras de UMMA demuestran el potencial de la acción política radical dentro de la resistencia justa. En la Península de Bondoc, a pesar de la aguda resistencia contra las acciones colectivas campesinas, las iniciativas de ocupaciones de la organización KBMP Samahan ng Magsasaka sa Catulin (SAMACA) el 30 junio de 1998 obligaron a los funcionarios del DAR a reconocer el derecho de la organización sobre la propiedad de 174 hectáreas de Domingo Reyes. El 9 septiembre de 1998, el subsecretario de DAR, Conrado Navarro, respaldado por treinta soldados del Ejército Filipino y veinte policías del Comando Regional en Lucena, Quezon, apoyó a los campesinos en su reclamo de la propiedad de Reyes y, por consiguiente, ello sirvió para hacer justicia a la larga lucha de los campesinos sin tierras¹³. Las ocupaciones de tierras de UNORKA demuestran el potencial de la resistencia legítima en la implementación de la reforma agraria.

13 Basado en descubrimientos del trabajo de campo de Franco (2000).

TRABAJANDO EL SISTEMA LEGAL

La resistencia legítima de UNORKA concentra su atención en enfrentar diversas disposiciones legales que rodean al CARP y su implementación. A menudo, los terratenientes combaten las demandas de peticionarios campesinos dentro del CARP, soslayando la ley para retrasar, en caso de no impedir, la redistribución de tierras, o archivando los casos en contra de los peticionarios en el curso entero de la lucha. Gracias a los vacíos legales dentro del CARP, los terratenientes cuestionan las aptitudes de los beneficiarios que representan a las organizaciones autónomas. Cuando esto falla, los terratenientes impugnan cada regla de DAR que conduzca a la transferencia de tierras y reportan órdenes de restricción en diversos juzgados de diferentes niveles del sistema judicial. Debido a la ineficiencia del sistema judicial filipino, los casos agrarios llevan años para ser resueltos en los tribunales. A veces, los terratenientes elevan sus casos a juzgados más altos cada vez que una disposición es favorable a los peticionarios campesinos. Cuando estos métodos fallan, los terratenientes cuestionan la valoración de las tierras o demandan a funcionarios de DAR, basándose en supuestos errores técnicos y procesales cometidos en el procesamiento de demandas de tierras y, por consiguiente, asegurándose que las transferencias de tierras están estancadas, si no completamente bloqueadas, más allá de todos los recursos legales.

El sistema legal es así una importante área de la lucha por las tierras, pero también una que puede ser imparcial con los campesinos. Los casos legales iniciados por los terratenientes son parte del repertorio de hostigamiento que intenta obligar a los campesinos a echarse hacia atrás en su causa. Esto se ilustra, además, por las tácticas de “castigo” legal de los terratenientes contra los campesinos, tal como está narrado por Carranza, de la Fundación PEACE:

Entre 1995 y 1996, un asesinato frustrado, un incendio provocado y dos casos de robo habían sido iniciados por terratenientes contra cuatro peticionarios-inquilinos en la hacienda Superior-Agro, en San Narciso. Entre 1995 y 1997, un total de ciento dos casos de *estafa* habían sido iniciados contra veintiocho agricultores en la propiedad de Aquino en Cambuga, Mulanay. Hacia 1997, dos agricultores más fueron acusados de *estafa* en la propiedad Samuel Uy en Sitio Libas, San Vicente en San Narciso, como lo fue otro en la propiedad Marasigan en Lilukin, Buenavista. Al año siguiente, doce agricultores fueron acusados de robo calificado después de la cosecha colectiva de coco en la hacienda Ribargoso en San Juan, San Narciso, y otro fue acusado de robo calificado en la propiedad de Quizon en Talisay, San Andrés.

Trabajar el sistema legal requiere que los campesinos sin tierra se capaciten en la ley –y hagan un innovador uso de la misma– y en otros valores

RECUPERANDO LA TIERRA

prescriptos por el Estado, para enfrentar diversos casos legales iniciados por los terratenientes en su contra. Con los recursos limitados de las organizaciones campesinas, los aliados se vuelven cruciales en las luchas por las tierras. Así, desde 1990, las organizaciones locales afiliadas a UNORKA han estado fortaleciendo las alianzas con abogados a favor de la reforma, en sus respectivas provincias, para enfrentar la resistencia de los terratenientes e involucrarlos en las batallas legales a cada paso del camino. Aparte de esto, la Fundación PEACE ha llevado a cabo entrenamientos y seminarios paralegales entre los líderes de UNORKA, a fin de capacitarlos en casos legales y en la exploración de diversas alternativas en el uso de la ley para su propia ventaja. El uso innovador de leyes entre las organizaciones afiliadas a UNORKA complementa las acciones políticas contenciosas para desafiar las disposiciones fijadas por los terratenientes sobre las tenencias de tierras. A pesar de las restricciones institucionales en el trabajo del sistema, de la ineficiencia del sistema judicial y de su tendencia a ser corrompido e influenciado por las elites, el uso innovador de leyes ha contribuido a fortalecer más de quinientos reclamos legales de UNORKA y de campesinos sin tierra sobre las contenciosas tenencias privadas de tierras del país.

FORJANDO ALIADOS PARA LA REFORMA

La importancia de las alianzas en la lucha por la reforma agraria no puede ser subestimada. Especialmente en las grandes extensiones de tierras privadas en disputa, las organizaciones campesinas locales necesitan lograr alcances considerables en sus movilizaciones para enfrentar las iniciativas de contrarreforma. La entrada de organizadores comunitarios en las áreas de UNORKA, bajo los auspicios de la red PEACE, ha servido para varios objetivos: (a) informar al pobre rural sin tierra acerca de sus derechos bajo el CARP y otros aspectos de la ley; (b) facilitar el desarrollo de los vínculos horizontales entre campesinos y compartir con ellos la organización y las técnicas organizativas de la administración; (c) ayudar a extenderse y ensanchar el alcance de sus acciones colectivas más allá de sus límites geográficos, políticos e institucionales existentes; (d) enseñarles a los inquilinos el arte de la “táctica” (o de la elaboración de varias acciones y perspectivas para efectuar la redistribución de tierras). A través de aliados como la red PEACE, los vínculos verticales y horizontales con grupos que abogan por las reformas sociales ayudan a fortalecer y ensanchar la acción colectiva. Así, a pesar de la especificidad de contextos entre las diferentes tenencias de tierras, las luchas y los esfuerzos comunes son elevados y emprendidos a nivel regional y nacional. Por ejemplo, las campañas nacionalmente coordinadas iniciadas por UNORKA en octubre de 2001 y 2002, que presenciaron el bloqueo con una barricada de la Oficina Central de DAR por parte de trabajadores

rurales y campesinos sin tierra de diferentes provincias del país, en parte empujaron al secretario de DAR, Braganza, a tomar acción inmediata y concreta en las tenencias de tierras privadas contenciosas al amparo del CARP. Aunque el liderazgo nacional de DAR tuvo una perspectiva diferencial sobre los diversos casos agrarios abanderados por UNORKA en estas movilizaciones, las acciones propulsaron la reforma agraria en los debates nacionales conducidos por los legisladores.

Los vínculos con grupos internacionales que acumulan apoyo y recursos críticos para las movilizaciones campesinas proveen el efecto palanca adicional a las organizaciones campesinas locales para desafiar los fuertes recursos de los terratenientes. Aunque todavía limitada, la construcción de la alianza de UNORKA a nivel internacional ha brindado nuevas oportunidades para mejorar la acción colectiva y presionar a las elites políticas a colocar la reforma agraria en la agenda estatal. Algo semejante había sido la experiencia de UNORKA en su trabajo con la división filipina del Red de Acción de Información Alimentos Primero (FIAN). Desde 1996 hasta el presente, los representantes de FIAN han conducido misiones de investigación en provincias apañadas por UNORKA, donde contenciosas acciones políticas de campesinos sin tierra se han encontrado con violaciones de los derechos humanos. A través de estas campañas, los asuntos que asedian a las organizaciones afiliadas a UNORKA en su lucha por la tierra logran presión internacional sobre el Estado y generan opinión pública favorable. La mayor parte de las veces (Península de Bondoc, Negros y Davao), las iniciativas de FIAN ayudaron a obligar a los funcionarios de DAR a ocuparse de las preocupaciones de los campesinos en lucha.

CONCLUSIÓN

La novedad emergente de la acción colectiva campesina en las Filipinas radica en el cambio estratégico para abrir el compromiso con el Estado y, por consiguiente, el uso de la política y los procedimientos legales disponibles para expandir las posibilidades de reforma dentro de los programas del Estado. La importancia fundamental de localizar e integrar la lucha por la tierra dentro de un marco de derechos debe hallarse en el potencial que crea en el cambio de las prioridades en la economía política de asignación de recursos y de la distribución en favor de las personas que viven en la pobreza. Estas acciones no están simplemente dirigidas a obtener la atención de los grandes terratenientes utilizando las “armas de los débiles” en su resistencia diaria (Scott, 1985); tampoco son consideradas como rebeliones campesinas tendientes a apoderarse del poder estatal. Todo el repertorio de las emergentes acciones colectivas campesinas reside entre estos dos polos: se enfoca específicamente en compromisos públicos con el Estado en su proclamado

RECUPERANDO LA TIERRA

programa de reforma y empuja los límites de los canales autorizados (O'Brien, 1996). Por lo tanto, mientras la trayectoria de la acción colectiva de los campesinos trabaja dentro del curso prescrito por el CARP, UNORKA compromete constantemente a funcionarios locales y nacionales de DAR a revisar y reexaminar la política y lo que trasciende de su implementación. En su presión a funcionarios de DAR, tanto nacionales como locales, para aumentar el potencial de reforma del CARP, los campesinos sin tierra y los trabajadores rurales son capaces de construir un ímpetu de acción campesina colectiva que desafía la brecha entre lo que fue prometido en el programa de reforma del Estado y lo que está siendo entregado.

Se percibe que estas movilizaciones ensanchan las posibilidades de reforma dentro de los existentes planes estructurales e institucionales. Por lo tanto, a pesar de las inherentes restricciones políticas en los enclaves autoritarios locales, las elites estatales son constantemente instadas a responder a las demandas constitucionales de los campesinos. Las acciones contra las elites locales y nacionales pueden no traducirse automática e inmediatamente en ganancias de gran alcance para los sin tierra y, en casos extremos, quizás hasta pueda aparecer la violencia. Sin embargo, compromisos críticos con el Estado permiten a los campesinos construir sobre sus ganancias y expandir la participación de los ciudadanos en la implementación de políticas. Basada en la existencia de leyes y políticas que afirman reconocer, cumplir y proteger los derechos de los sin tierra, la reforma agraria está siendo reafirmada por organizaciones campesinas locales a través de la política estatal oficial, en un esfuerzo para hacer al Estado más responsable de sus ciudadanos.

La experiencia de movilización y acción colectiva de UNORKA provee útiles perspectivas comparativas en la resistencia legítima. Primero, ilustra que las acciones políticas, que van desde concentraciones de gente, marchas, piquetes y huelgas hasta las radicales ocupaciones de tierras, siguen siendo importantes para obligar al Estado en su política de reforma. Es más, la experiencia revela la necesidad de intensificar tales acciones políticas a la luz de la disminución de los espacios reformistas dentro de la burocracia. En segundo lugar, mientras las acciones políticas con frecuencia implican otras que pueden ir más allá del estado de derecho, los remedios legales utilizados por los terratenientes para debilitar las iniciativas campesinas autónomas podrían enfrentarse mediante un uso innovador de las leyes que refrene su poder político y económico. En tercer y último lugar, aunque las movilizaciones campesinas y la acción colectiva se hayan encontrado progresivamente con la coerción, el apoyo de aliados a nivel local e internacional les provee fuerzas adicionales para enfrentar las corrientes de antirreforma, tanto en el Estado como en la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, Benedict 1988 "Cacique Democracy in the Philippines: Origins and Dreams" en *New Left Review*, 169, mayo-junio.
- Borras, Saturnino Jr. 1998 *The Bibingka Strategy in Land Reform Implementation: Autonomous Peasant Movements and State Relations in the Philippines* (Quezon City: Institute for Popular Democracy).
- Borras, Saturnino Jr. 2001a "State-Society Relations in Land Reform Implementation in the Philippines" en *Development and Change*, 32(4), pp 545-575.
- Borras, Saturnino Jr. 2001b "The Philippine Agrarian Reform: Relatively Vibrant Land Redistribution Amidst Less-than-Dynamic Agricultural Transformation" en Morales, H. Jr. y Putzel, J. con Lara Jr., F., Quitoriano, E. y Miclat-Teves, A. (eds.) *Power in the Village: Agrarian Reform, Rural Politics, Institutional Change and Globalization* (Quezon City: Project Development Institute).
- Borras, Saturnino Jr. 2002 "Problems and Prospects of Redistributive Land Reform in Mindanao, 1972/1988-2001" en *Mindanao Focus*, 1 (Davao City: Alternate Forum for Research in Mindanao [AFRIM]).
- Deininger, Klaus 1999 "Making Negotiated Land Reform Work: Initial Experience From Colombia, Brazil and South Africa" en *World Development*, 27(4), pp 651-672.
- El-Ghonemy, Riad 1999 *The Political Economy of Market-Based Land Reform*, UNRISD Discussion Paper N° 104 (Geneva: United Nations Research Institute for Social Development).
- Franco, Jennifer Conroy 2000 *Campaigning for Democracy: Grassroots Citizenship Movements, Less-than-Democratic Elections, and Regime Transition in the Philippines* (Quezon City: Institute for Popular Democracy).
- Fox, Jonathan 1992 *The Politics of Food in Mexico: State Power and Social Mobilization* (Ithaca: Cornell University Press).
- Harvey, Neil 1998 *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy* (Durham, NC y London: Duke University Press).
- Hayami, Yujiro, Quisumbing, Ma. Agnes y Adriano, Lourdes 1990 *Toward an Alternative Land Reform Paradigm: A Philippine Perspective* (Quezon City: Ateneo de Manila Press).
- Herring, Ronald 2001 "Beyond the Political Impossibility Theorem of Agrarian Reform" en Morales, H. Jr. y Putzel, J. con Lara Jr., F., Quitoriano, E. y Miclat-Teves, A. (eds.) *Power in the Village: Agrarian Reform, Rural Politics, Institutional Change and Globalization* (Quezon City: Project Development Institute).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Kasuya, Yuko 1995 *The "Failure" of Agrarian Reform in Transitional Democracy, Philippines 1986–1992*, ISS Working Papers, N° 194 (The Hague: Institute for Social Studies).
- Kay, Cristobal 2000 *Conflict and Violence in Rural Latin America*, ISS Working Papers, N° 312 (The Hague: Institute for Social Studies).
- Kerkvliet, Benedict 1993 "Claiming the Land: Take-overs by Villagers in the Philippines with Comparisons to Indonesia, Peru, Portugal and Russia" en *Journal of Peasant Studies*, 20(3), pp 459-493.
- Lara, Francisco y Morales, Horacio 1990 "The Peasant Movement and the Challenge of Rural Democratization in the Philippines" en Fox, Jonathan (ed.) *The Challenge of Rural Democratization: Perspectives from Latin America and the Philippines* (London: Frank Cass).
- NSCB 2000 *2000 Philippine Statistical Yearbook* (Makati City: National Statistics Coordination Board).
- O'Brien, Kevin 1996 "Rightful Resistance" en *World Politics*, 49 (octubre), pp 31-55.
- Putzel, James y Cunningham, John 1989 *Gaining Ground: Agrarian Reform in the Philippines* (London: WOW Campaigns).
- Putzel, James 1992 *A Captive Land: The Politics of Agrarian Reform in the Philippines* (London y New York: Catholic Institute for International Relations and Monthly Review Press).
- Riedinger, Jeffrey 1995 *Agrarian Reform in the Philippines: Democratic Transitions and Redistributive Reform* (Stanford, CA: Stanford University Press).
- Scott, James C. 1985 *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven, CT, y London: Yale University Press).
- Sidel, John 1989 "Beyond Patron-Client Relations" en *KASARINLAN*, 4(3).
- Sobhan, Rehman 1993 *Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development* (London y Dhaka: Zed Books and University Press).
- Weekley, Kathleen 2001 *The Communist Party of the Philippines 1968–1993: A Story of Its Theory and Practice* (Quezon City: University of the Philippines Press).
- World Bank 2001 *World Bank Development Report 2000/2001: Attacking Poverty* (New York: Oxford University Press).

HENRY VELTMEYER*

LA DINÁMICA DE LAS OCUPACIONES DE TIERRAS EN AMÉRICA LATINA

EL PROBLEMA DE SU CARENCIA siempre ha sido la base para una política de ocupación e invasión de tierras, un problema que tiene su génesis en lo que Marx definió en términos de proceso de “acumulación primitiva” –la separación de los trabajadores o productores directos de sus medios de producción social– o, en términos históricamente más específicos, como la expulsión de los campesinos de sus tierras. Este problema ya había sido expuesto como un asunto de hambre de tierras y de identidad cultural, es decir, bajo la luz de la presunta necesidad de los campesinos, otros trabajadores y productores rurales de ser reconectados a la tierra como una fuente no sólo de actividad productiva sino de todo lo que da significado a sus vidas. En el contexto más reciente de los cambios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con particular referencia al lanzamiento del “proyecto de desarrollo” (Sachs, 1992), el problema generalmente ha sido redefinido como una cuestión de exclusión social y pobreza: en otras palabras, como la incapacidad para hacer frente a las necesidades básicas de la población y como una cuestión de recobrar o de mejorar el acceso de los grupos rurales y las comunidades al recurso social productivo de la tierra, o reforma agraria.

* Henry Veltmeyer es profesor de Sociología y Estudios de Desarrollo Internacionales en la Universidad de St. Mary's, Halifax, Nova Scotia, y en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Es autor de numerosos estudios sobre economía política del desarrollo, particularmente en el contexto latinoamericano.

RECUPERANDO LA TIERRA

Las dinámicas de la reforma agraria en éste y en otros contextos son muy complejas y variadas. Pueden comprenderse mejor en términos políticos, es decir, en términos de una lucha prolongada de campesinos y otros grupos rurales por la tierra y la reforma agraria y, también, en términos de la reacción de la clase dominante terrateniente y del funcionamiento del Estado ante esta lucha. El propósito de este trabajo es colocar estas dinámicas de reforma agraria en una perspectiva histórica y teórica. En este marco, las ocupaciones de tierras toman forma como un método de lucha de clases y acción colectiva directa, una estrategia fundamental para ganar acceso a la tierra.

El trabajo está organizado en dos partes. En la primera se revisa, en términos históricos, la dinámica de lucha de clases implicada en las ocupaciones de tierras. La segunda parte considera tres caminos básicos hacia la reforma trazada en el período contemporáneo; su punto de referencia es la Revolución Cubana de 1959. La Revolución Cubana creó un contexto enteramente nuevo, tanto para una nueva ola de movimientos revolucionarios en las zonas rurales de América Latina –caracterizada por la ocupación de tierras sin usar en las periferias de las ciudades–, como para un nuevo ciclo de reformas agrarias llevadas a cabo por el Estado. A raíz de estos acontecimientos, y en un contexto enteramente nuevo y diferente creado por la implementación extendida de un “nuevo modelo económico” y de un proceso de democratización, el escenario propició otra ola de movimientos revolucionarios de base llevados a cabo por campesinos a la vez que alentó, también, un nuevo giro en el programa de reforma agraria (la transición de un programa de tierras implementado por el Estado hacia un nuevo programa de reforma asistido por el mercado). Muchos analistas vieron esta transición como “la muerte de las reformas agrarias”. Aquí lo vemos de otra manera: como un nuevo giro en la opción de reforma presentada para una generación nueva de campesinos revolucionarios por los gobiernos y por las instituciones bilaterales y multilaterales que proveen asistencia para el desarrollo de ultramar. Así, la táctica de las ocupaciones de tierras adquiere su significado político en este contexto.

PLANTEANDO EL PROBLEMA: ACUMULACIÓN PRIMITIVA, CARENCIA DE TIERRAS Y POBREZA RURAL

EL CAMPESINADO Y EL ESTADO EN CONTEXTO HISTÓRICO

La institución de un modo de producción capitalista, como Marx analizó tan bien en el contexto europeo, es predicada en un proceso de “acumulación primitiva” diseñada para crear una clase para contratar un proletariado o una clase asalariada. En su contexto histórico, “la acumulación primitiva” denota un proceso de separación de los productores directos de sus medios de producción, usualmente en forma

de expropiación o incautación violenta de tierras comunales. Como observó Marx, este proceso brindó la ocasión para la conversión del dinero acumulado en y por diversas formas y maneras –incluyendo pillaje, robo, intercambio mercantil y la esclavitud de indoamericanos– en “capital”, y para la transformación de varios modos de producción precapitalistas al capitalismo. Tanto en el “viejo mundo” de Europa como en el que emergería como el “mundo nuevo” de las Américas, este proceso puede ser rastreado unos quinientos años atrás, en el período extendido de gobierno colonial en el mundo nuevo y en la destrucción, más bien abrupta, y en la transformación de las sociedades precapitalistas y precoloniales indígenas en sociedades protocapitalistas divididas en clases, bajo formas de dominación transplantadas de sociedades europeas.

El período de gobierno colonial, desde el “descubrimiento” del “nuevo mundo” en el siglo XV y la “conquista” de la población indígena hasta el proceso de independencia nacional en el siglo XIX, conllevó una historia de expropiación de tierras y de “acumulación primitiva”. Sin embargo, hubo otra cara en este proceso. Desde el principio hubo una resistencia extendida, con numerosos brotes de rebeliones campesinas e incluso la institución de leyes de reforma agraria conducidas por el Estado, que consolidaron las ganancias logradas por el campesinado, la principal fuerza social y política en una sociedad principalmente rural, mediante un proceso de ocupaciones de tierras. Un caso fundamental a señalar fue la rebelión de Tupac Amaru en el siglo XVIII, y las subsiguientes leyes de reforma agraria del año 1820 (Jacobsen, 1993).

Como consecuencia de los movimientos nacionales de independencia, se produjeron variadas formas de lucha de clases en los Estados nacionales recientemente independizados. En el Perú colonial, Haití y México, los trabajadores rurales esclavizados, contratados, bajo régimen de servidumbre y semiproletarizados (la mayoría autoidentificados como campesinos) desafiaron el poder del Estado colonial a todo lo largo del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En el último período liberal de reforma, colonial o poscolonial, en América Central (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala), el Estado instituyó medidas legislativas, políticas y represivas para llamar al orden (intentando aplastar los desórdenes laborales) a los campesinos, indígenas y trabajadores rurales sin tierra rebeldes, en favor de la oligarquía terrateniente semifeudal (Wheelock Román 1985; Gould, 1993; Amador, 1990; Mahoney, 2001).

Un tema propio de esta lucha de clases fue la propiedad como medio de producción, a saber, la tierra, el recurso productivo básico disponible, que para algunos (una pequeña oligarquía terrateniente), sería la fuente de una fortuna personal y de relaciones de privilegio y poder y, para otros (la inmensa mayoría de trabajadores y productores y las comunidades indígenas) la fuente primaria de sustento. Esta lucha por la tierra incitó

RECUPERANDO LA TIERRA

a la pelea a una clase propietaria semifeudal, con una influencia política preponderante sobre el aparato estatal, en contra de una población rural mayormente compuesta de campesinos y siervos, un vasto proletariado de trabajadores rurales desposeídos (sin tierras o casi sin tierras) y, en algunos contextos, contra las comunidades indígenas de productores campesinos.

Por un lado, en esta lucha de clases había una clase propietaria mercantil o semifeudal en condiciones de controlar no sólo al gobierno de turno sino a otras partes del Estado, como el sistema judicial y el aparato de seguridad, todo lo cual entró en juego en la lucha por la tierra (Harris et al., 1978; Lindqvist, 1979; Orlove y Custred, 1980; Vilas, 1995). Del otro, hubo grupos organizados de campesinos y un gran semiproletariado que utilizaron todas las armas y tácticas a su disposición, en particular las ocupaciones de tierras y las acciones directas contra los detentores del poder político y económico o sus agentes (Fogel, 1986; Foley, 1991; Heath, 1969; Katz, 1988; LeGrand, 1983; Loveman, 1976; Horton, 1998). Los comprometidos en esta lucha representaban diversas relaciones de producción: desde trabajadores esclavizados de las plantaciones hasta productores en régimen de servidumbre bajo relaciones de producción del sistema de *encomienda* (tenencia de tierra, peonaje endeudado, servidumbre contratada, rentas laborales); desde aparceros hasta un semiproletariado de trabajadores rurales golondrina/agricultores de subsistencia; y desde un proletariado rural de trabajadores sin tierra hasta comunidades indígenas de agricultores campesinos.

La historia de la lucha por la tierra cobró diversas formas en diferentes lugares y fue integrada por distintos grupos comprometidos de “campesinos”, cuya lucha no fue sólo en general esporádica sino localizada. Todavía no existe un estudio sistemático de la dinámica de clases de estas luchas (qué grupos particulares participaron, cómo y bajo qué condiciones), pero es suficientemente claro que, la mayoría de las veces, las diversas categorías y agrupamientos de “campesinos” y trabajadores rurales sin tierra se unían a la lucha por la tierra y a los actos de insurrección en diferentes coyunturas y situaciones¹. La tendencia a que las diversas categorías y agrupamientos de “campesinos” se unieran a la lucha fue encapsulada por la Revolución Mexicana, que no sólo ganó los derechos a grandes lotes de tierra para los campesinos

1 Los temas teóricos implicados en la categorización de los campesinos en términos de clase están esbozados por, entre otros, De Janvry (1981), Brass (1991, 2000) y Kearney (1996). En América Latina, una pequeña burguesía rural compuesta de agricultores independientes no se desarrolló en la misma extensión que, bajo condiciones muy diferentes, en América del Norte. La trayectoria latinoamericana ha sido caracterizada por un campesinado políticamente débil y subyugado y por el predominio del latifundio. Respecto de la cuestión de los caminos alternativos de desarrollo agrario en América Latina, ver De Janvry (1981) y Kay (1981).

y las comunidades indígenas que les habían sido expropiados en décadas y siglos previos, sino que estableció una línea divisoria entre las relaciones campesino-Estado a lo largo de toda América Latina (Petras y Veltmeyer, 2002).

A raíz de la Revolución Mexicana –y de la Revolución de Octubre en Rusia–, el Estado en América Latina, bajo la presión de más cambios revolucionarios, fue reorientado hacia programas de reforma agraria, diseñados tanto para mejorar el acceso a la tierra para varias categorías de productores y trabajadores (“campesinos”) desposeídos o sin tierra como para conservar la paz social.

En la década del treinta, surgieron movimientos masivos con fuerte base campesina en México, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Brasil y Perú². En el Caribe, en Guayana y otros sitios, los trabajadores rurales, particularmente azucareros de modernas plantaciones en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, se involucraron en la lucha de clases. En cada instancia, medidas sumamente violentas y represivas fueron asumidas por el Estado para suprimir o destruir estas rebeliones rurales, o –como en el caso excepcional de México bajo la autoridad de Cárdenas– la reforma agraria fue extendida para incluir a centenares de miles de familias rurales pobres. En El Salvador, la insurrección campesina fue aplastada totalmente y unas 30 mil personas fueron asesinadas (Dunkerley, 1992: 49); un acontecimiento similar en Ecuador, bajo condiciones casi idénticas, tuvo los mismos efectos devastadores en una incipiente lucha de clases. En Nicaragua, República Dominicana y Cuba, el ejército estadounidense de ocupación y sus nuevos presidentes tiranos –Somoza, Trujillo y Batista– masacraron a miles, matando indiscriminadamente a los florecientes movimientos de trabajadores rurales y campesinos. En Brasil, el régimen de Vargas derrotó al ejército guerrillero de base rural de Prestes mientras perseguía una estrategia de industrialización nacional; en Chile, el Frente Popular de radicales, socialistas y comunistas incitó –y luego abandonó– a la lucha campesina, conjuntamente con demandas de reforma agraria, en un pacto implícito de caballeros con la tradicional oligarquía terrateniente (Castells, 1976; Kay, 1981; Loveman, 1976).

En el mejor de los casos, las revoluciones de base campesinas pudieron asegurar reformas institucionales en el sector agrario –esto es, la redistribución de tierras–, pero estas reformas siguieron, a menudo, un proceso de ocupación *de facto*. El gobierno, efectivamente, se vio forzado a legalizar el estado de cosas, así como también a desalentar presiones por una redistribución de tierras más radical. En el caso de

2 Ver, entre otros, las secciones relevantes en las importantes colecciones editadas por Stavenhagen (1970), Landsberger (1969, 1974) y Roseberry et al. (1995).

RECUPERANDO LA TIERRA

México, este proceso comenzó a principios de 1900 y alcanzó su punto más alto en 1930³.

Durante los cincuenta años siguientes, particularmente en las décadas del sesenta y setenta, virtualmente todos los gobiernos nacionales en América Latina usaron el poder del Estado para alterar la distribución de tierras entre las diferentes categorías de productores y grupos familiares y redefinir los derechos a la tierra de aquellos que habían tenido acceso durante el proceso. Esto ocurrió a pesar de la complejidad del régimen del poder. En 1952, en Bolivia, una revolución de mineros y campesinos llevó a una abrumadora reforma agraria que resultó en la expropiación de la mayor parte de las grandes haciendas (Beltrán y Fernández, 1960; Dandler, 1969; Dunkerley, 1984; Lora, 1964; Malloy y Thorn, 1971). En Cuba, la victoria del Movimiento 26 de Julio en 1959 provocó la confiscación de la mayor parte de las plantaciones poseídas por cubanos y estadounidenses, y la tierra fue colectivizada o distribuida entre minifundistas (McEwan, 1981). Las reformas agrarias substantivas también tuvieron lugar en Perú, de 1958 hasta 1974; en Brasil, de 1962 hasta 1964; en Chile, de 1966 hasta 1973; en Ecuador, de 1964 hasta 1967; en El Salvador, de 1980 hasta 1985; en Guatemala, de 1952 hasta 1954 (y nuevamente después de la guerra civil siguiendo los acuerdos de paz); en Honduras, en 1973; y en Nicaragua, de 1979 hasta 1986. Estas reformas fueron llevadas a cabo por los Estados, independientemente de la forma de gobierno (autoritario, militar, reformista liberal, protorrevolucionario), pero en todos los casos emprendidas en respuesta a las masivas movilizaciones campesinas y a una amenaza general de “revolución social” (Blanco, 1972; Cotler, 1978; De Janvry et al., 1998; Kay, 1981, 1982; Midlarsky y Roberts, 1995; Vilas, 1995)⁴.

LAS DINÁMICAS RURAL Y URBANA DE LAS OCUPACIONES DE TIERRAS

A pesar de estos esfuerzos, muchas categorías de grupos familiares rurales permanecieron –y permanecen– sin tierra o casi sin tierra. Aun en 1998, el 90% de toda la tierra de labranza en América Latina estaba concentrada en grandes fincas que representan el 26% de todos los agricultores, la mayor parte del total de la tierra y la producción rural. En el caso de Brasil, que

3 Historias anteriores y todavía útiles que realizan una crónica de este proceso incluyen a Simpson (1937), Whetten (1948) y Tannenbaum (1968).

4 La literatura sobre la dinámica de estas reformas agrarias es voluminosa pero se destacan, entre otras, Gutelman (1974) y, más ampliamente, De Janvry (1981) y Stavenhagen (1970). En relación con Chile específicamente, un número de comentaristas ha identificado hasta tres programas diferentes de reforma agraria: el primero, desde 1882 hasta 1967, precapitalista en su forma; el segundo, bajo Frei y Allende, desde 1967 hasta 1973, que implicó una transición hacia una agricultura capitalista; y un tercero, de 1973 hacia adelante, basado mayormente en el regreso de las propiedades inmuebles a sus dueños anteriores, muchos de los cuales se convirtieron en capitalistas de la variedad del *Junker*.

desde 1988 ha experimentado programas de reforma agraria tanto “desde debajo” como “desde arriba” y un éxodo rural de proporciones asombrosas (30 millones en los últimos veinticinco años), el 3% de la población posee todavía dos tercios de la tierra de labranza del país y permanece por encima de los 4,8 millones de familias en áreas rurales sin ningún tipo de acceso a la tierra⁵. Además, en Brasil y virtualmente en cada país en la región, la mayor parte de aquellos que tienen acceso a alguna tierra apenas son capaces de ganar para una existencia de nivel de subsistencia y mucho menos para una vida comercial. Un pequeño 50% de todas las unidades de producción o “granjas” en la región, con nada más que el 2% de la tierra, lleva adelante operaciones económicamente marginales que permiten sólo la subsistencia de las familias que permanecen en la tierra.

En respuesta a esta situación –un producto histórico y contemporáneo de lo que Marx, en un contexto diferente, había identificado como proceso de “acumulación primitiva”– muchísimos integrantes de un proletariado rural desposeído se han visto forzados a emigrar hacia las ciudades y los centros urbanos, en lo que produjo una de las principales convulsiones y transformaciones sociales de los tiempos modernos: el desarrollo capitalista de actividad económica de base urbana y la asociada transformación de un campesinado rural en un proletariado urbano. Hoy, todos los países de la región son, por lo menos, 50% urbanos en términos de residencia y de actividad económica (en un gran número de casos, como la Argentina, hasta y en más del 80%). Una de las tantas repercusiones de esta “gran transformación” (industrialización, modernización, urbanización, desarrollo capitalista) es que la lucha por la tierra rural y las ocupaciones de tierras han sido transferidas del sector rural hacia la periferia de las nuevas metrópolis urbanas. Este proceso fue particularmente pronunciado en las décadas del sesenta y setenta, cuando hasta una cuarta parte de la población rural emigró hacia los centros urbanos en busca de vivienda y empleo asalariado. La mayor parte de estas viviendas se construyó sobre la base del esfuerzo propio de comunidades de migrantes rurales que invadieron y se “asentaron” –ocupando ilegalmente y usurpando– áreas terrestres urbanas sin uso, en cuyo proceso se crearon los *pueblos jóvenes* de Lima, las *favelas* de Río De Janeiro, los *rancherías* de Caracas y las *poblaciones* de Santiago, Chile. Debido a este

5 El censo rural de 1986 estimó la población rural en 23,4 millones de personas. Para 1995, la población rural había disminuido hasta 18 millones y apuntaba hacia un éxodo masivo de más de 5 millones de personas. Debido a la disminución de las ganancias, la constricción de los precios por debajo de los costos de producción y el masivo aumento de deudas entre productores, el IBGE (el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas) estima que unas 800 mil familias –esto es, más de 2 millones de personas– han abandonado las zonas rurales en sólo cinco años (de 1995 a 1999) por la falta de tierra, crédito y/o por la baja de precios.

proceso de urbanización, hasta el 60% de la población urbana vive en condiciones de habitabilidad precarias (Guimarães, 1997: 191)⁶.

Como resultado de estas y otras tendencias, las ocupaciones de tierras tuvieron lugar en un nuevo contexto urbano, reproduciendo, en parte, la dinámica de la lucha rural por la tierra pero en forma diferente (invasión de tierras, ocupación ilegal, negociaciones con la administración municipal por los servicios y los títulos legales para su "propiedad", con esfuerzos organizativos de base para mejorar estas vecindades en los *barrios* de la clase trabajadora que hoy rodean a tantas ciudades latinoamericanas). La dinámica social de este proceso es compleja y bien diversificada; abarca dimensiones como la disolución y la división de muchas familias, mujeres que se quedan a cuidar los lotes de tierra de subsistencia y muchos hombres involucrados en la migración golondrina de estos lotes o trabajando dentro del sector informal "no estructurado" del mercado laboral urbano (Portes et al., 1989; PREALC, 1993). En estas condiciones, muchos trabajadores sin tierra son incapaces o no desean romper su conexión con la sociedad rural, aun sin contar con acceso a la tierra o a otros medios de producción social. No obstante, la estructura de tenencia de tierras continúa reproduciendo las condiciones de pobreza rural e impulsando un proceso de emigración de gran cantidad de "campesinos" desposeídos o "trabajadores rurales sin tierras".

En fecha tan reciente como 1997, más del 60% de todos los grupos familiares rurales de América Latina estaba hundido en la pobreza –un 40% en conjunto– y para el 60% de estos grupos familiares, esta pobreza era "extrema" (ECLAC, 1998). Algunas de las condiciones de esta pobreza eran "nuevas", en el sentido de que derivaron de una estructura establecida por un programa neoliberal de políticas de reforma, la privatización de los medios de producción y las empresas públicas; la liberalización del comercio y del flujo de capitales de inversión; la desregularización del capital y de los mercados laborales; y una reducción de los gastos respecto de los programas sociales estatales (Bulmer-Thomas, 1996; Veltmeyer y Petras, 1997, 2000). Sin embargo, algunas formas y condiciones de esta pobreza precedían este "desarrollo" y permanecen arraigadas en la estructura de la propiedad de la tierra de las áreas rurales. De este modo, ni siquiera los programas relativamente "radicales" o extensivos de reforma

6 IBASE, un centro de investigación en Brasil, ha estudiado el impacto fiscal de legalizar las ocupaciones de tierras con asentamientos del MST comparado con el costo de servicios usado por igual número de personas que migran hacia las áreas urbanas. Cuando los trabajadores sin tierra ocupan tierra y fuerzan al gobierno a legalizar sus tenencias, ello implica costos: la compensación para el dueño anterior, el crédito para los agricultores nuevos, etc. Pero el costo total para el Estado cuando mantiene el mismo número de personas en una villa miseria urbana, incluyendo los servicios y la infraestructura usada, excede en un mes el costo anual de ocupaciones de la tierra que legaliza.

agraria en algunos países pudieron cambiar sustancialmente la estructura de la propiedad de la tierra. En los casos de Chile y Nicaragua, los programas fueron revertidos. En Brasil, la concentración de la tierra y la carencia de tierras en las zonas rurales han continuado acelerándose a pesar de los años de reforma agraria. En 1970, las haciendas de más de mil hectáreas, el 0,7 del total de las granjas, representaba el 40% de la tierra; en 1996, el 1% de los terratenientes con granjas de más de mil hectáreas poseía el 45% de la tierra. Al mismo tiempo, más de 4 millones de trabajadores agrícolas estaban sin tierra alguna, mientras otra cantidad estaba casi sin tierras. Otro ejemplo puede ser Honduras, donde 409 mil hectáreas fueron redistribuidas (120 mil hectáreas entre 1973 y 1977, el apogeo de la reforma agraria) a los beneficiarios que constituían sólo el 13% de la población rural total. En esta situación, más de 200 mil familias (un 44% de la población rural) todavía no tienen acceso a la tierra o tienen muy poco. Estas familias, como en cualquier otra parte de América Latina, continúan viviendo en condiciones muy pobres y constituyen el núcleo de la “pobreza extrema”.

Otra razón para la persistencia de la pobreza rural –sin hacer caso de los que han sido llamados “los nuevos pobres”– es que incluso donde se produjeron ganancias significativas en el transcurso de los programas de reforma agraria llevados a cabo por los Estados, éstas sufrieron erosiones a mediano y a largo plazo y los campesinos y los trabajadores sin tierra padecieron una serie de contratiempos. En el caso de Chile, las ganancias substantivas hechas por los productores campesinos en los años sesenta y principios de los setenta fueron paralizadas y revertidas por el régimen de Pinochet, que en 1975 inició lo que para América Latina equivalió a una contrarrevolución. Unos pocos años más tarde, un astuto analista del desarrollo agrario, Lehmann (1978), refiriéndose en particular al Brasil, pudo escribir sobre la muerte de la reforma agraria en una perspectiva que fue imitada por otros, como Kay (2000) y De Walt et al. (1994). Bajo condiciones de ajuste neoliberal –y la contrarrevolución–, el proceso de reforma agraria llevado a cabo por el Estado culminó. El Estado estaba en retirada y, donde no lo estaba, tenía una orden del día enteramente diferente. Con la captura y la muerte del Che Guevara en Bolivia y la destrucción y la contención, si no la derrota, de la mayor parte de los ejércitos de la guerrilla para la liberación nacional en la región (con excepción del FARC–EP), la amenaza de revolución social se había evaporado y, con ella, una ola principal de rebelión campesina.

¿LA DESAPARICIÓN DEL CAMPESINADO?

El protagonista central en la lucha de clases por la tierra en América Latina ha sido el campesinado. Sin embargo, ambos, la naturaleza del campesinado como una categoría socio-económica y política y su papel

en las luchas contemporáneas por la tierra han estado sujetos a una reconceptualización considerable y a un debate en curso. Ante todo, los significados precisos de los términos “campesino” y “el campesinado” están en controversia en cuanto a consideraciones sociales y económicas, es decir, como categoría socio-económica (Kearney, 1996). Un segundo grupo de debates en relación con el campesinado tiene que ver con la valoración de su papel en la lucha política. Sobre este tema, recientes investigaciones y análisis han tendido a oscilar entre dos conceptualizaciones y percepciones políticas irreconciliables. Por un lado, el campesinado es estimado más o menos como una entidad pasiva, el objeto sin poder de diversas clases de agencias estatales (como los regímenes de legislación, tributarios, de producción agrícola, los sistemas de regulación, planificación macroeconómica, etc.). La mayoría de los estudios sociológicos enrolados en la tradición de la teoría de la modernización estructuralista asumen esta perspectiva, que se refleja también en los escritos de historiadores como Hobsbawm, quien ve al campesinado como una categoría numérica y políticamente en descenso, derrotado por el proceso de modernización y cambio (Bryceson et al., 2000). Por otra parte, una percepción alternativa del campesinado lo define como una fuerza activa y potenciada, que continúa disputando el área de lucha sobre la tierra (ver, en particular, Petras, 1997a, 1997b).

Esta diferencia de percepción también se observa en el debate epistemológico entre los que proponen el “estructuralismo” como un modo de análisis y aquellos que rechazan todas las formas de estructuralismo en favor del “posmodernismo de base” (Esteva y Prakash, 1998) y el “análisis del discurso” (Escobar, 1995)⁷. Para los estructuralistas en general, incluyendo a los marxistas, el campesinado es una categoría económica y política que corresponde a una forma organizativa en transición, destinada a desaparecer en el cesto de basura de la historia, y cuya presencia en la escena mundial se efectúa ahora con otros disfraces –como un proletariado rural, como un lumpen-proletariado urbano atrapado en un sector informal proliferante o como “los equivalentes trabajadores asalariados” (Bryceson et al., 2000; Kay, 2000)⁸.

7 En este debate, comparar “los movimientos sociales nuevos” latinoamericanos en relación con los enfoques alternativos para el desarrollo; ver Veltmeyer (2002).

8 Para una revisión menos metafórica y más analítica de este debate en relación al campesinado, ver Petras y Veltmeyer (2002). Este movimiento de lo rural hacia lo urbano fue el efecto de un proceso de proletarización que procedió aprisa con el avance de capitalismo en las zonas rurales (Bartra 1976; Cancian, 1987). La transición hacia la proletarización completa siguió adelante, lenta y en forma desigual, bajo una coerción extraeconómica que persistió durante toda la década del sesenta (y en algunos casos más allá de ésta) en la mayoría de las naciones latinoamericanas. Hacia 1970, una gran parte de la población rural en muchos países fue parcial o totalmente proletarizada,

Las dinámicas de este proceso han sido analizadas casi siempre en términos de expropiación, concentración de la tierra, emigración rural e invasiones de las tierras en la periferia de los grandes centros urbanos, asentamiento en esas tierras e incorporación gradual de los migrantes rurales en la estructura y la vida de la ciudad. El resultado final de estos procesos, en teoría, es un campesinado numéricamente reducido como agente económico y fuerza política para el cambio, una categoría social tradicional diezmada por los procesos de modernización, urbanización y desarrollo de la industria capitalista en los centros urbanos (Bartra, 1976; Cancian, 1987; Kay, 2000). Ésta es una perspectiva sobre el campesinado, demostrada por numerosos cambios y estrechamente asociada a los puntos de vista del “fin de la reforma agraria”.

Sin embargo, de ninguna manera es la única. En primer lugar, algunos analistas han detectado, en ciertos contextos, una tendencia en dirección contraria, a saber, una campesinización (Bakx, 1988). Existe también la perspectiva de la transformación agraria articulada por James Petras, entre otros. En ella, el campesinado no puede ser puramente entendido en términos numéricos, como un porcentaje de la fuerza laboral o por el tamaño del sector campesino en la economía. El campesinado, se alega, mantiene una fuerza cuyo peso y cuyo significado están fuera de proporción respecto de su número. Ciertamente, en el contexto latinoamericano se constituye como la mayor fuerza dinámica para el cambio antisistémico y se encuentra en la cresta de una nueva ola de la lucha de clases –y de aborígenes– por la reforma agraria, la tierra, la autonomía, la democracia y la justicia social. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en su irrupción política en 1994, puede ser mejor entendido de este modo en vez de, como lo hace Burbach (1994), como el “primer movimiento posmoderno en la historia”.

TRES CAMINOS HACIA LA REFORMA

En 1948 nació el proyecto de cooperación internacional para el desarrollo, inventado, según las palabras de Sachs (1992) y sus socios, en el posdesarrollo. Fue diseñado, en primer lugar, para impedir que aquellos países estimados como “retrasados económicamente” y recientemente liberados de las ataduras del colonialismo europeo sucumbieran al atractivo del comunismo y siguieran un camino socialista en su desarrollo nacional.

situación que generó una ola nueva de protesta política e insurgencia campesina. Como lo señalado por Paige (1975) y discutido más abajo, diferentes categorías de campesinos (los inquilinos, los aparceros, los cultivadores ricos/medios/pobres) respondieron de manera distinta a este proceso. Así, el asunto principal en las luchas rurales podría ser la reforma agraria, la tierra, el acceso a créditos o a tecnología, sueldos más altos y mejores condiciones de trabajo o, ciertamente, una combinación de todo ello.

RECUPERANDO LA TIERRA

En la década del sesenta, a raíz de la Revolución Cubana, este proyecto fue rediseñado a fin de inhibir los movimientos para el cambio radical y la revolución social en muchas zonas rurales del “Tercer Mundo”. En la década del setenta, sin embargo, este “proyecto” (reforma y desarrollo) fue desafiado tanto desde la izquierda como desde la derecha, y condujo a la formulación de diversos reclamos por un proyecto alternativo (la revolución social en un caso, una contrarrevolución conservadora en el otro). El agente para el cambio revolucionario generalmente tomó la forma de movimientos sociales arraigados, ya sea en la clase obrera o el campesinado, mientras los agentes de la contrarrevolución viraron hacia el Estado para implementar un modelo neoliberal de desarrollo capitalista de libre mercado y globalización, para crear lo que George Bush padre llamó “el Nuevo Orden Mundial” y lanzar, por consiguiente, lo que George W. Bush hijo, diez años más tarde en su Informe de Seguridad Nacional del año 2002, denominó “las fuerzas de la libertad, la democracia y la libre empresa”. En el contexto de esta “contrarrevolución” conservadora y basándose en un experimento en Chile (el régimen militar de Pinochet) con un modelo neoliberal de reformas políticas macroeconómicas, el Banco Mundial diseñó el “programa de ajuste estructural” –un conjunto de políticas de reformas asentadas en lo que en América Latina fue llamado el “nuevo modelo económico” (Bulmer-Thomas, 1996).

La implementación de este modelo ha creado un contexto enteramente nuevo para las dinámicas de lucha por la tierra en diferentes partes del mundo. En este marco, mientras muchos analistas invocaban la “muerte de la reforma agraria”, otros, como Gwynne y Kay (1999) y Kay (2000), escriben sobre un proceso de “transformación agraria”. En lo que se refiere a la naturaleza y a la dinámica de esta transformación, De Janvry et al. (1998) escriben sobre la transición desde “la reforma agraria conducida por el Estado hasta la reforma agraria de base”, en tanto otros resaltan un enfoque de transición de la reforma agraria “asistida por el mercado”. En este mismo contexto, James Petras (1997a, 1997b) y este autor (Veltmeyer, 1997) señalan el surgimiento de una nueva ola de movimientos basados y liderados por campesinos que empujan allende las reformas agrarias hacia cambios más radicales o revolucionarios en las políticas gubernamentales, en el modelo neoliberal detrás de ellas y en el “sistema” creado por su implementación. En efecto, es posible identificar tres caminos divergentes hacia la reforma agraria, cada uno caracterizado por una estrategia global distinta y una mezcla de tácticas: (a) reforma agraria conducida por el Estado (la expropiación con compensación, redistribución de la tierra, desarrollo rural); (b) reforma agraria asistida por el mercado (otorgamiento de títulos, mercantilización y bancos de préstamos hipotecarios); y (c) reforma agraria de base (ocupaciones, negociación y lucha).

LA REFORMA AGRARIA CONDUCTA POR EL ESTADO

Es un lugar común que en América Latina, como en cualquier otro sitio, el Estado ha sido esencial al mantenimiento o a la defensa de las relaciones sociales de producción dominantes. En cada forma específica de producción agrícola a través de los años, el Estado ha sido instrumental en la fundación, extensión, reproducción y transformación del sistema involucrado, beneficiando a algunas clases –a menudo a los grandes propietarios de terrenos– y desfavoreciendo principalmente a los trabajadores y campesinos (Feder, 1971; Huizer, 1973). El punto teórico aquí es que el crecimiento del “mercado” está inexorablemente vinculado a un “Estado activista”, como en el proceso de reforma agraria. El Estado ha sido la institución central en el proceso de cambio de las relaciones dominantes de producción económica y los sistemas de clase basados en este proceso. El aparato represivo del Estado ha sido traído a escena en numerosas ocasiones, en diferentes contextos históricos, para mantener el régimen de propiedad de los medios de producción existentes. También se ha acudido al sistema judicial para desempeñar su parte en este aspecto. Así, por ejemplo, en la lucha por la tierra del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierras (MST) en Brasil, el Estado ha sido activo en el enjuiciamiento y encarcelamiento de los activistas del MST, mientras que las acciones de la clase propietaria en “defensa” de sus derechos de propiedad, aun cuando involucraran asesinatos o masacres, han logrado la impunidad legal. Las poderosas relaciones que existen entre los grandes propietarios y el sistema judicial –y Brasil no es una excepción a la regla– se demuestran por el hecho de que, entre 1985 y 1999, mil ciento cincuenta y ocho activistas rurales fueron asesinados en disputas por las tierras, pero sólo cincuenta y seis asesinos fueron enjuiciados y sólo diez condenados. Desde que F.H. Cardoso llegó al poder en 1995, ciento sesenta y tres activistas del MST han sido asesinados y, todavía, ninguno de los responsables fue llevado al sistema judicial (Figueiras, 1999: 40; MST, 2002). Dieciséis activistas del MST fueron asesinados con virtual impunidad en 2001. En 2003, esta política de represión del MST, cuando rehusó atenerse a las instrucciones del gobierno (“tener paciencia y apoyar el programa de reforma agraria del gobierno”) ha continuado bajo el régimen Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva. Lo que es más, el gobierno ha enviado, incluso, a la policía militar a rodear la sede principal del MST para intimidar a los líderes.

En lo que respecta al proceso de reforma agraria, particularmente en el siglo XX, el principal organismo involucrado también ha sido el Estado, pero en función del gobierno de cada momento, y actuando sobre las bases de una legislación en la que los grupos propietarios de la clase dominante han tenido, en general, una influencia predominante. La reforma agraria conducida por el Estado ha conllevado por años una

RECUPERANDO LA TIERRA

lucha prolongada, primero, para implementar las reformas, y luego, para consolidar las ganancias obtenidas⁹. La mayoría de las veces, bajo las condiciones de esta lucha, los avances de los campesinos y los trabajadores rurales fueron conservados y hasta consolidados. En algunos casos, sin embargo, como con el ascenso de Pinochet al poder estatal en Chile, los logros obtenidos en un proceso de reforma agraria fueron suspendidos y revertidos. El factor esencial determinante del resultado de la lucha ha sido, como siempre, la relación del movimiento campesino con el Estado. Así, en México, Bolivia y Perú, un proceso prolongado de desinversión estatal en el sector de la reforma culminó en una legislación que proveyó incentivos a los monopolios agro-exportadores, alienando tierras comunales (el *ejido* en México) y estimulando alimentos importados baratos (o sea, subsidiados). La política de alianzas, en la cual el campesinado ha sido generalmente subordinado a la pequeña burguesía urbana y a la burguesía, ha obtenido con frecuencia un ciclo inicial de reformas redistributivas y de asistencia estatal. Pero posteriormente, los movimientos campesinos han tendido a fragmentarse y dividirse a lo largo de una línea “oficial” y “opositora”, entre las cuales la primera se ha convertido en una correa de transmisión para la política estatal.

Cuando en la década del sesenta se iniciaron los programas de reforma agraria del Estado, se trató esencialmente de respuestas defensivas a las lecciones de la Revolución Cubana de 1959 y así diseñados para prevenir el surgimiento de demandas más radicales para el cambio. En este clima político, los gobiernos de casi todos los países iniciaron un amplio programa de reforma agraria con el objetivo político adicional de incorporar al campesinado dentro de una agenda dual: no sólo para desviar el disenso existente y futuro en canales constitucionales donde podría ser más fácilmente cooptado por el Estado, sino también para llevar a los pequeños propietarios a la órbita del desarrollo capitalista, ofreciéndoles una alternativa a la transformación sistémica o al socialismo.

En general, bajo la rúbrica de la legislación de reforma agraria diseñada para modernizar la agricultura, la propiedad de lotes de terreno productivos ha sido aun más concentrada y la redistribución efectivizada sólo dentro del sector campesino, lo que condujo a un proceso

9 Como De Janvry et al. (1998: 5ff) esbozaron, este programa de reforma agraria fue implementado por etapas: (i) la colocación de haciendas modernizadas en el sector donde no se aplicaba la reforma bajo amenazas de expropiación, con topes a la tierra para el sector no reformado, organización del sector reformado de manera comunal o colectivo estatal (*ejidos*, etc.) y la distribución de fincas como tenencias individuales; (ii) titulación individual de tierras colectivas, *ejidos* y granjas estatales; y (iii) provisión de desarrollo rural a beneficiarios individuales y acceso a tierras sin uso para los sin tierra y los *minifundistas*.

de diferenciación interna¹⁰. Esto último ha implicado el surgimiento de un pequeño estrato de campesinos ricos, algunos de los cuales se convirtieron en capitalistas rurales; un estrato intermedio mayor de “agricultores campesinos” autosuficientes, con capacidad productiva para el mercado interno y un proletariado rural compuesto de una gran masa de trabajadores migrantes semiproletarizados (sin tierras o casi sin tierras). No obstante, en la mayoría de los contextos, tales intentos de acomodamiento y cooptación, incluyendo la sindicalización previamente mencionada y la instalación de organizaciones campesinas paralelas o controladas por el gobierno, o fracasaron o fueron parcialmente exitosos. Tendieron, generalmente, a desatar conflictos de clase que se continuaron en otra fase más radical de reforma agraria (Kay, 1981). Por ésta y otras razones, los gobiernos latinoamericanos instituyeron un programa de reforma agraria, pero luego consagraron sus energías a impedir la radicalización usando una combinación de estrategias que iban desde el corporativismo (la sindicalización mencionada), los intentos de controlar las organizaciones campesinas y la cooptación de su liderazgo, hasta la represión abierta.

En cada fase de modernización capitalista, el Estado ha jugado un papel crucial en promover, financiar y proteger las “modernizantes” clases dominantes de la amenaza de los movimientos campesinos y trabajadores rurales, forzando al campesinado y al proletariado rural a soportar los costos de la “transición”. Estas dinámicas, por ejemplo, reaparecieron en la década del ochenta, en el marco de una transición hacia un “nuevo orden mundial” neoliberal facilitado por un proceso de ajuste estructural y de la “globalización” (Gwynne y Kay, 1999; Kay, 1999; Thiesenhusen, 1989, 1995). Entre los desfavorecidos por la aplicación de las medidas neoliberales, el campesinado y los trabajadores rurales figuran en un lugar destacado, como se manifiesta en la virulencia

10 Para tomar el caso no atípico y bien estudiado de Chile, a mediados de la década del sesenta el Comité Interamericano de Desarrollo Agrario (CIDA, 1966) publicó un sondeo que mostró la desigualdad tanto del sistema de tenencias de tierras como del ingreso derivado de la propiedad de la tenencia rural. En este sondeo, los *latifundistas* u oligarquía terrateniente representaban apenas el 2% de la población rural, pero recibieron una tercera parte de todo el ingreso; los campesinos ricos, o la burguesía rural, representaban el 7% de la población y recibieron el 15% del ingreso total. Los campesinos intermedios, sin embargo, constituían el 21% de la población y recibieron sólo el 12% del ingreso total, mientras variadas formas de pequeños propietarios componían las restantes tres cuartas partes de la población rural y contaban con menos de una tercera parte del ingreso total. La pregunta es, ¿qué impacto tuvo el programa de reforma agraria en esta estructura social y este patrón de distribución de ingresos? Los indicios son, y varios estudios parciales así lo sugieren, que el impacto global de los programas de reforma agraria de las décadas del sesenta y setenta en esta estructura ha sido insignificante. Ver Barraclough (1973), De Janvry (1981) y Ghimire (2001).

de su oposición y en las periódicas erupciones de violencia rural (Barry, 1987; Veltmeyer y Petras, 2000).

LA REFORMA AGRARIA ASISTIDA POR EL MERCADO

En las décadas del sesenta y setenta el Estado fue, desde sus diversos poderes (el gobierno, la legislatura, el sistema judicial, las fuerzas del orden interno) la agencia dominante para el desarrollo agrario y rural y para la implementación de reformas agrarias. Estas reformas fueron instituidas bajo condiciones de presión por el cambio revolucionario ejercido desde las bases. En la década del ochenta, se generaron condiciones, por caminos alternativos, hacia el desarrollo agrario a través de las acciones del Estado en respuesta a los requisitos del “nuevo orden mundial”, este último basado en el funcionamiento del libre mercado y la empresa privada (Deininger, 1998). Podemos identificar dos respuestas a estos requisitos y a la institución del nuevo modelo económico: (i) el surgimiento de una nueva ola de movimientos socio-políticos antisistémicos orientados hacia la acción directa, de base y conducción campesina; y (ii) la evolución de un enfoque de la reforma agraria asistida por el mercado. Esta perspectiva, defendida por el Banco Mundial y otros ODA (Ayuda Oficial para el Desarrollo, por su sigla en inglés), ha dominado las políticas gubernamentales a lo largo de la década del noventa.

Fue bajo estas nuevas coordenadas que se dio el debate acerca de formas alternativas de reforma agraria en los círculos académicos y legislativos de la región. En el centro de estas discusiones estaba el tema de la promoción de mercados de tierras como una manera de mejorar el acceso de los grupos familiares pobres a los “recursos productivos” de la sociedad, para expandir el uso del mecanismo de mercado en el proceso del desarrollo agrario (Ghimire, 2001). El modelo dominante de desarrollo rural, aún hoy muy vigente, es predicado sobre la acumulación del “capital social” en lugar de sobre el capital natural incrustado en la tierra (Coleman, 1988; Chambers y Conway, 1988; Helmore et al., 2001; Woolcock y Narayan, 2000). Con este enfoque en el capital social que en teoría es conferido al pobre bajo la forma de sus capacidades para conectarse y actuar cooperativamente, la presión sobre los gobiernos para expropiar y redistribuir la tierra fue reducida al máximo, si no eliminada. De modo semejante, el poder del Estado o de clase, siempre un tema central en la lucha por la tierra, es despolitizado, transformado en una cuestión de “delegación de poder [*empowerment*] social” (Amalric, 1998; Brockett, 1998; Veltmeyer, 2003). No obstante, la carencia de tierras y la falta de acceso a la tierra productiva siguió siendo un tema clave, en el que los ODA, y particularmente el Banco Mundial, llevan la delantera para apoyar las políticas de “modernización” de la agricultura y estimular el crecimiento de un mercado de tierras. Estas políticas incluyen la titulación –el otorgamiento de un título legal y seguridad

de tenencia a aquellos con acceso a la tierra–, la eliminación de las tenencias de tierras que impidieron a los agentes individuales comprar y vender tierras y el establecimiento de bancos de crédito hipotecario (Bromley, 1989; World Bank, 1996, 1997).

Respecto de los bancos de crédito hipotecario, el Banco Mundial ha instituido proyectos pilotos en Brasil, Colombia y las Filipinas. La meta de esta política y de la institución del mercado no fue solamente promocionar un mercado de tierras –y crear un “nuevo mundo rural”– sino, al menos en el caso de Brasil, contrarrestar la táctica de las ocupaciones de tierras utilizadas por organizaciones de base y movimientos sociales. La meta, en otras palabras, fue estimular la utilización de “el mecanismo de mercado” (UNRISD, 2000) en lugar de lo que los líderes de estos movimientos toman por una “lucha de clases más amplia” (Stédile, 2000).

Difícilmente un país de América Latina con un sector agrícola significativo haya escapado a este incentivo para crear un mercado de la tierra. En los inicios de la década del noventa, cada país de la región instituyó la “modernización agraria” o la ley de reforma de una u otra manera, pero invariablemente diseñada para promocionar un mercado de tierras. En México y Ecuador, ello implicó la abolición de la protección constitucional de tierras comunales indígenas, una política que fue exitosamente instituida en el caso de México (1992), donde la federación campesina dominante estaba bajo el control total del gobierno, aunque eso mismo, en Ecuador, provocó un tropiezo político en forma de “insurrección indígena”. Más generalmente, los países de la región cambiaron su foco previo sobre la redistribución de la tierra hacia la provisión de seguridad legal para las tenencias, y lograron instituir un programa de titulaciones. Éste proveyó la infraestructura para un enfoque de reforma agraria asistida por el mercado, que avanzó aun más a través de la institución de un banco de crédito hipotecario que brindó a los terratenientes pobres rurales la posibilidad del acceso a créditos y, de ese modo, a la capacidad de comprar tierra o de acceder a otros “recursos productivos”, como la nueva tecnología.

El contexto para este camino hacia la reforma agraria fue provisto por la implementación extendida en los años ochenta de un programa neoliberal de política de ajustes para la economía (Veltmeyer y Petras, 1997, 2000). Hacia el final de la década, hubo sólo cuatro países que se resistieron a este proceso de “reforma”: Brasil, Perú, Argentina y Venezuela. Y éstos, en un tiempo relativamente corto, se plegaron durante la década del noventa a algunas de las formas más radicalizadas de programas de ajuste estructural instituidos en cualquier parte del mundo (Petras y Veltmeyer, 2002).

Entre 1991 y 1994, a requerimiento del Banco Mundial y dentro del marco de una agenda neoliberal de política de reforma, los gobiernos

RECUPERANDO LA TIERRA

de México, Ecuador, Bolivia, Perú y otros países del sur y centro de América se volcaron hacia un enfoque de mercado para la reforma agraria. Ello se basó en una legislación que incluía la abolición de la protección constitucional o legal de la propiedad comunal y de la titulación legal a la tierra trabajada por minifundistas. De esa manera, aumentaría la posibilidad de vender las tierras, en cuyo proceso el mercado se fortalecería y, supuestamente, la “eficiencia” de la producción se incrementaría¹¹. Sin embargo, combinado con la eliminación de los subsidios para los productores locales, la comercialización de crédito, la reducción de los aranceles proteccionistas, y en muchos casos, con una moneda circulante sobrevalorada, estas medidas (la titulación de tierras, etc.), en lugar de resolver la crisis agrícola han creado lo que analistas llamaron un “ambiente difícil” para las diversas categorías de elaboración de productos comerciables, en particular para los “productores campesinos de pequeña escala” (Crabtree, 2003: 144). Esto último, como observa el autor en lo concerniente a Perú (aunque el punto es generalizable), ha sido “extremadamente vulnerable a la afluencia de productos agrícolas baratos”. Tal incremento de inlfujos y productos agrícolas no sólo ha socavado o destruido las economías locales, llevando a un gran número de productores locales a la bancarrota o a la pobreza sino que, al mismo tiempo, ha causado o acelerado un cambio fundamental en las pautas de producción y consumo fuera de los cultivos tradicionales, especialmente en granos como la quinoa, kiwicha, coca, alluco, porotos y papas. El impacto de este cambio y sus implicaciones aún deben ser evaluados.

En el caso de Perú, la abolición de la Empresa de Comercialización de Alimentos Sociedad Anónima (ECASA), una de las muchas juntas de mercadeo del gobierno y de instituciones de apoyo a los precios agrícolas, liberalizó el mercado nacional de arroz y removió una organización que, como sus contrapartes en otros países de la región, había mantenido una estabilidad de precios a beneficio de los productores locales. Algunas de las funciones de ECASA fueron asumidas por Programa Nacional Agroalimentario (PRONAA)¹², un programa para los pobres subsidiado por el gobierno, que compraba directamente a los productores

11 En muchos estudios sistemáticos sobre la productividad de pequeñas versus grandes granjas altamente capitalizadas, la conclusión general ha sido que, en todos los casos, las granjas menos capitalizadas y relativamente más pequeñas son mucho más productivas por unidad de área –200 a 1.000% más– que las más grandes (Rosset, 1999: 2).

12 El programa de alivio de la pobreza de Fujimori era similar al PRONASOL de Salinas (1992), en el sentido de que sirvió, principalmente, como mecanismo electoral para asegurar el voto rural.

en pequeña escala. Sin embargo, tal cambio institucional –reproducido en los otros países de la región– tuvo un impacto relativamente pequeño en los agricultores más pobres, muchos de los cuales nunca se habían beneficiado de programas del gobierno del tipo que fuere (Crabtree, 2003: 147). En lo que respecta a esos productores que lograron integrarse en los competitivos mercados urbanos locales, la desaparición del Banco Agrario significó que se vieran forzados a confiar en diversas firmas agroindustriales para obtener crédito comercial. Ese crédito se extendía a los mismos productores, sólo que bajo condiciones más onerosas, con tasas que en el caso de Brasil, bajo la presidencia de F.H. Cardoso, alcanzaron el 20% mensual, dado el “alto riesgo” asumido por los acreedores. Estos acreedores son sumamente renuentes a otorgar préstamos, incluso a terratenientes de mayor escala, más prósperos y con acceso privilegiado al mercado. Cuando los otorgan, las tasas de interés cobradas reflejan la percepción del alto riesgo que involucra la financiación a productores de menor escala. Su apetito de brindar préstamos disminuye por la incidencia de bancarrotas en sectores como el del espárrago que, durante un corto tiempo, pareció ofrecer posibilidades infinitas (Crabtree, 2003: 145–147).

En muchos casos, como en México y Perú, el resultado de estos y otros “cambios institucionales” y el recurso al “el mecanismo de mercado” han producido un deterioro drástico en la situación de mercado de los productores pequeños, que se vieron obligados a vender sus productos a precios por debajo de los costos, a acumular deudas enormes e, incluso, a declararse en bancarota. En México, esta situación ha generado uno de los movimientos masivos más grandes en la larga historia de lucha por la tierra (una fuerte organización de familias agrícolas “independientes” altamente endeudadas –El Barzón–). Asimismo, las economías campesinas en Perú, Ecuador, México, América Central y de algún otro sitio en la región han sido devastadas, y muchos debieron huir del campo para buscar empleo asalariado en las ciudades y centros urbanos. La única alternativa fue –y sigue siendo– la pobreza rural.

Los estudios que han sido emprendidos en esta área apuntan hacia un patrón de desigualdad social y pobreza rural creciente. En el caso no atípico de Perú, del 41,6% de grupos familiares rurales en 1985 hacia el 54,1% en 2000, después de una década de modernización agrícola y desarrollo capitalista de libre mercado (Crabtree, 2003: 148). El mismo estudio muestra un patrón de declive en la pobreza extrema, del 18,4 al 14,8%, pero sin ningún análisis o explicación –probablemente a ser encontrados en el enfoque metodológico del Banco Mundial, que reduce la pobreza por sanción estadística (definiéndola en términos de ganancias de menos de \$1 al día).

**CAMPESINOS EN ACCIÓN: REFORMAS AGRARIAS DE BASE
Y TÁCTICAS DE OCUPACIÓN**

En las décadas del sesenta y setenta, la lucha por la tierra y la reforma agraria estaba en el mismo epicentro que la lucha de clases en América del Sur y América Central. Había tomado forma y asumido diversas características en décadas previas, pero la Revolución Cubana le dio un ímpetu nuevo. Los protagonistas fueron, por un lado, el Estado, generalmente actuando en defensa de la clase propietaria, los dueños de tierras como medio de producción y el acceso al capital necesario para expandir la producción. El Estado estaba preocupado fundamentalmente por evitar otra revolución cubana. Los otros protagonistas principales fueron las organizaciones y las comunidades de productores campesinos, y un proletariado rural sin tierra o casi sin tierras, organizados en forma de movimientos sociales. En la mayoría de los casos, estaban orientados hacia la reforma agraria y, durante el proceso, comprometidos en una relación multifacética de lucha contra el Estado y respondiendo a las diversas estrategias del gobierno del momento para acomodarlos, incorporarlos, cooptar su liderazgo o utilizar la represión abierta en su contra. Algunos de los movimientos sociales de base campesina, sin embargo, tomaron una postura más radical y, con la referencia de la experiencia de la Revolución Cubana, se orientaron hacia diversas formas de lucha revolucionaria basadas en la acción directa: invasiones de tierras y el uso de fuerzas armadas en relación al Estado.

Hacia la década del ochenta, en un contexto muy diferente –caracterizado por las deudas, el neoliberalismo, la redemocratización en la forma de gobierno civil, la descentralización de las decisiones del gobierno, y el surgimiento el fortalecimiento de la sociedad civil–, las luchas por la tierra en sus formas reformista y revolucionaria subsistieron y dieron rumbo a una nueva ola de lucha y movimientos sociales. En ella, los protagonistas principales no fueron ni los campesinos ni los trabajadores, sino las organizaciones sociales de pobres urbanos y organizaciones sociales de diferentes intereses y orientaciones (Ballón, 1986; Brass, 1991, 2000; Calderón y Jelin, 1987; Escobar y Álvarez, 1992; Slater, 1985, 1994).

En la década del noventa, sin embargo, estos “nuevos movimientos sociales” comenzaron a dejar paso a una tercera ola de movimientos socio-políticos que eran, ambos, de base, estaban guiados por campesinos y, en algunos contextos, se arraigaron a la lucha de comunidades indígenas por la tierra, la autonomía territorial y la democracia, sin dejar de lado la justicia social. Se sostiene que el más dinámico de estos movimientos es el MST, una organización nacional de campesinos brasileños formados en el contexto de una amplia lucha civil para establecer “la república nueva”, y la formación del PT, cuyo líder, Lula, fue elegido para la presidencia en 2003. No obstante, movimientos similares se formaron

en contextos semejantes, notablemente en México (el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) y Ecuador (la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE).

Colectivamente, estos y otros movimientos –en Paraguay, por ejemplo, la Federación Nacional Campesina– han formado y utilizado tácticas de acción directa de ocupación de tierras, combinadas con enfrentamientos con el Estado para legalizar y financiar créditos y aportes agrícolas (Fogel, 1986). En Bolivia, Colombia y Perú, los movimientos campesinos han estado a la vanguardia de la lucha para desarrollar o mantener cultivos alternativos como una fuente de sustento, haciendo frente a las políticas neoliberales que inundaron los mercados locales con importaciones baratas. Todos ellos son de base y dirigidos por campesinos, diferentes, en este sentido, de los movimientos campesinos de la ola que se propagó a lo largo de América Latina en los años cincuenta y sesenta. Muchos de estos movimientos, aunque eran de base campesina, no estaban dirigidos por ellos.

En este contexto, la acción directa de movimientos de base en la década del noventa tomó formas diversas, combinadas con lo que el líder del MST João Pedro Stédile (2000) denominó “la lucha de clases ampliada”. Sin embargo, como en la lucha de clases de Tupac Amaru a fines del siglo XVIII en lo que ahora es Perú, las ocupaciones de tierras están en el centro de la estrategia de la acción directa y de la reforma radical y constituyen una figura destacada en el arsenal de tácticas del MST. La estrategia del MST para la reforma agraria y la acción directa ha sido la de “ocupación, negociación y producción”.

La base para la táctica de ocupación de tierras en Brasil es la legislación de la reforma agraria que se estableció en los programas de reforma de la década del sesenta. Similar en su forma a la legislación establecida en los programas de reforma agraria conducidos por el Estado en los años sesenta y setenta, llama a la expropiación de grandes tenencias de tierras estimadas como “improductivas” por no tener “uso social”¹³. En Brasil y otros sitios (El Salvador y Honduras, por ejemplo), esta ley sentó la base legal para un programa de expropiación y redistribución de tierras conducido por el Estado. Sin embargo, como notó Thiesenhusen (1995), entre otros, para la década del noventa poca tierra había sido realmente transferida, lo cual llevó a los movimientos campesinos reorganizados

13 El uso ineficiente o improductivo de la tierra está arraigado en un patrón de tenencia de tierras en el que el 9% de los terratenientes posee casi el 78% mientras, en el otro extremo, el 53% de la población rural tiene poca o ninguna (menos de 3%, según IBGE, 1989). El IBGE estima que menos del 20% de la tierra de labranza de Brasil está cultivado en cualquier forma, lo cual deja un 80% sin función productiva y, por lo tanto, como blanco para la expropiación legal con compensación.

RECUPERANDO LA TIERRA

a tomar acción en diversas formas políticas y legales, en el caso de El Salvador, presionando al gobierno a actuar sobre su propia legalización. Otros movimientos, particularmente el MST en Brasil, adoptaron la táctica de acción directa de ocupaciones de tierras en el contexto de una lucha de clases ampliada (Stédile, 2000). El MST instó a sus miembros a tomar acción directa en forma de ocupaciones de tierras de gran escala, que mueven aproximadamente entre mil y 3 mil familias. Luego de la ocupación, los líderes del movimiento, en nombre de los colonos acampados, entraron inmediatamente en negociaciones con el gobierno por los títulos de las propiedades, bajo sus propias disposiciones legales, para la expropiación de propiedades inmuebles que no tienen “uso social”.

En el caso de Brasil, esta estrategia ha sido tan exitosa que el gobierno se ha visto obligado a reanimar y a aumentar su propio programa de reforma agraria, incluyendo la implementación de un nuevo programa del Banco Mundial basado en el “mecanismo de mercado”, comenzado en el año 1997 como un proyecto piloto llamado Título de la Tierra en el nordeste del país, y generalizado en el año 1999 en forma del banco de crédito hipotecario (Banco De la Tierra). La meta de esta reforma agraria “asistida por el mercado” fue redistribuir tierra, no para el labrador, sino para “el más productivo”. Consecuentemente, el número de acres realmente transferido por este mecanismo y bajo este programa es relativamente modesto, si no pequeño. Hoy, después de quince años de lucha y de un modernizado programa de reforma agraria conducido por el Estado, sólo el 3% de la población posee los dos tercios de la tierra de labranza del país, mucha de la cual permanece sin uso.

El ritmo de las ocupaciones del MST se ha mantenido a lo largo de quince años de lucha, promediando las trescientas cuarenta y cinco por año, con un resultado de asentamiento de más de medio millón de familias (569.733) en 25.598 hectáreas de tierra (Dataluta, 2002). Sólo en cuatro meses en 1999, en el ápice del conflicto del MST con el gobierno de Cardoso y su programa de reforma agraria alternativa “oficial”, más de ciento cincuenta y cinco haciendas grandes fueron ocupadas por 22 mil familias organizadas por el MST y la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG). A mediados de 1999, más de 72 mil familias –sobre 350 mil agricultores– estaban “acampando” en tierras y aguardaban una respuesta del gobierno y su acción para legalizar la “expropiación” *de facto* de las tierras ocupadas. A pesar de ello, algunas familias continuaron viviendo en los campamentos o asentamientos temporales durante cuatro años y más. Reteniendo fondos federales y emprendiendo un programa para ofrecer préstamos a los pequeños agricultores para la compra de tierras, el régimen de Cardoso esperó –en vano– desalentar a los ocupantes y socavar el apoyo público para el MST (Stédile, 2000; Fernandes y Mattei, págs. 335 y 359 de este volumen, respectivamente).

En el transcurso de quince años de lucha, el MST ha movilizado hasta medio millón de familias de trabajadores rurales sin tierra para ocupar, negociar su expropiación legal y poner a producir las tierras. Durante sus treinta años de existencia, el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), la institución establecida por el gobierno bajo la ley de reforma agraria, ha expropiado muy pocas tenencias y ha asentado a menos del 7% de las familias rurales sin tierra (unos 330 mil de 4 millones). De hecho, la mayoría de los asentamientos fue iniciada por ocupaciones organizadas por el MST, y éstos legalizados más tarde por INCRA.

MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA, VIEJOS Y NUEVOS

La lucha por el cambio social en América Latina ha tomado formas diversas, sobre todo, con el surgimiento de movimientos sociales que, en el contexto latinoamericano, se formaron en el punto más álgido de tres olas distintas. La primera golpea a América Latina en la década del sesenta, a raíz de la Revolución Cubana. Los movimientos más importantes y dinámicos los formaron trabajadores organizados en los centros urbanos y organizaciones campesinas que, en su forma revolucionaria (los ejércitos de la guerrilla de liberación nacional), fueron generalmente dirigidos por intelectuales urbanos de clase media. Ambos, el movimiento de trabajadores urbano y las luchas campesinas para el cambio agrario y social lograron ganancias sustanciales, mejoraron la situación general de sus miembros y avanzaron en la lucha de clases. No obstante, para fines de la década del setenta, la mayoría había sido derrotada o destruida en un complejo proceso de implementación de proyectos de “desarrollo” comunitarios conducidos por el Estado, el acomodamiento o la corrupción de los líderes de los movimientos o, cuándo y dónde se requirió, por la represión abierta (Petras y Veltmeyer, 2000).

En la década del ochenta, en un marco urbano muy diferente (la crisis de deuda, un nuevo modelo económico, un Estado en retirada, un proceso de renovación democrática), América Latina fue golpeada por una segunda ola de movimientos sociales que emergieron dentro de la “sociedad civil”, ambos en su sector popular (pobres urbanos) y la clase media. En la segunda mitad de la década, sociólogos y otros analistas armados con una perspectiva postestructuralista y posmodernista (Slater, 1985, 1994; Calderón, 1995; Calderón y Jelin, 1987; Escobar y Álvarez, 1992) apodaron a estos movimientos como “nuevos”, en vistas de la subjetividad y la heterogeneidad de condiciones que dieron lugar a su surgimiento, a su amplia base social y a sus preocupaciones fundamentales. Estos movimientos fueron concebidos, en lugar de en términos de clase, como un nuevo actor social en el escenario político. Sin embargo, no antes de que estos movimientos sociales hubieran sido construidos en la teoría, desaparecieron de

RECUPERANDO LA TIERRA

los espacios políticos dentro de la estructura del poder político y económico (los espacios creados por el proceso de democratización y desarrollo alternativo). La base social de estos “movimientos sociales nuevos” fue el surgimiento y luego el fortalecimiento de la “sociedad civil” en el contexto de un Estado en retirada y de un empujón para democratizar su relación con la sociedad civil en interés de establecer una “buena gobernabilidad”; orden político con un gobierno mínimo y la participación en la formación de políticas públicas de organizaciones civiles representativas de la sociedad (Dominguez y Lowenthal, 1996). Las organizaciones no gubernamentales estaban alistadas en este proceso para ayudar a asegurar no sólo una “buena gobernabilidad” sino el matrimonio propuesto entre el capitalismo (mercados libres) y la democracia (elecciones libres).

En el flujo y reflujo de las mareas políticas cambiantes hacia fines de la década del ochenta, otra ola de movimientos sociales emergió e incluyó al MST de Brasil, el más dinámico y exitoso entre ellos. A diferencia de los movimientos “nuevos” de la década del ochenta, éstos se formaron en el sector rural, tuvieron una base campesina y fueron conducidos por campesinos. Muchos de ellos también tenían un carácter étnico y una base social en las comunidades indígenas de agricultores campesinos. Fueron los casos, por ejemplo, de México (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), Ecuador (CONAIE) y Bolivia (los Cocaleros, una organización de 30 mil campesinos que producen coca).

Aunque las dinámicas y el futuro de estos movimientos en el siglo XXI permanecen inciertos y requieren más estudios, está claro que en numerosos aspectos pueden ser vistos como “nuevos”, es decir, como diferentes de sus predecesores. Lo que no es nuevo es la dinámica fundamental de su lucha por la reforma agraria y la tierra. Lo que *es* generalmente nuevo en estos movimientos puede resumirse en los siguientes términos. Primero, a diferencia de los movimientos revolucionarios de base campesina de las décadas del sesenta y setenta (con excepción de FARC-EP), estos movimientos son conducidos por campesinos. En segundo lugar, no sólo el liderazgo está compuesto por campesinos sino por líderes que mantienen relaciones cercanas a su base social rural y a los miembros del movimiento. En este sentido, la austeridad de condiciones que comparten con los miembros es notable. Comparado con el movimiento obrero, no hay dudas entre los nuevos movimientos rurales acerca de la formación de una elite organizativa burocrática bien pagada que estaría estructuralmente relacionada con el gobierno, lo que en el caso del movimiento obrero ha sido el factor principal de su disminución general y defunción virtual. Entre los movimientos rurales, incluyendo el MST, las decisiones críticas en lo que se refiere a estrategias y tácticas se toman siempre consultando a los miembros, en forma de asambleas populares o basadas en comunidades.

Otras características nuevas son también relevantes, como la equidad de género y la autonomía de los partidos políticos respecto del Estado. En referencia a lo anterior, el MST ha mantenido su autonomía como movimiento social comparado con el PT, con el cual siempre ha mantenido relaciones cordiales y tácticas, incluso alianzas estratégicas. Hasta qué punto estas relaciones han cambiado con el PT en el gobierno es una pregunta abierta, pero es cierto que, respecto de su autonomía, los otros movimientos de base campesina y conducidos por campesinos de la región han seguido casi siempre su ejemplo. Acerca del género, los cambios dentro del MST en particular incluyen un cambio interno hacia la paridad de géneros en todos los niveles del movimiento. Otros movimientos sociales rurales no han sido tan rápidos para seguir el ejemplo del MST en esta área. Ello puede ser una reflexión de mayor voluntad del MST con la que trabajar, e implica aceptar el apoyo de las ONG internacionales, que están generalmente comprometidas con el principio de incorporar mujeres en el proceso de desarrollo y con la paridad de género. Al mismo tiempo, parece que el FARC-EP y el EZLN, particularmente el último, han desarrollado una línea de género revolucionaria en sus políticas, probablemente mirando el modelo de la Revolución Cubana.

Finalmente, a partir de mediados de la década del noventa, otro cambio ha estado en proceso, a saber, la formación de alianzas estratégicas con las sociedades civiles urbanas y las organizaciones de clase para construir apoyo público para el movimiento. Éste es un proceso que se ha extendido más allá de los Estados, y conduce a la formación de organizaciones intrarregionales de productores campesinos y de grupos internacionales de apoyo. Así, el MST se ha convertido en un componente crítico del Foro Social Mundial, y por esto se entiende el movimiento mundial antisistémico/antiglobalización.

CONCLUSIÓN

Las invasiones y ocupaciones de tierras han tenido un desarrollo político trascendental desde la década del noventa en América Latina y, bajo condiciones políticas diferentes, en Asia y el sur de África, más particularmente en Zimbabwe. La experiencia latinoamericana sugiere que este fenómeno de ocupaciones de tierras puede ser mejor entendido como una lucha de clases prolongada y en curso en las zonas rurales. Las condiciones históricas, la dinámica política y las formas de esta lucha son variables y contingentes. Pero es claro que las ocupaciones de tierras son parte de una amplia estrategia de reforma agraria que privilegia la acción directa, dentro de un contexto más amplio de lucha de clases mundial en contra del capitalismo y el neoliberalismo. En el particular contexto de América Latina, la fuerza motriz detrás de esta

RECUPERANDO LA TIERRA

estrategia es el campesinado, una categoría socio-económica y política que fue descartada por muchos como un actor político y una fuerza caducados para el cambio revolucionario. Nuestro análisis sugiere que esta perspectiva es errónea, que en la era contemporánea de desarrollo capitalista neoliberal y globalización el campesinado sigue siendo un factor significativo de cambio social y político en la sociedad rural.

BIBLIOGRAFÍA

- Amador, F. 1990 *Un siglo de lucha de los trabajadores en Nicaragua* (Managua: Centro de la Investigación de la Realidad de América Latina).
- Amalric, Frank 1998 "Sustainable Livelihoods, Entrepreneurship, Political Strategies and Governance" en *Development*, 41(3), pp 31-38.
- Bakx, Keith 1988 "From Proletarian to Peasant: Rural Transformation in the State of Acre, 1870-1986" en *Journal of Development Studies*, 24(2), pp 141-160.
- Ballón, Eduardo 1986 *Movimientos Sociales y Democracia: La Fundación de un Nuevo Orden* (Lima: DESCO).
- Barraclough, Solon L. 1973 *Agrarian Structure in Latin America, A Resumé of the CIDA Land Tenure Studies* (Lexington: Lexington Books).
- Barry, Tom 1987 *Roots of Rebellion: Land and Hunger in Central America* (Boston: South End Press).
- Bartra, Roger 1976 "¡Si los campesinos se extinguen!" en *Historia y Sociedad*, 8 (invierno), pp 71-83.
- Beltran, Fausto y Fernández, José 1960 *¿Dónde va la reforma agraria Boliviana?* (La Paz: Talleres Gráficos Bolivianos).
- Blanco, Hugo 1972 *Land or Death: the Peasant Struggle in Peru* (New York: Pathfinder Press).
- Brass, Tom 1991 "Moral Economists, Subalterns, New Social Movements and the (Re) Emergence of a (Post) Modernised (Middle) Peasant" en *The Journal of Peasant Studies*, 18(2), pp 173-205.
- Brass, Tom 2000 *Peasants, Populism and Postmodernism: The Return of the Agrarian Myth* (London and Portland, OH: Frank Cass).
- Brockett, Charles D. 1998 *Land, Power and Poverty: Agrarian Transformation and Political Control in Central America* (Boulder: Westview Press).
- Bromley, D. 1989 "Property Relations and Economic Development: The Other Land Reform" en *World Development*, 17(6), pp 867-877.

- Bryceson, Deborah, Kay, Cristóbal y Mooij, Jos (eds.) 2000 *Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America* (London: Intermediate Technology Publications).
- Bulmer-Thomas, Victor 1996 *The New Economic Model in Latin America and its Impact on Income Distribution and Poverty* (New York: St. Martin's Press).
- Burbach, Roger 1994 "Roots of the Postmodern Rebellion in Chiapas" en *New Left Review*, 205 (mayo-junio), pp 113-124.
- Calderón, Fernando 1995 *Movimientos Sociales y Política* (México: Siglo XXI).
- Calderón, Fernando y Jelin, Elizabeth 1987 *Clases y Movimientos Sociales en América Latina. Perspectivas y Realidades* (Buenos Aires: Cuadernos CEDES).
- Cancian, Frank 1987 "Proletarianization in Zinacantan 1960-83" en Maclachan, Morgan (ed.) *Household Economies and Their Transformation* (Lanham MD: University Press of America).
- Castells, Manuel 1976 *Movimientos Sociales Urbanos en América Latina: Tendencias Históricas y Problemas Teóricos* (Lima: Pontificia Universidad Católica).
- Chambers, Robert y Conway, Gordon 1998 "Sustainable Rural Livelihoods: Some Working Definitions" en *Development*, 41(3).
- CIDA 1966 *Chile: Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola* (Santiago de Chile: Talleres Gráficos Hispano Suiza).
- Coleman, James Samuel 1988 "Social Capital in the Creation of Human Capital" en *American Journal of Sociology*, 94, suplemento: 95-120.
- Cotler, Julio 1978 *Clases, estado y nación en el Perú* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).
- Crabtree, John 2003 "The Impact of Neo-Liberal Economics on Peruvian Peasant Agriculture in the 1990s" en Brass, Tom (ed.) *Latin American Peasants* (London: Frank Cass).
- Dandler, Jorge 1969 *El Sindicalismo Campesino en Bolivia* (Mexico: Instituto Indigenista Interamericano).
- Dataluta (Banco de dados de luta pela terra) 2002 *Assentamentos rurais* (São Paulo: UNESPI/MST).
- Deininger, Klaus 1998 "Implementing Negotiated Land Reform: Initial Experience from Colombia, Brazil and South Africa" en *Proceedings of the International Conference on Land Tenure in the Developing World with a Focus on Southern Africa*, 27-29 de enero, Universidad de Cape Town.
- De Janvry, Alain 1981 *The Agrarian Question and Reformism in Latin America* (Baltimore, OH: Johns Hopkins University Press).

RECUPERANDO LA TIERRA

- De Janvry, Alain, Cordillo, Gustavo y Sadoulet, Elisabeth 1998 *Mexico's Second Agrarian Reform: Household and Community Responses, 1990-1994* (San Diego: Center for US-Mexican Studies).
- De Walt, Billie y Ress, Martha 1994 *The End of Agrarian Reform in Mexico: Past Lessons and Future Prospects* (La Jolla, CA: Center for US-Mexican Studies, University of California, San Diego).
- Dominguez, J., y Lowenthal, A. (eds.) 1996 *Constructing Democratic Governance* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).
- Duncan, Kenneth, Rutledge, Ian y Harding, Colin (eds.) 1977 *Land and Labour in Latin America: Essays on the Development of Agrarian Capitalism in the Nineteenth and Twentieth Centuries* (New York: Cambridge University Press).
- Dunkerley, James 1984 *Rebellion in the Veins: Political Struggle in Bolivia 1952-82* (London: Verso).
- Dunkerley, James 1992 *Political Suicide in Latin America* (New York: Verso).
- ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) 1998 *Economic Survey of Latin America and the Caribbean, 1997-1998* (Santiago: ECLAC).
- Escobar, Ernesto 1995 *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World* (Princeton, NJ: Princeton University Press).
- Escobar, Arturo y Álvarez, Sonia (eds.) 1992 *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy* (Boulder, CO: Westview Press).
- Esteva, Gustavo y Prakash, Madhu Suri 1998 *Grassroots Postmodernism* (London: Zed Books).
- Feder, Ernest 1971 *The Rape of the Peasantry: Latin America's Landholding System* (New York: Doubleday).
- Figueiras, Otto 1999 "O Campo em Chamas" en *Sem Terra*, abril-junio.
- Florescano, Enrique (ed.) 1975 *Haciendas, Latifundios y Plantaciones en América Latina* (México DF: Siglo XXI).
- Fogel, Ramón Bruno 1986 *Movimientos Campesinos en el Paraguay* (Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos [CPES]).
- Foley, Michael W. 1991 "Agrarian Conflict Reconsidered: Popular Mobilization and Peasant Politics in Mexico and Central America" en *Latin American Research Review*, 26(1), pp 216-238.
- Ghimire, Krishna B. (ed.) 2001 *Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reform in Developing Countries* (London: ITDG).

- Gould, Jeffrey 1993 "El trabajo forzoso y las comunidades indígenas nicaragüenses" en Pérez Brignoli, Héctor y Samper, Mario (eds.) *El café en la historia de Centroamérica* (San José: FLASCO).
- Guimarães, Roberto 1997 "The Environment, Population and Urbanization" en Hillman, R. (ed.) *Understanding Contemporary Latin America* (Boulder CO: Lynne Rienner).
- Gutelman, Michel 1971 *Réforme et mystification agraires en Amérique latine: Le cas du Mexique* (Paris: François Maspero).
- Gwynne, Robert y Kay, Cristóbal (eds.) 1999 *Latin America Transformed* (New York: Oxford University Press).
- Hardoy, Jorge Enrique y Satterthwaite, David 1981 *Shelter, Need and Response: Housing, Land, and Settlement Policies in Seventeen Third World Nations* (New York: Wiley).
- Harris, Richard L., Winson, Anthony, Mallon, Florencia, Galli, Rosemary, De Janvry, Alain, Ground, Lynn y Montoya, Rodrigo 1978 "Peasants, Capitalism, and the Class Struggle in Rural Latin America (Part II)" en *Latin American Perspectives*, 5(4), pp 71-89.
- Heath, Dwight B. 1969 *Land Reform and Social Revolution in Bolivia* (New York: F.A. Praeger).
- Helmore, Kristen y Singh, Naresh 2001 *Sustainable Livelihoods: Building on the Wealth of the Poor* (West Hartford, CT: Kumarian Press).
- Hobsbawm, Eric 1984 *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-19* (London: Weidenfeld & Nicolson).
- Horton, Lynn 1998 *Peasants in Arms: War and Peace in the Mountains of Nicaragua, 1979-1994* (Athens, OH: Ohio University Center for International Studies).
- Huizer, Geritt 1973 *Peasant Rebellion in Latin America* (Harmondsworth: Penguin).
- Huizer, Geritt 1999 *Peasant Mobilization for Land Reform: Historical Case Studies and Theoretical Considerations*, paper de discusión N°103 (Geneva: UNRISD).
- Hunter, Allan 1989 "Post-Marxism and the New Social Movements" en *Theory and Society*, 17(6), pp 885-900.
- Jacobi, Pedro 1985 *Movimentos Sociais Urbanos e a Crise: Da Explosão a Participação Popular Autônoma* (São Paulo: FESP).
- Jacobsen, Nils 1993 *Mirages of Transition: The Peruvian Altiplano, 1780-1930* (Berkeley, CA: University of California Press).
- INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 1999 *Balanço da Reforma Agraria e da Agricultura Familiar 1995-99* (Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrario).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Katz, Friedrich 1988 *Riot, Rebellion, and Revolution: Rural Social Conflict in México* (Princeton, NJ: Princeton University Press).
- Kay, Cristóbal 1981 "Political Economy, Class Alliances and Agrarian Change in Chile" en *Journal of Peasant Studies*, 8(4), pp 485-513.
- Kay, Cristóbal 1982 "Achievements and Contradictions of the Peruvian Agrarian Reform" en *Journal of Development Studies*, 18(2), pp 141-170.
- Kay, Cristóbal 1999 "Rural Development: From Agrarian Reform to Neoliberalism and Beyond" en Gwynne, Robert y Kay, Cristóbal (eds.) *Latin America Transformed* (New York: Oxford University Press).
- Kay, Cristóbal 2000 "Latin America's Agrarian Transformation: Peasantisation and Proletarianisation" en Bryceson, D.F., Kay, Cristóbal y Mooij, Jos *Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America* (London: Intermediate Technology Publications).
- Kearney, Michael 1996 *Reconceptualizing the Peasantry* (Boulder, CO: Westview Press).
- Landsberger, Henry A. (ed.) 1969 *Latin American Peasant Movements* (London e Ithaca: Cornell University Press).
- Landsberger, Henry A. (ed.) 1974 *Rural Protest: Peasant Movements and Social Change* (London: Macmillan).
- LeGrand, Catherine Carlisle 1983 *From Public Lands into Private Properties: Landholding and Rural Conflict in Colombia, 1870-1936* (Ann Arbor, MI: Michigan University Microfilms).
- Lehmann, David 1978 "The Death of Land Reform: A Polemic" en *World Development*, 6(3), pp 39-345.
- Lindqvist, Sven 1979 *Land and Power in South America* (Harmondsworth: Penguin).
- Lora, Guillermo 1964 *La Revolución Boliviana* (La Paz: Difusión SRL).
- Lora, Guillermo 1970 *Documentos Políticos de Bolivia* (La Paz: Editorial Los Amigos del Libro).
- Loveman, Brian 1976 *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973* (Bloomington, IN: Indiana University Press).
- McEwan, Arthur 1981 *Revolution and Economic Development in Cuba: Moving Towards Socialism* (New York: St. Martin's Press).
- Mahoney, James 2001 *The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central America* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).
- Malloy, James M. y Thorn, Richard S. (eds.) 1971 *Beyond the Revolution: Bolivia Since 1952* (Pittsburgh, PA: Pittsburgh University Press).

- Meyer, Carrie A. 1989 *Land Reform in Latin America: The Dominican Case* (New York: Praeger).
- Midlarsky, Manus y Roberts, Kenneth 1995 "Class, State and Revolution in Central America: Nicaragua and El Salvador Compared" en *Journal of Conflict Revolution*, 29 (junio).
- MST Setor de Documentação do SN da CPT Nacional 2002 (São Paulo).
- Orlove, Benjamin S. y Custred, Glynn (eds.) 1980 *Land and Power in Latin America: Agrarian Economies and Social Processes in the Andes* (New York: Holmes & Meier).
- Paige, Jeffery M. 1975 *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World* (New York: The Free Press).
- Pearse, Andrew 1975 *The Latin American Peasant* (London: Frank Cass).
- Petras, James 1997a "MST and Latin America: The Revival of the Peasantry as a Revolutionary Force" en *Canadian Dimension*, 31(3), pp 53-54.
- Petras, James 1997b "The Resurgence of the Left" en *New Left Review*, 223, pp 17-47.
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2001a *Brasil de Cardoso: Expropriação de um País* (Petrópolis: Editorial Vozes).
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2001b "Are Latin American Peasant Movements Still a Force for Change? Some New Paradigms Revisited" en *Journal of Peasant Studies*, 28(2), pp 83-118.
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2002 "The Peasantry and the State in Latin America" en Brass, Tom (ed.) *Latin American Peasants* (London: Frank Cass).
- Portes, Alejandro, Castells, Manuel y Benton, Lauren (eds.) 1989 *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries* (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press).
- PREALC (Programa Regional de Empleo de América Latina y el Caribe) 1993 *PREALC Informe* (Santiago: ILO-PREALC).
- PRONASOL, Advisory Council 1992 *El Combate a la Pobreza* (México: PRONASOL).
- Roseberry, William, Gudmundson, Lowell y Samper Kutschbach, Mario (eds.) 1995 *Coffee, Society, and Power in Latin America* (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press).
- Rosset, Peter 1999 "On the Benefits of Small Farmers", Food First (Institute for Food and Development Policy) *Back Grounder* 6(4). En <www.foodfirst.org/pubs/backgrdrs/1999/w99v6n4.html>.
- Sachs, Wolfgang (ed.) 1992 *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge and Power* (London: Zed Books).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Sanderson, Steven E. 1981 *Agrarian Populism and the Mexican State: The Struggle for Land in Sonora* (Berkeley, CA: University of California Press).
- Schneider, Cathy 1988 *The Mobilization at the Grassroots: Shantytowns and Resistance in Authoritarian Chile* (New York: Institute for Latin American y Iberian Studies, Columbia University).
- Silva, Patricio 1990 "Agrarian Change Under the Chilean Military Government" en *Latin American Research Review*, 25(1), pp 193-205.
- Simpson, Eyler N. 1937 *The Ejido: Mexico's Way Out* (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press).
- Slater, David 1985 *New Social Movements and the State in Latin America* (Amsterdam: CEDLA).
- Slater, David 1994 "Power and Social Movements in the Other Occident: Latin America in an International Context" en *Latin American Perspectives*, 21(2), pp 11-37.
- Stavenhagen, Rodolfo 1970 *Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America* (New York: Anchor Books).
- Stédile, João Pedro 2000 *Interview with James Petras and Henry Veltmeyer*, 14 de mayo.
- Steenland, Kyle 1977 *Agrarian Reform under Allende: Peasant Revolt in the South* (Albuquerque, NM: University of New Mexico Press).
- Tannenbaum, Frank 1968 (1929) *The Mexican Agrarian Revolution* (New York: Archon Books).
- Thiesenhusen, William (ed.) 1989 *Searching for Agrarian Reform in Latin America* (Winchester, MA: Unwin Hyman).
- Thiesenhusen, William 1995 *Broken Promises: Agrarian Reform and the Latin American Campesino* (Boulder, CO: Westview Press).
- UNRISD 2000 *Civil Society Strategies and Movements for Rural Asset Redistribution and Improved Livelihoods*, UNRISD, Civil Society and Social Movements Programme (Geneva: UNRISD).
- Veltmeyer, Henry 1997 "New Social Movements in Latin America: The Dynamics of Class and Identity" en *Journal of Peasant Studies*, 25(1), pp 139-169.
- Veltmeyer, Henry 2002 "The Politics of Language: Deconstructing Postdevelopment Discourse" en *Canadian Journal of Development Studies*, 22(3), pp 597-620.
- Veltmeyer, Henry 2003 "Social Exclusion and Rural Development in Latin America" en *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 27(54), pp 251-80.

- Veltmeyer, Henry y Petras, James 1997 *Economic Liberalism and Class Conflict in Latin America* (London: Macmillan).
- Veltmeyer, Henry y Petras, James 2000 *The Dynamics of Social Change in Latin America* (London: Macmillan).
- Vilas, Carlos 1995 *Between Earthquakes and Volcanoes: Market, State and Revolutions in Central America* (New York: Monthly Review Press).
- Walker, Thomas (ed.) 1997 *Nicaragua without Illusions: Regime Transition and Structural Adjustment in the 1990s* (Wilmington, DE: Scholarly Resources Press).
- Weller, Robert P. y Guggenheim, Scott E. 1982 *Power and Protest in the Countryside: Studies of Rural Unrest in Asia, Europe, and Latin America* (Durham, NC: Duke University Press).
- Wheelock Román, Jaime 1975 *Imperialismo y Dictadura: Crisis de una Formación Social* (Mexico City: Siglo XXI Editores).
- Whetten, Nathan 1948 *Rural Mexico* (Chicago, IL: University of Chicago Press).
- Wolf, Eric R. 1969 *Peasant Wars of the Twentieth Century* (London: Faber & Faber).
- Woolcock, M. y Narayan, D. 2000 "Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy" en *World Bank Research Observer*, 15(2), pp 225-249.
- World Bank 1996 *World Development Report 1996* (Washington, DC: World Bank).
- World Bank 1997 *World Development Report 1997* (Washington, DC: World Bank).

BERNARDO MANÇANO FERNANDES*

**LA OCUPACIÓN COMO UNA FORMA
DE ACCESO A LA TIERRA EN BRASIL:
UNA CONTRIBUCIÓN TEÓRICA
Y METODOLÓGICA****

LA OCUPACIÓN DE TIERRAS se ha vuelto la principal forma de lucha contra el latifundio y una importante forma de acceso a las tierras en Brasil. Es por medio de la ocupación de tierras que los sin tierra han espacializado la lucha, conquistado la tierra y territorializado el Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST o Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra). El objetivo de este trabajo es reflejar esta extraordinaria forma de lucha popular desarrollada por el MST y otros movimientos sociales, ofrecer una construcción analítica del proceso de (re)creación del campesinado a través de esta estrategia, e interpretar su significado respecto de las políticas de reasentamiento del gobierno.

La lucha por las tierras es una dimensión central de la cuestión agraria. Como forma de acceso a las tierras es una acción de resistencia inherente a la formación del campesinado dentro del proceso contradictorio del desarrollo capitalista. Como Ariovaldo Umbelino de Oliveira observa:

* Bernardo Mançano Fernandes es profesor en el Departamento de Geografía, Colegio de Ciencia y Tecnología, Universidad Estatal Paulista (UNESP), Campus Presidente Prudente, San Pablo, Brasil. Es consejero del MST y de la Comisión Pastoral de Tierras.

** Traducido [del portugués al inglés] por Malcom K. McNee.

RECUPERANDO LA TIERRA

El capital no expande el trabajo asalariado, su relación laboral típica, en todas partes de una forma absoluta, destruyendo total y absolutamente el trabajo de la familia campesina. Por el contrario, el capital crea y recrea esto, por lo que su producción es posible, y con ella puede haber también creación de nuevos capitalistas (1991: 20).

Dentro de este proceso de creación y recreación, la exclusión se produce a través de la diferenciación del campesinado. Este proceso no necesariamente lleva a la así llamada desintegración del campesinado; esto es, a la proletarianización o a la transformación del campesino en un capitalista. Conduce también a la recreación del campesinado en diferentes formas. Una forma, como De Oliveira ha notado, es por:

[la] sujeción de ingresos de tierras al capital que ocurre con la subordinación de la producción campesina al capital que domina y expropia los ingresos de las tierras y, además, expropia prácticamente todo el excedente producido, reduciendo los ingresos del campesino al mínimo necesario para su reproducción física (1991: 11).

Así, el movimiento de la formación del campesinado ocurre simultáneamente a través de la exclusión y generación de las condiciones para la realización del trabajo familiar en la creación, destrucción y recreación de relaciones sociales, como la propiedad campesina de la tierra, ocupación, alquiler, aparcería y cultivo por contrato.

Otra forma de recreación del campesinado se produce a través de la ocupación de tierras. En su reproducción amplificada, el capital no puede contratar a todos, y esto siempre excluye una amplia proporción de trabajadores. Del mismo modo, dentro de la realidad brasilera, el capital, en su proceso contradictorio de reproducción de relaciones no capitalistas, no recrea al campesinado con la misma intensidad con que lo excluye. Por medio de la ocupación de tierras, los trabajadores se resocializan, luchando en contra del capital como también subordinándose a él, porque además de ocupar y conquistar la tierra, se reinsertan dentro de la producción capitalista de la relación de producción no capitalista (Martins, 1981).

En su desarrollo desigual, el modo de producción capitalista inevitablemente genera expropiación y explotación. La expropiación hace uso de la ocupación de tierras como una forma de reproducción de trabajo familiar. De este modo, en la resistencia contra el proceso de exclusión, los trabajadores crean una forma política –la ocupación de tierras– con el fin de resocializarse, luchando por las tierras y en contra de la proletarianización. En este sentido, la lucha por las tierras es una constante lucha contra el capital. Es la lucha contra la expropiación y contra la explotación. La ocupación es una forma de materialización del conflicto de clase.

La territorialización del capital significa la desterritorialización del campesinado y viceversa. Es evidente que estos procesos no son lineales ni separados, y contienen una contradicción, porque en la territorialización de una está incorporada la producción y reproducción de la otra. Dentro del proceso de territorialización del capital está la creación, destrucción y recreación del trabajo familiar. A través de la territorialización del campesinado se producen el trabajo asalariado y el capitalismo. Los avances y retrocesos de ese proceso dentro de un territorio están determinados por un conjunto de factores políticos y económicos. Remarcaré algunos de los que han sido determinantes para la formación de la cuestión agraria actual en Brasil.

El modelo de desarrollo agrícola implementado desde la década del sesenta ha intensificado la concentración de la propiedad de tierras, e implicado la expropiación y la expulsión de millones de familias. En este proceso histórico, se han elaborado políticas de reforma agraria como el Estatuto de Tierras (1964) y el Plan de Reforma Agraria Nacional (1986), pero no han sido implementados –lo cual es un reflejo de la correlación de fuerzas alrededor de la cuestión agraria.

Es dentro de este proceso de exclusión que los trabajadores han intensificado su lucha. La ocupación de tierras es conocimiento construido sobre las experiencias de lucha popular contra el poder hegemónico del capital. Es un complejo proceso socio-espacial y político, en el cual las experiencias de resistencia de los sin tierra son creadas y recreadas.

MOVILIZACIÓN, ESPACIALIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN

La ocupación debe ser entendida como una acción que resulta de las necesidades y expectativas de los trabajadores y que introduce preguntas, crea hechos y revela situaciones. De tal modo, modifica la realidad, aumentando el flujo de relaciones sociales. La ocupación es parte de un movimiento de resistencia en defensa de los intereses de los trabajadores e incluye la expropiación del latifundio, el asentamiento de familias, la producción y reproducción del trabajo familiar, la creación de políticas agrícolas dirigidas al desarrollo de campesinos y la generación de políticas públicas que garanticen los derechos básicos de la ciudadanía. Así, los trabajadores desafían al Estado, que siempre ha representado los intereses de la burguesía agraria y del capital en general y ha seguido políticas bajo la presión de trabajadores con el único objetivo de atenuar los procesos de expulsión y explotación.

La organización de ocupación de tierras resulta de las necesidades de supervivencia. Ello es producto de la conciencia construida dentro de la realidad vivida. Es, por lo tanto, un aprendizaje en un proceso histórico de construcción y de experiencias de resistencia. Cuando un grupo de familias comienza a organizarse con el objetivo de ocupar tierras,

RECUPERANDO LA TIERRA

desarrolla un conjunto de procedimientos que definen una metodología de lucha popular. Esta experiencia tiene su lógica construida en la práctica y tiene como componentes constitutivos la indignación y la revuelta, la necesidad y el interés, la conciencia y la identidad, la experiencia y la resistencia, un concepto de la tierra para trabajarla en lugar de tierras para el comercio y la explotación, el movimiento y la superación.

En la formación del MST, los sin tierra han creado metodologías distintivas de resistencia, desarrolladas en la trayectoria de la lucha. Esas acciones son diferentes en todo Brasil. En la espacialización de la lucha por las tierras, cada uno de los espacios de socialización política tiene su propia temporalidad. Los campamentos son de diferentes tipos, sin permanencia o determinados por grupos de familias. Las formas de presión son distintas, de acuerdo tanto a las circunstancias políticas como a las negociaciones. Estas prácticas son el resultado del conocimiento de experiencias, de intercambios y de reflexiones sobre ellas, así como del paisaje político y de las situaciones, de las distintas fracciones de territorio que se localizan en diferentes regiones de Brasil. Los elementos que componen la metodología son la formación, organización y tácticas de lucha, además de negociaciones con el Estado y terratenientes, todos con sus puntos de partida en el trabajo de base. Las Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB), sindicatos de trabajadores rurales, escuelas y aun hogares son algunos de los principales lugares sociales donde los encuentros organizacionales de base toman lugar.

Los esfuerzos de base podrían ser el resultado de una “espacialización” o “espacialidad” de la lucha por la tierra. “Espacialización” es un proceso de movimiento concreto de la acción en su reproducción en el espacio y territorio. De esta manera, los esfuerzos de base podrían ser organizados por personas que vinieron de otro lado, donde construyeron sus experiencias. Por ejemplo, uno o más sin tierra de un estado podrían mudarse a otras regiones del país para organizar familias sin tierra. Y, de esta manera, crean el movimiento en su territorialización. La espacialización es un proceso continuo de una acción, la dimensión del significado de una acción. Los trabajadores comienzan en un lugar los trabajos de base porque escucharon, vieron o leyeron sobre la ocupación de tierras; esto es, se hicieron conscientes a través de una variedad de medios de comunicación, orales, escritos o televisados. Así comienzan la lucha por las tierras, construyendo sus experiencias.

Los esfuerzos de las bases, llevados a cabo en diferentes lugares y bajo distintas condiciones, construyen el espacio de socialización política. Este espacio involucra tres dimensiones: espacio comunicativo, espacio interactivo y el espacio de lucha y resistencia. El espacio comunicativo está construido desde los primeros encuentros. Es el primer momento de reunión y aprendizaje acerca de ellos y de definición de los objetivos. Los

participantes saben por qué están en ese lugar. Sus motivos son necesidad e interés, que junto con la revuelta y la indignación representan actitudes y sentimientos que determinarán cuándo será ocupada la tierra. Es el inicio de una experiencia de transformación de sus realidades.

La segunda dimensión es el espacio interactivo. Ésta, según la metodología, se realiza antes, durante o luego de la ocupación de tierras. El espacio interactivo es un continuo proceso de aprendizaje. El significado de la interacción está ubicado en el intercambio de experiencias, en el conocimiento de historias de vida, en la concientización de la condición de expropiación y explotación, en la construcción de la identidad de los sin tierra. El contenido de los encuentros de base es la recuperación de las historias de vida asociadas con el desarrollo de la cuestión agraria. Así, la vida se experimenta a través de interacciones. Los participantes, analizando la situación, la relación de fuerzas políticas, la formación de articulaciones y alianzas para el apoyo político y económico, transforman las condiciones subjetivas por medio de intereses y voluntades, reconocen sus derechos y participan en la construcción de sus destinos. Se encuentran cara a cara con las condiciones objetivas de la lucha contra los dueños y sus pistoleros contratados, con la confrontación con la policía y el Estado.

Se trata de un proceso de formación política, generador de la militancia, que refuerza la organización social. Todos estos procesos, prácticas y procedimiento, galvanizan a la gente en la construcción de la conciencia de sus derechos, en un esfuerzo por vencer las condiciones de expropiación y explotación. La superación de sus realidades comienza con la deliberación, con la consideración de su participación en la ocupación de tierras. Esta decisión tiene su base en el conocimiento de que es solamente con la acción que la gente podrá encontrar una solución al estado de miseria en el que vive. Ellos deben luego decidir qué tierras ocupar. Los latifundios son numerosos y no es difícil localizarlos. Allí existen varias fuentes de información sobre la localización de las tierras que no cumplen su función social¹, desde el conocimiento que las comunidades poseen respecto de muchos latifundios que los rodean hasta el conocimiento obtenido a través de las diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan sobre la cuestión agraria. Una vez que la tierra es identificada, la única decisión restante es cuándo ocuparla. Es a través de la ocupación que los sin tierra se presentan al público y dimensionan el espacio de la socialización política.

Participar en una ocupación no es una decisión simple. Después de todo, además de la experiencia, significa la transformación de la propia

1 La Constitución brasilera define "función social" mediante un grupo de criterios que los propietarios rurales necesitan observar: uso racional, preservación ambiental, respeto por las leyes laborales, producción y empleo.

RECUPERANDO LA TIERRA

vida. Es por esta razón que hay generalmente indecisión y miedo entre las familias. Con el fin de vencer este miedo es necesario confiar en la gente que constituye y coordina el movimiento. Mientras se defiende una ocupación, un líder tiene la responsabilidad de presentar ideas y referencias que permitirán superar las dudas. Estos argumentos se desarrollan en los encuentros de base, en la definición de los espacios de socialización política. De esta manera, los coordinadores, los sacerdotes y los líderes sindicales se vuelven importantes referentes para los trabajadores indecisos. Visitas a los campamentos y asentamientos o testimonios de luchas de las familias establecidas sirven como reaseguro. Aun así, algunos permanecen al margen, como observadores, y sólo van al campamento luego de que las ocupaciones han sido realizadas. Esas actitudes inevitablemente generan debate interno, ya que muchas familias se quejan de que se sienten como “carne de cañón”. Existen también aquellos que se conocen como “golondrinas”, que aparecen una vez cada tanto en el campamento; son una expresión de indecisión y oportunismo. Finalmente, están aquellos que participan en grupos de familia, ayudando en la realización de varias ocupaciones hasta que ellos mismos deciden ocupar.

Los encuentros de la base son espacios generativos, donde los sujetos construyen su propia existencia. Estos encuentros podrían durar de uno a varios meses, incluso años, según las circunstancias. Podrían involucrar un municipio, varios municipios de una región, varios municipios de varias regiones, o hasta más de un Estado en zonas fronterizas. Durante la dictadura militar, estos encuentros debieron ser organizados con un gran nivel de reserva debido a la represión. Desde entonces, con la territorialización de la lucha y el aumento de la participación de las familias, esos encuentros se han multiplicado y expandido y fueron ya no en docenas, sino en centenares.

Este aumento también trajo problemas. Policías y pistoleros comenzaron a infiltrarse en los encuentros para espiar su desarrollo e interrumpieron la lucha. Los espías casi nunca son descubiertos, y la ocupación termina frustrada. Con el fin de evitarlo, los líderes informan a los coordinadores de grupo de familias sobre el día y el lugar de las ocupaciones sólo horas antes de tomar el lugar. Por otro lado, el aumento de las ocupaciones resulta no sólo de la organización de los sin tierra, sino también del aumento de las formas de apoyo. Cada vez más, las familias que participan en estos encuentros reciben el apoyo de comunidades urbanas y asentamientos rurales, así como también de prefectos que ofrecen transporte, incluso para la participación en la ocupación.

Durante este proceso, los sin tierra intentan negociar con el Estado el establecimiento de las familias. Promesas y compromisos, que la mayoría de las veces no se materializan, son siempre las respuestas que reciben. Con

el beneficio de la experiencia, aprenden que deben construir las condiciones necesarias para perseverar a través de la creación de comisiones, núcleos, sectores y coordinaciones. Son parte de la forma de organización del movimiento. Cada uno está compuesto por grupos de personas responsables de las diversas necesidades de las familias, comenzando por la comida, salud y la provisión de educación para los chicos, adolescentes y adultos. Es más, crean comisiones para negociar, con el fin de seguir el progreso del tema junto con las otras instituciones e informar a la sociedad de sus acciones, y crean núcleos y coordinaciones con el objetivo de mantener el campamento informado y organizado. En el MST, diversos sectores trabajan juntos para llevar adelante esas tareas con el "Frente de las Masas", responsables del trabajo de las bases y del desarrollo de acciones. Los trabajadores sin tierra son los sujetos principales de este proceso.

Desde el comienzo de la lucha, los sin tierra han recibido el apoyo de diferentes instituciones, por intermedio de las alianzas que forman una articulación política. Las instituciones involucradas defienden la ocupación como una forma de acceso a la tierra. Durante los más de veinte años de su existencia el MST ha recibido, en diferentes circunstancias, el apoyo de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT), del Partido de los Trabajadores (PT), de otros partidos políticos y de una diversidad de organizaciones. Así y todo, las relaciones dentro de la articulación siempre han generado enfrentamientos políticos, debido a las diferentes concepciones de los roles que las partes de las alianzas juegan en el desarrollo de la lucha por las tierras. Algunos de esos enfrentamientos están relacionados con la autonomía de los trabajadores. A menudo, las organizaciones intentan interferir en las decisiones de los trabajadores, sin reconocer sus respectivas competencias. Esto sucede, por ejemplo, cuando intentan coordinar las luchas tratando de representar a los trabajadores y argumentando que el MST debería apoyar solamente a los sin tierra, cuando, en realidad, los sin tierra son aquellos que organizan el movimiento.

Los enfrentamientos también se producen debido a las diferentes concepciones de lucha. Éstas están extremadamente diferenciadas en todo el país. Hay concepciones favorables a las posturas defensivas y otras a las posturas ofensivas, ambas entendidas como diferentes formas de resistencia ante las acciones de la policía y de los pistoleros. Las posturas más defensivas privilegian la no confrontación y optan sólo por la negociación; las posturas ofensivas privilegian la confrontación y la negociación. La superación de los desacuerdos se lleva a cabo a través del reconocimiento de la autonomía de los trabajadores y de las competencias de cada institución. En la formación del MST, esto fue posible solamente luego de la ruptura y el reestablecimiento de relaciones gracias a las lecciones construidas en las luchas. De diferentes maneras, siempre ha persistido la idea

de que la ocupación es la solución. Ello implicaba, para todas las organizaciones involucradas en la lucha, un proceso de aprendizaje.

Hasta mediados de la década del noventa, los sin tierra se enfrentaron a estos temas. Después de años de tensión, las instituciones reconocieron sus experiencias y autonomía. Así, estos campesinos sin tierra hablan a través de sus propias voces, ganando el respeto y la admiración de algunos y la aversión de otros. Fue esta lucha incesante por la autonomía política la que contribuyó enormemente a la espacialización y territorialización del MST en todo Brasil. En este sentido, el MST no es el resultado de una propuesta de un partido político, ni el fruto de una propuesta o política de la Iglesia, ni un movimiento de trabajadores, aunque ha recibido el apoyo de una conjunción de estas fuerzas políticas. El MST es el fruto de esta realidad, no de aquellas instituciones.

PROCESOS DE OCUPACIÓN: TIPOS Y FORMAS

La ocupación, como una forma de lucha y acceso a las tierras, es una constante en la historia del campesinado brasileño. A través de las pasadas cuatro décadas, los poseedores (*posseiros*)² y los sin tierra han sido siempre los principales sujetos de esta lucha. Los poseedores ocupan tierras predominantemente en los límites o frentes de expansión, en áreas fronterizas. Con el avance de la frontera, se generan procesos de expropiación de campesinos, a causa, en primer término, de la toma de tierras por grandes terratenientes y hombres de negocios. Los sin tierra, por otro lado, ocupan tierras predominantemente en regiones donde el capital ya se ha territorializado. Ellos ocupan tanto *latifundios* como tierras de comercio y explotación (tierras decomisadas o tomadas ilegítimamente)³. La diferencia importante entre las luchas de los *posseiros* y los sin tierra es que, en el primer caso, el tomador de tierras, el terrateniente y el hombre de negocios llegan y expropian la tierra en la que ya están establecidos los *posseiros*, mientras que en el segundo caso, los sin tierra llegan y ocupan la tierra del tomador de tierras establecido, del terrateniente y del hombre de negocios.

Desde mediados de la década del ochenta, cuando el MST se territorializó a través de todo Brasil, los trabajadores sin tierra, junto con los asentados, dueños de pequeñas granjas, aparceros, rentistas y agricultores contratados, intensificaron el proceso de formación del campesinado brasileño. La intensificación de la ocupación de tierras tuvo

2 Un *posseiro* es un campesino que posee tierras pero no es dueño. Para ser un terrateniente es necesario tener posesión y dominio a través de un título de propiedad conocido en Brasil como *escritura*.

3 Tierras decomisadas o tomadas ilegítimamente: grandes áreas de tierras del Estado que han sido apropiadas por hombres de negocios por medio de documentos falsos.

un gran impacto político, tanto es así que los sin tierra se volvieron los principales interlocutores en su confrontación con el Estado en la lucha por las tierras y la reforma agraria. Estos trabajadores rurales y urbanos han estado luchando por las tierras en todas las regiones del país.

Con el fin de entender mejor el proceso, es necesario analizar los diferentes tipos y formas de ocupación. Un punto de comienzo útil es el enfoque analítico desarrollado por Eric Hobsbawm (1998: 241-276) en su *Peasant Land Occupations* [*Ocupaciones de tierras campesinas*]. Allí, Hobsbawm emplea solamente el componente de *tierra*, mientras que en este trabajo son utilizados también otros componentes, como *familia* y *experiencia*. De esta manera, los tipos de ocupación están relacionados no sólo con la propiedad de la tierra –pública, capitalista, poseída por organizaciones no gubernamentales– sino también con las formas de organización y los tipos de experiencia que ellos construyen.

Hobsbawm marca tres tipos de ocupación: (a) *recuperación* o reconquista de tierras para el trabajo, refiriéndose a las tierras que fueron ocupadas durante décadas por campesinos, pero que se tornaron objeto de disputa debido a la territorialización del capital en la expropiación de familias campesinas; (b) *tierras decomisadas* o tierras pertenecientes al Estado en áreas fronterizas pero tomadas por terratenientes; y (c) *ocupación de latifundios*. Hobsbawm está principalmente interesado en las ocupaciones del primer tipo, que también son relevantes en Brasil, especialmente en la región Amazónica. Sin embargo, las ocupaciones que predominan en Brasil son las relacionadas con las tierras decomisadas y/o tierras públicas y *latifundios*.

Respecto de la forma de organización de los grupos de familias, hay dos tipos: *movimientos territorializados* y *movimientos aislados*. La distinción entre los dos se relaciona con la organización social y el espacio geográfico. Movimientos territorializados son aquellos que están organizados y actúan en diferentes lugares al mismo tiempo, lo cual es posible gracias a su forma de organización, que permite la espacialización de la lucha por la tierra. EL MST es un ejemplo de esto. Los movimientos territorializados tienen estructuras que pueden asumir dos formas: movimientos sociales o movimientos laborales⁴. Ambos, juntos o separados, reciben el apoyo de diferentes instituciones. Las formas de apoyo son políticas y económicas, y se efectivizan a través de articulaciones y alianzas. Pueden recibir apoyo y/o estar conectadas a una pastoral de la Iglesia Católica (Comisión de Tierras Pastoral o la Pastoral Rural). De manera

4 Por movimiento de trabajadores se entiende aquí una institución que es reconocida oficialmente por el Estado y que se constituye conforme a las leyes y criterios estatales relativos a las organizaciones registradas. Los movimientos sociales son organizaciones populares que tienen una estructura independiente del Estado.

RECUPERANDO LA TIERRA

semejante, podrían recibir apoyo de los sindicatos, partidos políticos u organizaciones no gubernamentales. Ésas son las instituciones que han apoyado la lucha por las tierras, principalmente las ocupaciones.

Un movimiento aislado es una organización social; se realiza en un territorio delimitado, en un municipio o en un pequeño grupo de municipios. Esto es definido por las circunstancias inherentes al movimiento; es decir que nacen en diferentes puntos del espacio geográfico, en diferentes luchas de resistencia. Esos movimientos pueden recibir apoyo de una o más parroquias a través de pastorales, tanto como de sindicatos, partidos, políticos y prefectos, entre otros. También pueden ser el resultado de disensos dentro de los movimientos socio-territoriales. Sin embargo, su base territorial de acción está limitada por la acción del movimiento. Cuando esta condición es superada, el movimiento aislado puede territorializarse organizando acciones más allá de su base territorial original, o puede adherirse a un movimiento territorializado ya existente. Es de esta manera cómo se desarrollaron los recientes movimientos agrarios.

Al no poder superar estas circunstancias, los movimientos aislados se están extinguiendo. La visión de territorialización está relacionada con su forma de organización socio-política. Cuando los movimientos son el resultado de los intereses de comunidades inmediatas, defendidos por líderes personalizados y prácticas populistas que crean relaciones de dependencia, la tendencia es hacia el agotamiento del movimiento. Cuando los movimientos contemplan objetivos más amplios, que apuntan no sólo a resolver sus propios problemas sino también a insertarse en un proceso de lucha más amplio y los líderes promocionan espacios de socialización política para la formación de nuevos liderazgos y experiencias, la tendencia es al desarrollo de la forma de organización, espacialización y territorialización. De esta manera, con frecuencia trabajan no sólo en sus problemas, también dimensionan la lucha por las tierras organizando nuevos grupos de familias, inaugurando nuevos lugares, espacializando y territorializando el movimiento y la lucha. Cada movimiento socio-territorial nace de uno o más movimientos sociales aislados.

En este sentido, puede afirmarse que los movimientos territorializados poseen una dimensión política que supera los límites de los problemas diarios y los temas del lugar. Para que un movimiento territorialice debe entender la lógica de la sociedad capitalista, sus desigualdades y contradicciones. La territorialización, en este caso, significa moverse más allá de, tanto en términos de espacio como en términos de tiempo, siempre con la perspectiva de la construcción de una nueva realidad.

Las ocupaciones realizadas por estos movimientos pueden desarrollarse por medio de los siguientes tipos de experiencia: espontáneos y aislados; organizados y aislados, organizados y espacializados. Las experiencias

son siempre formas de lucha y resistencia, porque inauguran un espacio en la lucha por las tierras que es el campamento. Acerca del número de familias involucradas, pueden ser grupos pequeños o grandes.

Las ocupaciones espontáneas y aisladas son conducidas principalmente por pequeños grupos en una acción singular de supervivencia, cuando algunas familias ocupan un área sin configurar una forma de organización social. Entran en la tierra en grupos, y luego, por necesidad, comienzan a constituir un movimiento social. La característica de espontaneidad se centra en el hecho de que no poseen una preocupación previa respecto de la construcción de una forma de organización, que sí puede aparecer en el proceso de ocupación. Estas ocupaciones pueden devenir un movimiento social aislado.

Las ocupaciones organizadas y aisladas son llevadas a cabo por movimientos sociales aislados de uno o más municipios. La formación de pequeños grupos predomina, pero las ocupaciones masivas también han ocurrido. Las familias forman el movimiento antes de ocupar las tierras. Se organizan a nivel de las bases y llevan a cabo varios encuentros hasta que la acción se produce. Esos movimientos terminan luego de la conquista de las tierras o se transforman en movimientos territorializados. Esos dos tipos de ocupación son el producto de la espacialización y territorialización de la luchas por la tierras.

Los tipos anteriores difieren de las ocupaciones realizadas por movimientos territorializados que ejecutan ocupaciones organizadas y espacializadas. Hay experiencias de lucha que resultan de experiencias traídas de otros lugares. Están contenidas dentro de un proyecto político más amplio y pueden constituir parte de la agenda de la lucha. Espacialización implica la participación de trabajadores que ya han vivido la experiencia de la ocupación en diversos lugares y regiones, y como militantes, espacializan las experiencias trabajando en la organización de nuevas ocupaciones, territorializando la lucha y el movimiento en la conquista de nuevas áreas. Es dentro de este proceso que son educados en una constante renovación –a lo que E.P. Thompson (1963) se refirió como el *hacerse a uno mismo* en un movimiento social– esto es, en la construcción de sus espacios y sus tiempos, transformando sus realidades.

La experiencia de la ocupación en el proceso de territorialización es un aprendizaje. Es en la construcción de conocimiento de las realidades de los grupos de familias y luchas referenciales que aprenden a realizar su propia lucha. *Luchas referenciales* son aquellas sobre las cuales les han hablado o han conocido. Los movimientos socio-territoriales, en sus procesos de formación, multiplican sus acciones y comienzan a realizar varias ocupaciones en intervalos cortos o simultáneamente. Mientras tanto, durante el proceso de negociación para establecer asen-

RECUPERANDO LA TIERRA

tamientos, materializan nuevas ocupaciones en una espacialización y territorialización continua. A causa de ello, el intervalo durante el cual otra lucha nace es un período muy importante, intensifica el número de ocupaciones, moviliza y organiza a más y más familias.

En el desarrollo de una acción directa sobre la tierra es posible definir dos tipos de ocupación: *ocupación de un área delimitada* y *ocupación masiva*. La principal diferencia es que la primera consiste en una ocupación en pequeños grupos o, incluso, de algunos más grandes, en un área específica; en la segunda, la movilización y la organización tienen como meta el asentamiento de todas las familias sin tierra y ocupan tantas áreas como sean necesarias. En el primer tipo, la ocupación es realizada con el objetivo de adquirir sólo la tierra ocupada. Así, las familias son movilizadas y organizadas para demandar esa tierra. Si hay más familias que pueden ser ubicadas en esa área, comienzan una nueva acción para ganar acceso a otra área. Cada ocupación tiene como resultado el establecimiento de un asentamiento. La lógica de la organización de las familias es movilizarse de acuerdo con las áreas demandadas. En el caso de las ocupaciones masivas, la lógica cambia. Los sin tierra superan las constricciones de un área específica, de tal manera que el significado de la ocupación no sea solamente la conquista del área en cuestión sino el asentamiento de todas las familias y, posiblemente, se torne un establecimiento de varios asentamientos. El criterio principal para el asentamiento de familias no es únicamente el límite territorial sino el tiempo y las formas de lucha en los cuales participan las familias, de modo que en la medida en que se conquistan segmentos de territorio, más familias se unen a los grupos familiares ya establecidos.

La ocupación de un área delimitada puede transformarse en una ocupación masiva, no sólo como resultado de la cantidad de familias que participan sino también por el desarrollo de la lucha. Esto sucede cuando, luego de ganar el acceso a la tierra demandada, se conoce la existencia de otros grupos de áreas que pueden ser demandadas y se considera la posibilidad de unirse a diversos grupos de familias en la misma ocupación. Por este motivo, es importante resaltar que esa masificación involucra no sólo cantidad sino también calidad. Está determinada por la definición del espacio de socialización política, principalmente por el refuerzo del espacio interactivo que se genera por medio de la difusión de núcleos, sectores y comisiones, como una forma de reforzar el movimiento. En estos espacios, las familias comienzan a trabajar más intensamente sobre sus necesidades y perspectivas, como los alimentos, cuidado de la salud, educación y negociación, entre otras cosas.

Con esas prácticas, los sin tierra se encuentran en movimiento. Superan bases territoriales y las fronteras oficiales. En la organización de ocupaciones masivas, familias de varios municipios y de más de un

Estado en áreas fronterizas se unen. Es así como rompen con los parroquialismos y otras estrategias basadas en intereses que ven como impedimentos o que hacen difícil el desarrollo de la lucha de los trabajadores⁵. El criterio para la selección de las familias a ser instaladas no puede permanecer restringido a los orígenes cada una de ellas. Las personas que arman la comisión de selección deben considerar entre sus criterios, además de los determinados por el gobierno⁶, la historia de la lucha.

En la ejecución de las ocupaciones, los sin tierra pueden luchar con diferentes tácticas para lograr la tierra. Hay casos en los que ocupan una franja y comienzan a negociar, demandando la expropiación del área. En otras instancias ocupan la tierra, la dividen en lotes y comienzan a trabajarla. En otros casos, demarcan una sola área y plantan colectivamente. Esas prácticas son el resultado del desarrollo de la organización de los sin tierra. Son formas de resistencia que afirman la noción de tierras para trabajar, opuesta a la idea de tierras para explotar.

El proceso de espacialización y territorialización disminuye y puede terminar cuando las familias sin tierra conquistan todos los *latifundios* de uno o más municipios⁷. Esto lleva a cerrar lo que llamamos el ciclo de ocupaciones. El ciclo comienza con las primeras ocupaciones y dura mientras existan tierras por conquistar.

Finalmente, es importante notar que, en el curso de la movilización y espacialización, los sin tierra combinan otras formas de lucha con la ocupación, y las llevan adelante separada o simultáneamente. Esto incluye marchas o manifestaciones, ocupaciones de edificios públicos y protestas frente a agencias de créditos. De esta manera, los sin tierra transforman la tierra y los espacios públicos en espacios políticos desde los cuales denunciar la explotación y la expropiación; estos actos intensifican las luchas y las relaciones con diferentes órganos gubernamentales y, de la misma manera, exponen las realidades de los sin tierra, recibiendo apoyo y críticas del público y de diversos sectores de la sociedad. Las marchas son especialmente importantes, ya que se transforman en peregrinaciones con referentes históricos mundiales. De hecho, algunos de los referentes incorporados a la *mística* (actos colectivos o rituales de producción de identidad y sentido) del movimiento incluyen la migración de los judíos a

5 Un impedimento tal, por ejemplo, es el decreto 35.852 del gobierno del estado de São Paulo: el artículo 1 determina que las familias que no residan al menos dos años en la región no pueden asentarse.

6 Los criterios determinados por el gobierno son: ser un trabajador rural, no ser terrateniente o funcionario público.

7 Ejemplos raros son los municipios de Mirante de Paranapanema (SP), Ronda Alta (RS) y Pontão (RS), donde los sin tierra conquistaron la mayoría de los *latifundios*.

RECUPERANDO LA TIERRA

la Tierra Prometida en la lucha contra la esclavitud en Egipto; la marcha de Gandhi y los hindúes al mar en la lucha contra el imperialismo británico; y las marchas de las revoluciones mexicanas y chinas, entre otras (Stédile y Fernandes, 1999: 149-155).

LOS CAMPAMENTOS: ESPACIOS DE LUCHA Y RESISTENCIA

Acampar es ser un sin tierra. Estar en un campamento es el resultado de decisiones tomadas sobre la base de deseos e intereses, la objetivación de la transformación de la realidad. Los acampados son los sin tierra que tienen como objetivo instalarse o asentarse. Hay dos categorías de una identidad en formación.

Los campamentos son espacios y tiempos de transición en la lucha por la tierra. Ellos son, consecuentemente, realidades en transformación. Son formas de materialización de la organización de los sin tierra, y personifican los elementos organizacionales principales del movimiento. Son predominantemente el resultado de ocupaciones, o sea de espacios de lucha y resistencia, que demarcan dentro de los *latifundios* el primer momento del proceso de territorialización de la lucha. Las acciones de ocupación y acampe integran procesos de espacialización y territorialización. Pueden ubicarse dentro de un *latifundio* o en los costados de las autopistas, según la combinación y correlación de fuerzas políticas. Pueden ser las primeras acciones de las familias, o la repetición de otras. El campamento es el primer lugar de movilización para presionar al gobierno en la expropiación de tierras, mientras se sabe que el acampe sin ocupación raramente termina con la conquista de la tierra. La ocupación de la tierra es el triunfo en las negociaciones. Muchos de los acampados permanecen por años en los costados de las autopistas sin llegar a asentarse. Sólo con la ocupación han logrado el éxito en la lucha.

A primera vista, los campamentos parecen ser grupos desorganizados de chozas. Sin embargo, revelan ciertos arreglos de acuerdo con la topografía del sitio, las condiciones de la resistencia a la expulsión y la posibilidad de confrontación con pistoleros. Pueden localizarse en el fondo de los valles o sobre los costados. Las disposiciones de los campamentos son predominantemente circulares o lineales. Existen espacios donde, a menudo, los sin tierra plantan sus jardines, establecen una escuela provisional y una farmacia, así como también un lugar para asambleas.

Luego de la planificación de un campamento, los sin tierra crean un número de comisiones o equipos que dan forma a la organización. Participan ya sea familias enteras o sólo algunos de sus miembros, y crean las condiciones básicas para cubrir sus necesidades: cuidado de la salud, educación, seguridad, negociación y trabajo. Así, los campamentos frecuentemente tienen escuelas, esto es, chozas cubiertas de lona donde se

dictan clases, en particular de los primeros cuatro años de educación primaria; tienen una carpa o choza que funciona como una farmacia improvisada y, cuando están ubicados en un *latifundio*, plantan colectivamente con el fin de garantizar parte de los alimentos que necesitan. Cuando están al costado de una autopista, plantan entre la calle y el cerco. Cuando están próximos a un asentamiento, los acampados trabajan sobre los lotes de los que ya están asentados, como jornaleros o en diferentes formas de aparcería. También venden su trabajo como empleados golondrina del azúcar o plantas de alcohol a hacendados u otras empresas capitalistas.

Durante la década del ochenta, los acampados recibieron comida, ropa y medicinas, básicamente de las comunidades e instituciones que apoyaban la lucha. Al final de la década del ochenta y comienzos de los años noventa, con el crecimiento de la actividad, los asentamientos también comenzaron a contribuir a la lucha de varias maneras. Muchos consiguieron camiones prestados para ayudar en las ocupaciones, tractores para la preparación de la tierra y comida para la población que acampaba. Este apoyo es más significativo cuando las familias establecidas están trabajando como una cooperativa. Esto indica la capacidad de organización del MST. Con el crecimiento del apoyo de las comunidades, instituciones y asentamientos, y con la consolidación del MST, los sin tierra han podido incrementar el número de ocupaciones y desarrollar la resistencia hasta lograr llevar a cabo docenas de ocupaciones simultáneas.

En la segunda mitad de la década del noventa, el MST comenzó a experimentar en algunos estados lo que se llamó el campamento “permanente” o “abierto”. Se estableció en una región donde existen muchos *latifundios*. Es un espacio de lucha y resistencia donde algunas familias de diversos municipios son dirigidas y organizadas. Desde este campamento permanente, los sin tierra parten hacia varias ocupaciones, en las que pueden asentarse o desde donde volver al campamento en caso de expulsión. Mientras continúan obteniendo títulos de tierras, movilizan y organizan a nuevas familias, que son las que luego forman el campamento.

El campamento es un lugar de constante movilización. Aparte de un espacio de lucha y resistencia, es un espacio comunicativo e interactivo. Estas tres dimensiones del espacio de socialización política son desarrolladas de diferente manera en los campamentos, según la particularidad de cada situación. En los inicios del proceso de formación del MST, en la década del ochenta, las familias partían hacia una ocupación sólo luego de meses de preparación de la base. Durante ese período, los sin tierra visitaban comunidades, contaban sus experiencias, generaban debates y desarrollaban el espacio de socialización política en sus dimensiones comunicativa e interactiva. Este procedimiento hizo posible

RECUPERANDO LA TIERRA

el establecimiento de un espacio de lucha y resistencia mejor organizado, ya que las familias conocerían los diferentes tipos de situaciones a las que se enfrentarían. Así, en el proceso de formación, a través de las mismas demandas de la lucha, el MST construía otras experiencias y edificaba los cimientos para próximas luchas.

En el campamento, los sin tierra analizan periódicamente las circunstancias políticas de la lucha. El análisis político se ve facilitado por el contacto permanente de esos movimientos territorializados con sus oficinas coordinadoras, de modo que son capaces de hacer análisis de situaciones políticas más amplias, como las negociaciones llevadas a cabo en las capitales de los estados y en Brasilia, o de otras protestas organizadas, como marchas a ciudades y ocupaciones de edificios públicos. Así, asocian formas de luchas locales con luchas en las capitales. A través de la correspondencia entre los espacios de activismo en el campo y en la ciudad, hay siempre una determinación de uno sobre otro. Las realidades locales son muy diversas y las prioridades de las familias comprometidas en la lucha tienden a predominar en las decisiones finales, por lo que las líneas políticas de acción están construidas desde esos parámetros. Y los momentos representativos del MST están determinados por esta espacialidad y esta lógica, ya que los miembros de la coordinación o la dirección nacional viven ese proceso desde el campamento hasta niveles más amplios, regionales, estatales y nacionales.

Con estas acciones, que cuentan con el apoyo de articulaciones políticas, los sin tierra buscan cambiar las circunstancias a fin de estimular el proceso de negociación. Sin embargo, no siempre pueden cambiar la situación. Cuando las negociaciones llegan a un callejón sin salida, pueden desencadenarse confrontaciones violentas, como la ocurrida en la Praça da Matriz en Porto Alegre y la masacre en Eldorado dos Carajás, en el estado de Pará⁸.

Todos los campamentos tienen su historia en la lucha de las familias sin tierra. Vale la pena distinguir al menos dos de los campamentos históricos en el proceso de formación y territorialización: Encruzilhada Natalino, en Ronda Alta, Rio Grande do Sul; y el Capuchins, in Itamaraju, Bahia. Esos campamentos fueron presionados de las formas más diversas por parte del gobierno y de los terratenientes, pero persistieron y triunfaron en la conquista de la tierra. El valor de la resistencia y la perseverancia es la lección principal que se desprende de esas dos luchas. Hoy, sirven como puntos de referencia y ejemplos de resistencia exitosa. Garantizar la existencia del campamento por medio de la resistencia e

⁸ En Praça da Matriz, un oficial de policía fue asesinado en una confrontación con los sin tierra; en la masacre de Eldorado dos Carajás, diecinueve sin tierra fueron asesinados en una confrontación con la policía.

impedir la dispersión enfrentando múltiples formas de violencia son decisiones fundamentales para el éxito de la lucha por la reforma agraria.

El mantenimiento de la ocupación bajo amenaza de dispersión es parte de la lógica de resistencia. Cuando una expulsión (*despejo*) ocurre, las familias trasladan el campamento a otras áreas, como desde los costados de las rutas a tierras cedidas por gobiernos de la ciudad u otras instituciones⁹. Cuando son expulsados de los costados de las autopistas, levantan campamentos en asentamientos cercanos. Proteger la ocupación implica garantizar un lugar para el campamento.

Mantener los campamentos es una forma de presionar para demandar el asentamiento. Y ésta es una práctica del MST, garantizar el campamento hasta que todas las familias estén instaladas. Para los otros movimientos, esta permanencia no es tan constante. A menudo, las familias negocian un asentamiento con el gobierno y, creyendo en sus promesas, vuelven a sus municipios: como consecuencia, la mayoría de los asentamientos no se consolida. Tampoco es anómalo para algunas familias permanecer en el campamento hasta sucumbir: eventualmente a causa de diferentes razones, pero principalmente por la falta de dirección política, la violencia de las expulsiones y los pistoleros.

LA OCUPACIÓN COMO UNA FORMA DE ACCESO A LA TIERRA

En poco menos de dos décadas de lucha, la ocupación se ha vuelto una importante forma de acceso a las tierras. Aproximadamente el 77% de los establecimientos creados entre 1986 y 1997 en trece estados del noreste, oeste central, sudeste y sur tienen sus orígenes en la ocupación de tierras (ver tabla 1 en página siguiente).

El gobierno federal afirma haber establecido cientos de miles de familias, pero la verdad es que esto fue resultado, básicamente, de la presión de la ocupación de tierras. Entre 1995 y 1999, 2.750 asentamientos de reforma agraria con 299.323 familias establecidas fueron creados, y les siguieron 1.853 ocupaciones con 256.467 familias participantes; la cantidad aumentó al 85% del total asentado (Fernandes, 2000). Es importante darse cuenta de que parte de lo que el gobierno llama “asentamientos de reforma agraria” consiste, de hecho, en el título formal de las tierras de los *posseiros*.

Para las regiones noreste y oeste central, la cantidad de familias que ocupan tierras representa proporcionalmente el 84% de las asentadas o establecidas. Para las regiones del sur y sudeste representa el 273% y

⁹ *Despejo* también significa liberarse de impedimentos como el tratamiento de las personas como objetos, que significa ser víctimas de la violencia, y de la relegación de la lucha por las tierras al poder judicial y al “estado de derecho” (Fernandes, 1997; Moreyra, 1998).

RECUPERANDO LA TIERRA

el 175%, respectivamente. Esto significa que 45.845 familias lucharon por las tierras en el sur, mientras el gobierno establecía a 12.272. De las 44.225 familias que lucharon por las tierras en el sudeste, los asentamientos beneficiaron sólo a 16.068. La actividad más grande realizada por el gobierno se llevó a cabo en el norte, donde asentó o regularizó la propiedad de 98.657 familias (Fernandes, 2000).

Tabla 1
Número de asentamientos según la procedencia, 1986-1997

Estado*	Ocupación de tierra	Proyecto gubernamental	Desconocido
Alagoas	21	7	6
Ceará	92	89	4
Espírito Santo	32	3	0
Goiás	63	23	31
Mato Grosso do Sul	22	25	7
Minas Gerais	80	16	0
Paraná	158	22	4
Pernambuco	106	22	0
Rio de Janeiro	45	3	0
Rio Grande do Sul	159	0	0
Santa Catarina	94	6	2
São Paulo	79	4	0
Sergipe	28	12	0

* Principales estados en los cuales el MST está organizado.

Fuente: Dataluta, 1998.

De acuerdo con la tabla 1, el estado de Ceará es donde encontramos el número más alto de asentamientos creados por el gobierno. Esto es producto, en gran parte, de políticas del gobierno del estado y de la implementación del Registro de Tierras y los programas de Bancos de Tierra. Sin embargo, estos datos no tienen la misma correspondencia en los estados de Pernambuco y Minas Gerais, donde tales proyectos también se implementaron. Es aun más notable que en los estados del sur y sudeste, donde se localiza el 24% del total de los asentamientos creados hasta junio de 1999, aproximadamente el 92% se originó en las ocupaciones de tierra.

Ha sido la lucha por las tierras lo que ha estimulado las políticas de asentamientos rurales del gobierno federal. Y es por esta razón que preguntamos, ¿qué reforma agraria? Llamar a esta realidad “reforma agraria” es interpretarlo en el lenguaje del Estado y de las clases dominantes a los que éste sirve. (Fernandes, 1998).

Como se ha demostrado, la cuestión agraria en Brasil permanecerá sin resolverse mientras sea tratada con políticas compensatorias. La lucha por la democratización del acceso a las tierras ha ido creciendo, mientras que las estructuras de las tierras arrendadas han permanecido concentradas y el número de los sin tierra ha aumentado, principalmente por el crecimiento del desempleo. Como sostienen estudios recientes (Gasques y Conceição, 1999), basados en el Censo de Agricultura 1995/1996, el público potencial para la reforma agraria –incluyendo pequeños agricultores (sobre terrenos subfamiliares), rentistas, cultivadores contratados, ocupantes y asalariados– reúne 4,5 millones de familias. De estos datos, se estima que el área necesaria para los asentamientos, basados en un terreno de tamaño familiar, es aproximadamente de 160 millones de hectáreas. Desde 1979 hasta junio de 1999, 475.801 familias fueron asentadas. Éste es el equivalente al 10,5% de la circunscripción electoral potencial y al 14% del área. Sin la implementación de una política de reforma agraria que acelere este proceso, la lucha por las tierras se seguirá desarrollando a través de las acciones de las familias sin tierra.

LA REACCIÓN DEL GOBIERNO DE CARDOSO

Las políticas de los gobiernos han estado ligadas a las acciones de los movimientos campesinos. Aunque el gobierno de Cardoso implementó una política de asentamientos rurales, no ha podido en realidad detener el aumento de las ocupaciones de tierras. En términos de confrontación, el gobierno entendió que no se podrían superar las condiciones del conflicto construido por el proceso de espacialización y territorialización de la lucha, y así concluyó que era necesario formular políticas que impidieran la expansión de ese proceso.

Sin embargo, durante la década del noventa, con el advenimiento de las políticas neoliberales y, consecuentemente, del desempleo estructural, la ocupación de tierras se ha intensificado, pasando de 11 mil familias en 1991 a 79 mil en 1999. La lucha por las tierras ha crecido, y los trabajadores desempleados urbanos también comenzaron a participar. Son, en gran parte, familias que fueron expulsadas de las tierras en las décadas recientes y carecen de perspectiva de empleo en la ciudad. Ven, pues, en los asentamientos rurales, las condiciones para una vida digna.

El gobierno siempre ha tratado las cuestiones agrarias con políticas compensatorias, creando asentamientos inmediatamente después de las ocupaciones de tierra de *latifundios*. Desde 1997, a través de acuerdos

con el Banco Mundial, el gobierno ha creado políticas conocidas como el Registro de Tierras y el Banco de Tierras, con la intención de establecer un marco de reforma agraria basada en el mercado (Ver Mattei, pág. 359 de este volumen). También ha creado la “reforma agraria a través del correo” –donde los sin tierra se registran y esperan una respuesta del gobierno– en un esfuerzo por desmovilizar movimientos sociales y dismantelar sus organizaciones y ocupaciones de base. A pesar de ello, estas políticas no han sido suficientes para desconcentrar la estructura de la tenencia de tierras. En realidad, lo que estamos observando es un proceso de creación de asentamientos rurales confinante con la intensificación de la concentración de la posesión de tierras, como puede observarse en el censo de agricultura (IBGE, 2000). En un intento por impedir que continúe el crecimiento de las ocupaciones de tierras, el gobierno ha firmado decretos provisionales para criminalizar a los sin tierra, rehusándose a adquirir tierras ocupadas por un período de dos años y negando el asentamiento a las familias que participan en ocupaciones.

Esta política ha hecho más fuertes a los terratenientes y la clase capitalista, ya que intenta terminar con las ocupaciones por medio de la criminalización, con la lucha por la reforma agraria bajo presión en la rama judicial del gobierno (Fernandes, 1997). Por otro lado, el gobierno ha conseguido, en parte, aliviarse de su responsabilidad en la reforma de las tierras comercializando la cuestión a través del Banco de la Tierra, para beneficio de los terratenientes que obtienen mayor poder de regateo sobre los trabajadores y que, de ahora en más, reciben dinero. En este sentido, el gobierno ha creado una enorme inequidad en las negociaciones políticas, puesto que en lugar de las acciones de los trabajadores y la intervención del Estado, es el mercado el que se vuelve la condición formal para el acceso a las tierras. Este proceso de asentamiento –cuyas características básicas son la ocupación de tierras, formalización de la tenencia sobre las tierras de los asentados y la adquisición de tierras a través del Banco de la Tierra– es llamado “reforma agraria” por el gobierno y los científicos que constituyen parte de su intelectualidad.

Del mismo modo en que el gobierno se apropia de conceptos e intenta transfigurarlos, también trata de dominar los espacios políticos, como en el proceso de implementación de políticas públicas. En ese espacio se producen muchas confrontaciones entre el gobierno y el MST. Lógicamente, los sin tierra buscan participar en todo el proceso. Así, las políticas generadas por el gobierno en algún aspecto del desarrollo de los asentamientos son espacios importantes a ser ocupados. Ello significa trabajar por principios, por la lucha y por la construcción de nuevas experiencias. El desafío del gobierno es impedir que los sin tierra participen de esa manera. Su objetivo es asegurar que su

programa no es políticamente apropiado para el MST. Por esta razón, el gobierno finalizó con el PROCERA (Programa Especial de Crédito para la Reforma Agraria) y Lumiar (Programa de Asistencia Técnica), que reforzaban la causa de los trabajadores. Ante la ausencia de alguna propuesta alternativa, millones de agricultores fueron dejados sin asistencia técnica.

El objetivo del gobierno es controlar la lucha de los trabajadores rurales, confinándolos a un determinado espacio político, *el espacio del capital*. La acción estratégica del gobierno es destruir los valores de las instituciones históricas como el campesinado. Las tesis desarrolladas por los intelectuales del gobierno, que proponen la integración sumisa del campesinado al capital, contribuyen a esta destrucción. Así, la expropiación de los trabajadores rurales es una consecuencia no sólo de la lógica desigual del capital sino también de las teorías que permiten la elaboración de políticas que activan este proceso. Con estas políticas, el gobierno se convierte en el principal adversario del MST.

En la confrontación entre el gobierno y el MST, los conflictos rurales se han intensificado. Este conflicto toma una forma particular. Solamente en 2000, el MST estuvo involucrado en aproximadamente ciento ochenta juicios, y diez de sus organizadores fueron asesinados. En términos de análisis cualitativo, es evidente que la violencia en las zonas rurales de Brasil está centrada en quienes luchan por las tierras y desafían el proyecto del gobierno. Esto redujo efectivamente el número de ocupaciones, una situación de la cual el gobierno se mostraba orgulloso. Pero es importante resaltar que la reducción de las ocupaciones está relacionada con la intensificación de diferentes formas de violencia y con la criminalización de los sin tierra dentro del círculo cerrado de la judicialización.

La lucha contra el capital por medio de la ocupación de tierras es una forma de resistencia para el campesinado. Con el fin de quebrarla, el gobierno intenta resolver la cuestión agraria exactamente en el terreno del enemigo: el territorio del capital. Por lo tanto, procura destruir las formas de lucha asalariadas de los sin tierra involucrándolos en la dimensión política de la lucha por la tierra. Esto comprende una exclusión política que podría resultar en la intensificación de la lucha o en la supresión de movimientos sociales en las zonas rurales, lo que terminaría por debilitar o eliminar la organización de trabajadores rurales. Además pone en cuestión, una vez más, la resistencia de los movimientos del campesinado. En varios momentos de la historia del Brasil, el gobierno y la elite han desarrollado estrategias para destruir el movimiento del campesinado. Ello fue lo que le sucedió en Canudos y con las Ligas Campesinas (da Cunha, 2002) y es lo que sucede actualmente. El campesinado es aceptado mientras permanezca sumiso.

RECUPERANDO LA TIERRA

Estos nuevos elementos de la cuestión agraria implican desafíos. Aún falta una investigación adecuada y un análisis de los problemas y atolladeros generados recientemente. Ya pasaron veinte años desde la ocupación de Encruzilhada do Natalito, cuando el MST estaba todavía en gestación (Fernandes, 2000). En la resistencia que terminó en la ruptura del cerco del coronel Curió, cómplice del general Figueiredo, ha de encontrarse el significado de la lucha del campesinado. De esta resistencia se cosecharán las experiencias y lecciones que permitirán el derrumbe de los nuevos cercos que se construyen hoy.

BIBLIOGRAFÍA

- Constituição da República Federativa do Brasil* 1990 (Brasília: Senado Federal).
- Da Cunha, Euclides 2002 *Os Sertões* (São Paulo: Abril Cultural).
- De Oliveira, Ariovaldo Umbelino 1991 *A agricultura camponesa no Brasil* (São Paulo: Contexto).
- Dataluta 1998 *Banco de Dados da Luta pela Terra: Relatório das Ocupações de Terra 1998* (Presidente Prudente: Dataluta).
- Fernandes, Bernardo Mançano 1996 *MST: Formação e Territorialização* (São Paulo: Hucitec).
- Fernandes, Bernardo Mançano 1997 "A Judicialização da Luta pela Reforma Agrária" en *GEOUSP-Revista de Pós-graduação em Geografia* (São Paulo: Departamento de Geografia da FFLCH-USP).
- Fernandes, Bernardo Mançano 1998 "Que Reforma Agrária?" en *A Questão Agrária na Virada do Século*, Vol. II, Mesas Redondas, XIV Encontro Nacional de Geografia Agrária (Presidente Prudente).
- Fernandes, Bernardo Mançano 2000 *A Formação do MST no Brasil* (Petrópolis: Vozes).
- Gasques, José Garcia y Da Conceição, Júnia Cristina P.R. 1999 *A Demanda de Terra para Reforma Agrária no Brasil* (Rio de Janeiro). En <web www.dataterra.org.br>.
- Hobsbawm, Eric 1998 *Pessoas Extraordinárias* (São Paulo: Paz e Terra).
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 2000 *Censo Agropecuário, 1995-96* (Rio de Janeiro: IBGE).
- Kautsky, Karl 1986 *A Questão Agrária* (São Paulo: Nova Cultural).
- Lenin, Vladimir Ilyich 1985 *O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia* (São Paulo: Nova Cultural).
- Martins, José de Souza 1981 *Os Camponeses e a Política no Brasil* (Petrópolis: Vozes).

BERNARDO MANÇANO FERNANDES

- Moreyra, Sérgio Paulo 1998 “As Novas Caras da Violência no Campo Brasileiro” en *Conflitos no campo-Brasil 97* (Goiânia: CPT).
- Stédile, João Pedro y Mançano Fernandes, Bernardo 1999 *Brava Gente: a Trajetória do MST e a Luta pela Terra no Brasil* (São Paulo: Fundação Perseu Abramo).
- Thompson, Edward P. 1963 *The Making of the English Working Class* (London: Penguin).

LAURO MATTEI*

**REFORMA AGRARIA EN BRASIL
BAJO EL NEOLIBERALISMO: EVALUACIÓN
Y PERSPECTIVAS**

EL TEMA DE LA PROPIEDAD DE TIERRAS en Brasil ha animado el debate de la política nacional desde el comienzo del proceso de colonización, a lo largo de varios ciclos económicos (minería, goma, azúcar y café) y hasta el presente. Sin embargo, la cuestión se vuelve más urgente en el período de posguerra con la implementación de la “modernización” agrícola basada en dos pilares: la concentración de tierras y la exclusión social de los campesinos. Este proceso ha causado profundas transformaciones en el sector y trajo consigo consecuencias ambientales y sociales adversas, principalmente debido a enormes movimientos de población que se pusieron en marcha. Los conflictos sociales contemporáneos están directamente relacionados con el modelo brasileiro de desarrollo agrícola.

En este trabajo se evalúa la experiencia de la reforma agraria bajo el neoliberalismo, y específicamente bajo las dos presidencias de F.H. Cardoso, desde 1995 a 2002. Comienza con una breve revisión histórica,

* Lauro Mattei es profesor en el Departamento de Economía, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Escribió su tesis doctoral sobre el desarrollo rural en el estado de Santa Catarina en el Instituto de Economía en UNICAMP. Ha sido investigador con RURBANO (en UNICAMP) y ha llevado a cabo amplias investigaciones sobre la cuestión agraria en Santa Catarina y Brasil.

y luego se procede a ubicar los debates contemporáneos sobre la cuestión agraria y a evaluar el reciente período de las reformas.

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE POLÍTICAS Y REFORMAS AGRARIAS

Hubo tres momentos históricos en los cuales el rol de la tierra ha sido decisivo en la formación de la economía política de Brasil. El primero fue en 1850, cuando se estableció la propiedad privada de las tierras a través de la Ley de Tierras [*Lei das Terras*] y se privó el acceso a una gran parte de la población rural. El segundo momento a través de la segunda y tercera década del último siglo, cuando el Movimiento Tenentista desafió la existencia de terrenos grandes e improductivos (*latifundios*) e introdujo los primeros debates sobre la necesidad de reformar la estructura agraria del país. La tercera fase comenzó en los años de posguerra, con el surgimiento de “Ligas Campesinas”, y ha continuado recientemente con la aparición del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra o MST (*Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*). Tales movimientos han elevado el estatus del campesinado como uno de los actores sociales más importantes en el país y afirmado la reforma agraria como un medio crucial de transformación de la sociedad brasilera.

En el primer período de posguerra, las demandas para la reforma agraria fueron reprimidas, mientras la ola de reformas agrarias que atravesó América Latina en la década del sesenta no produjo impactos en Brasil. Con la instalación del gobierno militar en 1964, los diversos gobiernos de facto que siguieron hasta 1985 no implementaron programas significantes de distribución de tierras. Su único plan fue establecer el Proyecto de Colonización Agrícola (*Colonização Agrícola*) sin éxito, cuya estrategia –establecer todos los límites del país– estaba más preocupada por la seguridad nacional que por la transformación de la estructura agraria de Brasil.

El período de “redemocratización”, iniciado en 1985, estableció una nueva Constitución con el compromiso de una reforma agraria; esto creó fuertes expectativas y reforzó los segmentos rurales de la sociedad. El gobierno de la Nueva República (1985-1989) promulgó el Primer Plan Nacional de Reforma Agraria, cuyo objetivo inicial era el establecimiento de 1,4 millones de familias en un período de cinco años. Pero al final de ese período, sólo 85 mil familias de trabajadores rurales habían sido instaladas y el éxodo rural había aumentado significativamente. Con la elección de gobierno de Collor de Mello en 1990, el objetivo indicado de asentamientos fue reducido a 500 mil familias. Es más, abolió el Ministerio de Reforma Agraria y pronto le asignó a la economía brasilera la agenda económico-política neoliberal. Como resultado, hasta

el momento de la acusación contra Collor de Mello en 1992, el programa para asentar familias rurales no fue tocado. Por esta razón, no hubo ni expropiación de tierras para la reforma agraria ni asentamiento de familias rurales. Las acciones de De Mello en esta área estuvieron realmente limitadas a la regulación de viejos acuerdos. Luego, Itamar Franco, el vicepresidente de De Mello, asumió la presidencia para completar el mandato (1993-1994). En ese lapso se formuló un programa de emergencia de reforma agraria, que planificaba el asentamiento de 80 mil familias rurales. Pero para fines de 1994, sólo unos ciento cincuenta proyectos de asentamientos habían sido emprendidos y beneficiado a no más de 23 mil familias.

Fernando Henrique Cardoso fue electo presidente a fines de 1994 por un período de cuatro años, y reelecto en 1998 para un segundo mandato, habiendo cambiado la Constitución para permitirse la continuidad. El gobierno de Cardoso definió la cuestión agraria no sólo en términos económicos sino también en términos sociales y morales. Así, su decisión dependería de la integración de los esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil, y las reformas estarían acompañadas por otros programas sociales, como el desarrollo profesional y la generación de ingresos. Además, la reforma agraria sería complementada por varios otros tipos de acciones, como la revisión de la legislación para la expropiación de tierras, la redefinición de impuestos sobre la propiedad, la urbanización de áreas rurales, un aumento en los programas para el apoyo técnico y la mejora de la infraestructura rural. Por ende, durante el primer mandato de Cardoso, la política de reforma agraria fue un problema de sustitución de la antigua cuestión agraria por una más moderna y articulada con un conjunto de políticas públicas. Los compromisos que se asumieron en el gobierno de Cardoso respecto de la distribución de tierras tomaron la forma de metas anuales: 40 mil familias en 1995, 60 mil en 1996, 80 mil en 1997, y 100 mil en 1998. De esa manera, durante su primer mandato, 280 mil familias rurales debieron haber sido asentadas, aunque ésta fue una meta extremadamente modesta teniendo en cuenta el estado de la situación agraria del país. En el segundo mandato de Cardoso (1998-2002), el cumplimiento de estas metas fue reemplazado por declaraciones amplias de una “nueva” reforma agraria. Fundamentalmente, esto significó la continuación del programa del mandato anterior, y señalaba además una reforma basada en el mercado, que coexistiría con los principios de expropiación de tierras establecidos constitucionalmente. Se pusieron en marcha, entonces, la Ley de Tierras y el Banco de Tierras.

Antes de evaluar la reforma agraria bajo los ocho años de gobierno de Cardoso, nos preguntaremos si, dada la amplitud de la urbanización y el desarrollo del sector agro-industrial, la reforma agraria es aún relevante en Brasil.

¿EXISTE AÚN UNA CUESTIÓN AGRARIA EN BRASIL?

Durante las primeras décadas de posguerra, se generó un debate intenso sobre el rol de la agricultura en el desarrollo económico del país, en el que el tema de la reforma agraria tomó un lugar especial. El debate fue guiado por figuras nacionales como Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Ignácio Rangel y Alberto Passos Guimarães, quienes conectaban conceptualmente la modernización agraria con la pobreza rural y las dinámicas de la población.

Específicamente, Furtado (1972) conectó la concentración de tierras en las zonas rurales con el mantenimiento de bajos salarios y, además, argumentó que éstos fueron una barrera para el progreso tecnológico y perpetuaron un modelo agrícola con altos costos sociales, demandantes de grandes gastos de los recursos del país. Furtado afirmó que la redistribución de los terrenos sin cultivar en Brasil era sobre todo un problema político, ya que su función principal era impedir que los trabajadores rurales tengan acceso a las tierras. Prado Júnior (1979) hizo conexiones similares, demostrando las condiciones miserables de vida y trabajo de la población rural derivada de los bajos salarios y de la ausencia de legislaciones en beneficio de sus trabajadores. Recomendó una política dual de reforma agraria, que desconcentrara la propiedad de tierras y regularizara las relaciones laborales en las grandes áreas agrícolas. Guimarães (1982), por su parte, argumentó que el monopolio de tierras era el responsable de la tardanza en la industrialización del país, y recomendó una reforma agraria que aboliera la agricultura no productiva. Finalmente, Rangel (2000) señaló que el desenredo del tradicional complejo rural en Brasil había supuesto un proceso de industrialización que no era capaz de absorber la fuerza de trabajo redistribuida. Estos autores concordaban en que la reforma agraria debería tener dos metas: el desmantelamiento de la propiedad de grandes terrenos sin cultivar, y la regulación de las relaciones laborales en las grandes áreas agrícolas. También estuvieron de acuerdo en que el obstáculo para la industrialización era la ausencia de una reforma agraria, lo cual impedía el desarrollo de un mercado interno de bienes, incluyendo los alimentos.

Luego del comienzo de los profundos cambios sociales, económicos y políticos asociados con la modernización, aparecieron nuevos temas relacionados con el rol de la reforma agraria en la sociedad contemporánea. Los trabajadores rurales y urbanos se distanciaron de las tradiciones pasadas e incorporaron nuevos valores dentro de las luchas históricas. Al mismo tiempo, la agricultura perdió su carácter artesanal y cedió a la especialización técnica progresiva en la producción, que alteró radicalmente los métodos de producción tradicionales, tanto como las relaciones laborales. Este pasaje estuvo marcado por la concentración de la propiedad de tierras, la alienación de tierras del campesinado (que carecía de

recursos para las mejoras tecnológicas de sus terrenos) y su migración a los centros urbanos en búsqueda de alternativas económicas.

Como es sabido, la modernización agrícola no constituyó un estorbo para la industrialización de Brasil, sea en términos de producción alimenticia o del sector de bienes primarios. De hecho, la agricultura fue central en la consolidación de un conjunto de relaciones económicas intersectoriales, que fueron capaces de conectar al país con el circuito de la producción global. De acuerdo a Graziano da Silva (1990), esto fue posible porque la expansión del mercado en el desarrollo de la economía capitalista no se produjo exclusivamente debido al aumento del consumo de bienes finales, sino a través del crecimiento del mercado de bienes intermedios, que era necesario para sostener el proceso de industrialización. Por otro lado, la no consolidación de un mercado de consumo masivo internamente tuvo consecuencias sociales severas, caracterizadas por los altos niveles de exclusión social. Acerca de esto, las propuestas de la reforma agraria clásica podrían haber cambiado no sólo el curso de la historia brasilera, sino también la historia de toda América Latina, por medio de la democratización de la propiedad de las tierras, gracias a una ampliación de los medios de ingresos y a una reducción de la brecha entre las clases sociales. Más recientemente, sin embargo, las políticas económicas y las crisis de la décadas del ochenta y noventa parecen haber profundizado la brecha social, con repercusiones directas en los menos capitalizados segmentos de la agricultura brasilera y con la aceleración del desplazamiento rural a los crecientes centros urbanos.

Así, la cuestión agraria reaparece en el debate nacional en un momento crítico y con protagonistas fuertemente polarizados. En 1988, se implementó una nueva Constitución Federal, que marcó la transición posdictatorial. Ello mantuvo un orden conservador e incluso revirtió elementos de la Ley de Tierras de 1964, limitando el proceso de adquisición de las tierras. Fue resultado de una feroz disputa y desentendimiento en el curso del proceso de realización de la Constitución, en el que predominó la oligarquía terrateniente. En ese momento, se constituyó la Unión Democrática Rural (UDR), con el objetivo de defender los intereses de los granjeros de gran escala y prevenir la consecución de la reforma agraria. La UDR se constituyó en un bloque con enorme poder económico y político, entre cuyos miembros se contaba casi la mitad del congreso nacional, una situación que duró hasta fines de los años noventa. Otra vez más, el país perdió una oportunidad de poner en marcha una solución duradera en el problema agrario.

En oposición a estos intereses agrarios, el MST surgió con el propósito de movilizar a los trabajadores rurales y reiniciar la lucha de la reforma agraria. En menos de veinte años, el MST se transformó en uno de los mayores movimientos sociales del país debido a su capa-

RECUPERANDO LA TIERRA

cidad organizacional, a su compromiso con los estratos menos privilegiados de la población y a su actuación tanto en áreas rurales como en centros urbanos. El poder social del MST yace en la esperanza que brinda a millones de excluidos de un cambio en sus condiciones de vida. Esto se articula con una defensa sistemática de la reforma agraria y de otras demandas sociales, y se expresa simbólicamente en la ocupación colectiva de tierras improductivas. A través de las ocupaciones, el MST ha intensificado la resistencia de los trabajadores rurales sin tierra y asegurado que la cuestión agraria se mantenga en la agenda política.

La cuestión que se debate hoy es fundamentalmente provocadora, debido a la manera en que se la formula. ¿Necesita aún Brasil instituir una reforma agraria? ¿Es la reforma agraria, a comienzos del siglo XXI, un tema pertinente para la sociedad brasilera? Es obvio que si aceptamos la existencia “del problema agrario”, entonces la respuesta es afirmativa: la reforma agraria es un factor decisivo y efectivo para cambiar el poder político rural, que se impone a través de la propiedad de tierras. Admitir que hay un problema agrario es creer sólo en una forma de solución: la alteración de la estructura agraria a través de un programa extendido de reforma, que consiste principalmente en destruir el poder de las oligarquías agrarias tradicionales, y también en reordenar el modelo de producción controlado por la red de grandes corporaciones agro-industriales. Para las organizaciones de los trabajadores rurales, la respuesta a la pregunta de si existe un “problema agrario” se demuestra en sus diferentes tipos de luchas, ocupaciones de tierras, organizaciones de asentamientos y redefinición de sistemas de producción. Sin embargo, debe reconocerse que incluso entre los trabajadores rurales, la reforma agraria ya no es una demanda exclusiva como lo era en décadas anteriores.

La controversia sobre este asunto no es menos ardua en la academia, donde varios grupos de científicos sociales afirman que la reforma agraria ha dejado de ser una demanda nacional y un instrumento decisivo capaz de cambiar el destino histórico de Brasil (Navarro, 2002). Así, argumentan que “la cuestión agraria” ha perdido su posición central en el debate del desarrollo nacional. En gran medida, estos argumentos se basan en el diagnóstico de que: (a) hay una amplia diferenciación productiva regional; (b) ha habido una reducción en el rol de la agricultura en la economía nacional; (c) el modelo agrícola corriente puede satisfacer las demandas para alimentos y materia prima; y (d) hay una urbanización en marcha de la vida rural. La conclusión es que el apoyo debería darse a una reforma agraria regional (en áreas con conflictos agrarios), capaz de responder inmediatamente a los problemas de tierra locales.

Otro grupo de investigadores ha comenzado, recientemente, a promocionar una reforma agraria de naturaleza más social que económica (Graziano da Silva, 2001). Creen que la reforma debería crear trabajos y reducir los flujos migratorios de las zonas rurales a las urbanas. En este caso, el rol de la reforma debería consistir en igualar el problema de la población del país hasta que la transición demográfica, que comenzó la década pasada, esté concluida. Para que esto suceda, las políticas de un programa agrario deberían estar orientadas menos a la producción y más a aliviar la pobreza de las poblaciones rurales que no están involucradas exclusivamente en actividades agrícolas.

El argumento desarrollado en este trabajo sostiene que en la medida en que Brasil tiene más de 90 millones de hectáreas de tierra improductiva y más de 4 millones de familias rurales sin tierra, junto con el hecho de que hay índices alarmantes de inequidad social y económica, no podemos retirar los instrumentos de la reforma agraria que, precisamente, han sido tan efectivos en la historia de muchos países que hoy se consideran “desarrollados”. En consecuencia, tanto el carácter de la reforma agraria –sea a gran escala, social o económica– como el de los instrumentos necesarios para llevarla a cabo deben continuar siendo ampliamente debatidos. No obstante, debemos tener en mente que la naturaleza de la reforma agraria es fundamentalmente política. Mientras persista el bloque de propietarios de tierras, los niveles de pobreza de la población rural se mantendrán altos, el mercado de trabajo rural escaso y los conflictos sociales rurales se intensificarán. Estos problemas, a su vez, seguirán hallando sus expresiones urbanas y agravando el panorama social de miseria y pobreza. El desafío principal consiste en construir las condiciones políticas, económicas y sociales para que todos los segmentos de trabajadores rurales puedan beneficiarse con la reforma agraria. También se trata de construir una alianza con las fuerzas urbanas en contra de los poderosos grupos de interés que no admiten la necesidad de cambios en su *statu quo*.

REFORMA AGRARIA EN EL GOBIERNO DE CARDOSO

LA CONTROVERSIAS SOBRE LAS CIFRAS DE LA REFORMA AGRARIA DE CARDOSO

El gobierno de Cardoso, en su primer mandato, se comprometió a realizar una distribución de tierras a través del cumplimiento de metas anuales, equivalentes a un total de 280 mil familias entre 1995 y 1998. Fue una meta extremadamente modesta teniendo en cuenta la extensa cantidad de los sin tierra en el país. En el segundo mandato, el gobierno de Cardoso no presentó metas para el asentamiento de familias, pero proclamó un vago programa de una “nueva” reforma agraria.

RECUPERANDO LA TIERRA

Durante esos ocho años, los brasileros se acostumbraron a un discurso diario extremadamente positivo del gobierno inherente a la realidad de la reforma agraria. Consideremos dos ejemplos clásicos:

Brasil está logrando la reforma agraria más grande del mundo. En menos de cuatro años, la administración de FHC distribuyó más de 8 millones de hectáreas de tierras y asentó a alrededor de 300 mil familias campesinas.¹

¿Qué administración ha hecho más que la nuestra por la reforma agraria? Trescientas mil familias asentadas. Si suman todo –repito– si suman todo lo que se ha hecho en Brasil, no alcanzarán esta suma. En cuatro años hemos hecho más de lo que se ha hecho en toda la historia del país.²

Los datos oficiales relevados por el gobierno durante los ocho años de gestión se muestran en la tabla 1. Observamos que durante el segundo mandato se produjo una reducción de las cifras oficiales en términos de familias asentadas y de áreas de tierras adquiridas.

Tabla 1
Familias establecidas por el gobierno de Cardoso (datos oficiales)

Año	Objetivo del gobierno	Familias establecidas	Superficie (1.000 ha.)
1995	40.000	42.912	1.313
1996	60.000	62.044	4.451
1997	80.000	81.944	4.394
1998	100.000	101.094	2.540
Subtotal	280.000	287.994	12.698
1999	–	85.226	1.478
2000	–	108.986	3.861
2001	–	63.477	1.336
Total		545.683	19.373

Fuente: MDA (Ministerio de Desarrollo Agrario) y INCRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria).

1 De la *website* del INCRA, el órgano de gobierno responsable de la ejecución del programa agrario, www.incra.gov.br.

2 Declaración del presidente Cardoso al diario *Folha de São Paulo*, 2 de julio de 1998.

Tabla 2
Comparación de datos sobre el número total de familias establecidas, 1995-2001

Año	Gobierno	INCRA	ABRA
1995	42.912	33.312	40.993
1996	62.044	19.800	18.558
1997	81.944	60.425	59.501
1998	101.094	76.027	76.027
1999	85.226	56.000	14.218
2000	108.986	39.000	24.735
2001	63.477	33.269	32.966
Total	545.683	317.833	266.998

Fuente: Datos del gobierno: Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA); datos del INCRA: Comisión Nacional de Control y Monitoreo del INCRA; datos del ABRA: Asociación Brasileña de la Reforma Agraria.

No todo lo que brilla es oro. A lo largo de los últimos meses del gobierno de Cardoso, los brasileros tomaron conciencia de la gran controversia respecto de la veracidad de la política agraria del gobierno. De acuerdo con una serie de artículos publicados en *Folha de São Paulo* (el diario más vendido del país), “el gobierno federal está incrementando las cifras de la reforma agraria utilizando proyectos de asentamientos jamás implementados, además de las tierras vacías y áreas donde no hay casas y ni siquiera una infraestructura básica para los trabajadores rurales, como agua, electricidad y sistema de alcantarillados” (*Folha de São Paulo*, 21 de abril de 2002).

Además de la prensa, el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, el órgano del gobierno responsable de la planificación) llevó a cabo un estudio de evaluación de los asentamientos en los años 1999 y 2000 (IPEA, 2001). La conclusión fue mucho más enfática, ya que el fraude pudo probarse técnicamente. En 1999, sólo 53.197 familias fueron asentadas, lo cual revela un 38% menos que el publicado por el gobierno. En el año 2000, la diferencia era aun mayor, pues sólo 36.061 familias fueron asentadas. Estas diferencias permitieron al estudio concluir que los datos de la administración de Cardoso sobre el programa de reforma agraria eran poco confiables.

Nuevos estudios surgieron subsecuentemente para corroborar el fraude. La tabla 2 compara los datos publicados por el gobierno con la información que circula en las entidades representativas de la sociedad civil; incluye movimientos sociales, agencias no gubernamentales, centros de estudios académicos y algunos órganos del gobierno. Los datos comparan el número de familias asentadas efectivamente y corroboran

RECUPERANDO LA TIERRA

que hay, en efecto, un extenso embellecimiento en la información publicada por el Ministerio de Desarrollo Agrario.

La información relevada por INCRA, el órgano de gobierno responsable de la ejecución de la reforma agraria, fue producida por la Comisión Nacional de Control y Monitoreo de la reforma agraria, creada para controlar las acciones del gobierno en todos los estados de la federación. Los primeros resultados de la comisión mostraron que la información regularmente publicada por el Ministerio y por el presidente no era confiable. Luego de un meticuloso análisis de los proyectos de la reforma agraria llevados a cabo desde 1995, la Comisión concluyó que la “capacidad de asentamiento” para el período 1995-2001 había sido de alrededor de 317 mil, lo que indica una diferencia de casi 228 mil familias, según números oficiales.

Los resultados obtenidos en un estudio por ABRA (Asociación Brasileña de la Reforma Agraria), que desarrolla un riguroso análisis de los informes anuales de INCRA, son aun más irrefutables³. En la determinación de las cifras exactas de asentamientos, ABRA, excluyó de los números oficiales: (a) aquellas familias que ya se han asentado y cuyos proyectos han sido sólo recientemente regularizados; (b) las familias de los viejos proyectos que se beneficiaron por algún tipo de acciones de gobiernos en el período relevante; y (c) las familias que estuvieron en el plan del gobierno pero que nunca se asentaron realmente. El análisis reveló que la parte más amplia de lo que el gobierno calculó como familias “asentadas” se refería en realidad a: acciones gubernamentales para regularizar las propiedades; la regularización de construcciones y servicios provistos por el gobierno para viejos asentamientos; y la regularización de propiedades que podrían haber sido usadas en el futuro para asentar a trabajadores rurales. La conclusión es que la reforma agraria de Cardoso no alcanzó ni siquiera el 50% de los números publicados.

La misma disparidad aparece también cuando se analiza el área física total que fue adquirida por el gobierno para la reforma agraria, de acuerdo con ABRA (2002). En este caso, las discrepancias aumentaron con el implante (luego de 1998) de mecanismos de mercado para la tierra. Observamos aproximadamente un 60% de diferencias entre la propaganda oficial y los números reales. La explicación a esta diferencia masiva yace en el hecho de que el gobierno incluyó en estos datos los terrenos –especialmente en el área Amazona– que ya pertenecían al gobierno federal pero que habían sido redestinados a programas de la reforma agraria.

3 ABRA (Associação Brasileira de Reforma Agrária) es una organización no gubernamental que trabaja con problemas agrarios. Su larga trayectoria histórica en la lucha por la reforma agraria ha garantizado su credibilidad en los cuestionamientos a los datos oficiales publicados.

REFORMA AGRARIA A TRAVÉS DE MECANISMOS DE MERCADO

El Banco Mundial comenzó a apoyar financieramente proyectos piloto para demostrar la eficiencia de mecanismos de mercado en la reforma agraria. En la década del noventa, algunos países de América Latina y África recibieron una considerable cantidad de recursos para el financiamiento de esos mecanismos. En la promoción de reformas asistidas por el mercado, el Banco Mundial afirmaba que las principales ventajas serían las siguientes: el mercado de tierras sería estimulado y reforzado; la burocracia estatal sería reemplazada por mecanismos más ágiles; la reforma agraria sería descentralizada; los costos de la reforma se reducirían; y los conflictos agrarios declinarían. Esos puntos aún requieren un análisis comparativo entre todos los países que han adoptado los programas. Los primeros resultados del caso específico de Brasil no parecen confirmar las proyecciones optimistas del Banco.

En Brasil, los primeros pasos hacia una reforma con base en el mercado se dieron en 1996, cuando el gobierno de Cardoso estableció una sociedad con el Banco Mundial para implementar un piloto llamado "Proyecto Piloto de Reforma Agraria y disminución de la Pobreza". Este proyecto, que se hizo conocido como "Ley de Tierra" (*Cédula da Terra*), se implementó a partir de 1997 en cinco estados federales (Ceará, Maranhão, Pernambuco, Bahía y Minas Gerais). Su método operacional consistió en extender una línea de crédito a los agricultores que tenían poco o nada de tierra y querían adquirir terrenos en forma asociativa. En términos de metas, la idea era establecer a 15 mil familias en un período de cuatro años a un costo de 150 millones de dólares. De esta suma, el Banco Mundial ofrecía 90 millones de dólares y el gobierno brasileño lo que restaba. Los términos de financiación incluyeron un período de tres años libres de intereses y, a partir de entonces, un período de veinte años de pago con un interés del 4% anual.

A fines de 2000, el Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo de 200 millones de dólares para expandir el proyecto a otros quince estados, bajo el nombre de "Proyecto I de Disminución de la Pobreza con base en la Tierra". Con este nuevo préstamo, el gobierno creó dos nuevas políticas "agrarias" para operar paralelamente con la Ley de Tierras: el Banco de Tierras (Banco da Terra) en 2000, con las mismas características del programa anterior pero ahora con la extensión de las operaciones a todo el país; y el Fondo Crediticio (*Crédito Fundiário*) en 2001, un programa de créditos rurales para asentar familias con el propósito expreso de combatir la pobreza rural. El gobierno justificó estos programas como medios para acelerar el proceso de reforma agraria y hacer menos onerosos los recursos fiscales del Estado. Además, estos mecanismos de mercado fueron presentados como capaces de repartir tierras sin conflictos sociales y disputas judiciales, y como instrumentos auxiliares para la reducción de la pobreza rural.

RECUPERANDO LA TIERRA

Dado el hecho de que son programas recientes y de que aún se están implementando, hay hasta ahora pocas evaluaciones, excepto en el caso de la primera fase de la Ley de Tierras. Si bien no intentamos expresar una opinión más concluyente sobre los nuevos programas, resumimos las evaluaciones de la Ley de Tierras conducidas en 2001 por el *Fórum Nacional de Reforma Agrária e Justiça no Campo*, una entidad que abarca varios movimientos sociales, partidos políticos y ONG (Sauer, 2001, 2002). Este estudio evaluó dieciséis áreas cubiertas por el programa en cinco estados, con el objetivo de establecer si las metas del programa se implementaban y de sonsacar opiniones a las familias asentadas sobre sus propias condiciones de vida. Aunque las familias evaluaron positivamente el hecho de poseer un terreno residencial, había un alto nivel de insatisfacción con el programa. En general, esa insatisfacción estaba relacionada con el no desembolso de recursos para la producción y para la estructura básica (agua, puentes, escuelas, centros de salud y energía eléctrica), así como también con la falta de apoyo técnico para el desarrollo de actividades agrícolas. Hasta cierto punto, uno puede afirmar que esos factores impulsan a las familias a dejar el lugar. En algunos casos, el estudio verificó que alrededor del 60% de las familias había abandonado las áreas de asentamiento.

Además, el estudio concluyó que debido a la escasa disponibilidad de recursos para cada familia –el total para cada una es de 11 mil dólares estadounidenses para la compra de tierras y la construcción de toda la infraestructura necesaria, incluyendo la de la casa, la adquisición de maquinaria, etc.–, las áreas adquiridas por ellos resultaban usualmente de baja calidad y con serias limitaciones para el desarrollo de actividades agrícolas. Esos aspectos tendrán, seguramente, un impacto negativo en la capacidad de las familias establecidas para pagar sus deudas. Además, la investigación verificó que las familias tenían poca influencia en la elección de la tierra, tarea generalmente a cargo de los órganos gubernamentales responsables de este programa. Hasta un punto considerable, esto ocurre porque los trabajadores rurales no conocen las reglas del proyecto, ni el índice del interés y ni el interés anual que deben pagar (que debería haber comenzado a pagarse en el período en que el estudio fue realizado).

Finalmente, el estudio observó que las actividades productivas de las familias no generan los suficientes ingresos como para garantizar su supervivencia. Muchas de ellas, por lo tanto, están obligadas a trabajar fuera del área de los asentamientos (esto es, en la limpieza de casas, albañilería, etc.). Por esta razón, los entrevistados afirmaron que sería difícil para ellos honrar sus compromisos, a pesar de su voluntad de pagar sus deudas. Estos hechos, combinados con la débil contribución de la adquisición de tierras con base en el mercado en el total de las adquisiciones de

tierras, nos llevan a la conclusión de que el intento por llevar a cabo una “reforma agraria” está fallando.

NEOLIBERALISMO VERSUS REFORMA AGRARIA

El proceso de liberalización de las dos últimas décadas ha desarticulado las bases económicas que habían sostenido la industrialización por sustitución de importaciones en las décadas anteriores, lo que llevó al país a un camino económico regresivo. La apertura comercial indiscriminada a la competencia internacional afectó a cientos de sectores, con impactos negativos sobre los niveles de empleo e ingresos generales. En efecto, la década del noventa marcó los índices más altos de desempleo en la historia del país. El impacto de la liberalización fue inmediatamente sentido también en el sector agrario, donde los gastos fueron recortados y el sector reestructurado para mejorar la productividad y la competitividad en los mercados externos. Además de las consecuencias intrínsecas negativas de este proceso, como veremos, la apertura del mercado se consumó en un mercado agrícola global extremadamente proteccionista, lo que se tradujo en consecuencias más negativas para varios productos brasileros, como el trigo, algodón, maíz y arroz. Mientras tanto, la habilidad del sector para responder a esos desafíos fue disminuyendo por la retirada del apoyo del Estado en la década del noventa.

La poda del apoyo estatal ha sido evidente en varias facetas de la economía, incluyendo el volumen total de recursos de créditos rurales. En la década pasada, se efectivizó una fuerte reducción en la provisión de moneda pública, ya que el Estado ha abandonado la tarea de motivar y financiar los productos agrícolas en el mercado. Al mismo tiempo, los precios de los productos agrícolas que se pagan a los agricultores han alcanzado niveles muy bajos comparados con el costo de productos utilizados en el proceso de producción. Esos hechos han contribuido a la reducción de los ingresos del sector agrícola. La reestructuración de las prioridades no ha sido menos evidente en la proporción de recursos gastados en servicios de la deuda (interna y externa). En 1999, por ejemplo, el gobierno gastó alrededor de 80 mil millones de reales en el pago de intereses, que sumaban unas setenta veces los recursos destinados a programas agrarios. Las consecuencias de esta política están reflejadas en el empeoramiento de algunos indicadores, como veremos más adelante.

En sociedades agrarias como Brasil, la distribución de las tierras es uno de los indicadores fundamentales que miden si una sociedad tiene carácter democrático o no. Así, notamos en Brasil que la concentración de las propiedades de tierras aumentó significativamente durante el proceso de modernización agrícola y continúa siendo extremadamente

RECUPERANDO LA TIERRA

desigual en la actualidad. De acuerdo con datos estadísticos oficiales, el coeficiente Gini⁴ alcanzó su valor más alto en 1975, con un nivel de 0,87. A comienzos de 1980, este valor había disminuido a 0,82, y en 1995 estaba en alrededor de 0,81. Esos indicadores le dan a Brasil otro título mundial: un país con uno de los índices de concentración de tierras más grandes del mundo.

Varios análisis han señalado el mismo problema. El trabajo de Hoffmann (1998), basado en los datos catastrales de INCRS, muestra que desde la década del noventa el problema de la concentración de tierras ha ido empeorando cada vez más, como podemos ver en la tabla 3. Los datos indican que durante la década del noventa, el proceso de concentración de tierras siguió creciendo en Brasil. Sólo en un área (centro-este) se ha mantenido el índice Gini más o menos estable. En las restantes hubo aumentos sustanciales, lo que indica que los efectos del neoliberalismo sobre la reforma agraria fueron negativos. Otras evidencias muestran que el número de agricultores que posee más de 2 mil hectáreas de tierra aumentó de aproximadamente 19 mil en 1992 a más de 27 mil en 1998. Este sector posee ahora el 43% de todas las tierras de Brasil, mientras el otro grupo, constituido por más de 1 millón de pequeñas familias agrícolas con tierras de menos de 10 hectáreas, es propietario de alrededor de un 2% de la tierra (IBGE 1998). Quizá, la evidencia más concluyente de todas proviene del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE), que indica que entre 1995 y 1998, 450 mil propiedades rurales desaparecieron. Si comparamos esto con las aproximadamente 200 mil familias reasentadas en esos cuatro años, llegamos a la conclusión de que más del doble de familias perdieron tierras que las que las ganaron a través de asentamientos. El IBGE observa, también, que en el mismo período, casi un millón de trabajos agrícolas fue eliminado, ya que la transformación estructural del sector continuó deshaciéndose del trabajo.

Ésta es hoy la paradoja de la cuestión agraria brasilera. Por un lado, el gobierno ha puesto en marcha un programa de reforma de tierra inadecuado (y exagerado groseramente sus datos oficiales). Por otro, las políticas macroeconómicas neoliberales aplicadas han cancelado las reformas agrarias, incentivando la alienación y concentración de tierras y agravando la situación de desempleo.

Varios autores están de acuerdo en que la mecanización del ciclo productivo produce la reducción del nivel total de trabajo agrario, creando una declinación en el número absoluto de trabajos agrícolas. Esto pone de relieve el hecho de que el sector agrario reestructurado es incapaz de

4 El coeficiente Gini mide la desigualdad de la distribución de ingresos u otros recursos. Varía de 0 a 1: mientras más cerca está del 0, la distribución del recurso es más equitativa; mientras más cerca está de 1, la desigualdad es mayor.

sostener un nivel alto de empleo, una cuestión que no es único en Brasil, sino que ha sido evidente en otros países que reestructuraron y realzaron la productividad y competitividad agrícolas. Se trata de transformaciones con implicaciones adversas para los trabajadores rurales que entran en un mercado de trabajo urbano aun más restringido. En el caso de Brasil, los niveles de empleo industrial se han mantenido insuficientes y, en efecto, durante los últimos años el mercado de trabajo ha tendido a absorber la fuerza de trabajo calificada, pero no a los trabajadores rurales eliminados por el neoliberalismo.

Tabla 3
Distribución de tierra para la agricultura, 1992-1998

Región	Índice Gini	
	1992	1998
Sur	0,705	0,712
Sureste	0,749	0,757
Noreste	0,792	0,811
Norte	0,849	0,851
Centro-este	0,811	0,810
Brasil	0,831	0,843

Fuente: Hoffmann, 1998.

CONCLUSIÓN

La reforma agraria supone una transformación profunda en la estructura agrícola de un país, con la finalidad de permitir el acceso democrático a la tierra y al mejoramiento de la distribución de la riqueza a la población rural. Esto no ha sucedido en Brasil. A pesar de las afirmaciones del gobierno de Cardoso de que Brasil ha experimentado la “reforma agraria más grande del mundo”, las políticas macroeconómicas neoliberales implementadas han facilitado la concentración de tierras y producido un aumento en el desempleo. Además, se ha exagerado groseramente la cantidad de asentamientos.

Bajo el gobierno de Cardoso, los intereses de los propietarios de grandes haciendas fueron bien atendidos, sea a través de políticas específicas hacia el sector o de nuevos mecanismos de mercado de reformas agrarias. Es más, si tomamos en cuenta que los asentamientos creados han sido el resultado de acciones directas de los sin tierra (ver Fernandes, pág. 335 de este volumen), entonces es muy difícil decir que ha habido

un programa de reforma agraria en Brasil. La idea más reciente de una reforma agraria asistida por el mercado tiene menos probabilidades de repartir tierras a 4,5 millones de familias rurales que están sin tierra o casi sin ella, ya que ha desplazado la responsabilidad de la reforma agraria a la sociedad y, en particular, a los agricultores que la dominan.

Debemos volver entonces a nuestra evaluación política y afirmar que la precondition para la transformación es la convergencia de fuerzas sociales rurales y urbanas. Las luchas rurales para la reforma agraria deben combinarse con luchas sociales urbanas (para lograr reformas urbanas, empleo, salarios y refugio) con suficiente fuerza social como para destruir el poder político y económico de las anticuadas oligarquías rurales brasileiras, que evitan la apertura de un nuevo horizonte de desarrollo nacional. Vista de esta manera, la lucha actual del MST es una lucha por todos los brasileiros oprimidos en pos de la construcción de un país autónomo y democrático.

BIBLIOGRAFÍA

- ABRA 2002 *A Realidade das Metas e o Fracasso da Estratégia Política do Programa de Reforma Agrária do Governo FHC* (Brasília: Associação Brasileira de Reforma Agraria).
- Furtado, Celso 1972 *Análise do Modelo Brasileiro* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Gadelha, R.M.F. 1997 "O Problema Agrário no Brasil: Evolução e Atualidade" en *Pesquisa & Debate*, 8(1), pp 87-125.
- Graziano da Silva, J. 1990 *O que é a Questão Agrária* (São Paulo: Editora Brasiliense).
- Graziano da Silva, J. 2001 "Ainda precisamos de Reforma Agrária no Brasil?" en *Ciência Hoje*, 27(170), pp 81-83.
- Guimarães, Alberto Passos 1982 *A Crise Agrária* (Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra).
- Hoffmann, R. 1998 *A Estrutura Fundiária no Brasil de Acordo com o Cadastro do INCRA: 1967-1998* (Campinas: Convênio INCRA/ UNICAMP).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 1998 *Censo Agropecuário 1995-1996* (Rio de Janeiro: IBGE, Departamento de Geografia e Estatística).
- IPEA 2001 *Transformações da Agricultura e Políticas Públicas* (Brasília: IPEA).
- Medeiros, L. 1994 "Reforma Agrária: Concepções, Controvérsias e Quesotes" en *Cadernos Temáticos* N° 1 (Rio de Janeiro: RIAD).
- Navarro, Zander 2002 "O Brasil Precisa da Reforma Agrária?" en *Muito Mais*, enero.

- Prado Júnior, Caio 1979 *A Questão Agrária no Brasil*, 2ª edição (São Paulo: Editora Brasiliense).
- Rangel, Ignácio 2000 *Questão Agrária, Industrialização e Crise Urbana* (Porto Alegre: Editora Universidade/UFRGS).
- Sampaio, P.A. 2001 "A Questão Agrária Brasileira e a Luta pelo Socialismo", inédito MS.
- Sandroni, P. 1980 *Questão Agrária e Canmpesinato* (São Paulo: Editora Polis).
- Sauer, Sergio 2001 *A Proposta de Reforma Agrária de Mercado do Banco Mundial no Brasil* (Brasília: Senado Federal).
- Sauer, Sergio 2002 *Projeto Cédula da Terra: a Reforma Agrária de Mercado no Brasil* (Brasília: Senado Federal).
- Stédile, João Pedro (ed.) 1994 *A Questão Agrária Hoje* (Porto Alegre: Editora da UFRGS).
- Teixeira, G. 2001 *A Problemática Agrária no Brasil Contemporâneo* (Brasília: Câmara Federal).
- Teixeira, G. 2002 *A Realidade das Metas e o Fracasso da Estratégia Política da Reforma Agrária do Governo FHC* (Brasília: Câmara Federal).
- <www.presidência.gov.br/publi.coleção/refagri.htm> acceso de agosto de 2002.
- <www.incra.gov.br/dados/refagrária> acceso de agosto de 2002.
- <www.ipea.gov.br> acceso de agosto de 2002.
- <www.mda.gov.br> acceso de agosto de 2002.

IGOR AMPUERO*
JAMES J. BRITAIN**

LA CUESTIÓN AGRARIA Y LA LUCHA ARMADA EN COLOMBIA

COLOMBIA ES UN PAÍS CON CRISIS ECONÓMICAS periódicas y conflictos sociales y políticos persistentes¹. Durante más de medio siglo, esta situación ha atravesado la Guerra Fría, la Alianza para el Progreso dirigida por los Estados Unidos en los primeros años de la década del sesenta, hasta el período presente marcado por el neoliberalismo y el Plan Colombia. Se ha vuelto claramente evidente, a través de todo este tiempo, que el Estado colombiano se ha mantenido parcial y localizado en su funcionamiento,

* Igor Ampuero es candidato a doctor en sociología y vive en Canadá. Nacido en Bolivia, es un estudiante del desarrollo latinoamericano, con especial interés en Colombia. Ha examinado el desarrollo socio-económico de Colombia durante dos décadas, y es una de las principales figuras en Canadá sobre temas de la situación política contemporánea del país. Actualmente investiga sobre las relaciones de los paramilitares colombianos con la producción y tráfico de narcóticos.

** James J. Brittain es candidato a doctor y catedrático en sociología en la Universidad de New Brunswick, Canadá. Su investigación está centrada en el análisis de la dinámica social y política de las FARC-EP en Colombia, y en el resurgimiento de los movimientos revolucionarios/sociales en América Latina. También investiga la relevancia contemporánea de la teoría marxista y sus aplicaciones prácticas en el hemisferio occidental.

1 Queremos expresar nuestro agradecimiento a Carly Manion por la asistencia en la investigación.

RECUPERANDO LA TIERRA

incapaz de promover el desarrollo sostenible y equitativo y de garantizar los derechos humanos de su población. Este fracaso, a su vez, ha empeorado más profundamente un conflicto interno y la “guerra sucia”, retrayendo los sectores de la población que han cargado el peso del subdesarrollo. La reciente ofensiva neoliberal y la proliferación del negocio de la droga han complicado y agravado un problema preexistente.

A pesar de estas debilidades y fracasos, el Estado colombiano no debe ser visto como un “Estado fracasado”. Ha triunfado en imponer los imperativos del capital internacional a través de su vicario local, la oligarquía nacional, que continúa dominándolo. Como tal, el Estado colombiano ha de ser visto como un instrumento poderoso del imperialismo. Esto ha sido reafirmado desde la década del ochenta por la imposición del modelo neoliberal de desarrollo en Colombia. En nombre de mejoras competitivas de mercado y eficiencia, el Estado se ha despojado de áreas estratégicas de producción, privatizando industrias básicas como el petróleo, la energía, la minería y la comunicación, mientras que, al mismo tiempo, ha abandonado sus obligaciones en áreas como educación y salud. Más que nunca, las ganancias fueron privatizadas y las pérdidas socializadas.

La fase actual de violencia interna en Colombia está íntimamente relacionada con el proceso de expansión económica inducido por la liberalización de la economía nacional. Los esfuerzos extremos del Estado colombiano para atraer y asegurar las inversiones extranjeras han fijado las condiciones estructurales de exclusión social, política y económica de la mayoría. Esta exclusión demanda que focalicemos nuestro análisis en la cuestión agraria y en el marco más amplio de la lucha rural de base para su inclusión en los procesos de desarrollo nacional.

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE COLOMBIA

Colombia tiene una larga historia de conflictos sociales y políticos, que culminan en *La Violencia* (1948-1958). Este período dejó más de 200 mil muertes y un número aun mayor de desposeídos de sus tierras y sustentos tradicionales en la producción agrícola para beneficiar a grandes propietarios (Petras y Zeitlin, 1968; Wickham-Crowley, 1991; Chaliand, 1977). Lo que surgió al “final” de *La Violencia* fue una fórmula nacional de exclusión política bajo la forma del Acuerdo del Frente Nacional (1958-1974). El Frente Nacional, con el objetivo de mantener el control político y económico sobre la mayoría de la población colombiana, estableció un “acuerdo de poder compartido”, mediante el que los partidos Liberal y Conservador alternaban un período de “cuatro años de presidencia y dividían todas los puestos gubernamentales entre ellos” (Leech, 2002: 13). A través de este arreglo político:

El Estado, bajo el Frente Nacional, inhibió cualquier expresión de conflictos sociales y excluyó a las clases subordinadas de la política [...] el Frente Nacional eliminó esta posibilidad limitando la sucesión del gobierno y con la alternancia sólo a través de miembros elegidos a dedo, convirtiéndose así en una institución con la que la clase dominante negoció y resolvió las diferencias (Richani, 2002: 25).

En este momento, Colombia es una república con presidentes electos por un período de cuatro años sin posibilidad de reelección, ya que así lo estipula la Constitución de 1991. Esta estructura política todavía continúa acompañada por opresión extrema y violencia, que dieron como resultado el desplazamiento de más de 2 millones de colombianos a manos del Estado/fuerzas paramilitares (Petras y Veltmeyer, 2003). La monopolización de la vida política por los partidos Liberal y Conservador, junto con las implicaciones destructivas del desplazamiento en términos de desarrollo socio-económico, sigue siendo una barrera clave para negociar una solución política a la violencia que continúa plagando al país. Es en esta omisión hegemónica e indirecta que muchos, dentro de las fronteras de Colombia, están negados en los procesos políticos y sus voces, mientras gritan, permanecen silenciadas.

Colombia es un país con 41 millones de habitantes. Históricamente, la agricultura empleaba a la gran mayoría de colombianos, aunque durante el período de posguerra hubo un movimiento continuo de personas que iban desde las áreas rurales a las urbanas (Chasteen, 2001). En este proceso de migración, muchos centros urbanos se han desarrollado en el país: Bogotá, con una población de 7 millones; Medellín, con 2,1 millones; Cali, con 1,9 millones; y Barranquilla, con 1,2 millones. Grandes porciones de población son forzadas a abandonar las sociedades rurales hacia la metrópolis en la búsqueda de seguridad, empleo e ingresos. La vida urbana está altamente polarizada, y sólo una pequeña porción de la población puede considerarse "clase alta". Esto se debe al hecho de que muchas personas han migrado de las áreas rurales por necesidades económicas sólo para ser recibidas con iguales y nefastas perspectivas de empleos en las ciudades. Por ejemplo, en Bogotá, la capital y la ciudad más rica del país, más de la mitad de la población vive en la pobreza (Caballero, 2004).

Los campesinos han sido vistos como disuasivos del progreso. Por ende, como Ellen Meiksins Wood ha argumentado, ha habido "presión en aumento para concentrar las tierras en manos de los propietarios y granjeros más exitosos, quienes tendrían el capital y la flexibilidad de hacer el uso más rentable de las tierras. Con esa presión, los cercamientos de tierras comunes y campos abiertos por acuerdo comunal o por intercambio entre pequeños propietarios dieron lugar a un proceso más coercitivo

RECUPERANDO LA TIERRA

de desaparición de derechos consuetudinarios, llevaron a pequeños productores a apartarse de las tierras y excluyeron a la comunidad de las regulaciones y producción (2003: 76-77).

Esta noción de desarrollo económico ha sido apoyada dentro de Colombia durante décadas por teorías como la del “desarrollo acelerado”, de Lauchlin Currie (1966). Sólo en 2002, más de 412 mil personas fueron desplazadas dentro de Colombia (LAWG, 2003). La gran mayoría vive en regiones rurales del país, y son fundamentalmente campesinos. Durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos campesinos han intentado obtener ingresos a través de la venta de su trabajo dentro de regiones rurales, pero han sido víctimas de los “programas de desarrollo acelerado” o de la violencia directa, que los obligaron a dejar sus tierras y estructuras de cooperación y propiedad. Históricamente, este modelo de acumulación primitiva y desplazamiento fue conducido por agentes contratados por los grandes propietarios y/o por militares domésticos, mientras hoy se encuentra en manos de grupos de derecha estatal/paramilitar (Leech, 1999). En tanto gran parte de la población colombiana actual rodea las áreas urbanas, la mayoría de los colombianos vivía y trabajaba en regiones rurales antes del desplazamiento iniciado durante la década del ochenta. Estudios realizados durante las décadas del sesenta y setenta mostraron que el 50% de la actividad económica del país y de la producción estaba basado en lo rural (Weil et al., 1970; Gilbert, 1974).

Aun a fines de la década del ochenta y del noventa, la agricultura continuó siendo el sector económico principal, a pesar del declive respecto de décadas anteriores; en 2000, la agricultura representaba el 19% de PBI y proveyó empleos al 30% de los trabajadores (EIU, 2003), incluyendo trabajos agrícolas y producción de cultivos campesina. Hoy, dentro de las regiones centrales del país, muchos campesinos trabajan con un método cooperativo para proveer bienes de subsistencia interna y para la construcción de un frente unificado contra los agentes represivos (Brittain, 2004). Muchos campesinos de estas regiones rurales mantienen un sistema que es bastante parecido al descrito por Marx, mediante el que “producen casi todas sus necesidades en sus propios terrenos, con la ayuda de sus familias, y obtienen sólo una pequeña fracción de los artículos que necesitan de afuera en intercambio por su propio excedente de producción”; establecen, así, el hecho de que “la familia o grupo de familias son básicamente autosuficientes” (1991: 1034). Esto no es decir que los campesinos no dependen o no están involucrados en el mercado, pero sí que algunos se apoyan mutuamente y en contra de las compulsiones del mercado.

El café ha sido históricamente, en palabras de Timothy Wickham-Crowley, un “cultivo crítico” para la existencia de Colombia (1992: 125).

Ha sido una de las exportaciones más importantes de cultivos agrícolas, representando en muchas ocasiones más de la mitad del total de ingresos por exportaciones. Sin embargo, con la liberalización del mercado y la caída de los precios del mercado mundial, se ha producido un fuerte descenso en las exportaciones de café, y llegó a alcanzar sólo un 8,2% del total de las exportaciones. Esto ha precipitado fuertes trastornos socio-económicos en las zonas rurales, ya que los dueños de las plantaciones y los trabajadores rurales han buscado reemplazar el café por un cultivo más viable y lucrativo (Agriculture and Agri-Food Canada, 2002; Mondragón, 2001). Los productos agrícolas, aparte del café, han experimentado también dificultades debido a la caída de precios de producción y al aumento de los costos del mercado (Richani, 2002), al punto de hacer insostenible la producción campesina. Dos de sus consecuencias han sido la migración a zonas urbanas y el aumento del resentimiento hacia el Estado, específicamente por la implementación de reformas neoliberales en contra de la provisión de seguridad y soberanía social y económica.

Un desplazamiento importante en la economía de Colombia ha sido el cambio de la agricultura a la extracción de recursos naturales. Las reservas de petróleo han aumentado enormemente durante las dos últimas décadas. Los sectores de recursos naturales del país se establecieron como la columna vertebral de las exportaciones económicas y son actualmente una fuente importante de divisas, ganancias y empleo doméstico: en 2000, el petróleo y el carbón alcanzaron un 41,5% del total de las exportaciones (Agriculture and Agri-Food Canada, 2002). A lo largo de los quince años pasados, a partir de la iniciativa Andina puesta en marcha por los Estados Unidos en 1989, la producción de petróleo colombiano ha aumentado casi el 80%. La mayoría de las exportaciones ha ido hacia los Estados Unidos, haciendo de Colombia el octavo suministrador extranjero más grande de petróleo crudo de ese país (Scott, 2003). El aumento de la producción petrolera ha sido apoyado económica y militarmente por las tres pasadas administraciones políticas de los Estados Unidos.

En el período 1970-1995, Colombia tuvo los índices más bajos de volatilidad macroeconómica y el índice que indica el segundo crecimiento más alto de América Latina (EIU, 2003). La crisis económica en América Latina durante la década del ochenta, conocida como la “década perdida”, no pareció tener grandes efectos en Colombia (Chasteen, 2001). La liberalización económica comenzó en Colombia a principios de la década del noventa, bajo la dirección de Instituciones Financieras Internacionales (IFI), en un esfuerzo por estimular el crecimiento económico. Las IFI expresaron la necesidad del gobierno colombiano de liberalizar la economía, implementado reformas sociales y económicas, reduciendo impuestos de importación, desregularizando las finanzas y aplicando

RECUPERANDO LA TIERRA

índices de intercambio extranjero para un mercado mas “amigable”. Últimamente, las telecomunicaciones, la energía, el turismo, los servicios financieros y los sectores de contabilidad y auditoría han estado o se están convirtiendo en las áreas principales de la liberalización. Entre 1998 y 1999, la economía colombiana entró en un período de receso, atribuido principalmente a los impactos externos, seguido de los esfuerzos de ajustes monetarios que apuntan a detener el índice de inflación que había sido incentivado por la devaluación de la moneda y el deterioro general de las finanzas públicas (EIU, 2003). Sin embargo, a principios de 2000, la economía colombiana comenzó a mostrar signos de recuero, asistida en gran medida por las exportaciones y, en particular, por el aumento del sector del petróleo, que es el destino principal de las inversiones extranjeras directas.

La liberalización y el crecimiento del sector del petróleo han estado acompañados por el apoyo económico, político y militar de los Estados Unidos, dentro de la estructura del “Plan Colombia”, iniciado por la administración de Clinton a fines de la década del noventa. El Plan Colombia fue un paquete de 1.300 millones que intentaba, en palabras del embajador estadounidense en Bogotá (2000):

Satisfacer las necesidades que las otras fuentes no pueden. Está basado en la esperanza compartida de lograr la paz y prosperidad en Colombia, a través de la reducción general de la producción de drogas ilícitas y su tráfico, y en permitir que el gobierno de Colombia establezca un control democrático y provea servicios e infraestructura a todo su territorio.

De hecho, el Plan Colombia ha sido el heredero del legado de Kennedy, la “Alianza para el Progreso”, combinando ayuda económica y militar dentro de una geoestrategia altamente militarizada de acumulación y control. En su presente reencarnación, esta estrategia imperialista ha desplegado el lenguaje de una “guerra contra las drogas y el terror”.

El principal socio comercial de Colombia siguen siendo los Estados Unidos. En 1999, las exportaciones de Colombia a ese país sumaron un 48% del total de las exportaciones, y las importaciones desde los Estados Unidos alcanzaron el 42,5% del total. Esta fuerte relación económica ha sido reforzada por el aumento de producción de petróleo en Colombia, cuyo 80% es directamente enviado a los Estados Unidos, y por un clima cada vez más favorable que atrae al FDI (Inversión Extranjera Directa) (Scott, 2003). Solamente los Estados Unidos dan cuenta de alrededor de un cuarto del total de FDI de Colombia, y la gran mayoría está siendo canalizada al creciente sector del petróleo. Otros importantes socios económicos son la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones (Banco de la República Colombia, 2003a, 2003b).

LA ECONOMÍA POLÍTICA AGRARIA

Mientras el sector agrícola colombiano ha jugado históricamente un papel clave en el desarrollo económico del país, también ha sido fuente de una extensa desintegración social, debido a las desigualdades estructurales que caracterizan su funcionamiento. El resultado ha sido la persistencia del conflicto sobre la propiedad de tierras y el acceso a los derechos entre los habitantes rurales durante casi ocho décadas. El Estado ha sido, y continúa siendo, un agente clave en el mantenimiento de la desigualdad estructural, específicamente al proteger y asegurar los intereses económicos de grandes propietarios y de negocios extranjeros, e impulsando la exclusión de trabajadores rurales y pequeños propietarios en todo el país.

Fue luego de *La Violencia* que el Estado se dio cuenta de que la oposición en aumento comenzaba a surgir en todas las regiones rurales del país con el potencial para desestabilizar el sistema político posterior a *La Violencia*. La reforma agraria fue uno de los medios para acabar con la oposición. Como observó David Bushnell:

La Violencia había revelado ampliamente la patología de gran parte de la vida rural en Colombia, que abarcaba los conflictos sobre las tierras en ciertas áreas rurales y el estado general de privaciones y falta de educación de las masas rurales, haciéndolas vulnerables a la manipulación política asesina. Por ende, la reforma agraria pareció ofrecer los medios para reparar algunos de los daños y crear una clase campesina fuerte, próspera, que resistiría los llamados futuros de locura partisana (1993: 232).

Así, en 1961, el Estado decidió promulgar la ley 135 (Ley de la Reforma Agraria Social) acompañada por la formación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). INCORA fue un cuerpo políticamente organizado y formado que autorizaba “la expropiación inmediata de haciendas privadas, si fuere necesario, para la redistribución entre aquellos que tienen insuficiente tierra o no la tienen” (Bushnell, 1993: 232). Sin embargo, el Estado se mostró en gran medida poco efectivo en la implementación de los cambios socialmente beneficiosos del programa de reforma agraria (Lindqvist, 1979). Así, “hacia 1971, fue distribuido menos del 1% de las tierras sujetas a expropiación, y la mayoría de las tierras eran públicas”; es más, “el fracaso institucional exacerbaba los conflictos por las tierras”, ya que el Estado y la ley 135 “no proveían un mecanismo eficiente de redistribución de tierras”, e “INCORA [no era capaz] de arreglárselas con las demandas cada vez mayores de tierras” (Richani, 2002: 28–31). Es de este fracaso que surgieron los movimientos de campesinos organizados (FARC-EP, 1999; Molano, 2000).

Como resultado de estos simbólicos programas de reforma, junto con los efectos del desplazamiento, la situación agraria y de las tierras es hoy

vastamente desigual. En un país donde 14 millones de hectáreas de tierra son consideradas adecuadas para la agricultura (comprenden cerca del 13% del área total del país), el 45% de esta tierra productiva está apropiada por un 0,3% de la población, con otro 20% de la tierra apropiada por el 2% de la población. Esto deja como resultado que el restante 97% de la población colombiana tenga acceso al 35% de las tierras agrícolas (Cortez, 2002). Son estadísticas recientes y parecen no reflejar los logros de la lucha de medio siglo por, entre otras cosas, la reforma agraria en Colombia.

No obstante, una cantidad importante de la población se mantiene con la producción agrícola, para el mercado y/o la subsistencia. Mientras los desplazamientos y las reformas neoliberales han debilitado los productos tradicionales como la yuca, el café y el maíz (Clawson y Lee III, 1998; Richani, 2002), muchos campesinos y pequeños propietarios han tomado también el cultivo de coca para mantener cierto nivel de subsistencia. La producción agrícola ilícita se ha desarrollado en muchas regiones de Colombia durante las pasadas tres décadas, pero desde la década del noventa, la producción de la planta de coca de los pequeños propietarios ha proliferado. Algunos de estos cultivadores, que son muy pobres y campesinos que viven principalmente gracias a la agricultura de subsistencia, establecen un pequeño terreno para cultivar coca junto con sus cultivos familiares (yuca, limón, maíz) y luego de un año podrán hacer más de lo que habrían podido lograr con un cultivo alternativo en el mercado legal. Una parte de estos agricultores vive en regiones donde operan las FARC-EP, y allí, la insurgencia es capaz de proteger a los pequeños propietarios y campesinos de las fuerzas paramilitares que se financian a través de la producción, procesado y tráfico de cocaína, heroína y marihuana (Richani 2002; Scott, 2003). Sin embargo, esto no es lo que informan comúnmente las fuentes periodísticas, que afirman que las FARC-EP están involucradas en la producción de drogas (de aquí los términos de “narco-guerrilla” o “narco-terrorismo”). Por el contrario, las FARC-EP, en toda su extensión geográfica, sólo se involucran en el 2,5% de la producción de droga campesina (Scott, 2003). Esta participación no se produce en el tráfico o contrabando, sino en las medidas para asegurar el pago justo al campesinado y evitar que se lo prive de los ingresos por los compradores de hojas. En este proceso de equidad y protección, las FARC-EP reciben un impuesto de las ganancias de los campesinos (aunque los campesinos más pobres están exentos de pagar el impuesto) en forma de dinero, animales o fruta (Richani, 2002; Clawson y Lee III, 1998; Galvis, 2000).

Las relaciones de género en la economía política rural de Colombia son otro aspecto importante de análisis. En Colombia, como en otros lugares, las mujeres son principalmente responsables de la reproducción del hogar. Esta responsabilidad tiene muchas dimensiones, que han sido previamente exploradas y desarrolladas en la literatura feminista y

desarrollista (Pearson, 1992; Sachs, 1996; Parpart, 2000). En Colombia, el *machismo*, en particular la marginalización de las mujeres en el acceso a los recursos de producción y reproducción, ha sido sistemáticamente reforzado por políticas de Estado y la liberalización económica. Las mujeres superan en Colombia el 30% de los jefes de hogar y componen el sector más pobre de campesinos y trabajadores. A pesar de ello, bajo la suposición de que el jefe de hogar es típicamente hombre, el Estado les ha negado sistemáticamente el título de tierras y el acceso a créditos. Es más, el proceso combinado de liberalización y conflicto armado ha aumentado enormemente la carga de reproducción social y, consecuentemente, el trabajo no asalariado de la mujer. Específicamente, la liberalización ha socavado los ingresos de los pequeños propietarios, empleos y salarios no relacionados con la agricultura, mientras el conflicto armado ha implicado la pérdida del sustento de forma directa por el desplazamiento forzado de miles de familias, particularmente en las regiones del sudeste donde se planta coca y donde se rocía el cultivo de coca desde el aire. Otra vez, el resultado de tales procesos es la dislocación en aumento y la indignación contra el Estado.

El desplazamiento forzado y la “guerra de la droga” han dejado indigentes a familias enteras económica y socialmente, cuyos efectos más severos han recaído sobre las mujeres. Las razones económicas inmediatas tienen que lidiar con problemas obvios de alimentación, seguridad y vivienda; además, estos problemas están acompañados por problemas psicológicos relacionados con la pérdida de estabilidad, problemas de sostenimiento familiar y largos períodos de miedo inexorable por el temor a la pérdida del esposo y/o algún otro miembro de la familia (Galvis, 2000). La reparación de esta problemática demanda programas de reforma agraria que incluyan al género y la redirección de fondos públicos hacia el reforzamiento del envío de servicios sociales por parte del Estado colombiano, como educación, cuidado de la salud y seguros de desempleo.

LA ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS FARC-EP

El monopolio político establecido por la coalición nacional entre los partidos Liberal y Conservador en el período posterior de *La Violencia* ha dejado un legado de represión, violencia y sistemática desconfianza entre gobernantes y gobernados. Es en este contexto que debe ser entendida la lucha por las tierras en Colombia. En esta sección se discute el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) y su base social; en la próxima sección se tratará acerca de su estrategia y táctica política.

Las FARC-EP representan una lucha rural y campesina de gran escala, que ha surgido dentro de una amplia lucha por el acceso a las tierras productivas y por una transformación sociopolítica. Fundada en 1964, las

RECUPERANDO LA TIERRA

FARC-EP son un movimiento de guerrilla móvil que ha utilizado constantemente tácticas de acción directa, y se ha convertido en el movimiento más persistente y antiimperialista de América Latina y en la más potente de todas las insurgencias del continente (Rochlin, 2003; Veltmeyer y Petras, 2002; Fisher y Ponniah, 2003; Carr y Ellner, 1993; FARC-EP, 1999). Las FARC-EP ocupan casi dos tercios de todos los municipios de Colombia (Leech, 2002) y continúan desarrollando extensivos vínculos en todas las regiones urbanas y rurales del país (Richani, 2002). Lo central del mandato de las FARC-EP es la protección y defensa de los asentamientos del campesinado contra los grandes propietarios y paramilitares. Las fuerzas paramilitares funcionan en connivencia con el gobierno nacional y las fuerzas armadas, muchas de las cuales han sido entrenadas en la Escuela de las Américas en Fuerte Benning, Georgia (renombrado Instituto para la Cooperación de la Seguridad del Hemisferio Occidental).

El antecesor de las FARC-EP fue un importante y progresista movimiento campesino, que vio a los campesinos y a otros colombianos conscientes para organizarse en comunidades a fin de establecer estructuras comunales de cooperación y seguridad (Petras y Zeitlin, 1968). Las comunidades avanzaron y se expandieron a través de toda Colombia a fines de la década del cincuenta y principios de la del sesenta, y establecieron dieciséis comunidades hasta que recibieron una intervención directa militar en 1964 (Petras y Morley, 1990; Osterling, 1989). Desde el comienzo, por lo tanto, las FARC-EP estuvieron organizadas alrededor de una plataforma agraria campesina enfrentada a la opresión política extrema.

En sus comienzos, en 1964, las FARC fueron principalmente un movimiento basado en el campesinado, integrado por agricultores de subsistencia en Marquetalia, una región relativamente subdesarrollada de Colombia (Osterling, 1989). El objetivo de las FARC-EP era “establecer una sociedad estable, no corrupta y basada en el control local, y una nueva propuesta para contrarrestar al gobierno central represivo, extendiendo la región a otras áreas” (Petras y Zeitlin, 1968: 335; ver también Gott, 1970). Sin embargo, desde las cuatro décadas desde su comienzo, las FARC-EP han desarrollado una plataforma compleja que intenta abordar una plétora de temas políticos, sociales y económicos críticos. Esos temas existen como hilos que se han enredado cada vez más en un nudo de conflictos de clase, represión estatal, violencia brutal y extrema desigualdad y pobreza socio-económica. La constitución actual de la organización continúa incluyendo agricultores de subsistencia, pero ha crecido para incluir a campesinos, trabajadores rurales sin tierra desplazados y también a una sección de trabajadores urbanos (FARC-EP 2003b).

Las FARC-EP, como “ejército popular”, necesariamente incluyen hombres y mujeres, en una cada vez mayor igualdad de términos. En tanto la mayoría de la fuerza de guerrilla móvil está compuesta por hombres, las

mujeres juegan un rol sustancial dentro de la insurgencia. En el momento del ataque inicial en Marquetalia, que llevó a la formación de las FARC-EP, entre los cuarenta y ocho guerrilleros había dos mujeres (FARC-EP, 1999, 2000/2001; Richani, 2002). Desde la década del sesenta, las FARC-EP no han dejado de construir la igualdad de género dentro de la organización. Durante la década del setenta, el número de mujeres involucradas en el movimiento llegó a un 20% (Richani, 2002). Se estima que en la década del noventa, el número de mujeres dentro de la organización superó el 30%; ahora está en un 40%, aproximadamente (Roman, 2000; Leech, 2003; FARC-EP, 2001). En comparación, la proporción de mujeres en el gobierno colombiano (Congreso) es de un 12,6% (Córdoba Ruiz, 2002), mientras que el ejército nacional sólo mantiene un contingente de 2% de mujeres (Penhaul, 2001). En la insurgencia, las mujeres juegan un rol clave en los esfuerzos por politizar el movimiento a través de la responsabilidad de la comunicación y la educación. También, junto con los hombres, llevan “las cuentas, son cocineras, obtienen fondos, son especialistas en logística, médicas, o reclutadoras que pueden tener sólo un rol pasivo” (Hudson 2002: 18-19). Podemos concluir, entonces, que mientras las dinámicas de la pobreza y la violencia afectan a las mujeres y a los hombres de diferente manera, mujeres y hombres se unen en las FARC-EP con un espíritu de solidaridad en favor de la defensa de la reforma agraria y de la transformación socio-política, en contra de la hegemonía de las elites y los hombres de negocios nacionales e internacionales.

En las áreas bajo su control, las FARC-EP han estado promoviendo activamente un modelo socio-económico y político diferente. En el ámbito del desarrollo económico y social, la organización ha establecido un arreglo económicamente beneficioso y democrático para reinvertir en las comunidades en las que están involucradas, estableciendo sistemas de créditos agrarios para que los agricultores puedan tener la capacidad de establecer un producto capaz de proveer sustento a la comunidad (Rochlin, 2003). En efecto, mientras las FARC-EP no apoyaban la producción de coca han permitido que los campesinos se beneficiaran financieramente, tanto en los mercados domésticos (a través de precios justos para las mercancías) como en el mercado internacional. En el área de la salud, las FARC-EP (con el apoyo de hospitales y farmacias) han llevado a cabo campañas de vacunación masiva para 20 mil niños y adultos (FARC-EP, 2001). Las FARC-EP han construido caminos e infraestructura para facilitar la entrega de servicios al público y también diseñan una salida para los bienes y productos de la región para la venta y el intercambio.

En el ámbito del gobierno local, las FARC-EP han quitado los modelos de justicia jerárquicos y piramidales y establecieron reuniones organizadas por la comunidad para juzgar a aquellas personas que han sido acusadas de mala conducta. Como Richani (2002: 89) ha mostrado, las

RECUPERANDO LA TIERRA

FARC-EP, con la ayuda de las comunidades, han implementado Reglas de Convivencia, que son las “leyes y sanciones” en cuanto a temas como la violencia en el hogar, uso de drogas y destrucción del medio ambiente. En muchas regiones del país, como Nazih Richani ha indicado:

El poder de las guerrillas es ejercido a través de la elección de concejales y alcaldes municipales y del desembolso de fondos públicos. De acuerdo con algunos testimonios, las FARC no imponen candidatos sino que, como en los casos de las elecciones municipales de 1998 en Yondo, Cantagallo y San Pablo (todas en Magdalena Media), se organizaron cabildos donde los candidatos eran elegidos libremente y luego se llevaba a cabo una elección general (2002: 89).

Hoy, más del 93% de todas las “regiones de asentamiento reciente” en Colombia tiene presencia guerrillera, asegurando así su crecimiento continuo (Bergquist et al., 2003: 15). La insurgencia está localizada actualmente en más de seiscientos veintidós municipios de un total de mil setenta y uno (Leech, 2002). Desde 1999, las FARC-EP han tenido presencia en más del 60% del país (Vanden y Prevost, 2002) y siguen expandiéndose en forma constante. Además, durante los últimos años, muchas personas han migrado a las regiones del FARC-EP, con la certeza de que estarán protegidas y serán capaces de expandir y exportar sus cultivos libremente (Wilson, 2003). En solo un año (2000), más de 20 mil personas migraron a las FARC-EP de Villa Nueva Colombia (FARC-EP, 2000/2001).

Militarmente, las FARC-EP están organizadas en una cadena de comandos. El Secretariado del Estado Mayor General Central está compuesto por siete miembros: Manual Marulanda Vélez, Raúl Reyes, Iván Márquez, Jorge Briceño, Timoleón Jiménez, Alfonso Cano e Iván Ríos. El Estado Mayor General Central tiene veinticinco miembros de todo el país organizados en siete bloques: Este, Oeste, Sur, Centro, Medio de Magdalena, Caribe y César (Richani, 2002; FARC-EP, 2001). Dentro de estos bloques hay más de cien frentes, que alcanzan un promedio de trescientos a seiscientos soldados cada uno. En 2002, se estimó que había más de ciento cinco frentes en toda Colombia (Crandall, 2002: 62; Bergquist et al., 2003: 15); más datos recolectados (por el autor) en diciembre de 2003 sugieren que hay posiblemente varias docenas más de frentes, es decir que llegarían a los ciento sesenta y cinco aproximadamente.

El apoyo externo para las FARC-EP (fuera de las fuerzas de combate) se ha hecho bastante amplio. Si bien es difícil referirse a un número exacto, ya que muchos colombianos viven con miedo a que sus comunidades sean blanco u objetivo de paramilitares, algunas cifras estiman que cerca del millón de colombianos (rurales y urbanos) apoyan directamente a las FARC-EP, en tanto otros números indican que son varios millones (Petras y Veltmeyer, 2001; FARC-EP, 2001).

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA LUCHA ARMADA

La lucha por las tierras en Colombia enfrenta y busca abordar problemas políticos, económicos y sociales. Esos problemas son principalmente atribuibles a la marginación socio-política de la población rural, al crecimiento descontrolado de la pobreza rural, a la pérdida de posibilidades de sustento y a los actos de terrorismo sancionados/patrocinados por el Estado contra la ciudadanía rural comprometida (o sospechada de apoyar a) con la lucha armada de las FARC-EP (Leech, 2002; Scott, 2003; FARC-EP, 1999).

Los objetivos emancipatorios de las FARC-EP han nacido siempre de imperativos asociados con el logro de una solución de los problemas sociales y económicos del país (Pearce, 1990). De esta manera, los objetivos de la lucha popular han sido y continúan siendo guiados por la creencia de que una transformación estructural antisistémica de naturaleza revolucionaria es la única manera efectiva de mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los ciudadanos colombianos (FARC-EP, 2000). En ese contexto, entonces, el desmantelamiento del poder atrincherado de las estructuras e instituciones que protegen los intereses de las elites domésticas es percibido como uno de los elementos, y uno crucial, de la transformación radical demandada por las FARC-EP.

Es más, lo que comenzó principalmente como una lucha por las tierras de base rural y campesina en la década del cincuenta se ha convertido en un movimiento nacional político que posee una visión alternativa de cómo facilitar el logro de objetivos de desarrollo moderno (Ortiz, 2002; FARC-EP 2000; Pearce, 1990; Brittain, 2004). No obstante, debe también reconocerse que a través de la evolución del movimiento, el compromiso de la organización con la reforma agraria ha vacilado. Intrincadamente conectado con los objetivos socio-políticos de las FARC-EP, la reforma agraria genuina es percibida como dependiente de la abolición de la oligarquía colombiana que, durante siglos, dominó la vida política, social y económica del país.

Tres documentos importantes bosquejan las luchas estratégicas de las FARC-EP. Esos documentos son: (a) el Programa Agrario, (b) los Acuerdos Uribe, y (c) la Plataforma por un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional.

EL PROGRAMA AGRARIO

El Programa Agrario de las FARC-EP fue proclamado el 20 de julio de 1964, en medio de la lucha armada de Marquetalia, y fue subsecuentemente revisado y ampliado durante la Séptima Conferencia Nacional de la Organización, en abril de 1993. Estos programas se han convertido en la “bandera de lucha del movimiento revolucionario y especialmente de las guerrillas revolucionarias” (FARC-EP, 1999: 18). El objetivo general

RECUPERANDO LA TIERRA

de este programa es aumentar la calidad de vida material y cultural de todo el campesinado. Los imperativos de lograr de este objetivo incluyen la eliminación del desempleo, del hambre y del analfabetismo. Dentro de esta visión, la liberación del campesinado de las cadenas del sistema de latifundio sigue siendo una meta central, junto con la promoción del desarrollo de la producción agrícola e industrial. Las FARC-EP están llamando principalmente a la confiscación de grandes propiedades para el beneficio de todos los trabajadores (FARC-EP, 1993).

La segunda característica del Programa Agrario es que todos los agricultores, ocupantes, rentistas, aparceros, inquilinos y peones de los grandes latifundios y tierras del Estado han de recibir títulos de propiedad de las tierras que explotan. Además, los sistemas de aparcería, insostenibles y destructivas formas de uso de tierras, y de alquiler (en dinero o especies) han de ser eliminados. Todas las deudas de los campesinos a usureros, especuladores y a instituciones de crédito oficiales y semioficiales deben ser anuladas. Nuevos sistemas de crédito deben ser establecidos por la insurgencia con facilidades de pago, provisión de asistencia técnica, recursos agrícolas como semillas, herramientas, sistemas de equipamiento y riego, todas las cuales ya han sido distribuidas a los campesinos por las FARC-EP (Rochlin, 2003; Richani, 2002). Estos servicios deben ser ofrecidos tanto a campesinos individuales como a cooperativas que puedan surgir durante el proceso de reforma agraria.

El Programa Agrario también requiere provisiones especiales para el establecimiento y el mantenimiento de servicios adecuados de cuidados de la salud y educativos para el campesinado. Los problemas de instalaciones para el cuidado de la salud y el analfabetismo rural son vistos como áreas de prioridad que necesitan mejoramiento. Las FARC-EP también buscan la total erradicación del analfabetismo y la implementación de un sistema de escolarización basado en el mérito y en las necesidades de los niños que trabajan la tierra. Un gran esquema de viviendas para el campesinado también está incluido en el Programa, con el objetivo de asegurar los derechos de toda la gente a un refugio adecuado. Finalmente, las mejoras masivas en los sistemas de comunicación en las áreas rurales también son una exigencia, y esto incluye la provisión de educación técnica a todas las personas, de modo de aumentar los estándares de las áreas rurales y de los pobres y de alcanzar un nivel semejante al de las clases más altas y las regiones urbanas. Actualmente, uno de cada ocho colombianos tiene acceso al teléfono (y uno de cuarenta tiene acceso a la computadora), y este acceso está obviamente concentrado en los estratos más ricos de la sociedad, ubicados en las zonas urbanas más grandes.

Todos los cambios presentados en el programa mencionado han sido discutidos o implementados dentro de los limitados medios y recursos de las FARC-EP. De los ingresos que la organización recauda,

“la mayor parte del dinero se dirige a inversiones en proyectos públicos como escuelas vocacionales, pavimentos de calles, salud pública y protección del medio ambiente” (Richani, 2002: 80). En relación con estas actividades, otra parte de los ingresos es distribuida para la construcción y ampliación de infraestructura (construcción de rutas de transporte modernas, métodos alternativos para el comercio, etcétera).

Respecto de las condiciones y demandas singulares de las comunidades indígenas en las zonas rurales de Colombia, el Programa Agrario especifica explícitamente que algunos grupos serán provistos también con suficientes tierras para el desarrollo. Mientras que las comunidades indígenas gozan de todos los beneficios de la política agraria revolucionaria, el establecimiento de organizaciones indígenas autónomas dentro de estas comunidades será apoyado por las FARC-EP, en un genuino respeto por sus consejos comunales, formas de vida, cultura, lengua y organización interna (FARC-EP, 1999). Con esta política, las FARC-EP apuntan a mejorar su relación con muchas comunidades indígenas dentro de Colombia y comienza un compromiso pacífico y saludable para el reconocimiento cultural que ha sido negado por los movimientos políticos y armados del pasado.

Finalmente, el Programa Agrario requiere que se formen sólidas organizaciones campesinas (sindicatos, comités de usuarios de tierras y vecinos). Es percibido como esencial que la lucha debe representar el frente unido más amplio de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país, para llevar a cabo un proceso permanente de transformación contra la oligarquía nacional y sus patrones imperialistas.

LOS ACUERDOS URIBE

Las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) han expresado el deseo de las FARC-EP de encontrar una solución pacífica y socialmente benéfica para los problemas de Colombia. Durante el segundo año del mandato de Betancur comenzaron las discusiones entre el gobierno y las FARC-EP con este horizonte, y en la primavera de 1984 los dos partidos concluyeron sus conversaciones con los Acuerdos Uribe (FARC-EP, 1999; Dudley, 2004).

Los Acuerdos Uribe representan la estrategia de once puntos para el reforzamiento del proceso de construcción de la paz nacional y la facilitación de un proceso de desarrollo sustentable social y económico, y se basan en una fundación sólida de libertad y justicia para todos los colombianos (Arenas, 1985). Esencialmente, estos acuerdos bosquejan las condiciones que deben estar en su lugar con el fin de asegurar un genuino cese de fuego por parte de *ambos*, tanto de los movimientos guerrilleros como de aquellos grupos (Ejército Nacional y otras organizaciones paramilitares) que se mantienen dentro de la jurisdicción del

RECUPERANDO LA TIERRA

Estado colombiano. Las FARC-EP acordaron que un cese del fuego era un medio positivo para comenzar las discusiones entre las dos fuerzas opuestas, bajo el entendimiento de que el gobierno implementaría, por medio de actos legislativos, una serie de reformas políticas, económicas y sociales, y que las FARC-EP, por su parte, tolerarían ese período de tiempo para la implementación de las reformas y para una búsqueda de soluciones políticas permanentes (FARC-EP, 1999). Los acuerdos previeron la creación de un espacio político para el establecimiento de una Comisión de Paz que asegurara la realización de las obligaciones del gobierno bajo los Acuerdos. Estas obligaciones incluyeron la modernización de las instituciones políticas, la rápida implementación de reformas políticas y el establecimiento de la reforma agraria. Como tal, Betancur y el gobierno “reconocieron que la violencia de la guerrilla era el producto de las condiciones sociales reales y entendieron la relaciones entre esas condiciones y las demandas de los insurgentes” (Meza, 1998: 24). El gobierno también comprendió la necesidad de involucrar a múltiples agencias del Estado en los procesos apuntados hacia la ampliación permanente de servicios para el campesinado, con el fin de mejorar su calidad de vida y la producción normal de alimentos y materias primas para la industria.

El resultado de los Acuerdos Uribe fue lo contrario de los anuncios originales. En noviembre de 1985, comenzó un proceso inverso. Las FARC-EP empezaron a recibir un fuerte apoyo para sus políticas bajo los Acuerdos (Osterling, 1989), ampliaron sus alianzas para incluir sindicalistas, organizadores campesinos y otros colombianos, y decidieron facilitar la formación de la Unión Patriótica (UP) (Dudley, 2004; Aldana, 2002). A su vez, esto amenazó con convertirse en un instrumento viable para la reforma política dentro del país. En 1986, la UP participó en las elecciones en varios niveles del gobierno y eligieron más de trescientos cincuenta concejales municipales, veintitrés diputados, trece intendentes, nueve miembros del parlamento y seis senadores para el Congreso de la República, lo que demostró el potencial de una alianza amplia y efectiva. La UP también participó en las elecciones presidenciales, obteniendo 350 mil votos, algo inédito en la historia de la izquierda en Colombia. En sus primeros siete meses, este joven movimiento político superó en un 300% los esfuerzos de toda la izquierda colombiana y se estableció como el núcleo de una alternativa política al oponerse al monopolio partidario Liberal-Conservador (FARC-EP, 1999; Dudley, 2004).

La oligarquía estaba muy preocupada. En efecto, a pesar de los Acuerdos Uribe, los grandes propietarios mejoraron el proceso de militarización a través del empleo de organizaciones paramilitares (Bergquist et al., 2003). Durante el mismo período, los militares se

preocuparon por la demasiada libertad que les estaba permitiendo el gobierno a la ideología y a las alianzas de las FARC-EP. Fue en este contexto de miedo y desconfianza que los grupos paramilitares se volvieron hacia el “blanco fácil –colombianos que se habían unido a la Unión Patriótica–” (Kirk, 2003: 117). Las “organizaciones paramilitares estaban socavando el proceso de paz de Betancur con la intensificación de su ‘Guerra Sucia’ contra los que se sospechaba que eran izquierdistas, especialmente contra los miembros de la Unión Patriótica” (Leech, 2002: 20). El resultado fue la numerosa cantidad de senadores, diputados, concejales, intendentes y 5 mil de sus militantes asesinados, y el abandono del proceso por la paz (Galvis, 2000; FARC-EP 2000; Aldana, 2002).

Resulta importante destacar que la administración de Reagan, que gobernaba en el momento de estos asesinatos, estaba fuertemente en contra del gobierno de Betancur y de sus métodos de negociación de cese del fuego con las FARC-EP (Scott, 2003). Aunque el gobierno de los Estados Unidos nunca fue identificado como involucrado en los crímenes, más tarde se revelaría que, luego de 1984, la Escuela de las Américas de los Estados Unidos de América, ubicada en el estado de Georgia, había estado entrenando soldados colombianos en operaciones de contrainsurgencia (Weeks y Gunson, 1991), entre los cuales, más de ciento cincuenta estuvieron implicados en abusos a los derechos humanos (Leech, 2002).

LA PLATAFORMA POR UN GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

Desde el abandono de los Acuerdos Uribe, las FARC-EP han desarrollado una estrategia amplia con el fin de facilitar el establecimiento de un Estado colombiano dedicado e instituido bajo los principios del pluralismo, la justicia y la democracia. Esta estrategia es conocida como la Plataforma por un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional (1993) y sigue siendo una dimensión clave de los esfuerzos político-militares de las FARC-EP de hoy. La plataforma entiende que hasta que no haya una solución política para la crisis colombiana en todas sus manifestaciones, la paz, la estabilidad social y la prosperidad económica se mantendrán esquivas.

Específicamente, la plataforma requiere un gobierno de reconciliación nacional con tareas concretas. Primero, las FARC-EP demandan la reorientación del mandato de las Fuerzas Armadas de la Nación en torno al objetivo de asegurar la soberanía nacional y proteger los derechos humanos (FARC-EP, 1999). La eliminación de las organizaciones paramilitares, que operan de una manera hostil para con los objetivos del logro de la paz, es asumida como una precondition importante para el arribo a una solución política. Segundo, la libertad de prensa y el refuerzo de los

RECUPERANDO LA TIERRA

procesos de responsabilidad públicos son percibidos como condiciones críticas para la estabilidad socio-política nacional. Tercero, un gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional debe implementar reformas que apunten a redistribuir la riqueza nacional de una manera más justa y equitativa. La Plataforma propone, en particular, que el Estado se comprometa a redirigir el 50% del presupuesto nacional a servicios sociales y el 10% hacia investigaciones científicas (FARC-EP, 1999). Evocando discusiones pasadas, las FARC-EP piden al Estado que asegure que todos los ciudadanos tendrán igual acceso a una salud y educación adecuadas.

Finalmente, la Plataforma demanda modernización económica y desarrollo con justicia social. En oposición a las políticas neoliberales que favorecen la privatización de empresas del Estado, la Plataforma le reclama a este último que se convierta en el dueño y administrador principal de sectores estratégicos como el de la energía, las comunicaciones, servicios públicos, calles, puertos y recursos naturales. Además, se propone que el énfasis de la política de desarrollo económico debe estar puesto en el reforzamiento y expansión del mercado doméstico, en el autoabastecimiento de alimentos y en el apoyo activo de la producción industrial en todos los niveles. También se identifican los imperativos asociados con la promoción de la solidaridad económica nacional, la autoadministración y los microemprendimientos. Las FARC-EP presentaron esta agenda hace ya más de una década, pero ninguna de estas medidas fue implementada.

Las FARC-EP han expandido internacionalmente su acción política y han lanzado un diálogo más amplio a través del cual buscan informar a los no colombianos sobre su programa de cambios a realizarse en Colombia. Este diálogo ha abierto un camino amplio y democrático para que las FARC-EP sean criticadas, cuestionadas y respetadas, en contraste con la postura del gobierno de Colombia (del presidente Álvaro Uribe y luego del ministro de Interior, Fernando Londono), que ha buscado silenciar y excluir a las organizaciones no gubernamentales y a las “interferencias” externas sobre temas como los derechos humanos y el desarrollo político. En el pasado, varios países, entre los que se cuentan Francia, Noruega, Suiza, Canadá y Brasil, han estado en contacto directo con las FARC-EP para negociar y discutir la paz, la seguridad, la inclusión y el comercio. Incluso el Foro Social Mundial (FSM) ha invitado a las FARC-EP como representantes y participantes que recibieron gran atención, aplausos y respeto en los encuentros de 2001 (Nichols, 2001). A pesar de ello, siguiendo el lanzamiento de los Estados Unidos de la “guerra contra el terror” en 2001, el FSM no ha permitido, en el papel, a ningún grupo armado participar abiertamente en los encuentros, sin omitir a las FARC-EP ni a conductores de Estado como Fidel Castro. En realidad, las FARC-EP se han mantenido involucradas, y el FSM ha sido presionado para alentar abiertamente su asistencia (Research Unit for

Political Economy, 2003). No obstante, como la “guerra contra el terror” continúa, tal aliento es difícil de realizar.

Las FARC-EP han sido capaces de realizar más incursiones domésticas, con el apoyo de y el alineamiento militar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro fuerte movimiento de guerrilla nacional (FARC-EP, 2003a). Una vez se dijo que si estos ejércitos guerrilleros se unieran, nunca constituirían una amenaza real para el gobierno (Bushnell, 1993). Sin embargo, en años recientes han organizado e iniciado ataques conjuntos contra las fuerzas estatales y han lidiado con golpes devastadores contra las fuerzas de contrainsurgencia paramilitares/estatales. Esto ha estado acompañado por una convergencia ideológica entre los dos movimientos y por la superación de sus disputas históricas.

CONCLUSIÓN

La insurgencia dentro de Colombia ha mostrado mucho más vigor y fuerza que el Estado en espacios geográficos específicos. En efecto, durante más de cuatro décadas, el mapa político de Colombia ha sido continuamente trazado por la expansión de la insurgencia y la retirada del Estado. Se espera que este proceso continúe en la medida en que el Estado siga imponiendo una agenda imperialista y proliferen la oposición social. Se espera que crezca la influencia de las FARC-EP y que se extienda en las regiones restantes del país.

Bajo estas circunstancias, el Estado tiene dos opciones: o aborda las necesidades de desarrollo urgentes en las áreas de agricultura, educación y salud, como señalan las FARC-EP; o persiste con su política de violencia social, económica, política y cultural directa mediante las fuerzas estatales y paramilitares. Estas fuerzas, como la historia lo ha mostrado, alimentan un círculo vicioso de opresión y resentimiento, y generan más violencia. La variable clave que el Estado consistentemente trató de dejar afuera de la ecuación es la base social de la insurgencia. Las FARC-EP no son sólo una oposición armada contra el Estado, sino una fuerza social tangible con un modelo diferente de desarrollo socio-económico y político.

BIBLIOGRAFÍA

- Agriculture and Agri-Food Canada 2002 *Colombia: Agri-Food Country Profile Statistical Overview*. En <www.ats.agr.ca/latin/e3007.htm>.
- Aldana, Luis Alberto Matta 2002 *Poder Capitalista y Violencia Política en Colombia: Terrorismo de Estado y Genocidio contra la Unión Patriótica* (Bogotá: Ideas y Soluciones Gráficas).
- Arenas, Jacobo 1985 *Cese El Fuego: Una Historia Política de Las FARC* (Bogotá: Editorial La Oveja Negra).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Banco de la República Colombia 2003a *Foreign Trade: Exports*. En <www.banrep.gov.co/estad/ingles/pg6994.htm#6>.
- Banco de la República Colombia 2003b *Foreign Trade: Imports*. En <www.banrep.gov.co/estad/ingles/pg7994.htm#7>.
- Bergquist, Charles, Penaranda, Ricardo y Sánchez, Gonzalo 2003 *Violence in Colombia 1990–2000: Waging War and Negotiating Peace* (Wilmington: Scholarly Resources).
- Betancourt, Ingrid 2002 *Until Death Do Us Part: My Struggle to Reclaim Colombia* (New York: HarperCollins).
- Bowden, Mark 2001 *Killing Pablo: The Hunt for the World's Greatest Outlaw* (New York: Atlantic Monthly Press).
- Brittain, James J. 2004 "The Revolutionary Armed Forces of Colombia–People's Army: A Marxist Insurgency for Revolution?", M.A. tesis, Acadia University.
- Bushnell, David 1993 *The Making of Modern Colombia: A Nation in Spite of Itself*, (Berkeley, CA: University of California Press).
- Caballero, María Cristina 2004 *A Lefty Takes Bogotá: Mayor Luis Eduardo Garzon Will Complicate Uribe's Agenda*. En <www.msnbc.msn.com/id/3989953/>.
- Carr, Barry y Ellner, Steve 1993 *The Latin American Left: From the Fall of Allende to Perestroika* (London: Westview Press).
- Chaliand, Gerard 1977 *Revolution in the Third World: Myths and Perspectives* (New York: Viking).
- Chasteen, John Charles 2001 *Born in Blood and Fire: A Concise History of Latin America* (New York: W.W. Norton).
- Clawson, Patrick, L. y Rensselaer, W. Lee III 1998 *The Andean Cocaine Industry* (New York: St. Martin's/Griffin).
- Cordoba Ruiz, Piedad 2002 *Women in the Colombian Congress* (Stockholm: International Idea).
- Cortez, Hernán 2002 *Colombia Country Guide*. En <www.oneworld.net>.
- Crandall, Russell 2002 *Driven by Drugs: US Policy toward Colombia* (London: Lynne Rienner).
- Currie, Lauchlin 1966 *Accelerating Development: The Necessity of the Means* (New York: McGraw-Hill).
- Dudley, Steven 2004 *Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in Colombia* (London: Routledge).
- Economist Intelligence Unit (EIU) 2003 *Country Report: Colombia*. En <www.economist.com/countries/Colombia/profile.cfm?folder=Profile-Fact>.
- Fals-Borda, Orlando 1976 *Peasant Societies in the Colombian Andes: A Sociological Study of Saucío* (Westport: Greenwood Press).

- FARC-EP 1993 *The Agrarian Programme of the Guerrillas of the FARC-EP* (FARC-EP International Commission).
- FARC-EP 1999 *FARC-EP Historical Outline* (FARC-EP International Commission).
- FARC-EP 2000 *Resistencia*, 24.
- FARC-EP 2000/2001 *Resistencia*, 25.
- FARC-EP 2001 *Resistencia*, 26.
- FARC-EP 2003a *Joint Communique of the FARC-EP and the ELN, July 13, 2003*, Secretariat of the Central General Staff of the FARC-EP and the ELN General Command.
- FARC-EP 2003b *Solidarity Communique from the FARC-EP, June 22 2003*, Secretariat of the Central General Staff of the FARC-EP.
- Fisher, William F. y Ponniah, Thomas 2003 *Another World is Possible: Popular Alternatives to Globalization at the World Social Forum* (Halifax, NS: Fernwood).
- Galvis, Constanza Ardila 2000 *The Heart of the War in Colombia* (London: Latin American Bureau).
- Gilbert, Alan 1974 *Latin American Development: A Geographical Perspective* (Harmondsworth: Penguin).
- Gott, Richard 1970 *Rural Guerrillas in Latin America* (London: Pelican Latin American Library).
- Hobsbawm, Eric J. 1973 *Revolutionaries: Contemporary Essays* (New York: Pantheon Books).
- Hudson, Rex A. 2002 *Who Becomes a Terrorist and Why: The 1999 Government Report on Profiling Terrorists* (Guilford, CT: Lyons Press).
- Kirk, Robin 2003 *More Terrible than Death: Massacres, Drugs, and America's War in Colombia* (New York: Public Affairs).
- Latin American Working Group, Colombia Steering Committee, Working Group on Displacement (LAWG) 2003 *Colombians Displaced by Violence Need Protection and Assistance* (Washington DC: Latin American Working Group).
- Leech, Garry M. 1999 "Fifty Years of Violence" en *Colombia Journal Online*. En <www.colombiajournal.org/fiftyyearsofviolence.htm#three>.
- Leech, Garry M. 2002 *Killing Peace: Colombia's Conflict and the Failure of US Intervention* (New York: Information Network of the Americas).
- Leech, Garry M. 2003 "Photo Gallery: FARC Guerrillas" en *Colombia Journal Online*. En <www.colombiajournal.org/farcphotos.htm>.
- Lindqvist, Sven 1979 *Land and Power in South America* (Harmondsworth: Penguin).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Marx, Karl 1991 *Capital: A Critique of Political Economy* (Harmondsworth: Penguin) Vol. 3.
- Meza, Ricardo Vargas 1998 "The FARC, the War and the Crisis of State" en *NACLA Report on the Americas*, 31(5), pp 22-28.
- Molano, Alfredo 2000 "The Evolution of the FARC" en *NACLA Report on the Americas*, 34(2), pp 23-32.
- Mondragón, Héctor 2001 *Towards "Humanitarian Intervention" in Colombia?*. En <www.zmag.org/crisescurevts/colombia/hemon.htm>.
- Nichols, Dick 2001 "Thousands Attend World Social Forum in Brazil" en *LINKS: International Journal for Social Renewal*. En <www.dsp.org.au/links/back/issue18/Nichols.html>.
- Ortiz, Román D. 2002 "Insurgent Strategies in the Post-Cold War: The Case of the Revolutionary Armed Forces of Colombia" en *Studies in Conflict and Terrorism*, 25, pp 127-143.
- Osterling, Jorge P. 1989 *Democracy in Colombia: Clientelist Politics and Guerrilla Warfare* (Oxford: Transaction).
- Parpart, Jane 2000 "Rethinking Participation, Empowerment, and Development from a Gender Perspective" en Freeman, J. (ed.) *Transforming Development: Foreign Aid for a Changing World* (Toronto: University of Toronto Press).
- Pearce, Jenny 1990 *Colombia: Inside the Labyrinth* (London: Latin America Bureau).
- Pearce, Scott 2002 "Fuelling War: The Impact of Canadian Oil Investment on the Conflict in Colombia" en *Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC)*, Working Paper Series.
- Pearson, Ruth 1992 *Poverty and Development in the 1990s* (Oxford: Oxford University Press).
- Penhaul, Karl 2001 "Colombia's Communist Guerrillas Take On a Feminine Face" en *Global Correspondent*, 1 de enero.
- Petras, James y Morley, Morris 1990 *US Hegemony under Siege: Class, Politics and Development in Latin America* (London: Verso).
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2001 *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century* (London: Zed Books).
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2003 *System in Crisis: The Dynamics of Free Market Capitalism* (London: Zed Books).
- Petras, James y Zeitlin, Maurice 1968 *Latin America: Reform or Revolution? A Reader*, Greenwich (CT: Fawcett Publications).
- Randall, Stephen J. 1992 *Colombia and the United States: Hegemony and Interdependence* (Athens, GA y London: University of Georgia Press).
- Research Unit for Political Economy 2003 "How and Why the World Social Forum Emerged" en *The Economics and Politics of the*

- World Social Forum*. En <www.rupe-india.org/35/howandwhy.html>.
- Richani, Nazih 2002 *Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia* (New York: SUNY Press).
- Rochlin, James F. 2003 *Vanguard Revolutionaries in Latin America: Peru, Colombia, México* (Boulder, CO: Lynne Rienner).
- Román, Fernando 2000 "Plan Colombia Means War" en *Buenos Aires Daily*, 2 de octubre.
- Sachs, Carolyn 1996 *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment* (Boulder, CO: Westview Press).
- Scott, Peter Dale 2003 *Drugs, Oil, and War: The United States in Afghanistan, Colombia and Indochina* (New York: Rowman & Littlefield Publishing).
- United States Embassy in Bogotá 2000 *Statement of Rand Beers Assistant Secretary of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs before the Subcommittee on Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs of the House Appropriations Committee*, 29 de febrero (Washington: Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs).
- Vanden, Harry E. Y Prevost, Gary 2002 *The Politics of Latin America: The Power Game* (New York: Oxford University Press).
- Veltmeyer, Henry y Petras, James 2002 "The Social Dynamics of Brazil's Rural Landless Workers' Movement: Ten Hypotheses on Successful Leadership" en *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, 39(1), pp 79-96.
- Weeks, John y Gunson, Phil 1991 *Panama: Made in the USA* (London: Latin American Bureau).
- Weil, Thomas A., et al. 1970 *Area Handbook for Colombia* (Washington, DC: Foreign Area Studies of the American University).
- Wickham-Crowley, Timothy 1991 *Exploring Revolution: Essays on Latin America Insurgency and Revolutionary Theory* (New York: M.E. Sharpe).
- Wickham-Crowley, Timothy 1992 *Guerrillas & Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956* (Princeton, NJ: Princeton University Press).
- Wilson, Scott 2003 "Colombia's Rebel Zone: World Apart" en *Washington Post Foreign Service*, 18 de octubre.
- Wood, Ellen Meiksins 2003 *Empire of Capital* (London: Verso).

ARMANDO BARTRA*
GERARDO OTERO**

**MOVIMIENTOS INDÍGENAS CAMPESINOS
EN MÉXICO: LA LUCHA POR LA TIERRA,
LA AUTONOMÍA Y LA DEMOCRACIA**

*A pesar de todo, los indígenas sabían que las tierras
eran suyas, debido a su historia, derechos y también
el trabajo, lo cual... es lo que las hizo florecer*

Los campesinos: hijos predilectos del régimen
Arturo Warman

EL PROPÓSITO DE ESTE TRABAJO es evaluar el surgimiento del movimiento de los campesinos indios en México a principios del siglo XXI. Así como los campesinos indígenas fueron el grupo más radicalizado en la

* Armando Bartra es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Maya, A.C. Originalmente formado en filosofía, ha sido autor o coautor de más de treinta libros entre los que se incluyen ensayos literarios, poesía y textos sobre historia y ciencias sociales. Durante los pasados treinta años, su atención ha estado centrada en la cuestión campesina. Sus publicaciones incluyen *The Seduction of the Innocents: The First Tumultuous Moments of Mass Literacy in Postrevolutionary Mexico* (1994) [*La seducción de los inocentes: los primeros momentos tumultuosos de alfabetismo masivo en el México posrevolucionario*], *Guerrero Bronco* (1996) y *Cosechas de Ira* (2003).

** Gerardo Otero es profesor de Sociología y director del Programa de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Canadá. Ha publicado más de sesenta artículos y capítulos de libros y es editor de dos libros, *Neoliberalism Revisited: Economic Re-structuring and Mexico's Political Future* (1996) [*El neoliberalismo revisitado: reestructuración económica y el futuro político de México*], y *Mexico in Transition: Neoliberal Globalism, the State and Civil Society* (Zed, 2004) [*México en transición: Globalización Neoliberal, el Estado y la Sociedad Civil*], y autor de *Farewell to the Peasantry? Political Class Formation in Rural Mexico* (1999) [*¿Adiós al campesinado? Formación de clase política en el México rural*]. Su tema de investigación actual es la globalización neoliberal, la biotecnología agrícola y las luchas indígenas para la autonomía y control de recursos naturales.

RECUPERANDO LA TIERRA

Revolución de 1910-1920, el primero de enero de 1994 llevaron a cabo un levantamiento liderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que también ha representado un punto decisivo en la historia política de México. La mayoría de los analistas del movimiento de campesinos indígenas en América Latina tendió a enfatizar bien la bases clasistas de los movimientos rurales (Petras y Veltmeyer, 2001) o la identidad política involucrada en su movilización (Esteva, 1999; Álvarez et al., 1998). Por contraste, argumentamos que en la mayoría de los movimientos sociales, pero particularmente en el caso de las luchas campesinas indígenas, las demandas materiales (tierra) y de identidad (cultura) son inseparables.

La etnia y la cultura indígenas son simplemente los puntos clave de la lucha por la tierra. Las etnias indígenas han sido reproducidas por siglos en una interacción subordinada con grupos y clases dirigentes y medias, y su reproducción ha dependido principalmente de tener acceso a las tierras (Otero, 2004a). Cuando la unión con la tierra como medio de sustento fue cortada de manera permanente, los anteriores pueblos indígenas no tuvieron más opción que asimilarse a la sociedad mestiza sólo luego de un par de generaciones. A pesar de que la asimilación ha dado como resultado la pérdida de lenguas y de prácticas culturales, México ha presenciado desde la década del setenta, y más forzosamente en la década del noventa, un fuerte resurgimiento de las luchas de los pueblos indígenas por tierras y por autonomía para reproducir su cultura. Parte de este resurgimiento se explica por la duplicidad del gobierno de México: por un lado, la nueva legislación agraria de 1992 canceló la posibilidad de más reformas, cambiando el artículo 27 de la Constitución de 1917, que había surgido de la Revolución (Bartra, 1992, 2003a); por otro lado, el gobierno firmó el convenio ILO N° 169, en 1989, sobre los Pueblos Indígenas (Hernández Navarro, 1994). Esto último ha brindado legitimidad para continuar con la lucha por las tierras y el territorio, ahora con una nueva demanda central que se suma: por la autonomía en la cultura y el autogobierno. En un país que ha sido guiado por la ideología liberal desde el siglo XIX y que ha intentado establecer fervientemente una identidad nacional homogénea, monolítica y *mestiza* (de sangre mezclada), la lucha indígena representa un desafío mayor (Hernández Navarro, 1997).

En este trabajo se describe el crecimiento del movimiento campesino indígena en México, con énfasis en las tres últimas décadas del siglo XX. En la primera sección se ofrece información sobre las luchas indígenas por las tierras y la autonomía, y el marco conceptual utilizado para interpretarlos. En la segunda sección se discuten las relaciones entre el Estado mejicano y los pueblos indígenas a lo largo del siglo XX, con particular atención en las décadas del setenta y ochenta. En la tercera sección se ofrece un análisis del levantamiento del EZLN, focalizando el modo en que el EZLN y los movimientos indígenas más amplios de

México produjeron impactos entre ellos. Finalmente, nuestra conclusión aborda el dilema de los movimientos indígenas hoy: ¿se consolidarán como un movimiento estrictamente indígena o irán más allá de sus fronteras étnicas para encontrar su identidad de clase como parte del campesinado y establecer así alianzas con el resto del campesinado y con otras clases subordinadas de México?

HISTORIA Y CONCEPTOS

PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MÉXICO POSCOLONIAL

Si los Estados coloniales despojaron a las comunidades indígenas y sujetaron a la mayoría de sus miembros a la esclavitud y a duras condiciones laborales, el Estado mejicano poscolonial intentó eliminar a los indios como categoría social. Con la independencia política de México de España en 1821, las clases dirigentes, que descendían de los españoles y propagaron la supremacía de los blancos, buscaron constituir una identidad nacional que excluyera a los indios. Mientras esta supremacía blanca era establecida en la legislación inicial de México independiente, el Estado se movió vigorosamente para privar a las comunidades indígenas de sus medios de subsistencia algunas décadas después, durante el *Porfiriato* de 1876-1910, el período previo a la revolución. El dictador liberal Porfirio Díaz se propuso unificar la nación, extendió la red del ferrocarril e impuso un gobierno militar desde el centro. El capitalismo estaba, en ese momento, en plena expansión, pero como grandes partes de las tierras se mantenían en las manos de las comunidades indígenas, el gobierno de Díaz cambió las leyes para permitir que se realice libremente el proceso de acumulación primitiva.

La acumulación primitiva consistía en una doble “liberación” de productores directos de los medios para producir su sustento (esto es, expropiación de tierras indígenas) y de cualquier relación de dependencia que pueda haber prevenido la venta de su fuerza de trabajo, creando así un proletariado libre para el desarrollo capitalista. Es importante remarcar que, en el centro de este proceso, estaban las tenencias de tierras de la Iglesia Católica Romana, que a mediados del siglo XIX era la mayor propietaria bajo un tipo de propiedad feudal. Esto contrastó marcadamente con la ideología liberal emergente y representó una de las mayores trabas para el desarrollo del capitalismo. Así, las reformas liberales en la Constitución de 1857 proveyeron instrumentos legales para expropiar las tenencias de tierra de la Iglesia. Y la misma ley, ayudada por las siguientes legislaciones de 1883 y 1884, permaneció vigente para ser aplicada a las tierras de las comunidades indígenas. Luego de las leyes de la reforma liberal y durante el *Porfiriato*, las comunidades indígenas fueron privadas del 90% de sus tierras.

El resultado inmediato de las reformas liberales fue una transferencia de la propiedad de las tierras de la Iglesia y de las comunidades indígenas a los *latifundistas* existentes y nuevos, grandes propietarios del sector privado de la agricultura de México. Durante las décadas siguientes, satisficieron sus voraces apetitos cercando grandes porciones de tierras comunales indígenas, al tiempo que también ataban a los campesinos indígenas desposeídos de tierras a través de deudas en las que ellos habrían incurrido como trabajadores con los terratenientes (créditos para fiestas de casamientos, bienes adelantados en las *tienda de raya* o negocios de las haciendas, etc.). Estas deudas eran heredadas por los hijos de los peones, quienes no podían abandonar sus “trabajos” hasta que se arreglaran todas las obligaciones contraídas con el terrateniente (López Cámara, 1967; Hansen, 1974).

El movimiento revolucionario de 1910 realizó alianzas de diferentes maneras en varias regiones de México. En el norte, la revolución fue llevada a cabo por los *hacendados*, grandes propietarios que habían sido excluidos del poder político durante el *Porfiriato*. Conformaron una alianza amplia y poco confiable con sus propios peones, pequeños granjeros, rancheros y clases medias urbanas. En México central, por contraste, la principal brecha social se producía entre las comunidades indígenas expropiadas y los *hacendados*. Específicamente en el estado de Morelos, los campesinos indígenas se habían organizado para oponerse al *Porfiriato* desde 1908, antes de que el *hacendado* norteño Francisco I. Madero hubiese siquiera pedido el primer tiro de la revolución (Womack, 1969). A diferencia de la amplia alianza del norte, que estaba liderada por *hacendados*, el campesinado de Morelos nombró un líder de su propia comunidad: Emiliano Zapata. Estrictamente hablando, Zapata no era campesino, ya que ganaba su sustento trabajando en una hacienda por salario; sin embargo, era un respetado miembro de la comunidad. Los seguidores de Zapata decidieron aliarse con los *hacendados* de Madero porque un esfuerzo para dar a conocer sus quejas había sido rechazado a nivel estatal.

La alianza zapatista con Madero fue breve. Poco después de que el dictador fuera destituido, era obvio que Madero estaba rodeado por fuerzas conservadoras similares, que lo prevenían de cumplir con sus promesas de reforma agraria. Por ende, Zapata lanzó su propio llamado revolucionario, el Plan de Ayala, en 1911. En 1912, Madero fue derrocado y asesinado por sus fuerzas de restauración de derecha, detonando la guerra civil de México. Hacia diciembre de 1914, los ejércitos campesinos liderados por Emiliano Zapata en el sur y por Francisco Villa en el norte tenían la superioridad militar, con la reforma agraria radical como principal bandera política. Pero los *hacendados* del norte reconstituyeron sus ejércitos y eventualmente derrocaron a los ejércitos campesinos radicalizados. Políticamente, cooptaron el ideal campesino de reforma agraria

incluyendo el artículo 27 en la Constitución de 1917, una promesa en papel de reforma agraria que fue implementada sólo tímidamente hasta la década del treinta, cuando se llevó a cabo una redistribución de tierras más significativa con la administración de Lázaro Cárdenas (1930-1940). A continuación, la revolución se institucionalizó, con la renombrada “gran familia revolucionaria” en el timón. Al menos respecto del campesinado y de la reforma agraria, la revolución básicamente había terminado: la distribución de tierras aminoró considerablemente, la mayoría de las tierras cedidas a los campesinos desde entonces o no eran aptas para la agricultura o era el Estado el que dirigía sus procesos productivos, y los campesinos tenían que lidiar con un conjunto de instituciones del Estado que tendían a cooptar sus organizaciones de clase. Por el resto del siglo XX, uno de los mayores desafíos de las poblaciones rurales de México consistió en ganar independencia organizacional del Estado y autonomía de otras organizaciones políticas. Ahora nos abocaremos a un breve esquema de nuestra conceptualización de esta indagación.

LA TEORÍA POLÍTICO-CULTURAL DE LA FORMACIÓN DE CLASE

La pregunta central para la teoría de la formación de clase política podría formularse de la siguiente manera: ¿cómo pueden los grupos, las comunidades o las clases subordinadas convertirse en hegemónicas o dominantes o, al menos, ganar la habilidad de presionar por intervenciones del Estado a su favor, y seguir manteniéndose independientes? La formación de clase política puede definirse como un proceso a través del cual productores directos y otros grupos sociales explotados y/u oprimidos conforman demandas, arman organizaciones para perseguirlas y generan un liderazgo que los represente ante el Estado y otras organizaciones con las cuales se construyen alianzas. La pregunta de cómo los campesinos indígenas se constituyen en una clase política podría ser respondida desde una perspectiva estrictamente económica-de-clase o desde un punto de vista basado en la identidad. Sin embargo, la distinción de la teoría de la formación de la clase política usada aquí es, precisamente, que tanto los temas económicos como culturales son partes integrales de lo que *políticamente* constituyen las clases. Una clase formada políticamente implica tanto intereses materiales como aspectos culturales de la identidad, que resultan de las relaciones de producción (entre explotadores y explotados) y de las relaciones de reproducción (entre los explotados), respectivamente.

Para los campesinos indígenas, un componente clave de las relaciones de producción comprende sus relaciones con otros grupos étnicos, con los grupos dominantes de *mestizos*, *ladinos*, *cholos* o blancos (los nombres varían según los países y la construcción social de las etnias). Ahora bien, para los campesinos de subsistencia, predominantemente,

RECUPERANDO LA TIERRA

bien puede ser que la relación clave con los grupos dominantes tenga lugar a través del mercado, y no a través de la producción. En cualquiera de los casos, las relaciones étnicas dentro de las asimétricas relaciones de producción o de mercado tenderán o a reforzar las identidades étnicas o a obligar a los grupos étnicos subordinados a la asimilación. En términos de Laclau y Mouffe (1985), en el antagonismo entre las dos posiciones subjetivas se constituye su respectiva identidad. El hecho notable sobre algunas etnias indígenas en América Latina es que han resistido la asimilación por casi medio milenio, a pesar de haber ocupado siempre una posición subordinada.

La teoría de la formación de clase política se ubica claramente en el período posterior a la Guerra Fría, una era en que la lucha por el socialismo a través de medios revolucionarios violentos había finalizado, al menos en América. La lucha por el socialismo democrático debe ser llevada a cabo por la expansión de estructuras liberales democráticas y la construcción de un bloque hegemónico nuevo, democrático y popular, en torno de las necesidades humanas y del mantenimiento del medio ambiente.

La teoría de la formación de la clase política propone culturas regionales, intervención estatal y tipos de liderazgo como mediadores determinantes entre los procesos estructurales de clase y los resultados de la formación política. Las culturas regionales en las cuales las relaciones entre los explotados (por ejemplo: parentesco y relaciones comunitarias) son críticas, forman las bases sobre las cuales los productores directos articulan sus demandas. La intervención estatal da forma a los contornos iniciales del carácter resultante de una organización de clase: el Estado siempre trata de cooptar las organizaciones, mientras que estas últimas luchan por su independencia. Finalmente, los tipos de liderazgo y los modos de participación de base determinan tanto las posibilidades de la organización de mantenerse independiente del Estado y autónomo de otras organizaciones políticas como también el carácter de sus alianzas con otros movimientos y organizaciones (Otero, 1999; Otero y Jugenitz, 2003). Ahora veremos cómo la “gran familia revolucionaria” construyó el Estado mexicano desde 1929 hasta 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dirigente perdió la elección presidencial. En las secciones siguientes se discute acerca de cómo los campesinos indígenas pelearon la cooptación y se constituyeron en una clase políticamente formada.

PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ESTADO MEXICANO

LAS GUERRAS DEL ESTADO O EL “OGRO FILANTRÓPICO”

Si los campesinos mexicanos se inventaron a sí mismos durante la revolución, permanecieron eventualmente oprimidos por el Estado durante el siglo XX. Pero los campesinos también recibieron una serie de

concesiones del Estado, que en la mayoría de los casos resultó en su cooptación política. De aquí que el ganador mejicano del premio Nobel, Octavio Paz, caracterizara al Estado como el “ogro filantrópico”: oprime y reprime a aquellos que disienten, al mismo tiempo que recompensa la lealtad. Para los campesinos, entonces, la tensión entre rebelión y cooptación ha marcado su historia (Bartra, 1985, 2003b). La insurgencia rural del siglo pasado fue erigida en las guerras contra el ogro: intenta romper con los nudos materiales y hegemónicos del poder del Estado. En México, la visión de Nietzsche del Estado se materializó cuando la revolución se convirtió en el Estado: “Un Estado es llamado el más frío de todos los monstruos fríos. Yací frío; y esta mentira salió de su boca: Yo, el Estado, soy la gente” (1962: 44).

Pocos Estados policiales del siglo XX tuvieron el control social que tuvo el Estado mejicano. Fue un autócrata benevolente que reestructuró a los trabajadores, campesinos, empresarios y clase media desde abajo hacia arriba. Se logró gracias a un sistema corporativista implacable articulado al Estado y al PRI, estando este último a cargo de los rituales electorales del sistema. Las organizaciones de la “sociedad civil” creadas desde arriba sumaron, de hecho, un ámbito de la política confiscada por el Estado, cuyo resultado fue la lealtad, la cooptación y el aseguramiento del triunfo electoral del partido dominante. Los “sectores” de este partido estatal casi único fueron los apoyos políticos y sindicales de la “revolución hecha gobierno”: el sector de los trabajadores, constituido por la Confederación de Trabajadores Mexicanos y otros grandes sindicatos nacionales (petróleo, electricidad, vías, teléfonos, minería, etc.); el sector de los campesinos, compuesto principalmente por la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Liga de Comunidades Agrarias; y el sector popular, constituido por empleados estatales, maestros y por otros estratos medios, organizados en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Por su parte, los empresarios, sin ser un sector formalmente dentro del partido dominante, se organizaron en asociaciones, confederaciones y cámaras y se alinearon en una relación corporativista frente al Estado.

En el México del siglo XX, el Leviatán era un monstruo frío comandado por príncipes todopoderosos a quienes el poder les duraba sólo seis años, hasta la próxima elección. El mando del presidente, sin embargo, era tan absoluto en el espacio como limitado en el tiempo. Los ogros filantrópicos, como Octavio Paz los llamó, eran a veces pródigos y a veces mezquinos, pero siempre fueron proveedores.

Los mexicanos necesitan ahora liberarse matando al Leviatán, incluso si el viejo patriarcado ya no produce miedo. A pesar de estar rodeado de un imperio guerrero, organizaciones multilaterales, acuerdos de comercio draconianos y corporaciones planetarias y de poder hacer

cada vez menos, debería ser asesinado. Sin un parricidio simbólico nunca exorcizaremos al frío e intimidante monstruo para poner en su lugar un Estado con rostro humano. A pesar de la globalización neoliberal, es tiempo de que las sociedades civiles construyan buenos gobiernos: poderes públicos que están limitados por las sociedades civiles pero que también aceptan enfrentar los grandes problemas nacionales afirmando lo que queda de soberanía. Por lo tanto, necesitamos matar el Estado autocrático para reconciliarnos con un nuevo Estado popular-democrático que responda a la sociedad civil (Otero, 2004b).

En un país en el que la sociedad civil fue creada por el ogro burocrático a su propia imagen, la lucha de los ciudadanos por autogobernarse en los niveles comunitarios y regionales se vuelve un tema de primer orden. Si el reformismo estatal radicalizado de la presidencia de Lázaro Cárdenas a fines de la década del treinta les confirió legitimidad temporaria a los sindicatos que luchaban por la justicia social, éstos fueron siempre anti-democráticos y corporativistas. Pero durante la segunda mitad del siglo, la implacable proliferación de luchas por la autonomía convergió, primero, con la pérdida progresiva de legitimidad del sistema político, que comenzó simbólicamente con el movimiento estudiantil de 1968, violentamente reprimido; y, segundo con el desgaste de la disciplina sindical, manifiesto en las insurgencias populares de la década del sesenta de los trabajadores y campesinos. A esta nueva movilización política le siguieron el fracaso de la sustitución de importaciones, el proteccionismo y un modelo económico centrado en el Estado, que fue dramatizado por las crisis de la deuda y financiera de las décadas del ochenta y noventa. Por último, la ruptura de la “corriente democrática” del PRI, en 1988, significó la esclerosis definitiva de los mecanismos de reproducción informales del sistema político y el comienzo del final de la “gran familia revolucionaria”

La guerra contra el ogro ha atravesado varias fases. Durante las décadas del sesenta y setenta, la palabra “independiente” se convirtió en un símbolo de la oposición democrática: confederaciones y sindicatos campesinos “independientes”, conferencias de organizaciones indígenas “independientes”, frentes para la “independencia” de sindicatos, partidos políticos “independientes” del Estado, revistas y diarios “independientes” que no aceptaban fondos del gobierno, incluso exhibiciones de pinturas o fotos “independientes”, películas “independientes”, compañías de danza “independientes”. En aquellos años, “independencia” significaba simplemente no pertenecer al PRI, una toma de distancia del omnipresente Estado mexicano. Así, una federación de estudiantes democráticos o una confederación de campesinos podrían haberse proclamado “independientes”, aun permaneciendo subordinados a una organización de la oposición como el Partido Comunista Mexicano (PCM), esto es, con ausencia de “autonomía”.

Por ende, en el último cuarto de siglo, “autonomía” se volvió el grito de unión entre las organizaciones de oposición y populares-democráticas. Este concepto comenzó a generalizarse después de 1984, cuando unas cincuenta organizaciones rurales se constituyeron en la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). Aunque inicialmente esta organización de coordinación rechazaba el término “independiente” por la razón cuestionable de evitar una confrontación directa con el Estado –siendo ambos virtualmente sinónimos (Gordillo, 1988)–, durante los años siguientes, la palabra “autonomía” se vio asociada, tanto como lo había sido “independencia”, al rechazo de la subordinación política, pero más que esto, a la autoadministración social y económica de producción campesina y cooperativa. En este sentido, los campesinos “autónomos” rechazaron la vigilancia del Estado y se dispusieron a “apropiarse del proceso productivo” –autoadministración–, mientras los vecindarios y las comunidades se organizaron alrededor de la provisión autoadministrada de servicios básicos como escolaridad y seguridad.

Las luchas indígenas por la autonomía, durante las décadas del ochenta y del noventa, complementaron y radicalizaron más al movimiento campesino. Primero, el significado de “autonomía” para los pueblos indígenas fue más allá de la independencia organizacional y la autoadministración socio-económica para significar autodeterminación libre, esto es, autogobierno a nivel comunitario de acuerdo con sus propias normas, usos y costumbres. Segundo, las demandas de “autonomía” invocaron una historia de los pueblos autóctonos, cuyo fundamento es el derecho que precede al Estado nacional actual. En un sentido, esta demanda es externa al sistema social hegemónico.

En la transición de la independencia política a la autoadministración socio-económica y luego al autogobierno, el concepto subyacente de autonomía afiló su connotación de alteridad, de alternativa, de proyecto hegemónico popular-democrático y multicultural. Al principio, la demanda por la autonomía puede ser un modo no sumiso de insertarse en el orden existente; en su forma más alta, sin embargo, la autonomía se convierte en una práctica antisistémica por la cual los oprimidos se resisten construyendo órdenes de organización alternativos. Pero la progresión de rechazar la política unánime y monolítica hacia una forma de autoadministración despolitizada y luego hacia la demanda por un “mundo [multicultural] donde todos los mundos encajan” es un proceso de superación-y-conservación de etapas, de modo que cada nueva etapa contiene y retiene todas las previas.

El hecho es que las experiencias autónomas más radicalizadas no son islas, y no sobrevivirán sin organizaciones independientes que luchan aquí y ahora por las demandas básicas de sus electores. Las organizaciones autónomas también requieren operadores colectivos

RECUPERANDO LA TIERRA

autoadministrados de producción y servicios populares en tensión perpetua con el Estado y el mercado. Necesitan partidos institucionales capaces de promover reformas alternativas y proyectos desde una postura de oposición o dentro del Estado. La lucha de los pueblos por la autonomía es simbólica de la visión de Max Weber: “En efecto, toda la experiencia histórica confirma la verdad: el hombre no habría logrado lo posible si no hubiese intentado lo imposible” (1958: 128).

LOS PRIMEROS PUEBLOS: DE LA COOPTACIÓN A LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA

La política de Estado de México del siglo XIX intentó exterminar a los indígenas, estadística o físicamente, para construir una homogénea nación-Estado blanca. En contraste, el Estado posrevolucionario del siglo XX se comprometió en una política concertada de integración, que asumió el abandono de culturas indígenas en favor de la adopción de la cultura dominante, mestiza. Durante casi todo el siglo XX, por lo tanto, la presencia social y política de los Primeros Pueblos se diluyó, pero reaparecieron por la fuerza en la última década del siglo, organizados alrededor de sus demandas por la autonomía, el autogobierno y la democracia. Estas demandas presumen que los indígenas tendrán control sobre las tierras y territorios, mientras sigan siendo una parte integral –y digna– del Estado-nación mexicano.

Esencialmente, la participación indígena durante la violenta etapa de la revolución de 1910-1920 adoptó tres modalidades: primero, en una especie de extensión armada del trabajo servil, algunos indios mayas firmaron con las fuerzas de los terratenientes que se resistieron a la revolución. Segundo, en el norte, ciertos grupos étnicos tomaron ventaja de la coyuntura de la guerra para intercambiar su apoyo armado por las fuerzas revolucionarias nacionales por la promesa de una solución a sus problemas locales ancestrales. Tercero, los zapatistas de la parte central de México desarrollaron políticas autónomas y un programa campesino, en el que la condición étnica y lingüística náhuatl de hecho no estaba expresada¹. Todas estas etnias eran sin duda indígenas, pero el racismo era demasiado prevaleciente y fuerte como para que las etnias indígenas se volvieran un punto de reunión organizativa en ese momento.

El primer indianismo revolucionario (un término que distingue los esfuerzos iniciados por los indígenas para una construcción de identidad del “indigenismo”, la política de Estado de integración que persigue

1 El náhuatl fue la lengua dominante durante el imperio azteca, antes del arribo de los españoles en 1519, y todavía sobrevive como la lengua indígena hablada por la mayor cantidad de personas, cerca de 3 millones. Hay al menos otras cincuenta y siete lenguas indígenas todavía habladas en el México actual.

la aculturación y la asimilación) surgió a fines de la segunda década del siglo XX, cuando Carrillo Puerto, líder del Partido Socialista del Sudeste, introdujo una reforma agraria similar al zapatismo de Morelos, en México central. Brindó a los peones de hacienda, semiesclavos con bases territoriales para la autonomía, un desarrollo agrícola basado en el regreso al maíz, disolviendo su dependencia alimenticia de la hacienda. Domingos Rojos y otras actividades culturales y educativas promovieron la recuperación de la lengua indígena, cultura y autoestima. Tierra, libertad y dignidad se integraron en una especie de socialismo indígena, una utopía maya. Esto se frustró en 1923 por la rebelión de la “Casta Divina”, la clase dirigente terrateniente en Yucatán, y el asesinato de Carrillo Puerto (Paoli y Montalvo, 1977).

Desde la década del cuarenta en adelante, los pueblos autóctonos devinieron sujetos del indigenismo burocrático, la política de un Estado paternalista implementado a través del Instituto Nacional Indigenista (INI), que buscó integrarlos en una sociedad nacional. El INI quería rescatar su cultura como folclore y, en el mejor de los casos, abordar sus necesidades políticas, económicas y sociales como ciudadanos, pero pasaron por alto sus demandas de identidad y los derechos que emanaban de ella. Así, si el campesinado creado por la revolución estuvo firmemente contenido en las instituciones corporativistas del Estado, los indígenas del siglo XX fueron reinventados por el INI durante tiempos de paz. Su lucha para liberarse de las redes del poder político ha sido más lenta, pero con un sentido más profundo.

El nuevo indianismo comenzó a definir su perfil durante las décadas del setenta y ochenta, cuando varias comunidades en México central y occidental desarrollaron movimientos locales o regionales en defensa de las tierras, los bosques y el agua en contra de los caciques (hombres política y económicamente fuertes) y del gobierno municipal, como en Oaxaca, en el sur. En estas luchas, sin embargo, los indígenas no expusieron sus especificidades. La tierra siguió siendo el centro de sus demandas.

La reforma agraria que surgió de la revolución sostuvo dos formas de ocupación de tierras: ejido, diseñado para tierras a ser redistribuidas entre campesinos mestizos, con derechos de usufructo sobre la tierra pero con propiedad del Estado; y las comunidades agrarias, diseñadas para uso colectivo por comunidades indígenas que podrían probar un derecho sobre la tierra basado en documentos coloniales. En la práctica, sin embargo, las comunidades indígenas presionaron en sus demandas por tierras, no tanto por las raíces históricas de sus derechos, sino por lo que era más viable de acuerdo con la nueva estructura agraria legal: eran indios que buscaban concesiones de tierras ejido y mestizos que encontraron algunos archivos coloniales para reclamar la restitución de tierras comunales. De este modo, el primer neozapatismo explícito

RECUPERANDO LA TIERRA

en la era posrevolucionaria estaba originalmente expresado en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), que tuvo su primer Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas Independientes en la comunidad Náhuatl de Milpa Alta. La mayoría de los miembros del CNPA es indígena: de las veintiún organizaciones regionales de las que estaba compuesta en 1982, siete eran mestizas y catorce estaban integradas por doce grupos étnicos diferentes: Náhuatl, Purhépecha, Otomí, Huasteca, Mazahua, Zapoteca, Chinanteca, Triqui, Amusga, Chatina, Tzotzil y Tzeltal. Aunque con menos peso, la organización coordinante de los grupos regionales, UNORCA, tiene una militancia importante para los pueblos autóctonos. No obstante, ninguna de estas dos organizaciones convergentes postuló con fuerza a la cuestión étnica.

El primer Congreso Indígena llevado a cabo en Chiapas en 1974 era indianista en su forma: la comunicación se realizó en las lenguas mayas Chol, Tzeltal, Tzotzil y Tojolobal; produjo estudios de diagnóstico y propuestas de grupos comunitarios y lingüísticos, y los documentos y conclusiones fueron elaboradas por consenso. Sin embargo, las conclusiones de su agenda y de acción fueron básicamente campesinas, ya que los temas principales fueron la tierra, el comercio, la salud y la educación.

A comienzos de la década del setenta, Oaxaca era el principal estado en la creación de organizaciones regionales indígenas: la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), constituida por zapotecas; la Organización Yacaltecos de los Sierra de Juárez, que luchaba contra el cacique regional; la Coalición de Promotores de Indios Bilingües, con miembros de casi todas las etnias del Estado; la Organización para la Defensa de los Recursos Humanos y el Desarrollo Social Sierra de Juárez (Odrenasij), también zapoteca; el Comité de la Defensa de los Recursos Naturales y Humanos (Codremi); y el Comité de Organización y Consulta para la Unión de Pueblos de las Sierras del Norte de Oaxaca (Codeco).

Esas organizaciones comenzaron a elaborar una plataforma programática con el incentivo de intelectuales indígenas, como el zapoteca de Guelatao, Jaime Martínez Luna, y el mixe de Tlahitoltepec, Floriberto Díaz. A comienzos de la década del ochenta, en una declaración conjunta de Odrenasij, Codeco y Codremi se leía:

Demandamos absoluto respeto por nuestra autodeterminación comunitaria sobre nuestras tierras, sobre todo por nuestros recursos naturales y sobre las formas de organización que deseamos darnos [...] Demandamos respeto por las expresiones de nuestra vida comunitaria, nuestro lenguaje, nuestra espiritualidad [...] Demandamos respeto por y la promoción de nuestras formas de gobierno comunitaria, porque es la única manera garantizada de evitar la centralización del poder político y económico. Nos oponemos al saqueo de nuestros recursos naturales en nombre de un supuesto "desarrollo nacional".

Para afilar su especificidad, sin embargo, el movimiento indígena tuvo que enfrentar al Estado, que había intentado apropiarse del nuevo etnicismo en formación desde la década del setenta. También tuvo que enfrentar al resto del movimiento popular y campesino, que trataba de subsumirlo por inercia o premeditación. Finalmente, el movimiento indígena tuvo que enfrentar la agenda y las prácticas de las organizaciones no gubernamentales, presentes desde la década del ochenta.

Comenzando con el congreso de Chiapas de 1974, que fue convocado por el Estado y la Iglesia pero que estuvo notablemente autoadministrado por pueblos indígenas, el gobierno promovió dos iniciativas de organización: primero, la formación de Consejos Supremos por grupo étnico y, segundo, en 1975, la formación del Consejo Nacional de los Pueblos indios (CNPI). Se suponía que el Consejo iba a estar subordinado al Estado, pero pronto comenzó a agitarse: en 1976, el CNPI exigió el desmantelamiento del INI y durante la presidencia de López Portillo (1976-1982) criticó la Ley de Fomento Agropecuario, utilizada como lo era para desarrollar el capitalismo agrario por vía de empresas conjuntas entre capitalistas y ejidatarios, usando tierra de ejido. Cuando el Consejo llamó a su tercer congreso en contra de la voluntad presidencial, trató sin éxito de liquidar al Frankenstein emancipado. Esta tarea finalmente fue lograda por su sucesor, el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) en 1985, cuando el CNPI fue transformado en la sumisa Confederación de Pueblos Indígenas, que se afilió al PRI gobernante.

En un proceso paralelo, sin embargo, numerosas organizaciones regionales independientes surgieron durante la década del ochenta y principios de la del noventa, como aquellas en Oaxaca: la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni); la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI); la Unión de Campesinos Independientes 100 Años (UCI 100 Años); y la Asamblea de Autoridades Mixte (Asam). Varias organizaciones independientes surgieron en otros estados: la Organización de Médicos Independientes del Estado de Chiapas (OMIECH) y la Organización de Representantes Indígenas del Estado de Chiapas; en el Estado de Hidalgo, el Frente Democrático "Emiliano Zapata", en México oriental (FDOMEZ); y en el Estado de Guerrero, el Consejo de los Pueblos Nahuatl de Alto Balsas (Bartra, 2000, 2001).

No obstante, la migración creciente, primero a los campos irrigados del noroeste de México y luego a los Estados Unidos, convirtió a muchas comunidades indígenas en entidades multiespaciales y discontinuas que tuvieron que organizarse fuera de sus territorios ancestrales. Las luchas vigorosas de mixtecos y zapotecos en Oregon, Washington y, sobre todo, California, durante la segunda mitad de la década del ochenta, llevaron a la conformación de varias organizaciones fuertes, como el Comité Cívico Popular Mixteca, la Asociación Cívica "Benito Juárez" y la Asociación

RECUPERANDO LA TIERRA

de Pueblos Explotados y Oprimidos. Sobre esta base, en 1991, todas estas organizaciones decidieron formar el Frente Binacional Mixteca-Zapoteca, que se ampliaría en la Baja California y eventualmente en su Oaxaca nativa. Debido a que la membresía fue ampliada para incluir mixes, triquis y chololtecas, la organización fue renombrada como Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), (Kearney 1996, 2000).

Con el surgimiento de nuevas organizaciones se sucedieron reuniones y encuentros masivos que reforzaron las identidades, construyeron solidaridades y desarrollaron liderazgo: el Primer Encuentro de Organizaciones Indígenas Independientes fue realizado en Puxmecatán, Oaxaca, en 1980; el segundo en Cherán Atzicurin, Michoacán. Este proceso ganó fuerza a fines de la década del ochenta, durante la conmemoración de medio milenio de abuso a los indígenas, cuando el Primer Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas fue realizado en Matías Romero, Oaxaca, con aproximadamente seiscientos participantes de noventa y seis organizaciones, catorce estados y veintitrés grupos étnicos. También participaron delegados de Guatemala, Honduras, Perú y Bolivia y representantes de universidades y organizaciones no gubernamentales. Esta reunión tuvo como resultado la Campaña Mundial de 500 años Resistencia Indígena y Popular. En marzo de 1990, el Segundo Foro se realizó en Xochimilco, Distrito Federal, en medio del desacuerdo, que no previno la constitución del Consejo Mexicano de 500 Años en julio, formado por veintitrés organizaciones de base popular, indígena y campesina, organizaciones no gubernamentales y académicos. Finalmente, el Consejo llamó a la celebración de la Primera Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas y Organizaciones, llevada a cabo en Milpa Alta, donde surgió una nueva organización: el Frente Nacional de Pueblos Indios (FRENAPI).

En ese momento, la agenda indígena había sido claramente definida:

El derecho a autonomía y autodeterminación [...] el derecho a la identidad cultural [...] derecho a la tierra y los recursos naturales [...] el derecho a determinar libremente la condición política interna de las comunidades, de acuerdo con las formas tradicionales de organización [...] el predominio de derecho consuetudinario tradicional indígena.

Es significativo que, en contraste con la tendencia a la diferenciación a fines de la década del ochenta, que causó la ruptura de varias organizaciones indígenas con una CNPA más inclinada hacia los campesinos, el Consejo Mexicano de 500 Años se orientó más hacia una convergencia amplia. También pidió “alentar la unidad de [...] pueblos indígenas con el campesino, trabajadores y sectores populares” (Consejo Mexicano 500 Años, 1991).

Este proceso de convergencia coincidió con los primeros años de la administración del presidente Carlos Salinas (1988-1994), que trataba de

atraer los movimientos independientes rurales al pliegue corporativista. Los operadores ejecutivos habían formado el Congreso Agrario Permanente (CAP) en 1989, para apropiarse del Convenio de Acción Unitaria (CAU), y en 1990, el CNC progubernamental, por orden de Salinas, pidió la formación de un Congreso Indígena Permanente (CIP). Esta organización corporativista fue armada para desafiar al Frenapi independiente. Algunos miembros del Frenapi, como el Frente Independiente de Pueblos Indígenas (FIPI) se afiliaron a la organización corporativista, CIP, junto con la Sección de Acción Indigenista del CNC corporativista, el Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) y otros. El CIP se constituyó formalmente en octubre de 1991 y, al igual que con los campesinos, Salinas ofreció millones en recursos a esta organización a través del Fondo Indígena. Esta maniobra de cooptación funcionó, ya que de la misma manera que el CAU campesino independiente no fue capaz de sobrevivir la aparición del CAP corporativista, tampoco el Frenapi duró por mucho tiempo como organización desafiante independiente.

Esta medida de cooptación organizacional fue complementada por una reforma presidencial del artículo constitucional 4, concerniente a la cultura indígena, aprobada en 1991 (Díaz-Polanco, 1992). Esta reforma produjo cambios culturalistas vagos e insustanciales. De una manera asimismo superficial, el gobierno mexicano firmó, en 1989, la Convención de la Organización Internacional del Trabajo Número 169, que fue ratificada a fines de 1990 y publicada en enero del año siguiente, pero no fue implementada. Una última concesión gubernamental simbólica a los Primeros Pueblos tenía un contenido mixto: llegó a conservar el carácter inalienable de las tierras comunales en la ley habilitante del artículo constitucional 27, que cambió fundamentalmente en 1992. Sin embargo, algún recurso para la privatización se dejó en la nueva legislación, ya que estas tierras pueden perderse, por ejemplo, si compensan la participación de la comunidad indígena en una corporación constituida en asociación con capitalistas privados (Bartra, 1992, 2003b)

El hecho significativo, no obstante, fue que las tierras que habían sido devueltas o confirmadas a pueblos indígenas no fueron excluidas del mecanismo por el cual el gobierno procuró tener tierras de ejido que adoptaran el título de "dominio absoluto", el paso anterior a la enajenación y la venta. Antes de la revisión de 1992 de la Ley de Reforma Agraria, las tierras de ejido no podían venderse, sólo podían ser transferidas a herederos. Debido a que las tierras de ejido y comunales constituían aproximadamente la mitad de todas las tierras agrícolas, ganaderas y de bosques de México, se habían convertido en un importante impedimento para el desarrollo capitalista (Otero, 1999: capítulo 3).

Con el fin de entender el metódico prejuicio indígena de un gobierno claramente neoliberal, debemos recordar que la década del noventa

comenzó con fuertes vientos etnicistas en todo el mundo. Éstos fueron elaborados por organizaciones multilaterales, como la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por su sigla en inglés), y expresados en reformas constitucionales que eran por lo general “livianas” y que limitaron la legislación multicultural. En ocasiones, sin embargo, se reconocieron territorios indígenas, como también derechos consuetudinarios y de autogobierno. Paradójicamente, la tendencia mundial a contrarrestar las reformas agrarias, en la cual se insertó Salinas, estuvo acompañada por un cierto grado de reconocimiento de derechos étnicos. En esta línea, la misma ley que se opuso a las leyes de reforma agraria bolivianas de principios de la década del cincuenta estableció un mecanismo para reconocer el territorio de los Primeros Pueblos. En la práctica, esto tuvo como resultado la entrega de títulos y seguridad a los grandes terratenientes, que ahora estaban libres de cualquier amenaza de expropiación. Por último, la década del noventa fue testigo de una clara concesión en el papel a los quinientos años de deuda a los indígenas (Brysk, 2000; Van Cott, 2000).

El gobierno no ha sido el único partido con intervención en los asuntos indígenas. Desde mediados de la década del ochenta, el movimiento de indios mexicanos ha sido el foco de diversos grupos de interés. Primero, se interesaron las ONG; luego, el terremoto de 1985 golpeó a la ciudad de México y, junto con la crisis económica, convirtieron a México en una merecida causa para una importante cooperación internacional. Organizaciones relacionadas con la Iglesia también abordaron la cuestión étnica. Así, los indígenas se transformaron en el paradigma de los “grupos vulnerables” y en objeto de asistencia. En el mejor de los casos, también se convirtieron en objeto de solidaridad y acompañamiento. Se multiplicaron proyectos para educación, salud, alimentos, viviendas y, en menor medida, ahorro, préstamos y producción. No es coincidencia, entonces, que el Foro Internacional Matías Romero, focalizado en los “derechos humanos” y un popular lugar de reunión, haya sido convocado por organizaciones de las bases, como Ucizoni, junto con ONG, como Equipo Pueblo. El internacionalismo fue otro factor decisivo en esta etapa, dado que el proceso mexicano está muy unido al de América Latina y tuvo como escenario tres reuniones del Encuentro Continental de Pueblos Indígenas: el primero en Ecuador, en 1990; el segundo en Guatemala, un año después; y el tercero en Nicaragua, en 1992.

Los eventos del 12 de octubre de 1992 demostraron tanto el aumento del activismo indígena como la confusión predominante. El Zócalo de la ciudad de México, o plaza central, estaba llena de contingentes en representación de una dispersa pluralidad de posiciones políticas: desde grupos culturales ritualistas y la asamblea del Consejo Mexicano de los 500 Años, hasta manifestantes religiosos camino hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe, donde la Iglesia Católica fue perdonada por haberlos coloni-

zado. En Morelia, Michoacán, indígenas enojados destruyeron la estatua de Vasco de Quiroga, misionero proindígena que, posiblemente, no lo merecía; y en San Cristóbal, Chiapas, destruyeron una de Diego Mazariegos, un despiadado conquistador que, sin duda, lo merecía.

Ése fue el punto más alto de la ola neoindigenista que comenzó en la década del setenta. El Consejo Mexicano de los 500 Años, que en 1991 contenía alrededor de trescientas cincuenta organizaciones de veintitrés estados y tenía comités coordinadores en Chiapas, Guerrero, Veracruz, estado de México y Puebla, comenzó a debilitarse luego del 12 de octubre de 1992. Después de esa fecha crítica, el acompañamiento de las ONG también disminuyó. El Encuentro Nacional de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas, realizado en agosto de 1993, pasó desapercibido. La moda había pasado. Sin embargo, si para octubre de ese año no había más indígenas en el Zócalo, para enero de 1994 habían reaparecido con pasamontañas en todas las pantallas de televisión con motivo de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

LOS INDÍGENAS ZAPATISTAS: DE GUERRILLEROS A LUCHADORES POR LA DEMOCRACIA

El terreno, sin duda, había sido preparado por casi veinte años de luchas étnicas para ganar la independencia del indigenismo institucional, pero el levantamiento de Chiapas transformó un “grupo vulnerable” merecedor de asistencia en el emblema de la dignidad y la rebeldía (Subcomandante Insurgente Marcos, 2003; Bartra, 2003c). El programa zapatista no es particularmente indigenista (trabajo, tierra, habitación, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz), pero su composición es indígena, como también lo son las estrategias que adoptaron cuando la movilización nacional e internacional abrió el camino hacia la paz. En diciembre de 1994, durante la campaña de la Paz con Justicia y Dignidad que permitió al EZLN romper con el cerco del ejército, publicó la conformación de treinta y ocho “municipalidades rebeldes” autónomas. Meses antes, el 12 de octubre, durante la conmemoración del 502 aniversario de la conquista, el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) y la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco (AEPCH) llamaron a la conformación de Regiones Multiétnicas Autónomas. Mientras tanto, otros movimientos campesinos estaban estableciendo municipios independientes en todo México, por ejemplo en Ocosingo, Las Margaritas, las tierras altas de Chiapas y Chalchihuitán (Sarmiento, 1994).

Hasta ahora, aún somos testigos de las autonomías *de facto*, mezcladas con demandas por tierras y otras de indígenas y campesinos. Pero en 1995, cuando la primera Sesión de Diálogo entre el EZLN y el gobierno federal se enfocó en los derechos autónomos y en 1996 modelaron una

propuesta de cambios constitucionales, el movimiento indígena ingresó en una dinámica de rearticulación que la definiría por el resto de la década.

La reforma constitucional sobre los derechos y cultura indígena es comúnmente identificada como la “Ley Cocopa”, que adoptó el nombre de la Comisión Congresal para el Acuerdo y la Paz. Esta iniciativa legal sintetizaba los acuerdos de San Andrés alcanzados entre el EZLN y los representantes gubernamentales en febrero de 1996, y definía los objetivos y estrategias de una nueva fase del movimiento indígena. Ello profundiza la segregación organizacional entre pueblos autóctonos y mestizos, que ya estaba surgiendo en la década del ochenta, y unifica grupos étnicos. A pesar de que hubo diferentes enfoques en la gestación de esta iniciativa legal –comunistas contra regionalistas– representa un marco legal común y plausible, un paraguas de derechos constitucionales compartidos por colectividades diversas y distantes que podían tener fuertes discrepancias en otras cuestiones (Hernández Navarro y Vera Herrera, 1998). Como lo han expuesto dos antropólogos, la autonomía no es el efecto de una decisión unilateral de grupos étnicos o nacionalistas, ni desde los estados. Es el producto de una negociación política (Díaz-Polanco y López y Rivas, 1994). En contraste con negociaciones políticas entre movimientos sociales y el Estado, esto no admite gradualismo: los derechos constitucionales sustanciales para los pueblos indígenas son reconocidos, o no lo son.

La definición de una nueva plataforma y estrategia autónoma exigía una renovada articulación, un proceso organizacional que fue precipitado por la sublevación de Chiapas. En el comienzo, los contingentes étnicos actuaron dentro de la convergencia ciudadana plural –que respondía al llamado del EZLN de agosto de 1994–, la Convención Democrática Nacional, realizada justo dos semanas antes de las elecciones nacionales. La Convención estuvo estimulada por la participación de Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato de centro-izquierda, y resultó un frente muy amplio y multclasista de izquierda, articulado primero por convenciones estatales y, más tarde, también dentro de estructuras sectoriales de campesinos, trabajadores, indígenas, estudiantes, mujeres, intelectuales y artistas. Con el triunfo del PRI en las elecciones, la Convención perdió su eficacia para la coyuntura, y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), llamado por el EZLN en la Tercera Declaración de la Jungla de Lacandon, no prosperó. Ésta fue la última iniciativa zapatista llevada a cabo para alentar un frente amplio, popular y multclasista, porque desde fines de 1995 y en 1996, sus llamados sociales fueron primariamente indigenistas; sin embargo no fueron solamente esto, ya que el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), el brazo legal y político del EZLN, se organizó en 1996.

En abril de 1995, representantes de unas cien organizaciones mantuvieron un encuentro en la ciudad de México, la Primera Asamblea Nacional

Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), que elaboró un proyecto de legislación autonomista. El encuentro se prolongó en uno segundo en Vacum, Sonora, y en uno tercero a fines de agosto en Oaxaca. En cada encuentro se incrementaba la asistencia y la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía se formalizó como una organización que haría una contribución significativa a la construcción de los Acuerdos de San Andrés unos pocos meses más tarde. Una de las metas clave de ANIPA ha sido crear un cuarto nivel de gobierno, entre los municipios y los estados: las regiones autónomas pluriétnicas (o RAP). Un “Consejo de Representantes” sería la autoridad más alta en las RAP: “Todos los grupos étnicos (indígenas y no indígenas) estarían representados igualmente dentro de este cuerpo, sin considerar el peso demográfico de cada una”. Este cuerpo sería elegido por voto directo, secreto y universal cada tres años, “de acuerdo con un principio de gobierno mayoritario relativo” (Ruiz Hernández, 2000: 25).

La primera convergencia de pueblos autóctonos expresamente llamada por el EZLN fue el Primer Foro Indígena Nacional. Se realizó en San Cristóbal, Chiapas, en enero de 1996, como parte del proceso de negociación con el gobierno federal, que había comenzado poco tiempo antes en San Andrés (Hernández Navarro y Vera Herrera, 1998; Gilbreth y Otero, 2001). A este foro asistieron setecientos cincuenta y siete delegados indígenas, quinientos sesenta y ocho observadores, doscientos cuarenta y ocho invitados y cuatrocientos tres periodistas. Entusiasmados por este encuentro, hubo otras reuniones, y se constituyeron foros regionales y estatales. En octubre de 1996, la comandanta Ramona, enferma terminal con cáncer, se ocupó de la Constitución del Congreso Nacional Indígena (CNI) en la ciudad de México. En 1997, cuando mil ciento once zapatistas abandonaron Chiapas camino a la ciudad de México, el CNI sostuvo su segundo congreso. Y en marzo de 2001, el CNI realizó su tercer congreso, coincidiendo con la Caravana Zapatista para la Dignidad Indígena de veintitrés comandantes y un subcomandante a la ciudad de México, donde asistieron a una audiencia en el plenario del Congreso Nacional para hacer de su caso la propuesta legislativa de Cocopa, que había sido enviada al Congreso por el reciente elegido presidente Vicente Fox, primer candidato de la oposición en ganar la presidencia después de setenta y un años de gobierno del PRI. Así, el CNI selló su íntima proximidad con el rumbo del zapatismo de Chiapas, y la demanda por la constitucionalidad del derecho a la autonomía para ese estado estaba atada a una solución pacífica.

La “marcha del color de la tierra”, como también se llamó a la caravana, fue el punto más alto de la fase del movimiento indígena que comenzó a mediados de la década del noventa, y fue articulada al reconocimiento constitucional de autonomía. El autogobierno, por contraste, era una de-

RECUPERANDO LA TIERRA

manda ancestral, expresamente buscada durante casi un cuarto de siglo y conceptualmente formulada como un derecho durante la década del ochenta. La peculiaridad del movimiento del EZLN y el CNI desde 1996 es que ha intentado alcanzar un acuerdo con las fuerzas políticas del país que les otorgue un reconocimiento constitucional. La novedad es que tanto los indígenas como los zapatistas centraron su estrategia en conseguir una reforma del Estado.

Ésta no es una meta pequeña. En un país donde las demandas se pelean en términos muy específicos con la esperanza de que el gobierno las satisfaga, luchar por el reconocimiento de los derechos fundamentales es un gran paso. Esto es así y aun más, ya que esta demanda ha movilizó la vasta mayoría de las organizaciones indígenas, que tienen el activo apoyo de las fuerzas sociales progresistas y políticas y cuentan con una amplia simpatía del público en general. Por lo tanto, la excepcional posibilidad de que un proceso legislativo se iniciara desde las bases era percibida como viable.

La coyuntura propicia estuvo presente en dos momentos: durante las negociaciones de San Andrés, en el comienzo de la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000), y luego con la Caravana por la Dignidad Indígena, a principios de la presidencia de Fox. En ambos casos, cuando las negociaciones se frustraron –en 1996 por el ejecutivo y en 2001 por la legislatura, que aprobó una versión muy diluida de la iniciativa Cocopa–, los indios y zapatistas fueron bloqueados por el balance del período electoral de seis años. Así, las luchas han sido marcadamente discontinuas y prolongadas, porque con el fin de desarrollar una nueva y saludable campaña deben esperar que cambie la coyuntura de la “parte superior” para cambiar la propia. Además, este camino legal parece haberse agotado en la perspectiva de los principales protagonistas. Cuando el Congreso amputó severamente la iniciativa Cocopa, y especialmente después de que la Corte Suprema se negara a arreglar el problema, tanto el CNI como el EZLN cambiaron el terreno de la lucha. Los indígenas ratificaron su decisión de ejercer la autonomía en la práctica, y los zapatistas anunciaron la suspensión de todo contacto con el gobierno. Éstas son respuestas similares pero con diferentes perspectivas. Mientras los pueblos indígenas querían el reconocimiento de un derecho, para el EZLN la aprobación de los acuerdos de San Andrés fue la principal de las tres “señales” del gobierno que habían puesto como condición para reestablecer las negociaciones. De esta manera, los mexicanos retrocedieron en dos terrenos: la emancipación indígena fue detenida y la paz alejada.

Los pueblos autóctonos tendrán que continuar luchando dentro de la limitada protección de la convención de la OIT (ILO, por su sigla en inglés) número 169 (Díaz-Polanco y Sánchez, 2003), y los zapatistas tendrán que continuar haciendo política bajo condiciones de excepción

y dentro del marco de negociaciones “suspendidas”, sin un fin a la vista. No hay duda de que los indígenas y los zapatistas continuarán marchando juntos, pero necesariamente con diversas tácticas y estrategias.

El EZLN ha establecido dos estrategias clave. Primero, respecto de sus bases de apoyo, sujetas como están a un muro político-militar que amenaza con extenderse, el EZLN ha sustituido las *Aguascalientes* (anteriores sitios de reunión con la sociedad civil) por los *Caracoles* (sitios con gobierno propio para las comunidades indígenas autónomas), creando los Consejos del Buen Gobierno y estableciendo mayor autonomía del comando político-militar. De esta manera, el EZLN y sus bases de apoyo están preparados para resistir tanto como sea necesario para llegar a una nueva coyuntura más favorable. Segundo, el EZLN ha proclamado su derecho de hacer política en cada terreno. De este modo, reanimó al FZLN y a su revista política mensual, *Rebeldía*, y durante 2003 incrementó sus intervenciones públicas, luchando por la paz, protestando contra la Organización Mundial del Comercio (WTO, por su sigla en inglés) en Cancún y realizando un encuentro internacional “en defensa de la humanidad”. El FZLN organizó las conmemoraciones del vigésimo aniversario del EZLN y del décimo de la sublevación, que fueron celebradas en muchos lugares en todo México y en por lo menos sesenta y cuatro ciudades en todo el mundo, en cinco continentes.

Lo más importante, sin embargo, es la lección que los zapatistas están aprendiendo de su experiencia reciente y de las circunstancias globales y nacionales. El EZLN ha tenido varias encarnaciones: en 1994, un ejército voluntariamente pacífico fomentó una transición democrática por medios democráticos. Como afirmó el subcomandante Marcos: “La propuesta de la convención es forzar el cambio a través de la ruta electoral [...] Estamos haciendo este esfuerzo de convencer a la gente para agotar la ruta electoral que vale la pena” (Morquecho, 1994). En 1995 y 1996, el EZLN era un grupo insurgente que buscó negociar una extensa agenda de reformas con el poder ejecutivo federal, encabezado por Zedillo, en demanda de compromisos gubernamentales para favorecer políticas públicas para los pueblos indígenas, en las sesiones de San Andrés: “La autonomía no implica que el Estado dejará de tener responsabilidades con los nuevos niveles de organización, que tendrán el derecho a fondos de compensación públicos y otros que se debe a los pueblos indígenas” (EZLN, 1996). En 2001, los zapatistas eran rebeldes que organizaron la Caravana de la Dignidad Indígena para demandar de los legisladores la aprobación de una reforma constitucional; en palabras del subcomandante Marcos en una entrevista con periodistas (Bellinghausen, 2001): “Los pueblos indígenas ganarán [...] Convencéremos a los diputados [miembros de la Cámara Baja del Congreso] de que es la hora del Congreso”.

RECUPERANDO LA TIERRA

Hasta 2001, los zapatistas fueron un grupo de insurgentes que –sin rendir sus armas– durante más de ocho años habían estimulado reformas a través de elecciones, negociaciones con el ejecutivo y apelaciones a la legislatura. Esta excepcional paradoja de Chiapas finalmente ha arribado a la conclusión de que el sistema institucional ha sido agotado, de que todos los partidos políticos y la elite burocrática son una banda de traidores, de que las tres principales puertas –poderes ejecutivo, legislativo y judicial– están cerradas. Entiende que el sistema está en crisis terminal: “El arte de la política no funciona más”, escribió el subcomandante Marcos (2003).

Alguno de nosotros puede no compartir esta conclusión, aunque el EZLN tiene el derecho de fijar su propia posición y de actuar en consonancia. Pero excepto por su decisión de avanzar hacia la autonomía *de facto*, la apuesta sobre la lucha indígena no ha sido tan claramente establecida. Primero, porque la movilización indígena no es un ejército sino un movimiento social altamente pluralista; segundo, porque para el EZLN el cambio en la legislación Cocopa no fue simplemente una “señal” para reestablecer negociaciones, sino un derecho fundacional, una parte substantiva de una agenda más extensa, por la que los pueblos indígenas han estado expresamente luchando durante más de un cuarto de siglo. Por lo tanto, el desafío del movimiento indígena no es tomar una posición como un actor político sino definir su estrategia como un movimiento social. Esto requiere tomar una postura *vis-à-vis* en su relación con otros sectores populares, en su relación con el Estado y con el gobierno y su aproximación a otras fuerzas políticas. Pero el desafío más grande es encontrar y desarrollar los mecanismos de unidad en un momento en que la meta del EZLN y el movimiento indígena compartido durante la década pasada –para elevar la autonomía a un rango constitucional– continúa paralizado. Al menos ahora, es difícil para el movimiento indígena promover por sí solo una mayor movilización.

CONCLUSIÓN: MÁS ALLÁ DE LA ESPECIFICIDAD ÉTNICA

Después de alrededor de treinta años de políticas indígenas, de la sublevación del EZLN y su eventual diálogo con otras organizaciones indígenas, podemos afirmar con seguridad que los campesinos indígenas mexicanos se han constituido políticamente en términos de la definición de la teoría político-cultural de formación de clases. Esto es así, aun si las principales demandas no han sido alcanzadas, en la medida en que el EZLN y el CNI no han sido cooptados por el Estado y continúan implementando autonomía, pese al retraso legislativo sobre los derechos y la cultura indígenas. Pero debemos recordar que estas negociaciones con el Estado fueron sólo uno de los cuatro mayores temas que estaban por ser solucionados; los otros son temas económicos y agrarios, la reforma del

Estado y los derechos de la mujer. Claramente, estas cuestiones van más allá de las específicas demandas indígenas presentadas por el EZLN, una vez iniciadas sus negociaciones con el Estado. Por lo tanto, la pregunta es: ¿conducirá el EZLN su futura constitución política como una mera organización indígena o como una que también atiende a la naturaleza campesina de sus componentes? La última opción, que en efecto es posible incorporar a la anterior, puede abrir más puertas a los zapatistas y convertirlo en un movimiento más amplio dentro de la lucha general por un proyecto hegemónico democrático-popular y multicultural.

Para Alain Touraine, uno de los más prominentes estudiosos de los movimientos sociales y de la democracia (ver Touraine, 1988, 1997), los zapatistas constituyen un movimiento diverso con al menos dos corrientes en su interior. A una de ellas le gustaría enfocarse en sus componentes indígenas; la otra, que incluye al subcomandante Marcos y a amigos más cercanos, anhela “visitar el mundo” o abrir su espectro de interpeleación hacia muchos otros grupos y clases subordinadas. Touraine hace una analogía explícita entre las dos corrientes (o facciones) del EZLN y el primer cristianismo: mientras Pedro quería seguir siendo estrictamente judío, Pablo quería llevar el mensaje al mundo (citado en Martínez y Mergier, 2001: 33).

Lo que más le ha interesado a Touraine acerca del EZLN es la forma en que ha logrado articular la defensa material y cultural de las colectividades mayas con un deseo de expandir la democracia política y económica en México. Por un lado, los zapatistas se han apoyado en estas culturas y, por el otro, no se permiten encerrarse dentro de estas culturas o en algún tipo de “diferencialismo”. Como afirma Touraine, el desafío futuro es inmenso: rechazar tanto la posibilidad del aislamiento local como la dilución en un gran partido político, mientras trata de convertir el movimiento indígena en el fermento para la renovación de la democracia mexicana.

La práctica de la autonomía es importante, sí. Pero tiene tantas variantes como dimensiones. Por lo menos respecto de la autoadministración económica, los indígenas no pueden manejarla seriamente, puesto que es un problema compartido por millones de campesinos mestizos y una gran tarea que requiere mayores alianzas y visiones estratégicas (Bartra, 2004). En su lucha como productores de maíz, vegetales o de bienes de silvicultura, las comunidades autóctonas no están solas, porque por cada campesino indígena hay dos mestizos, casi siempre tan pobres como él. Por lo tanto, la lucha rural de los pueblos indígenas está entrelazada con la del campesinado como clase. Ha sido siempre así, incluso durante las décadas del setenta y del ochenta, cuando los indígenas se alinearon dentro de organizaciones coordinadoras campesinas en las cuales su especificidad estaba diluida. Fue sólo en la década del noventa, cuando centraron sus demandas en la constitucionalidad de

RECUPERANDO LA TIERRA

sus derechos por la autonomía, que los caminos indígenas y campesinos se separaron temporalmente.

Durante la última década del siglo XX, el movimiento indígena llegó a la mayoría de edad y adquirió tal densidad que logró su propia identidad, estableciendo diferencias sobre la base de sus demandas, campañas, estructura organizacional, discurso, imaginario, sistemas simbólicos y procedimientos. De modo que los indígenas, que solían estar en ruinas, establecieron su hogar organizacional separado. Esto está muy bien. Excepto que este cambio los distanció un poco de los campesinos, los trabajadores y las familias, aun cuando en el proceso los indígenas se hicieron íntimos con la “sociedad civil”, una entidad que hasta 1992 estuvo muy movilizada por los 500 años y eventualmente enamorada del EZLN. Pero en el nuevo hogar hay también peleas, especialmente debido a que el tema constitucional no podría ser resuelto en un futuro previsible, y las autonomías *de facto* son diversas e introspectivas y no favorecen por sí mismas la movilización conjunta. Por lo tanto, mientras los indígenas solucionan sus agravios domésticos, podrían visitar una vez más a la familia, ahora como respetables adultos, y de ese modo quizá puedan renovar la amistad con sus populares primos campesinos y trabajadores. Tal vez juntos puedan lograrlo.

La pertinencia de rearticularse con otros sectores populares-democráticos, en particular con los rurales, surgió no solamente de la insuficiencia del movimiento indígena y sus fuerzas aliadas para llevar a cabo sus demandas históricas, sino también de la reaparición del movimiento campesino. Hacia fines de 2002, el movimiento campesino ha resucitado de la muerte con una imaginación, combatividad, capacidad para la integración programática y una ampliación de convergencia que no han sido vistas desde principios de la década del noventa. Es más, los indios mismos son campesinos.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, Sonia E., Dagnino, Evelina y Escobar, Arturo (eds.) 1998
Culture of Politics, Politics of Culture: Re-visioning Latin American Social Movements (Boulder, CO: Westview Press).
- Bartra, Armando 1985 *Los Herederos de Zapata. Movimientos Campesinos Posrevolucionarios en México* (México DF: ERA).
- Bartra, Armando 1992 “Las Organizaciones Económicas Campesinas ante la Reforma Rural” en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 5/6, pp 126-132.
- Bartra, Armando 2000 “Sur Profundo” en Bartra, Armando (ed.) *Crónicas del Sur: Utopías Campesinas en Guerrero* (México DF: Ediciones Era).

- Bartra, Armando 2001 "Sur: Megaplanes y Utopías en la América Equinoccial" en Bartra, Armando (ed.) *Mesoamérica: Los Ríos Profundos*, (México DF: El Atajo).
- Bartra, Armando 2003a *Cosechas de Ira: Economía Política de la Contrarreforma Agraria* (México DF: Instituto Maya).
- Bartra, Armando 2003b "Los Ríos Crecidos: Rústicas Revueltas del Tercer Milenio" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, Special Issue, *¡El Campo no Aguanta Más!*, pp 13-26.
- Bartra, Armando 2003c "¡Caracoles! Descifrando la Treceava Estela" en *Memoria*, 176, pp 9-13.
- Bartra, Armando 2004 "Rebellious Cornfields: Toward Food and Labour Self-sufficiency" en Otero, Gerardo (ed.) *Mexico in Transition: Neoliberal Globalism, the State and Civil Society* (London: Zed Books).
- Bellinghausen, Hermann 2001 "La Caravana Zapatista Hará Visible un México Ignorado: En La Caravana de la Dignidad Indígena: El Otro Jugador" en *La Jornada*.
- Brysk, Allison 2000 *From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations in Latin America* (Stanford, CA: Stanford University Press).
- CNPA 1982 "La Coordinadora Nacional Plan de Ayala" en *Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero*, Extra, 2, pp 45-52.
- CNPA 2003 *Veinte Años de Lucha por la Tierra* (México DF: Instituto Maya).
- Cohen, Jeffrey 2004 "Community, Economy and Social Change in Oaxaca, Mexico: Rural Life and Cooperative Logic in the Global Economy" en Otero, Gerardo (ed.) *Mexico in Transition: Neoliberal Globalism, the State and Civil Society* (London: Zed Books).
- Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia India y Popular 1991 "Declaración de Principios y Objetivos" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 2, pp 127-129.
- Convención Nacional Democrática (1995) "Los Desafíos de la CND, Propuestas de la Presidencia Colectiva a la Segunda Sesión de la CND" en *Chiapas*, 1(2), pp 181-186.
- Díaz-Polanco, Héctor 1992 "Autonomía, Territorialidad y Comunidad Indígena: Las Reformas de la Legislación Agraria en México" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 5/6, pp 62-79.
- Díaz-Polanco, Héctor y López y Rivas, Gilberto 1994 "Fundamentos de las Autonomías Regionales" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 8/9, pp 92-99.
- Díaz-Polanco, Héctor y Sánchez, Consuelo 2003 *México Diverso: El Debate por la Autonomía* (México: Siglo XXI Editores).

RECUPERANDO LA TIERRA

- Esteva, Gustavo 1999 "The Zapatistas and People's Power" en *Capital & Class*, 68 (verano), pp 153-183.
- Flores Felix, Joaquín 1992 "De Aquí para Poder Sacarnos, Primero Tendrán que Matarnos" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 5/6, pp 155-161.
- Flores Felix, Joaquín 1998 *La Revuelta por la Democracia: Pueblos Indios, Política y Poder en México* (México: UAM-X y El Atajo).
- Flores Felix, Joaquín 1995 "Los Pueblos Indios en la Búsqueda de Espacios" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 11/12, pp 148-58.
- García, María del Carmen, Leyva, Xóchitl y Burguete, Aracely 1998 "Las Organizaciones Campesinas e Indígenas de Chiapas Frente a la Reforma del Estado: Una Radiografía" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 16, pp 75-94.
- Gilbreth, Chris y Otero, Gerardo 2001 "Democratization in Mexico: The Zapatista Uprising and Civil Society" en *Latin American Perspectives*, 119, 28(4), pp 7-29.
- Gordillo, Gustavo 1988 *Campesinos al Asalto del Cielo: De la Expropiación Estatal a la Apropiación Campesina* (México DF: Siglo XXI Editores).
- Hansen, Roger D. 1974 *La Política de Desarrollo Mexicano* (México DF: Siglo XXI Editores).
- Hernández Navarro, Luis 1994 "De Zapata a Zapata: Un Sexenio de Reformas Estatales en el Agro" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 8/9, pp 122-140.
- Hernández Navarro, Luis 1997 "La Autonomía Indígena como Ideal: Notas a *La Rebelión Zapatista y la Autonomía*, de Héctor Díaz-Polanco" en *Chiapas*, 5, pp 101-116.
- Hernández Navarro, Luis y Vera Herrera, Ramón (eds.) 1998 *Los Acuerdos de San Andrés* (México DF: Ediciones Era).
- Kearney, Michael 1996 *Reconceptualizing the Peasantry: Anthropology in Global Perspective* (Boulder, CO y Oxford: Westview Press).
- Kearney, Michael 2000 "La Comunidad Rural Oaxaqueña y la Migración: Más allá de las Políticas Agraria e Indígena" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 19/20, pp 11-23.
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal 1985 *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics* (London: Verso).
- López Cámara, Francisco 1967 *La Estructura Económica y Social de México en la Época, de la Reforma* (México DF: Siglo XXI Editores).
- Martínez, Sanjuana y Mergier, Anne Marie 2001 "Le Bot, Mitterrand, Saramago, Touraine, Vázquez Montalbán: Ahora Vienen los Verdaderos Desafíos de los Zapatistas", *Proceso*, 1269 (25 de febrero), pp 3034.

- Morquecho, Gaspar 1994 "Tambores de Guerra, Tambores de Paz: Entrevista al Subcomandante Marcos" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 10, pp 164-180.
- Nietzsche, Friederich Wilhelm 1962 *Thus Spake Zarathustra*, traducción de Thomas Common, (New York: Heritage Press).
- Otero, Gerardo 1999 *Farewell to the Peasantry? Political Class Formation in Rural Mexico* (Boulder, CO, y London: Westview Press). Versión revisada y expandida en la edición en español: *¿Adiós al Campesinado? Democracia y Formación Política de las Clases en el México Rural*, (Mexico City: M.A. Porrúa) UAZ and SFU, 2004.
- Otero, Gerardo 2004a "Global Economy, Local Politics: Indigenous Struggles, Civil Society and Democracy" en *Canadian Journal of Political Science*, 37(2).
- Otero, Gerardo (ed.) 2004b *Mexico in Transition: Neoliberal Globalism, the State and Civil Society* (London: Zed Books).
- Otero, Gerardo y Jugenitz, Heidi 2003 "Challenging National Borders from Within: The Political-Class Formation of Indigenous Peasants in Latin America" en *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, 40(5), pp 503-524.
- Paoli, Francisco y Montalvo, Enrique 1977 *El Socialismo Olvidado de Yucatán* (México DF: Siglo XXI Editores).
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2001 "Are Latin American Peasant Movements Still a Force for Change? Some New Paradigms Revisited" en *Journal of Peasant Studies*, 28(2), pp 83-118.
- Ruiz Hernández, Margarito 2000 "The Plural National Indigenous Assembly for Autonomy (ANIPA)" en Aracely Burgete Cal y Mayor (ed.) *Indigenous Autonomy in Mexico* (Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs).
- Sarmiento, Sergio 1994 "El Movimiento Indio y la Irrupción India Chiapaneca", *Cuadernos Agrarios* en Nueva Época, 8/9, pp 79-91.
- Subcomandante Insurgente Marcos 2002 "¿Cuáles son las Características de la Cuarta Guerra Mundial?" en *Rebeldía*, 4, pp 24-41.
- Subcomandante Insurgente Marcos 2003 "Chiapas: La Treceava Estela" en *La Jornada*, 24-26 de julio.
- Touraine, Alain 1988 *Return of the Actor: Social Theory in Postindustrial Society*, traducción de Myrna Gozich (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press).
- Touraine, Alain 1997 *What is Democracy?* Traducción de David Macey (Boulder, CO y Oxford: Westview Press).

RECUPERANDO LA TIERRA

- UNORCA 1992 "Declaración de Temporal" en *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, 5/6, pp 211-214.
- Van Cott, Donna Lee 2000 *The Friendly Liquidation of the Past: The Politics of Diversity in Latin America* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).
- Warman, Arturo 1974 *Los Campesinos Hijos Predilectos del Régimen* (México DF: Nuestro Tiempo).
- Warman, Arturo 1976 *Y Venimos a Contradecir: Los Campesinos de Morelos y el Estado Nacional* (México: La Casa Chata).
- Weber, Max 1958 "Politics as a Vocation" en Gerth, H.H. y Mills, C. Wright (ed. Y tradcc.) *From Max Weber: Essays in Sociology* (New York: Oxford University Press).
- Womack, Jr. John 1969 *Zapata and the Mexican Revolution* (New York: Vintage Books).